Información de envíos

Información de los envíos realizados y de los apuntes realizados en los libros de registro correspondientes.

Mensaje enviado del departamento a SGRP

Reg. salida **Remitente:** GOBERNANZA PÚBLICA Y A□TOGOBIERNO
Num: 201700000264345 **Fecha:** 12/07/2017

Reg. entrada **Destinatario:** Dirección de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento
Num: 201700000555633 **Fecha:** 12/07/2017

Mensaje enviado de SGRP al Parlamento

Reg. salida **Remitente:** Dirección de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento
Num: 201700000264459 **Fecha:** 12/07/2017

Reg. entrada **Destinatario:** Parlamento Vasco
Num: **Fecha:**

Documentos Adjuntos con apunte en el Libro de registro

Nombre	Salida	Entrada
proyecto de ley dopaje remisión al parlamento.pdf	12/07/2017	12/07/2017 5504

Cerrar

ANDRE HORI:

Honako hau jakinarazten dizut: Eusko Jaurlaritzak, 2017ko uztailaren 4an egindako bilkuran, **kiroleko dopinaren aurkako Legea aldatzekoa LEGE PROIEKTUA** onartu du.

Hori ziurtatu egiten dut eta, Jaurlaritzak erabakitakoa betez, horren berri ematen dizut, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legean exijitutakoaren.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko uztailaren11a.

EXCMA. SRA.:

Tengo el honor de comunicar a V.E. que el Gobierno Vasco, en Sesión celebrada el día 4 de julio de 2017, ha procedido a la aprobación del **PROYECTO DE LEY de modificación de la Ley contra el dopaje en el deporte**.

Lo que certifico y, en cumplimiento de lo acordado por el Gobierno, traslado a V.E., de conformidad con lo exigido por la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno.

Vitoria-Gasteiz, a 11 de julio de 2017.

Josu Iñaki Erkoreka Gervasio

SECRETARIO DEL GOBIERNO
JAURLARITZAKO IDAZKARIA

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL PARLAMENTO VASCO/
EUSKO LEGEBILTZARREKO LEHENDAKARIA

Consulta de Documento

Archivo del documento	proyecto de ley dopaje remisión al parlamento.pdf
Descripción	PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE
Creador	Cortés Larramendi, Carmen
Cargo firmante	Erkoreka Gervasio, Josu Iñaki
Fecha modificación	11/07/2017
Firmado digitalmente por	JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO

Cerrar

KIROLEKO DOPINAREN AURKAKOA LEGEA ALDATZEN DUENA LEGE PROIEKTUA

PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE

HONEKIN BATERA AUcRKEZTEN DIREN AGIRIAK

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN

I.	BIDALKETA-IDAZKIA	OFICIO DE REMISIÓN
II.	LEGE PROIEKTUAREN TESTUA GAZTELANIAZ	TEXTO DEL PROYECTO DE LEY EN CASTELLANO
III.	LEGE PROIEKTUAREN TESTUA EUSKARAZ	TEXTO DEL PROYECTO DE LEY EN EUSKERA
IV.	TXOSTENA, 2016KO URTARRILAREN 26AN ONARTUTAKO KIROLEKO DOPINAREN AURKAKOA LEGEA ALDATZEN DUENA LEGE-PROIEKTUAREN TESTUA GOBERNU KONTSEILUAK BERRIRO HARTZEAK DUEN BIDERAGARRITASUN JURIDIKOARI BURUZKOA	INFORME RESPECTO A LA VIABILIDAD JURÍDICA DE QUE SE VUELVA A RETOMAR POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY CONTRA EL DOPAJE, APROBADO EL 26 DE ENERO DE 2016.
V.	AZALPEN MEMORIAK	MEMORIAS EXPLICATIVAS
VI.	MEMORIA EKONOMIKOA	MEMORIA ECONÓMICA
VII.	AHOLKULARITZA JURIDIKOAREN TXOSTENA	INFORME DE ASESORÍA JURÍDICA
VIII.	EMPRESAREN INGURUKO ERAGIN TXOSTENA	INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LA EMPRESA
IX.	GENEROAREN ARABERAKO ERAGINAREN TXOSTENA	INFORME DEL IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO
X.	EMAKUNDEAREN TXOSTENA	INFORME DE EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER
XI.	HERRI ADMINISTRAZIOETAN HIZKUNTZA NORMALITZATZEKO ZUZENDARITZAREN TXOSTENA	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
XII.	DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOAREN TXOSTENA	INFORME DE LA AGENCIA VASCA DE PROTECCIÓN DE DATOS
XIII.	KIROLAREN EUSKAL KONTSEILUAREN BATZORDE IRAUNKORRAREN ZIURTAGIRIA	CERTIFICADO DE ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO VASCO DEL DEPORTE.
XIV.	EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOETARAKO BATZORDEAREN IRIZPENA	DICTAMEN DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL VASCO
XV.	EKONOMIA- ETA ARAU-KONTROLAREN TXOSTENA	INFORME DE CONTROL ECONÓMICO-NORMATIVO
XVI.	EUSKADIKO AHOLKU BATZORDE JURIDIKOKO IRIZPENA	DICTAMEN DE LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI
XVII.	PROZEDURA HASTEKO AGINDUA	ORDEN DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO
‹VIII.	PROIEKTUA AURRETIK ONARTZEKO AGINDUA	ORDEN DE APROBACIÓN PREVIA DEL PROYECTO

I

OFICIO DE REMISIÓN / BIDALKETA-OFIZIOA

PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.
KIROLEKO DOPINAREN AURKAKOA LEGEA ALDATZEN DUENA LEGE PROIEKTUA

ANDRE HORI:

Honako hau jakinarazten dizut: Eusko Jaurlaritzak, 2017ko uztailaren 4an egindako bilkuran, **kiroleko dopinaren aurkako Legea aldatzekoa LEGE PROIEKTUA** onartu du.

Hori ziurtatu egiten dut eta, Jaurlaritzak erabakitakoa betez, horren berri ematen dizut, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legean exijitutakoaren.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko uztailaren11a.

EXCMA. SRA.:

Tengo el honor de comunicar a V.E. que el Gobierno Vasco, en Sesión celebrada el día 4 de julio de 2017, ha procedido a la aprobación del **PROYECTO DE LEY de modificación de la Ley contra el dopaje en el deporte**.

Lo que certifico y, en cumplimiento de lo acordado por el Gobierno, traslado a V.E., de conformidad con lo exigido por la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno.

Vitoria-Gasteiz, a 11 de julio de 2017.

Josu Iñaki Erkoreka Gervasio

SECRETARIO DEL GOBIERNO
JAURLARITZAKO IDAZKARIA

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL PARLAMENTO VASCO/
EUSKO LEGEBILTZARREKO LEHENDAKARIA

II

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY EN CASTELLANO / LEGE PROIEKTUAREN TESTUA GAZTELANIAZ

PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.
KIROLEKO DOPINAREN AURKAKOA LEGEA ALDATZEN DUENA **LEGE PROIEKTUA**

PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este Parlamento Vasco aprobó la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte, que se basó en los principios comúnmente aceptados por los organismos internacionales más avanzados en la lucha contra el dopaje en el deporte. La estructura piramidal del deporte de competición y la interrelación de las competiciones deportivas en sus distintos ámbitos y niveles territoriales exigía un marco jurídico común en la lucha contra el dopaje en el deporte.

Por dicha razón, en el año 2003, la Agencia Mundial Antidopaje elaboró el Código Mundial Antidopaje y los estándares internacionales que lo complementan. Tales textos constituyeron un conjunto de reglas y directrices de obligado cumplimiento para el movimiento deportivo internacional y de necesaria referencia para las instituciones públicas implicadas en la lucha contra el dopaje. Ello condujo a la aprobación, por la UNESCO, en su sesión de 19 de octubre de 2005, de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte. Dicha convención, que fue ratificada por España y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 16 de febrero de 2007, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno, conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución. Aunque el Código Mundial Antidopaje no forma parte integrante de la Convención, ésta establece que, con miras a coordinar en el plano nacional e internacional las actividades de lucha contra el dopaje en el deporte, los signatarios de la Convención están obligados a respetar los principios del Código.

En este marco de armonización, durante los días 12 a 15 de noviembre de 2013, se desarrolló en Johannesburgo, Sudáfrica, la IV Conferencia Mundial Antidopaje en la que participaron representantes de las organizaciones deportivas y de estados y donde se aprobó el nuevo Código Mundial Antidopaje que ha entrado en vigor el pasado 1 de enero de 2015.

Como modificaciones más relevantes del nuevo Código se pueden destacar las siguientes:

- En la tipificación de las infracciones en materia de dopaje, el nuevo Código mantiene las infracciones del vigente Código de 2009, pero se añaden nuevas conductas penadas.
- Se incluye la posibilidad de que las muestras biológicas sean analizadas por laboratorios que no cuenten con la acreditación de la Agencia Mundial Antidopaje, pero sí con su aprobación.
- Se modifican las sanciones incrementándose de forma sustancial los periodos de suspensión.
- El nuevo Código Mundial Antidopaje establece un nuevo periodo de prescripción de 10 años.

Por ello, el País Vasco se encuentra en la obligación de adecuar a la mayor brevedad la vigente Ley 12/2012, de 21 de junio, de lucha contra el dopaje, al nuevo Código Mundial Antidopaje.

Asimismo, se ha aprovechado la modificación de la Ley 12/2012 para reconocer a la Agencia Vasca Antidopaje, servicio que fue adscrito al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva, como servicio especializado encargado de desarrollar las funciones atribuidas en el artículo 10 de la Ley a la Administración Pública del País Vasco.

Por último, el texto incorpora el contenido del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley del País Vasco 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte.

Artículo primero.- Se modifica el apartado 2 del artículo 10 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte, que quedará redactado en los siguientes términos:

«2.- La Agencia Vasca Antidopaje, adscrita al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva, desarrollará las funciones atribuidas en el apartado anterior a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El personal que ejerza la inspección a que se refiere la letra f) del apartado anterior tendrá la consideración de autoridad pública en el desempeño de sus cometidos, y estará obligado a guardar secreto sobre las informaciones que conozcan en el ejercicio de sus funciones, incluso después de haber cesado en las mismas. Sus actas se presumen veraces».

Artículo segundo.- Se modifica el apartado 9 del artículo 12 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte**,** que quedará redactado en los siguientes términos:

«9. Podrán ser sometidos y sometidas a control aquellos y aquellas deportistas que participen en competiciones o actividades deportivas que se celebren en territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, quedando excluidas, en todo caso, las competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal y las competiciones deportivas internacionales organizadas por las federaciones deportivas internacionales o el organismo olímpico o paralímpico correspondiente.

La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco únicamente podrá realizar controles fuera de competición a deportistas con licencia estatal, autonómica distinta de la autonómica del País Vasco o licencia internacional, a solicitud y previo convenio con la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte o con las organizaciones o federaciones autonómicas o internacionales responsables.

La tramitación de los expedientes administrativos sancionadores o disciplinarios que pudieran derivarse de los mismos se tramitará por el organismo que resulte competente con arreglo a la Ley.

En cualquier caso, los resultados analíticos definitivos de los controles de dopaje efectuados en el País Vasco serán trasladados a los organismos deportivos correspondientes que puedan resultar competentes.».

Artículo tercero.- Se añaden los apartados 11, 12 y 13 al artículo 13 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte**,** que quedará redactado en los siguientes términos:

«11.- La organización antidopaje responsable de la gestión de resultados podrá, según su criterio, decidir que se analice la muestra B aún en el caso de que el o la deportista no solicite el análisis de dicha muestra.

12.- Serán pruebas suficientes de infracción de las normas antidopaje cualquiera de las siguientes:

a) La presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la muestra A del o de la deportista cuando renuncie al análisis de la muestra B y ésta no se analice.
b) Cuando la muestra B del o de la deportista se analice y dicho análisis confirme la presencia de la sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores encontrados en la muestra A.
c) Cuando la muestra B del o de la deportista se divida en dos frascos y el análisis del segundo frasco confirme la presencia de la sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores encontrados en el primer frasco»

13.- Recaerá sobre la organización antidopaje la carga de probar que se ha producido una infracción de la normativa antidopaje. A tal efecto, se presumirá la validez científica de los métodos analíticos o límites de decisión aprobados por la Agencia Mundial Antidopaje que hayan sido objeto de revisión externa y consulta a la comunidad científica».

Artículo cuarto.- Se modifica el apartado 3 del artículo 16 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte**,** que quedará redactado en los siguientes términos:

«3.- Las muestras a que se refiere el párrafo anterior serán de aire, orina, sangre o cualquier otro fluido o muestra de carácter menor, en la forma que se determine reglamentariamente. Esta determinación incluirá la forma en que se validan, a estos efectos, los procedimientos analíticos. Las muestras podrán ser objeto de análisis adicionales antes de que la organización antidopaje responsable de la gestión de resultados comunique al deportista o a la deportista los resultados analíticos de las muestras A y B»

Artículo quinto.- Se modifica el apartado 3 del artículo 18 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte**,** que quedará redactado en los siguientes términos:

«3.- En los controles de dopaje realizados a las y los deportistas en el ámbito de aplicación de la presente Ley, los análisis de las tomas de muestras deberán llevarse a cabo en laboratorios con acreditación internacional de la Agencia Mundial Antidopaje, homologados por el Estado o aprobados por dicha Agencia»

Artículo sexto.- Se modifica el apartado 1 del artículo 19 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte**,** que quedará redactado en los siguientes términos:

«1.- En el marco de las disposiciones aprobadas por las organizaciones internacionales, la persona titular del Departamento competente en materia de deporte, adicionalmente a la publicación que ordene la Administración General del Estado en el Boletín Oficial del Estado, ordenará la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. Esta publicación se producirá, además, en cada ocasión en que se introduzcan cambios en la misma».

Artículo séptimo.- Se modifica el apartado 1 del artículo 21 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte**,** que quedará redactado en los siguientes términos:

«1. El régimen de infracciones y sanciones por dopaje contenido en esta Ley será aplicable, en lo que resulte procedente, a las acciones u omisiones que tengan lugar en cualesquiera actividades deportivas, de carácter competitivo o no competitivo, que se desarrollen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sin que sea necesaria la existencia de relaciones de especial sujeción. No obstante, quedan excluidas las acciones u omisiones que se produzcan con ocasión de competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal o internacional organizadas por las federaciones deportivas internacionales o por las organizaciones olímpicas o paralímpicas internacionales».

Artículo octavo.- Se añade un artículo 22 bis a la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte**,** que quedará redactado en los siguientes términos:

«Artículo 22 bis.- Suspensión provisional.

1.- Cuando se reciba, tanto en el ámbito del régimen disciplinario como en el ámbito del régimen administrativo sancionador, un resultado analítico adverso por un método prohibido o una sustancia prohibida distinta de una sustancia específica se impondrá de inmediato y de forma motivada una suspensión provisional de la licencia una vez que se ha producido la confirmación de que no se ha concedido ni se concederá una autorización de uso terapéutico o de que no se ha producido una desviación aparente del estándar internacional para controles e investigaciones o del estándar internacional para laboratorios. Tal suspensión provisional también conllevará la imposibilidad de obtención de licencia y la prohibición de participación en competiciones deportivas durante el periodo de suspensión.

2.- Una suspensión provisional no podrá ser adoptada sin llevar a cabo los procesos de revisión y notificación previstos en el Código Mundial Antidopaje o si al o a la deportista no se le confiere la oportunidad de celebrar un trámite de audiencia previa a la imposición de la suspensión provisional o un trámite de audiencia posterior con carácter urgente.

3.- El tiempo de suspensión provisional no podrá exceder de seis meses salvo en el caso de paralización o dilación del procedimiento por causa imputable a la persona suspendida.

4.- Podrá levantarse la suspensión provisional obligatoria si el o la deportista demuestra que en la infracción ha participado probablemente un producto contaminado.

5.- Además de la suspensión provisional obligatoria, se podrá aplicar la suspensión provisional optativa en los supuestos y condiciones previstos en el artículo 7.9.2 del Código Mundial Antidopaje».

Artículo noveno.- Se añaden las letras m) y n) al artículo 23, apartado 1, de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte**,** que quedará redactado en los siguientes términos:

«m) La acción de asistir, conspirar, encubrir o cualquier otro tipo de complicidad en relación con una infracción de las normas antidopaje o cualquier intento de infracción.

n) La asociación, a título profesional o deportivo, de un o una deportista u otra persona sujeta a la autoridad de una organización antidopaje con cualquier persona de apoyo al deportista que haya sido sancionada penal, disciplinaria o administrativamente por una infracción en materia de dopaje, siempre que el o la deportista, o la persona sujeta a aquella autoridad, haya sido oportunamente notificada por escrito por la correspondiente organización antidopaje de la situación del personal de apoyo y de la posible sanción derivada de la asociación, todo ello en los términos previstos en el Código Mundial Antidopaje. También se incluye en esta infracción la asociación con aquella persona que actúe como encubridora o intermediaria de las personas con las que está prohibida la asociación»

Artículo décimo.- El artículo 24 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte**,** quedará redactado en los siguientes términos:

«Artículo 24.- Sanciones a deportistas.

1.- Por la comisión de las infracciones muy graves previstas en las letras a), b), c), d), e), f), g), j), k), l) y m) del apartado primero del artículo 23, se impondrán, a reserva de cualquier reducción prevista en otro apartado de este artículo, las sanciones de suspensión, privación o imposibilidad de obtención de licencia por un período de dos a cuatro años y, en su caso, multa de 3.001 a 12.000 euros.

2.- Por la comisión de las infracciones muy graves previstas en las letras h) e i) del apartado primero del artículo 23 se impondrán, a reserva de la agravación contemplada en otro apartado de este artículo, las sanciones de suspensión, privación o imposibilidad de obtención de licencia federativa por un período de cuatro a seis años y, en su caso, multa de 3.001 a 12.000 euros.

3.- Por la comisión de las infracciones graves previstas en el apartado segundo del artículo 23 de esta ley, se impondrá la sanción de suspensión, privación o imposibilidad de obtención de licencia federativa por un período de tres meses a dos años y, en su caso, multa de 1.500 a 3.000 euros.

4.- En los supuestos en los que la o el deportista, teniendo justificación médica suficiente para disponer de una autorización de uso terapéutico, no la haya solicitado, o haya caducado la vigencia de la anteriormente obtenida, se le impondrá la primera vez una amonestación en el supuesto de que el control arroje un resultado analítico adverso. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la sanción económica que se pueda imponer al club por su falta de diligencia en tales omisiones.

5.- Los criterios para la aplicación de los periodos de suspensión previstos en este artículo de la Ley serán los siguientes:

a) El periodo de suspensión impuesto por una primera infracción muy grave cuando esté relacionada con sustancias calificadas como no especificas será, en principio, de cuatro años. La persona podrá ser sancionada sólo con dos años de suspensión si el o la deportista puede acreditar que la infracción no fue intencionada.
b) El periodo de suspensión será de cuatro años cuando la infracción esté relacionada con una sustancia calificada como específica y la organización antidopaje demuestre que fue intencionada. En otro caso, el periodo de suspensión será de dos años.

6.- Para que la conducta sea considerada intencionada es necesario que el deportista o la deportista haya incurrido en una conducta que sabía que constituía una violación de las reglas antidopaje o sabía que existía un riesgo significativo de que constituyera tal infracción haciendo caso omiso al mismo.

Una infracción de las normas antidopaje que resulte de un resultado analítico adverso por una sustancia prohibida sólo en competición se presumirá, salvo prueba en contrario, como no intencionada si se trata de una sustancia no específica y el deportista pueda acreditar que dicha sustancia prohibida fue utilizada fuera de competición.

7.- Para las infracciones previstas en el artículo 23.1.c) y f) el periodo de suspensión será de cuatro años salvo que, en caso de no someterse a una recogida de muestras, la o el deportista pueda demostrar que la infracción de las normas antidopaje se cometió de forma no intencionada, en cuyo caso el periodo de suspensión será de dos años.

8.- Para las infracciones previstas en el artículo 23.1.d) el periodo de suspensión será, en principio, de dos años con la posibilidad de reducción a un año dependiendo del grado de culpabilidad del o de la deportista. La aplicación de una sanción reducida de un año a dos años no será de aplicación a los deportistas que por motivo de cambios de localización de última hora u otras conductas generen una grave y fundada sospecha de que intentan evitar el sometimiento a los controles.

9.- En relación a las infracciones previstas en el artículo 23.1.h) e i) en las que esté involucrado un o una deportista menor y si es cometida por el personal de apoyo de los deportistas con sustancias no específicas se impondrá la suspensión a perpetuidad.

10.- Para las infracciones previstas en el artículo 23.1.n) el periodo de suspensión será, en principio, de dos años, con la posibilidad de reducción hasta un mínimo de un año, dependiendo del grado de culpabilidad del deportista y otras circunstancias del caso.

11.- Cuando el o la deportista o cualquier otra persona sometida a las normas antidopaje demuestren en un caso concreto que no existe conducta culpable o negligente por su parte no se aplicará el periodo de suspensión aplicable.

12.- Si el o la deportista pueden demostrar que la sustancia prohibida detectada procedió de un producto contaminado el periodo de suspensión consistirá, como mínimo, en una amonestación y, como máximo, dos años de suspensión, dependiendo del grado de culpabilidad. Para la determinación del grado de culpabilidad se tendrá en consideración la declaración del producto contaminado por el o la deportista en el formulario de control.

13.- En caso de que el o la deportista u otra persona sujeta a la presente Ley admita voluntariamente haber cometido una infracción de las normas antidopaje antes de haber recibido la notificación para la recogida de una muestra que podría probar la comisión de una infracción de las normas antidopaje y que dicha confesión sea la única prueba fiable de la infracción en el momento de la confesión, podrá reducirse el periodo de suspensión que no podrá ser inferior a la mitad del periodo de suspensión que podría haberse aplicado de otro modo.

14.- En el caso de que el o la deportista u otra persona potencialmente sujeta a una sanción de cuatro años por evitar o rechazar una toma de muestras o por alterar la prueba confiese inmediatamente la existencia de la infracción de las normas antidopaje podrá ver reducido su periodo de suspensión hasta un mínimo de dos años, dependiendo de la gravedad de la infracción y del grado de culpabilidad.

15.- Las sanciones previstas en los apartados anteriores llevarán asimismo aparejada la imposibilidad de participar en cualquier tipo de competición en instalaciones públicas del País Vasco durante el tiempo en que dure la suspensión, privación o imposibilidad de obtención de la licencia».

Artículo undécimo.- Se añade un artículo 24 bis a la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte**,** que quedará redactado en los siguientes términos:

«Artículo 24 bis.- Sanciones por infracciones múltiples.

1.- En el supuesto de una segunda infracción de las normas antidopaje el periodo de suspensión será:

a) Seis meses.
b) La mitad del periodo de suspensión impuesto en la primera infracción antidopaje sin tener en cuenta ninguna reducción.
c) El doble del periodo de suspensión que habría de aplicarse a la segunda infracción como si fuera una primera infracción, sin tener en cuenta ninguna reducción.

El periodo de suspensión que se aplicará será el más extenso de los tres periodos citados.

2.- La existencia de una tercera infracción de las normas antidopaje siempre dará lugar a la suspensión a perpetuidad, salvo que la tercera infracción suponga una infracción del deber de localización y salvo que la tercera infracción reúna las condiciones de anulación o reducción de sanciones. En estos últimos casos el periodo de suspensión será desde ocho años hasta la suspensión a perpetuidad.

3.- Una infracción de las normas antidopaje en la que el o la deportista haya probado la ausencia de culpa o negligencia no se considerará una infracción anterior.

4.- Una infracción de las normas antidopaje sólo se considerará segunda infracción si se acredita que la persona ha cometido la infracción tras haber recibido notificación de la primera infracción o después de que la organización antidopaje acredite que ha intentado realizar esa notificación en los términos establecidos en la normativa establecida al efecto.

Cuando la organización antidopaje no consiga demostrar lo anterior, las infracciones deben considerarse en su conjunto como una infracción única y primera y la sanción impuesta se basará en la infracción que suponga la sanción más severa.

5.- Si tras la resolución de una primera infracción una organización antidopaje descubre hechos relativos a una infracción de las normas antidopaje cometida antes de la notificación correspondiente de la primera infracción, la organización antidopaje impondrá una sanción adicional basada en la sanción que se le podría haber impuesto si ambas infracciones hubieran sido determinadas al mismo tiempo.

6.- Para que unas infracciones puedan ser calificadas como múltiples será preciso que se hayan producido en un periodo de diez años.

7.- El periodo de suspensión podrá ser objeto de reducción adicional en los supuestos contemplados en el artículo 10.6 del Código Mundial Antidopaje».

Artículo duodécimo.- Se añaden los apartados 4 y 5 al artículo 29 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte**,** que quedará redactado en los siguientes términos:

«4.- Solamente se podrán imponer sanciones económicas en los casos que el periodo máximo de suspensión ya se haya impuesto.

5.- Las organizaciones antidopaje podrán contemplar en su propia normativa la recuperación de los gastos provocados por las infracciones antidopaje».

Artículo decimotercero.- Se modifica el apartado 2 artículo 30 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte**,** que quedará redactado en los siguientes términos:

«2.- Además de la anulación automática de los resultados obtenidos en la competición durante la cual se haya producido el resultado adverso, todos los demás resultados obtenidos desde la fecha en la que se recogió la muestra o desde la fecha en que haya tenido lugar otra infracción de las normas antidopaje serán anulados, con todas las consecuencias que se deriven de ello, incluida la retirada de todas las medallas, puntos y premios, hasta el inicio de cualquier suspensión provisional o periodo de suspensión, salvo por razones de equidad»

Asimismo, se añade un apartado 5, que quedará redactado en los siguientes términos:

«5.- Lo previsto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de que terceros perjudicados puedan hacer valer sus derechos y ejercer acciones de responsabilidad para la reparación de los daños y perjuicios sufridos».

Artículo decimocuarto.- Se añade el artículo 31 bis a la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte**,** que quedará redactado en los siguientes términos:

«Artículo 31 bis.- Estatus durante una suspensión de licencia.

1.- Durante el periodo de suspensión de licencia ningún deportista u otra persona podrá participar, en calidad alguna, en ninguna competición o actividad organizada por alguna de las entidades signatarias del Código Mundial Antidopaje o de una organización de un miembro signatario. Queda exceptuada de esta prohibición la participación autorizada en programas educativos o de rehabilitación.

La prohibición anterior conlleva que la persona suspendida no podrá participar en entrenamientos, exhibiciones y actividades similares ni ocupar cargos o responsabilidades o desarrollar funciones administrativas en organizaciones deportivas o en organizaciones antidopaje.

2.- El o la deportista u otra persona a la que se le imponga un periodo de suspensión de más de cuatro años podrá, tras cuatro años de suspensión, participar en eventos deportivos no competitivos o en eventos deportivos locales en una modalidad deportiva que no sea en la que se haya cometido la infracción ni vinculada a la misma. Tal participación sólo será posible si el evento deportivo no supera el ámbito municipal o comarcal y se desarrolla a un nivel en el que la persona sancionada no pueda clasificarse directa o indirectamente para un campeonato de ámbito territorial superior o siempre que no conlleve un trabajo con deportistas menores.

3.- El o la deportista suspendida podrá regresar al entrenamiento con un equipo o al uso de las instalaciones deportivas de un club u otra entidad deportiva durante los dos últimos meses del periodo de suspensión del o de la deportista o el último cuarto del periodo de suspensión impuesto, si ese periodo fuera inferior.

4.- Las previsiones contenidas en este artículo también se aplicarán a los deportistas sin licencia que hayan sido sancionados con arreglo a esta Ley con la imposibilidad temporal de obtención de licencia».

Artículo decimoquinto.- Se modifica el artículo 34 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte**,** que quedará redactado en los siguientes términos:

«Artículo 34.- Prescripción de las infracciones y las sanciones.

1.- No se podrá iniciar ningún proceso por infracción de las normas antidopaje contra una persona sometida a la presente Ley a menos que esa medida se tome dentro de un plazo de diez años desde la fecha en que se haya cometido la infracción.

2.- Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años y las impuestas por faltas graves a los dos años.

3.- Interrumpirá la prescripción de las infracciones la iniciación, con conocimiento de la persona o entidad interesada, del procedimiento disciplinario o sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente estuviera paralizado más de un mes por causa no imputable a la o el presunto responsable. No obstante lo anterior, se mantendrá la interrupción de la prescripción en caso de suspensión del procedimiento por alguna de las causas previstas en el artículo 32 de la presente ley, reanudándose su cómputo cuando haya transcurrido un mes desde que legalmente pueda retomarse el procedimiento.

4.- Asimismo, interrumpirá el plazo de prescripción de las sanciones la iniciación del procedimiento conducente a la extinción de la sanción por colaboración, reanudándose cuando, terminado éste sin concesión, haya transcurrido un mes desde su resolución».

Artículo decimosexto.- Se modifica el apartado 2 del artículo 36 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte**,** que quedará redactado en los siguientes términos:

«2.- Lo anterior se entiende sin perjuicio de las competencias de otros órganos administrativos en materia de represión de dopaje en animales que participan en competiciones deportivas y de las competencias de otros órganos en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Asimismo, se añade el apartado 3 al artículo 36, que quedará redactado en los siguientes términos:

«3.- En lo no dispuesto en este artículo se aplicarán los criterios relativos a la competencia en materia de procedimientos disciplinarios, criterios que se hallan contenidos en el artículo siguiente, siempre que resulten compatibles con la naturaleza de la potestad sancionadora de carácter administrativo»

Artículo decimoséptimo.- Se añaden los apartados 6, 7, 8, 9 y 10 al artículo 37 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte**,** que quedará redactado en los siguientes términos:

«6.- La gestión de los resultados de un control antidopaje recaerá, en principio, en la organización antidopaje que haya iniciado o realizado la recogida de muestras. Si no hay recogida de muestras, la gestión recaerá en la primera organización antidopaje que notifique primero al presunto infractor la vulneración de las normas antidopaje y que luego persiga diligentemente la infracción.

7.- Si surge un conflicto entre organizaciones antidopaje acerca de cuál de ellas tiene competencia para gestionar los resultados, será la Agencia Mundial Antidopaje quien resuelva el conflicto.

8.- En aquellos casos en que una organización antidopaje que inicia y realiza la recogida de muestras tenga delegada la gestión de los resultados en otra entidad, se responsabilizará de confirmar que las normas de la organización delegataria se ajustan al Código Mundial Antidopaje.

9.- La competencia para la gestión de resultados derivada de la infracción de las obligaciones derivadas de la localización del o de la deportista recaerá en la organización antidopaje a la que el o la deportista debería haber remitido los datos de localización.

10.- Si el o la deportista se retira en el transcurso de un procedimiento de gestión de resultados, la organización antidopaje que lleve a cabo el mismo seguirá teniendo competencia para llevarlo a término».

Artículo decimoctavo.- Se añade el artículo 38 bis a la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte**,** que quedará redactado en los siguientes términos:

«Artículo 38 bis.- Divulgación de sanciones.

1.- La identidad de cualquier deportista o persona sancionada por una infracción muy grave de alguna norma antidopaje deberá ser divulgada públicamente por la organización antidopaje responsable de la gestión de resultados en el plazo máximo de veinte días desde la firmeza de la sanción. La persona sancionada deberá ser informada acerca de la mencionada divulgación.

2.- La organización antidopaje deberá divulgar la naturaleza de la infracción, la modalidad deportiva, la normativa antidopaje infringida, el nombre de la persona sancionada y las sanciones impuestas. La divulgación no contendrá datos sobre el método o sustancia empleada salvo que resulte completamente imprescindible.

3.- La publicación se realizará, como mínimo, en el sitio web de la organización antidopaje, dejándola expuesta durante un mes o la duración de cualquier periodo de suspensión, si éste fuese superior. Esta publicación no podrá mantenerse después de la finalización del plazo de duración de la sanción. Deberán adoptarse medidas para evitar que la información publicada en Internet no pueda ser captada o indexada a través de motores de búsqueda.

4.- La divulgación obligatoria prevista en este artículo no se realizará cuando la persona sea un menor. La comunicación pública en un caso que afecte a un menor será proporcional a los hechos y circunstancias del caso».

Artículo decimonoveno.- Se añade el artículo 38 ter a la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte**,** que quedará redactado en los siguientes términos.

«Artículo 38 ter.- Revisión de resoluciones en materia de dopaje.

El ámbito de la revisión en la vía no jurisdiccional de las resoluciones dictadas en materia de dopaje podrá incluir todos los aspectos relevantes para el asunto, sin que se limite a los asuntos debatidos en la instancia inferior. No obstante lo anterior, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por la persona recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial».

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Las infracciones en materia de dopaje que se hayan cometido antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por lo dispuesto en la normativa anterior, salvo que la regulación prevista en la nueva norma sea más favorable para las personas expedientadas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

Los procedimientos disciplinarios en materia de represión del dopaje en el deporte que hayan sido iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley, se regirán por la normativa anterior, salvo que el interesado opte voluntariamente por la aplicación de la presente Ley.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

III

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY EN EUSKERA / LEGE PROIEKTUAREN TESTUA EUSKARAZ

PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.
KIROLEKO DOPINAREN AURKAKOA LEGEA ALDATZEN DUENA LEGE PROIEKTUA

LEGE-PROIEKTUA, KIROLEKO DOPINAREN AURKAKO LEGEA ALDATZEKOA.

ZIOEN AZALPENA

Eusko Legebiltzarrak Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legea onartu zuen 2012. urtean, eta, horretarako, kiroleko dopinaren aurkako borrokan estatuan eta nazioartean aurreratuen dauden erakundeek onartutako printzipioak erabili ziren. Lehiaketa-kirolaren egitura piramidala denez, eta kirol-lehiaketek elkarren artean lotura dutenez lurralde-eremuetan eta -mailetan, esparru juridiko komuna behar da kiroleko dopinaren aurkako borrokan aritzeko.

Hori dela eta, 2003. urtean, Dopinaren aurkako Mundu Agentziak Dopinaren aurkako Mundu Kodea idatzi zuen, eta kode horren osagarri diren nazioarteko estandarrak ere zehaztu zituen. Testu horiek nazioarteko kirol-mugimenduak nahitaez bete beharreko arau eta jarraibideen multzoa dira, eta horrekin batera, baita beharrezko erreferentzia ere dopinaren aurkako borrokan esku hartzen ari diren erakunde publikoentzat ere. Ekimen horien ondorioz, UNESCOk, 2005eko urriaren 19an izandako bileran, Kiroleko Dopinaren Aurkako Nazioarteko Konbentzioa onartu zuen. Espainiak ere berretsi duen konbentzio hori (2007ko otsailaren 16ko Estatuaren Aldizkari Ofizialean argitaratu zen) gure ordenamendu juridikoaren zati bat da, Konstituzioaren 96. artikuluan xedatutakoaren arabera. Nahiz eta Dopinaren aurkako Mundu Kodea ez izan Konbentzioaren zati bat, Konbentzioak dio sinatzaileak behartuta daudela Kodeko printzipioak errespetatzera, kiroleko dopinaren aurkako borroka moldeak estatu mailan eta nazioarte mailan koordinatzeari begira.

Bateratze-giro horretan, 2013ko azaroaren 12tik 15era Dopinaren aurkako IV. Mundu Konferentzia egin zen Johannesburgen, Hegoafrikan. Bertan, hainbat kirol-erakunderen eta estaturen ordezkariek hartu zuten parte, eta 2015eko urtarrilaren 1ean indarrean sartu den Dopinaren aurkako Kode berria onartu zen.

Hauexek dira kode berri horrek dakartzan aldaketa esanguratsuenak:

- Dopinaren alorreko arau-hausteen tipifikazioan, indarrean dagoen 2009ko Kodeko arau-hausteak atxikitzen ditu Kode berriak, baina, horietaz gainera, jokabide berri batzuk ere zigortzen ditu.

- Atea irekitzen zaio lagin biologikoen analisiak egiteko aukerari Dopinaren aurkako Mundu Agentziaren nazioarteko egiaztapena ez duten laborategietan, baldin eta Agentziaren onarpena badute.

- Zehapenak aldatu egiten dira, halako moldez non etendura-epeak nabarmen luzatu diren.

- Dopinaren aurkako Mundu Kode berriak 10 urteko preskripzio-epea ezartzen du.

Horiek direla eta, Euskadik nahitaez egokitu beharra dauka, lehenbailehen, orain indarrean dagoen Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legea Dopinaren aurkako Mundu Kode berrira.

Bide batez, 12/2012 Legearen aldaketa baliatu dugu Dopinaren aurkako Euskal Agentzia —zeina Eusko Jaurlaritzan kirol arloan eskumena duen sailari atxiki baitzitzaion— Legearen 10. artikuluan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoari esleitzen zaizkion funtzioak gauzatzeko organo espezializatu gisa aitortzeko; alegia, Euskadiko dopinaren aurkako erakundea izan dadin.

Azkenik, Euskadiko Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legearen arloan Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Bitariko Lankidetza Batzordearen Akordioaren edukia erantsi da testuan.

ARTIKULU BAKARRA.- KIROLEKO DOPINAREN AURKAKO EKAINAREN 21EKO 12/2012 LEGEAN EGINDAKO ALDAKETAK

1.- Aldatzen da 10. artikuluko 2. paragrafoa. Honela idatzitako geratuko da:

«2.- Dopinaren aurkako Euskal Agentzia —kirolaren alorrean Eusko Jaurlaritzan eskumena duen sailari atxikia— aurreko paragrafoan Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Publikoari esleitzen zaizkion funtzioak betetzeko organo espezializatua izango da eta, beraz, Euskadiko dopinaren aurkako erakundea bilakatuko da.»

2.- Aldatzen da 12. artikuluko 9. paragrafoa. Honela idatzitako geratuko da:

«9.- Kontrola egin ahal izango zaie Euskal Autonomia Erkidegoan egindako kirol-lehiaketa edo -jardueretan parte hartzen duten kirolariei, salbu eta lehiaketa edo jarduera horiek estatu mailako lehiaketa ofizialak eta nazioarteko kirol-federazioek edo dagokion erakunde olinpiko edo paraolinpikoak antolaturiko nazioarteko kirol-lehiaketak badira.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioak kasu batean bakarrik egin ahal izango dizkie kontrolak, lehiaketatik kanpo, estatu mailako lizentzia, Euskadiz kanpoko beste erkidegoren bateko lizentzia edo nazioarteko lizentzia duten kirolariei: Kirolean

Osasuna Babesteko Espainiako Agentziaren eskariz edo erkidegoetako edo nazioarteko erakunde edo federazioen eskariz, eta aldez aurretik beraiekin hitzarmen bat sinatuta.»

3.- Gehitzen da 13. artikuluko 11. paragrafoa. Honela idatzitako geratuko da:

«11.- Emaitzak kudeatzeaz arduratzen den dopinaren aurkako erakundeak B lagina analizatzea erabaki dezake, bere irizpideetan oinarrituta, nahiz eta kirolariak ez eskatu lagin horren analisirik.»

4.- Gehitzen da 13. artikuluko 12. paragrafoa. Honela idatzitako geratuko da:

«12.- Dopinaren aurkako arauak hautsi direla frogatzeko, nahikoa izango da:

a) Kirolariak B lagina analizatzeari uko egiten dionean —eta, beraz, analisi hori egiten ez denean—, A laginean debekaturiko substantzia bat edo haren metabolitoak edo markatzaileak agertzea.

b) Kirolariaren B lagina analizatu, eta berresten baldin bada A laginean agertutako substantzia debekatua edo haren metabolitoak edo markatzaileak agertzen direla.

c) Kirolariaren B lagina bi flaskotan banatzen denean eta bigarren flaskoko analisiak berresten baldin badu A laginean agertutako substantzia debekatua edo haren metabolitoak edo markatzaileak agertzen direla.»

5.- Gehitzen da 13. artikuluko 13. paragrafoa. Honela idatzitako geratuko da:

«13.- Dopinaren aurkako erakundearen betebeharra izango da dopinaren aurkako araudia urratu dela frogatzea. Eginkizun horretan, baliozkotzat joko dira Dopinaren aurkako Mundu Agentziak onartutako metodo analitikoak edo erabakitzeko mugak, baldin eta kanpo-berrikusketa batek aztertzen baditu eta komunitate zientifikoaren irizpean jartzen badira.»

6.- Aldatzen da 16. artikuluko 3. paragrafoa. Honela idatzitako geratuko da:

«3.- Aurreko paragrafoan adierazitako laginak aire, gernu, odol edo beste edozein fluidotatik hartutakoak edo lagin txikiak izango dira, erregelamendu bidez zehaztutako moduan. Bertan adieraziko da nola baliozkotzen diren, ondorio hauetarako, analisien prozedurak. Emaitzak kudeatzeaz arduratzen den dopinaren aurkako erakundeak kirolariari A eta B laginen analisien emaitzak jakinarazi baino lehen, lagin horien analisi osagarriak egin ahal izango dira.»

7.- Aldatzen da 18. artikuluko 3. paragrafoa. Honela idatzitako geratuko da:

«3.- Kirolariei lege honen aplikazio-eremuan egindako dopin-kontroletan, laginen analisiak Dopinaren aurkako Mundu Agentziaren nazioarteko egiaztapena duten laborategietan edo Agentziaren onarpena dutenetan egin beharko dira.»

8.- Aldatzen da 19. artikuluko 1. paragrafoa. Honela idatzitako geratuko da:

«1.- Nazioarteko erakundeek onartutako xedapenen esparruan, Eusko Jaurlaritzak kirolean debekatuta dauden substantzien eta metodoen zerrenda Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko eskatuko du, Estatuaren Administrazio Orokorrak Estatuko Aldizkari Ofizialean agintzen duen argitaratzea eragotzi gabe. Gainera, zerrendan aldaketak egiten diren guztietan, berriro argitaratuko da zerrenda.»

9.- Aldatzen da 21. artikuluko 1. paragrafoa. Honela idatzitako geratuko da:

«1.- Lege honetan dopinari buruz jasotzen den arau-hausteen eta zehapenen araubidea aplikatuko zaie, bidezko den heinean, Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan gertatzen diren egiteei edo ez-egiteei, salbu eta nazioarteko kirol-federazioek edo nazioarteko erakunde olinpikoek edo paraolinpikoek antolaturiko estatu edo nazioarte mailako kirol-lehiaketa ofizialetan gertatzen direnei. Ez da beharko lotura bereziko harremanik egon dadin, eta egiteak edo ez-egiteak lehiaz kanpoko kirol-jardueretan ere gauza daitezke.»

10.- Gehitzen da 22 bis artikulua. Honela idatzitako geratuko da:

«22 bis artikulua.- Behin-behineko etendura.

1.- Baldin eta debekaturiko metodo batekin edo substantzia espezifiko bat ez den debekaturiko substantzia batekin loturiko aurkako emaitza analitikorik jasotzen bada, behin-behineko etendura ezarriko da berehala, behin egiaztatuz gero ez dela erabilera terapeutikoko baimenik eman eta ez dela emango, edota ez dela gertatu kontrol eta ikerketetarako nazioarteko estandarren itxurazko desbideratzerik edo laborategietarako nazioarteko estandarren desbideratzerik.

2.- Ezingo da behin-behineko etendurarik ezarri, horren aurretik —edo ondoren, urgentziaz— kirolariari entzunaldiaren izapidea izateko aukerarik ematen ez bazaio.»

11.- Gehitzen da 23. artikuluko 1. paragrafoko m) idatzi-zatia. Honela idatzitako geratuko da:

«m) Dopinaren aurkako arauak urratzearekin edo urratzen saiatzearekin lotutako arau-hauste bat dela eta, hartan laguntzea, bultzatzea, esku ematea, akuilatzea, kolaboratzea, konspiratzea, estaltzea edo bestelako konplizitate mota.»

12.- Gehitzen da 23. artikuluko 1. paragrafoko n) idatzi-zatia. Honela idatzitako geratuko da:

«n) Kirolari batek edo dopinaren aurkako erakunde baten agintearen mendeko pertsona batek lotura profesionala edo kirol-mailako lotura izatea dopinaren alorreko arau-hauste batengatik zehapen penala, diziplinazko zehapena edo administrazio-zehapena jaso duen beraren inguruko pertsona batekin, betiere horren berri idatziz jakinarazi badu dagokion dopinaren aurkako erakundeak, Dopinaren aurkako Mundu Kodeak agintzen duen eran.»

13.- 24. artikulua honela idatzita geratuko da:

«24. artikulua.- Kirolariei ezartzekoak diren zehapenak.

1.- Lege honetako 23. artikuluaren lehenbiziko paragrafoko a), b), c), d), e), f), g), j), l), m) eta n) idatzi-zatietan aurreikusitako arau-hauste oso larriak eginez gero, lizentzia bi urtetik lau urte arteko aldi batez eteteko, kentzeko edo ezin eskuratzeko zehapenak ezarriko dira, eta, hala badagokio, 3.001 eurotik 12.000 euro arteko isuna.

2.- Lege honetako 23. artikuluaren lehenbiziko paragrafoko h) eta i) idatz-zatietan aurreikusitako arau-hauste oso larriak eginez gero, federazio-lizentzia lau urtetik sei urtera arteko aldi batez eten, kendu edo ezin eskuratzeko zehapenak ezarriko dira, eta, hala badagokio, 3.001 eurotik 12.000 euro arteko isuna.

3.- Lege honetako 23. artikuluaren bigarren paragrafoan aurreikusitako arau-hauste larriak eginez gero, federazio-lizentzia hiru hilabetetik bi urtera arteko aldi batez eten, kendu edo ezin eskuratzeko zehapena ezarriko da, eta, hala badagokio, 1.500 eurotik 3.000 euro arteko isuna.

4.- Baldin eta kirolariak, erabilera terapeutikoko baimena edukitzeko behar bezalako mediku-justifikazioa izanik, ez badu baimena eskatu, edo aurretik zuen baimenaren indarraldia iraungi egin bada, lehendabiziko aldian ohartarazpena ezarriko zaio, baldin eta kontrolean analisiaren emaitza aurkakoa bada. Alabaina, horrek ez du zertan eragotzi klubari ez-egite horietan erakutsitako zabarkeriaren kariaz zehapen ekonomikoak jartzea.

5.- Hauek izango dira artikulu honetan aurreikusitako etendura-epeak aplikatzeko irizpideak:

a) Espezifikotzat jotzen ez diren substantziak tartean daudela arau-hauste oso larri batengatik ezarritako etendura-epea lau urtekoa izango da, hasiera batean.

b) Espezifikotzat jotzen diren substantziak tartean daudela eta dopinaren aurkako erakundeak frogatzen badu arau-haustea beren-beregi egin dela, etendura-epea lau urtekoa izango da.

c) Espezifikotzat jotzen ez diren substantziak tartean daudela arau-hauste oso larri bat lehenengo aldiz egiten denean, ezartzen den etendura-epea bi urtekoa izan ahalko da, baldin kirolariak egiaztatzen badu arau-haustea ez duela beren-beregi egin.

6.- Jokabidean beren-beregi jardun dela ebatziko da baldin eta kirolaria jakitun bazegoen bere jokamoldearekin dopinaren aurkako arauak urratzen zituela edo jakitun bazegoen arrisku-maila handia zegoela eta, hala ere, arrisku horri muzin egin bazion.

Lehiaketetan bakarrik debekatuta dagoen substantzia batengatik aurkako emaitza analitiko baten ondorioz gertatzen den dopinaren arau-haustea ez dela beren-beregi egin joko da, kontrako frogarik ezean, baldin eta substantzia ez-espezifikoa bada eta kirolariak frogatzen badu debekaturiko substantzia hori lehiaketatik kanpo erabili duela.

Era berean, lehiaketetan bakarrik debekatuta dagoen substantzia batengatik aurkako emaitza analitiko baten ondorioz gertatzen den dopinaren arau-haustea ez dela beren-beregi egin joko da, baldin eta substantzia ez-espezifikoa bada eta kirolariak frogatzen badu debekaturiko substantzia hori lehiaketatik kanpo erabili duela, kirol-jarduerarekin zerikusirik ez duen testuinguru batean.

7.- Lege honetako 23. artikuluko lehenengo paragrafoko c) eta f) idatzi-zatietan jasotzen diren arau-hausteetan etendura-epea lau urtekoa izango da, salbu eta laginik hartzen ez bada eta kirolariak frogatzen badu dopinaren aurkako arauak ez zituela beren-beregi urratu, orduan etendura-epea bi urtekoa izango baita.

8.- Lege honetako 23. artikuluko lehenengo paragrafoko d) idatzi-zatian jasotzen diren arau-hausteetan etendura-epea lau urtekoa izango da, hasiera batean, nahiz eta urte batera murriztu ahal izango den, kirolariaren erruduntasun-maila aintzat hartuta. Urte batetik bi urtera arteko zehapen murriztua ez zaie aplikatuko azken orduko toki-aldaketak direla-eta edo bestelako jokamoldeak direla-eta kontrolei muzin egitekotan dabiltzala pentsatzeko aski susmo sendoa sortarazten duten kirolariei.

9.- Lege honetako 23. artikuluko lehenengo paragrafoko h) eta i) idatzi-zatietan jasotzen diren arau-hausteetan etendura-epea lau urtekoa izango da, gutxienez, eta betikoa, gehienez. Aipaturiko arau-hauste horietako batean kirolari adingabe bat tartean baldin badago, arau-hauste bereziki larritzat joko da, eta arau-hauslea kirolarien inguruko pertsonaren bat bada, substantzia espezifikoekin loturarik ez duten arau-hausteen kasuetan, etendura betiko izango da.

10.- Lege honetako 23. artikuluko lehenengo paragrafoko n) idatzi-zatian jasotzen diren arau-hausteetan etendura-epea bi urtekoa izango da, hasiera batean, nahiz eta urte batera arte murriztu ahal izango den, kirolariaren erruduntasun-maila eta kasuko inguruabarrak aintzat hartuta.

11.- Kirolariak edo dopinaren aukako arauen mendean dagoen beste edozein pertsonak frogatzen badu, kasu jakin batean, ez dagoela beraren aldetik erruzko jokabiderik edo jokabide axolagaberik, ez da etendura-eperik aplikatuko.

12.- Kirolariak frogatzen badu detektatutako substantzia debekatuaren jatorria produktu kutsatu bat izan zela, etendura-epea ohartarazpen bat izango da, gutxienez, eta bi urteko etendura, gehienez, erruduntasun-maila aintzat hartuta. Erruduntasun-maila zehazteko, kontuan hartuko da produktu kutsatuari buruz kontrol-inprimakian kirolariak egin duen deklarazioa.

13.- Kirolariak edo lege honen mende dagoen edonork bere kabuz aitortzen badu dopinaren aurkako arauak urratu dituela, eta aitorpen hori egiten badu urraketa hori egiazta dezakeen lagina biltzeko jakinarazpena jaso baino lehen, eta une horretan aitorpena baldin bada arau-haustearen inguruan dagoen froga fidagarri bakarra, etendura-epea murriztu ahal izango da. Murrizketa hori ezin da izan bestela aplikatuko zekiokeen etendura-epearen erdia baino txikiagoa.

14.- Kirolariak edo beste edonork, laginak hartzeari uko egitegatik edo probak aldatzeagatik lau urteko zehapenaren mende daudela, bat-batean dopinaren aurkako arauak urratu izana aitortzen badute, bi urtera arteko etendura-epearen murrizketa izan dezakete, arau-haustearen larritasuna eta erruduntasun-maila aintza hartuta.

15.- Aurreko paragrafoetan adierazitako zehapenen ondorioz, ezinezkoa izango da Euskadiko instalazio publikoetako inolako lehiaketatan parte hartzea, lizentziaren etenaldiak, kentzeak edo eskuratzeko ezintasunak irauten duen bitartean.»

14.- Gehitzen da 24 bis artikulua. Honela idatzitako geratuko da:

«24 bis artikulua.- Arau-hauste anizkoitzengatiko zehapenak.

1.- Bigarrenez urratzen badira dopinaren aurkako arauak, hauek izango dira etendura-epeak:

a) Sei hilabete.

b) Dopinaren aurkako lehenengo arau-haustean ezarritako etendura-epearen erdia.

c) Bigarren arau-hausteari lehenengoa izango balitz aplikatu beharko litzaiokeen etendura-epea halako bi, inongo murrizketarik kontuan hartu gabe.

Benetan aplikatuko den etendura-epea hiru horietatik luzeena izango da.

2.- Hirugarrenez urratzen badira dopinaren aurkako arauak, etendura betiko izango da, bi kasutan izan ezik: hirugarren arau-hauste horrek badakar aurkitzeko moduan egotearen betebeharra urratzea edo hirugarren arau-hauste horrek zehapenak baliogabetzeko edo murrizteko baldintzak betetzen baditu. Kasu horietan, etendura-epea zortzi urtekoa izango da, gutxienez, eta betiko etendura gehienez.

3.- Dopinaren aurkako arau-haustearen kasu batean kirolariak frogatzen badu ez duela errurik edo zabarkeriarik izan, kontaketari dagokionez ez da aurreko arau-haustetzat joko.

4.- Dopinaren aurkako arau-hauste bat bigarren arau-haustetzat joko da bakarrik egiaztatzen bada arau-hausleak bigarrena egin orduko lehendabizikoaren berri jadanik jasoa zuela edo dopinaren aurkako erakundea behar bezala saiatu bada jakinarazpen hori egiten.

Dopinaren aurkako erakundeak hori frogatzen ez badu, arau-hausteak arau-hauste bakar bat —lehendabizikoa— balira bezala joko da, eta hari ezarri beharreko zehapenak zehapenik larriena dakarren arau-haustea izango du oinarri.

5.- Lehenengo arau-haustea ebatzi ondoren dopinaren aurkako erakunde batek aurkitzen baditu lehenengo arau-hauste hori jakinarazi baino lehenago egindako dopinaren aurkako arauen urraketa batekin loturiko gertakariak, zehapen gehigarri bat jarriko du, arau-hauste biak batera gertatu izan balira jarriko zitzaiokeena, alegia.

6.- Arau-hausteak anizkoitzat jotzeko, nahitaezkoa izango da hamar urteko epean gertatzea.»

15.- Gehitzen da 29. artikuluko 4. paragrafoa. Honela idatzitako geratuko da:

«4.- Zehapen ekonomikoak jarriko dira bakarrik gehieneko etendura-epeak beste modu batez ezarri den kasuetan.»

16.- Gehitzen da 29. artikuluko 5. paragrafoa. Honela idatzitako geratuko da:

«5.- Dopinaren aurkako erakundeek dopinaren aurkako arau-hausteek eragindako gastuen errekuperazioa jaso ahal izango dute beren araudi propioan.»

17.- Aldatzen da 30. artikuluko 2. paragrafoa. Honela idatzitako geratuko da:

«2.- Analisiaren emaitza aurkakoa gertatu den lehiaketako kirol-emaitzak automatikoki baliogabetzeaz gainera, baliogabetu egingo dira halaber lagina jaso den egunetik edo dopinaren aurkako beste arau-hauste bat egiten denetik harako gainerako kirol-emaitza guztiak, horrek dakartzan ondorio guztiekin —baita dominak, puntuak eta sariak kentzea ere—, ekitate-arrazoiengatik salbu.»

18.- Gehitzen da 30. artikuluko 5. paragrafoa. Honela idatzitako geratuko da:

«5.- Aurretik esandakoak ez zu ezertan eragozten hirugarren kaltedunek beren eskubideak baliatzea eta erantzukizun-akzioak egikaritzea, izandako kalte-galerak konpontzeari begira.»

19.- Gehitzen da 31 bis artikulua. Honela idatzitako geratuko da:

«Artículo 31 bis.- Lizentzia eteten den bitarteko estatusa.

1.- Lizentzia etenda duen bitartean, ez kirolariak ez beste inork ezingo du parte hartu, inola ere, Dopinaren aurkako Mundu Kodea sinatu duten entitateek edo sinatzaile horietako baten erakunde batek antolatutako ezein lehiaketa edo jardueratan. Debeku horretatik kanpo gelditzen da heziketa-programetan edo errehabilitazio-programetan parte hartzea.

Debeku horren ondorioz, lizentzia etenda duen pertsonak ezingo du parte hartu entrenamenduetan, erakustaldietan edo antzeko jardueretan, ezta karguak bete edo erantzukizunak izan edo funtzio administratiboak burutu kirol-erakundeetan edo dopinaren aurkako erakundeetan.

2.- Lau urtetik gorako etendura-epea ezartzen zaion kirolariak edo pertsonak eskubidea izango du, lau urte igaro eta gero, lehiaz kanpoko kirol-ekitaldietan edo tokiko kirol-ekitaldietan parte hartzeko, baldin eta kirol-modalitate hori arau-haustea egin zuena ez beste bat bada edo harekin erlaziorik ez badu. Parte hartze hori udal edo eskualde mailakoa izango da, ez hortik gorakoa, eta ezin dio zehapena jaso duen pertsonari aukerarik eman zuzenean edo zeharka goragoko maila bateko txapelketa baterako sailkatzeko; ezin dio aukerarik eman, halaber, kirolari adingabeekin lanean jarduteko.

3.- Etendura ezarri zaion kirolariak etendura-epearen azken bi hiletan eskubidea izango du talde batekin berriz ere entrenatzeko edo klub edo kirol-erakunde baten instalazioak erabiltzeko; etendura-epea bi hiletik beherakoa bada, eskubide hori epearen azken laurdenean baliatu ahal izango du.

20.- Aldatzen da 34. artikulua. Honela idatzitako geratuko da:

«34. artikulua.- Arau-hausteak eta zehapenak preskribatzea.

1.- Ezin da dopinaren aurkako arauak hausteagatik prozesurik hasi lege honen mendean dagoen pertsona baten aurka, prozesua ez bada hasten arau-hauste egiten den egunetik hamar urte igaro baino lehen.

2.- Era berean, laguntzeagatik zehapenaren azkentzea eragiten duen prozedura hasten bada, zehapenen preskripzio-epea eten egingo da; nolanahi ere, epea zenbatzen jarraituko da prozedura azkentzerik gabe amaitu eta ebatzi denetik hilabetea igaro denean.»

21.- Gehitzen da 37. artikuluko 6. paragrafoa. Honela idatzitako geratuko da:

«6.- Dopin-kontrolen emaitzak kudeatzeko ardura, hasiera batean, laginak biltzeko lana hasi edo burutu duen dopinaren aurkako erakundearena izango da. Laginik biltzen ez bada, kudeaketa horren ardura izango da arau-hausleari dopinaren aurkako arauak urratu dituela lehendabizikoz jakinarazten dion eta gero arau-haustea arduraz pertsegituko duen dopinaren aurkako erakundearena.»

22.- Gehitzen da 37. artikuluko 7. paragrafoa. Honela idatzitako geratuko da:

«7.- Dopinaren aurkako erakundeen artean gatazkarik sortzen bada, emaitzak kudeatzeko ardura nork duen, Dopinaren aurkako Mundu Agentziak ebatziko du arazoa.»

23.- Gehitzen da 37. artikuluko 8. paragrafoa. Honela idatzitako geratuko da:

«8.- Laginak biltzeko lana hasi eta burutzen duen dopinaren aurkako erakunde batek beste entitate baten esku uzten badu emaitzak kudeatzeko lana, egiaztatu beharko du eskuordetza jaso duen entitate horren arauak bat datozela Dopinaren aurkako Mundu Kodearekin.»

24.- Gehitzen da 37. artikuluko 9. paragrafoa. Honela idatzitako geratuko da:

«9.- Kirolariak lokalizatzeko betebeharrak urratzetik eratortzen diren emaitzak kudeatzeko eskumena kirolariak lokalizazio-datuak bidali behar zituen dopinaren aurkako erakundearena izango da.»

25.- Gehitzen da 37. artikuluko 10. paragrafoa. Honela idatzitako geratuko da:

«10.- Emaitzak kudeatzeko prozedura batean kirolariak atzera egiten badu, prozedura daraman dopinaren aurkako erakundeak eskumena izango du prozedura bururaino eramateko.»

26.- Gehitzen da 38 bis artikulua. Honela idatzitako geratuko da:

«38 bis artikulua.- Zehapenak zabaltzea.

1.- Dopinaren aurkako araurik urratzearen ondorioz kirolari batek edo beste pertsonaren batek zehapenik jasotzen badu, arau-hauslearen identitatearen jendaurreko zabalkundea egin beharko du emaitzak kudeatzeko lanaren ardura duen dopinaren aurkako erakundeak, hogei eguneko epean zehapena irmoa den egunetik zenbatuta.

2.- Dopinaren aurkako erakundeak arau-haustea nolakoa den jakinarazi behar du, zer kirol-modalitatetan gertatu den, dopinaren aurkako zer araudi urratu den, zein den zehapena jaso duen pertsonaren izena, zer substantzia edo metodo debekatu erabili den eta zer zehapen jarri diren.

3.- Horren guztiaren berri emango da, gutxienez, dopinaren aurkako erakundearen webgunean, eta hilabete batez egongo da ikusgai; etendura-epea hilabetetik gorakoa bada, epe horretan egongo da ikusgai.

4.- Arau-hauslea adingabea denean ez da egingo artikulu honetan azaldutako zabalkundea.»

27.- Gehitzen da 38 ter artikulua. Honela idatzitako geratuko da:

«38 ter artikulua.- Dopinaren alorreko ebazpenak berrikustea.

Dopinaren alorrean ematen diren ebazpenak jurisdikziotik kanpoko bidean berrikusteko eremuak auzian garrantzia duten alderdi guztiak hartuko ditu barnean; alegia, beheragoko instantzian eztabaidatu diren auzietara mugatu gabe.»

XEDAPEN IRAGANKORRA

1.- Lege hau indarrean sartu aurretik dopinaren alorrean egin diren arau-hausteak aurreko araudiaren mende egongo dira, salbu eta interesdunak bere kabuz lege hau aplikatzea aukeratzen badu.

2.- Lege hau indarrean sartu aurretik kiroleko dopina zigortzeko alorrean hasi diren diziplina-prozedurak aurreko araudiaren mende egongo dira, salbu eta interesdunak bere kabuz lege hau aplikatzea aukeratzen badu.

AZKEN XEDAPENA

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean sartuko da indarrean lege hau.

IV

INFORME RESPECTO A LA VIABILIDAD JURÍDICA DE QUE SE VUELVA A RETOMAR POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY CONTRA EL DOPAJE, APROBADO EL 26 DE ENERO DE 2016

TXOSTENA, 2016KO URTARRILAREN 26AN ONARTUTAKO KIROLEKO DOPINAREN AURKAKOA LEGEA ALDATZEN DUENA LEGE-PROIEKTUAREN TESTUA GOBERNU KONTSEILUAK BERRIRO HARTZEAK DUEN BIDERAGARRITASUN JURIDIKOARI BURUZKOA

PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.
KIROLEKO DOPINAREN AURKAKOA LEGEA ALDATZEN DUENA LEGE PROIEKTUA

INFORME: Viabilidad jurídica de la posibilidad que se vuelva a aprobar por el Consejo de Gobierno el mismo anteproyecto de Ley, en los mismos términos en los que se hizo en la anterior legislatura, para su posterior remisión como proyecto de ley al Parlamento, sin la necesidad de realizar ningún trámite previo y admitiéndose como válidos los trámites procedimentales realizados anteriormente.

1. ANTECEDENTES

Con fecha 9 de marzo de 2017, desde la Dirección de Servicios del Departamento de Cultura y Política Lingüística, se dirigió a esta Dirección de Desarrollo Legislativo y Control Normativo una consulta sobre la "Viabilidad jurídica de la posibilidad que se vuelva a aprobar por el Consejo de Gobierno el mismo anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte, en los mismos términos en los que se hizo en la anterior legislatura, para su posterior remisión al Parlamento, sin la necesidad de realizar ningún trámite previo y admitiéndose como válidos los tramites procedimentales realizados anteriormente".

Por la Dirección de Desarrollo Legislativo y Control Normativo, adscrita al Departamento de Administración Pública y Justicia, se emite el presente informe, en virtud de las funciones atribuidas al Servicio Jurídico Central del Gobierno Vasco por el artículo 5.2 de la Ley 7/2016, de 2 de junio, de Ordenación del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco; de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1.h) del Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, así como en base a las competencias atribuidas a la citada Dirección, por el artículo 14.1.a), del Decreto 71/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, y el decreto 144/2017, de 25 de abril, del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco.

2. CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO Y DISTINCIÓN RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN ADMINISTRATIVO

El Capítulo IX del reglamento del Parlamento Vasco, trata *de la caducidad de las tramitaciones parlamentarias*, señalando, con carácter general, en **su artículo 130,** que

> *«Disuelto el Parlamento Vasco o expirado su mandato,* ***caducarán todos los asuntos en tramitación*** *con excepción de los que corresponda conocer a la Diputación Permanente o que deban prorrogarse por disposición legal.»*

El inciso respecto a la prórroga por disposición legal, a falta de previsión alguna en Ley 8/2003, de 22 de diciembre, de elaboración de disposiciones generales del País Vasco (LPEDG),

debemos entenderlo referido al artículo 12 de la Ley 10/2016, de 30 de junio, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular:

> *«Artículo 12.- No caducidad de las proposiciones en caso de disolución del Parlamento.*
>
> *La iniciativa legislativa popular que estuviera en tramitación en el momento de la disolución del Parlamento no decaerá por este hecho. Una vez constituida la nueva Cámara, la Mesa del Parlamento acordará el trámite a partir del cual se reiniciará el procedimiento legislativo, sin que sea preciso en ningún caso ejercitar nuevamente la iniciativa».*

Del contenido del artículo 130 del Reglamento del Parlamento Vasco, resulta evidente que acaecida su disolución o expirado su mandato por el trascurso del tiempo, a salvo las citadas proposiciones de ley fruto de una iniciativa legislativa popular, todas las demás iniciativas y, por tanto, todos los proyectos de ley remitidos por el Gobierno Vasco a él –en el ejercicio de su potestad de iniciativa legislativa, tal y como se reconoce en los artículos 16 y 18.a) de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno (LG)– caducan en su tramitación parlamentaria.

No obstante, es recomendable observar que esta caducidad no implica que dichas iniciativas no puedan ser reiteradas, es decir, presentadas de nuevo, en los mismos términos en los que lo fueron anteriormente, por el mismo titular de la iniciativa. Es doctrina ya consolidada la referida a que –y salvo contadas excepciones– «*caducan*» los procedimientos, y «*prescriben*» los derechos, de forma tal que decaído un procedimiento por caducidad, el derecho pretendido puede volverse a ejercerse en otro procedimiento, en tanto en cuanto, el derecho no haya prescrito.

Así, aunque por referencia a la disolución o expiración del mandato de otra cámara legislativa distinta de ella misma, el citado Reglamento del Parlamento Vasco hace una excepción a este mandato general de caducidad en su artículo 131, haciendo reivindicación de su propio derecho de iniciativa referido a las proposiciones de ley presentadas por el Parlamento en las Cortes Generales, al indicar que:

> *«Si caducara en las Cortes Generales la tramitación de una proposición de ley presentada por el Parlamento Vasco o concluyera la legislatura de este antes de su defensa, el Pleno podrá, a iniciativa de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de los miembros, acordar por mayoría simple que se reitere directamente la presentación de la iniciativa, así como el nombramiento o confirmación de las parlamentarias o parlamentarios encargados de la defensa».*

Ese artículo, sin embargo, también nos sirve *mutatis mutandi* de referente con respecto a la admisibilidad de la reiteración de las iniciativas presentadas ante la propia cámara vasca, en la medida en que es notable que el anterior artículo del Reglamento del Parlamento Vasco se corresponde, casi literalmente, con lo previsto, por ejemplo, por el artículo 112 del Reglamento de las Juntas Generales de Bizkaia que dispone que:

> *«Artículo 112. Caducidad de las proposiciones ante el Parlamento*
>
> *Si caducara en el Parlamento Vasco una proposición de ley presentada por las Juntas Generales de Bizkaia o finalizara la legislatura de éstas antes de su defensa, el Pleno de las Juntas, a instancia de dos grupos o de la quinta parte de sus miembros, podrá acordar que se reitere la presentación de la iniciativa y el nombramiento de las personas designadas para su defensa.»*

Aunque no existe previsión homologa en los reglamentos de las Juntas Generales de Gipuzkoa o Araba, que habilite una exigencia especial de mayoría reducida similar para su reiteración, debe entenderse que nada impide a estas la reiteración, por la misma mayoría exigida para su aprobación previa, de la iniciativa caducada en el Parlamento Vasco disuelto

ante la nueva cámara surgida de las elecciones, en los mismos términos en los que lo había sido previamente.

Del mismo modo, por tanto, cabe concluir que, de entrada, es completamente indubitado que, en términos estrictamente parlamentarios, el nuevo Gobierno Vasco, en tanto que detentor del derecho de iniciativa legislativa, es plenamente capaz de reiterar ante la nueva cámara salida del procedimiento electoral las iniciativas aprobadas por el anterior gabinete en sus mismos términos, por cuanto la caducidad de la iniciativa no se transmite al derecho del Gobierno para su presentación.

Por tanto, sin perjuicio de que, como queda evidenciado de esta primera aproximación a la cuestión desde el prisma del derecho parlamentario, en los términos del ordenamiento vigente es claro que la disolución del Parlamento implica, siempre y en todo caso, la caducidad de los proyectos anteriormente presentados y, consiguientemente, la necesidad de su reiteración mediante el nuevo ejercicio del derecho de iniciativa legislativa del Gobierno, este informe circunscribirse a los eventuales efectos de la disolución del Parlamento y de la consiguiente caducidad de los procedimientos parlamentarios sobre los procedimientos administrativos que sirvieron de base a la presentación por el Gobierno Vasco de los correspondientes proyectos de Ley. Es decir, debe atender exclusivamente a la tramitación gubernativa o administrativa, y a su expediente, con independencia de la caducidad producida con respecto a la tramitación parlamentaria y su respectivo expediente.

3. ESPECIAL NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN CUANDO ES APLICADO A LOS ANTEPROYECTOS DE LEY

De lo anterior debe extraerse que el punto de partida más adecuado para dar contestación a la pregunta que se nos plantea debe ser el estudio de la exegesis procedimental de estos *"anteproyectos de ley"* generados dentro de Ejecutivo y de forma previa a su aprobación remisión al Parlamento como *"proyectos de ley",* al amparo, principalmente, de lo previsto en la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, de elaboración de disposiciones generales del País Vasco (en adelante LPEDG), incluyendo todos los trámites preceptivos a los que se refieren los artículo 8 a 11 y cuya culminación concluye con la toma en consideración del Consejo de Gobierno que decide su aprobación final o no conforme al artículo 13 del mismo texto. Siendo así que, como dispone su exposición de motivos «*en el caso de las leyes, el procedimiento administrativo sólo comprende la fase previa a la iniciación del procedimiento legislativo stricto sensu, cuya regulación está establecida en el Reglamento del Parlamento Vasco»*.

Ello no obstante, la nítida separación que venimos realizando respecto del procedimiento parlamentario caducado obliga a que este examen de las exigencias legales deba seguir la doctrina firmemente establecida de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (COJUA), en el sentido de que «*cuando valora el procedimiento de elaboración de los anteproyectos de ley toma en cuenta el distinto papel que aquél tiene en las normas legales y en las normas reglamentarias, tal y como se reconoce en la propia LPEDG*)» (Dictamen 129/2015 sobre anteproyecto de Ley de transparencia, participación y buen gobierno del sector público vasco; párrafo 55). La diferencia con las iniciativas reglamentarias, en lo que ahora importa, introduce en el examen del procedimiento de elaboración de los anteproyectos de ley una obligada flexibilidad y un carácter eminentemente material y anti-formalista. Y ello porque: «*Es en sede parlamentaria donde se desenvuelve con plenitud el procedimiento legislativo y, salvo supuestos específicos en los que la Constitución (CE) o el Estatuto de Autonomía del País Vasco (EAPV) o, en algunos casos, las leyes orgánicas, imponen condiciones a su adopción, la única exigencia*

que han de cumplir es que se acompañen de los antecedentes necesarios para que el Parlamento pueda pronunciarse sobre ellos: cuando menos, la memoria general, anejo de financiación e informe de control económico en aquellos proyectos que comportan un gravamen al presupuesto, el dictamen de este órgano consultivo y los informes que, con arreglo a la legislación, sean preceptivos (artículo 57 de la Ley de Gobierno y artículo 133.2 del Reglamento de la Cámara)» (Dictamen Nº: 120/2014 sobre anteproyecto de Ley de la Administración Pública Vasca; párrafo 85).

La especial naturaleza de los anteproyectos de ley permitiría relativizar incluso dicha exigibilidad de los informes preceptivos. El Tribunal Constitucional en su Sentencia 108/1986, de 29 de julio, que desestimaba un recurso contra la presentación del Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que carecía del preceptivo informe del Consejo General del Poder Judicial, estimó que: "la ausencia de un determinado precedente sólo tendrá trascendencia si se hubiere privado a las Cámaras de un elemento de juicio necesario para su decisión, pero, en este caso, el efecto, que tuvo que ser conocido de inmediato, hubiese debido ser denunciado ante las mismas Cámaras y los recurrentes no alegan en ningún momento que esto ocurriese. No habiéndose producido esa denuncia, es forzoso concluir que las Cámaras no estimaron que el informe era un elemento de juicio necesario para su decisión, sin que este Tribunal pueda interferirse en la valoración de la relevancia que un elemento de juicio tuvo para los parlamentarios". Y más adelante aplica la misma doctrina por lo que se refiere a la falta de remisión al Congreso por el Gobierno de la exposición de motivos y de la memoria explicativa del proyecto de ley. No faltó la remisión de estos antecedentes sino que se hizo tardíamente, a juicio de los recurrentes. Pero, aunque hubieran faltado, dice el Alto Tribunal que: "El defecto indicado sólo tendría relevancia si hubiese menoscabado los derechos de Diputados o grupos parlamentarios del Congreso, y siendo los hechos, en caso de ser ciertos, plenamente conocidos por ellos sin que mediase protesta por su parte, hay que entender que los afectados no consideraron que existiese lesión de sus derechos, y que, si defecto hubo, fue convalidado por la misma Cámara, por lo que este Tribunal no puede entrar a examinar su existencia o relevancia". En otras palabras, el Tribunal entiende que sólo puede considerarse necesario aquello que la propia Cámara estima como tal.

Bien es cierto que, en nuestro ordenamiento, la referencia por el artículo 133.2 del Reglamento de la Cámara a los informes preceptivos es explícita, lo que habilita perfectamente a la Cámara para exigirlos como requisito de admisibilidad del proyecto de ley que le sea remitido. Lo que a su vez nos vuelve a remitir a la LPEDG y su exégesis, aunque sea desde una lectura flexible y finalista.

Siguiendo nuevamente a la COJUA "*para realizar su análisis —material y esencialmente finalista— del procedimiento de elaboración de los proyectos de ley, la Comisión ha sistematizado las pautas de la LPEDG y viene distinguiendo: (i) una fase inicial, que se desenvuelve en el seno del órgano promotor de la iniciativa y cuyo principal objetivo es fijar el texto inicial, exteriorizar las razones que lo sustentan y elaborar la documentación que en cada caso resulte necesaria para la realización de los sucesivos trámites ; (ii) una fase de apertura del procedimiento a los sectores y administraciones potencialmente afectadas por aquella; (iii) una fase de informes —preceptivos y facultativos—; y (iv) una fase final, en la que el órgano impulsor, tras evaluar el entero iter procedimental, establece el texto definitivo y elabora los documentos finales —memoria justificativa y económica—*" (Dictamen 129/2015 sobre anteproyecto de Ley de transparencia, participación y buen gobierno del sector público vasco; párrafo 56).

Tanto la COJUA como esta Dirección de Desarrollo Legislativo y Control Normativo tienen expresamente dictaminado (aunque principalmente respecto de la tramitación de iniciativas reglamentarias) que el cambio de legislatura y de gabinete en el ejecutivo no produce por sí mismo, en modo alguno, una caducidad de los procedimientos de elaboración de las normas, ni determina que devengan inválidos los trámites realizados en el seno de dichos procedimientos. Así, es práctica común, validada tanto por esta DDLCN como por la COJUA, que los trámites iniciados por un Consejero o Consejera anterior se den por buenos y formen parte, de forma natural, del expediente que el Consejero o Consejera que lo sustituya en la legislatura siguiente remita a la aprobación en Consejo de Gobierno. De esa manera, la tramitación iniciada en una legislatura se ha continuado en la siguiente sin interrupción ni solución de continuidad (por todos, entre los dictámenes de nuestro máximo órgano consultivo podemos citar: Dictamen 203/2009 sobre el proyecto Decreto de desarrollo y aplicación de las medidas de apoyo comunitarias al sector vitivinícola de la Comunidad Autónoma de Euskadi, párrafos 2 y 37; Dictamen 217/2009 sobre proyecto de Decreto por el que se regula el desarrollo y aplicación en la CAPV de la reglamentación comunitaria en el sector de frutas y hortalizas y el régimen de ayudas derivadas de la misma, párrafos 1 y 30; Dictamen 64/2013 "Proyecto de Decreto sobre el Consejo Económico y Social Vasco", párrafos 2 y 34).

Dicho de otra manera, la cuestión de la validez jurídica de esos actos de tramitación es independiente de que los mismos fueran o no anteriores a la disolución del Parlamento o a la conformación de un nuevo Gobierno, puesto que la Administración es una, con una única personalidad jurídica para toda su estructura y todas sus funciones (artículos 53 de la LG y 3.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público –en adelante LRJSP–), independientemente de los cambios de Gobierno como titular de la misma.

En sentido estricto, no es necesario ningún acto específico de «*conversión*», «*conservación*» o «*convalidación*» de los trámites ya realizados en la legislatura anterior (figuras estas previstas en los artículos 50, 51 y 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas –en adelante, LPACAP– como medidas de subsanación de los vicios de determinados actos), en la medida en que dichos trámites realizados en el seno del procedimiento de elaboración no devienen nulos ni pierden valor por el cambio de legislatura (artículos 47, 48 y 49 de la LPACAP). Y ello, a pesar de que la lógica de economía procesal que subyace a dichas es la misma presente en la LPEDG, que tiene presente la necesidad de, en la medida de lo posible, conservar la validez de las actuaciones realizadas hasta ese momento (art. 4.2 LPEDG).

En todo caso, en relación con las disposiciones de carácter reglamentario corresponde únicamente al Consejero o Consejera de turno realizar los trámites procedentes para el impulso del procedimiento en sus diversas fases, sea ordenando su continuación o con ocasión de cualquiera de los hitos del procedimiento marcados por la LPEDG y la LG (orden de inicio, orden de aprobación previa, orden de solicitud de dictamen de la COJUA, proposición del texto definitivo de la norma al Consejo de Gobierno…). Estos actos de impulso de la tramitación, en sí mismos, implican una asunción de la tramitación precedente y, por tanto, una valoración de su eficacia formal y material, que no sólo debe conectarse con el cumplimiento formal del expediente, sino que debe también atender a la utilidad real de los mismos al objeto de dotar al órgano decisor de los elementos de juicio adecuados para ajustar la norma a la coyuntura de cada momento, sea el decisor el Gobierno, en el caso de las normas reglamentarias, sea aquél el Parlamento en el caso de los proyectos de Ley.

Por consiguiente, para decidir si se considera oportuno continuar con la tramitación de un procedimiento anterior a fin de que no sea preciso reiniciarlo nuevamente, o para asumir y dar por buenos todos los trámites ya realizados, deben tenerse en cuenta todos los factores circunstanciales. Como pueden ser la constatación de si la norma ha sido objeto de anteriores tramitaciones que impliquen una duplicidad de actuaciones, al objeto de no duplicar trámites innecesariamente y agilizar el procedimiento, o si razones de urgencia debidamente acreditadas justifican la necesidad de prescindir de alguno de los trámites, incluso cuando no se hubieran llevado a cabo, salvo cuando vengan exigidos por normas con rango de Ley (Dictamen nº 129/2015 de la COJUA sobre anteproyecto de Ley de transparencia, participación y buen gobierno del sector público vasco, párrafos 55, 59, 63 u 85), o si en el ínterin han sobrevenido o no importantes cambios normativos o sociales que determinen la pérdida de actualidad o valor informativo de los trámites realizados hasta la fecha. Pues bien, cuando hablamos de «*anteproyectos* y *proyectos de ley*», que implican la remisión al parlamento como otra fase añadida posterior al procedimiento de elaboración, esta valoración atañe tanto al Consejero o Consejera (que tendrá la responsabilidad durante el procedimiento previo y también en la decisión de su elevación al Consejo de Gobierno), como al propio Gobierno, como titular de la iniciativa legislativa ante la Cámara (que deberá efectuar esa misma valoración a la hora de aprobarlo y de decidir el momento de la remisión al órgano legislativo junto con los documentos preceptivos).

En todo caso, lo dicho hasta ahora es aplicable a todos los actos del procedimiento administrativo previo a la remisión al Parlamento, desde la orden de inicio hasta el acto de aprobación por el Consejo de Gobierno, ambos inclusive, siendo predicable el mantenimiento de la validez jurídica de los actos administrativos y el principio de conservación de los actos a todos ellos, incluido este último, debiendo ser tan solo objeto de valoración su vigencia material, en el sentido del párrafo anterior.

Del mismo modo, es también evidente que, sin soslayar las finalidades materiales a las que responde el proceso de elaboración, el de simplificar la tramitación administrativa debe ser un criterio relevante a la hora de realizar esa valoración, pues resultan plenamente aplicables al procedimiento de elaboración de la norma los mismos principios de buena regulación que son aplicables a las normas que serán fruto de dicho procedimiento, de forma que «en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia» (artículo 129 de la LPACAP).

4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA E INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL ECONÓMICO COMO TRÁMITES ESPECÍFICOS.

Aunque la Disposición Adicional Segunda de la LEDCG, por razones estrictamente históricas (se aprobó un año antes de que se promulgara la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi o LCOJUAE) se remite al Decreto 187/1999, de 13 de abril, por el que se crea y regula la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco, es la LCOJUAE (en concreto su artículo 3.1.a) la que, fuera de la LEDCG pero por remisión de la misma, regula la cuestión de la preceptividad del dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (o COJUA).

Conforme al citado artículo, la COJUA «*debe ser consultada*» en relación con todos los *«anteproyectos de ley cualquiera que sea la materia y objeto de los mismos…»* (excepto los de presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y los de metodología de distribución de

recursos y de determinación de las aportaciones de las diputaciones forales). Hasta aquí, lo dicho hasta ahora sobre el resto de trámites sería también aplicable al dictamen del alto órgano consultivo, cuya validez jurídica no resulta alterada por el cambio de Gobierno o por la caducidad de los expedientes parlamentarios a resultas de la disolución de la cámara.

Ahora bien, la especial naturaleza de este dictamen, ratificada por la jurisprudencia constitucional, hace que nuestro informe deba dedicarle un apartado específico. Como la propia COJUA explicaba en su dictamen nº 084/2003 sobre el anteproyecto de Ley de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco (párrafo 25), la interpretación que la jurisprudencia constitucional ha hecho del 107 de la Constitución Española (CE) «*a juicio del Tribunal Constitucional, supone una suerte de constitucionalización de la "función consultiva superior", no del órgano, Consejo de Estado. Es el alto asesoramiento a la administración activa el que se convierte, por mor de aquél precepto, en un instrumento de relevancia constitucional, al configurar una "importantísima garantía del interés general y de la legalidad objetiva y, a consecuencia de ello, de los derechos y legítimos intereses de quienes son parte de un determinado procedimiento administrativo».* Se trata, afirma el Tribunal, *«…de una función muy cualificada que permite su subsunción en la categoría de norma básica del régimen jurídico de las administraciones públicas o parte del procedimiento administrativo común (artículo 149.1.18ª CE)».*

Es esta singular y cualificada naturaleza del trámite la que justifica que el dictamen de la COJUA merezca una mención específica (junto con el informe previo de control económico normativo de la OCE) por el artículo 133 del reglamento del Parlamento entre los documentos que deben acompañar a todo proyecto de ley que sea remitido a la cámara. Y es la razón también que motiva la mención introducida en la LG por la Ley 8/2016, de 2 de junio, de modificación de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, al dar a los artículos 56 y 57 de la LG la siguiente redacción:

> *Artículo 56*
>
> *1. El Gobierno, en la fase inicial de elaboración de los anteproyectos de ley y los proyectos de decreto que deban ser remitidos a la Comisión Jurídica Asesora, únicamente enviará al Parlamento Vasco el texto de la disposición, una vez tenga la aprobación previa del órgano que haya dictado la orden de iniciación.*
>
> *2. Asimismo, la misma documentación que se envíe a la Comisión Jurídica Asesora se remitirá, al mismo tiempo, al Parlamento Vasco, a efectos de su conocimiento por parte de los grupos parlamentarios.*
>
> *3. Los anteproyectos de Ley y los proyectos de Decreto que hayan de ser acordados por el Gobierno, serán remitidos al Secretario del Gobierno, que procederá a su reparto. Se incluirán en el Orden del Día cuando los Departamentos interesados hayan manifestado su conformidad sobre el contenido, en la forma que el propio Gobierno establezca. No habiendo conformidad, o siendo ésta condicionada, corresponderá al Lehendakari decidir la inclusión del asunto en los debates del Consejo.*
>
> *Artículo 57*
>
> *1. Los proyectos de ley presentados al Parlamento Vasco habrán de ir acompañados del informe de la Comisión Jurídica Asesora y, en su caso, de la memoria de adaptación a dicho informe.*
>
> *2. Si los Proyectos de Ley comportasen un gravamen al Presupuesto, deberán ir acompañados del correspondiente anejo de financiación que será discutido y votado con arreglo a lo que disponga el Reglamento del Parlamento sobre los Proyectos de Ley.*

Cabe, por tanto, preguntarse si estos artículos implican especiales obligaciones de comunicación al Parlamento cuando se pretenda rescatar la tramitación de proyectos de ley elaborados durante legislaturas anteriores. De entrada, debe distinguirse (i) si de lo que hablamos es de continuar una tramitación previamente iniciada en la que no se hubieran producido aún la aprobación previa del texto (en cuyo caso será necesario cumplimentar la comunicación requerida por el artículo 56.1 LG), o bien si dicho procedimiento tenía aún pendiente el trámite de solicitud de dictamen a la COJUA (en cuyo caso sería necesario remitir al Parlamento todo lo dispuesto por el artículo 56.2 LG) (ii) de la situación en que nos encontramos ante un anteproyecto o un proyecto que sólo tuviera pendiente la aprobación del Consejo de Gobierno o la de adoptar el acuerdo por este órgano de su remisión al Parlamento, bien por vez primera o bien por reiteración de otro acuerdo de remisión previamente efectuada (en cuyo caso nos encontraríamos ya en los casos previstos por los artículos 56.3 y 57 LG, y 133 del reglamento del Parlamento).

Así mismo, cuando el anteproyecto o proyecto en cuestión hubiera llegado a ser dictaminado por la COJUA, a la vista de lo previsto en el artículo 29 LCOJUAE, cabe también preguntarse si es suficiente en los casos anteriores con adjuntar el dictamen emitido en una legislatura anterior o si sería necesario la solicitud de un nuevo dictamen.

Dicho precepto determina que: «Si, tras la emisión del dictamen, el asunto sobre el que verse es objeto de modificaciones sustanciales que introducen nuevos contenidos que no responden a las sugerencias o propuestas efectuadas por la comisión o las exceden, se ha de realizar una nueva consulta sobre dichos cambios» Por tanto, del literal de la norma cabe colegir que, independientemente de que el dictamen hubiera sido o no emitido bajo un Gabinete anterior, **procederá un nuevo examen sólo si en la propuesta de proyecto de ley que se vaya a presentar de nuevo a Consejo de Gobierno para su aprobación o remisión concurren «modificaciones sustanciales»,** concepto jurídico indeterminado para cuya concreción, siguiendo el literal del artículo y como tiene explicado la propia COJUA, habrá de estarse a la conexión de aquellas con el previo anterior dictamen.

A este respecto, resulta relevante atender a la doctrina de la propia COJUA respecto a la interpretación que debe darse al artículo 29 LCOJUAE, siendo esta una doctrina firmemente establecida en sus dictámenes y acuerdos de inadmisión. Por todos, podemos traer a este informe las palabras del reciente Acuerdo nº 4/2017 del Pleno de la COJUA, al inadmitir una solicitud de dictamen en la sesión del día 26 de abril de 2017:

> *7. O, en otras palabras, como se señaló en el Dictamen 10/2000, la Comisión sólo tendrá que volver a examinar el asunto cuando de su nueva elaboración se colija la existencia de elementos o aspectos sustantivos distintos de los examinados en su anterior intervención y cuya relevancia reclamen un nuevo análisis.*
>
> *8. Esta doctrina es coherente con la establecida por el Tribunal Supremo en relación con el Consejo de Estado y, por tanto, plenamente aplicable a los supuestos de intervención de esta Comisión.*
>
> *9. De acuerdo con dicha doctrina, en síntesis, procede la nueva consulta cuando "...las innovaciones introducidas tras el dictamen del Consejo de Estado no han sido sugeridas por éste, son ajenas a los términos de la consulta y, además, ostentan una relevancia sustancial" (STS de 27 de mayo de 1993 —RJ 1993\102040—).*
>
> *10. Los supuestos han sido precisados en posteriores pronunciamientos, así la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 10 de marzo de 2009 (RJ\2009\5110) subraya "que no es necesaria una*

nueva consulta al Consejo de Estado cuando se realizan retoques en el texto o se introducen modificaciones no sustanciales (...), ni cuando las discordancias entre el Proyecto y el Texto definitivo son consecuencias lógicas del procedimiento de elaboración, en el que se emiten informes por distintos órganos, que pueden dar lugar a variaciones en la disposición que resulte, por fin, aprobada, pudiendo añadirse que la propia doctrina de la Sala ha insistido en la necesidad de efectuar una interpretación funcional y teleológica de las garantías procedimentales establecidas para la elaboración de disposiciones generales, que se justifican no por el puro formalismo de su realización sino por la finalidad a que responden, en cuya valoración han de tenerse en cuenta las especialidades de la disposición general de que se trate (...)."

11. La misma STS de 10 de marzo de 2009 recuerda que es jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS de 8 de marzo de 2006) que cuando las modificaciones introducidas en el texto definitivo de una disposición general no sean sustanciales resulta innecesaria una nueva audiencia de las asociaciones, corporaciones o entidades representativas de intereses legítimos en relación directa con el objeto de la disposición o un nuevo informe o dictamen del Consejo de Estado, "entre otras razones porque su parecer no es vinculante, de manera que si, contemplada la modificación tanto desde una perspectiva relativa, por la innovación en el texto informado, como absoluta, por su importancia intrínseca, no representa una alteración sustancial en el ordenamiento previamente sometido al trámite de audiencia o informe, la falta de éstos, respecto de la reforma introducida, no acarrea su nulidad radical, al haber contado quien ostenta la potestad para redactar definitivamente la disposición con el criterio o ilustración de las entidades, corporaciones, asociaciones y organismos consultados, que, en definitiva, es el fin perseguido (...) al establecer un procedimiento para la elaboración de los reglamentos (...)".

12. E invoca también la STS de 31 de enero de 2001, por referencia a la Sentencia de 27 de mayo de 1993, valorando las modificaciones allí producidas, que no requerían nuevo dictamen del Consejo de Estado, "ya que es necesario compatibilizar el carácter final de dicho dictamen, como juicio de síntesis de todas las cuestiones planteadas e informes específicos emitidos con anterioridad, con el ejercicio de la potestad reglamentaria del Gobierno (...), de la que resultaría desapoderado este si hubiese de ajustarse literalmente en la redacción definitiva a dicho dictamen, pues sólo si se regulasen materias no incluidas en el Proyecto remitido a dictamen o su ordenación resultase completa o sustancialmente diferente, sin haber sido sugerida por el propio Consejo de Estado, debería recabarse sobre tales extremos nuevo informe, ya que el titular de la potestad reglamentaria ostenta la facultad de introducir en el texto remitido al Consejo de Estado las reformas que considere adecuadas para la redacción final sin otro límite que el expresado (...)".

13. La precedente doctrina sigue plenamente vigente, tal y como se desprende de la lectura de la STS de 22 de diciembre de 2016 (RJ 2017/106).

14. Procede, por tanto, examinar el texto del proyecto sometido a consulta, conforme al señalado criterio de la conexión de las innovaciones con las consideraciones del dictamen anterior, esto es, si derivan de las sugerencias del dictamen de la Comisión o si, ajenas a este, ostentan una relevancia sustancial que exija una nueva intervención preceptiva.».

También se debe de atender en este apartado, en tanto que informe explícitamente mencionado por el artículo 133 del reglamento del Parlamento, al informe de control económico normativo que debe hacer la Oficina de Centro Económico a los «anteproyectos de ley» en virtud de lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi (LCEyC).

Este informe aunque previo al informe que ha de realizar la COJUA (art. 27.1 LCEyC), es también de singular trascendencia pues la determinación del contenido o del impacto significativo

que los «anteproyectos de ley» puedan tener en la actividad económica pueden determinar la preceptividad de la emisión de tal informe (art. 41 del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Ley14/1994) o la necesaria información y audiencia a la ciudadanía del proyecto (art. 133.4 LPACAP).

Este informe de control económico normativo, tiene más que ver con el contexto que con el texto mismo del *«proyecto de ley»,* pues su finalidad no es otra que hacer un pronunciamiento sobre si las disposiciones en él previstas repercuten o afectan, directa o indirectamente, en las materias propias de la Hacienda General del País Vasco así como en el régimen presupuestario y de ejecución del gasto e ingreso público; siendo de singular pertinencia el dictaminar sobre «*la incidencia o repercusión de la norma o disposición en el régimen de la Tesorería General del País Vasco, patrimonial, contable, de contratación, tributario propio, de endeudamiento o de concesión de garantías vigente en cada momento*» (art. 26.1.b de la *LCEyC) o «la razonabilidad financiera en términos cuantificables de la norma o disposición propuesta.*» (art. 26.1.b de la LCEyC); aspecto este último que, entre otros muchos matices, tiene repercusión en la normativa denominada de «Estabilidad financiera de las Administraciones Publicas».

Es bien cierto que aunque este informe preceptivo fuera desfavorable y obstativo, el «anteproyecto de ley» podría continuar su iter procedimental hasta su elevación por el Consejero o Consejera competente a Consejo de Gobierno, el cual es libérrimo en su decisión de aprobación o no según venimos exponiendo a lo largo de este informe.

Ahora bien, cabe reiterase la ya esencial pregunta que pretende dar respuesta ente informe: ¿es precisa su nueva emisión de informe OCE en relación con un «proyecto de ley» ya aprobado por Consejo de Gobierno e independientemente de si este tomó el acuerdo de su remisión al Parlamento o no? ¿podría bastar con el informe OCE emitido previamente incluso aunque, remitido al Parlamento, el expediente parlamentario hubiera caducado?

La normativa que regula este control económico normativo no establece de forma específica sobre la necesidad de nuevo pronunciamiento. Solo hace referencia en el artículo 27.1 in fine de la LCEyC, a los supuestos de proyectos normativos en que deba dictaminar la COJUA y, toda vez que esta es la última en pronunciarse, «… *con anterioridad a su aprobación, deberán comunicarse a la Oficina de Control Económico las modificaciones que se introduzcan en los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones normativas como consecuencia de las sugerencias y propuestas del dictamen de dicho órgano consultivo.».*

Es decir, sólo «deberá comunicarse», sin más trámites, la modificación introducida. No se debe formalizar un nuevo dictamen, y ello con independencia que el Consejero competente en materia de Hacienda deba conocer de estas modificaciones por vía interna departamento y haga valer sus consideraciones en el Consejo de Gobierno.

Consecuentemente, y teniendo en cuenta las trascendentes repercusiones que cualquier normativa puede tener en la economía, quien esto informa cree que se debe ser consecuente con lo expuesto en los párrafos precedentes de este apartado, de forma tal que (i) si la COJUA no considera procedente pronunciarse sobre el reenvío de un proyecto de ley ya aprobado por Consejo de Gobierno al Parlamento, tampoco parece procedente que lo haga la OCE, y (ii) caso de que la COJUA decidiera que ha de pronunciarse sobre ese proyectos de ley, tampoco parece procedente que se pronuncie la OCE, sin perjuicio de que le sea comunicado el dictamen o parecer de ésta a los efectos legales oportunos, así como las modificaciones que en su caso se introdujeran.

Todo ello que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 41.2 del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Ley14/1994, exista un deber de remisión del anteproyecto de ley a la OCE, a los efectos de su conocimiento del trámite y la valoración de la existencia o ausencia de contenido económico.

5. LA DISTINCIÓN ENTRE ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS DE LEY Y EL ACTO DE REMISIÓN A LA CÁMARA

Conforme a nuestra LG, es atribución de los Consejeros o Consejeras la presentación al Gobierno de anteproyectos que se deberán «*proponer para su aprobación por el Gobierno* [como] *Proyectos de Ley*» (artículo 26.8 LG en relación con el 55 LG). Los *ant*eproyectos de ley *«se someterán a la toma en consideración del Consejo de Gobierno, que decidirá sobre su aprobación final en la misma sesión, o bien establecerá los criterios que hayan de tenerse en cuenta en su redacción final y las actuaciones que, en su caso, hayan de seguirse en su tramitación ulterior hasta dicha aprobación»* (artículo 13 LPEDG). Por su parte, corresponde el Gobierno *«aprobar los Proyectos de Ley para su remisión al Parlamento o determinar su retirada, en las condiciones que establezca el Reglamento de la Cámara»* (artículo 18.a LG).

En efecto, tanto la especial consideración de los anteproyectos de ley en comparación con la tramitación de las iniciativas reglamentarias, como la preceptividad de que sean tomados en consideración por el Consejo de Gobierno es un plus de especialidad en la tramitación que reconoce la propia LPEDG al incluir el artículo 13 dentro de su Capítulo III, de «Dispos*iciones Especiales*». Y ello porque, tal y como refiere en su Exposición de Motivos: «*Dada la especial relevancia de las leyes, se ha previsto con respecto a ellas un trámite específico de toma en consideración por el Consejo de Gobierno de los anteproyectos de ley. Su finalidad es que el órgano que ha de ejercer la iniciativa legislativa asuma y oriente la planificación ulterior del procedimiento de elaboración a la vista de un texto ya articulado y sin perjuicio de las modificaciones que resulten de los trámites de audiencia, consulta e informe posteriores».*

En este punto cabe preguntarse de nuevo cuál es la diferencia jurídica entre *«anteproyecto de ley»* objeto de tramitación administrativa y aprobado o no como *«proyecto de ley»,* por un lado, y el sustancial «*proyecto de ley*» que se remite al Parlamento, por otro. De entrada, debemos aclarar que no resulta esencialmente relevante para el presente informe la distinción nominal que de habitual se hace entre «*anteproyectos»* y «*proyectos»* –en los artículos de nuestra LG arriba citados parece extraerse que en el Ordenamiento de la CAE llama «*anteproyecto*» a los textos elaborados por los departamentos, que son presentados al Gobierno como propuestas para su adopción como «*proyectos de ley*», convirtiéndose en tales en el momento en que cuentan con la aprobación de dicho Órgano–. Sí resulta más relevante y sustancial, sin embargo, la distinción entre el «*texto*» en su fase de elaboración administrativa hasta su culminación en la aprobación por el Consejo de Gobierno y el «*documento objeto de ulterior remisión al Parlamento*», con la consiguiente y definitiva conversión en objeto de tramitación parlamentaria, en ejercicio de la potestad de iniciativa legislativa del Ejecutivo.

A este respecto, existe abundante documentación doctrinal, pero en la actualidad –y a salvo de exegesis más doctas– resulta bastante esclarecedor lo dispuesto en el artículo 127 LPACAP, que bajo el epígrafe «*Iniciativa legislativa y potestad para dictar normas con rango de ley*» dice:

> *«El Gobierno de la Nación ejercerá la iniciativa legislativa prevista en la Constitución mediante la elaboración y aprobación de los anteproyectos de Ley y la ulterior remisión de los proyectos de ley a las Cortes Generales.*

La iniciativa legislativa se ejercerá por los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas en los términos establecidos por la Constitución y sus respectivos Estatutos de Autonomía. (...)»

Aunque la primera parte de este artículo puede considerarse de los preceptos que prevén su aplicación exclusiva en el ámbito de la Administración General del Estado (por lo que no sería de aplicación a la CAV en los términos de la Disposición final primera LPACAP), no resulta contradictorio en ese punto con nuestra LG. Es decir, los Órganos de gobierno ejercen en dos fases la iniciativa legislativa que, en el presente caso, le confieren al Gobierno Vasco los artículos 16 y 18.a) LG: una primera e interna «*mediante la elaboración y aprobación de los anteproyectos de Ley»,* y otra segunda y posterior con «*la ulterior remisión de los proyectos de ley*» al Parlamento Vasco.

Estas dos fases –y el producto resultante de sus tramitaciones– tienen, sin lugar a dudas, su trascendencia, pues reflejan la dicotomía del actuar del Ejecutivo en su doble faceta, pues por un lado es el órgano de dirección política y, por otro, es el órgano que culmina la estructura administrativa pública.

Así, se pude considerar que un «*anteproyecto de Ley*» es fruto de una actividad interna administrativa, con notables criterios de discrecionalidad pero sometida a programación (planificación normativa: art. 132 LPACAP) y un especifico procedimiento (LPEDG), cuya ausencia puede ocasionar vicios de nulidad –incluso su impugnación en vía jurisdiccional–, y cuya aprobación por Consejo de Gobierno (y transformación en «proyecto de ley» en la terminología de nuestra LG) le da ya un carácter acto jurídico final –art. 13 LPEDG–, que bien pudiera concluir su tramitación y efectos en ese momento.

Naturalmente, la finalidad última de los «*anteproyectos de Ley*», va más allá de su simple aprobación o conclusión del *iter* procedimental regulado en la LPEDG. Es decir, trasciende más allá de su aprobación y lánguida residencia como «*proyecto de ley aprobado*» en los servicios administrativos de Consejo de Gobierno (o de su Secretaría). Su pretensión es trasformar el ordenamiento jurídico en un aspecto determinado –el objeto y finalidad del anteproyecto de ley–, y ello en base a un programa de Gobierno definido en función de las demandas reales de la sociedad y de la ciudadanía a la que sirve.

A esta finalidad novadora contribuye la remisión al Parlamento del «*proyecto de ley*», acto que se enmarca dentro de los denominados «*actos políticos*» cuya potestad no está reglada actualmente por norma alguna de Derecho Administrativo. Y ello, porque los preceptos referidos a cómo y junto a qué documentación ha de remitirse el proyecto al Parlamento están tan en la frontera de ambos mundos que prácticamente se pueden considerar como de Derecho parlamentario (artículo 57 LG como correlativo del artículo 133 del Reglamento del Parlamento, artículo 58 LG como regulación del propio procedimiento parlamentario).

En este sentido el acto de remisión es un acto que concede un *plus* que se añade al ya de por sí ya perfecto del «*proyecto de ley*» aprobado por el Gobierno, con una finalidad superior cual es el dar contenido al programa legislativo contenido en el Programa de Gobierno en ejercicio de la potestad de iniciativa legislativa que el ordenamiento jurídico le reconoce.

La naturaleza «*política*» de este *«acuerdo de remisión»* del Consejo de Gobierno de un *«proyecto de ley»* al Parlamento, se halla refrendada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que, entre otras, en su Sentencia de 15 de marzo de 1990 (RTC 1990, 45), cuyo ponente fue el Excmo. Sr. LEGUINA VILLA, manifiesta:

«… no toda actuación del gobierno, cuyas funciones se enuncian en el artículo 97 del Texto Constitucional, está sujeta al Derecho administrativo. Es indudable, por ejemplo, que no lo está, en general, la que se refiere a las relaciones con otros órganos constitucionales, como la decisión de enviar a las Cortes un proyecto de ley u otros semejantes, a través de las cuales el Gobierno cumple también la función de dirección política que le atribuye el mencionado artículo 97 CE. A este género de actuaciones del Gobierno, diferentes de la actuación administrativa sometida a control judicial, pertenecen las decisiones que otorgan prioridad a una u otras parcelas de la acción que le corresponde, salvo que tal prioridad resulte obligada en ejecución de lo dispuesto por las leyes».

En este mismo sentido se ha manifestado el Tribunal Supremo en su jurisprudencia, que aunque centrada fundamentalmente en los supuestos de relaciones entre los poderes del Estado, ha dictado pronunciamientos referidos a supuestos de denegación de la solicitud de ejercicio de la iniciativa legislativa o el ejercicio de ésta (SSTS 13 marzo 1990 [RJ 1990, 1938]; 25 octubre 1990 [RJ 1990, 7972]; y 10 diciembre 1991 [RJ 1991, 9254]).

De ello podemos obtener ya algunas conclusiones:

I. La tramitación de los anteproyectos de Ley no se ve, en principio, afectada por la caducidad de los procedimientos parlamentarios fruto de la disolución del Parlamento. En la medida de lo posible, y sin perjudicar a su finalidad material, debe entenderse que los trámites efectuados con anterioridad conservan plenamente su valor, sin perjuicio de que ello deba ser siempre objeto de valoración por el órgano al que en cada caso corresponde el impulso del procedimiento y teniendo en cuenta, además, la especial consideración flexible y antiformalista que el procedimiento tiene en esos casos.

II. Los *«anteproyectos de ley»* presentados al Consejo de Gobierno y aprobados por este como «*proyectos de ley*», independientemente de su remisión o no al Parlamento para continuar su tramitación en sede parlamentaria, son actos administrativos válidos (aunque no eficaces en la innovación del ordenamiento jurídico) y quedan residenciados en dicho Consejo de Gobierno, sin fecha de caducidad alguna, ya que suponen el fin del *iter* procedimental previsto en la LPEDG.

III. La toma en consideración y aprobación final del *«anteproyecto de ley»* por el Consejo de Gobierno puede ser anterior o simultánea en el tiempo a la decisión de su remisión al Parlamento como *«proyectos de ley»*.

IV. Una vez aprobado por Consejo de Gobierno un *«proyecto de ley»*, la decisión de su remisión a Parlamento excede de la función administrativa de éste, debiendo ser considerado como un *«acto político»*, y por lo tanto no sujeto a mandato normativo alguno sino, más bien, a criterios de oportunidad, sin perjuicio de las normas que especifican la documentación que debe acompañar esa remisión y que determinarán, en todo caso, su admisión o no por la mesa de la Cámara.

6. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS «*PROYECTOS DE LEY*» REMITIDOS AL PARLAMENTO TRAS SU DISOLUCIÓN.

Ya se ha comentado anteriormente que tras la disolución del Parlamento Vasco o expirado su mandato, caducarán en cuanto a su expediente parlamentario todos los asuntos en tramitación, y entre estos asuntos los *«proyectos de ley»* remitidos antes de su disolución.

Entonces, cabe preguntarse en qué situación quedan, desde el punto de vista del Derecho administrativo, los *«proyectos de ley»* aprobados en Consejo de Gobierno y que posteriormente fueron remitidos como iniciativas legislativas al Parlamento, una vez que este es disuelto.

A juicio de quien esto informa tales *«proyectos de ley»* ya aprobados por Consejo de Gobierno cumplen, también después de la disolución del Parlamento, con la finalidad para la que se han previsto en la fase, llamémosla administrativa. Esto es, y en los términos expuestos en la Exposición de Motivos de la LPEDG, prever el contenido tanto de forma como de fondo de una previsible y concreta iniciativa legislativa mediante el método de:

> *«...aplicar a la redacción de las leyes en el seno del ejecutivo la misma metodología que a las disposiciones reglamentarias. De ese modo se contribuye muy positivamente a facilitar la labor del titular de la potestad legislativa, pues se le presentan para su discusión y decisión unos proyectos mejor fundados y articulados, con una técnica jurídica más depurada y apropiada para alcanzar los objetivos que se propone. Sobre esa base más precisa y segura corresponde a la Cámara parlamentaria su enmienda y aprobación.»*

La razón de ello es la decisión de iniciar la elaboración de las normas, tanto en su fase administrativa como en la puesta en marcha de su tramitación parlamentaria mediante la remisión al Parlamento, *"… no se concibe como una mera formalidad, sino como un acto de gran trascendencia jurídica y política que ha de basarse en una mínima reflexión sobre la necesidad y viabilidad de aquéllas. Por eso, se exige que tenga en cuenta los condicionamientos de toda clase (estudios, informes, audiencias, consultas, negociaciones, etc.) que puedan incidir en la fijación de su contenido, y una estimación del coste y eficacia de su puesta en vigor no sólo en relación con las Administraciones públicas, sino, también, para los ciudadanos y la economía en general»* (Exposición de Motivos de la LPEDG).

Ahora bien, y es aquí donde entra en valor la alta dirección política de la que es titular el Consejo de Gobierno, ¿puede asumirse por el Consejo de Gobierno un *«anteproyecto de ley»* tramitado o incluso un «proyecto de ley» ya aprobado anteriormente y remitirlo de nuevo al Parlamento como *«proyecto de ley»?* ¿Puede hacerlo, incluso cuando dicho proyecto de Ley hubiera sido remitido ya previamente al Parlamento?

Según venimos exponiendo, independientemente de su "*gran trascendencia",* en términos literales de la LPEDG, la decisión de asumir como propio un proyecto anterior y de decidir su remisión o no al nuevo Parlamento, reafirmándolo como iniciativa legislativa necesaria y oportuna –y por lo tanto vigente– conforme al Programa de Gobierno surgido de ese nuevo Parlamento, es **una decisión eminentemente política**.

Cierto es que la remisión al Parlamento de cualquier proyecto de ley deberá acompañarse siempre, a fin de que no haya dudas respecto a la admisión del mismo por la Mesa de la Cámara, de los antecedentes y documentos exigidos por los artículos 57 LG y 133 del Reglamento del Parlamento. Pero a partir de ahí, es también una decisión eminentemente política la de asumir ese proyecto y esa tramitación administrativa llevada a cabo con anterioridad. Decisión de carácter político adoptada por el nuevo Gobierno, todo más cuando en su faceta de dirección política y superior de la misma Administración que los adoptó originalmente –Administración que actúa siempre con personalidad única a pesar del cambio de Gobierno–, que conlleva el afirmar la suficiencia, actualidad y vigencia de lo ya tramitado en la fase administrativa. Es decir, supuesta la validez jurídica de los actos de tramitación efectuados, tales actos no se han visto afectados por el cambio de Gobierno; aspecto diferente y diferenciado del acuerdo de Consejo de Gobierno –y no otro– de remisión al Parlamento en el ejercicio de la

potestad de iniciativa legislativa, y que habrá de hacerse desde criterios materiales y de estricta oportunidad y conveniencia.

Por tanto, en opinión de quien esto suscribe, la respuesta a la cuestión planteada a esta Dirección es afirmativa toda vez que se constate que tal *«proyecto de ley»* se adecue a las previsión política del nuevo Consejo de Gobierno a realizar durante su mandato, que siga siendo precisa su implementación en el ordenamiento jurídico y que los elementos esenciales del texto del *«proyecto de ley»* no se hayan visto afectados por normativa surgida con posterioridad a su aprobación. E incluso la importancia de una eventual modificación sobrevenida del ordenamiento que afectara al proyecto debe ser sopesado de una forma relativa, puesto que el *«proyecto de ley*», aún después de ser remitido a la cámara transformándose el procedimiento en parlamentario, ha de ser sometido a su tramitación en aquélla sede, durante al cuál, y previo a su aprobación final y convertirse en Ley, puede ser sujeto de enmienda por la Cámara de forma que también en ese momento se podrán realizar los ajustes que resulten pertinentes.

7. CONCLUSIÓN

A modo de resumen: el actual y vigente Consejo de Gobierno, puede en el ejercicio de la potestad de iniciativa legislativa que el reconocen los artículos 16 y 18.a) de la LG acordar la aprobación y remisión al Parlamento de un *«proyecto de ley»* aprobado ya con anterioridad, previa elevación a él por el o la Consejera competente (o por varios si fueran varios los competentes) de la correspondiente propuesta.

Esta elevación al Consejo de Gobierno por uno o varios de sus miembros ha de tener por finalidad, además de reflejar la decisión formal de pertinencia y propuesta recogida en el art. 26.8 LG, la de aseverar tanto la vigencia de la viabilidad normativa (es decir, que no se ha visto afectado por normas aprobadas con posterioridad a su anterior remisión) como la vigencia de los trámites anteriormente efectuados y la oportunidad y necesidad innovadora del ordenamiento jurídico que pretende, de acuerdo con los términos previstos en el proyecto político del Gobierno actual.

Así, los *«proyectos de ley»* ya aprobados y residenciados en el Consejo de Gobierno, volverán a ser desde una perspectiva parlamentaria nuevos *«proyectos de ley»* al ser remitidos, con todos sus antecedentes, al Parlamento, iniciándose de nuevo la tramitación parlamentaria caducada en su día por la disolución de este.

Este es mi informe que emito, y someto a cualquier otro mejor fundado en Derecho.

Firmantes del documento electrónico

Nombre	Departamento	Cargo	Fecha
XABIER UNANUE ORTEGA	GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO	DIRECTOR/A	09/05/2017
JESUS MARIA FERNANDEZ AGUADO	GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO	LETRADO/A SERVICIOS JURÍDICOS CENTRALES	09/05/2017

TXOSTENA: Aztertzea juridikoki bideragarria ote den Gobernu Kontseiluak aurreko Lege-aurreproiektuaren testua berriro onartzea, aurreko legegintzaldiko termino berberetan, eta hura Eusko Legebiltzarrera igortzea, aurretik beste izapiderik egin gabe eta aurrekoan egindako prozedura-izapideak baliozkotzat emanda.

1. AURREKARIAK

2017ko martxoaren 9an, Kultura eta Hizkuntza Politikako Zerbitzu Zuzendaritzatik kontsulta hau jaso genuen Lege Garapen eta Arau Kontrolerako Zuzendaritzan: "Aztertzea juridikoki bideragarria ote den Gobernu Kontseiluak berriro onartzea aurreko Lege-aurreproiektuaren testua, Kiroleko dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legea aldatzekoa, aurreko legegintzaldiko termino berberetan, eta hura Eusko Legebiltzarrera igortzea, aurretik beste izapiderik egin gabe eta aurrekoan egindako prozedura-izapideak baliozkotzat emanda".

Administrazio Publiko eta Justizia Sailari atxikitako Lege Garapen eta Arau Kontrolerako Zuzendaritzak ematen du txosten hau, ekainaren 2ko 7/2016 Legeak (Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoa antolatzekoa) 5.2 artikuluan Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridiko Nagusiari ezartzen dizkion eginkizunak betez, Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuak (Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena) 6.1.h) artikuluan ezarritakoarekin bat, eta, halaber, apirilaren 11ko 71/2017 Dekretuaren (Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzekoa) 14.1.a) artikuluan eta apirilaren 25eko 144/2017 Dekretuan (Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoarena) gorago aipatutako zuzendaritzari ematen zaizkion eskumenetan oinarrituta.

2. PROZEDURA PARLAMENTARIOAREN IRAUNGIPENA, ETA ADMINISTRAZIOKO PROZEDURAREKIKO BEREIZKETA

Eusko Legebiltzarraren Erregelamenduaren IX. kapituluak *Legebiltzarreko tramitazioen iraungipena* du izenburua, eta honako hau dio, arau orokor gisa, kapitulu horretako **130. artikuluak:**

> *«Eusko Legebiltzarra desegindakoan edo Legebiltzarraren agintaldia amaitutakoan, **iraungi egingo dira tramitazioan dauden gai guztiak**, salbu eta Diputazio Iraunkorrak aztertu eta erabaki beharrekoak edo legeak hala aginduta atzeratu beharrekoak».*

Xedapen Orokorrak egiteko Prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/2003 Legeak ez duenez ezer aurreikusten lege-aginduz atzeratzeari buruz, tarteki hori Legegintzako herri-ekimena arautzen duen ekainaren 30eko 10/2016 Legearen 12. artikuluaz ari dela ulertu behar dugu:

> *«12. artikulua.– Proposamenak ez baliogabetzea Legebiltzarra desegiten bada*

Legebiltzarra desegiteko unean bere bideak egiten ari bada legegintzako herri-ekimena, ez da horregatik baliogabetuko. Legebiltzarra berriz osatutakoan, Mahaiak legegintza-bideei zer izapidetatik berrekingo zaien erabakiko du, eta ez da inola ere beharrezkoa izango ekimena berriz baliatzea».

Eusko Legebiltzarraren Erregelamenduaren 130. artikuluaren arabera, argi geratzen da Legebiltzarraren agintaldia desegiten bada edo denboraren poderioz iraungitzen bada orobat iraungita geratzen direla erakunde horretan izapidetzen ari diren gainerako ekimen guztiak, baita, beraz, Eusko Jaurlaritzak Jaurlaritzari buruzko Legearen 16. eta 18.a) artikuluek aitortzen dioten legegintza-ekimenerako ahala baliatuz bidalitako lege-aurreproiektu guztiak ere, salbu eta goian aipaturiko lege-proposamenak, legegintzako herri-ekimenaren ondoriozkoak.

Alabaina, komeni da ohartzea iraungipenak ez duela esan nahi ekimen horiek errepikatu ezin direnik; hau da, ekimenaren titularrak berak berriro aurkez ditzake ekimen horiek, aurreko aldiko termino berberetan. Jada sendotuta dagoen doktrinaren arabera, «*iraungi*» prozedurak iraungitzen dira eta «*preskribatu*» eskubideak preskribatzen dira, aldi bakanetan izan ezik. Hala, prozedura bat iraungita egoteagatik bertan behera geratzen denean, baliatu nahi izan den eskubidea berriro balia daiteke beste prozedura batean, eskubidea preskribatu gabe dagoen heinean.

Hala, Euskal Legebiltzarraz bestelako legebiltzar baten desegiteaz edo iraungipenaz diharduela, Eusko Legebiltzarraren aipatutako Erregelamenduak salbuespen bat jartzen du bere 131. artikuluan iraungipen-mandatu orokor horretarako, eta Legebiltzarrak Batzar Nagusietan aurkezturiko lege-proposamenetarako duen ekimen-eskubidea errebindikatzen du honako hau adierazten duenean:

«Eusko Legebiltzarrak aurkeztutako lege-proposamen baten tramitazioa Gorte Nagusietan iraungitzen bada, edo Eusko Legebiltzarraren legegintzaldia lege-proposamena defenditu aurretik amaitzen bada, ekimena besterik gabe berriro aurkeztea eta ekimenaren aldezpena egingo duten legebiltzarkideak izendatzea edo berrestea erabaki ahal izango du Osoko Bilkurak, gehiengo soilez, bi legebiltzar-taldek edo legebiltzarkideen bostenak proposatuta.

Artikulu hori, alabaina, erreferentziatzat har dezakegu, *mutatis mutandi*, Eusko Legebiltzarrean aurkezturiko ekimenen errepikapenaren onarpenari dagokionez; izan ere, nabarmena da aipatu dugun Eusko Legebiltzarraren Erregelamenduaren artikulu hori ia literalki datorrela bat, adibidez, Bizkaiko Batzar Nagusien Erregelamenduaren 112. artikuluarekin. Hona zer dioen artikulu horrek:

«112. artikulua. Eusko Legebiltzarrean aurkeztutako proposamenak iraungitea

Eusko Legebiltzarrak aurkeztutako lege-proposamen baten tramitazioa Gorte Nagusietan iraungitzen bada, edo Eusko Legebiltzarraren legegintzaldia lege-proposamena defenditu aurretik amaitzen bada, ekimena besterik gabe berriro aurkeztea eta ekimenaren aldezpena egingo duten legebiltzarkideak izendatzea edo berrestea erabaki ahal izango du Osoko Bilkurak, gehiengo soilez, bi legebiltzar-taldek edo legebiltzarkideen bostenak proposatuta».

Gipuzkoako eta Arabako Batzar Nagusien erregelamenduetan, berriz, ez da aurreikusi ekimena errepikatzeko aukera emango lukeen gehiengo murriztu bat gaitzea, baina ulertu behar da ezerk ez duela eragozten Euskal Legebiltzarrean iraungitako ekimena errepikatzea hauteskunde berrien ostean eratutako legebiltzar berrian aurretiko onarpenean eskatzen zen gehiengo berberarekin.

Eta era berean ondoriozta daiteke ezen, printzipioz, ez dagoela inongo zalantzarik, betiere eremu parlamentarioan, Eusko Jaurlaritza berriak gaitasun osoa duela, legegintzako

ekimenerako eskubidearen jabe denez, hauteskunde-prozesutik sortutako legebiltzar berriaren aurrean errepikatzeko aurreko Jaurlaritzak onartutako ekimenak, lehengo baldintza berberetan, ekimen bat iraungi arren ez baita iraungitzen Jaurlaritzak hura aurkezteko duen eskubidea.

Beraz, txosten honen helburua da aztertzea ea zer efektu izan lezaketen, Eusko Jaurlaritzak dena delako lege-aurreproiektuak aurkezteko abiarazitako administrazio-prozeduretan, Legebiltzarra desegiteak eta horren ondorioz prozedura parlamentarioak iraungitzeak; betiere kontuan izanik, zuzenbide parlamentarioaren ikuspuntutik egindako lehen hurbilketa honetan argi geratu denez, indarreko ordenamenduaren arabera argi dagoela Legebiltzarra desegiteak berekin dakarrela, beti eta kasu guztietan, aurretik aurkezturiko proiektuak iraungitzea eta, ondorioz, proiektuak berriro aurkeztu behar direla Gobernuaren legegintza-ekimenaren eskubidea berriro baliatuz. Alegia, Jaurlaritzako edo Administrazioko izapidetzeaz eta horren espedienteaz bakarrik arduratu behar du, alde batera utzita izapidetze parlamentarioa eta dagokion espedientea iraungi izana.

3. XEDAPENAK EGITEKO PROZEDURAREN IZAERA BEREZIA, PROZEDURA HORI LEGE-AURREPROIEKTUEI APLIKATZEN ZAIENEAN

Aurreko horretatik atera behar da ezen planteatu zaigun galderari erantzuna emateko abiapunturik egokiena dela Jaurlaritzaren barruan sortutako *"lege-aurreproiektu"* horien prozeduraren exegesia aztertzea, haiek onartu eta *"lege-proiektu"* eran Legebiltzarrera igorri aurreko prozedurarena alegia, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/2003 Legearen babesean, batik bat (hemendik aurrera XOEPL). Azterketan, sartu behar dira 8.-11. bitarteko artikuluetan aipatutako nahitaezko izapide guztiak, zeinaren buruan Gobernu Kontseiluak aintzat hartzen baitu aurreproiektua, eta erabakitzen baitu azken onarpena ematea edo ez ematea, testu beraren 13. artikuluaren arabera. Eta horrela da, zioen azalpenean adierazten den bezala, «*legeak egiteko orduan, berez legegintza-ekimena denaren aurreko fasea baino ez delako sartzen administrazio-prozeduraren baitan; izan ere, Eusko Legebiltzarraren Erregelamenduak arautzen du berez legegintza-ekimena dena»*.

Hori gorabehera, amaitu edo iraungitako prozedura parlamentarioarekiko egiten ari garen bereizketa garbia dela-eta legezko eskakizunen azterketa honetan Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak sendo ezarritako doktrinari jarraitu behar diogu, zeren eta «*Batzordeak lege-aurreproiektuak egiteko prozedurak aztertzean, aldatu egiten baita haren langintza aztertutako araua legea edo erregelamendua denean, XOEPL berak adierazten duen moduan*» (129/2015 Irizpena, EAEko Sektore Publikoaren gardentasunerako, herritarren parte hartzerako eta gobernu onerako lege-aurreproiektuaren gainekoa; 55. paragrafoa). Erregelamenduak egiteko ekimenekiko diferentziak, ardura digun gaian, ezinbesteko malgutasuna eta izaera nabarmenki material eta antiformalista eransten dizkio lege-aurreproiektuak egiteko prozeduraren azterketari. Izan ere, «*Legebiltzarrean hedatzen da bere zabalean legegintza-prozedura, eta Konstituzioak (EK), Euskal Autonomia Erkidegoaren Estatutuak (EAEE) edo, batzuetan, lege organikoek lege-proiektua onartzeko baldintzak ezartzen dituzten berariazko kasuetan izan ezik, lege-proiektuek bete behar duten baldintza bakarra da beharrezko aurrekariekin batera bidaltzea Legebiltzarrera, Legebiltzarrak bere iritzia eman eta erabakia hartu ahal izan dezan; gutxienez ere, memoria orokorra, finantzaketari buruzko eranskina eta kontrol ekonomikoko txostena (aurrekontuari karga dakarkioten proiektuetan), kontsulta-organo honen irizpena eta legeriaren arabera nahitaezko diren beste txostenak (Jaurlaritzaren Legearen 57. artikulua, eta Eusko Legebiltzarreko Erregelamenduaren 133.2. artikulua)».*Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioaren

Legearen aurreproiektua egitea (120/2014 Irizpena, EAEko Herri Administrazioaren Legearen aurreproiektuari buruzkoa; 85. paragrafoa).

Lege-aurreproiektuen izaera berezia dela-eta, agian nahitaezko txosten horiek ere ez lirateke beharrezkoak izango. Konstituzio Auzitegiak, uztailaren 29ko 108/1986 Epaian, Botere Judizialaren Lege Organikoa aldatzeko Lege Organikoaren proiektua Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren nahitaezko txostenik gabe aurkeztu zela-eta jarritako errekurtsoa ezetsi zuen, honako hau iritzita: "aurrekari jakin baten faltak garrantzia izango du baldin eta erabakia hartzeko behar duten judizio-elementuren bat ukatzen bazaie ganberei, baina kasu honetan, ondorioa, zeina seguru asko berehala ezagutuko baitzen, salatu egin behar zen ganberen aurrean, eta errekurtsogileek ez dute behin ere alegatu horrela gertatu zenik. Salaketarik izan ez denez, ondorioztatu behar da ganberek ez zutela uste izan txosten horren beharra zutenik beren erabakia hartzeko judizio-elementu gisa. Auzitegi honek ezin du esku hartu parlamentariek judizio-elementu bati eman zioten garrantziaren balorazioan". Geroago doktrina bera aplikatzen du, Gobernuak ez lege-proiektuaren zioen azalpenik ez azalpen-memoriarik Kongresura igorri ez izanari buruz. Aurrekari horiek igorri ziren, baina berandu, errekurtsogileen iritziz. Igorri zein ez, hau dio Goi Auzitegiak: "Aipatutako akatsak garrantzia izango luke baldin eta Kongresuko diputatuen edo talde parlamentarioen eskubideen kalterako izan balitz, baina, benetan akatsik izan bazen, haiek horren jakitun izan ziren erabat, eta ez zuten protestatu. Pentsatu behar da, beraz, ukitutakoek ez zutela beren eskubideen urratzerik sumatu, eta, akatsik izan bazen, Kongresuak berak baliozkotu zuela. Hori dela-eta, auzitegi honek ezin du aztertu akatsik izan ote zen, edota, izanez gero, garrantzizkoa izan ote zen". Beste hitz batzuetan esanda, Auzitegiak uste du Kongresuak berak beharrezkotzat jotzen duena bakarrik jo daitekeela halakotzat.

Egia da, ordea, gure antolamenduan, Legebiltzarraren Erregelamenduaren 133.2 artikuluak nahitaezko txostenak aipatzen dituela berariaz, eta horrek Legebiltzarrari bidea ematen diola txosten horiek eskatzeko, igortzen zaizkion lege-proiektuak onartzeko baldintza gisa. Ildo horretatik, berriro jo behar dugu Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren Legera eta beraren exegesira, betiere irakurketa malgua eta finalista bat eginez.

Berriz ere Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari jarraituz, "*lege-proiektuak egiteko prozedura aztertzeko —azterketa materiala da, eta funtsean, finalista—, XOEPLaren jarraibideak sistematizatu ditu Batzordeak, eta honako fase hauek bereizi: (i) hasierako fasea, ekimena proposatu duen organoaren barrukoa, helburu nagusitzat duena hasierako testua finkatzea, horri eusten dioten arrazoiak finkatzea, eta izapideak egiteko behar den dokumentazioa egitea kasu bakoitzean; (ii) prozedura irekitzeko fasea, arauak eragin diezaiekeen sektore eta administrazioak aintzat hartuta; (iii) txostenak —nahitaezkoak eta aukerakoak— egiteko fasea; eta (iv) amaierako fasea: ekimena bultzatu duen organoak, prozedura-iter guztia ebaluatuta, behin betiko testua finkatu, eta azken dokumentuak —justifikazio-memoria eta memoria ekonomikoa—*" (129/2015 Irizpena, EAEko Sektore Publikoaren gardentasunerako, herritarren parte hartzerako eta gobernu onerako lege-aurreproiektuaren gainekoa; 56. paragrafoa).

Bai Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak bai Lege Garapen eta Arau Kontrolerako Zuzendaritza honek berariaz iritzi izan diote (hori bai, erregelamenduzko arauak egiteko ekimenak izapidetzeari buruzko irizpenetan, gehienbat) legegintzaldi- eta gobernu-aldaketak berez ez dakarrela inondik inora arauak egiteko prozedurak iraungitzea, ezta prozedura horien barruan egindako izapideak baliogabetzea ere. Hain zuzen ere, ohiko jokabidea izan da, bai Lege Garapen eta Arau Kontrolerako Zuzendaritza honek bai Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak balidatua, aurreko sailburuak hasitako izapideak ontzat eman eta besterik gabe haiek sartzea hurrengo legegintzaldiko sailburuak Gobernu Kontseiluari onarpenerako aurkezten dion

espedientean. Hala, legegintzaldi batean hasitako izapidetzea hurrengo legegintzaldian egiten jarraitu izan da etenik gabe (gure aholku-organo gorenaren irizpen guztien adibide gisa honako hauek aipa ditzakegu: 203/2009 Irizpena, Euskal Autonomia Erkidegoko ardogileen alorrerako komunitateko laguntza-neurriak garatu eta aplikatzeko Dekretuaren proiektuari buruzkoa, 2. eta 37. paragrafoak; 217/2009 Irizpena, Fruta eta barazkien alorreko arautegi komunitarioa EAEn garatzeko eta aplikatzeko eta alor horren inguruko laguntzen erregimena arautzeko Dekretuaren proiektuari buruzkoa, 1. eta 30. paragrafoak; 64/2013 Irizpena, "Dekretu-proiektua, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeari buruzkoa", 2. eta 34. paragrafoak).

Bestela esanda, izapidetze-egintza horien baliozkotasun juridikoak ez du zerikusirik egintzok Legebiltzarra desegin edo Jaurlaritza berria eratu aurrekoak edo ostekoak izatearekin, zeren eta Administrazioa bat bakarra baita, eta nortasun juridiko bakarra baitu bere egitura osorako eta bere eginkizun guztietarako, Administrazioaren titularra den gobernua aldatu arren (Jaurlaritzari buruzko Legearen 53. artikulua, eta urriaren 1eko 40/2015 Legearen —Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko Legea— 3.4 artikulua).

Hertsiki, ez dago aurreko legegintzaldian egindako izapideak «bihurtzeko», «mantentzeko» edo «baliozkotzeko» berariazko egintzen beharrik —figura horiek aurreikusten ditu urriaren 1eko 39/2015 Legeak (administrazio publikoen administrazio-prozedura erkidearenak), hurrenez hurren 50., 51. eta 52. artikuluetan, zenbait egintzaren akatsak zuzentzeko neurri gisa—, xedapenak egiteko prozeduraren barruko izapide horiek ez baitira inoiz deusez bihurtzen eta ez dutelako baliorik galtzen, nahiz eta legingintzaldia aldatu (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 47, 48 eta 49. artikuluak). Hori horrela da, nahiz eta figura horien azpian dagoen prozesu-ekonomiaren logika Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren Legean dagoena bera izan, lege horrek aintzat hartzen baitu aurretik egindako jarduketen baliozkotasunari eutsi behar zaiola ahal den neurrian (Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren Legearen 4.2 artikulua).

Nolanahi ere, erregelamenduzko xedapenei dagokienez unean uneko sailburuordeari dagokio, soil-soilik, prozeduraren fase ezberdinak aurrera eramateko izapideak egitea, dela prozedurak jarrai dezala aginduz, dela Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren Legean eta Jaurlaritzari buruzko Legean markatutako prozedura-mugarrietan behar diren izapideak eginez (abiarazte-agindua, aurretiazko onarpena emateko agindua, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari irizpena eskatzeko agindua, arauaren behin betiko testua proposatzea Gobernu Kontseiluari…). Tramitazioa aurrera eramateko egintza horiek berez adierazten dute aurretik egindako izapideak onartzen direla eta horien eraginkortasun formala eta materiala baloratzen dela, ez bakarrik espedientearen betetze formalari lotuta, baizik eta haien benetako erabilgarritasuna ere kontuan hartuta, organo erabakitzaileak judizio-elementu egokiak izan ditzan araua unean uneko egoerari egokitzeko, bai erabakitzailea Jaurlaritza denean, erregelamenduzko arauen kasuan, bai Legebiltzarra denean, lege-proiektuen kasuan.

Horrenbestez, faktore zirkunstantzial guztiak hartu behar dira kontuan erabaki ahal izateko ea egokitzat jotzen den aurreko prozedura bat izapidetzen jarraitzea, prozedurari berriro hasieratik ekin beharrik ez izateko edo egindako izapide guztiak ontzat eman ahal izateko. Faktore horietako bat izan daiteke araua lehendik ere izapidetuta egotea eta eginda dauden jarduketak bikoiztu nahi ez izatea, prozedura bizkortze aldera; edo are, behar bezala egiaztatutako eta presako arrazoiengatik, egin gabe dagoen izapideren bat egin gabe utzi nahi izatea, non eta ez duen hura egiteko agintzen lege-mailako arauren batek (Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren 129/2015 Irizpena, Euskal sektore publikoaren gardentasunaren, herritarren parte-hartzearen eta gobernu onaren Legearen aurreproiektuari buruzkoa, 55., 59.,

63. eta 85. paragrafoak), edo bien bitartean arau- edo gizarte-aldaketa garrantzitsuren bat gertatu ote den, behinola egindako izapideek gaurkotasuna edo informazio-balioa galtzea eragin duena. Bada, *«lege-aurreproiektuak eta -proiektuak»* aipatzen ditugunean —zeinek inplikatzen baitute Legebiltzarrera igortzea prestatzeko prozeduraren osteko fase erantsi gisa—, prozedura bultzatzeko egintzei dagokien balorazio hori egin behar dute bai sailburuak (prozedura bultzatzeko egintzen erantzukizuna izango du aurretiazko prozeduran zehar eta baita haiek Gobernu Kontseiluari aurkezteko erabakia hartzerakoan ere), bai Jaurlaritzak berak, legegintzako ekimenaren titularra baita Legebiltzarraren aurrean (balorazio hori berori egin beharko du hura onartzeko orduan eta nahitaezko agiriekin batera legegintzako organoari noiz igorri behar zaion erabakitzeko orduan).

Edozein kasutan, orain arte esandakoa aplikagarria da proiektua Legebiltzarrera igorri aurreko administrazio-prozedurako egintza guztietarako (abiarazte-agindutik hasi eta Gobernu Kontseiluaren onarpenerainoko egintza guztiak, bi horiek barne). Denetan, azken horretan ere bai, predikagarria da administrazio-egintzen baliozkotasun juridikoa mantentzearen printzipioa, eta haien indar materiala bakarrik baloratu behar da, aurreko paragrafoan esandakoaren ildotik.

Balorazio hori egiteko orduan, garrantzi handia izan behar du, halaber, administrazio-izapidetzea errazteak, prestatze-prozesuaren xede diren helburu materialak alde batera utzi gabe; izan ere, araua prestatzeko prozeduran ere aplika daitezke prozedura horren ondoriozko arauei aplika dakizkiekeen erregulazio onaren printzipioak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 129. artikuluan jasotako hauek: «Legegintza-ekimena eta erregelamenduak egiteko ahala baliatzean, administrazio publikoek printzipio hauen arabera jokatu behar dute: premia, efikazia, proportzionaltasuna, segurtasun juridikoa, gardentasuna eta efizientzia».

4. AHOLKU BATZORDE JURIDIKOAREN IRIZPENA ETA KONTROL EKONOMIKOKO BULEGOAREN TXOSTENA, BERARIAZKO IZAPIDE GISA.

Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren Legearen bigarren xedapen gehigarriak, arrazoi hertsiki historikoengatik (azaroaren 24ko 9/2004 Legea, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzkoa, promulgatu baino urtebete lehenago onartu zelako), erreferentzia gisa hartzen du apirilaren 13ko 187/1999 Dekretua, Eusko Jaurlaritzaren Aholku Batzorde Juridikoa sortu eta arautzen duena. Hala ere, izatez Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko Legea da (zehazki, beraren 3.1.a artikulua), Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren Legetik kanpo baina hark egindako erreferentziaz, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren irizpenaren nahitaezkotasunaren gaia arautzen duena.

Aipatutako artikuluaren arabera, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari «*kontsultatu beharreko gaiak*» dira «*lege-aurreproiektuak, horien edukia eta helburua direnak direla ere*…» (Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontuei buruzkoak eta baliabideen banaketarako zein foru-aldundien ekarpenak zehazteko metodologia ezartzen dutenak izan ezik). Honaino, gainerako izapideei buruz orain arte esandakoa aholku-organo gorenaren irizpenari ere aplikatu ahalko litzaioke; irizpen horren baliozkotasun juridikoa ez da aldatzen gobernu-aldaketaren ondorioz edo Legebiltzarra desegin eta espediente parlamentarioak iraungitzearen ondorioz.

Hala ere, jurisprudentzia konstituzionalak berretsitako izaera berezia du irizpen horrek, eta horregatik gure txostenean tarte bat egin behar diogu beren-beregi. Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak berak Eusko Jaurlaritzaren Aholku Batzorde Juridikoaren Legearen aurreproiektuari buruz emandako 084/2003 Irizpenean (25. paragrafoa) azaldu zuenez, jurisprudentzia

konstituzionalak Espainiako Konstituzioaren 107. artikuluaz egin duen interpretazioan, «*Konstituzio Auzitegiaren iritziz, "aholku-funtzio gorena" da nolabait konstituzionalizatu dena, ez organoa (Estatu Kontseilua). Administrazio aktiboarentzako aholkularitza gorena da, beraz, artikulu horren bitartez konstituzio-mailako tresna bihurtzen dena, «interes orokorraren eta legezkotasun objektiboaren berme garrantzi handiko, eta, beraz, administrazio-prozedura batean alderdi direnen bidezko eskubide eta interesena ere».* Auzitegi horrek dioenez, *«…oso funtzio kualifikatua da, administrazio publikoen araubide juridikoaren oinarrizko arauaren kategoriaren barruan edo administrazio-prozedura erkidearen barruan sar daitekeena" (Espainiako Konstituzioaren 149.1.18 artikulua)»*.

Izapidearen berezitasun eta kualifikazio horiexek justifikatzen dute Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren irizpenak (Kontrol Ekonomikoko Bulegoak arauen kontrol ekonomikorako ematen duen aurretiazko txostenarekin batera) berariazko aipamena merezi izatea Legebiltzarraren Erregelamenduaren 133. artikuluan, Legebiltzarrera igortzen diren lege-proiektu guztiei erantsi beharreko dokumentuen artean. Eta haiei zor zaie, halaber, ekainaren 2ko 8/2016 Legeak (ekainaren 30eko 7/1981 Legea, Jaurlaritzari buruzkoa, aldatzen duena) Jaurlaritzari buruzko Legean aipamen bat erantsi izana, lege horren 56. eta 57. artikuluei honako testu hau ematean:

> *56. artikulua*
>
> *1. Jaurlaritzak, Aholku Batzorde Juridikoari igorri behar zaizkion lege-aurreproiektuak eta dekretu-proiektuak egiteko hasierako fasean, xedapenaren testua bakarrik igorriko dio Eusko Legebiltzarrari, behin prozedura hasteko agindua eman duen organoaren aldez aurreko onespena izanda.*
>
> *2. Era berean, Aholku Batzorde Juridikoari igortzen zaion dokumentazio bera, aldi berean, Eusko Legebiltzarrari ere igorriko zaio, legebiltzar-taldeek dokumentazio hori ezagut dezaten.*
>
> *3. Jaurlaritzak erabaki beharreko lege-aurreproiektuak eta dekretu-proiektuak Jaurlaritzako Idazkariari bidaliko zaizkio, bana ditzan. Doazkien sailek Jaurlaritzak berak ezarritako moduan edukiarekin ados daudela adierazi ondoren, gai-zerrendan sartuko dira. Adostasunik ez badago edo adostasun hori baldintzatua bada, lehendakariari dagokio erabakitzea gaia Kontseiluaren eztabaidetan sartu ala ez.*
>
> *57. artikulua*
>
> *1. Eusko Legebiltzarrari aurkezten zaizkion lege-proiektuekin batera, Aholku Batzorde Juridikoaren txostena ere igorriko da eta, halakorik bada, txosten horretara egokitzeko oroitidazkia.*
>
> *2. Lege-proiektuek aurrekonturako kargarik badakarte, dagokion finantza-eranskina izango dute. Eranskin hori Legebiltzarraren Erregelamenduak lege-proiektuei buruz xedatutakoaren arabera eztabaidatu eta bozkatuko da.*

Galdetu liteke, beraz, ea, artikulu horien ondorioz, Legebiltzarrari jakinarazpena egiteko betebehar berezirik ba ote dagoen, aurreko legegintzaldietan sortutako lege-proiektuak izapidetzeari berriro ekin nahi zaionean. Lehenengo eta behin, bereizi egin behar da (i) lehendik hasita baina oraindik testuaren aurretiazko onarpenik gabe dagoen izapidetze bati jarraipena emateaz ari garen (hala izanez gero, Jaurlaritzari buruzko Legearen 56.1 artikuluan eskatzen den jakinarazpena egin beharko da), edo, bestela, prozedura horretan Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari irizpena eskatzeko izapidea oraindik bete gabe dagoen (hala izanez gero, Jaurlaritzari buruzko Legearen 56.2 artikuluan aipatutako guztia igorri beharko zaio Legebiltzarrari); edo, aldiz, (ii) dena delako aurreproiektua edo proiektua soil-soilik Gobernu Kontseiluaren onarpenaren zain dagoen, edo organo horrek Legebiltzarrera igortzea erabaki zain, dela lehenengo aldiz, dela aldez aurreko beste igortze-erabaki bat errepikatuta (hala izanez gero,

Jaurlaritzari buruzko 56.3 eta 57. artikuluetan eta Legebiltzarraren Erregelamenduaren 133. artikuluan aurreikusitako kasuetan egongo gara).

Halaber, dena delako aurreproiektuak edo proiektuak Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren irizpena jaso badu, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko Legearen 29. artikuluan ezarritakoa ikusirik, galdetu liteke, baita ere, ea nahikoa den, aurreko kasuetan, lehengo legegintzaldi batean emandako irizpena eranstea, edo, aldiz, beste irizpen bat eskatu behar den.

Artikulu horrek honako hau dio: «Irizpena eman eta gero, irizpenaren aztergaian garrantzizko aldaketak egiten badira eta, ondorioz, batzordeak egindako iradokizun edo proposamenekin bat ez datozen edo horiek gainditzen dituzten eduki berriak jasotzen badira, aldaketa horiei buruzko kontsulta berria egin beharra dago». Arauaren testutik ondorioztatu daiteke, beraz, dagoen irizpena aurreko gobernu batentzat egina izan zein ez, **beste azterketa bat egitea bidezkoa izango dela baldin eta «funtsezko aldaketak» gertatu badira Gobernu Kontseiluari onarpenerako edo igorpenerako berriro aurkeztuko zaion lege-proiektuaren proposamenean**. Funtsezko aldaketen kontzeptu juridiko lausoa zehazteko, artikuluaren testuari jarraituz eta Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak berak adierazi izan duen bezala, aldaketa horiek aurreko irizpenarekin duten loturari erreparatu beharko zaio.

Horri dagokionez, garrantzizkoa da Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren beraren doktrinara jotzea, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko Legearen 29. artikuluari eman behar zaion interpretazioa dela-eta. Ez onartzeko bere erabakietan eta irizpenetan Batzordeak irmo ezarritako doktrina da. Guztien adibide gisa, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak orain dela gutxi, 2017ko apirilaren 26ko osoko bilkuran, irizpen-eskaera bati ezetza emateko hartu duen 4/2017 Erabakian esandakoa ekarri dugu txosten honetara:

> *7. Edo, bestela esanda, 10/2000 Irizpenean adierazitakoaren ildotik, Batzordeak berriz aztertu beharko du gaia, baldin eta lantze berri horretatik ateratzen bada aurreko esku-hartzean aztertutako elementu edo alderdi substantiboez bestelakorik badela, eta duten garrantziagatik, beste azterketa bat eskatzen dutela: orduan bakarrik, eta ez bestela.*
>
> *8. Doktrina hori bat dator Auzitegi Gorenak Estatu Kontseiluari buruz ezarritakoarekin, eta, beraz, erabat aplikagarria da batzorde honek esku har dezakeen kasuetan.*
>
> *9. Doktrina horren arabera, laburbilduta, bidezkoa da beste kontsulta bat egitea baldin eta "...Estatu Kontseiluaren irizpenaren ondoren egindako berrikuntzak ez badira hark iradokiak, ez badute zerikusirik kontsultaren nondik-norakoekin, eta, gainera, funtsezko garrantzia badute" (Auzitegi Gorenaren 1993ko maiatzaren 27ko Epaia—RJ 1993\102040—).*
>
> *10. Geroko erabaki batzuetan zehaztu egin dira kasuak. Hala, Auzitegi Gorenaren 2009ko martxoaren 10eko Epaiak (RJ\2009\5110) azpimarratzen duenez, "ez da beharrezkoa Estatu Kontseiluari beste kontsulta bat egitea testuari ukituak edo funtsezkoak ez diren aldaketak egiten zaizkionean (...), ez eta proiektuaren eta behin betiko testuaren arteko desadostasunak lantze-prozeduraren ondorio logikoak direnean, hainbat organok ematen baitute txostena eta horrek aldaketak eragin baititzake azkenean onartzen den xedapenean; gainera, Salaren doktrinak berak azpimarratu izan du interpretazio funtzional eta teleologikoa egin behar dela xedapen orokorrak egiteko ezarritako prozedura-bermeez; xedapenok ez ditu justifikatzen haiek egitearen formalismo hutsak, xedeak baino, eta horren balorazioan aintzat hartu behar dira dena delako xedapen orokorraren berezitasunak (...)."*
>
> *11. Auzitegi Gorenaren 2009ko martxoaren 10eko Epaiak gogora dakar ezen, Auzitegi Gorenaren beraren jurisprudentziaren arabera (Auzitegi Gorenaren 2006ko martxoaren 8ko Epaia), xedapen orokor baten*

behin betiko testuan egindako aldaketak funtsezkoak ez direnean ez dela beharrezkoa berriro entzunaldia ematea xedapenaren helburuarekin zuzenean lotutako interes legitimoak ordezkatzen dituzten elkarte, korporazio edo erakundeei edo beste txosten edo irizpen bat eskatzea Estatu Kontseiluari,"beste arrazoi batzuen artean, haien iritzia ez delako loteslea; hala, baldin eta, aldaketari bai ikuspegi erlatibotik begiratuta, irizpenpeko testuak dakarren berrikuntzagatik, bai ikuspegi absolututik begiratuta, bere garrantzi intrintsekoagatik, hark ez badu funtsezko aldaketarik eragiten aldez aurretik entzunaldiaren edo txostenaren izapideak bete dituen antolamenduan, horien faltak ez du ekarriko egindako erreformaren erabateko deuseztasunik, xedapenaren behin betiko testua egiteko ahalmena duenak kontuan hartu baitu kontsultatutako entitate, korporazio, elkarte eta erakundeen irizpidea edo jakintza, eta horixe da azken batean lortu nahi den helburua, (...) erregelamenduak egiteko prozedura bat ezartzen denean (...)".

12. Eta Auzitegi Gorenaren 2001eko urtarrilaren 31ko Epaia ere gogorarazten du, 1993ko maiatzaren 27ko Epaiaren erreferentziaz, han egindako aldaketak baloratuz, zeinek ez baitzuten Estatu Kontseiluaren beste irizpen bat eskatzen, "bateragarri egin behar baita irizpen hori amaierakoa izatea, aurretik planteatutako auzi guztien eta emandako berariazko txosten guztien laburpen-judizio gisakoa, Gobernuaren erregelamendu-ahala egikaritzearekin (...). Gobernuak ahal hori galduko luke baldin eta irizpen horri hitzez hitz jarraitu beharko balio behin betiko testua egiterakoan, zeren eta irizpenerako igorritako proiektuan jaso gabeko gaiak arautuko balira edo horien antolamendua guztiz edo nabarmen desberdina gertatuko balitz, Estatu Kontseiluak berak halakorik iradoki gabe, orduan soilik eskatu beharko bailitzateke horri buruzko beste txosten bat. Izan ere, azken idazketan, erregelamendu-ahalaren titularrak egokitzat jotzen dituen aldaketak egin ditzake Estatu Kontseiluari igorritako testuan, eta horretarako ez du beste mugarik izango gorago adierazitakoa baino (...)".

13. Aurreko doktrina horrek indar betean dirau, Auzitegi Gorenaren 2016ko abenduaren 22ko Epaia (RJ 2017/106) irakurrita ondorioztatzen denez.

14. Bidezkoa da, beraz, kontsultatutako proiektuaren testua aztertzea, berrikuntzen eta aurreko irizpeneko gogoeten arteko loturaren irizpideari jarraituz; hau da, aztertu behar da ea berrikuntzak Batzordearen irizpeneko iradokizunen ondorio diren edo, irizpen horrekin loturarik izan gabe, funtsezko garrantzia duten, nahitaezko beste esku-hartze bat egiteko bezainbestekoa».

Halaber, Legebiltzarraren Erregelamenduaren 133. artikuluan berariaz aipatutako txostena denez gero, atal honetan kontuan hartu behar da arauen kontrol ekonomikoko txostena, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak «lege-aurreproiektu»ei egin behar diena, ekainaren 30eko 14/1994 Legearen (Euskal Autonomia Erkidegoko kontrol ekonomikoari eta kontabilitateari buruzkoa) 25.1 artikuluan xedatutakoaren arabera.

Txosten hori ere, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak egin behar duena baino lehenagokoa izan arren (EAEko Kontrol Ekonomikoari eta Kontabilitateari buruzko Legearen 27.1 artikulua), garrantzi berezikoa da. Izan ere, «lege-aurreproiektuek» duten edukia edo jarduera ekonomikoan izan dezaketen eragina zehaztu beharra dela-eta, baliteke txosten hori nahitaezkoa izatea (urriaren 31ko 464/1995 Dekretua, 14/1994 Legearen Erregelamendua onartzen duena; 41. artikulua) edo proiektuaren jendaurreko informazioa eta entzunaldia beharrezkoak izatea (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 133.4 artikulua).

Arauen kontrol ekonomikoko txosten horrek zerikusi gehiago du testuinguruarekin *«lege-proiektu»*aren testuarekin baino, hauxe besterik ez baitu helburu: erabakitzea ea bertan aurreikusitako xedapenek zuzenean nahiz zeharka eragin edo ondoriorik sortuko duten EAEko Ogasun Nagusiari dagozkion gaietan, aurrekontu-araubidean eta gastu zein diru-sarrera publikoak gauzatzeko araubidean; batez ere, irizpena eman behar da *«arauak edo xedapenak*

aldian-aldian indarrean dagoen Euskadiko Diruzaintza Nagusiaren jaurbidean, hau da, ondarearen, kontabilitatearen, kontratazioaren, berezko zergen, zorren edo bermeak emateko jaurbidean duen eraginaz» (EAEko Kontrol Ekonomikoari eta Kontabilitateari buruzko Legearen 26.1.b artikulua) edo*«proposatutako arauaren edo xedapenaren finantza-arrazoizkotasunaz, modu zenbakarrian»* (EAEko Kontrol Ekonomikoari eta Kontabilitateari buruzko Legearen 26.1.b artikulua); azken alderdi horrek, beste ñabardura askoren artean, «Administrazio Publikoen Finantza Egonkortasuna» izeneko araudian du eragina.

Egia da nahitaezko txosten hori kontrakoa eta eragozlea izanda ere «lege-aurreproiektuak» bere prozeduran aurrera egin lezakeela harik eta sailburu eskudunak hura Gobernu Kontseiluari aurkeztu arte. Azken horrek proiektua onartzeko edo baztertzeko askatasun osoa du, txosten honetan zehar adierazi dugun moduan.

Txosten honen bidez erantzun nahi den funtsezko galderari helduko diogu berriz: beharrezkoa al da Kontrol Ekonomikoko Bulegoak berriro txostena ematea Gobernu Kontseiluak jada onetsia duen «lege-proiektu» bati buruz, albora utzita zer erabaki zuen Gobernu Kontseiluak, proiektua Legebiltzarrera igortzea edo ez? Kontrol Ekonomikoko Bulegoak behinola emandako txostena nahikoa ote liteke hura Legebiltzarrera igorri eta gero espediente parlamentarioa iraungi bada?

Arauen kontrol ekonomiko horri buruzko araudiak ez du berariaz ezer xedatzen beste txosten baten beharrari buruz. Aipatzen ditu, soilik, EAEko Kontrol Ekonomikoari eta Kontabilitateari buruzko 27. artikuluko 1. zenbakiaren azkenean aipatu ere, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak irizpena egin behar dien arau-proiektuak, eta, batzorde hori izango denez erabakitzen azkena, «… *Kontrol Ekonomikoko Bulegoari jakinarazi beharko zaizkio organo aholku-emaile horren irizpenak jasotako iradokizun eta proposamenen ondorioz lege-aurreproiektuetan eta arau-proiektuetan egin daitezen aldaketak, onartu baino lehen».*

Alegia, egindako aldaketa «komunikatu» besterik ez da egin behar. Ez dago beste irizpen bat formalizatu beharrik, nahiz eta, hori gorabehera, Ogasun gaietan eskumena duen sailburuak aldaketen berri jaso, sailaren barruko bideetatik, eta Gobernu Kontseiluan bere gogoetak baliarazi.

Ondorioz, kontuan izanik edozein araudik ekonomian garrantzizko eragina izan dezakeela, txosten honen egileak uste du atal honetako goiko paragrafoetan azaldutakoari eutsi behar diola; hala, bada, (i) Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak ez badu bidezkotzat jotzen Gobernu Kontseiluak jada onetsitako lege-proiektu bat Legebiltzarrari berriro igortzeari buruz bere iritzia azaltzea, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak hori egiteak ere ez dirudi bidezkoa, eta (ii) erabakiko balitz Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak lege-proiektu horren gaineko iritzia azaldu behar duela, kasu horretan ere ez dirudi bidezkoa Kontrol Ekonomikoko Bulegoak bere iritzia azaltzeak, ezertan galarazi gabe haren iritzia jakinaraztea legezko ondorio egokietarako, bai eta aldaketak ere, halakorik egiten bada.

Hori guztia baldin eta lege-aurreproiektua Kontrol Ekonomikoko Bulegoari igortzeko betebeharra badago, izapidearen jakitun izan dadin eta eduki ekonomikoa badagoen ala ez balora dezan, bat etorriz 14/1994 Legearen Erregelamendua onartzen duen urriaren 31ko 464/1995 Dekretuaren 41.2 artikuluan ezarritakoarekin.

5. LEGE-AURREPROIEKTUEN ETA -PROIEKTUEN ARTEKO BEREIZKETA ETA LEGEBILTZARRERA IGORTZEKO EGINTZA

Jaurlaritzari buruzko Legearen arabera, sailburuen eskumena da Jaurlaritzari aurreproiektuak aurkeztea, eta horiek «*Jaurlaritzak lege-proiektu gisa onar ditzan proposatu*» behar dira (Jaurlaritzari buruzko Legearen 26.8 artikulua, Jaurlaritzari buruzko Legearen 55. artikuluarekin lotuta. Lege-aurreproiektuak «Gobernu *Kontseiluari aurkeztuko zaizkio, azter ditzan; aztertzen diren bilkuran bertan erabakiko du haiek behin betiko onartu edo ez, edo, bestela, azken idazketa egiteko kontuan hartu beharko diren irizpideak ezarriko ditu, bai eta, hala balegokio, behin betiko onartu bitarteko bidean egin beharreko jarduketak ere*» (Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren Legearen 13. artikulua). Bestalde, Jaurlaritzari dagokio «*Legebiltzarrera bidaltzeko lege-proiektuak onartzea edo baztertzea, Legebiltzarraren Erregelamenduak finkatutako baldintzetan*» (Jaurlaritzari buruzko Legearen 18.a artikulua).

Izan ere, bai lege-aurreproiektuek erregelamendu-ekimenen izapidetzearen aldean duten izaera berezia, bai Gobernu Kontseiluak nahitaez haiek aintzat hartu beharra, berezitasun gehigarriak dira lege-aurreproiektuak izapidetzean, eta horrela aitortzen du Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren Legeak berak, «*Xedapen bereziak*» izenburuko bere III. kapituluan sartzen baitu 13. artikulua. Zioen azalpenean adierazten du horren arrazoia: «*Legeen garrantzi berezia dela eta, lege-aurregitasmoak aztertzeko berariazko izapide bat ezarri da Gobernu Kontseiluarentzat. Horren helburua da legegintzako ekimena erabili behar duen organoak, artikuluka banatutako testu bat aurrean izanez, legea egiteko prozeduraren planifikazioa bideratzea eta haren ardura bere gain hartzea, ondorengo entzunaldi-, kontsulta- eta txosten-izapideek ekar ditzaketen emaitzak gorabehera».*

Hemen, berriz ere galdetu liteke zertan diren juridikoki ezberdin izapidetze administratiboaren xede izandako eta *«lege-proiektu»* gisa onartutako edo onartu gabeko *«lege-aurreproiektuak», batetik, eta* Legebiltzarrera igortzen diren «*lege-proiektu*» substantzialak, bestetik. Hasteko, argitu behar dugu txosten honetarako ez duela funtsezko garrantzirik *«aurreproiektu»*en eta *«proiektu»*en artean egin ohi den izen-bereizketak —gorago aipatu ditugun Jaurlaritzari buruzko Legearen artikulu horien arabera, badirudi EAEko antolamenduan *«aurreproiektu»* deitzen zaiela sailek egindako testuei, zeinak Jaurlaritzari proposamen gisa aurkezten baitzaizkio «*lege-proiektu*» eran onar daitezen eta lege-proiektu bihurtzen baitira aipatutako organoaren onarpena jasotzen dutenean—. Garrantzi eta funts handiagokoa da, ordea, honako hauek bereiztea: *«testua»*, bere prestatze administratiboaren fasean, harik eta Gobernu Kontseiluak onartzen duen arte, eta *«Legebiltzarrera igortzekoa den dokumentua»*, izapidetze parlamentarioaren xede bihurtuko dena behin betiko, Jaurlaritzak legegintzako ekimenerako ahala baliatzean.

Horri buruzko doktrina ugari dago, baina gaur egun —exegesi jasoagoak salbu— nahiko argigarria da Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 127. artikuluan «*Legegintza-ekimena eta erregelamenduak eta lege-mailako xedapenak emateko ahala*» izenburupean xedatutakoa:

> *«Nazioko gobernuak Konstituzioan aurreikusitako legegintza-ekimena baliatuko du, lege-aurreproiektuak prestatuz eta onetsiz eta gero lege-proiektuak Gorte Nagusietara igorriz.*
>
> *Autonomia-erkidegoetako gobernu-organoek Konstituzioan eta beren autonomia-estatutuetan ezarritako moduan baliatuko dute legegintza-ekimena. (...)»*

Nahiz eta artikulu horren lehenengo zatia kontsideratu daitekeen Estatuko Administrazio Orokorraren esparruan haren aplikazio esklusiboa aplikatzea aurreikusten duten manuen arabera (horregatik, ez litzateke EAEn aplikagarria Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen azken xedapenetatik lehenengoan ezarritako moduan), ez dago

kontraesanean, puntu horretan, Jaurlaritzari buruzko Legearekin. Alegia, gobernu-organoek bi fasetan egikaritzen dute legegintzako ekimena, zeina, kasu honetan, Eusko Jaurlaritzari esleitzen baitiote Jaurlaritzari buruzko Legearen 16. eta 18.a) artikuluek: lehenengo fasean, barrukoan, «*lege-aurreproiektuak eginez eta onartuz»,* eta gero, bigarren fasean, «*lege-proiektuak Eusko Legebiltzarrera bidaliz*».

Bi fase horiek —eta beren izapidetzeen emaitzak—, zalantzarik gabe, badute garrantzia, Jaurlaritzaren jardunaren bi aldeak islatzen dituztelako: batetik, zuzendaritza politikoko organoa da, eta, bestetik, Administrazio Publikoaren egiturako organo gorena.

Esan daiteke, bada, «*lege-aurreproiektu*» bat Administrazioaren barruko jardueraren emaitza dela; jarduera horrek diskrezionaltasun-irizpide nabarmenak ditu, baina programaziopean dago (arau-plangintza: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 132. artikulua) eta berariazko prozedura baten pean; horren faltak deuseztasun-akatsak sor ditzake —are bide jurisdikzionalean aurkaratzeko modukoak—. Gobernu Kontseiluak hura onartzeak (eta «lege-proiektu» bihurtu, Jaurlaritzari buruzko Legearen terminologian) jada amaierako egintza juridikoaren izaera ematen dio —Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren Legearen 13. artikulua—, eta une horretantxe buka litezke haren izapidetzea eta ondorioak.

«*Lege-aurreproiektu*»en azken xedea, noski, onartze soiletik edo Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren Legean araututako prozedura-ibilbidea bukatzetik harantzago doa. Hau da, onartua izatetik eta Gobernu Kontseiluko (edo haren Idazkaritzako) administrazio-zerbitzuetan «*onartutako lege-proiektu*» gisa egonean egotetik harantzago doa. Aldiz, asmoa da antolamendu juridikoa eraldatzea alderdi jakin batean —lege-aurreproiektuaren xedea eta helburua—, oinarritzat hartuta gizartearen eta zerbitzatu beharreko herritarren benetako eskakizunen arabera taxututako gobernu-programa bat.

Xede eraberritzaile horretarako lagungarria da «*lege-proiektua*» Legebiltzarrera igortzea, gaur egun Administrazio Zuzenbideko inongo arauren pean ez dagoen ahala erabiliz burutzen diren «*egintza politiko*» horietako bat, hain zuzen. Izan ere, proiektua Legebiltzarrera nola eta zein agirirekin batera igorri behar den zehazten duten manuak hain daude bi munduen arteko mugatik hurbil non ia-ia Zuzenbide Parlamentarioko manutzat jo daitezkeen (Jaurlaritzari buruzko Legearen 57. artikulua Legebiltzarraren Erregelamenduaren 133. artikuluaren korrelatibo gisa, Jaurlaritzari buruzko Legearen 58. artikulua prozedura parlamentarioaren beraren araudi gisa).

Ildo horretatik, igortzeko egintzak *plus* bat eransten dio Jaurlaritzak onartutako «*lege-proiektu*» jada perfektuari, helburu jasoago batekin, hots, gobernu-programan dagoen legegintza-programari edukia emateko helburuarekin, antolamendu juridikoak aitortutako legegintzako ekimenerako ahala baliatuz.

Gobernu Kontseiluak *«lege-proiektu»* bat Legebiltzarrari aurkezteko hartzen duen *«igorpen-erabaki»* horren izaera *«politikoa»* Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentzian berretsita dago. Izan ere, 1990eko martxoaren 15eko Epaian (RTC 1990, 45), LEGUINA VILLA jauna txostengilea zela, honako hau adierazi zuen Konstituzio Auzitegiak:

> *«… Gobernuaren eginkizunak Konstituzioaren 97. artikuluan aipatzen dira; ez daude Gobernuaren jarduketa guztiak Administrazio Zuzenbideari loturik. Dudarik gabe, adibidez, ez daude loturik beste organo konstituzional batzuekiko harremanekin zerikusia duten jarduketak; besteak beste, lege-proiektu bat edo antzekoren bat Gorteetara bidaltzeko erabakia. Espainiako Konstituzioaren 97. artikuluan esleitzen zaion zuzendaritza politikoko*

eginkizuna ere betetzen du Gobernuak Gorteen bitartez. Kontrol judizialaren pean dauden administrazio-jarduketen aldean bestelakoak dira Gobernuaren jarduketa horiek; mota horretakoak dira Gobernuari dagokion akzioaren alderdi bati edo besteari lehentasuna ematen dioten erabakiak, salbu eta lehentasun hori nahitaezkoa denean, legeek xedatutakoa betetzeko».

Auzitegi Gorenak ere ildo bereko adierazpenak egin ditu bere jurisprudentzian, funtsean Estatuko botereen arteko harremanei jarri badie ere arreta. Hala, legegintzako ekimena egikaritzeko eskaerari ezetza emateko edo ekimen hori egikaritu den kasuei buruzko epaiak eman ditu (Auzitegi Gorenaren 1990eko martxoaren 13ko Epaia [RJ 1990, 1938]; 1990eko urriaren 25ekoa [RJ 1990, 7972]; eta 1991ko abenduaren 10ekoa [RJ 1991, 9254]).

Hortik jada ondorio batzuk atera ditzakegu:

I. Lege-aurreproiektuen izapidetzeari ez dio eragiten, printzipioz, Legebiltzarra desegin eta prozedura parlamentarioak iraungitzeak. Ahal den neurrian, eta haren xede materialari kalterik egin gabe, ulertu behar da lehenago egindako izapideek beren balio osoari eusten diotela; betiere, kasu bakoitzean prozedura bultzatzeko ardura duen organoak baloratu behar du hori, eta kontuan hartu behar da, gainera, horrelako kasuetan prozedurak duen izaera berezia, malgua eta antiformalista.

II. Gobernu Kontseiluari aurkezten zaizkion *«lege-aurreproiektuak»,* hark «*lege-proiektu*» eran onartzen dituenak —Legebiltzarrera bidali edo ez bidali bertan izapidetzen jarraitzeko—, administrazio-egintza baliozkoak dira (antolamendu juridikoaren berrikuntzan eraginkorrak ez badira ere), eta Gobernu Kontseilu horretan dute egoitza, inongo iraungitze-datarik gabe, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren Legean aurreikusitako prozedura-ibilbideari amaiera ematen diotelako.

III. Gobernu Kontseiluak *«lege-aurreproiektua»* aintzat har dezake eta amaierako onarpena eman diezaioke Legebiltzarrera *«lege-proiektu»* gisa igortzea erabaki aurretik edo hori erabakitzearekin batera.

IV. Behin Gobernu Kontseiluak *«lege-proiektua»* onartutakoan, Legebiltzarrera bidaltzeko erabakia haren administrazio-funtziotik kanpo dago; *«egintza politiko»*tzat jo behar da eta, beraz, ez dago inongo araugintza-mandaturi lotuta, baizik eta, areago, egokitasun-printzipioei, albora utzi gabe proiektuarekin batera zer dokumentazio igorri behar den zehazten duten arauak. Arau horietan ezarriko da, halaber, Mahaiak proiektua onartuko duen ala ez.

6. LEGEBILTZARRERA IGORRITAKO «*LEGE-PROIEKTU*»EN EGOERA ADMINISTRATIBOA HURA DESEGINDAKOAN.

Lehenago azaldu denez, Eusko Legebiltzarra desegin edo haren agintaldia amaitutakoan, iraungi egingo dira, beren espediente parlamentarioari dagokionez, izapidetzen ari diren gai guztiak, Legebiltzarra desegin aurretik bertara bidali diren *«lege-proiektuak»* ere tartean direla. Galdetu liteke, bada, Gobernu Kontseiluan onartu eta Legebiltzarrera legegintzako ekimen gisa igorritako *«lege-proiektuak»* zer egoeratan geratzen diren Legebiltzarra desegin ondoren, Administrazio Zuzenbidearen ikuspuntutik.

Gobernu Kontseiluak onartutako *«lege-proiektu»* horiek, txosten honen egilearen iritziz, fase administratiboa deituko diogun horretan ezarri zaien helburua betetzen dute baita Legebiltzarra

desegin eta gero ere. Helburu hori da, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren Legearen zioen azalpenean adierazten den bezala, aurreikusteko moduko legegintzako ekimen zehatz baten formazko zein funtsezko edukia iragartzea, metodo hau dela bide:

> *«...erregelamenduaren mailako xedapenetarako ezarritako metodologia bera ezartzea Jaurlaritzaren barruan egiten diren legeetarako. Horrela legegintzako ahala duenaren eginkizuna erraztu egingo da, hobeto funtsatutako egitasmoak aurkeztuko baitzaizkio eztabaidarako eta erabakia hartzeko, helburuak iristeko egokiagoa eta finagoa den teknika juridikoaz artikuluka banatuak. Funts zehatzago eta ziurrago horren gainean dagokio Legebiltzarrari egitasmoak zuzendu eta onartzea».*

Izan ere, arauak egiten hasteko erabakia, bai fase administratiboan, bai araua Legebiltzarrera igorriz haren izapidetze parlamentarioa abiarazteko garaian, ez da *"… betekizun formal huts bat, baizik eta garrantzi juridiko eta politiko handia duen egintza bat, arauaren beharrizan eta bideragarritasunaren gainean gutxieneko gogoeta behar duen egintza bat, alegia. Horrexegatik, arauaren edukia finkatzen eragina izango duten era guztietako aldagaiak kontuan hartzea eskatzen du (azterlanak, txostenak, entzunaldiak, kontsultak, negoziazioak eta abar); orobat, araua indarrean sartzeak gutxi gorabehera zer kostu ekarriko duen eta zer eraginkortasun izango duen kalkulatzea eskatzen du, ez bakarrik herri-administrazioei begira, baita herritarrei eta eskuarki ekonomiari begira ere»* (Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren Legearen zioen azalpena).

Hala ere —eta hemen hartzen du balioa Gobernu Kontseiluari dagokion goi-zuzendaritza politikoak—, Gobernu Kontseiluak bere egin ote dezake lehenago izapidetutako *«lege-aurreproiektu»* bat, edo are lehendik onartuta dagoen *«lege-proiektu»* bat, eta hura berriro igorri Legebiltzarrera *«lege-proiektu»* gisa? Egin dezake hori lehenago Legebiltzarrera igorri den lege-proiektu batekin ere?

Azaltzen ari garenez, eta alde batera utzita xedapenaren "*garrantzi handia"* (Xedapen Orokorrak egiteko Prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/2003 Legeak dioen moduan), erabaki politikoa da, argi eta garbi, Gobernu Kontseiluak lehenagoko proiektu bat bere egitea eta Legebiltzar berriari igorri behar zaion ala ez erabakitzea; horrela, proiektu hori sendotu egiten du, beharrezkoa eta egokia den —eta, beraz, indarra duen— legegintzako ekimen politiko gisa, Legebiltzar berritik sortutako gobernu-programari jarraituz.

Egia da edozein lege-proiektu Legebiltzarrera igortzen denean beti erantsi behar direla Jaurlaritzari buruzko Legearen 57. artikuluan eta Legebiltzarraren Erregelamenduaren 133. artikuluan eskatzen diren aurrekariak eta agiriak, ez dadin zalantzarik izan Legebiltzarreko Mahaiak hura onartzeari begira. Hortik aurrera, ordea, era berean erabaki nabarmenki politikoa da proiektu hori eta aurretik egindako izapidetze administratibo hori Gobernu Kontseiluak bere egitea. Jaurlaritza berriak erabaki politiko hori hartu du, hasiera batean proiektu horiek onartu zituen Administrazio beraren –Administrazioak nortasun juridiko bakarrarekin dihardu beti, nahiz eta Jaurlaritza aldatu– goi-zuzendaritzan eta zuzendaritza politikoan diharduela –, dagoeneko fase administratiboan izapidetua izan den proiektuaren nahikotasuna, gaurkotasuna eta indarra berretsiz. Hau da, burututako izapidetze-egintzek baliozkotasun juridikoa baldin badute, egintza horiei ez diete eragin Jaurlaritza aldatu izanak; besterik da, ordea, Gobernu Kontseiluak –eta ez beste inork– legegintza-ekimenerako ahala baliatuz proiektua Legebiltzarrera igortzeko hartutako erabakia, hori irizpide materialei eta egokitasun- nahiz komenigarritasun- irizpideei hertsiki lotuta egin behar baita.

Beraz, hau izenpetzen duenaren iritziz Zuzendaritza honi planteatu zaion eskaerari baiezko erantzuna eman behar zaio, egiaztatzen baldin bada *«lege-proiektua»* bat datorrela Gobernu Kontseilu berriak bere agintaldian gauzatu beharreko aurreikuspen politikoarekin, oraindik ere beharrezkoa bada hura antolamendu juridikoan ezartzea, eta *«lege-proiektu»*aren testuaren funtsezko osagaietan ez badu eraginik hura onartu ondoren sortutako araudiak. Are, antolamenduaren aurreikusi gabeko aldaketaren baten garrantzia ere modu erlatiboan haztatu beharko litzateke, zeren eta *«lege-proiektua»* Legebiltzarrera igorri eta prozedura parlamentario bihurtu ondoren ere izapidetu egin behar baita Legebiltzarrean, eta izapidetu bitartean, azken onarpena jaso eta lege bihurtu baino lehen, gerta bailiteke Legebiltzarrak zuzenketaren bat egitea, halako moldez non orduan ere doikuntzak egin ahal izango diren, behar izanez gero.

7. KONKLUSIOA

Laburpen gisa: gaur egun indarrean dagoen Gobernu Kontseiluak, Jaurlaritzari buruzko Legearen 16. eta 18.a) artikuluek aitortzen dioten legegintzako ekimenerako ahala baliatuz, erabaki dezake lehendik ere onartuta dagoen *«lege-proiektu»* bat onartzea eta Legebiltzarrera igortzea, aldez aurretik sailburu eskudun batek (edo gehiagok, eskudunak gehiago badira) proposamena aurkeztuta.

Gobernu Kontseiluari kontseilukide batek edo gehiagok aurkeztutako proposamen horrek helburutzat izan behar du, Jaurlaritzari buruzko Legearen 26.8 artikuluan jasotako egokitasun-erabaki formala eta proposamena islatzeaz gainera, berrestea bai arauaren bideragarritasunak indarrean dirauela (hots, ez diotela eragin lehengo igorpenaren ondoren onartutako arauek), bai lehenago egindako izapideek indarrean dirautela eta antolamendu juridikoan egin nahi den berrikuntza egokia eta beharrezkoa dela, egungo Jaurlaritzaren proiektu politikoan aurreikusitako ildoekin bat etorriz.

Hartara, jada onartuta eta Gobernu Kontseiluaren eskuetan dauden *«lege-proiektuak»* berriro izango dira, ikuspegi parlamentariotik, *«lege-proiektu»* berriak, Legebiltzarrera igortzen direnean, beren aurrekari guztiekin batera; eta berriro hasiko da behinola Legebiltzarra desegin zenean iraungitako izapidetze parlamentarioa.

Hauxe da nire txostena, eta zuzenbidean hobeki oinarritutako beste edozeinen mende jartzen dut.

Dokumentu elektronikoa sinatu dutenak

Izena	Saila	Kargua	Eguna
XABIER UNANUE ORTEGA JAUNA.	GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA	ZUZENDARIA	2017/05/09
JESUS MARIA FERNANDEZ AGUADO	GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA	ZERBITZU JURIDIKO ZENTRALETAKO ABOKATUA	2017/05/09

V

MEMORIAS EXPLICATIVAS / AZALPEN MEMORIAK.

MEMORIA COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 12/2012, DE 21 DE JUNIO CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.

I.- ANTECEDENTES.

1. Se realiza esta memoria a fin de justificar la viabilidad jurídica de que por parte del Consejero de Cultura y Política Lingüística se eleve nuevamente al Consejo de Gobierno el texto articulado que fue aprobado, en sesión del Consejo de Gobierno celebrado el 26 de enero de 2016, como *Proyecto de Ley de modificación de la Ley 12/2012, de 21 de junio contra el dopaje en el deporte.*

2. Dicho Proyecto de Ley fue remitido al Parlamento Vasco y la Mesa del Parlamento, en su sesión de 23 de febrero de 2016, acordó admitir a trámite el Proyecto de Ley, ordenó su remisión a la Comisión de Cultura, Euskera, Juventud y Deporte, así como su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento Vasco, publicación que se materializó con fecha de 26 de febrero de 2016.

3. El Capítulo IX del Reglamento del Parlamento Vasco, regula la caducidad de las tramitaciones parlamentarias, señalando, con carácter general, en su artículo 130, lo siguiente:

> *"Disuelto el Parlamento Vasco o expirado su mandato,* ***caducarán todos los asuntos en tramitación*** *con excepción de los que corresponda conocer a la Diputación Permanente o que deban prorrogarse por disposición legal."*

4. Con arreglo a lo dispuesto en el citado precepto, y en la medida que el 2 de agosto de 2016 se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco el Decreto 23/2016, de 1 de agosto, del Lehendakari, por el que se disuelve el Parlamento Vasco y se convocan elecciones, el *Proyecto de Ley de modificación de la Ley 12/2012, de 21 de junio contra el dopaje en el deporte,* aprobado por el Consejo de

Gobierno y remitido posteriormente al Parlamento Vasco, caducó en su tramitación parlamentaria.

5. Además de estos breves antecedentes debe reseñarse que esta memoria tiene su razón de ser en varias circunstancias que deben tenerse en consideración. En primer lugar, el Consejo de Gobierno, en su sesión de 28 de febrero de 2017, ha aprobado el Programa Legislativo para la XI Legislatura, programa que contempla la remisión a la Cámara Vasca de 28 proyectos de ley. Y en la relación de proyectos de ley a remitir al Parlamento Vasco por el ejecutivo se encuentra el *Proyecto de Ley de modificación de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte*, atribuyendo la iniciativa normativa al Departamento de Cultura y Política Lingüística.

6. En segundo lugar, la Dirección de Desarrollo Legislativo y Control Normativo, del Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco, ha emitido el 10 de mayo de 2017, a instancia de la Dirección de Servicios del Departamento de Cultura y Política Lingüística, un informe jurídico titulado *"Viabilidad jurídica de la posibilidad que se vuelva a aprobar por el Consejo de Gobierno el mismo anteproyecto de Ley, en los mismos términos en los que se hizo en la anterior legislatura, para su posterior remisión como proyecto de ley al Parlamento, sin la necesidad de realizar ningún trámite previo y admitiéndose como válidos los trámites procedimentales realizados anteriormente"*. Tal dictamen contiene, entre otras, las siguientes conclusiones:

   Primero.- De conformidad con el ordenamiento jurídico vigente es claro que la disolución del Parlamento implica, siempre y en todo caso, la caducidad de los proyectos legislativos anteriormente presentados y, consiguientemente, la necesidad de su reiteración mediante el nuevo ejercicio del derecho de iniciativa legislativa del Gobierno. Sin embargo, el actual y vigente Consejo de Gobierno, puede en el ejercicio de la potestad de iniciativa legislativa que le reconocen los artículos 16 y 18.a) de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, acordar la aprobación y remisión al Parlamento de un Proyecto de Ley aprobado ya con anterioridad, previa

elevación a él por el o la Consejera competente de la correspondiente propuesta. De este modo, la caducidad de la tramitación parlamentaria del anterior ***Proyecto de Ley de modificación de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte*** no implica que dicha iniciativa legislativa no pueda ser reiterada, es decir, presentada de nuevo, en los mismos términos que lo fueron anteriormente. El dictamen concluye que "*es completamente indubitado que, en términos estrictamente parlamentarios, el nuevo Gobierno Vasco, en tanto que detentor del derecho de iniciativa legislativa, es plenamente capaz de reiterar ante la nueva cámara salida del procedimiento electoral las iniciativas aprobadas por el anterior gabinete en sus mismos términos, por cuanto la caducidad de la iniciativa no se transmite al derecho del Gobierno para su presentación*".

Segundo.- Tanto la Comisión Jurídica Asesora como la citada Dirección de Desarrollo Legislativo y Control Normativo tienen expresamente dictaminado que el cambio de legislatura y de gabinete en el ejecutivo no produce por sí mismo, en modo alguno, una caducidad de los procedimientos administrativos de elaboración de las normas, ni determina que devengan inválidos los trámites administrativos realizados en el seno de dichos procedimientos previos a la tramitación parlamentaria, de modo que es práctica común, validada por ambos órganos en sus dictámenes, que los trámites realizados por el Gobierno anterior se den por buenos y formen parte, de forma natural, del expediente que en la legislatura siguiente se remita a la aprobación del Consejo de Gobierno. De esa manera, la tramitación iniciada en una legislatura es plenamente válida y utilizable, sin que sea necesario ningún acto de conversión o convalidación, para una nueva aprobación por el Consejo de Gobierno. Y ello es aplicable a todos los actos del procedimiento administrativo previo a la remisión al Parlamento, desde la orden de inicio hasta el acto de aprobación por el Consejo de Gobierno, ambos inclusive, siendo predicable el mantenimiento de la validez jurídica de los actos administrativos y el principio de conservación de los actos a todos ellos, incluido este último, debiendo ser tan solo objeto de valoración su vigencia material.

Tercero.- Esta elevación del ***Proyecto de Ley de modificación de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte*** al Consejo de Gobierno por uno de sus miembros –en este caso el Consejero de Cultura y Política Lingüística-, precisa, además de reflejar la decisión formal de pertinencia de la propuesta, recogida en el art. 26.8 de la citada Ley de Gobierno, aseverar tanto la vigencia de la viabilidad normativa (es decir, que no se ha visto afectado por normas aprobadas con posterioridad a su anterior remisión), como la vigencia de los trámites anteriormente efectuados y la oportunidad y necesidad innovadora del ordenamiento jurídico que pretende, de acuerdo con los términos previstos en el proyecto político del Gobierno actual.

7. A tenor de las conclusiones reproducidas *ut supra*, no cabe duda que el Consejero de Cultura y Política Lingüística puede elevar al Consejo de Gobierno el ***Proyecto de Ley de modificación de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte*** aprobado en el anterior Consejo de Gobierno, en su sesión de 26 de enero de 2016. Para ello resulta preciso que se:

   a) Asevere la **viabilidad normativa del Proyecto de Ley** anterior, es decir, que no se ha visto afectado por normas aprobadas con posterioridad a su remisión.
   b) Asevere la **vigencia de los trámites anteriormente efectuados**.

8. El dictamen elaborado por la Dirección de Desarrollo Normativo y Control Económico también concluye, como se ha expuesto anteriormente, que resulta preciso que la propuesta del correspondiente Consejero o Consejera al Consejo de Gobierno avale la oportunidad y necesidad del Proyecto de Ley. Entendemos que este requisito en cierto modo ya está resuelto y no precisa de nuevo informe y pronunciamiento en la medida que el actual Consejo de Gobierno, en su sesión de 28 de febrero de 2017, ya ha incluido este Proyecto de Ley en su *Programa Legislativo* para la vigente Legislatura XI y es razonable

sostener que tal acuerdo ha ido precedido de una adecuada ponderación de su necesidad y oportunidad.

9. Por todo lo anterior, la presente memoria se va a centrar en abordar la viabilidad normativa del Proyecto de Ley anterior, es decir, que no se ha visto afectado por normas aprobadas con posterioridad a su remisión, así como la vigencia de los trámites administrativos anteriormente efectuados.

II.- CRITERIOS GENERALES SOBRE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REALIZADOS CON OCASIÓN DEL ANTERIOR PROYECTO DE LEY

10. Ya se ha indicado anteriormente que el cambio de legislatura y de gabinete en el ejecutivo no produce por sí mismo, en modo alguno, una caducidad de los procedimientos de elaboración de las normas, ni determina que devengan inválidos los trámites administrativos realizados en el seno de dichos procedimientos previos a la tramitación parlamentaria del ***Proyecto de Ley de modificación de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte***, de modo que es práctica común que los trámites iniciados por un Consejero o Consejera anterior o por el Gobierno anterior se den por buenos y formen parte, de forma natural, del expediente del Proyecto de Ley que en la legislatura siguiente se remita a la aprobación en Consejo de Gobierno.

11. De esa manera, la tramitación administrativa realizada para la aprobación del Proyecto de Ley en la legislatura anterior es plenamente válida y utilizable, sin que sea necesario ningún acto de conversión o convalidación, para una nueva aprobación por el Consejo de Gobierno. Y tal conclusión es absolutamente lógica en la medida que dichos trámites realizados en el seno de un procedimiento administrativo en una anterior legislatura no devienen nulos ni pierden valor por el cambio de legislatura. Además, las Administraciones Públicas, en el ejercicio de la iniciativa legislativa "*actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia...*" (artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

12. Y ello es aplicable a todos los actos del procedimiento administrativo previo a la remisión al Parlamento del ***Proyecto de Ley de modificación de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte,*** desde la orden de inicio hasta el acto de aprobación por el Consejo de Gobierno, ambos inclusive, siendo predicable el mantenimiento de la validez jurídica de los actos administrativos y el principio de conservación de los actos de todos ellos, incluido este último, debiendo ser tan solo objeto de valoración su vigencia material.

13. En el dictamen de la Dirección de Desarrollo Normativo y Control Económico, citado en el presente informe, se analiza, en términos generales, la necesidad de un nuevo dictamen de la Comisión Jurídica Asesora e Informe de la Oficina de Control Económico. Resulta necesario traer a colación tales criterios generales para examinar posteriormente, en relación al ***Proyecto de Ley de modificación de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte,*** si deben reiterarse o no los informes de los dos órganos citados.

14. Sobre la intervención preceptiva de la Comisión Jurídica Asesora es indiscutible que tal órgano debe ser consultado en relación a todos los anteproyectos de ley, cualquiera que sea la materia y objeto de los mismos (artículo 3.1.a de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi). Asimismo, son categóricos los artículos 56 y 57 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, en la redacción conferida por la Ley 8/2016, de 2 de junio:

> *"Artículo 56*
>
> *1. El Gobierno, en la fase inicial de elaboración de los anteproyectos de ley y los proyectos de decreto que deban ser remitidos a la Comisión Jurídica Asesora, únicamente enviará al Parlamento Vasco el texto de la disposición, una vez tenga la aprobación previa del órgano que haya dictado la orden de iniciación.*
>
> *2. Asimismo, la misma documentación que se envíe a la Comisión Jurídica Asesora se remitirá, al mismo tiempo, al Parlamento Vasco, a efectos de su conocimiento por parte de los grupos parlamentarios.*
>
> *3. Los anteproyectos de Ley y los proyectos de Decreto que hayan de ser acordados por el Gobierno, serán remitidos al Secretario del Gobierno, que*

procederá a su reparto. Se incluirán en el Orden del Día cuando los Departamentos interesados hayan manifestado su conformidad sobre el contenido, en la forma que el propio Gobierno establezca. No habiendo conformidad, o siendo ésta condicionada, corresponderá al Lehendakari decidir la inclusión del asunto en los debates del Consejo.

Artículo 57

1. Los proyectos de ley presentados al Parlamento Vasco habrán de ir acompañados del informe de la Comisión Jurídica Asesora y, en su caso, de la memoria de adaptación a dicho informe.

2. Si los Proyectos de Ley comportasen un gravamen al Presupuesto, deberán ir acompañados del correspondiente anejo de financiación que será discutido y votado con arreglo a lo que disponga el Reglamento del Parlamento sobre los Proyectos de Ley."

15. Resuelta la cuestión de que toda iniciativa legislativa que se eleve al Consejo de Gobierno debe ir acompañada del correspondiente dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, se suscita la duda la necesidad o no de que vuelva a dictaminar sobre el mismo texto que anteriormente dictaminó o es suficiente con el dictamen evacuado con la anterior iniciativa normativa en la pasada legislatura. Esta cuestión es resuelta de modo fundado en el informe de la Dirección de Desarrollo Legislativo y Control Normativo con base en el artículo 29 de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, que establece lo siguiente:

"Si, tras la emisión del dictamen, el asunto sobre el que verse es objeto de ***modificaciones sustanciales*** *que introducen nuevos contenidos que no responden a las sugerencias o propuestas efectuadas por la comisión o las exceden, se ha de realizar una nueva consulta sobre dichos cambios"*

16. Del tenor literal de esta disposición cabe colegir, como expresamente advierte la Dirección de Desarrollo Legislativo y Control Normativo, que sólo procederá un nuevo examen del ***Proyecto de Ley de modificación de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte,*** si es objeto de **modificaciones sustanciales**, haciendo abstracción del dato de sí el Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora se ha realizado con este gabinete del ejecutivo

o con un gabinete anterior. Y para avalar tal conclusión trae a colación el Acuerdo nº 4/2017, del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora, al inadmitir una solicitud de dictamen en la sesión del día 26 de abril de 2017:

> *"7. O, en otras palabras, como se señaló en el Dictamen 10/2000, la Comisión sólo tendrá que volver a examinar el asunto cuando de su nueva elaboración se colija la existencia de* ***elementos o aspectos sustantivos distintos*** *de los examinados en su anterior intervención y cuya* ***relevancia*** *reclamen un nuevo análisis.*
>
> *8. Esta doctrina es coherente con la establecida por el Tribunal Supremo en relación con el Consejo de Estado y, por tanto, plenamente aplicable a los supuestos de intervención de esta Comisión.*
>
> *9. De acuerdo con dicha doctrina, en síntesis, procede la nueva consulta cuando "...las innovaciones introducidas tras el dictamen del Consejo de Estado no han sido sugeridas por éste, son ajenas a los términos de la consulta y, además, ostentan una* ***relevancia sustancial****" (STS de 27 de mayo de 1993 RJ 1993\102040).*
>
> *10. Los supuestos han sido precisados en posteriores pronunciamientos, así la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 10 de marzo de 2009 (RJ\2009\5110) subraya "que no es necesaria una nueva consulta al Consejo de Estado cuando se realizan retoques en el texto o se introducen* ***modificaciones no sustanciales*** *(…), ni cuando las discordancias entre el Proyecto y el Texto definitivo son consecuencias lógicas del procedimiento de elaboración, en el que se emiten informes por distintos órganos, que pueden dar lugar a variaciones en la disposición que resulte, por fin, aprobada, pudiendo añadirse que la propia doctrina de la Sala ha insistido en la necesidad de efectuar una interpretación funcional y teleológica de las garantías procedimentales establecidas para la elaboración de disposiciones generales, que se justifican no por el puro formalismo de su realización sino por la finalidad a que responden, en cuya valoración han de tenerse en cuenta las especialidades de la disposición general de que se trate (…)."*
>
> *11. La misma STS de 10 de marzo de 2009 recuerda que es jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS de 8 de marzo de 2006) que cuando las modificaciones introducidas en el texto definitivo de una disposición general* ***no sean sustanciales*** *resulta innecesaria una nueva audiencia de las asociaciones, corporaciones o entidades representativas de intereses legítimos en relación directa con el objeto de la disposición o un nuevo informe o dictamen del Consejo de Estado, "entre otras razones porque su parecer no es vinculante, de manera que si, contemplada la modificación tanto desde una perspectiva relativa, por la innovación en el texto informado, como absoluta, por su importancia intrínseca, no representa una* ***alteración sustancial*** *en el ordenamiento previamente sometido al trámite de audiencia o informe, la falta de éstos, respecto de la reforma introducida, no acarrea su nulidad radical, al*

haber contado quien ostenta la potestad para redactar definitivamente la disposición con el criterio o ilustración de las entidades, corporaciones, asociaciones y organismos consultados, que, en definitiva, es el fin perseguido (...) al establecer un procedimiento para la elaboración de los reglamentos (…)".
12. E invoca también la STS de 31 de enero de 2001, por referencia a la Sentencia de 27 de mayo de 1993, valorando las modificaciones allí producidas, que no requerían nuevo dictamen del Consejo de Estado, "ya que es necesario compatibilizar el carácter final de dicho dictamen, como juicio de síntesis de todas las cuestiones planteadas e informes específicos emitidos con anterioridad, con el ejercicio de la potestad reglamentaria del Gobierno (…), de la que resultaría desapoderado este si hubiese de ajustarse literalmente en la redacción definitiva a dicho dictamen, pues sólo si se regulasen materias no incluidas en el Proyecto remitido a dictamen o su ordenación resultase ***completa o sustancialmente diferente****, sin haber sido sugerida por el propio Consejo de Estado, debería recabarse sobre tales extremos nuevo informe, ya que el titular de la potestad reglamentaria ostenta la facultad de introducir en el texto remitido al Consejo de Estado las reformas que considere adecuadas para la redacción final sin otro límite que el expresado (…)".*

13. La precedente doctrina sigue plenamente vigente, tal y como se desprende de la lectura de la STS de 22 de diciembre de 2016 (RJ 2017/106).

14. Procede, por tanto, examinar el texto del proyecto sometido a consulta, conforme al señalado criterio de la conexión de las innovaciones con las consideraciones del dictamen anterior, esto es, si derivan de las sugerencias del dictamen de la Comisión o si, ajenas a este, ostentan una ***relevancia sustancial*** *que exija una nueva intervención preceptiva."*

17. Respecto al informe de la Oficina de Control Económico, la Dirección de Desarrollo Legislativo y Control Normativo también concluye la preceptividad de aquel informe en relación a todo Anteproyecto de Ley que se desee elevar al Consejo de Gobierno. Se trata de un informe explícitamente mencionado por el artículo 133 del Reglamento del Parlamento Vasco, en el artículo 25.1 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como en otras disposiciones legislativas y de naturaleza reglamentaria que no es preciso reproducir ahora.

18. Sentado lo anterior, al igual que lo hace la Dirección de Desarrollo Legislativo y Control Económico, cabe preguntarse: ¿es precisa una nueva emisión de informe de la Oficina de Control Económico en relación con un Proyecto de Ley ya aprobado por Consejo de Gobierno? ¿O podría bastar con el informe emitido previamente? El criterio jurídico de dicha Dirección es el siguiente:

Primero.- La normativa que regula este control económico normativo no establece de forma específica la necesidad de nuevo pronunciamiento. Solo hace referencia en el artículo 27.1 *in fine* de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a los supuestos de proyectos normativos en que deba dictaminar la Comisión Jurídica Asesora y, toda vez que este órgano es el último en pronunciarse, *"con anterioridad a su aprobación, deberán comunicarse a la Oficina de Control Económico las modificaciones que se introduzcan en los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones normativas como consecuencia de las sugerencias y propuestas del dictamen de dicho órgano consultivo"*. Es decir, sólo deberá comunicarse, sin más trámites, la modificación introducida. No se debe formalizar un nuevo dictamen.

Segundo.- Si la Comisión Jurídica Asesora no considera procedente pronunciarse sobre el reenvío de un Proyecto de Ley ya aprobado por Consejo de Gobierno y remitido al Parlamento, tampoco parece procedente que lo haga la Oficina de Control Económico. Y en el supuesto de que la Comisión Jurídica Asesora decidiera que ha de pronunciarse sobre ese Proyecto de Ley, tampoco parece procedente que se pronuncie la Oficina de Control Económico, sin perjuicio de que le sea comunicado el dictamen o parecer de ésta a los efectos legales oportunos, así como las modificaciones que en su caso se introdujeran.

III.- VIABILIDAD NORMATIVA DEL ANTERIOR PROYECTO DE LEY. VIGENCIA DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EFECTUADOS CON EL ANTERIOR PROYECTO DE LEY

19. Ya hemos indicado que el Consejero de Cultura y Política Lingüística puede elevar al Consejo de Gobierno el *Proyecto de Ley de modificación de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte,* aprobado en el anterior Consejo de Gobierno, en su sesión de 26 de enero de 2016. Para ello resulta preciso que se

asevere la viabilidad normativa del Proyecto de Ley anterior, es decir, que no se ha visto afectado por normas aprobadas con posterioridad a su remisión.

20. A nuestro juicio el *Proyecto de Ley de modificación de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte,* que aprobó el Consejo de Gobierno el 26 de enero de 2016, no se ha visto afectado por normas aprobadas con posterioridad a su remisión. Aunque sólo ha transcurrido poco más de un año desde su aprobación por el Consejo de Gobierno y ha coincidido un periodo de inactividad legislativa como consecuencia de las sucesivas convocatorias de elecciones en el ámbito estatal y vasco, con fecha de 18 de febrero de 2017 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el *Real Decreto-ley 3/2017, de 17 de febrero, por el que se modifica la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, se adapta a las modificaciones introducidas por el Código Mundial Antidopaje de 2015*. Y con fecha de 18 de marzo de 2017 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Acuerdo de convalidación del citado Real Decreto-ley, adoptado por el Congreso de Diputados.

21. En la exposición de motivos del citado Real Decreto-ley se condensan los antecedentes y los objetivos de la modificación legislativa estatal, que son, básicamente, los que perseguía *el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte,* es decir, acompasar la legislación vasca a la normativa internacional:

> *"Sin embargo, tales actualizaciones pronto se revelaron insuficientes para acompasar nuestra regulación a la cada vez más pujante y exigente legislación internacional. Esta situación provocará la aprobación de la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje en el Deporte, cuya promulgación supuso un hito fundamental en la historia de la lucha contra el dopaje en nuestro ordenamiento jurídico. Aquella primera Ley contenía un completo sistema de disposiciones que conceptuaban el dopaje como una lacra que afectaba a diversos bienes jurídicos dignos de protección como eran la salud de los deportistas, el juego limpio en el deporte y la dimensión ética del mismo.*
>
> *Las sucesivas modificaciones que tuvieron lugar en el plano internacional, encontrarán un jalón en la ratificación, pocos meses después de la promulgación de la Ley, de la Convención Internacional contra el dopaje en el deporte de la*

Unesco, que incorporó los principios del Código Mundial, haciendo así posible la armonización de la normativa internacional sobre esta materia. Este texto impuso a los Estados signatarios una serie de obligaciones en materia de lucha contra el dopaje, entre ellas, la de obligar a los Estados miembros a garantizar la eficacia del Código Mundial Antidopaje.

La modificación del Código Mundial Antidopaje en enero de 2009 determino que dadas las incongruencias normativas que desde entonces afloraran entre el texto español y las nuevas disposiciones del Código, se considerase necesario dictar una nueva ley que sustituyera la anterior de 2006 y diera respuesta a las nuevas demandas y reglas de los textos internacionales. La obligada adaptación de la normativa española al Código Mundial Antidopaje derivó en la adopción de nuevas medidas de carácter legislativo que paliaran esta situación, y de esta suerte se aprobará la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva.

Sin embargo, en 2015 entró en vigor una nueva redacción del Código Mundial Antidopaje que de nuevo vuelve a descolgar la regulación española del sistema armónico que propugna la Convención Internacional contra el dopaje en el deporte de la Unesco. Y ello pese a que la redacción de la Ley de 2013 ya se hizo tomando en consideración los distintos borradores con los que entonces se contaba del Código Mundial Antidopaje que se estaba gestando.

Las modificaciones habidas en el texto final del CMA respecto de los últimos borradores considerados por el legislador español de 2013 han determinado que nuestra normativa apenas mantuviera la deseada armonización y concierto durante un año y medio.

Aunque durante el prolongado periodo de Gobierno en funciones, a lo largo de 2016, la reforma legal necesaria no pudo remitirse a las Cortes Generales, con objeto de dar publicidad a las novedades del Código Mundial se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» de 11 de marzo de 2016 la última versión actualizada y en vigor, desde el 1 de enero de 2015, del Código Mundial Antidopaje, en tanto que apéndice 1 de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, hecho en París el 18 de noviembre de 2005.

En esta ocasión, y precisamente en aplicación de las nuevas reglas contenidas en la redacción del CMA de 2015, esta discrepancia ha tenido además como consecuencia la declaración formal por parte de la AMA de «incumplimiento del código», de acuerdo a lo previsto en su artículo 23. Ello hace necesaria nuevamente una modificación legal que permita dar cabida en el texto de 2013 a aquellos aspectos, pocos, que no pudiendo preverse en la redacción original y cuya estampa final en el Código Mundial ha determinado una situación de discordancia entre ambas legislaciones.

Así las cosas, la intervención normativa urgente y extraordinaria del Gobierno está absolutamente justificada por la trascendencia de los impactos derivados de la falta de incorporación de la nueva versión del Código Mundial Antidopaje a la normativa interna y que afectaría directamente a todos los niveles de la

organización, planificación y desarrollo de las políticas públicas deportivas pero también a la práctica profesional y amateur del deporte y al derecho a la salud de quienes lo practican. Así, esta intervención normativa evita los perjuicios inmediatos que la falta de incorporación del Código produciría en el interés general vinculado con el fomento del deporte y la salud de los deportistas, valores que la sociedad ha potenciado intensamente en los últimos años y a los que dedica medios cada vez mayores por su trascendencia individual y social"

22. Es decir, lo que el legislador estatal indica en esta exposición de motivos es que era necesaria nuevamente una modificación legal que permitiese dar cabida en el texto de la Ley Orgánica 3/2013 a aquellos aspectos, pocos, que se encontraban en una situación de discordancia con la normativa internacional, pues en 2015 entró en vigor una nueva redacción del Código Mundial Antidopaje que de nuevo volvía a descolgar la regulación española del sistema armónico que propugna la Convención Internacional contra el dopaje en el deporte de la UNESCO.

23. La modificación de la Ley Orgánica 3/2013 no afecta al *Proyecto de* Ley *de modificación de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte,* que aprobó el Consejo de Gobierno en 2016, por diversas razones:

Primero.- Después de que el Parlamento Vasco aprobase la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte, el Estado aprobó la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, Ley Orgánica que invocaba la competencia del "*Estado para dictar aquellos preceptos relativos a su propia organización y los que se refieren a los intereses que afectan al deporte estatal federado en su conjunto*". La Ley vasca 12/2012 ni abordaba la organización estatal ni regulaba con afectación al deporte estatal federado. Por ello, tras la aprobación de Ley Orgánica 3/2013, a pesar del carácter orgánico de algunos preceptos citados en su disposición final segunda, se consideró que la Ley Orgánica no obligaba a adaptar la Ley 12/2012, del Parlamento Vasco; ambas leyes se proyectan sobre ámbitos objetivos y subjetivos diferenciados. De hecho, la Comisión Jurídica Asesora, en su Dictamen

5/2016, con relación al *Proyecto de Ley de modificación de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte*, ya manifestaba que "*se trata de una reforma que básicamente responde a la obligación de adecuar la vigente LCD al citado código mundial, aprobado en la IV Conferencia Mundial Antidopaje, que se celebró en Johannesburgo, Sudáfrica*" y por ello "*el texto, en la medida que se limita a trascribir lo anteriormente reseñado, no presenta discrepancia alguna que le impida una integración adecuada en el ordenamiento vigente en la materia*".

Segundo.- Siendo cierto que la literatura que emplea el *Proyecto de modificación de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte,* no coincide literalmente con la del Real Decreto-ley 3/2017, no es menos cierto que tampoco coincide la literatura de la vigente Ley vasca 12/2012 con la de la Ley Orgánica 3/2013, en la redacción anterior a la aprobación del Real Decreto-ley en 2017. Y tampoco el Proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 26 de enero de 2016, con el dictamen favorable de la Comisión Jurídica Asesora, coincidía con la anterior Ley Orgánica 3/2013, lo que avala la conclusión de que se trata de dos cuerpos normativos, el estatal y el autonómico, dictados bajo títulos competenciales diferentes, y con ámbitos subjetivos y objetivos también diferenciados.

Tercero.- Ambos textos legislativos, el Proyecto de Ley aprobado por Consejo de Gobierno el 26 de enero de 2016, y el Real Decreto-ley, de 17 de febrero, tratan de cumplir el mismo objetivo de armonización legislativa al marco internacional, concretamente al Código Mundial Antidopaje. Lo hacen con textos diferenciados, pero cada uno de los países signatarios también ha realizado adaptaciones con textos legislativos muy diferenciados.

24. Sin perjuicio de las consideraciones precedentes, hacemos nuestra la consideración realizada por la Dirección de Desarrollo Legislativo y Control Normativo en el sentido de que "*incluso la importancia de una <u>eventual modificación sobrevenida del ordenamiento que afectara al proyecto</u> debe ser sopesado de una forma relativa*

puesto que el proyecto de ley, aún después de ser remitido a la cámara transformándose el procedimiento en parlamentario, ha de ser sometido a su tramitación en aquélla sede, durante al cuál, y previo a su aprobación final y convertirse en Ley, puede ser sujeto de enmienda por la Cámara de forma que también en ese momento se podrán realizar los ajustes que resulten pertinentes". Es decir, las propuestas de ajuste del Proyecto de Ley a una **eventual modificación sobrevenida del ordenamiento** también pueden ser tramitadas a través de enmiendas parlamentarias.

25. A tenor de todas las consideraciones precedentes cabe concluir también la vigencia de todos los trámites administrativos efectuados con ocasión de la aprobación del *Proyecto de Ley de modificación de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte*, aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 26 de enero de 2016.

En Vitoria-Gasteiz,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI	JON REDONDO LERTXUNDI
El Consejero de Cultura y Política Lingüística	Director de Actividad Fisica y Deportes

FIRMADO DIGITALMENTE POR:

Firmante: **BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI**
Fecha de la firma: **21/06/2017 13:16:29**
Validación de la firma: **Correcta**

Firmante: **JON REDONDO LERTXUNDI**
Fecha de la firma: **21/06/2017 11:51:08**
Validación de la firma: **Correcta**

KIROLEKO DOPINAREN AURKAKO EKAINAREN 21EKO 12/2012 LEGEA ALDATZEKO LEGEAREN PROIEKTUARI BURUZKO MEMORIA OSAGARRIA.

I.- AURREKARIAK.

1. Memoria hau egin da Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak gobernu-kontseiluaren 2016ko urtarrilaren 26an egindako bilkuran onartutako testu artikulatua Kiroleko Dopinaren Aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legea aldatzeko Legearen proiektu gisa gobernu-kontseilura berriz aurkez dezan.

2. Legearen proiektu hori Eusko Legebiltzarrera aurkeztu zuten eta Legebiltzarreko Mahaiak, 2016ko otsailaren 23ko bilkuran, Legearen proiektua izapidetzeko onartzea erabaki zuen; halaber, Kultura, Euskara, Gazteria eta Kirol Batzordera igortzeko ere agindu zuen, baita Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitaratzeko ere; 2016ko otsailaren 26an argitaratu zuten.

3. Eusko Legebiltzarraren Erregelamenduaren IX. kapituluak legebiltzarreko izapideen iraungipena arautzen du eta, oro har, honakoa adierazten du 130. artikuluan:

> *«Eusko Legebiltzarra desegindakoan edo Legebiltzarraren agintaldia amaitutakoan,* ***iraungi egingo dira tramitazioan dauden gai guztiak****, salbu eta Diputazio Iraunkorrak aztertu eta erabaki beharrekoak edo legeak hala aginduta atzeratu beharrekoak».*

4. Aipatutako manu horretan xedatutakoarekin bat etorriz, eta 2016ko abuztuaren 2an Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian abuztuaren 1eko 23/2016 Dekretua, Lehendakariarena, Eusko Legebiltzarra desegin eta hauteskundeetarako deia egiten duena, argitaratu zenez, Kiroleko Dopinaren Aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legea aldatzeko Legearen proiektua, gobernu-kontseiluak onartu eta ondoren Eusko Legebiltzarrera igorria, iraungi zen legebiltzarreko tramitazioan.

5. Aurrekari labur horietaz gain, memoria honek kontuan hartu beharreko hainbat inguruabarretan izateko arrazoia duela ere adierazi behar dugu. Lehenik, Gobernu Kontseiluak, 2017ko otsailaren 28ko bilkuran, XI. Legegintzaldirako Legegintza Programa onartu du. Programa horrek Euskal Ganberara 28 lege-proiektu igortzea jasotzen du. Eta Jaurlaritzak Eusko Legebiltzarrera igorri beharreko lege-proiektuen zerrendan Kiroleko Dopinaren Aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legea aldatzeko Legearen proiektua dago; araugintza-ekimena, halaber, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari egotzi diote.

6. Bigarrenik, Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta Justizia Sailaren Lege Garapen eta Arau Kontrolerako Zuzendaritzak, 2017ko maiatzaren 10ean, txosten juridiko bat egin du, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren Zerbitzu Zuzendaritzaren eskariz, honako izenburu honekin: *«Gobernu Kontseiluak legearen aurreproiektu bera, aurreko legegintzaldian egindako modu berean, berriz onartzeko aukeraren bideragarritasun politikoa, ondoren legearen proiektu gisa Legebiltzarrera igortzeko, aurretiko izapiderik egin beharrik gabe eta aldez aurretik egindako prozedura-izapideak baliozkotzat onartuta».* Irizpen horrek honako ondorio hauek ditu, besteak beste:

Lehena.- Indarrean den ordenamendu juridikoarekin bat etorriz, argi da Legebiltzarra desegiteak, beti eta kasu guztietan, aurretik aurkeztutako legegintzako proiektu guztiak iraungitzea dakarrela eta, ondorioz, Jaurlaritzaren legegintzako ekimenerako eskubidea berriz baliatuz errepikatu behar izatea. Oraingo eta indarrean den Gobernu Kontseiluak, ordea, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 16. eta 18.a artikuluek aitortzen dioten legegintzako ekimenerako ahalmena baliatuz, aldez aurretik onartutako Legearen proiektu bat onartzea eta Legebiltzarrera igortzea erabaki dezake, eskumena duen sailburuak dagokion proposamena hari aurkeztu ondoren. Era horretan, aurretik aurkeztutako Kiroleko Dopinaren Aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legea aldatzeko Legearen proiektuaren legebiltzarreko tramitazioa iraungitzeak ez dakar legegintzako ekimen hori errepikatu, hau da, berriz aurkeztu ezin denik aurretik egindako modu berean. Irizpenak, amaitzeko, hau ere xedatzen du: «*Zalantzarik*

gabekoa da guztiz, legebiltzarrari dagokionez soilik, Eusko Jaurlaritza berriak, legegintzako ekimenerako eskubidea duen neurrian, hauteskunde-prozeduraren ondoriozko ganbera berriaren aurrean aurreko kabineteak onartutako ekimenak modu berean errepikatzeko gaitasun osoa duela, ekimenaren iraungipenak ez baitio eragiten Jaurlaritzak haiek aurkezteko duen eskubideari».

Bigarrena.- Bai Aholku Batzorde Juridikoak bai Lege Garapen eta Arau Kontrolerako Zuzendaritzak berariaz xedatu dute legegintzaldia eta kabinetea aldatzeak ez dakarrela berez, inola ere ez, arauak egiteko administrazio-prozedurak iraungitzea, eta ez duela eragiten izapidetze parlamentarioaren aurretiko prozedura horien barruan eginiko administrazio-izapideak baliogabeak izatea. Hori horrela, ohikoa da, bi organo horiek hainbat irizpenetan baliozkotuta, aurreko Jaurlaritzak egindako izapideak ontzat jotzea eta izapide horiek, modu natural batez, hurrengo legegintzaldian Gobernu Kontseiluak onartzeko igortzen duten espedientearen zati izan daitezen. Era horretan, legegintzaldi batean hasitako izapideak guztiz baliozkoak eta erabilgarriak dira, bihurtzeko edo baliozkotzeko egintzaren beharrik gabe, Gobernu Kontseiluaren onespen berri bati begira. Eta hori aplikagarri zaie Legebiltzarrera igorri aurretiko administrazio-prozeduraren egintza guztiei –hasiera emateko agindutik hasita Gobernu Kontseiluak onartzeko egintzara arte, biak barne–; hala bada, administrazio-egintzen baliozkotasun juridikoari eustea zein egintzak kontserbatzeko printzipioa, horientzat guztientzat dira aldarrikatzekoak, azken horrentzat barne, eta haien indarraldi materiala baino ez da baloratu behar.

Hirugarrena.- Kiroleko Dopinaren Aurkako kainaren 21eko 12/2012 Legea aldatzeko Legearen proiektua Gobernu Kontseilura haren kide batek –oraingoan Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak– aurkez dezan, beharrezkoa da, proposamenaren egokitasunaren erabaki formala erakustea ez ezik –aipatutako Jaurlaritzari buruzko Legearen 26.8 artikuluan jasota–, arau-bideragarritasuna indarrean dagoela (aurretik igorri ondoren onartutako arauek eragin ez diotela, alegia) eta aurretik eginiko izapideak

indarrean daudela ere baieztatzea, baita nahi duen ordenamendu juridikoa berritzea egokia eta beharrezkoa dela baieztatzea ere, oraingo Jaurlaritzaren proiektu politikoan aurreikusitakoari jarraikiz.

7. *Ut supra* adierazitako ondorioak aintzat hartuta, ez dago zalantzarik Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak Gobernu Kontseilura aurkez dezakeela Kiroleko Dopinaren Aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legea aldatzeko Legearen proiektua, aurreko Gobernu Kontseiluan, 2016ko urtarrilaren 26ko bilkuran, onetsia. Hartarako, hau egin behar da:

   a) Aurreko legearen proiektuaren arau-bideragarritasuna baieztatu, hots, igorri ondoren onartutako arauek ez diotela eragin.
   b) Aurretik egindako izapideak indarrean daudela baieztatu.

8. Lege Garapen eta Arau Kontrolerako Zuzendaritzak egindako irizpenak ondorioztatzen du, halaber, aurretik azaldu dugun bezala, dagokion sailburuak Gobernu Kontseiluari egindako proposamenak Legearen proiektua egokia eta beharrezkoa dela ere abalatu behar duela. Gure iritziz betekizun hori beteta dago nolabait, eta ez da beste txosten eta irizpen bat behar; izan ere, egungo Gobernu Kontseiluak, 2017ko otsailaren 28ko bilkuran, Legearen proiektu hori jaso du jada indarrean den XI. Legegintzaldirako Legegintzaldi Programan, eta arrazoizkoa da pentsatzea erabaki horren aurretik haren beharra eta egokitasuna behar bezala aztertu dela.

9. Hori guztia dela eta, memoria honek aurreko Legearen proiektuaren arau-bideragarritasunari helduko dio funtsean, hots, igorri ondoren onartutako arauek ez diotela eragin; horrez gain, aurretik egindako administrazio-izapideak indarrean dauden ere aztertuko da.

II.- LEGEAREN AURREKO PROIEKTUA ZELA ETA EGINDAKO ADMINISTRAZIO-IZAPIDEEI BURUZKO IRIZPIDE OROKORRAK

10. Aurretik ere adierazi dugu legegintzaldia eta Jaurlaritzan kabinetea aldatzeak berez ez dakarrela, inola ere ez, arauak egiteko prozedurak iraungitzea, eta ez duela eragiten, orobat, Kiroleko Dopinaren Aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legea aldatzeko Legearen proiektua legebiltzarrean izapidetu aurretiko prozedura horien barruan egindako administrazio-izapideak baliogabeak izan daitezen; horrenbestez, ohikoa da aurreko sailburu batek edo aurreko Jaurlaritzak hasitako izapideak ontzat jotzea eta, modu natural batez, hurrengo legegintzaldian Gobernu Kontseiluan onar dadin igortzen duten Legearen proiektuaren espedientearen zati izan daitezen.

11. Era horretan, aurreko legegintzaldian Legearen proiektua onartzeko hasitako izapideak guztiz baliozkoak eta erabilgarriak dira, bihurtzeko edo baliozkotzeko egintzaren beharrik gabe, Gobernu Kontseiluaren onespen berri bati begira. Eta erabat logikoa da ondorio hori, administrazio-prozedura baten barruan aurreko legegintzaldi batean egindako izapide horiek ez baitira deusez bilakatzen eta ez baitute baliorik galtzen legegintzaldia aldatzeagatik. Gainera, Administrazio Publikoek, legegintzako ekimena baliatuz, «*printzipio hauen arabera jokatu behar dute: premia, efikazia...*» (urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 129. artikulua).

12. Eta hori aplikagarri zaie Kiroleko Dopinaren Aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legea aldatzeko Legearen proiektua Legebiltzarrera igorri aurretiko administrazio-prozeduraren egintza guztiei –hasiera emateko agindutik hasita Gobernu Kontseiluak onartzeko egintzara arte, biak barne–; hala bada, administrazio-egintzen baliozkotasun juridikoari eustea zein egintzak kontserbatzeko printzipioa horientzat guztientzat dira aldarrikatzekoak, azken horrentzat barne, eta haien indarraldi materiala baino ez da baloratu behar.

13. Txosten honetan aipatu dugun Lege Garapen eta Arau Kontrolerako Zuzendaritzaren irizpenean Aholku Batzorde Juridikoak eta Kontrol

Ekonomikoko Bulegoak beste irizpen eta txosten bat ematea, hurrenez hurren, beharrezkoa den aztertu da, oro har. Irizpide orokor horiek hizpidera ekarri behar dira, ondoren, Kiroleko Dopinaren Aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legea aldatzeko Legearen proiektuari dagokionez, aipatutako bi organo horien txostenak berriz egin behar diren edo ez aztertzeko.

14. Aholku Batzorde Juridikoaren nahitaezko esku-hartzeari buruz, eztabaidaezina da organo horri aholkularitza eskatu behar zaiola Legearen aurreproiektu guztiekin lotuta, haien gaia eta xedea edozein dela ere (azaroaren 24ko Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren 9/2004 Legearen 3.1.a artikulua). Irmoak dira, halaber, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 56. eta 57. artikuluak, ekainaren 2ko 8/2016 Legeak emandako idazketan:

«56. artikulua

1. Jaurlaritzak, Aholku Batzorde Juridikoari igorri behar zaizkion lege-aurreproiektuak eta dekretu-proiektuak egiteko hasierako fasean, xedapenaren testua bakarrik igorriko dio Eusko Legebiltzarrari, behin prozedura hasteko agindua eman duen organoaren aldez aurreko onespena izanda.

2. Era berean, Aholku Batzorde Juridikoari igortzen zaion dokumentazio bera, aldi berean, Eusko Legebiltzarrari ere igorriko zaio, legebiltzar-taldeek dokumentazio hori ezagut dezaten.

3. Jaurlaritzak erabaki beharreko Lege-aurreproiektuak eta Dekretu-proiektuak Jaurlaritzako Idazkariari bidaliko zaizkio, banatu ditzan. Doazkien Sailek Jaurlaritzak berak ezarritako moduan idazkiek diotenarekiko onarpena adierazi dezatenean, Gai-zerrendan sartuko dira. Bat etorri ez edo baldintzaren batekin bat badatoz, Lehendakariari dagokio arazo hori Kontseiluak aztertzeko gaietan sartu edo ez sartu erabakitzea.

57. artikulua

1. Eusko Legebiltzarrari aurkezten zaizkion lege-proiektuekin batera, Aholku Batzorde Juridikoaren txostena ere igorriko da eta, halakorik bada, txosten horretara egokitzeko oroitidazkia.

2. Lege-proiektuek aurrekonturako kargaren bat badakarte dagokien finantzaketa-eranskin bat eraman beharko dute eta, hori, Legebiltzarraren erregelamenduak Legearen proiektuei buruz xedatutakoari jarraikiz eztabaidatuko eta bozkatuko da».

15. Gobernu Kontseilura aurkezten den legegintzako ekimen orok Aholku Batzorde Juridikoaren irizpena ere eduki beharraren kontua ebatzita, zalantza dago horrek aurretik irizpena emandako testu berari buruz beste irizpen bat ematea beharrezkoa den edo amaitutako legegintzaldiaren aurreko araugintza-ekimenarekin emandako irizpena nahikoa den. Gai hori zioetan oinarrituz ebatzi da Lege Garapen eta Arau Kontrolerako Zuzendaritzaren txostenean, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren azaroaren 24ko 9/2004 Legearen 29. artikulua oinarri hartuta. Honakoa dio:

> *«Irizpena eman eta gero, irizpenaren aztergaian* ***garrantzizko aldaketak*** *egiten badira eta, ondorioz, batzordeak egindako iradokizun edo proposamenekin bat ez datozen edo horiek gainditzen dituzten eduki berriak jasotzen badira, aldaketa horiei buruzko kontsulta berria egin beharra dago».*

16. Xedapen horrek hitzez hitz adierazten duenetik ondorioztatu behar da, Lege Garapen eta Arau Kontrolerako Zuzendaritzak berariaz ohartarazten duen moduan, Kiroleko Dopinaren Aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legea aldatzeko Legearen proiektua berriz ere aztertuko dela garrantzizko aldaketak baditu bakarrik, alde batera utzita Aholku Batzorde Juridikoaren irizpena Jaurlaritzaren kabinete honekin edo aurreko kabinete batekin egin den. Eta ondorio hori abalatzeko, Aholku Batzorde Juridikoaren Osoko Bilkuraren 4/2017 erabakia dakar hizpidera, irizpen-eskaera bat atzera bota baitzuen 2017ko apirilaren 26ko bilkuran:

> *«7. Edo, beste hitz batzuekin, 10/2000 irizpenean adierazi bezala, Batzordeak gaia berriz ere aztertu beharko du, baldin eta aurretik aztertutakoak ez diren* ***funtsezko elementuak edo alderdiak*** *badaude eta haien* ***garrantzia*** *dela-eta beste azterketa bat egin beharra badago bakarrik.*
>
> *8. Doktrina hori bat dator Auzitegi Gorenak Estatu Kontseiluari dagokionez ezarritakoarekin eta, ondorioz, guztiz aplikagarri zaie Batzorde honek esku hartzeko kasuei.*
>
> *9. Doktrina horrekin bat etorriz, laburbilduz, kontsulta berri bat egokia da baldin eta "...Estatuko Kontseiluaren irizpenaren ostean egindako berrikuntzak ez baditu hark iradoki, kontsultarekin loturarik ez badute eta, gainera,* ***funtsezko garrantzia*** *badute" (AGE, 1993ko maiatzaren 27koa, RJ 1993\102040).*

10. Ondorengo erabakietan zehaztu dituzte kasu horiek; horrela bada, Auzitegi Gorenaren 2009ko martxoaren 10eko Epaiak (AGE – RJ\2009\5110) honako hau nabarmentzen du: "ez da beharrezkoa Estatuko Kontseiluari beste kontsulta bat egitea testua orrazten badute edo ***funtsezkoak ez diren aldaketak*** *egiten badituzte (...), ezta proiektuaren eta behin betiko testuaren arteko desadostasunak egiteko prozeduraren ondorio logikoak badira; horren barruan, izan ere, hainbat organok txostenak egiten dituzte eta aldaketak eragiten dituzte horiek azkenean onartzen den xedapenean. Gaineratu daiteke, orobat, Salaren doktrinak berak nabarmendu duela xedapen orokorrak egiteko ezarritako prozedurako bermeen interpretazio funtzional eta teleologikoa egiteko beharra . Horiek ez baitaude justifikatuta egitearen formalismo hutsagatik, duten xedeagatik baizik, eta haien balorazioan dena delako xedapen orokorraren berezitasunak hartu behar dira kontuan (...)".*

11. AGE horrek, 2009ko martxoaren 10ekoak, gogorarazten du, orobat, Auzitegi Gorenaren jurisprudentzia dela (AGE, 2006ko martxoaren 8koa) xedapen orokor baten behin betiko testuan erantsitako aldaketak ***funtsezkoak ez direnean*** *ez dela beharrezkoa beste entzunaldi bat egitea xedapenaren xedearekin harreman zuzena duten interes legitimoak ordezkatzen dituzten elkarte, korporazio edo erakundeei, ezta Estatuko Kontseiluaren txosten edo irizpen berri bat egitea ere; "besteak beste, haien iritzia loteslea ez delako, hortaz, aldaketa ikuspegi erlatibotik –txostena jasotako testuaren berrikuntzagatik– zein ikuspegi absolututik –berezko garrantziagatik– aztertu ondoren* ***funtsezko aldaketarik*** *ez badakar aldez aurretik entzunaldi-izapidetik igaro edo txostena jaso duen ordenamenduan, egindako aldaketari dagokionez horiek ez egiteak ez dakar haren deuseztasun erradikalik, xedapena behin betiko idazteko ahalmena duenak kontsultatutako erakundeen, korporazioen, elkarteen eta erakundeen irizpidea edo ilustrazioa izan baitu, eta hori da, funtsean, bilatutako xedea (...) erregelamenduak egiteko prozedura ezartzean (...)".*

12. Eta 2001eko urtarrilaren 31ko AGEak aldarrikatzen du, orobat, 1993ko maiatzaren 27ko epaiari erreferentzia eginda, han egindako aldaketak baloratuz, aldaketa horiek ez zutela Estatuko Kontseiluaren irizpen berririk behar, "bateragarri egin behar baitira irizpen horren izaera finala, aurretik azaldutako gai guztiak eta egindako txosten espezifiko guztiak laburbiltzen dituen judizio modura, eta Gobernuaren erregelamenduak egiteko ahala baliatzea (...); eta hori kenduko zitzaion irizpen horren behin betiko idazketara hitzez hitz egokitu behar izanez gero, irizpena emateko igorritako proiektuan jaso gabeko gaiak arautzen baziren edo haren antolaketa ***guztiz edo funtsean ezberdina*** *bazen –betiere horiek Estatuko Kontseiluak berak iradoki ez bazituen– baino ez zen alderdi horiei buruzko txosten berri bat eskatu behar, erregelamenduak egiteko ahalaren titularrak baitu Estatuko Kontseilura igorritako testuan azken idazketarako egoki deritzen erreformak gehitzeko ahalmena, adierazitakoa beste mugarik gabe (...)".*

13. Aurreko doktrina erabat indarrean dago, 2016ko abenduaren 22ko AGE irakurrita ondoriozta daitekeenez (RJ 2017/106).

14. Egokia da, horrenbestez, kontsultara aurkeztutako proiektuaren testua aztertzea berrikuntzen eta aurreko irizpenaren gogoeten arteko loturari buruzko irizpenari jarraikiz, hau da, Batzordearen irizpenaren iradokizunen ondorio diren edo, horrekin zerikusirik izan gabe, nahitaezko esku-hartze berri bat eskatzen duen ***funtsezko garrantzia*** *duten».*

17. Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren txostenari dagokionez, Lege Garapen eta Arau Kontrolerako Zuzendaritzak ere ondorioztatzen du txosten hori nahitaezkoa dela Gobernu Kontseilura aurkeztu nahi den Legearen aurreproiektu orori dagokionez. Eusko Legebiltzarraren Erregelamenduaren 133. artikuluak berariaz aipatutako txostena da, eta Euskal Autonomi Elkarteko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legearen 25.1 artikuluan ere badago, baita orain errepikatu behar ez ditugun legegintzako eta erregelamenduzko beste xedapen batzuetan ere.

18. Aurrekoa ezarrita, honako galdera hau egin behar dugu, Lege Garapen eta Arau Kontrolerako Zuzendaritzak egiten duen modu berean: Beharrezkoa al da Kontrol Ekonomikoko Bulegoak beste txosten bat egitea Gobemu Kontseiluak jada onartutako Legearen proiektu bati buruz? Edo aski izan liteke aldez aurretik egindako txostenarekin? Zuzendaritza horren irizpide juridikoa honako hau da:

Lehena.- Ekonomia- eta arau-kontrol horren gaineko araudiak ez du berariaz xedatzen gaiari berriz heldu beharra dagoenik. Euskal Autonomi Elkarteko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko Legearen (ekainaren 30eko 14/1994) 27.1 artikuluak *in fine* baino ez ditu aipatzen Aholku Batzorde Juridikoak irizpena eman behar duen kasuak, eta, organo hori irizpena ematen azkena denez, *«Kontrol Ekonomikoko Bulegoari jakinarazi beharko zaizkio organo aholku-emaile horren irizpenak jasotako iradokizun eta proposamenen ondorioz lege-aurreproiektuetan eta arau-proiektuetan egin daitezen aldaketak, onartu baino lehen».* Hau da, gehitutako aldaketa baino ez dute jakinarazi beharko, bestelako izapiderik gabe. Ez da irizpen berri bat formalizatu behar.

Bigarrena.- Aholku Batzorde Juridikoaren iritziz ez bada bidezkoa Gobernu Kontseiluak jada onartuta eta Legebiltzarrera igorrita dagoen Legearen proiektu bat berriz igortzeari buruzko irizpena ematea, bidezko ere ez dirudi Kontrol Ekonomikoko Bulegoak egin dezan. Eta Aholku Batzorde Juridikoak Legearen proiektu horri buruzko irizpena eman behar duela erabakiko balu ere, ez dirudi bidezkoa denik Kontrol Ekonomikoko Bulegoak irizpena ematea, haren irizpena edo iritzia, baita erantsitako aldaketak ere, halakorik balego, egoki diren legezko ondorioetarako jakinaraz diezazkioten alde batera utzi gabe.

III.- AURREKO LEGE-PROIEKTUAREN ARAU-BIDERAGARRITASUNA. AURREKO LEGE-PROIEKTUAREKIN EGINDAKO ADMINISTRAZIO-IZAPIDEEN INDARRALDIA

19. Adierazi dugu jada Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak Gobernu Kontseilura aurkez dezakeela Kiroleko Dopinaren Aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legea aldatzeko Legearen proiektua, aurreko Gobernu Kontseiluan, 2016ko urtarrilaren 26ko bilkuran, onetsi zena. Aurreko Legearen Proiektuaren arau-bideragarritasuna baieztatu behar du horretarako, hots, igorri ondoren onartutako arauek ez diotela eragin.

20. Gure iritziz, Kiroleko Dopinaren Aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legea aldatzeko Legearen proiektuak, Gobernu Kontseiluak 2016ko urtarrilaren 26an onetsi zuenak, ez du eraginik izan igorri ondoren onartutako arauen aldetik. Gobernu Kontseiluak onartu zuenetik urtebete baino apur bat gehiago igaro da eta Estatuan eta EAEn deitutako hauteskundeen ondorioz lege-jarduerarik ez da izan aldi batez; hala eta guztiz ere, 2017ko otsailaren 18an, Estatuko Aldizkari Ofizialean honako hau argitaratu zen: otsailaren 17ko 3/2017 Errege Lege Dekretua, ekainaren 20ko 3/2013 Lege Organikoa (kirol-jardunean kirolarien osasuna babesteari eta dopinaren aurka borrokatzeari buruzkoa) aldatzen duena, eta 2015eko Dopinaren aurkako Mundu Kodeak sartutako aldaketetara egokitzen dena. Eta 2017ko martxoaren 18an aipatutako Errege Lege Dekretua baliozkotzeko erabakia, Diputatuen Kongresuak hartua, argitaratu zen Estatuko Aldizkari Ofizialean.

21. Aipatutako Errege Lege Dekretu horren zioen azalpenean Estatuko legeria-aldaketaren aurrekariak eta helburuak laburbiltzen dira, eta horiek dira, funtsean, Kiroleko Dopinaren Aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legea aldatzeko Legearen proiektuak bilatzen zituenak; EAEko legeria nazioarteko araudira egokitzea, alegia:

«Eguneratze horiek, ordea, aurki motz gelditu ziren gure araudia gero eta indartsu eta zorrotzagoa den nazioarteko legeriara egokitzeko. Egoera horrek Osasuna Babesteko eta Kiroleko Dopinaren Aurkako Lege Organikoa (azaroaren 21eko 7/2006) onartzea ekarri zuen, eta hura aldarrikatzea dopinaren aurkako borrokaren historiaren funtsezko mugarri bat izan zen gure antolamendu juridikoan. Lehen arau hark xedapen-sistema oso bat jasotzen zuen, eta adierazten zuen dopina babestu beharreko hainbat ondasun juridikori eragiten zien gaitza zela; horien artean kirolarien osasuna, kiroleko joko garbia eta haren dimentsio etikoa zeuden, besteak beste.

Nazioartean segidan izan ziren aldaketek mugarria izan zuten, Legea aldarrikatu eta hilabete gutxi batzuetara, Unescoren kiroleko dopinaren aurkako Nazioarteko Hitzarmenaren berrespenean; Munduko Kodearen printzipioak jaso zituen horrek, eta gai horri buruzko nazioarteko araudia harmonizatzeko aukera eman zuen horrela. Dopinaren aurkako borrokan hainbat betebehar jarri zizkien testu horrek berau berretsi zuten Estatuei; besteak beste, Dopinaren Aurkako Munduko Kodearen eraginkortasuna bermatu beharra zuten estatu kideek.

Dopinaren Mundu Kodea 2009ko urtarrilean aldatuta, ordutik Espainiako testuaren eta Kodearen xedapen berrien artean azaleratuko ziren arau-inkongruentziak zirela kausa, beharrezko jo zen lege berri bat aldarrikatzea, 2006ko aurrekoa ordez zezan eta nazioarteko testuen eskaera eta arau berriei erantzuna eman ziezaien. Espainiako Araudia Dopinaren Aurkako Munduko Kodera nahitaez egokitu beharrak egoera hori arinduko zuten lege-arloko neurri berriak hartzea ekarri zuen, eta, era horretan, ekainaren 20ko 3/2013 Lege Organikoa (kirol-jardunean kirolarien osasuna babesteari eta dopinaren aurka borrokatzeari buruzkoa) onartu zen.

Dopinaren Aurkako Munduko Kodearen idazketa berri bat jarri zen indarrean 2015ean, alabaina, eta aldendu egin zuen Espainiako araudia berriz ere Unescoren kiroleko dopinaren aurkako Nazioarteko Hitzarmenak aldarrikatzen duen sistema harmonikotik. Eta hori, nahiz eta, 2013ko Legea idazteko orduan, taxutzen ari ziren Dopinaren Aurkako Munduko Kodeari zegokionez orduan zeuden zirriborroak aintzat hartu zituzten.

Espainiako legegileek 2013an aintzat hartu zituzten azken zirriborroen aldean Dopinaren Aurkako Munduko Kodearen azken testuan zeuden aldaketen ondorioz, urte eta erdian baino ez da atxiki irrikatutako harmonizazio eta kontzertu hura.

Jarduneko gobernuaren aldi luzean zehar –2016an– behar zen lege-erreforma Gorte Nagusietara igorri ezin izan bazen ere, Munduko Kodearen berritasunen berri ematearren, 2016ko martxoaren 11ko Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen Dopinaren Aurkako Munduko Kodearen azken bertsioa, eguneratuta eta, 2015eko urtarrilaren 1etik indarrean, Parisen 2005eko azaroaren 18an eginiko Kiroleko Dopinaren Aurkako Nazioarteko Hitzarmenaren 1. eranskina baitzen.

Oraingoan, 2015eko Dopinaren Aurkako Munduko Kodearen idazketak barnean hartutako arau berriak aplikatuta, hain zuzen ere, desadostasun horrek, ondorio modura, Dopinaren Aurkako Munduko Agentziak "kodea ez betetzea" formalki deklaratzea ere eragin du, haren 23. artikuluan aurreikusitakoari jarraikiz. Hori dela eta, legea aldatu beharra dago jatorrizko idazketan aurreikusi ezin izan ziren alderdiak, gutxi batzuk, 2013ko testuan jaso ahal izateko; horrelakoak Munduko Kodean azkenean sartzeak bi legerien arteko diskordantzia ekarri baitu.

Hori horrela, Gobernuak araudian premiaz eta ezohiko eran esku hartzea guztiz justifikatuta dago Dopinaren Aurkako Munduko Kodearen bertsio berria barneko araudira ez gehitzeak izandako eraginen garrantziagatik, horrek, izan ere, zuzeneko eragina du kirolaren arloko politika publikoak antolatu, planifikatu eta garatzeko maila guztietan, baita kirolaren jardun profesional eta amateurrean zein kirolean aritzen direnen osasunerako eskubidean ere. Hortaz, araudian esku hartzeak saihestu egiten ditu Kodea ez eransteak kirola eta kirolarien osasuna sustatzeari lotutako interes orokorrean eragingo zituzkeen berehalako kalteak. Gizarteak, izan ere, biziki bultzatu ditu balio horiek azken urteotan, eta gero eta baliabide handiagoak bideratzen ditu horretara banako zein gizartearentzat duen garrantziagatik».

22. Hots, Estatuko legegileak zioen azalpen horretan adierazten du, hain zuzen ere, lege-aldaketa berri bat egin beharra zegoela 3/2013 Lege Organikoaren testuaren barruan nazioarteko araudiarekin bat ez zetozen alderdiak, gutxi batzuk, sartzeko; 2015ean Dopinaren Aurkako Munduko Kodearen idazketa berri bat jarri baitzen indarrean, eta horrek berriz ere aldentzen zuen Espainiako araudia UNESCOren kiroleko dopinaren aurkako Nazioarteko Hitzarmenak aldarrikatzen duen sistema harmonikotik.

23. 3/2013 Lege Organikoa aldatzeak ez dio eragiten Gobernu Kontseiluak 2016an onetsi zuen Kiroleko Dopinaren Aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legea aldatzeko Legearen proiektuari, hainbat arrazoirengatik:

Lehena.- Eusko Legebiltzarrak Kiroleko Dopinaren Aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legea onartu ondoren, Estatuak ekainaren 20ko 3/2013 Lege Organikoa (kirol-jardunean kirolarien osasuna babesteari eta dopinaren aurka borrokatzeari buruzkoa) onartu zuen, zeinak «Estatuaren eskumena aldarrikatzen zuen bere antolaketari buruzko manuak emateko, bai eta Estatuko kirol federatuaren interesei dagozkienak emateko ere». EAEko 12/2012 Legeak ez zion Estatuko antolaketari heltzen, eta ez zuen Estatuko kirol federatuan eraginez arautzen. Horregatik, 3/2013 Lege Organikoa onartu ondoren, haren azken xedapenetatik bigarrenean aipatutako manu batzuen izaera organikoa gorabehera, Lege Organikoak Eusko Legebiltzarraren 12/2012 Legea egokitzera behartzen ez zuela jo zen; bi legeak eremu objektibo eta subjektibo bereizietan proiektatzen dira. Izan ere, Aholku Batzorde Juridikoak, 5/2016 Irizpena, Kiroleko Dopinaren Aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legea aldatzeko Legearen proiektuari zegokienez, honako hau adierazi zuen: «Funtsean, indarreko Kiroleko Dopinaren aurkako Legea aipatutako munduko kode berrira (Johannesburgon, Hegoafrikan, 2013ko azaroaren 12tik 15era egin zen Dopinaren aurkako Munduko IV. Konferentzian onartu zena eta 2015eko urtarrilaren 1ean sartu zena indarrean) egokitzeko betebeharrari erantzuten dion aldaketa bat da» eta horregatik «testuak, aurrez adierazitakoa transkribatzera mugatzen den neurrian, ez du hura gai horretan indarrean den ordenamenduan behar bezala txertatzea eragozten duen ezadostasunik».

Bigarrena.- Kiroleko Dopinaren Aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legea aldatzeko Legearen proiektuak erabiltzen duen literatura 3/2017 Errege Lege Dekretuan erabilitakoarekin ez datorrela bat egia izanik ere, egia ere bada indarrean den EAEko 12/2012 Legearen literatura ere ez datorrela bat 3/2013 Lege Organikoarenarekin, Errege Lege Dekretua 2017an onartu aurreko idazketan. Eta Gobernu Kontseiluak, 2016ko urtarrilaren 26ko bilkuran, Aholku Batzorde Juridikoaren aldeko irizpenarekin, onartutako lege-proiektua ere ez zetorren bat aurreko 3/2013 Lege Organikoarekin, eta horrek baieztatzen du eskumen-titulu ezberdinekin emandako bi arau-

gorputz direla, Estatukoa eta autonomiakoa, eremu subjektibo eta objektibo bereiziak ere badituztenak.

Hirugarrena.- Legeria nazioarteko esparrura, Dopinaren Aurkako Munduko Kodera zehazki, harmonizatzeko helburua betetzen saiatzen dira bi legegintza-testuak, Gobernu Kontseiluak 2016ko urtarrilaren 26an onartutako lege-proiektua eta otsailaren 17ko Errege Lege Dekretua. Testu bereiziak erabili dituzte horretarako, baina sinatu duten herrialdeek ere egin dituzte egokitzapenak legegintza-testu oso bereiziekin.

24. Aurretik esandakoa alde batera utzi gabe, gure egiten dugu Lege Garapen eta Arau Kontrolerako Zuzendaritzak adierazitakoa, hots: «*Antolamenduaren gainean ondoren egindako balizko aldaketa batek, proiektuari eragiten dionak, duen garrantzia ere erlatiboki aztertu behar da, lege-proiektua, prozedura parlamentario bilakatu eta ganberara igorri ondoren ere, izapidetu behar baitute egoitza horretan. Horien barruan, azken onespena eman eta Lege bihurtu aurretik, zuzenketak egin diezazkiokete Ganberan; eta, horrenbestez, une horretan ere egin ahal izango dira bidezkoak diren egokitzapenak».* Hau da, Legearen proiektua **antolamenduaren gainean gerora egindako balizko aldaketa** batera egokitzeko proposamenak ere izapidetu daitezke parlamentuko zuzenketen bitartez.

25. Aurretik esandako guztia gorabehera, ondorioztatu beharra dago indarrean direla Kiroleko Dopinaren Aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legea aldatzeko Legearen proiektua onartzeko orduan –Gobernu Kontseiluak 2016ko urtarrilaren 26ko bilkuran onetsita– egin ziren administrazio-izapide guztiak.

FIRMADO DIGITALMENTE POR:

Firmante: **JON REDONDO LERTXUNDI**
Fecha de la firma: **26/01/2016 9:32:31**
Validación de la firma: **Correcta**

MEMORIA DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE

1.- OBJETIVO PERSEGUIDO CON LA REGULACIÓN PROPUESTA

Las prácticas de dopaje constituyen una vulneración de los principios fundamentales de la ética deportiva. Pero el fenómeno del dopaje, además de constituir un grave engaño deportivo, se ha convertido en un conjunto de prácticas que pueden ser muy peligrosas para la salud pública, y especialmente para la vida de los deportistas más jóvenes, que son los protagonistas habituales del deporte de rendimiento. El dopaje ha sobrepasado el marco exclusivo de la ética deportiva para convertirse en un auténtico problema de salud pública, tal y como reconocen todos los organismos internacionales, especialmente en la Unión Europea. El recurso a sustancias o métodos prohibidos contradice la finalidad misma del deporte y en la mayoría de las ocasiones atenta contra la propia salud. El dopaje simboliza la antinomia del deporte y de los valores y fundamentos que siempre se han predicado del mismo.

En este contexto, el Parlamento Vasco aprobó la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte, Este Parlamento Vasco aprobó la Ley 12/2012, de 21 de junio, que se basó en los principios comúnmente aceptados por los organismos internacionales más avanzados en la lucha de contra el dopaje en el deporte. La estructura piramidal del deporte de competición y la interrelación de las competiciones deportivas en sus distintos ámbitos y niveles territoriales exigía un marco jurídico común en la lucha contra el dopaje en el deporte.

Sin embargo, en la IV Conferencia Mundial Antidopaje que se celebró en Johannesburgo, Sudáfrica, los días 12 a 15 de noviembre de 2013, con asistencia de una representación del propio Gobierno Vasco, se aprobó un nuevo Código Mundial Antidopaje que entrará en vigor el 1 de enero de 2015. Por ello, el anteproyecto que se pretende elaborar responde a la obligación de adecuar la vigente Ley 12/2012, de 21 de junio, al citado nuevo Código Mundial.

La iniciativa normativa viene a garantizar el principio de seguridad jurídica en la medida que se desea crear en el ya complejo ámbito jurídico de la lucha contra el dopaje un entorno de certidumbre y evitar colisiones con el marco jurídico internacional, que demanda una armonización. Tras la aprobación, por la UNESCO, en su sesión de 19 de octubre de 2005, de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, que fue ratificada por España y publicada en el Boletín Oficial del Estado, dicha Convención Internacional forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno, conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución. Aunque el texto del Código Mundial Antidopaje no forma parte integrante de la Convención, ésta establece expresamente, con miras a coordinar en el plano nacional e internacional las actividades de lucha contra el dopaje en el deporte, la obligación de las legislaciones nacionales de respetar los principios del Código.

Asimismo, debe señalarse que otro de los objetivos de la iniciativa normativa es aprovechar la modificación de la Ley 12/2012 para reconocer expresamente a la Agencia Vasca Antidopaje como el órgano especializado encargado de desarrollar las funciones atribuidas en el artículo 10 de la Ley 12/2012 a la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, encarnando la representación de la organización antidopaje en el País Vasco. La Agencia Vasca Antidopaje ya figura expresamente reconocida en el Decreto 193/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional de este Departamento, como un servicio de la Dirección de Juventud y Deportes.

Por último, el texto incorpora el contenido del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley del País Vasco 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte.

2. - SECTORES SOCIALES QUE RESULTAN AFECTADOS

Las prácticas de dopaje constituyen una vulneración de los principios fundamentales de la ética deportiva. Pero el fenómeno del dopaje, además de constituir un grave engaño deportivo, se ha convertido en un conjunto de prácticas que pueden ser muy peligrosas para la salud pública, y especialmente para la vida de los deportistas más jóvenes, que son los protagonistas habituales del deporte de rendimiento. El dopaje ha sobrepasado el marco exclusivo de la ética deportiva para convertirse en un auténtico problema de salud pública, tal y como reconocen todos los organismos internacionales, especialmente en la Unión Europea. El recurso a sustancias o métodos prohibidos contradice la finalidad misma del deporte y en la mayoría de las

ocasiones atenta contra la propia salud. El dopaje simboliza la antinomia del deporte y de los valores y fundamentos que siempre se han predicado del mismo.

Tal y como se constata en el documento *Modelo de Deporte Europeo*, elaborado en el seno de la Comisión Europea, tanto en el deporte profesional como en el aficionado existe actualmente un extraordinario clima competitivo donde el creciente uso de sustancias y métodos prohibidos para aumentar el rendimiento de los deportistas se ha convertido en uno de sus principales problemas. El desarrollo progresivo que va experimentando el dopaje resulta inquietante tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. Por un lado, los estudios revelan que es considerable el número de deportistas que recurren a métodos y sustancias prohibidas y, por otro lado, las prácticas de dopaje ya no son la expresión de un comportamiento individual de los deportistas, sino el resultado de acciones organizadas y de mercados.

En consecuencia, la regulación propuesta afecta a la sociedad en general y al sector deportivo, en particular.

3.- PRESUPUESTOS JURÍDICOS HABILITANTES DE LA NORMATIVA PROPUESTA

El Parlamento Vasco a través de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte ya reguló esta materia en el ejercicio de su plena competencia tal y como se menciona en el apartado 4 de esta memoria.

Con el presente Anteproyecto se pretende la modificación del citado texto normativo como consecuencia de la obligatoria adaptación de la normativa antidopaje al marco jurídico internacional, concretamente al Código Mundial Antidopaje.

4.- FUNDAMENTO DE LA COMPETENCIA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA PARA INICIAR LA TRAMITACIÓN DEL ANTEPROYECTO

La Comunidad Autónoma del País Vasco, de acuerdo con el artículo 10.36 del Estatuto de Autonomía, ostenta competencia exclusiva en materia de deporte. En ejercicio de dicho título competencial, el Parlamento Vasco aprobó la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, que en su artículo 4.2.q atribuye a las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma la regulación de la prevención, control y represión del dopaje. Asimismo, el Parlamento Vasco aprobó la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte, que es la que ahora se pretende modificar para su adecuación al marco jurídico internacional.

Las únicas dudas competenciales surgidas con ocasión de la Ley 12/2012 fueron resueltas por la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado –

Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, cuyo acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial del País Vasco con fecha de 25 de abril de 2013.

En resumen, no cabe albergar dudas sobre la competencia que se ostenta por parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco para llevar a buen fin esta iniciativa normativa.

Respecto a la competencia de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura para iniciar la tramitación del anteproyecto de Ley referido en esta memoria, se fundamenta en el Decreto 193/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, cuyo artículo 4.1 dispone que *"Corresponderá a la Consejera o Consejero de Educación, Política Lingüística y Cultura el ejercicio de las competencias establecidas en los artículos 26 y 28 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre la Ley de Gobierno, y cuantas otras le atribuya la legislación vigente…"* Entre estas competencias se encuentra al de proponer para su aprobación por el Gobierno, proyectos de Ley en materias propias de su competencia.

A este respecto, el propio Decreto 193/2013 establece en su artículo 28.1 a) que corresponde a la Dirección de Juventud y Deportes, integrada dentro de dicho Departamento, "*analizar las necesidades y proponer las medidas normativas que corresponden a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en materia de deporte….*".

5.- DETERMINACIÓN DEL GRADO DE VINCULACIÓN DE CADA UNO DE LOS AFECTADOS EN LOS TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE LA NORMA Y EN SU CASO LA NECESIDAD DE TRÁMITE DE AUDIENCIA PÚBLICA

El grado de vinculación de los diversos participantes en la tramitación del proyecto afectará a:

1) **Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura**: Órdenes de inicio y aprobación del procedimiento para la elaboración del anteproyecto de Ley.

2) **Dirección de Régimen Jurídico y Servicios del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura**: Informe, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.3 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General.

3) **Trámite de audiencia e información pública:** Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General, se enviará a:
   - Unión de Federaciones Deportivas Vascas.
   - Asociación de Federaciones Deportivas de Álava.
   - Asociación de Federaciones Deportivas de Bizkaia.
   - Asociación de Federaciones Deportivas de Gipuzkoa.
   - Federaciones Vascas (totalidad de las existentes: 48).
   - Diputación Foral de Álava.
   - Diputación Foral de Bizkaia.
   - Diputación Foral de Gipuzkoa.
   - Sociedad Vasca de Medicina del Deporte-Ekime.
   - Colegio Oficial de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
   - Colegio Oficial de Médicos (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa).
   - Colegio Oficial de Farmacéuticos (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa).
   - Colegio Oficial de Veterinarios (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa).
   - Dirección de Salud Pública.
   - Agencia Vasca de Protección de Datos.
   - Agencia Estatal Antidopaje.

   Además se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco un anuncio por el que se de trámite de audiencia por plazo de 20 días hábiles.

4) **Consejo Vasco del Deporte**: Informe, según lo establecido en el artículo 4 b) del Decreto 220/2000, de 7 de noviembre, por el que se regula el citado órgano.

5) **Comité Vasco contra la Violencia en el Deporte**: Informe, conforme a lo estipulado en el artículo 3 e) del Decreto 94/2004, de 25 de mayo, por el que se regula el citado Comité.

6) **Instituto Vasco de la Mujer/Emakumearen Euskal Erakundea**: Informe, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, y con el artículo 3 d) de la Ley 2/1988, de 5 de febrero, sobre creación del citado Instituto.

7) **Dirección de Normalización Lingüística**: Informe, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 3 del Decreto 233/2012, de 6 de noviembre, por el que se establece el régimen de inclusión de la perspectiva de normalización del uso del euskera en el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general.

8) **Oficina de Control Económico**: Informe económico-normativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

9) **Comisión Jurídica Asesora de Euskadi**: Informe, de conformidad con lo dispuesto el artículo 3. 1 a) de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

6.- LÍNEAS GENERALES DE LA REGULACIÓN PROPUESTA

Tal y como ya ha quedado reflejado en el primer apartado de esta memoria el anteproyecto que se pretende elaborar responde a la obligación de adecuar la vigente Ley 12/2012, de 21 de junio, al nuevo Código Mundial Antidopaje aprobado en la IV Conferencia Mundial Antidopaje que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2015.

Como modificaciones más relevantes del nuevo Código se pueden destacar las siguientes:

- En la tipificación de las infracciones en materia de dopaje, el nuevo Código mantiene las infracciones del vigente Código de 2009, pero se añaden nuevas conductas penadas.
- Se incluye la posibilidad de que las muestras biológicas sean analizadas por laboratorios que no cuenten con la acreditación de la Agencia Mundial Antidopaje, pero sí con su aprobación.
- Se modifican las sanciones incrementándose de forma sustancial los periodos de suspensión.
- El nuevo Código Mundial Antidopaje establece un nuevo periodo de prescripción de 10 años.

Se pretende que el anteproyecto de ley contenga un artículo único con diversos apartados en los que se recojan las diferentes modificaciones del articulado de la actualmente vigente ley contra el Dopaje en el Deporte, así como las correspondientes disposiciones transitorias y finales, trasladando a nuestra normativa la nueva regulación mundial.

Asimismo, se reconocerá la Agencia Vasca Antidopaje, órgano que fue adscrito al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva, como el órgano especializado encargado de desarrollar las funciones atribuidas en el artículo 10 de la

Ley a la Administración Pública del País Vasco, actuando como la organización antidopaje del País Vasco.

Por último, el texto incorpora el contenido del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley del País Vasco 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte.

7.- INCIDENCIA ECONÓMICA DEL ANTEPROYECTO DE LEY.

En la medida que simplemente se trata de una modificación de la Ley 12/2012 contra el Dopaje en el Deporte y tal modificación se ciñe, fundamentalmente, a la tipificación de las infracciones en materia antidopaje, al régimen de sanciones, al periodo de prescripción de las infracciones y cuestiones análogas, debe afirmarse que no existe incidencia en los presupuestos de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ni en el sector de actividad a la que va dirigida la ley.

La modificación legislativa no acarrea la creación expresa de nuevas estructuras entidades u organismos. Tampoco contempla el establecimiento de nuevos servicios, por lo que no existe impacto económico alguno.

Aún cuando se aprovechará la modificación de la Ley 12/2012 para reconocer expresamente a la Agencia Vasca Antidopaje como el órgano especializado encargado de desarrollar las funciones atribuidas en el artículo 10 de la Ley a la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, no nos encontramos ante la creación de una nueva organización, pues la Agencia Vasca Antidopaje ya figura en el Decreto 193/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional de este Departamento, como un servicio de la Dirección de Juventud y Deportes, y viene actuando desde entonces con unos determinados recursos humanos y materiales. No obstante, la evaluación de su coste económico futuro se deberá concretar en el momento del desarrollo reglamentario de la Ley, ya que en él se determinará su organización.

En resumen, el nuevo texto legal de adaptación de la Ley 12/2012 no conlleva necesariamente un incremento de personal o de medios materiales y, por tanto, no supone un incremento significativo de gastos o una disminución de los ingresos públicos. Por tanto, las repercusiones presupuestarias directas de la nueva norma modificativa son inexistentes. Cuestión diferente es la necesaria dotación de medios humanos y materiales para que el Gobierno Vasco pueda desarrollar y aplicar satisfactoriamente la Ley 12/2012.

8.- IMPACTO DE GÉNERO

La Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres, dispone en su artículo 19 que, antes de acometer la elaboración de una norma, el órgano administrativo que lo promueva ha de evaluar el impacto potencial de la propuesta en la situación de las mujeres y en los hombres como colectivo. Y ha de analizar si la actividad proyectada en la norma puede tener repercusiones positivas o adversas en el objetivo de eliminar desigualdades entre mujeres y hombres y promover su igualdad.

En la medida que esta sucinta memoria trata de justificar la oportunidad y conveniencia de la elaboración de la ley, es decir, se corresponde con la orden de iniciación del procedimiento, siempre resulta difícil determinar en esta fase inicial el potencial impacto por razón de género que conllevará la futura ley. Será el correspondiente estudio monográfico, una vez elaborado el texto articulado, el que deberá concretar tal impacto por razón de género.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de que la memoria final del proyecto legislativo deba ir acompañada de dicho estudio detallado sobre el impacto de género, procede adelantar que, dados los objetivos de la Ley, que son la adecuación de la Ley 12/2012, de 21 de junio, al Código Mundial Antidopaje, fundamentalmente en materia sancionadora, no resulta previsible un impacto significativo por razón de género y no se concibe que la modificación favorezca situaciones discriminatorias o que pueda afectar sustancialmente de modo diferente al colectivo de hombres y mujeres.

9. VALORACIÓN DE LAS ALEGACIONES RECIBIDAS Y LOS INFORMES REALIZADOS AL ANTEPROYECTO DE LEY SOBRE MODIFICACIÓN DE LA LEY CONTRA EL DOPAJE.

Dada la extensión de este apartado es preciso remitirse al informe anexo a esta memoria denominado “Informe de valoración de las alegaciones recibidas y los informes realizados al anteproyecto de ley de modificación de la Ley contra el dopaje”

Jon Redondo Lertxundi
Director de Juventud y Deportes

KIROLEKO DOPINAREN AURKAKO LEGEA ALDATZEKO LEGE-AURREPROIEKTUARI BURUZKO MEMORIA

1.- PROPOSATUTAKO ARAUAREN BIDEZ BETE NAHI DEN XEDEA

Dopin-jardunek kirol-etikaren oinarrizko printzipioak urratzen dituzte. Baina dopin-fenomenoa, kirol-iruzur larria izateaz gain, osasun publikorako oso arriskutsua bilakatu da, eta, bereziki, kirolari gazteenen bizitzarako, horiek baitira errendimenduko kirolaren ohiko protagonistak. Dopinak kirol-etikaren esparru esklusiboa gainditu du, eta osasun publikorako benetako arrisku bilakatu da; hala adierazi dute nazioarteko erakunde guztiek, bereziki Europar Batasunean. Debekatuta dauden substantziez edo metodoez baliatzea kontraesanean dago kirolaren helburuarekin, eta, gehienetan, osasunari berari egiten dio kalte. Kirolaren beraren nahiz kirolaren funtsezko balio eta oinarrien antinomia da dopina.

Testuinguru horretan, Eusko Legebiltzarrak Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legea onartu zuen 2012. urtean, eta, horretarako, kiroleko dopinaren aurkako borrokan estatuan eta nazioartean aurreratuen dauden erakundeek onartutako printzipioak erabili ziren. Lehiaketa-kirolaren egitura piramidala denez, eta kirol-lehiaketek elkarren artean lotura dutenez lurralde-eremuetan eta -mailetan, esparru juridiko komuna behar da kiroleko dopinaren aurkako borrokan aritzeko.

Baina 2013ko azaroaren 12tik 15era Dopinaren aurkako IV. Mundu Konferentzia egin zen Johannesburgen, Hegoafrikan, eta Eusko Jaurlaritzaren ordezkariak ere izan ziren han. Konferentzia hartan, Dopinaren aurkako Mundu Kode berria onartu zen, eta 2015eko urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean. Horregatik, egin nahi den aurreproiektuak indarrean dagoen ekainaren 21eko 12/2012 Legea aipatutako Dopinaren aurkako Mundu Kode berrira egokitzeko betebeharrari erantzuten dio.

Arau-ekimenaren helburua da segurtasun-juridikoaren printzipioa bermatzea, dopinaren aurkako borrokan berez oso konplexua den eremu juridikoan ziurtasun-ingurune bat sortu nahi baita, eta talka ez egitea nazioarteko eremu juridikoarekin —harmonizatzea eskatzen du—. UNESCOk, 2005eko urriaren 19an egindako bileran, Kiroleko Dopinaren Aurkako Nazioarteko Konbentzioa onartu zuen. Eta Espainiak berretsi eta Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zuen, eta nazioarteko konbentzio hori gure ordenamendu juridikoaren atal da, Konstituzioaren 96. artikuluan xedatutakoaren arabera. Nahiz eta Dopinaren aurkako Mundu Kodea ez izan konbentzioaren zati bat, konbentzioak espresuki adierazten du estatuetako legediak behartuta daudela kodeko printzipioak errespetatzera, kiroleko dopinaren aurkako borrokarako ekimenak estatuan eta nazioartean koordinatzeari begira.

Halaber, aipatu behar da arau-ekimenaren beste helburuetako bat 12/2012 Legearen aldaketa baliatzea dela Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia berariaz aitortzeko 12/2012 Legeak 10. artikuluan Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrari esleitzen dizkion eginkizunak betetzeko organo espezializatu gisa, EAEko dopinaren aurkako borrokaren antolakuntzaren ordezkari izan dadin. Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 193/2013 Dekretuan espresuki aitortuta dago, Gazteria eta Kirol Zuzendaritzaren zerbitzu moduan.

Azkenik, Euskadiko Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legearen arloan Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Bitariko Lankidetza Batzordearen Akordioaren edukia erantsi da testuan.

2.- - TARTEAN DIREN GIZARTE-SEKTOREAK

Dopin-jardunek kirol-etikaren oinarrizko printzipioak urratzen dituzte. Baina dopin-fenomenoa, kirol-iruzur larria izateaz gain, osasun publikorako oso arriskutsua bilakatu da, eta, bereziki, kirolari gazteenen bizitzarako, horiek baitira errendimenduko kirolaren ohiko protagonistak. Dopinak kirol-etikaren esparru esklusiboa gainditu du, eta osasun publikorako benetako arrisku bilakatu da; hala adierazi dute nazioarteko erakunde guztiek, bereziki Europar Batasunean. Debekatuta dauden substantziez edo metodoez baliatzea kontraesanean dago kirolaren helburuarekin, eta, gehienetan, osasunari berari egiten dio kalte. Kirolaren beraren nahiz kirolaren funtsezko balio eta oinarrien antinomia da dopina.

Europako Kirol Eredua izeneko dokumentuak, Europako Batzordeak eginak, agerian utzi zuen lehiakortasun handia dagoela gaur egun kirol profesionalean zein zaletuen mailan eta, kirolarien errendimendua handitzeko asmoz, gero eta gehiago erabiltzen direla debekatuta dauden substantziak eta metodoak. Hain zuzen, horixe bilakatu da arazo handienetako bat. Dopina edukitzen ari den garapen etengabea kezkagarria da ikuspuntu kualitatibotik nahiz kuantitatibotik. Alde batetik, azterketek adierazten dute kirolari askotxok erabiltzen dituztela debekatutako metodoak eta substantziak, eta, bestetik, dopin-jardunak jada ez dira kirolari bakoitzaren jokabidearen adierazpenak, merkatuen jarduera antolatuen emaitza baizik.

Hortaz, gizarte osoaren eta, bereziki, kirolaren sektorearen gain izango du eragina proposatutako arauak.

3.- PROPOSATUTAKO ARAUA GAITZEN DUTEN OINARRI JURIDIKOAK

Eusko Legebiltzarrak, kiroleko dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legearen bidez, arautu zuen arlo hori, horretarako duen eskumen osoa baliatuz, txosten honen 4. atalean adierazten den bezala.

Aurreproiektu honek testu arautzaile hori aldatu nahi du, dopinaren aurkako araudia ezinbestean egokitu behar baitzaio nazioarteko esparru juridikoari, eta, hain zuzen, Dopinaren aurkako Mundu Kodeari.

4.- AURREPROIEKTUAREN IZAPIDEAK EGITEN HASTEKO HEZKUNTZA, HIZKUNTZA-POLITIKA ETA KULTURA SAILAREN ESKUMENAREN OINARRIA

Euskal Autonomia Erkidegoak, Autonomia Estatutuko 10.36 artikuluaren arabera, eskumen esklusiboa du kirolaren gaian. Eskumen hori baliatuz, Eusko Legebiltzarrak 14/1998 Legea onartu zuen, ekainaren 11koa, Euskadiko kirolarena. Lege horrek, 4.2.q artikuluan, Autonomia Erkidegoko erakunde komunei dopatzea aurrezaintzeko, kontrolatzeko eta zigortzeko arauak ezartzeko eskumenak ematen dizkie. Halaber, Eusko Legebiltzarrak 12/2012 Legea, ekainaren 21eko a, kiroleko dopinaren aurkakoa, onartu zuen, eta horixe da orain aldatu nahi dena nazioarteko esparru juridikoari egokitzeko.

12/2012 Legearen inguruko eskumen-zalantza bakarrak Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Bitariko Lankidetza Batzordeak ebatzi zituen, eta haren erabakia Euskal Herriko Agintzaritzaren Aldizkarian argitaratu zen 2013ko apirilaren 25ean.

Laburbilduz, ez dago zalantzarik Euskal Autonomia Erkidegoak duela arau-ekimen hau gauzatzeko eskumena.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuak txosten honetan adierazitako lege-aurreproiektuaren izapidea hastea erabakitzeko duen eskumena Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 193/2013 Dekretuan oinarritzen da. Izan ere, dekretuaren 4.1 artikuluan hau ezartzen du: *"Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 26 eta 28. artikuluek ezarritako eskumenez baliatzea Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuari dagokio; eta, halaber, ... indarreango legeriak esleitzen dizkion eskumenez baliatzea…"* Eskumen horien artean bere eskumeneko gaietan Gobernuari lege-proiektuak proposatzea dago, hark onar ditzan.

Ildo beretik, 193/2013 Dekretuak 28.1 a) artikuluan ezartzen du sail horren baitako Gazteria eta Kirol Zuzendaritzari dagokiola "*Kirol... politiken arloko beharrizanak aztertzea, eta arauzko neurriak proposatzea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari….*".

5.- ARAUA EGITEKO LANETAN ARTEAN DIREN ERAGILEEN LOTURA-MAILA ZEHAZTEA ETA, HALA BADAGOKIO, ENTZUNALDI PUBLIKOA IZAPIDETZEA

Proiektua bideratzeko lanetan parte hartuko dutenek eginkizun hauek izango dituzte:

1) **Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburua**: Lege-aurreproiektuaren prozedurari ekiteko eta hura onartzeko aginduak ematea.

2) **Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen Zuzendaritza**: Txosten bat egitea, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 7.3 artikuluan araututakoaren arabera.

3) **Entzunaldia eta jendaurrean jartzea:** Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 8. artikuluan araututakoa betez, hauei hauei bidaliko zaie xedapen orokorra:
   - Euskal Kirol Federazioen Batasunari.
   - Arabako Kirol Federazioen Elkarteari.
   - Bizkaiko Kirol Federazioen Elkarteari.
   - Gipuzkoako Kirol Federazioen Elkarteari.
   - Euskal federazioei (48 guztira). 48).
   - Arabako Foru Aldundiari.
   - Bizkaiko Foru Aldundiari.
   - Gipuzkoako Foru Aldundiari.
   - EKIME Euskadiko Kirol Medikuntza elkarteari.
   - Soin Jarduera eta Kirolaren Zientzietako Lizentziatuen Elkargo Ofizialari.
   - Medikuen Elkargo Ofizialari (Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa).
   - Botikarien Elkargo Ofizialari (Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa).
   - Albaitarien Elkargo Ofizialari (Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa).
   - Osasun Publikoko Zuzendaritzari.
   - Datuak Babesteko Euskal Bulegoari.
   - Dopinaren Aurkako Estatuko Agentziari.

   Horiei guztiei bidaltzeaz gain, iragarki bat argitaratuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian. Iragarki horren bidez, 20 egun balioduneko entzunaldiari hasiera emango zaio.

4) **Kirolaren Euskal Kontseilua**: Txostena, azaroaren 7ko 220/2000 Dekretuko 4 b) artikuluak ezarritakoari jarraituz (dekretuak kontseilu hori arautzen du).

5) **Kiroleko Indarkeriaren Aurkako Batzordea**: Txostena, maiatzaren 25eko 94/2004 Dekretuko 3 e) artikuluak ezarritakoari jarraituz (dekretuak batzorde hori arautzen du).

6) **Emakumearen Euskal Erakundea**: Txostena, halaxe ezarri baita Emakume eta Gizonen Arteko Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 21. artikuluan eta aipatutako erakundea sortzeari buruzko otsailaren 5eko 2/1988 Legearen 3. d) artikuluan.

7) **Hizkuntza Normalizaziorako Zuzendaritza**: Txostena, azaroaren 6ko 233/2012 Dekretuak, xedapen orokorrak egiteko prozeduran euskara-erabileraren normalizazioaren ikuspegia txertatzeko araubidea ezartzen duenak, ezarritakoarekin bat.

8) **Kontrol Ekonomikoko Bulegoa**: Ekonomiari eta arauei buruzko txostena, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomi Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legearen 25.2 artikuluan xedatutakoarekin bat.

9) **Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoa**: Txostena, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko azaroaren 24ko 9/2004 Legearen 3.1.a) artikuluan xedatutakoa betez.

PROPOSATUTAKO ARAUTZEAREN ILDO OROKORRAK

Txosten honen lehen atalean jasota geratu den bezala, egin nahi den aurreproiektuaren xedea da orain indarrean dagoen Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legea Dopinaren aurkako Mundu Kode berrira egokitzea (Dopinaren aurkako IV. Mundu Konferentziak onartu zuen eta 2015eko urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean).

Hauexek dira kode berri horrek dakartzan aldaketa esanguratsuenak:

- Dopinaren alorreko arau-hausteen tipifikazioan, indarrean dagoen 2009ko Kodeko arau-hausteak atxikitzen ditu Kode berriak, baina, horietaz gainera, jokabide berri batzuk ere zigortzen ditu.

- Atea irekitzen zaio lagin biologikoen analisiak egiteko aukerari Dopinaren aurkako Mundu Agentziaren nazioarteko egiaztapena ez duten laborategietan, baldin eta agentzia horren onarpena badute.

- Zehapenak aldatu egiten dira, halako moldez non etendura-epeak nabarmen luzatu diren.

- Dopinaren aurkako Mundu Kode berriak 10 urteko preskripzio-epea ezartzen du.

Asmoa da lege-aurreproiektuak artikulu bakarra edukitzea, zenbait atalekin, eta haietan jasotzea gaur egun indarrean dagoen dopinaren aurkako legeari egin zaizkion aldaketak eta dagozkion aldi baterako xedapenak eta azken xedapenak. Horrela, gure araudira ekarriko da munduko araudi berria.

Orobat, Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia, Eusko Jaurlaritzan kirol-arloan eskumena duen sailari atxiki zitzaion organoa, Legearen 10. artikuluan Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoari esleitzen zaizkion funtzioak gauzatzeko organo espezializatu gisa aitortuko da; alegia, Euskadiko dopinaren aurkako erakunde gisa jardungo du.

Azkenik, Euskadiko Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legearen arloan Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Bitariko Lankidetza Batzordearen Akordioaren edukia erantsi da testuan.

7.- LEGE-AURREPROIEKTUAREN ERAGIN EKONOMIKOA

Kiroleko Dopinaren aurkako 12/2012 Legearen aldaketa soilik denez, eta aldaketa horrek zenbait arlo soilik ukitzen dituenez (batez ere, dopinaren arloko arau-hausteen tipifikazioa, zehapen-araubidea, arau-hausteen preskripzio-epea eta antzeko kontuak), esan daiteke ez daukala eraginik Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorraren aurrekontuetan, ez eta legeak helburu duen jarduera-sektorean ere.

Lege-aldaketak ez dakar berariaz egitura, erakunde edo organismo berriak eratu beharrik. Eta ez dakar zerbitzu berririk eratzerik ere, eta, beraz, ez dauka inolako eragin ekonomikorik.

Nahiz eta, bide batez, 12/2012 Legearen aldaketa baliatzen den Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia Legearen 10. artikuluan Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrari esleitzen zaizkion funtzioak gauzatzeko organo espezializatu gisa aitortzeko, ez da erakunde berri bat sortzen, Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 193/2013 Dekretuaren bidez eratu baitzen, Gazteria eta Kirol Zuzendaritzaren zerbitzu gisa, eta ordutik giza baliabide eta baliabide material batzuk erabiliz jarduten baitu. Dena den, haren etorkizuneko kostu ekonomikoa legea erregelamendu bidez garatzen denean zehaztu beharko da, hartan adieraziko baita nola antolatuko den.

Laburbilduz, 12/2012 Legea egokitzeko lege-testu berriak ez du zertan langile edo baliabide material gehiago behar izatea eragin, eta, beraz, ez dakar gastuak nabarmen handitzerik edo diru-sarrera publikoak jaisterik. Horrenbestez, aldaketa-arau berriak ez du zuzeneko aurrekontu-eraginik. Beste kontu bat da Eusko Jaurlaritzak zer giza baliabide eta baliabide material beharko dituen 12/2012 Legea behar bezala garatzeko eta aplikatzeko.

8.- GENERO-ERAGINA

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, 19. artikuluan, ezartzen du arau bat egiten hasi aurretik, hori sustatzen duen administrazio-organoak ebaluatu egin behar duela zein den proposamen horrek emakumeek eta gizonek kolektibo gisa bizi duten egoeran izan lezakeen eragina. Eta aztertu behar da arauan proiektatu den jarduketak ondorio positiboak edo kontrakoak izan ditzakeen emakumeen eta gizonen arteko ezberdintasunak ezabatzeko eta horien arteko berdintasuna sustatzeko helburu orokorrean.

Memoria labur honek legea egitea egokia eta apropos a dela arrazoitu nahi duenez, hau da, prozedura hasteko aginduaz ari denez, zaila da adieraztea, hasierako fase onetan, etorkizuneko legeak zer genero-eragin izan dezakeen. Testu artikulatua egin ondorengo dagokion azterketa monografikoak adierazi beharko du zer genero-eragin duen hark.

Dena den, eta lege-proiektuaren azken memoriak genero-eraginari buruzko azterketa eduki behar badu ere, aurreratu dezakegu, legearen helburuak ikusita (ekainaren 21eko 12/2012 Legea Dopinaren Aurkako Mundu Kodera egokitzea, zehapen-arloan, batez ere), ez dirudiela genero-eragin handirik izango duenik, eta ez da ulertzen aldaketak diskriminazio-egoerak erraztuko dituenik edo eragin nabarmen desberdina izan dezakeenik gizonengan eta emakumeengan.

9.- DOPINAREN AURKAKO LEGEA ALDATZEKO LEGE AURREPROIEKTUARI EGINDAKO ALEGAZIOEN ETA TXOSTENEN BALORAZIOA

Atal hori oso zabala denez, txosten honekin batera erantsita doan beste txosten honetara jo beharko da: “Dopinaren aurkako legea aldatzeko lege-aurreproiektuari egindako alegazioen eta txostenen balorazioari buruzko txostena”.

Jon Redondo Lertxundi

Gazteria eta Kiroletako zuzendaria

FIRMADO DIGITALMENTE POR:

Firmante: **JON REDONDO LERTXUNDI**
Fecha de la firma: **26/01/2016 9:32:31**
Validación de la firma: **Correcta**

VALORACIÓN DE LAS ALEGACIONES RECIBIDAS Y LOS INFORMES REALIZADOS AL ANTEPROYECTO DE LEY SOBRE MODIFICACIÓN DE LA LEY CONTRA EL DOPAJE

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General, el Anteproyecto elaborado por la Dirección de Juventud y Deportes fue remitido a las entidades que pudieran resultar afectadas, para realizar el trámite de audiencia.

Además, el 18 de febrero de 2015 se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco la Resolución de 6 de febrero de 2015, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno Vasco, por la que se sometía a información pública el Anteproyecto de Ley sobre adecuación de la legislación antidopaje al Código Mundial Antidopaje.

Una vez finalizado dicho trámite se han recibido las siguientes alegaciones cuya valoración se realiza a continuación:

I.- ALEGACIONES DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE BIZKAIA.

Por parte de la Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos de Bizkaia se emite informe con fecha de 21 de febrero de 2015 en el que se manifiesta que "*desde el punto de vista colegial no se advierte objeción alguna en relación con el Anteproyecto*". En dicho informe tampoco se formula ninguna propuesta de adición, supresión o modificación, por lo que no procede realizar consideración jurídica alguna.

II.- ALEGACIONES DE LA DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

La Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas propone la inclusión de una nueva disposición en la Ley 12/2012, de 21 de junio, en la que se garantice que las personas físicas y los representantes de las personas jurídicas puedan utilizar el euskera y el castellano, tanto verbalmente como por escrito, así como el derecho a que sean atendidos en el mismo idioma. Igualmente, propone la inclusión de un nuevo párrafo en el artículo 8 de la Ley 12/2012 en el que se establezca el derecho a recibir en los controles antidopaje la información en euskera u castellano, así como a utilizar el idioma oficial que deseen. Asimismo, propone que los miembros de la Comisión Asesora podrán utilizar en las reuniones el euskera y el

castellano y que las convocatorias, órdenes del día, actas y demás escritos se realicen en los dos idiomas. Por último, y en relación al artículo 42 de la Ley 12/2012, sobre el sistema de información sobre el dopaje en el deporte, propone la inclusión de una previsión sobre el deber de garantizar que la información se ofrezca en euskera y castellano.

Respecto a las citadas aportaciones debe señalarse que, a nuestro entender, los textos propuestos no entrañan innovación del ordenamiento jurídico pues la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera, ya establece en su artículo 5 *que* toda la ciudadanía del País Vasco tienen derecho a conocer y usar las lenguas oficiales, tanto oralmente como por escrito. Asimismo, el citado precepto dispone que se reconoce a la ciudadanía del País Vasco el derecho a relacionarse en euskera o en castellano oralmente y/o por escrito con la Administración y con cualquier Organismo o Entidad radicado en la Comunidad Autónoma. Por último, el citado precepto establece que los poderes públicos garantizarán el ejercicio de estos derechos, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, a fin de que sean efectivos y reales. Por otra parte, el artículo 6 de la citada Ley reconoce a todos los ciudadanos y ciudadanas el derecho a usar tanto el euskera como el castellano en sus relaciones con la Administración Pública en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, y a ser atendidos en la lengua oficial que elijan. A tal efecto, el citado precepto de la Ley establece que se adoptarán las medidas oportunas y se arbitrarán los medios necesarios para garantizar de forma progresiva el ejercicio de este derecho. Del mismo modo, el artículo 8 de la Ley establece que todo acto en el que intervengan los poderes públicos sitos en la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como las notificaciones y comunicaciones administrativas, deberán ir redactados en forma bilingüe, salvo que los interesados privados elijan expresamente la utilización de una de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma.

IV.- ALEGACIONES DE LA AGENCIA VASCA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

La Agencia Vasca de Protección de Datos (en adelante, AVPD) presenta el informe elaborado con fecha de 9 de marzo de 2015 y suscrito por el Director de la Agencia.

La primera cuestión que plantea la AVPD es la delimitación del **ámbito subjetivo de aplicación** del régimen de control y sanción contra el dopaje. A su juicio, del articulado de la Ley 12/2012 –no del Anteproyecto- se deduce que la misma se aplica a deportistas federados, a deportistas que participen en competiciones deportivas no federadas (con licencia escolar, universitaria o mediante inscripción) e, incluso, a quienes practiquen actividades deportivas de carácter no competitivo. En su opinión, una ley que, al menos hipotéticamente, permita controles de dopaje a todas las personas (niños y adultos) que practiquen deporte en Euskadi, no superaría el necesario juicio de proporcionalidad entre la finalidad del control y el respeto de los derechos y libertades fundamentales de las personas.

Sobre este particular debe indicarse esta cuestión fue suficientemente tratada en la elaboración y tramitación de la Ley 12/2012. Durante su tramitación se dejó claro que el texto de la Ley circunscribía la vinculación del deportista y el dopaje a la competición deportiva, oficial o no, federada o no. Y, por otra parte, la propia Ley remitió al desarrollo reglamentario la determinación de las competiciones deportivas no federadas que podrán ser objeto de controles de dopaje a sus deportistas. Esa determinación futura, como acertadamente apunta la AVPD, deberá superar el necesario juicio de proporcionalidad. La Exposición de Motivos de la Ley 12/2012 era elocuente sobre lo que se acaba de manifestar: "*La ley no pretende extender la realización de controles de dopaje generalizados sobre toda la población que practica deporte y por ello habilita a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco a aprobar y publicar una relación de las competiciones deportivas no federadas que podrán ser objeto de la realización de controles de dopaje a sus deportistas. Se ha pretendido con ello ponderar la proporcionalidad de dicho control y limitar el mismo a aquellas competiciones deportivas que, por sus singulares características, deban ser susceptibles de control*".

Sobre el **nuevo artículo 38 bis**, relativo a la divulgación de sanciones en Internet, la AVPD concluye que la publicación en Internet de las sanciones en materia antidopaje se encontraría amparada por el artículo 11.2 de la LOPD, dado que la divulgación se contempla en una norma con rango formal de Ley. No obstante lo anterior, la AVPD apunta que la Ley 12/2012 contempla sanciones que van desde la amonestación hasta la suspensión a perpetuidad de la licencia. Uno de los supuestos en que procede la amonestación es cuando la o el deportista, teniendo justificación médica suficiente para disponer de una autorización de uso terapéutico, no la haya solicitado o haya caducado la vigencia de la anteriormente obtenida. A su juicio, no se alcanza a comprender qué interés público se persigue con la difusión pública de esa sanción de amonestación y de la sustancia empleada por ese deportista, cuando existe justificación médica. Por ello, y a falta de mayor justificación, esta Agencia considera que la divulgación de esta información no superaría el test de proporcionalidad del artículo 4.1 LOPD.

Tiene razón la AVPD en que los límites de los derechos fundamentales no sólo deben estar fijados en una norma con rango de ley sino que es necesario que, además, obedezcan a una justificación objetiva y razonada, y someterse a la estricta observancia del principio de proporcionalidad. Sin embargo, nos encontramos ante un Anteproyecto de Ley que trata de adaptarse al nuevo Código Mundial Antidopaje, que no hace diferenciación entre diferentes tipos de infracciones y sanciones. No obstante lo anterior, vamos a seguir el mismo criterio que el artículo 39.9 de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, el cual establece que "*las resoluciones que impongan sanciones por la comisión de infracciones muy graves de las previstas en el artículo 22 de esta Ley serán objeto de publicación...".* Asimismo, se añade la matización que

formula el citado artículo 39.9 de la Ley Orgánica: *"No contendrá datos sobre el método o sustancia empleada salvo que resulte completamente imprescindible*".

Asimismo, la AVPD se refiere al plazo durante el cual los datos podrán ser objeto de publicación. A tal efecto, el **nuevo artículo 38 bis**, en su **apartado 3**, dispone que "*la publicación se realizará como mínimo, en el sitio web de la organización antidopaje y dejándola expuesta durante un mes o la duración de cualquier periodo de suspensión, si éste fuese superior*". Entiende la Agencia que las sanciones ya cumplidas no pueden ser objeto de publicación. El principio de calidad de los datos impediría que el plazo de publicación excediese del tiempo de suspensión de la licencia que se haya impuesto al sancionado.

Aunque el Anteproyecto de Ley se limita a reproducir íntegramente la prescripción contenida en el artículo 14.3.4 del nuevo Código Mundial Antidopaje, no se formula objeción a la observación alegada por la AVPD y en consecuencia se añade la previsión contenida en el artículo 39.9 de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva: *"Esta publicación no podrá mantenerse después de la finalización del plazo de duración de la sanción".*

En relación con el citado apartado 3 del nuevo artículo 38 bis, que se refiere a que la publicación se realizará "*como mínimo*" en el sitio web de la organización antidopaje, la AVPD sostiene que el Anteproyecto contiene una especie de habilitación en blanco para que la organización antidopaje decida cuántas vías de divulgación considere oportunas. A su juicio, debe ser la propia Ley la que, si se estima necesario, determine cualquier otro medio para hacer pública una información tan sensible.

El Anteproyecto emplea el mismo criterio que el artículo 39.9 de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, el cual establece que "*las resoluciones que impongan sanciones por la comisión de infracciones muy graves de las previstas en el artículo 22 de esta Ley serán objeto de publicación por parte del órgano que las hubiera dictado. Para dicha publicación se utilizarán de manera preferente medios telemáticos*". Nos encontramos ante una Ley, del mismo rango que la LOPD, que contempla también una fórmula abierta pues, por un lado, se refiere a "*medios telemáticos*", en plural, y, además, no se limita a tales medios. Asimismo, el Anteproyecto reproduce el Código Mundial Antidopaje al que pretende adaptarse.

Asimismo, la AVPD recomienda que la Agencia Vasca Antidopaje advierta en su página web que Internet no es una fuente accesible al público y que, en consecuencia, la información publicada no puede ser tratada posteriormente para fines distintos. También recomienda que la organización antidopaje adopte las medidas oportunas para evitar la indexación de los datos publicados por los buscadores de Internet. Asimismo, la AVPD advierte la necesidad de que la notificación de las resoluciones sancionadoras a las y los interesados se les informe debidamente, y con todas las garantías exigidas por el artículo 5 de la LOPD, que la sanción y el resto de datos personales que contempla el artículo 38 bis, una vez que la misma adquiera firmeza,

va a ser difundida en Internet y por cuanto tiempo. Finalmente, la AVPD afirma, en relación al principio de la seguridad de los datos, regulado en el artículo 9 de la LOPD y en el Título VIII de su reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que todos los laboratorios que analicen muestras biológicas deberán cumplir las medidas necesarias para evitar cualquier pérdida o extravío de las mismas.

Realmente, la AVPD no formula ninguna alegación al Anteproyecto y simplemente se limita a recordar diversas obligaciones legales a la hora de aplicar la Ley o a formular recomendaciones, que compartimos.

V.- CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE RÉGIMEN JURÍDICO Y SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA.

A la vista del informe jurídico de dicha Dirección se realizan las siguientes consideraciones.

Respecto a la **parte expositiva**, diversas correcciones del texto. Concretamente, propone suprimir una proposición ("*de*") y añadir el pronombre relativo "*que*".

Se consideran totalmente acertadas tales observaciones y se procede, en consecuencia, a la corrección del texto.

En cuanto al **artículo 10** del Anteproyecto, por el que se instituye la Agencia Vasca Antidopaje como organización antidopaje del País Vasco, se formulan algunas consideraciones. Por un lado, se citan las exigencias previstas en el artículo 11 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para la creación de nuevos órganos. Asimismo, se manifiesta que algunas de las funciones previstas en el apartado primero del artículo 10 de la Ley 12/2012, que es la que ahora se modifica, son desarrolladas actualmente por la Dirección de Juventud y Deportes, en virtud del Decreto 193/2013, de 9 de abril, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura. Y añade que existe una contradicción entre lo expresado en el texto articulado del Anteproyecto, que señala que la Agencia es un órgano adscrito al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva, y la Memoria, que explica que no se procederá a crear una estructura nueva pues sus funciones ya han sido asumidas por la Dirección de Juventud y Deportes.

Pues bien, a juicio de esta Dirección, ambos textos son compatibles y no incurren en contradicción de acuerdo con las siguientes consideraciones. Es cierto que algunas funciones –no todas- del artículo 10, apartado 1, aparecen encomendadas expresamente en el Decreto 193/2013 a la citada Dirección de Juventud y Deportes, pero no es menos cierto que el citado Decreto creó expresamente, en su seno, una organización antidopaje, una estructura administrativa denominada "*Agencia Vasca Antidopaje*", a la que confirió el carácter o naturaleza jurídica de servicio

administrativo. Y tal servicio viene funcionando hasta la fecha como organización antidopaje desarrollando las funciones previstas en el artículo 10.1 de la Ley 12/2012. Pues bien, lo único que hace el Anteproyecto es regularizar la situación pues el Decreto no le encomendaba expresamente todas las funciones a la Agencia, aunque ello se deducía claramente cuando el Decreto, en cumplimiento del apartado 2 del artículo 10 de la Ley 12/2012, dota a la Administración General de la Comunidad Autónoma "*de las estructuras administrativas necesarias*" para el cumplimiento de las funciones del apartado 1. Con arreglo a la propuesta del Anteproyecto lo que se hace simplemente es transformar la naturaleza de la estructura administrativa (Agencia Vasca Antidopaje), que ya está creada y funcionando, con rango de servicio administrativo, y que ahora pasa a tener el carácter de órgano.

Por otro lado, no se formula consideración alguna sobre las cuestiones relativas a la tramitación de la norma en relación a la Agencia Vasca Antidopaje.

Respecto al **artículo 12.9** el informe sugiere diversas correcciones, una de ellas atinente a la utilización del lenguaje de género en concordancia con el resto del texto. Se propone que en el primer párrafo del artículo 12.9 debería decirse "*aquellos y aquellas deportistas*".

Tal recomendación resulta totalmente acertada y debe procederse a la corrección.

En relación con el **artículo 18** se sugiere valorar la oportunidad de incluir, junto a los laboratorios con acreditación internacional de la Agencia Mundial Antidopaje o aprobados por dicha Agencia, los laboratorios que ya cuentan con homologación estatal, tal y como lo contempla el artículo 20.2 de la Ley Orgánica 3/2013.

A nuestro juicio, en el Anteproyecto se ha seguido el criterio estricto de la Agencia Mundial Antidopaje y la Ley Orgánica 3/2013, que está en proceso de adaptación al Código, no se acomoda al mismo. El Código contempla dos opciones, no la de las homologaciones estatales.

En relación al **artículo 19** del Anteproyecto, relativo a la publicidad de la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte, se recomienda concretar que el trámite de publicación de la lista pueda ser realizado por Orden de la Consejera o del Consejero.

No se formula objeción jurídica a tal recomendación y se añade al texto que la persona titular del Departamento competente en materia de deporte ordenará la publicación adicional.

El informe propone una mejora de redacción del último inciso del apartado primero del **artículo 21** y a tal efecto ofrece una redacción alternativa invirtiendo el orden del texto. Se considera que esta propuesta mejora el texto del Anteproyecto y a tal efecto se acepta el texto citado.

Respecto al **artículo 22 bis**, que regula la denominada suspensión provisional obligatoria, la Dirección de Régimen Jurídico formula varias sugerencias. En la primera

de ellas se solicita aclarar si el texto se refiere a la suspensión de licencia o a la suspensión de personas, tengan licencia o no.

Atendiendo a dicha sugerencia se introduce una aclaración en el sentido de que la suspensión debe ir referida a la suspensión no sólo de la licencia sino a la imposibilidad de obtener licencia o participar en competiciones. Tal suspensión provisional también conllevará la imposibilidad de obtención de licencia y la prohibición de participación en competiciones deportivas durante el periodo de suspensión.

Asimismo, se sugiere incluir una mención a la necesidad de motivar la resolución de suspensión provisional.

Se acepta tal recomendación.

Igualmente, el informe advierte que, dada la dualidad de procedimientos existentes en la normativa vasca –disciplinario y sancionador administrativo- conviene aclarar si la suspensión provisional obligatoria se refiere a ambos procedimientos.

Se acepta que tal régimen de la suspensión provisional obligatoria debe referirse a ambos procedimientos y, en consecuencia, se introduce una aclaración.

También sugiere que debería determinarse un periodo de duración máxima de la medida provisional para evitar perjuicios irreparables.

Esta Dirección considera correcta la propuesta y añade un plazo máximo de seis meses, en consonancia con el periodo máximo de tramitación del procedimiento de imposición de sanción.

Finalmente, el informe advierte de un error ortográfico. La expresión "*se ha producido*" aparece en dos ocasiones en el párrafo, pero en una de ella está mal escrita.

Resulta necesaria tal corrección del error ortográfico.

En relación al **artículo 23** se propone no añadir el **apartado m)** por considerar que ya está sancionada dicha conducta a través de los apartados i) y j) del artículo citado.

Aunque el texto del Anteproyecto se ha ceñido al texto del nuevo Código Mundial Antidopaje, tiene razón la Dirección de Régimen Jurídico y Servicios cuando indica que las acciones están básicamente incluidas en los apartados i) y j). Sin embargo, en la medida que no se produce una identidad total se procede a eliminar lo que básicamente está ya recogido y mantener el resto de las acciones. Por ejemplo, el encubrimiento es una acción diferente, pues puede ser posterior a la consumación de la acción de dopaje. Y, asimismo, la mayor parte de las acciones de los apartados i) y j) se refieren a sustancias y métodos prohibidos, mientras que el apartado m) no se circunscribe exclusivamente a ello.

Respecto al **apartado n)** indica el informe que no se entiende a quién se refiere la notificación que se menciona en el mismo.

El Código Mundial Antidopaje indica que la notificación se debe realizar al deportista u otra persona sujeta a la autoridad de la organización antidopaje y se le debe notificar sobre dos cuestiones: situación de sanción de la persona de apoyo del deportista

(entrenador, médico, etcétera) y posibles consecuencias sancionadoras si persiste la asociación con tal entorno de apoyo al deportista.

Por último, propone la Asesoría Jurídica corregir un error ortográfico en la **letra n)** sustituyendo "*notificado*" por "*notificada*".

Resulta acertada la observación y se corrige.

Respecto al **artículo 24** el informe propone aclarar posibles contradicciones entre diversas previsiones contenidas en el mismo respecto a las sanciones a imponer en determinados supuestos. También sugiere sustituir el término "*involucre*" pues, a su juicio, crea confusión.

Respecto a la primera cuestión, se atiende la sugerencia, y se modifica la redacción de algunos apartados posteriores a los tres primeros al objeto de evitar contradicciones o cualquier problema de interpretación. Los tres primeros apartados establecen las reglas generales de imposición de sanciones y los apartados posteriores establecen modulaciones o excepciones en base a circunstancias especiales. Respecto a la expresión "*cuando la infracción involucre una sustancia*" se procede a sustituir por "*cuando la infracción esté relacionada con una sustancia*".

El informe de la citada Dirección de Régimen Jurídico, en relación con el **artículo 24 bis**, propone la revisión del **apartado 2**, proponiendo una simplificación y especialmente del último inciso que, a su juicio, no es gramaticalmente correcto. La frase a corregir es la siguiente: "*En estos casos el periodo de suspensión será de ocho años hasta la suspensión a perpetuidad*".

No se formula objeción alguna a tal sugerencia y se redacta dicho apartado en los siguientes términos: "La existencia de una tercera infracción de las normas antidopaje siempre dará lugar a la suspensión a perpetuidad, salvo que la tercera infracción suponga una infracción del deber de localización y reúna las condiciones de anulación o reducción de sanciones. En estos casos el periodo de suspensión será, como mínimo, de ocho años".

También se sugiere revisar la redacción del **apartado 4**. Se acepta tal sugerencia y se incorpora la siguiente redacción: "*Una infracción de las normas antidopaje sólo se considerará segunda infracción si se acredita que la persona ha cometido la infracción tras haber recibido notificación de la primera infracción o después de que la organización antidopaje se haya esforzado razonablemente para presentar esa notificación*".

En el **artículo 29** de la Ley 12/2012 se han añadido a través del Anteproyecto los apartados 4 y 5. La Dirección de Régimen Jurídico y Servicios señala en su informe que no se entiende la redacción dada al **apartado 4**. Asimismo, se indica que en la Memoria se argumenta que no existe incidencia en los presupuestos de la Administración General de la Comunidad Autónoma, a pesar de que los nuevos tipos infractores va a suponer la interposición de las correspondientes sanciones y ello se va a traducir en ingresos para la Administración Pública.

El **apartado 4**, recogiendo literalmente lo establecido en el Código Mundial Antidopaje, dispone que *"solamente se podrán imponer sanciones económicas en los casos que el periodo máximo de suspensión ya se haya impuesto de otro modo*". Se sugiere suprimir el inciso final "*de otro modo*". Lo que pretende la Agencia Mundial Antidopaje es reservar la sanción pecuniaria a los supuestos en los que ya se haya impuesto el periodo máximo de suspensión.

Respecto a la repercusión de tres nuevos tipos de infracción con las consiguientes sanciones y la traducción en nuevos ingresos para la Administración Pública, hay que señalar que, no existe ningún dato o indicio de que los nuevos tipos infractores van a generar mayores ingresos del mismo modo que tampoco existen datos o indicios para concluir que la limitación de la posibilidad de imponer sanciones pecuniarias –sólo en los casos en que el periodo máximo de suspensión se haya impuesto- va a suponer un decremento de ingresos.

El artículo 30, apartado 1, dispone, en consonancia con el artículo 10.8 del Código Mundial Antidopaje, que las consecuencias sancionadoras se pueden modular "*por razones de equidad*". En el informe se recomienda la revisión de tal inciso por entender que no conviene dejar espacios abiertos a la indefinición jurídica.

En opinión de esta Dirección de Juventud y Deportes, el texto del Anteproyecto transcribe literalmente la dicción del Código, al que no debe sustraerse. Por otra parte, diversas leyes vigentes ya contemplan, en el apartado del régimen sancionador, tal invocación al principio de equidad. Un ejemplo de ello es el artículo 93 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, cuando se refiere a la condonación, que se podrá acordar cuando "*se den circunstancias que hagan que el cumplimiento de la sanción en sus propios términos <u>atente contra la equidad</u> o perjudique a los intereses generales*". En los mismos términos literales, por ejemplo, el artículo 98 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, o la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. Tampoco se puede omitir que una consolidada doctrina del Tribunal Supremo viene aplicando, en materia de sanciones, el principio de equidad. Léase, *inter alia*, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 26 de enero de 2015: " *(...) la sanción impuesta (...) aún cuando está comprendida dentro del rango que la propia norma establece, resulta desproporcionada en relación con las circunstancias concretas del caso, considerando esta Sala que la misma debe atemperarse aplicando el <u>principio de equidad</u> o mitigación del rigor de la norma*".

En relación al **artículo 31 bis**, que se refiere al estatus durante una suspensión de licencia, por parte del informe se propone clarificar si la referencia a las y los deportistas se circunscribe a deportistas con licencia o se refiere a cualquier deportista, con o sin licencia. Asimismo, se advierte una errata cuando el texto se refiere a "*el o la persona sancionada*".

La errata advertida por el citado informe debe corregirse y, asimismo, se modifica el texto dejando claro que la suspensión también debe afectar a las personas que no ostentan licencia. Se añade un apartado cuarto en el que se establece que las

previsiones contenidas en el artículo 31 bis también se aplicarán a las y los deportistas sin licencia que hayan sido sancionados con la imposibilidad temporal de obtención de licencia, pues esta sanción se encuentra contemplada expresamente en la Ley 12/2012.

En relación al **artículo 34** se propone corregir la referencia a "*otra persona*".

No se formula objeción a tal sugerencia pues resulta totalmente acertada. Se sustituye aquella expresión por "*una persona*".

Asimismo, el informe dice que el nuevo texto suprime el plazo de prescripción de sanciones.

Es acertada dicha observación pues el nuevo texto del Anteproyecto omite involuntariamente dos párrafos de la Ley 12/2012, que conviene mantener.

En relación al **artículo 37** del Anteproyecto, que regula la competencia en materia de procedimientos disciplinarios, la Dirección de Régimen Jurídico y Servicios considera que los nuevos textos incluidos se basan en el artículo 7.1 del Código Mundial Antidopaje. En consecuencia, considera que este artículo 7.1 no se refiere exclusivamente a aquellas entidades con potestad disciplinaria en relación con sus miembros, sino también a la potestad administrativa sancionadora.

Se acepta el argumento y por ello se añade un tercer apartado en el **artículo 36** –dedicado a la potestad administrativa sancionadora- con tal aclaración.

Respecto al **apartado 6** del **artículo 37** también es objeto de una observación por parte de dicha Dirección. Se revisa la redacción y se corrige alguna incorrección gramatical.

Igualmente considera que el **apartado 5** no se entiende.

El apartado 5, que no se modifica en el Anteproyecto, establece que el vencimiento del plazo de tramitación del procedimiento para la imposición de sanciones produce la caducidad del procedimiento. Y el plazo de seis meses para la tramitación incluye tanto la vía disciplinaria federativa como la administrativa posterior tras la avocación de la competencia si la federación correspondiente no ha resuelto en el plazo de dos meses (o tres con la prórroga).

La Asesoría Jurídica también formula una observación gramatical respecto al verbo "*retiran*", en el **apartado 10**, que debe ponerse en singular. Se acepta.

Los artículos 38 bis y 38 ter abordan la divulgación de sanciones y la revisión de resoluciones en materia de dopaje. Sobre tales preceptos el informe formula diversas observaciones.

Respecto al **artículo 38 bis** reseña que la Agencia Española de Protección de Datos ya ha analizado en varias ocasiones la posibilidad de divulgación de las sanciones impuestas a los deportistas por la comisión de infracciones en materia de dopaje. Tal Agencia ha ido señalando una serie de requisitos para tal difusión. Por ello, se propone que el texto del Anteproyecto haga mención a todos los requisitos.

Contrastando los citados requisitos con el texto propuesto en el Anteproyecto se constata que la mayoría de ellos se encuentran expresamente explicitados y sólo se añade la mención de que la persona sancionada sea informada acerca de la publicación así como la mención a que se adopten medidas para que la información publicada en Internet no pueda ser captada o indexada a través de motores de búsqueda. No obstante, aún cuando esta Dirección de Juventud y Deportes considera que tales menciones expresas no son preceptivas pues, por ejemplo, no tiene sentido que se le informe al deportista de una obligación legal de publicación de sanciones, no formula objeción para atender dichas recomendaciones.

Respecto al **apartado 3** se recomienda la revisión de la redacción del texto en relación a la conjunción copulativa "*y*".

Resulta acertada tal observación y se corrige.

Respecto al **artículo 38 ter** se indica que el texto no respeta el principio de prohibición de la *reformatio in peius* de tal modo que con ocasión de la revisión instada por el deportista sancionado no puede agravarse su situación inicial.

El Anteproyecto realmente recoge la dicción literal del Código Mundial Antidopaje, pero no hay inconveniente para que el texto se adapte al dicción del artículo 113.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Respecto a las disposiciones transitorias, el informe formula dos observaciones, que son aceptadas. En la medida que el texto contiene dos disposiciones transitorias debería ponerse el título en plural.

La segunda observación es que la primera disposición establece que las infracciones que se hayan cometido antes de la entrada en vigor de la nueva Ley se regirán por lo dispuesto en la normativa anterior salvo que la persona interesada opte voluntariamente por la aplicación de la nueva Ley. Se sustituye el inciso final por la tradicional cláusula de "*salvo que la regulación prevista en la nueva norma sea más favorable para las y/o los expedientados*".

VI.- CONSIDERACIONES DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL VASCO.

El CESV, en su conjunto, "valora positivamente la oportunidad y la inclusión en el texto de las principales modificaciones del Código Mundial Antidopaje".
Asimismo, el CESV "ha querido resaltar la perspectiva de género y la utilización no sexista del lenguaje en la redacción de este anteproyecto como ejemplo de buena práctica y de cumplimiento de la Ley de Igualdad". No obstante lo anterior, el CESV formula unas breves consideraciones sobre el articulado que procede examinar a continuación.

La primera sugerencia que formula el CESV consiste en completar el párrafo tercero de la exposición de motivos en los términos siguientes:
"En este marco de armonización, durante los días 12 a 15 de noviembre de 2013, se desarrolló en Johannesburgo, Sudáfrica, la IV Conferencia Mundial Antidopaje en la

que participaron representantes de las organizaciones deportivas y de estados y donde se aprobó el nuevo Código Mundial Antidopaje, tercera versión del mismo, que ha entrado en vigor el pasado 1 de enero de 2015".

A juicio del CESV parece razonable incorporar la mención de que el nuevo Código Mundial Antidopaje constituye la tercera versión del mismo. Por parte de esta Dirección no se formula ninguna objeción jurídica a tal aportación.

Solamente conviene añadir respecto a dicho párrafo que, a la vista de la tramitación administrativa del Anteproyecto, la referencia que en este párrafo se hace a que el nuevo Código "ha entrado en vigor el pasado 1 de enero de 2015" deberá sustituirse por el siguiente texto: "...entró en vigor el 1 de enero de 2015" pues, presumiblemente, la Ley no se va a aprobar antes del 1 de enero de 2016.

En relación con el artículo 21.1 del Anteproyecto, sobre potestad sancionadora administrativa, a juicio del CESV, si bien el concepto de "relaciones de especial sujeción" se mantiene en la redacción de ambos textos (el anterior y el de la propuesta de modificación), sugiere su eliminación. En su opinión, se trata de una expresión que plantea numerosos problemas porque no tiene una acepción unívoca, y ni la doctrina ni los Tribunales se ponen de acuerdo a la hora de definir qué tipo de personas se hallan en relaciones de este tipo. Además, no parece que añada nada pues considera que el contenido de la frase no varía si se suprime la citada expresión.

Sin embargo, esta Dirección considera que debe mantenerse tal matización por las siguientes razones:

Primera.- El artículo 21 del Anteproyecto –y de la vigente Ley 12/2012-, se refiere expresamente al ámbito del "régimen administrativo sancionador" que, a diferencia del régimen disciplinario, no requiere la existencia de un vínculo o relación de especial sujeción. La potestad sancionadora general de la Administración es consecuencia de un ordenamiento jurídico-administrativo que es necesario tutelar y es una potestad correctiva por incumplimiento de los deberes de todos los ciudadanos, teniendo su fundamento en la protección del orden social general (heterotutela), mientras que la potestad disciplinaria conlleva una potestad correctiva sobre personas especialmente sometidas a un vínculo o relación con la organización deportiva correspondiente (autotutela). El artículo 21 de la vigente Ley 12/2012 y del Anteproyecto no hace más que clarificar esa diferenciación de potestades, habida cuenta de las erróneas resoluciones judiciales pronunciadas en el País Vasco con ocasión de la imposición, por el Gobierno Vasco, de sanciones administrativas en materia de dopaje. Sirva de ejemplo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, 586/2009, de 9 de julio, que afirmaba que "el Gobierno Vasco carece de competencia a la hora de imponer a los deportistas sanciones administrativas en materia de dopaje" al considerar que la Administración no ostenta tal potestad por estar atribuida, por delegación a las federaciones deportivas, confundiendo de forma ostensible la potestad disciplinaria y la potestad administrativa general. En el mismo sentido, la sentencia del mismo Tribunal 488/2009, de veinte de julio.

Segunda.- La expresión “relaciones de especial sujeción” es comúnmente admitida en nuestro ordenamiento jurídico e, incluso, por el Tribunal Constitucional en numerosas sentencias. Aunque el concepto de relación especial de sujeción es de por si impreciso (STC 61/1990), como tantos otros conceptos jurídicos, no puede ponerse en duda su contenido o significado esencial.

Tercera.- La propia Asesoría Jurídica del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, en su informe de junio de 2015, sobre este Anteproyecto, propone una redacción alternativa que incluye la mención expresa a las relaciones de especial sujeción.

Cuarta.- Esta propuesta normativa de la Ley 12/2012, y que se mantiene en el Anteproyecto, no fue cuestionada durante la tramitación de aquella Ley.

Respecto al artículo 22.bis, sobre la suspensión provisional, el CESV recomienda completar la redacción del párrafo tercero de este artículo como se indica:
“3. El tiempo de suspensión provisional no podrá exceder de seis meses salvo en el caso de paralización o dilación del procedimiento por causa imputable a la persona suspendida. En todo caso, el periodo de Suspensión Provisional del Deportista se deducirá del de la sanción que se le imponga o sea aceptada.”

La justificación de tal aportación es que el texto debe encontrarse en consonancia con el artículo 7.9.2 del Código Mundial Antidopaje, que dice textualmente que “*el periodo de Suspensión Provisional del Deportista se deducirá del de la sanción que se le imponga o sea aceptada definitivamente según el Artículo 10.11.3 o 10.11.4*”. De no computarse esta circunstancia, según el CESV puede ocurrir que al final la persona deportista sea sancionada doblemente, pues a la suspensión cautelar se suma otra posible suspensión definitiva.

A este respecto, esta Dirección no formula objeción a tal aportación, aunque es importante advertir que ya se encuentra vigente en nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que el artículo 39.8 de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, disposición de carácter básico a tenor de su Disposición Final Primera, establece que en caso de “*que se adopte la suspensión provisional prevista en el art. 38 de esta Ley, la duración de la misma se deducirá del plazo de suspensión finalmente expuesto, siempre y cuando se respete dicha suspensión*”.
Se sugiere incorporar, en el supuesto de que finalmente se considere necesario, esta redacción de la Ley Orgánica.

Por último, el CESV sugiere completar la redacción del nuevo apartado 1.m del artículo 23, sobre tipificación de infracciones, en los siguientes términos:
“m) La acción de asistir, alentar, ayudar, incitar, colaborar, conspirar, encubrir o cualquier otro tipo de complicidad intencional en relación con una infracción de las normas antidopaje o cualquier intento de infracción”

La justificación del CESV es que la redacción propuesta es más amplia, concreta y precisa, al añadirse el elemento de intencionalidad que el texto propuesto no contempla. Se recoge el tenor literal del artículo 2.9 del Código Mundial Antidopaje rubricado "Complicidad", que dice textualmente "asistir, alentar, ayudar, incitar, colaborar, conspirar, encubrir o cualquier otro tipo de complicidad intencional en relación con una infracción de las normas antidopaje o cualquier Intento de infracción de las normas antidopaje o infracción del Artículo 10.12.1 por otra persona". El artículo 10.2.3 del Código Mundial Antidopaje establece que "conforme se establece en los artículos 10.2 y 10.3, el término intencional se emplea para los deportistas que engañan".

Sin embargo, esta Dirección considera que tales acciones propuestas ya están contempladas en la vigente Ley. Por ejemplo, se propone añadir el verbo "colaborar" cuando la letra j ya se refiere a la "colaboración".

Asimismo, se propone añadir el verbo "incitar" cuando la letra i ya contempla la "incitación". Del mismo modo, se propone añadir "alentar" o "ayudar" cuando el artículo 23.1 se refiere a la "promoción", "instigación", "facilitación", etcétera. Es decir, incluso, el texto vigente ya emplea sinónimos o términos más omnicomprensivos. La inclusión de los verbos propuestos por el CESV resultaría redundante.

VII. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Se han aceptado todas las consideraciones salvo la relativa a la modificación completa del artículo 24 dado que la premura de tiempo con la que se ha de tramitar el presente anteproyecto impide un estudio detallado de las propuestas realizadas por el órgano asesor. Estudio necesario para evitar contradicciones y la pérdida de sistematicidad.

Jon Redondo Lertxundi
Director de Juventud y Deportes

DOPINAREN AURKAKO LEGEA ALDATZEKO LEGE-AURREPROIEKTUARI EGINDAKO ALEGAZIOEN ETA TXOSTENEN BALORAZIOA

Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 8. eta 9. artikuluetan ezarritakoari jarraituz, Gazteria eta Kirol Zuzendaritzak egindako aurreproiektua haren eraginpean egon daitezkeen erakundeei bidali zitzaien, entzunaldiko izapidea betetzeko.

Horrez gain, 2015eko otsailaren 18an, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, 2015eko otsailaren 6ko Ebazpena argitaratu zen, Kultura, Gazteria eta Kiroletako sailburuordearena, dopinaren aurkako legedia Dopinaren aurkako Mundu Kodera egokitzeari buruzko Legearen aurreproiektua jendaurrean jartzen duena.

Entzunaldia amaituta, jarraian aztertuko ditugun alegazio hauek jaso dira:

I.- BIZKAIKO MEDIKU-ELKARGOAREN ALEGAZIOAK.

Bizkaiko Mediko Elkargoaren aholkularitza juridikoak txostena igorri zigun, 2015eko otsailaren 21ean, eta hartan adierazten denez, elkargoaren ikuspegitik ez dago inolako eragozpenik aurreproiektuari dagokionez. Txosten horretan ez da proposamenik egiten ez zerbait eransteko, ezta zerbait kentzeko edo aldatzeko ere, eta, beraz, ez dago ezer esan beharrik alderdi juridikotik.

II.- HERRI-ADMINISTRAZIOETAN HIZKUNTZA NORMALIZATZEKO ZUZENDARITZAREN ALEGAZIOAK.

Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritzak ekainaren 21eko 12/2012 Legean beste xedapen bat txertatzea proposatzen du, bermatzeko pertsona fisikoek zein pertsona juridikoen ordezkariek euskara eta gaztelera erabili ahal izango dutela, ahoz zein idatziz, eta hizkuntza horretan artatzeko eskubidea izango dutela bermatzeko. Eta 12/2012 Legearen 8. artikuluan beste paragrafo bat txertatzea proposatzen du, ezartzeko dopinaren aurkako kontroletan informazioa euskaraz edo gazteleraz jasotzeko eskubidea izango dutela, bai eta gogokoen duten hizkuntza ofiziala erabiltzekoa ere. Horrez gain, proposatzen du aholku-batzordeko kideek bileretan euskara eta gaztelania erabiltzeko aukera izatea, eta deialdiak, aztergaiak, aktak eta gainerako idatziak bi hizkuntzetan egitea. Azkenik, eta 12/2012 Legearen 42. artikuluari, kiroleko dopinari buruzko informazio-sistemari, dagokionez, proposatzen du xedapen bat sartzea, adierazteko informazioa euskaraz eta gazteleraz eskaini behar dela nahitaez.

Ekarpen horiei buruz, adierazi behar da gure iritziz proposatutako testuek ez dakartela ordenamendu juridikoaren berrikuntzarik; izan ere, 10/1982 Legeak, azaroaren 24koak, euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizkoak, 5. artikuluan jada ezartzen du

Euskal Herriko herritar guztiek dutela hizkuntza ofizialak jakiteko eta erabiltzeko eskubidea, bai ahoz eta bai idatziz. Eta, orobat, xedapen horretan ezartzen da Euskal Herriko herritarrek eskubidea dutela administrazioarekin edo Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako edozein erakunde edo entitateekin harremanak euskaraz edo gaztelaniaz izateko, ahoz nahiz idatziz. Eta, azkenik, xedapen horrek ezartzen du herri-agintariek eskubide horiek erabiltzea bermatuko dutela autonomia-erkidegoko eremuan, eskubideak eraginkorrak eta benetakoak izan daitezen. Bestalde, lege horren 6. artikuluak herritar guztiei aitortzen die, autonomia-erkidegoaren lurraldean, herri-administrazioarekiko harremanean euskara zein gaztelania erabiltzeko eskubidea, eta beren aukerako hizkuntza ofizialean hartua izatekoa. Horretarako, lege horren xedapen horrek ezartzen du neurri egokiak hartuko direla eta beharrezko baliabideak bideratuko direla, eskubide hori arian-arian gauzatu dadin bermatzeko. Eta, antzera, 8. artikuluak xedatzen du Euskal Autonomia Erkidegoko agintari publikoen esku-hartzea duten egintza guztiak, bai eta administrazio-jakinarazpen eta -komunikazio guztiak ere, ele bitan idatzi beharko direla, salbu eta interesdun partikularrek autonomia-erkidegoko hizkuntza ofizialetako bat berariaz aukeratzea erabakitzen badute.

IV.- DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOAREN ALEGAZIOAK.

Datuak Babesteko Euskal Bulegoak (aurrerantzean, DBEB) 2015eko martxoaren 9an egindako txostena aurkeztu zuen, bulegoko zuzendariak izenpetua.

DBEBk planteatzen duen lehen kontua da dopinaren kontrola eta dopina zigortzeko araubidearen **aplikazio-eremu subjektiboa**. Bulego horren iritziz, 12/2012 Legearen artikuluetatik —ez aurreproiektukoetatik— ondorioztatzen da legea hauei zaiela aplikagarri: kirolari federatuei, kirol-lehiaketa ez federatuetan parte hartzen duten kirolariei (eskola-lizentzia, unibertsitate-lizentzia edo inskripzioa dutenentzako lehiaketetan parte hartzen dutenei), bai eta lehiakoak ez diren kirol-jarduerak egiten dituztenei ere. Eta bulegoaren iritziz, Euskadin kirola egiten duten pertsona guztiei (haur zein heldu), hipotetikoki bederen, dopin-kontrola egiteko aukera ematen duen lege batek ez luke gainditukо kontrol-helburuaren eta pertsonen oinarrizko eskubide eta askatasunen arteko ezinbestekoa den proportzionalitate-printzipioa.

Horri dagokionez, adierazi behar da auzi hori ongi aztertu zela 12/2012 Legea egiteko eta izapidetzeko prozesuan. Legearen izapideetan, argi utzi zen legearen testuak lehiaketa-kirolarekin soilik lotzen zuela kirolaria eta dopina, izan lehiaketa ofiziala ala ez, federatua ala ez. Eta beste batetik, legeak berak ezartzen zuen erregelamendu bidezko garapenean zehaztuko zela federatuak ez diren zer lehiaketatan egin ahalko zaizkien dopin-kontrolak kirolariei. Etorkizuneko xedapen horiek, DBEBk ongi adierazten duten bezala, proportzionalitate-printzipioari jarraitu behar diote. 12/2012 Legearen zioen adierazpena atalean, oso ongi adierazten da aztergai dugun kontua: "*Legearen asmoa ez da dopin-kontrolak orokorrean aplikatzea kirola egiten duen edonori, eta, horregatik, ahalmena ematen dio Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari zerrenda bat presta dezan, beren mendeko kirolariei dopin-kontrolak*

egitea zilegi izango den federatu gabeko kirol lehiaketekin.Horren bitartez kontrol horren proportzionaltasuna zaindu nahi izan da, hau da, beren ezaugarri bereziengatik benetan kontrolatzekoak diren lehiaketetan baino ez egitea dopin-kontrola".

38 bis artikulu berriari dagokionez (zehapenak Interneten argitaratzeari buruzkoa da), DBEBk irizten du dopinaren aurkako zehapena Interneten argitaratzea zilegi egiten duela datu pertsonalak babesteari buruzko Lege Organikoaren 11.2 artikuluak, lege-mailako arau batek onartzen duelako. Dena den, DBEBk adierazten du 12/2012 Legeak ezartzen dituen zehapenak ohartarazpenetik hasi eta lizentzia betirako kentzea bitartekoak direla. Hona hemen ohartarazpena eragiten duen kasuetako bat: kirolariak, erabilera terapeutikoko baimena edukitzeko behar bezalako justifikazio medikoa izanik, ez badu eskatu, edo aurretik zuen baimenaren indarraldia iraungi egin bada. Eta bulegoak ez du ulertzen zer interes publiko dagoen ohartarazpena dakarren zehapen hori eta kirolariak erabili duen substantzia jendaurrean zabaltzeak, justifikazio medikoa badago. Horregatik, eta arrazoi gehiagorik ezean, bulegoak uste du informazio hori ematek ez lukeela gainditukо datuak babesteko legearen 4.1 artikuluan ezarritako proportzionaltasun-testa.

DBEBk arrazoia du esatean oinarrizko eskubideen mugak, lege-mailako arau batean ezarrita egoteaz gain, arrazoi objektiboa eta arrazoitua eduki behar duela, eta zorrotz-zorrotz bete behar duela proportzionaltasun-printzipioa. Baina aztergai dugun lege-aurreproiektuak dopinaren aurkako legea Dopinaren aurkako Mundu Kode berrira egokitzea du helburu, eta hartan ez da arau-hauste eta zehapen moten arteko bereizketarik egiten. Dena den, 3/2013 Lege Organikoak, ekainaren 20koak, kirol-jardunean kirolarien osasuna babesteari eta dopinaren aurka borrokatzeari buruzkoak, 39.9 artikuluan ezarritako irizpide berari jarraituko diogu. Hartan, honako hau ezartzen da: *arau-hauste oso larriak egiteagatik zehapenak ezartzen dituzten ebazpenak argitaratu egin beharko ditu horiek eman dituen organoak...".* Horrez gain, lege organikoaren 39.9 artikuluak adierazten duen ñabardura gehitzen da: *"Ez du erabilitako metodoari edo gaiari buruzko daturik jasoko, guztiz ezinbestekoa ez bada*".

Horrez gain, DBEBk datuak zenbat denboraz argitaratu daitezkeen ere aipatzen du. Horri dagokionez, **38 bis artikulu berriak**, **3. zenbakian**, honako hau ezartzen du: "*Horren guztiaren berri emango da, gutxienez, dopinaren aurkako erakundearen webgunean, eta hilabete batez egongo da ikusgai; etendura-epea hilabetetik gorakoa bada, epe horretan egongo da ikusgai*". Bulegoaren ustez, jada beteta dauden zehapenak ezin dira argitaratu. Datuen kalitate-printzipioari jarraituz, argitaratze-epeak ezin izango luke gainditu zehapena jaso duenak lizentzia etenda duen denbora.

Lege-aurreproiektuak hitzez hitz txertatzen du Dopinaren aurkako Mundu Kode berriko 14.3.4 artikuluko xedapena, baina, hala ere, ez dago eragozpenik DBEBk egindako alegazioa onartzeko, eta, horren ondorioz, 3/2013 Lege Organikoak, ekainaren 20koak, kirol-jardunean kirolarien osasuna babesteari eta dopinaren aurka borrokatzeari buruzkoak, 39.9 artikuluan ezarritako xedapena erantsi da: *"Argitalpena ez da mantenduko zehapenaren iraupen-epea amaitu ondoren".*

38 bis artikulu berriaren 3. zenbakiari dagokionez, adierazten da "*gutxienez*" dopinaren aurkako erakundearen webgunean egingo dela, baina DBEBk dio aurreproiektuak nolabaiteko mugarik gabeko gaikuntza ematen diola erakunde horri, hark erabaki dezan zenbat bidetatik hedatuko duen. Bulegoaren iritziz, legeak berak ezarri behar du, beharrezkoa irizten bada, hain informazio sentikorra zein beste bidetan argitara daitekeen.

Lege-aurreproiektuak jarraitzen dio ekainaren 20ko 3/2013 Lege Organikoak, kirol-jardunean kirolarien osasuna babesteari eta dopinaren aurka borrokatzeari buruzkoak, 39.9 artikuluan ezarritako irizpide berari, hots: "*Lege honen 22. artikuluan xedatutako arau-hauste oso larriak egiteagatik zehapenak ezartzen dituzten ebazpenak argitaratu egin beharko ditu horiek eman dituen organoak. Bide telematikoak lehenetsiko dira horiek argitaratzeko orduan*". Lege horrek datuak babesteko legearen maila bera du, eta formula irekia erabiltzen du horrek ere: batetik, "*bide telematikoak*" aipatzen ditu, pluralean, eta, bestetik, ez da horietara mugatzen. Orobat, aurreproiektuak Dopinaren aurkako Mundu Kode berrian adierazitakoa berresaten du, hartara egokitu nahi du eta.

Halaber, DBEBk gomendatzen du Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak bere web-orrian ohartaraztea Internet ez dela jendearentzat eskuragarri den iturria, eta, horrenbestez, argitaratutako informazioa ezin dela gerora beste helburu batzuetarako erabiltzeko tratatu. Eta beste gauza bat ere gomendatzen du: dopinaren aurkako erakundeak dagozkion neurriak har ditzala argitaratutako datuak Interneteko bilatzaileek indexatu ez ditzaten. Halaber, DBEBk ohartarazten du ezinbestekoa dela interesdunei egiten zaien zehapen-ebazpenen jakinarazpenean behar bezala jakinaraztea, eta datuak babesteko legearen 5. artikuluak ezartzen dituen berme guztiekin, zehapena eta 38 bis artikuluan adierazitako gainerako datuak Interneten argitaratuko direla, zehapenak indarra duen unetik bertatik, eta zenbat denboraz argitaratuko diren. Azkenik, datuen segurtasunaren printzipioari dagokionez (datuak babesteko legearen 9. artikuluan araututa dago, bai eta hura garatzeko erregelamenduaren VIII. tituluan ere —abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuak onartu zuen erregelamendua—), DBEBk dio lagin biologikoak aztertzen dituzten laborategiek beharrezko neurriak hartu beharko dituztela laginak galtzea eragozteko.

Egiaz, DBEBk ez dio alegaziorik egiten aurreproiektuari, eta legea aplikatzerakoan kontuan izan beharreko lege-betebehar batzuk gogorarazi eta gomendio batzuk ematen ditu soilik.

V.- HEZKUNTZA, HIZKUNTZA-POLITIKA ETA KULTURA SAILAREN ARAUBIDE JURIDIKOAREN ETA ZERBITZUEN ZUZENDARITZAREN KONTSIDERAZIOAK.

Zuzendaritza horren txosten juridikoak zenbait alderdi nabarmentzen ditu.

Zioen azalpena atalari dagokionez, testuaren gaztelerazko bertsioan zenbait zuzenketa proposatzen ditu. Hain zuzen, proposizio bat ("*de*") kendu eta "*que*" erlatibozko izenordaina jartzea proposatzen du.

Guztiz zuzenak irizten dira proposamen horiek eta, beraz, testua zuzendu egingo da.

Aurreproiektuaren **10. artikuluari** dagokionez, zenbait alderdi aipatzen dira (artikulu horren bidez Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia gaitzen da dopinaren aurkako Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde moduan). Batetik, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 11. artikuluan organo berriak sortzeko ezarritakoa aipatzen da. Orobat, adierazten da orain aldatzen den 12/2012 Legearen 10. artikuluko lehenengo atalean ezarritako zenbait eginkizun Gazteria eta Kirol Zuzendaritzak betetzen dituela gaur egun, apirilaren 9ko 193/2013 Dekretua betez (dekretu horren bidez, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen da). Eta eransten du kontraesana dagoela aurreproiektuko testu artikulatuan adierazitakoaren (esaten du agentzia kirol-arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzaren sailari atxikitako organoa dela) eta memoriaren artean (esaten du ez dela egitura berririk sortuko, haren eginkizunak Gazteria eta Kirol Zuzendaritzak hartu baititu bere gain).

Baina zuzendaritza honen iritziz bi testuak bateragarriak dira eta ez dute kontraesanik eragiten, alderdi hauek kontuan hartuta: Egia da 10. artikuluko 1. zenbakiko funtzio batzuk —ez guztiak— Gazteria eta Kirol Zuzendaritzari esleitzen zaizkiola, berariaz, 193/2013 Dekretuan, baina egia da, halaber, dekretu horren bidez, dopinaren aurkako erakunde bat sortu zela haren barruan, "*Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia*" deritzon administrazio-egitura bat, administrazio-zerbitzua izaera juridikoa duela. Eta zerbitzu horrek gaurdaino funtzionatzen jarraitzen du, dopinaren aurkako erakunde moduan, 12/2012 Legearen 10.1 artikuluak ezarritako eginkizunak betetzen. Izan ere, aurreproiektuak egiten duen gauza bakarra egoera erregularizatzea da, dekretuak ez baitizkio eginkizun guztiak berariaz agentziari agintzen, nahiz eta argi eta garbi ondorioztatzen zen, dekretuak, 12/2012 Legearen 10. artikuluko 2. zenbakian ezarritakoa betez, autonomia-erkidegoko administrazio orokorrari 1. zenbakiko eginkizunak betetzeko "*beharrezko administrazio-egiturak*" ematen baitizkio. Aurreproiektuko proposamenari jarraituz, egiten den gauza bakarra zera da: administrazio-egituraren —Dopinaren Aukako Euskal Agentzia—, administrazio-zerbitzuaren mailarekin sortuta eta funtzionatzen ari den egitura horren, izaera aldatzea eta organo bihurtzea.

Beste alde batetik, ez da ezer esaten arauaren izapidetzeari buruzko kontuez, Dopinaren Aukako Euskal Agentziarekin lotuta.

12.9 artikuluari dagokionez, txostenak zenbati zuzenketa proposatzen ditu, gaztelerazko bertsioan, eta bat genero-hizkuntza testuaren gainerakoarekin bat etorriz erabiltzeari buruzkoa da. Proposatzen da 12.9 artikuluko lehen paragrafoan hau jartzea gazteleraz: "*aquellos y aquellas deportistas*".

Gomendioa guztiz aproposa da eta zuzendu egingo da.

18. artikuluari dagokionez, proposatzen da aztertzea ea egokia den, Dopinaren aurkako Mundu Agentziaren nazioarteko egiaztapena duten laborategiekin edo

agentzia horrek onartutakoekin batera, estatuko homologazioa dutenak ere sartzea, 3/2013 Lege Organikoak ezartzen duen bezala.

Gure iritziz, aurreproiektuak Dopinaren aurkako Mundu Agentziaren irizpideei jarraitu die zorrotz, eta 3/2013 Lege Organikoak —kodeari egokitzeko prozesuan dago—, berriz, ez die jarraitzen. Kodeak bi aukera ematen ditu, eta ez estatuko homologazioena.

Aurreproiektuko **19. artikuluari dagokionez** (kirolean debekatuta dauden substantzia eta metodoen zerrendaren publizitateari buruzkoa da) gomendatzen da zehaztea zerrenda sailburuaren aginduz egin ahal izango dela.

Ez da gomendio hori ez onartzeko eragozpen juridikorik ikusten, eta testuan erantsiko da kirol-gaietan eskumena duen saileko titularrak argitaratze osagarria aginduko duela.

Txostenean, proposatzen da **21. artikuluko** lehengo zenbakiko azken tartekiaren testua hobetzeko, eta horretarako, beste idazketa modu bat proposatzen du, testuaren ordena aldatuta. Uste dugu proposamenak aurreproiektuko testua hobetzen duela, eta onartu egiten da haiek proposatutakoa.

22 bis artikuluari dagokionez (nahitaezko behin-behineko etetea deritzona arautzen du) Araubide Juridikoaren Zuzendaritzak zenbait iradokizun egin ditu. Horietako batean, eskatzen dute argitzea testuak lizentzia-etetea dakarrela dioen edo pertsonei eragiten dien, lizentzia izan ala ez.

Iradokizun horri erantzunez, argitu egin da: etetea esaten denean, lizentzia eteteaz gain lizentzia lortzea edo lehiaketetan parte hartzea ezinezkoa ere izango da. Behin-behineko etete horrek lizentzia lortzeko ezintasuna ekarriko du, bai eta etendura-aldian kirol-lehiaketetan parte hartzeko debekua ere.

Horrez gain, iradokitzen da behin-behineko etetearen ebazpena arrazoitzeko beharra.

Gomendioa onartu egin da.

Halaber, txostenak ohartarazten du Euskadiko araudian bi prozedura daudenez — diziplinazkoa eta zehapen-prozedura administratiboa— argitu egin beharko litzatekeela behin-behineko etendura bi prozedurei dagokien.

Onartzen da nahitaezko behin-behineko etendura bi prozedurei dagokiela, eta, horrenbestez, argitu egin da.

Orobat, adierazten dute behin-behineko neurriari gehienezko iraupena jarri beharko litzaiokeela, konponezinak diren kalteak ez eragiteko.

Zuzendaritza honi zuzena iruditzen zaio proposamena eta sei hilabeteko gehieneko iraupena erantsi da, zehapena ezartzeko prozedura izapidetzeko gehieneko iraupenarekin bat.

Azkenik, txostenean akats ortografiko batez ohartarazten da. Gazteleraz, "*se ha producido*" hitzak bi aldiz agertzen dira, baina horietako batean gaizki idatzita dago.

Akats ortografikoa zuzendu egin behar da.

23. artikuluari dagokionez, **m) letra** ez eranstea proposatzen da, ulertzen baita portaera hori artikulu horretako i) eta j) letrek zehatzen dutela.

Aurreproiektuko testuak Dopinaren aurkako Mundu Kode berriaren testuari jarraitu badio ere, Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen Zuzendaritzak arrazoia du esaten duenean ekintza horiek, funtsean, i) eta j) letretan sartuta daudela. Baina guztiz berdina ez denez, funtsean aurrekoetan jasota dagoena kendu da eta gainerako ekintzak bere horretan utzi dira. Adibidez, estaltzea ekintza desberdina izan daiteke, dopin-ekintza gertatu ondorengoa izan daiteke eta. Eta, gainera, i) eta j) letretako ekintza gehienak debekatutako substantziei eta metodoei buruzkoak dira, eta m) letra ez da horretara mugatzen.

n) letrari dagokionez, txostenak esaten du ez dela ulertzen hartan aipatzen den jakinarazpenak nori egiten dion erreferentzia.

Dopinaren aurkako Mundu Kodeak adierazten du jakinarazpena kirolariari edo dopinaren aurkako erakundearen agintearen mende dagoen beste pertsona bati egin behar zaiola, eta bi alderdi jakinarazi behar zaizkiola: kirolariaren laguntza-pertsonaren (entrenatzailea, medikua...) zehapen-egoera eta laguntza-pertsona horrekin kirol-lotura izaten jarraituz gero kirolariak izan ditzakeen zehapenak.

Azkenik, aholkularitza juridikoak proposatzen du gaztelerazko akats ortografiko bat zuzentzea **n) letran**: "*notificado*" beharrean "*notificada*" jartzea.

Zuzena dela irizten da eta zuzendu egin da.

24. artikuluari dagokionez, txostenak proposatzen du argitzea hartan ezarritako xedapen batzuen artean egon daitezkeen kontraesanak, kasu batzuetan ezar daitezkeen zehapenei buruzkoak. Halaber, gaztelerazkoan "*involucre*" terminoa aldatzea proposatzen dute, nahasmena sortzen dela uste baitute.

Lehenengo alderdiari dagokionez, onartu egin da iradokizuna eta lehenengo hiru atalen ondorengo atal batzuk aldatu egin dira, kontraesanik edota interpretazio-arazorik ez izateko. Lehenengo hiru ataletan zehapenak ezartzeko arau orokorrak ezartzen dira, eta hurrengo atalean, modulazioak edo salbuespenak egiten dira, egoera bereziei erreparatuta. Gaztelerazko "*cuando la infracción involucre una sustancia*" esaldiari dagokionez, beste honek ordeztuko du: "*cuando la infracción esté relacionada con una sustancia*".

Araubide Juridikoaren Zuzendaritzak, txostenean, **24 bis artikuluari dagokionez** proposatzen du **2. zenbakia** berrikustea. Izan ere, sinplifikatzea proposatzen du, eta, batez ere, azkenengo tartekia aldatzea gaztelerazkoan, ez baita gramatikalki zuzena, beren ustez. Hau da zuzendu beharreko esaldia: "*En estos casos el periodo de suspensión será de ocho años hasta la suspensión a perpetuidad.*"

Ez dago eragozpenik iradokizun hori onartzeko, eta honela idatzi da zenbaki hori: "Hirugarrenez urratzen badira dopinaren aurkako arauak, etendura betiko izango da, bi kasutan izan ezik: hirugarren arau-hauste horrek badakar aurkitzeko moduan egotearen betebeharra urratzea edo zehapenak baliogabetzeko edo murrizteko

baldintzak betetzen baditu. Kasu horietan, etendura-epea zortzi urtekoa izango da, gutxienez".

Halaber, **4. zenbakiko** idazketa aldatzea ere proposatzen da. Onartu egin da eta honela idatzita geratuko da: "*Dopinaren aurkako arau-hauste bat bigarren arau-haustetzat joko da bakarrik egiaztatzen bada arau-hausleak bigarrena egin orduko lehendabizikoaren berri jadanik jasoa zuela edo dopinaren aurkako erakundea behar bezala saiatu bada jakinarazpen hori egiten*.

12/2012 Legearen **29. artikuluan**, aurreproiektuaren bidez, 4. eta 5. zenbakiak erantsi dira. Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen Zuzendaritzak txostenean dio ez dela ulertzen **4. zenbakiko** testua. Horrez gain, adierazten da memorian argudiatzen dela aldaketak ez daukala eraginik Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrean, nahiz eta arau-hauste berriek dagozkien zehapenak ezartzea ekarriko duten, eta horrekin, administrazio publikoak diru-sarrerak izatea.

4. zatiak, Dopinaren aurkako Mundu Kodeak ezarritakoa hitzez hitz jasota, hau ezartzen du *"Zehapen ekonomikoak jarriko dira bakarrik gehieneko etendura-epeak beste modu batez ezarri den kasuetan*". Proposatzen da "*beste modu batez*" kentzea. Dopinaren aurkako Mundu Agentziak nahi duena da diruzko zehapena gehieneko etendura-epea ezarrita dagoen kasuetarako gordetzea.

Hiru arau-hauste berrien eta haiek dakartzaten zehapenen ondorioei eta administrazio publikoari lekarzkiokeen diru-sarrera gehigarriei dagokienez, azpimarratu behar da ez dagoela arau-hauste berriek diru-sarrera handiagoak ekarriko dituela adierazten duen inolako daturik edo zantzurik, eta, antzera, ez dagoela inolako daturik edo zantzurik ondorioztatzeko diru-zehapenak jartzeko aukera mugatzeak —gehieneko etendura-epea ezarri den kasuetan soilik— diru-sarrerak txikitzea ekarriko dituela adierazten duenik.

30. artikuluko 1. zenbakian ezartzen da, Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 10.8 artikuluarekin bat etorriz, zehapen-ondorioak modulatu egin ahal izango direla "*ekitate-arrazoiak direla eta*". Txostenean gomendatzen dute tarteki hori berrikustea, ez baitzaio lekurik utzi behar zehaztugabetasun juridikoari.

Gazteria eta Kirol Zuzendaritza honen ustez, aurreproiektuak hitzez hitz transkribatzen du kodean ezarritakoa, eta ezin du bestela egin. Beste alde batetik, indarrean dauden zenbait legek, zehapen-araubidearen atalean, ekitate-printzipioa aipatzen dute. Adibidez, abenduaren 17ko 13/2003 Legeak, Andaluziako kontsumitzaileak eta erabiltzaileak babestekoak, 93. artikuluan barkatzeaz diharduenean esaten du barkatzea erabaki ahal izango dela zehapena bere horretan betetzea <u>ekitatearen aurkakoa bada</u> edo interes orokorraren kalterako bada". Gauza bera ezartzen du, hitzez hitz, uztailaren 28ko 24/1988 Legeak, Balore Merkatuari buruzkoak, 98. artikuluan, bai eta azaroaren 4ko 35/2003 Legeak, inbertsio kolektiboko erakundeei buruzkoak. Eta ezin da ahaztu Auzitegi Gorena, zehapenen arloan, ekitate-printzipioa aplikatzen ari dela, finkatutako doktrina batez. Irakurri, *inter alia*, zer dioen Auzitegi Goreneko hirugarren salako sententziak, 2015eko urtarrilaren 26koak: " (...) ezarritako zigorra (...) arauak berak ezarritako mailan egonda ere, kasu honetako egoera

jakinekiko desproportzionatua da, eta sala honen iritziz leundu egin behar da ekitate printzipioari jarraituz edo arauaren zorroztasuna arinduz".

31 bis artikuluari dagokionez (lizentzia eteten den bitarteko estatusari buruzkoa da), txostenean adierazten da argitu egin behar dela kirolarien aipamenak lizentzia duten kirolariak hartzen dituen barne edo edozein kirolari hartzen duen, lizentzia izan ala ez. Horrez gain, akats bat hauteman dute gaztelerazko testuan "*el o la persona sancionada*".

Txostenean aipatutako akatsa zuzendu egin behar da, eta, horrez gain, testua aldatu egingo da argi uzteko eteteak lizentziarik ez duen pertsonari ere eragingo diola. Laugarren zenbaki bat erantsi da, eta hartan ezartzen da 31 bis artikuluan xedatutakoa zehapen moduan lizentzia aldi batez lortzeko ezintasuna ezarri zaien pertsonei ere aplikatuko zaiela, zehapen hori espresuki agertzen baita 12/2012 Legean.

34. artikuluari dagokionez, "*beste pertsona baten*" aipamena zuzentzea proposatzen da.

Ez dago eragozpenik proposamena onartzeko, erabat zuzena baita. Haren ordez, "*pertsona baten*" jarriko da.

Halaber, txostenak esaten du zehapenen preskripzio-epea kentzen duela testu berriak.

Eta erabat zuzena da ohartarazpena, aurreproiektuko testu berrian nahigabe 12/2012 Legearen bi paragrafo sartu gabe utzi baitira, eta sartu egin beharko lirateke.

Aurreproiektuaren **37. artikuluari** dagokionez, (diziplina-prozeduren alorreko eskumena arautzen du) Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen Zuzendaritzak uste du Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 7.1 artikuluan oinarritzen direla. Horrenbestez, uste du 7.1 artikulua ez dela kideekiko diziplina-ahalmena duten erakundeei buruzkoa soilik, administrazioaren zehapen-ahalmenari buruzkoa ere badela.

Argudioa onartu egiten da, eta horregatik, **36. artikuluan** —administrazioaren zehatzeko ahalmenari buruzkoan— hirugarren paragrafo bat erantsiko da, hori argitzeko.

37. artikuluko 6. zenbakiari buruz ere iruzkin bat egin du zuzendaritza horrek. Testua berrikusi eta gramatikako akatsen bat zuzenduko da gaztelerakoan.

Eta, halaber, uste du **5. zenbakia** ez dela ulertzen.

5. zenbakia ez da aldatzen aurreproiektuan, eta ezartzen du zigorra ezartzeko prozedura izapidetzeko epemuga igarotzen bada prozedura iraungita geratuko dela. Eta sei hilabeteko epearen barruan sartzen da, bai federazioei dagokien diziplina-bidekoa, bai eta ondoren administrazioei dagokiena ere, eskumena bereganatzen badu dagokion federazioak bi hilabeteko epean ebatzi ez badu (edo hiru hilabetetan, luzapenaren ondoren),

Aholkularitza juridikoak **10. zenbakian** gaztelerazko bertsioan agertzen den "*retiran*" aditzari buruzko oharra egiten du, singularrean egon behar duela irizten baitu. Onartu da.

38 bis eta 38 ter artikuluak dopinaren arloko zehapenak argitaratzeari eta ebazpenak berrikusteari buruzkoak dira. Xedapen horiei dagokienez, txostenean zenbait ohartarazpen egin dira.

38 bis artikuluari dagokionez, adierazten du Datuak Babesteko Espainiako Agentziak zenbait aldiz aztertu duela kirolariek dopinarekin lotuta egin dituzten arau-hausteengatik haiei ezarri zaizkien zehapenak argitaratzeko aukera. Agentzia horrek zenbait baldintza jarri ditu horretarako. Horregatik, proposatzen da aurreproiektuak baldintza horiek guztiak aipatzea.

Baldintza horiek aurreproiektuan proposatutako testuarekin alderatuta, ikusten da gehienak modu esplizituan adierazita daudela eta bi aipamen soilik eransten direla: zehatutako pertsona argitaratzeaz informatua izatea, eta neurriak hartzea Interneten argitaratutako informazioa ezin izan dadin atzitu edo indexatu bilaketa-motorren bidez. Dena den, eta Gazteria eta Kirol Zuzendaritzak uste duen arren berariazko aipamen horiek ez direla nahitaezkoak, ez duelako zentzurik, adibidez, kirolari jakinaraztea zehapena argitaratzeko lege-betebeharra, ez du eragozpenik gomendio horiek onartzeko.

3. zenbakiari dagokionez, gaztelerazko testua berrikustea gomendatzen da "*y*" juntagailu kopulatiboari dakionez.

Zuzena dela irizten da eta zuzendu egin da.

38 ter artikuluari dagokionez, adierazten da testuak ez duela betetzen *reformatio in peius* debeku-printzipioa, zehatutako kirolariak eskatutako berrikuspenak ezin baitu haren hasierako egoera okerrarazi.

Aurreproiektuak, berez, Dopinaren aurkako Mundu Kodeak ezarritakoa jasotzen du, hitzez hitz, baina ez dago eragozpenik azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 113.3 artikuluak adierazten duen moduan idazteari.

Aldi baterako xedapenei dagokienez, txostenak bi ohartarazpen egiten ditu, eta onartu egin dira. Testuak aldi baterako bi xedapen dituenez, titulua pluralean jarri behar da.

Bigarren ohartarazpenak dio aldi baterako lehenengo xedapenak ezartzen duela legea indarrean sartu aurretik dopinaren alorrean egin diren arau-hausteak aurreko araudiaren mende egongo direla, salbu eta interesdunak bere kabuz lege hori aplikatzea aukeratzen badu. Azken tartekia aldatu eta ohiko klausula hau sartu da: "*salbu eta arau berrian ezarritakoa espedientatua izan denarentzat onuragarriagoa bada*".

EUSKADIKO EKONOMIA- ETA GIZARTE-ARAZOETARAKO BATZORDEAK ADIERAZITAKOAK

EGABek, oro har, adierazi du modu positiboan baloratzen dutela eta egokia dela testuan Dopinaren aurkako Mundu Kode berriaren aldaketa nagusiak sartzea.

Halaber, EGABek azpimarratu nahi du aurreproiektuaren idazkuntzan lengoaiaren erabilera ez sexista egin dela generoaren ikuspegia aintzat hartuta, eta berdintasunaren legearen praktika onen eta betetzearen eredu dela. Dena de, EGABek artikulatuari buruzko iruzkin gutxi batzuk egiten ditu. Jarraian aztertuko ditugun hauek, hain zuzen:

EGABek egiten duen lehen iradokizuna da zioen adierazpenaren hirugarren paragrafoa honela osatzea:

"Bateratze-giro horretan, 2013ko azaroaren 12tik 15era Dopinaren aurkako IV. Mundu Konferentzia egin zen Johannesburgen, Hegoafrikan. Bertan, hainbat kirol-erakunderen eta estaturen ordezkariek hartu zuten parte, eta 2015eko urtarrilaren 1ean indarrean sartu den Dopinaren aurkako Mundu Kode berria onartu zen, kodearen hirugarren bertsioa".

EGABen iritziz arrazoizkoa da testuan aipatzea Dopinaren aurkako Mundu Kode berria hirugarren bertsioa dela. Zuzendaritza honek ez du ekarpen hori ez onartzeko eragozpen juridikorik ikusten.

Paragrafo horri dagokionez, gauza bat soilik eranstea komeni da: ikusita aurreproiektuaren izapide administratiboa, paragrafo horretan kode berri horri egiten dion aipamena, "2015eko urtarrilaren 1ean indarrean sartu den Dopinaren aurkako Mundu Kode berria" aldatu egin beharko litzateke, eta hau jarri: "...2015eko urtarrilaren 1ean indarrean sartu zen" legea ez baita, itxura guztien arabera, 2016ko urtarrilaren 1a baino lehen onartuko.

Aurreproiektuaren 21.1 artikuluari dagokionez (administrazioaren zehapen-ahalmenari buruzkoa da), EGABen iritziz, "lotura bereziko harremana" bi testuen idazketan bere horretan agertzen da (aurrekoan eta aldaketa-proposamenekoan), eta kentzea iradokitzen du. Haren iritziz, adierazpen horrek arazo asko sortzen ditu ez duelako esanahi bakarra eta ez doktrina eta ezta epaitegiak ere ez dira ados jartzen zeintzuk diren mota horretako harremanetan dauden pertsonak. Halaber, haien iritziz ez du ezer gehitzen: uste dute esaldiaren esanahia ez dela aldatzen adierazpen hori kentzen bada.

Baina, zuzendaritza honen iritziz, bere horretan utzi behar da, arrazoi hauek direla eta:

Lehenengoa.- Aurreproiektuaren 21. artikulua —eta indarrean dagoen 12/2012 Legearena—, "Administrazio-zehapenen araubidearen" arloari dagokio espresuki, eta diziplina-araubidean ez bezala, ez da beharrezkoa harreman edo lotura berezirik egotea. Administrazioaren zehatzeko ahala babestu edo tutelatu beharreko ordenamendu juridiko-administratibo baten ondorio da, eta herritar oro bere betebeharrak ez betetzeagatik zentzatzeko ahala da. Horren oinarria gizarte-ordena orokorra babestea da (heterotutela), eta diziplina-ahalak, berriz, dagokion kirol-erakundearekiko lotura edo harremana duten pertsonei bereziki dagokien zentzatze-ahala dakar (autotutela). Indarrean dagoen 12/2012 Legearen eta aurreproiektuaren 21. artikuluak egiten duen gauza bakarra da ahal-desberdintze horiek argitzea, kontuan izanda Euskal Autonomia Erkidegoan eman diren epai okerrak, Eusko

Jaurlaritzak dopinaren arloko administrazio-zehapenak jarri izan dituenean. Adibide moduan, EAEko Auzitegi Nagusiko 586/2009 epaia dago, uztailaren 9koa, esaten baitzuen Eusko Jaurlaritzak ez zuela eskumenik kirolariei dopinaren arloko administrazio-zehapenak jartzeko, uste baitzuen administrazio horrek ez duela horretarako ahalik, delegazioz kirol-federazioei eman zaizkielako. Eta hor nabarmen nahasten da diziplina-ahala eta administrazio-ahal orokorra. Eta, ildo beretik, auzitegi horren beraren 488/2009 epaia, uztailaren 20koa.

Bigarrena.- "relaciones de especial sujeción" adierazpidea (lotura berezia), gure ordenamendu juridikoak onartu ohi duen adierazpidea da, eta Konstituzio Auzitegiak berak ere bai, hainbat epaitan. "Relacion de especial sujeción" kontzeptua, berez, kontzeptu zehatza ez bada ere (Konstituzio Auzitegiaren 61/1990 epaia), beste hainbat kontzeptu juridiko bezala, ezin da zalantzan jarri haren funtsezko edukia edo esanahia.

Hirugarrena.- Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren Aholkularitza Juridikoak berak, aurreproiektu honi buruz 2015eko ekainean egin zuen txostenean, testu alternatibo bat proposatu zuen eta lotura bereziko harremanak espresuki azaltzen ziren hartan.

Laugarrena.- 12/2012 Legearen arau-proposamen hori, aurreproiektuan bere horretan dagoena, ez zen zalantzan jarri lege hura izapidetu zenean.

22. bis artikuluari dagokionez (behin-behineko etendurari buruzkoa da), EGABek gomendatzen du hirugarren paragrafoa honela osatzea:
"3. Behin-behineko etendura horrek ezingo du sei hilabete baino gehiagoko iraupena izan, salbu eta eteteak eragiten duen pertsonari berari egotz dakizkiokeen arrazoiek geldiarazi edo luzarazi badute. Dena dela ere, kirolariaren behin-behineko etenduraren aldia ezartzen zaion edo onartzen duen zehapenetik kenduko zaio."

Hau da ekarpen hori egiteko ematen den arrazoia: testuak bat etorri behar du Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 7.9.2 artikuluarekin. Hau esaten du hitzez hitz: "*Kirolariaren behin-behineko etenduraren aldia behin betikoz ezartzen zaion edo onartzen duen zehapenetik kenduko zaio, 10.11.3 edo 10.11.4 artikuluari jarraituz*". Hori zenbatzen ez baldin bada, EGABen iritziz, gerta daiteke kirolariak zigor bikoitza jasotzea, behin-behineko zigorrari behin betiko zigorra ere batu dakiokeelako.

Zuzendaritzak ez du eragozpenik ikusten horri dagokionez, baina garrantzitsua da ohartaraztea indarrean dagoela gure ordenamendu juridikoan. Izan ere, 3/2013 Lege Organikoak, ekainaren 20koak, kirol-jardunean kirolarien osasuna babesteari eta dopinaren aurka borrokatzeari buruzkoak, hau ezartzen du 39.8 artikuluan: "*Lege honen 38. artikuluan aurreikusitako behin-behineko etetearen neurria hartzen bada, azkenean ezarritako eteteko epe osotik kenduko da haren iraupena, betiere etete hori errespetatzen bada*". Eta lege organiko horren azken xedapenetako bigarrenean esaten da oinarrizko izaera duen araua dela.
Azkenean beharrezkotzat jotzen bada, iradokitzen da lege organikoko testua eranstea.

Azkenik, EGABek proposatzen du 23. artikuluan, arau-hausteen tipifikazioari buruzkoan, 1.m) ataleko testua osatzea, honela:
“m) Dopinaren aurkako arauak urratzearekin edo urratzen saiatzearekin lotutako arau-hauste bat dela eta, hartan laguntzea, bultzatzea, esku ematea, akuilatzea, kolaboratzea, konspiratzea, estaltzea edo bestelako nahitaezko konplizitate mota”.
EGABek ematen duen arrazoia da beraiek proposatutako testua zabalagoa, mugatuagoa eta zehatzagoa dela, aurreproiektuan proposatutako testuak ez duen nahitasun-elementua sartzen baita. Izenpetutako Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 2.9 artikuluak, "Konplizitatea" izenekoak, hau esaten du, gaztelerazko bertsioan, hitzez hitz: “asistir, alentar, ayudar, incitar, colaborar, conspirar, encubrir o cualquier otro tipo de complicidad intencional en relación con una infracción de las normas antidopaje o cualquier Intento de infracción de las normas antidopaje o infracción del Artículo 10.12.1 por otra persona”. Eta Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 10.2.3 artikuluak, berriz, “conforme se establece en los artículos 10.2 y 10.3, el término intencional se emplea para los deportistas que engañan”.
Baina zuzendaritza honen iritziz proposatutako ekintza horiek sartuta daude gaur egun indarrean dagoen legean. Esate baterako, proposatzen da “colaborar” aditza sartzea, eta j) letran laguntzea sartuta dago.
Orobat, proposatzen da “incitar” aditza sartzea, eta i) letran jada adierazten da akuilatzea. Halaber, “alentar” edo “ayudar” ere eranstea proposatzen da, eta 23.1 artikuluan sustatzea, bultzatzea, erraztea eta abar erabiltzen dira. Hau da, indarrean dagoen legean ere erabiltzen dira sinonimoak edota adiera zabalagoko terminoak. EGABek proposatzen dituen aditzak sartzea erredundantea izango litzateke.

VII. AHOLKU-BATZORDE JURIDIKOAK ESAN BEHARREKOA

Gomendio eta proposamen guztiak onartu dira, 24. artikulua osorik aldatzeari buruzkoa izan ezik, aurreproiektua izapidetzeko denbora gutxi izateak ez baitu aukerarik uzten aholkularitza-organoak egindako proposamenak zehatz-mehatz aztertzeko. Eta azterketa hori beharrezkoa da kontraesanik ez izateko eta sistematizazioa ez galtzeko.

Jon Redondo Lertxundi
Gazteria eta Kiroletako zuzendaria

VI

MEMORIA ECONÓMICA / MEMORIA EKONOMIKOA

PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.
KIROLEKO DOPINAREN AURKAKOA LEGEA ALDATZEN DUENA LEGE PROIEKTUA

FIRMADO DIGITALMENTE POR:

Firmante: **JON REDONDO LERTXUNDI**
Fecha de la firma: **17/11/2015 12:48:00**
Validación de la firma: **Correcta**

MEMORIA ECONÓMICA RELATIVA AL ANTEPROYECTO DE LEY SOBRE ADECUACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ANTIDOPAJE AL CÓDIGO MUNDIAL ANTIDOPAJE

La nueva Ley no supone la creación, directa o indirecta, de nuevas estructuras u órganos. Tampoco conlleva la dotación de mayores recursos humanos y materiales para esta Administración dado que, en definitiva, se trata de adecuar la vigente Ley 12/2012, de 21 de junio, de lucha contra el dopaje, al nuevo Código Mundial Antidopaje que ha entrado en vigor el 1 de enero del presente año, en los siguientes aspectos:

- Se introducen nuevas infracciones en materia de dopaje.
- Se incluye la posibilidad de que las muestras biológicas sean analizadas por laboratorios que no cuenten con la acreditación de la Agencia Mundial Antidopaje, pero sí con su aprobación.
- Se modifican las sanciones incrementándose de forma sustancial los periodos de suspensión.
- Se establece para las infracciones un nuevo periodo de prescripción de 10 años.

Además, el texto establece que la Agencia Vasca Antidopaje desarrollará las funciones atribuidas en el artículo 10 de la Ley a la Administración Pública del País Vasco. Dicha Agencia fue constituida como servicio de la Dirección Juventud y Deportes por el Decreto 193/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura. Servicio que ya viene desempeñando funciones antidopaje desde la aprobación del citado Decreto.

Por último, el texto incorpora el contenido del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la citada Ley del País Vasco 12/2012.

En consecuencia, procede señalar que la Ley sobre adecuación de la legislación antidopaje al Código Mundial Antidopaje no implica gravamen presupuestario alguno.

Jon Redondo Lertxundi. Director de Juventud y Deportes.

DOPINAREN AURKAKO LEGEDIA DOPINAREN AURKAKO MUNDU-KODE BERRIARI EGOKITZEKO LEGE-AURREPROIEKTUARI BURUZKO TXOSTEN EKONOMIKOA

Lege berriak ez dakar, zuzenean edo zeharka, egitura edo organo berririk sortzerik. Eta ez dakar administrazioak giza baliabide eta baliabide material gehiago jarri beharrik, funtsean orain indarrean dagoen dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legea Dopinaren aurkako Mundu Kode berrira egokitzen baita soilik (kodea aurtengo urtarrilaren 1ean sartu da indarrean). Alderdi hauetan egokitzen da:

- Dopinaren alorreko arau-hauste gehiago sartu dira.
- Atea irekitzen zaio lagin biologikoen analisiak egiteko aukerari Dopinaren aurkako Mundu Agentziaren nazioarteko egiaztapena ez duten laborategietan, baldin eta agentzia horren onarpena badute.
- Zehapenak aldatu egiten dira, halako moldez non etendura-epeak nabarmen luzatu diren.
- Arau-hausteetarako 10 urteko preskripzio-epea ezartzen du.

Horrez gain, testuak ezartzen du Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak lege horren 10. artikuluan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoari esleitzen zaizkion eginkizunak beteko dituela. Agentzia hori Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 193/2013 Dekretuaren bidez eratu zen, Gazteria eta Kirol Zuzendaritzaren zerbitzu gisa. Eta dopinaren aurkako eginkizunak betetzen ari da dekretu hori onartu zenetik.

Azkenik, Euskadiko Kiroleko Dopinaren aurkako 12/2012 Legearen arloan Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Bitariko Lankidetza Batzordearen Akordioaren edukia erantsi da testuan.

Horrenbestez, adierazten da Dopinaren aurkako legedia Dopinaren aurkako Mundu Kodera egokitzeari buruzko legeak ez dakarrela inolako aurrekontu-zamarik.

Jon Redondo Lertxundi
Gazteria eta Kiroletako zuzendaria

VII

INFORME DE ASESORÍA JURÍDICA /

AHOLKULARITZA JURIDIKOAREN TXOSTENA

PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.
KIROLEKO DOPINAREN AURKAKOA LEGEA ALDATZEN DUENA LEGE PROIEKTUA

FIRMADO DIGITALMENTE POR:

Firmante: **JOSE ANTONIO CAYERO BILBAO**
Fecha de la firma: **18/03/2015 13:58:48**
Validación de la firma: **Correcta**

Firmante: **AMAIA HERRAN FERNANDEZ**
Fecha de la firma: **18/03/2015 13:18:36**
Validación de la firma: **Correcta**

INFORME DE LA ASESORÍA JURÍDICA EN RELACIÓN AL ANTEPROYECTO DE LEY SOBRE ADECUACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ANTIDOPAJE AL CÓDIGO MUNDIAL ANTIDOPAJE

El presente informe se emite en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 7.3 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12.2.e) del Decreto 193/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, y tiene por objeto analizar el fundamento objetivo del Anteproyecto de Ley, la adecuación de su contenido a la Ley y al Derecho y la observancia delas directrices de técnica normativa vigentes en esta Administración.

I.- ANTECEDENTES.

Por Orden de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, de 4 de noviembre de 2014, se procedió a la iniciación del procedimiento de elaboración del Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley contra el dopaje en el deporte.

Posteriormente, y una vez elaborado por los servicios técnicos del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura el texto del Anteproyecto, se procedió a su aprobación mediante Orden de 24 de noviembre de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura.

Junto con las anteriores, se han remitido a esta Asesoría Jurídica para su análisis la versión definitiva del Anteproyecto, tanto en euskera como en castellano, y la Memoria explicativa de la propuesta.

La UNESCO aprobó en su sesión de 19 de octubre de 2005 la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, que fue ratificada por España y publicada en el Boletín Oficial del Estado, por lo que, tal y como dispone el

artículo 96.1 CE "los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados en España, formarán parte del ordenamiento interno".

Asimismo, mediante la ratificación de la Convención fue introducida en el ordenamiento jurídico español la obligación de respetar los principios del Código Mundial Antidopaje (Agencia Mundial Antidopaje[1]), en adelante CMA:

> Artículo 4 de la Convención Internacional contra el Dopaje en el deporte:
> «Relaciones de la Convención con el Código.
> 1. Con miras a coordinar, en el plano nacional e internacional, las actividades de lucha contra el dopaje en el deporte, los Estados Parte se comprometen a respetar los principios del Código como base de las medidas previstas en el Artículo 5 de la presente Convención. Nada en la presente Convención es óbice para que los Estados Parte adopten otras medidas que puedan complementar las del Código.
> 2. El Código y la versión más actualizada de los Apéndices 2 y 3 se reproducen a título informativo y no forman parte integrante de la presente Convención. Los apéndices como tales no crean ninguna obligación vinculante en derecho internacional para los Estados Parte.
> 3. Los anexos forman parte integrante de la presente Convención.»

Con el texto ahora analizado se pretende modificar la Ley contra el Dopaje en el Deporte, a fin de introducir en la misma los nuevos estándares internacionales del CMA, que entraron en vigor el pasado 1 de enero de 2015. De este modo, se sigue la línea introducida en la Ley contra el Dopaje en el Deporte, entre cuyos objetivos estaba el de armonizar la normativa vasca de lucha contra el dopaje con los principios y reglas del CMA 2009.

Detrás de la Ley contra el Dopaje y, en definitiva, en el Anteproyecto ahora tramitado subyace el derecho a la protección de la salud (art. 43 de la CE):

> "1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
> 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
> 3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio."

Dicho artículo 43 CE encomienda a todos los poderes públicos la obligación de organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Asimismo, dicho artículo 43 dirige, igualmente, a todos los poderes públicos el mandato de fomentar el deporte.

---

[1] La Agencia Mundial Antidopaje inició su andadura en 1999 como una agencia internacional independiente compuesta y financiada a partes iguales por el movimiento deportivo y por gobiernos. Sus principales actividades son la investigación científica, la educación, el desarrollo de capacidades antidoping y la monitorización del Código Mundial Antidopaje, el documento que trata de armonizar las políticas de lucha contra el dopaje de todos los deportes y todos los países (www.wada-ama.org).

En materia de dopaje el Estado promulgó la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, que sustituyó a la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte. En ambos textos legales se regulaban ciertas materias sujetas a reserva de ley orgánica.

Asimismo, cabe señalar que fueron varios los títulos competenciales en base a los cuales el Estado legisló sobre la materia, si bien cabe destacar el previsto en el artículo 149.1.16 CE "Bases y coordinación general de la sanidad" y "Legislación en productos farmacéuticos". Ahora bien, dicho título competencial no veta la intervención del legislador autonómico en relación a dicha materia, ya que como ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional (STC NÚM. 35/1982, de 14 de junio) las CCAA también podrán "orientar su acción de gobierno en función de una política propia sobre esa materia" en función de aquellas competencias que tengan específicamente atribuidas:

> (FJ2) "El artículo 149.1 de la Constitución utiliza para delimitar el ámbito reservado en exclusiva a la competencia estatal, diversas técnicas, cuya compleja tipología no es del caso analizar en detalle.
> Sobresale, sin embargo, la diferencia, que aquí sí es pertinente, entre la reserva de toda una materia (v. gr. Relaciones Internacionales, Defensa y Fuerzas Armadas, Administración de Justicia, Hacienda General y Deuda del Estado, etc.) y la reserva de potestades concretas (sea la legislación básica, o toda la legislación sobre determinadas materias). En el primer caso la reserva estatal impide, no ya que una Comunidad Autónoma pueda asumir competencias sobre la materia reservada, sino también que pueda orientar su autogobierno en razón de una política propia acerca de ella, aunque pueda participar en la determinación de tal política en virtud de la representación específica que las distintas Comunidades tienen en el Senado. Cuando, por el contrario, la reserva estatal es sólo de ciertas potestades, correspondiendo otras a las Comunidades Autónomas que deseen asumirlas, éstas, en el ejercicio de su autonomía, pueden orientar su acción de gobierno en función de una política propia sobre esa materia, aunque en tal acción de gobierno no puedan hacer uso sino de aquellas competencias que específicamente le están atribuidas. (…)"

La competencia autonómica para el diseño de una política propia en materia de lucha contra el dopaje fue reconocida en la propia Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva (artículo 8):

> «1. Corresponde a las Comunidades Autónomas, de conformidad con sus respectivas Leyes, el desarrollo de sus propias políticas en materia de control de dopaje y de protección de la salud de los deportistas con licencia deportiva de ámbito autonómico o en competiciones de competencia autonómica.

En todo caso, la formulación de dichas políticas debe realizarse en el marco de los compromisos internacionales asumidos por España y en los tratados y convenios que sean de aplicación en España.
En el caso de competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal o de competiciones deportivas internacionales organizadas por organismo olímpico o paralímpico o por las Federaciones deportivas internacionales, las Administraciones autonómicas podrán realizar materialmente controles de dopaje previa solicitud, instrumentada mediante convenio suscrito con anterioridad a dicha solicitud, a la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte o a las organizaciones o Federaciones internacionales responsables.
Las Administraciones autonómicas únicamente podrán realizar controles fuera de competición a deportistas con licencia estatal, con licencia autonómica distinta a la Comunidad Autónoma que ejerce el control o con licencia internacional previa solicitud, instrumentada mediante convenio suscrito con anterioridad a dicha solicitud, a la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte o a las organizaciones o Federaciones autonómicas o internacionales responsables.
2. Asimismo, las Comunidades Autónomas podrán formular y ejecutar políticas de protección de la salud de los deportistas en el marco de las medidas de cooperación y colaboración acordadas con la Administración General del Estado en los términos que señalan los artículos precedentes.»

En cuanto a los títulos competenciales en virtud de los cuales la Comunidad Autónoma ejerce su potestad legislativa serían fundamentalmente dos:

- el artículo 10.36 del Estatuto de Autonomía del País Vasco (en adelante EAPV) que establece que corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco la competencia exclusiva en materia de "Turismo y deporte. Ocio y esparcimiento" y,

- el artículo 18 EAPV, relativo a las competencias en materia de sanidad, que dispone:

"1. Corresponde al País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior.
2. En materia de Seguridad Social corresponderá al País Vasco:
a) El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma.
b) La gestión del régimen económico de la Seguridad Social.
3. Corresponderá también al País Vasco la ejecución de la legislación del Estado sobre productos farmacéuticos.
4. La Comunidad Autónoma podrá organizar y administrar a tales fines, y dentro de su territorio, todos los servicios relacionados con las materias antes expresadas y ejercerá la tutela de las instituciones, entidades y fundaciones en materia de Sanidad y de Seguridad Social, reservándose el Estado la alta inspección conducente al cumplimiento de las funciones y competencias contenidas en este artículo.
5. Los poderes públicos vascos ajustarán el ejercicio de las competencias que asuman en materia de Sanidad y de Seguridad Social a criterios de participación democrática de todos los

interesados, así como de los Sindicatos de Trabajadores y Asociaciones empresariales en los términos que la ley establezca."

Habría, además, otros títulos competenciales vinculados a la materia legislada, en concreto, resultarían afectados los siguientes: normas procesales y de procedimientos administrativos que se deriven de las especialidades del derecho sustantivo y de la organización propia del País Vasco (art. 10.6 EAPV); ordenación farmacéutica de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.1.16ª de la Constitución, e higiene, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto (art. 10.15 EAPV); investigación científica y técnica en coordinación con el Estado (art. 10.16 EAPV) y sector público propio del País Vasco (art. 10.24 EAPV).

Tal reconocimiento competencial en nuestro ámbito territorial ha de incardinarse conforme a la distribución competencial operada por la Ley de Territorios Históricos (Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos), en cuanto atribuye a éstos el desarrollo y la ejecución de las normas emanadas de las Instituciones Comunes en materia de "Fomento del deporte. Programas de deporte escolar y deporte para todos". Por otra parte, dicha norma utiliza la técnica de atribución general a las Instituciones Comunes de todas las funciones que, correspondiendo a la Comunidad Autónoma del País Vasco, no se reconozcan en el Estatuto de Autonomía, la LTH u otra ley posterior a los órganos forales de los Territorios Históricos (artículo 6).

Conforme a dicho mapa competencial se promulgó la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco (en adelante Ley 14/1998 o Ley del Deporte del País Vasco), que dedicó el Capítulo V de su Título VII –así como otros artículos- al dopaje:

- Artículo 2.3.v), como principio rector contempló: "el reconocimiento y protección del ideario olímpico y la adopción de medidas para erradicar el dopaje en el deporte y cualesquiera otras prácticas atentatorias contra la salud y la dignidad de la persona".

- Art. 4.2: "En particular, corresponde a las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma el ejercicio de las siguientes competencias:
  (…)
  q) La regulación de la prevención, control y represión del dopaje."

- ⇨ Art. 25.1.e): "1. Las federaciones vascas y las federaciones territoriales ejercerán las siguientes funciones públicas de carácter administrativo:
  (…)
  e) La prevención, control y sanción del dopaje."

Resultando insuficiente la previsión legal contenida en la Ley del Deporte del País Vasco para la regulación de la prevención, control y sanción del dopaje, así como para la protección de la salud de los y las deportistas, se

estimó necesario dictar una norma legal específica para adaptar la normativa vasca a la normativa internacional y estatal vigente en la materia, de ahí que en el año 2012 entrase en vigor la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte, que es el texto que, precisamente ahora, se pretende modificar para adecuarlo a los últimos cambios habidos a nivel internacional.

II.- RANGO LEGAL Y DESARROLLO REGLAMENTARIO.

La regulación que se pretende adopta la forma de Anteproyecto de Ley. Habida cuenta de los títulos competenciales anteriormente analizados y, en especial, de la competencia exclusiva en materia de deporte que ostenta la Comunidad Autónoma, hemos de concluir en lógica consecuencia la capacidad normativa de la misma en la materia, esto es, la competencia para su regulación.

Dado que el Anteproyecto afecta al régimen sancionador aplicable, es imprescindible que esta materia esté regulada por norma de rango legal. Ello se desprende del artículo 25.1 del texto constitucional ("Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento"), así como de la reiterada doctrina constitucional acerca del alcance del término "legislación vigente" contenido en dicho artículo 25.1 CE, la cual considera que "es expresivo de una reserva de Ley en materia sancionadora", entre otras, STC núm.26/2005, de 14 de febrero, STC 113/2002, de 9 de mayo, STC 25/2002, de 11 de febrero, STC 60/2000, de 2 de marzo).

La necesidad de legislar en esta materia y, además, de hacerlo con norma de rango legal quedó evidenciada a raíz de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Sala de lo Contencioso-Administrativo) núm. 488/2009, y núm. 586/2009, según las cuales en la Ley 14/1998 no había título habilitante suficiente para que la Administración ejerciera la potestad sancionadora en materia de dopaje. El TSJPV concluía que sólo tenían capacidad sancionadora en el ámbito disciplinario las federaciones, pero que no así la Administración: "la competencia exclusiva que la Comunidad Autónoma del País Vasco ostenta en materia de deporte no ampara en particular a la Administración General de la CAPV para la imposición de sanciones en materia disciplinaria deportiva, sin que quepa hablar de un diferenciado ámbito administrativo sancionador en lo que se refiere a los deportistas federados que permita aplicar a estos sanciones administrativas propias de general sometimiento de todos los administrados". Sin embargo, esa falta de habilitación legal fue salvada a raíz de la entrada en vigor de la Ley contra el Dopaje en el Deporte, que es el texto cuya modificación ahora se propone.

Además, los derechos y libertades afectados por la normativa propuesta no se reducen al derecho a la protección de la salud, sino que la norma afecta

también de manera significativa al derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen (art. 18 CE). Esa afectación derivará tanto de la especial naturaleza de las pruebas antidopaje, así como de la previsión normativa contenida en el Anteproyecto relacionada con la posibilidad de hacer públicas en Internet las infracciones de las normas contra el dopaje. Luego, la naturaleza de los derechos y libertades regulados es tal que exige norma de rango legal. Dicha reserva de ley derivaría del propio texto constitucional, cuyo artículo 53 establece:

> "1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1 a).
> (…)
> 3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo 3º informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen."

Por tanto, habida cuenta de la naturaleza de las materias reguladas en el Anteproyecto y teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, cabe concluir que el rango normativo elegido es adecuado para la regulación de dichas materias.

III.- CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO DE LEY

El Anteproyecto de Ley consta de una parte expositiva, un único artículo, dos disposiciones transitorias y una disposición final.

3.1.- PARTE EXPOSITIVA.

En la exposición de motivos del Anteproyecto de Ley se indican los motivos que dan origen a su elaboración, los objetivos perseguidos, los fundamentos jurídicos habilitantes en que se basa, los principios y líneas generales inspiradores de la regulación, así como su incidencia en la normativa en vigor. Se da, consecuentemente, respuesta adecuada a los contenidos exigidos en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de marzo de 1993, por el que se aprueban las directrices para la elaboración de Anteproyectos de Ley, Decretos, Órdenes y Resoluciones (publicada en el BOPV nº 71, de 19 de abril de 1993 por Orden de 6 de abril de 1993, del Consejero de Presidencia, Régimen Jurídico y Desarrollo Autonómico).

Antes de comenzar con el análisis del contenido de las modificaciones propuestas, hemos de señalar que la norma proyectada trata de satisfacer los siguientes objetivos fundamentales, explicitados tanto en la Memoria justificativa que acompaña al Anteproyecto, como en su exposición de motivos:

- Trata de incorporar a la Ley vasca los requerimientos derivados de los cambios habidos en el CMA, vigente desde el 1 de enero de 2015,

que por mandato de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte deben formar parte del haber jurídico de nuestro Ordenamiento.

- Se pretende reconocer a la Agencia Vasca Antidopaje como el órgano especializado encargado de desarrollar las funciones atribuidas en el artículo 10 de la Ley contra el Dopaje en el Deporte a la Administración Pública del País Vasco.
- Por último, pretende también incorporarse a la Ley contra el Dopaje en el Deporte el contenido del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley del País Vasco 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte (BOE nº 99, de 25 de abril de 2013).

En la exposición de motivos deberían corregirse los siguientes fallos de sintaxis:

- En el párrafo primero hay una preposición de más: "por los organismos internacionales más avanzados en la lucha **de** contra el dopaje en el deporte".

- En el párrafo tercero falta el pronombre relativo "que": "la IV Conferencia Mundial Antidopaje **en la participaron**".

4.2.- ARTÍCULOS DE LA LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE MODIFICADOS POR EL ANTEPROYECTO DE LEY.

ARTÍCULO 10:

El contenido del apartado 2 del artículo 10 de la Ley contra el Dopaje en el Deporte era el siguiente:

> «La Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco se dotará de las estructuras administrativas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior.
> El personal que ejerza la inspección a que se refiere la letra f) del apartado anterior tendrá la consideración de autoridad pública en el desempeño de sus cometidos, y estará obligado a guardar secreto sobre las informaciones que conozcan en el ejercicio de sus funciones, incluso después de haber cesado en las mismas. Sus actas se presumen veraces.»

Ahora se pretende sustituir por el siguiente texto:

> «La Agencia Vasca Antidopaje, adscrita al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva, será el órgano especializado encargado de desarrollar las funciones atribuidas en el apartado anterior a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco, asumiendo la condición de organización antidopaje.»

El artículo 10.2 de la Ley contra el Dopaje en el Deporte preveía la posibilidad de que la CAPV se dotase de una estructura administrativa para el ejercicio de las funciones de inspección en materia de control antidopaje. Esta posibilidad estaba prevista en el entonces vigente artículo 4.6 de la LO 7/2006, de 21 de noviembre, que contemplaba la posibilidad de que las Comunidades Autónomas se dotasen de Agencias Antidopaje y, con posterioridad, pasó al artículo 7.5 de la LO 3/2013, de 20 de junio.

Lo que se hace ahora con la modificación propuesta es crear la Agencia Vasca Antidopaje como órgano administrativo adscrito al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva.

En este sentido, cabe señalar que, tal y como prevé el artículo 11 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, la creación de cualquier órgano administrativo exigirá el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica;
- delimitación de sus funciones y competencias y,
- dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.

Asimismo, el apartado 3 de dicho artículo 11 establece que "no podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de éstos".

En la actualidad, las funciones de inspección, así como la instrucción de los expedientes sancionadores que correspondan al Gobierno Vasco en el ámbito de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, y de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte, están atribuidas a la Dirección de la Juventud y Deportes, en virtud del artículo 28.1.q) del Decreto 193/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.

No obstante, hemos de constatar que existe una contradicción entre lo expresado en el Anteproyecto de Ley y lo manifestado en la Memoria justificativa. En el Anteproyecto se dice claramente que la Agencia Vasca Antidopaje será un órgano adscrito al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva. Sin embargo, en la Memoria se explica que no se procederá a la creación de ninguna estructura nueva y se da a entender que las funciones previstas en la Ley contra el Dopaje en el Deporte fueron asumidas por la Dirección de Juventud y Deportes. No obstante, de la lectura del Decreto por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento se desprende que sólo han sido

encomendadas a la Dirección de Juventud y Deportes algunas de las funciones del artículo 10[2] de la Ley contra el Dopaje en el Deporte.

---

[2] Artículo 10.1 de la Ley contra el Dopaje en el Deporte: «La Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco tendrá las siguientes competencias
en la lucha contra el dopaje:
a) Velar por el cumplimiento de la legislación sobre dopaje.
b) Atender las peticiones, consultas, denuncias y reclamaciones formuladas en materia de dopaje.
c) Proporcionar información a las personas acerca de sus derechos y obligaciones en materia de dopaje.
d) Requerir a los organismos competentes la adopción de las medidas necesarias para la adecuación de su organización, normativa o actividad a la legislación en materia de dopaje y, en su caso, ordenar la cesación o modificación cuando no se ajusten a dicha legislación.
e) Ejercer la potestad sancionadora, así como adoptar las medidas cautelares que procedan.
f) Realizar las funciones de inspección deportiva, recabando cuanta información precise para el cumplimiento de su cometido. A tal efecto, podrá solicitar cualesquiera aclaraciones a deportistas y personas de su entorno, la exhibición o el envío de documentos y datos y examinarlos en el lugar en que se encuentren depositados, así como inspeccionar equipos y locales en los términos que permita la legislación vigente.
g) Elaborar y, en su caso, llevar a cabo, financiar y vigilar, un programa anual de controles de dopaje que incluya controles dentro y fuera de competición, realizados a su instancia, sin perjuicio de los que pudiesen ser realizados en Euskadi por otras entidades de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
h) Recabar de los órganos correspondientes cuanta ayuda e información estime necesaria para una eficaz lucha contra el dopaje.
i) Redactar una memoria anual y remitirla al Parlamento Vasco.
j) Realizar actividades divulgativas, formativas y de sensibilización por un deporte libre de dopaje; divulgar información relativa al uso de sustancias y métodos prohibidos y sus modalidades de control; hacer informes y estudios sobre las causas y efectos del dopaje; promover e impulsar acciones de prevención. En el desarrollo de estas funciones, se deberá integrar la perspectiva de género para fomentar y divulgar la investigación sobre el dopaje y sus efectos concretos en los hombres y en las mujeres deportistas.
k) Determinar las competiciones y las pruebas deportivas susceptibles de sometimiento a controles antidopaje.
l) Velar por la protección de la presunción de inocencia de las y los deportistas sometidos a control.
m) Instar a las federaciones deportivas vascas y territoriales a abrir expedientes disciplinarios y, si procede interponer los correspondientes recursos contra las resoluciones disciplinarias de estas federaciones.
n) Tramitar y resolver los expedientes disciplinarios cuando las federaciones deportivas no hayan resuelto en plazo los mismos.
ñ) Aprobar las disposiciones y formularios necesarios en materia de localización de deportistas para la realización de controles de dopaje.
o) Emitir informe preceptivo respecto a aquellos proyectos normativos que sean tramitados por el Gobierno Vasco y afecten a la lucha contra el dopaje, así como emitir informe respecto a iniciativas normativas de otras
instituciones cuando sea requerida por éstas.
p) Participar en reuniones, foros e instituciones estatales e internacionales, relacionadas directamente con la lucha contra el dopaje.
q) Colaborar con otras administraciones y entidades deportivas en lo relativo a la información y documentación sobre las autorizaciones de uso terapéutico y en cualesquiera otros ámbitos cuando sea necesario para una eficaz lucha contra el dopaje en el deporte.
r) Llevar a cabo las relaciones de colaboración que resulten precisas con las fuerzas y cuerpos de seguridad en la lucha contra el dopaje en el deporte.
s) Promover la investigación científica y técnica, el desarrollo y la innovación en materia de dopaje, impulsando proyectos específicos, directamente o en colaboración con universidades, organismos públicos de investigación y cualesquiera otras instituciones que promuevan la investigación, desarrollo o innovación.

En consecuencia, debemos recordar al servicio promotor que no es lo mismo un órgano administrativo que un conjunto de funciones atribuidas a un órgano administrativo, en este caso, el Director de Juventud y Deportes. De modo que con la actual previsión contenida en el Decreto 193/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, no sería suficiente para cumplir la previsión legal contenida en la redacción definitiva que se propone para el artículo 10 de la Ley contra el Dopaje en el Deporte, ya que en la redacción propuesta se habla claramente de un órgano administrativo encargado de ejecutar todas las funciones previstas en el artículo 10.1 de la Ley contra el Dopaje en el Deporte.

En consecuencia, sometemos al análisis del servicio promotor la observación anterior y, asimismo, recordamos que si, finalmente, se opta por la creación de un órgano especializado que asuma las funciones del artículo 10.1 de la Ley contra el Dopaje en el Deporte, dicha previsión debería ser objeto del consiguiente desarrollo en la oportuna memoria económica.

Dado que se trataría de la creación o modificación de estructuras internas, entendemos que también sería necesario solicitar informe a la Dirección de Función Pública (artículo 16.c del Decreto 188/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Administración Pública y Justicia); ya que esta tiene atribuida la función de «elaborar, coordinar y evaluar las actuaciones y proyectos departamentales e interdepartamentales en materia de estructuración interna y organización de personal, mediante relaciones de puestos de trabajo acordes. Valorar los puestos de trabajo resultantes, siguiendo las directrices de la política de recursos humanos establecidas por el Gobierno». Asimismo, sería necesario solicitar informe a la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración, en base al artículo 18.c) del Decreto 188/2013, de 9 de abril, anteriormente aludido, que le atribuye la función de «análisis y evaluación de las actuaciones departamentales en materia de estructuración interna, organización, y creación de entes institucionales y de los proyectos de disposiciones de carácter general que las establezcan; así como el asesoramiento y apoyo técnico a los departamentos y entes que la integran en materia de organización y procedimientos.»

---

t) Realizar la recogida y transporte de las muestras en los controles de dopaje que organice la propia Administración o en los controles realizados por terceras entidades cuando así esté previsto en los correspondientes convenios.
u) Promover la formación de personal para la recogida de muestras en los controles de dopaje en orden a su posterior habilitación, fomentando una participación equilibrada de mujeres y hombres que asegure el cumplimiento de las previsiones legales sobre la presencia de una persona del equipo de recogida que sea del mismo sexo que el o la deportista.
v) Conceder o denegar las autorizaciones de uso terapéutico a través del Comité Vasco de Autorizaciones de Uso Terapéutico (COVAUT).
w) Cuantas otras que, siendo competencia de la citada administración, se refieran a la lucha contra el dopaje y no estén expresamente atribuidas a otros órganos o entidades, así como aquellas funciones que le sean atribuidas por otras leyes y reglamentos.
x) Incluir en el Plan de Adicciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco un Capítulo relativo a la lucha contra el dopaje en el deporte.»

ARTÍCULO 12:

EL ARTÍCULO 12.9 ESTABLECE LO SIGUIENTE:

> «Podrán ser sometidos y sometidas a control deportistas con licencia estatal o internacional que participen en competiciones o actividades deportivas que se celebren en territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, o que residan, aunque temporalmente, en ésta. La tramitación de los expedientes administrativos sancionadores o disciplinarios que pudieran derivarse de los mismos se tramitará por el organismo que resulte competente con arreglo a la Ley. Asimismo, podrán ser sometidos y sometidas a controles fuera de competición cuando se encuentren entrenando en el País Vasco, a instancia de la federación u organismo internacional competente.
> En cualquier caso, los resultados analíticos definitivos de los controles de dopaje efectuados en el País Vasco serán trasladados a los organismos deportivos correspondientes que puedan resultar competentes.»

Se propone la modificación de dicho apartado por el siguiente texto:

> «Podrán ser sometidos y sometidas a control aquellos deportistas que participen en competiciones o actividades deportivas que se celebren en territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, quedando excluidas, en todo caso, las competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal y las competiciones deportivas internacionales organizadas por las federaciones deportivas internacionales o el organismo olímpico o paralímpico correspondiente.
>
> La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco únicamente podrá realizar controles fuera de competición a deportistas con licencia estatal, autonómica distinta de la autonómica del País vasco o licencia internacional, a solicitud y previo convenio con la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte o con las organizaciones o federaciones autonómicas o internacionales responsables».

Esta nueva redacción propuesta para este apartado recoge la interpretación dada al mismo en el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley del País Vasco 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte:

> «A) Ambas partes convienen en interpretar el artículo 12.9 de la Ley del País Vasco 12/2012 en los siguientes términos:
> – La expresión «que participen en competiciones o actividades deportivas que se celebren en territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco», ha de interpretarse, de acuerdo con el artículo 1.4 de la Ley, como las referidas a competiciones de carácter autonómico, quedando excluidas, en todo caso, las competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal y las competiciones deportivas internacionales organizadas por las federaciones deportivas

internacionales o el organismo olímpico o paralímpico correspondiente.
– La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco únicamente podrá realizar controles fuera de competición a deportistas con licencia estatal, licencia autonómica distinta de la autonómica del País Vasco o licencia internacional, a solicitud y previo convenio con la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte o con las organizaciones o federaciones autonómicas o internacionales responsables.»

Dado que a lo largo del proyecto se ha optado por utilizar el uso de ambos géneros como mecanismo para la adecuada utilización del lenguaje desde un punto de vista de género, en el primer párrafo del artículo 12.9 debería decirse: "aquellos y aquellas deportistas".

En el segundo párrafo debería escribirse "País Vasco" con mayúsculas.

ARTÍCULO 13:

En el artículo 13 se añaden tres nuevos apartados, el 11, el 12 y el 13, de modo que su redacción definitiva queda del modo siguiente:

Artículo 13. «De las garantías en los controles y de los efectos legales de los mismos.
1.- Los controles a que se refiere el artículo anterior se realizarán por un médico auxiliado de personal sanitario de recogida de muestras siempre bajo la responsabilidad del personal habilitado por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el desempeño de esta función.
2.- De conformidad con la normativa internacional antidopaje y, en especial, el Código Mundial Antidopaje y sus normas de desarrollo, los controles de dopaje fuera de competición y los controles de salud no podrán realizarse durante una franja horaria, que se determinará reglamentariamente y que comprenderá, en todo caso, las horas habitualmente destinadas al descanso nocturno. Durante esas horas no podrá realizarse en el País Vasco ningún control de dopaje, con independencia de que éste haya sido ordenado por una autoridad administrativa, federación deportiva u organismo estatal o internacional.
3.- Tampoco podrá obligarse a una o un deportista a pasar más de un control de dopaje en una misma prueba. No se considerará que se trata del mismo control cuando los tipos de muestras solicitadas a las y los deportistas sean diferentes. Reglamentariamente se regulará el alcance de este derecho.
4.- La negativa a ser sometido a controles de dopaje durante la franja horaria destinada al descanso nocturno o al amparo del derecho establecido en el párrafo anterior no producirá responsabilidad alguna.
5.- La Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco velará para que los controles de dopaje en el País Vasco se realicen siempre, con independencia de quién los ordene, respetando estas limitaciones horarias.
6.- Las y los deportistas serán informados en el momento de recibir la notificación de control y, en su caso, al iniciarse la recogida de la muestra, de los derechos y obligaciones que les asisten en relación

con el citado control, de los trámites esenciales del procedimiento y de sus principales consecuencias, así como del tratamiento y cesión de los datos previstos en la presente Ley, además de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
7.- Entre los citados derechos que les asisten se incluirá el derecho a no someterse a la prueba, sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo y de lo establecido en el artículo 23.1.c) de esta Ley.
8.- La Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco establecerá un modelo normalizado de información en euskera, castellano e inglés para la notificación de los controles, para la recogida de las muestras en la realización de los controles de dopaje y para la remisión de las muestras recogidas al correspondiente laboratorio.
9.- A los efectos de los procedimientos disciplinarios o sancionadores en materia de dopaje, la negativa sin justa causa a someterse a los controles o la negativa a responder a los requerimientos de información por parte de la organización antidopaje, una vez documentada, constituirá prueba suficiente para sancionar la conducta de la o el deportista. Se entiende por justa causa para no someterse a un control la imposibilidad de acudir, como consecuencia de lesión acreditada o cuando se acredite que la realización del control ponga en riesgo la salud de la o el deportista.
Dicha imposibilidad deberá ser verificada y acreditada por cualquier medio establecido en derecho por la persona responsable del equipo de recogida de muestras.
10.- El documento que acredite la negativa a que se refiere el apartado anterior gozará de la presunción de veracidad prevista en la normativa vigente en materia de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
11.- La organización antidopaje responsable de la gestión de resultados podrá, según su criterio, decidir que se analice la muestra B aún en el caso de que el o la deportista no solicite el análisis de dicha muestra.
12.- Serán pruebas suficientes de infracción de las normas antidopaje cualquiera de las siguientes:
a) La presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la muestra A del o de la deportista cuando renuncie al análisis de la muestra B y ésta no se analice.
b) Cuando la muestra B del o de la deportista se analice y dicho análisis confirme la presencia de la sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores encontrados en la muestra A.
c) Cuando la muestra B del o de la deportista se divida en dos frascos y el análisis del segundo frasco confirme la presencia de la sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores encontrados en el primer frasco.
13.- Recaerá sobre la organización antidopaje la carga de probar que se ha producido una infracción de la normativa antidopaje. A tal efecto, se presumirá la validez científica de los métodos analíticos o límites de decisión aprobados por la Agencia Mundial Antidopaje que hayan sido objeto de revisión externa y consulta a la comunidad científica».

En el apartado 12 se copia el artículo 2.1.2 del CMA, relativo a la configuración del sistema de prueba y al establecimiento de ciertas

presunciones sobre la validez de las pruebas antidopajes. Estas mismas presunciones fueron introducidas en el artículo 395.a) de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva. Asimismo, en el apartado 11 se introduce un comentario recogido en el CMA en relación a la forma de interpretar el antes mencionado artículo 2.1.2 reproducido en el apartado 12.

Finalmente y en la misma línea, el apartado 13 reproduce el artículo 3.1 del CMA en relación a la carga de la prueba de las infracciones de las normas antidopaje.

El segundo inciso del apartado 13 reconoce la validez científica de los métodos analíticos o límites de decisión aprobados por la Agencia Mundial Antidopaje que hayan sido objeto de revisión externa y consulta a la comunidad científica.

ARTÍCULO 16:

Se modifica el apartado 3 del artículo 16. El tenor literal de dicho artículo era el siguiente:

> 1.- A los efectos de esta Ley, se entienden como controles de dopaje el conjunto de actividades realizadas por entidades y personas habilitadas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco cuya finalidad es averiguar la presencia o no de alguna sustancia prohibida susceptible de producir dopaje o de la utilización de un método no reglamentario, detectados mediante procedimientos estandarizados en una muestra extraída a tal efecto. También se considerarán controles de dopaje todas aquellas actuaciones desarrolladas por los órganos antidopaje competentes para verificar el incumplimiento de la normativa antidopaje.
> 2.- En todo caso, quedan incluidos en el ámbito de los controles de dopaje la planificación necesaria para su realización con garantías, la selección de deportistas a quienes efectuar los controles y bajo qué modalidad, la recogida y manipulación de muestras, los análisis de laboratorio, así como la gestión y custodia de los resultados obtenidos.
> 3.- Las muestras a que se refiere el párrafo anterior serán de aire, orina, sangre o cualquier otro fluido o muestra de carácter menor, en la forma que se determine reglamentariamente. Esta determinación incluirá la forma en que se validan, a estos efectos, los procedimientos analíticos.
> 4.- A los efectos de esta Ley, se entiende por controles de salud el conjunto de actuaciones que la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco, las federaciones y demás entidades deportivas consideren oportunas para mejorar, controlar y prevenir los efectos contrarios a la salud que pueda producir la actividad deportiva en sus miembros así como para controlar el cumplimiento por las y los deportistas de las obligaciones derivadas de la Ley en materia de dopaje y salud. Los resultados analíticos de los controles de salud no conllevarán sanciones disciplinarias o administrativas, aunque sí podrán llevar aparejadas medidas de carácter deportivo o laboral establecidas por dichas entidades

deportivas y podrán servir para la planificación de los controles de dopaje.

Se propone para el apartado 3 la siguiente redacción y se le añade el inciso final relativo a la posibilidad de realizar análisis adicionales sobre las muestras antes de la comunicación de los resultados analíticos al deportista:

«3.- Las muestras a que se refiere el párrafo anterior serán de aire, orina, sangre o cualquier otro fluido o muestra de carácter menor, en la forma que se determine reglamentariamente. Esta determinación incluirá la forma en que se validan, a estos efectos, los procedimientos analíticos. Las muestras podrán ser objeto de análisis adicionales antes de que la organización antidopaje responsable de la gestión de resultados comunique al deportista o a la deportista los resultados analíticos de las muestras A y B»

Esta previsión es una reproducción de la posibilidad prevista en el apartado 6.5 del CMA.

ARTÍCULO 18:

Artículo 18. «Competencia para la realización de los controles.
1.- Con carácter general y sin perjuicio de las competencias de otras entidades previstas en esta Ley, corresponde a las federaciones deportivas vascas y territoriales la realización de las actuaciones necesarias para llevar a cabo los controles respecto a las competiciones federadas que determine la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
2.- Cuando la insuficiencia de medios o la estructura de la propia federación así lo justifique, dicha función será realizada por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
3.- En los controles de dopaje realizados a las y los deportistas en el ámbito de aplicación de la presente Ley, los análisis de las tomas de muestras deberán llevarse a cabo en laboratorios con acreditación internacional de la Agencia Mundial Antidopaje.
4.- De acuerdo con los criterios establecidos en el Código Mundial Antidopaje, en cada competición deportiva sólo debe existir una organización responsable del control de dopaje.
5.- Para la realización de controles fuera de competición a deportistas que se encuentran en el País Vasco para participar en competiciones internacionales, tendrán preferencia para la realización de aquellos controles las organizaciones deportivas internacionales.
6.- Para la realización de controles fuera de competición a deportistas que se encuentran en el País Vasco para participar en competiciones oficiales de ámbito estatal, tendrán preferencia para la realización de aquellos controles las organizaciones de ámbito estatal.»

En el artículo 18 se ha modificado el apartado 3, sustituyéndolo por la siguiente redacción:

> «3.- En los controles de dopaje realizados a las y los deportistas en el ámbito de aplicación de la presente Ley, los análisis de las tomas de muestras deberán llevarse a cabo en laboratorios con acreditación internacional de la Agencia Mundial Antidopaje o aprobados por dicha Agencia»

En concreto se añade el inciso "o aprobados por dicha Agencia", introduciéndose así la terminología utilizada en el CMA:

> Artículo 6.1 del CMA:
> 6.1 Utilización de Laboratorios Acreditados y Aprobados.
> A efectos del Artículo 2.1, las Muestras serán analizadas únicamente por laboratorios acreditados por la AMA o bien aprobados por la AMA. La elección del laboratorio acreditado o aprobado por la AMA utilizado para el análisis de Muestras, dependerá exclusivamente de la Organización Antidopaje responsable de la gestión de resultados.

Para una mejor comprensión del término "laboratorios aprobados", cabe precisar que, tal y como explica el propio CMA en el comentario introducido en su artículo 6.1, por razón de los costes y el acceso geográfico, la AMA puede aprobar laboratorios específicos que no se encuentran acreditados por ella para realizar análisis concretos, por ejemplo, análisis de sangre que deben enviarse desde el lugar de recogida hasta el laboratorio en un plazo determinado. Antes de aprobar dicho laboratorio, la AMA deberá asegurarse de que el laboratorio satisface los altos estándares de análisis y de custodia requeridos por ella. De modo que las infracciones previstas en el artículo 2.1[3] del CMA podrán determinarse solo mediante el análisis de muestras realizado por un laboratorio acreditado por la AMA u otro laboratorio específicamente aprobado por la AMA, mientras que las infracciones de otros artículos podrán determinarse utilizando resultados analíticos de otros laboratorios siempre que los resultados sean fiables.

Sin embargo, en la Ley contra el Dopaje en el Deporte parece que se ha pretendido ser más exigente en cuanto a la cualificación pedida a los laboratorios que efectúen los análisis antidopaje y no se hace la distinción que el CMA introduce según el tipo de infracción de que se trate, exigiéndose en todo caso que los análisis de las muestras las lleven a cabo laboratorios con acreditación internacional de la AMA o aprobados por dicha Agencia. Dicha mayor exigencia se trata de una cuestión de índole fundamentalmente técnica, respecto a la cual no hubiera estado de más una explicación técnica en la Memoria justificativa que acompaña al Anteproyecto.

En cualquier caso, debería tomarse en consideración lo previsto en el artículo 20.2 de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, por lo que sometemos al parecer técnico de la Dirección promotora de la iniciativa la posibilidad de reconocer también la validez de los análisis practicados por los laboratorios que ya cuentan con homologación estatal:

---

[3] 2.1 La presencia de una *Sustancia Prohibida* o de sus *Metabolitos* o *Marcadores* en la *Muestra* de un *Deportista*.

Artículo 20.2 de la LO 3/2013, de 20 de junio: En los controles de dopaje realizados en competición o fuera de competición a los deportistas, los análisis destinados a la detección de sustancias y métodos prohibidos en el deporte deberán realizarse en laboratorios con acreditación internacional de la Agencia Mundial Antidopaje u homologados por el Estado.

ARTÍCULO 19:

Artículo 19. Publicidad de la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte
1.- En el marco de las disposiciones aprobadas por las organizaciones internacionales, el Gobierno Vasco ordenará la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. Esta publicación se producirá, además, en cada ocasión en que se introduzcan cambios en la misma.
2.- El Gobierno Vasco establecerá formas adicionales de información y de consulta de la lista de sustancias y métodos prohibidos mediante su inserción en páginas digitales de instituciones y de entidades relacionadas con el deporte, así como por cualquier otro medio y soporte que faciliten el conocimiento, la difusión y la accesibilidad de la misma.

El apartado 1 se sustituye por el siguiente texto:

«1.- En el marco de las disposiciones aprobadas por las organizaciones internacionales, el Gobierno Vasco, adicionalmente a la publicación que ordene la Administración General del Estado en el Boletín Oficial del Estado, ordenará la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. Esta publicación se producirá, además, en cada ocasión en que se introduzcan cambios en la misma».

Esta modificación se introduce como consecuencia del acuerdo adoptado en la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley del País Vasco 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte. En dicha Comisión se propuso la siguiente interpretación del artículo 19.1, cuya redacción ahora se adecúa a aquella:

«B) Ambas partes convienen en interpretar el artículo 19.1 de la Ley del País Vasco 12/2012 en los siguientes términos:
La potestad del Gobierno Vasco de ordenar la publicación oficial de la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte debe interpretarse como un mecanismo adicional de publicidad de la lista que publica el CSD en el "Boletín Oficial del Estado", en el marco de los compromisos y obligaciones internacionales, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.1 de la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte.»

En cualquier caso, sería conveniente no trasladar sin más el acuerdo, sino adecuarlo a la estructura funcional y orgánica de la Administración General Vasca. Es decir, el trámite propuesto (publicar en el BOPV la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte que ordene la Administración General del Estado) podría ser realizado por Orden de la Consejera o el Consejero competente por razón de la materia, ya que no es necesario para la publicación de dicha lista en el BOPV un Acuerdo del Consejo de Gobierno en tal sentido.

ARTÍCULO 21:

El artículo que se propone modificar dice lo siguiente:

> Artículo 21. Ámbito de aplicación del régimen administrativo sancionador
> 1.- El régimen de infracciones y sanciones por dopaje contenido en esta Ley será aplicable, en lo que resulte procedente, a las acciones u omisiones que tengan lugar en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma y con independencia de que se produzcan con ocasión de competiciones deportivas de ámbito autonómico, estatal o internacional organizadas por las federaciones deportivas internacionales o por las organizaciones olímpicas o paralímpicas internacionales. No será precisa la existencia de relaciones de especial sujeción, y las acciones u omisiones también pueden materializarse en actividades deportivas de carácter no competitivo.
> 2.- Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 32 de esta Ley.

El apartado 1 del artículo 21 queda redactado de la siguiente forma:

> «1. El régimen de infracciones y sanciones por dopaje contenido en esta ley será aplicable, en lo que resulte procedente, a las acciones u omisiones que tengan lugar en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, quedando excluidas las que se produzcan con ocasión de competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal o internacional organizadas por las federaciones deportivas internacionales o por las organizaciones olímpicas o paralímpicas internacionales. No será precisa la existencia de relaciones de especial sujeción, y las acciones u omisiones también pueden materializarse en actividades deportivas de carácter no competitivo».

La redacción de este artículo también es consecuencia del antes citado Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley del País Vasco 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte:

> «C) Ambas partes convienen en interpretar el artículo 21.1 de la Ley del País Vasco 12/2012, referido al ámbito de aplicación del régimen administrativo sancionador, conforme al artículo 1.4 de la Ley, en el sentido de que quedan excluidas del régimen administrativo sancionador las acciones u omisiones producidas en las competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal y en las competiciones deportivas internacionales organizadas por las

> federaciones deportivas internacionales o el organismo olímpico o paralímpico correspondiente.»

No obstante, debería mejorarse la redacción del último inciso del apartado propuesto: "No será precisa la existencia de relaciones de especial sujeción, y las acciones u omisiones también pueden materializarse en actividades deportivas de carácter no competitivo". Para mejorar la redacción proponemos dar la vuelta al artículo y llevar el final al comienzo: "1. El régimen de infracciones y sanciones por dopaje contenido en esta ley será aplicable, en lo que resulte procedente, a las acciones u omisiones que tengan lugar en cualesquiera actividades deportivas, de carácter competitivo o no competitivo, que se desarrollen en el ámbito territorial de la CAPV, sin que sea necesaria la existencia de relaciones de especial sujeción. No obstante, quedan excluidas las que se produzcan con ocasión de competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal o internacional organizadas por las federaciones deportivas internacionales o por las organizaciones olímpicas o paralímpicas internacionales".

De este modo se mejora la redacción del artículo y se evita también el —habitual, pero no por ello correcto— uso del gerundio ("quedando excluidas").

ARTÍCULO 22 BIS:

Se añade un nuevo artículo con el siguiente tenor literal:

> «Artículo 22 bis.- Suspensión provisional.
> 1.- Cuando se reciba un resultado analítico adverso por un método prohibido o una sustancia prohibida distinta de una sustancia específica se impondrá de inmediato una suspensión provisional una vez que sea producido la confirmación de que no se ha concedido ni se concederá una autorización de uso terapéutico o de que no se ha producido una desviación aparente del estándar internacional para controles e investigaciones o del estándar internacional para laboratorios.
> 2.- Una suspensión provisional no podrá ser adoptada si al o a la deportista no se le confiere la oportunidad de celebrar un trámite de audiencia previa a la imposición de la suspensión provisional o un trámite de audiencia posterior con carácter urgente».

Este artículo se sitúa dentro del Título X y prevé la posibilidad de suspensión provisional en caso de resultado analítico adverso y siempre y cuando se compruebe que no se ha concedido ni concederá una autorización de uso terapéutico o no se ha producido una desviación de los estándares para controles o para laboratorios. Asimismo, se establece en el procedimiento, antes de la suspensión provisional, un trámite de audiencia o, en caso de urgencia, con posterioridad a la propia suspensión. Se trata de la traslación de la llamada "suspensión provisional obligatoria" del artículo 7.9.1 del CMA, prevista para los casos en que se produzca un resultado analítico adverso por un método prohibido o una sustancia prohibida distinta de una sustancia específica.

Ahora bien, en materia de régimen sancionador se ha de ser especialmente garantista, por lo que debemos hacer las siguientes recomendaciones en relación a este artículo:

- Dada la amplitud del ámbito subjetivo de la Ley vasca contra el Dopaje en el Deporte, debería hacerse un esfuerzo por concretar a qué elemento afecta la "suspensión provisional". Si tenemos en cuenta que no todos los potenciales infractores de la Ley están sujetos a relaciones de especial sujeción, debería concretarse si la suspensión provisional se refiere únicamente a la suspensión de la licencia.
- Teniendo en cuenta que el artículo 134.3 de la LRJAP-PAC establece que en ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el necesario procedimiento y que el artículo 136 de la LRJAP-PAC dispone que, cuando así esté previsto en las normas que regulen los procedimientos sancionadores, se podrá proceder mediante acuerdo motivado a la adopción de medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer, entendemos que la adopción de una medida provisional debería ser algo excepcional y suficientemente motivado, esa obligación de motivación debería recogerse expresamente en el artículo 22 bis.
- Dada la dualidad de procedimientos existentes en la normativa vasca, debería concretarse si dicha posibilidad de suspensión provisional afecta a ambos tipos de procedimientos, es decir, si afecta también a los procedimientos disciplinarios.
- Asimismo, debería determinarse un período de duración máxima de la medida provisional para evitar perjuicios irreparables al deportista derivados de una dilación en la resolución de los procedimientos.
- Por último, debería corregirse el siguiente error ortográfico: "una vez que **sea producido** la confirmación".

En suma, recomendamos que se adapte la redacción del artículo 7.9.1 del CMA a las especificidades de la Ley vasca.

ARTÍCULO 23:

En el apartado 1 del artículo 23 se tipifican dos nuevas infracciones muy graves: por un lado, "la acción de asistir, alentar, ayudar, incitar, colaborar, conspirar, encubrir o cualquier otro tipo de complicidad en relación con una infracción de las normas antidopaje o cualquier intento de infracción" (apartado m) y, por otro, "la asociación, a título profesional o deportivo, de un o una deportista u otra persona sujeta a la autoridad de una organización antidopaje con cualquier persona de apoyo al deportista que haya sido sancionada penal, disciplinaria o administrativamente por una infracción en materia de dopaje, siempre que haya sido oportunamente notificado por escrito por la correspondiente organización antidopaje en los términos previstos en el Código Mundial Antidopaje» (apartado n).

Estos dos nuevos preceptos son una reproducción de los artículos 2.9[4] (complicidad) y 2.10[5] (asociación prohibida) del CMA.

En cuanto al apartado m) sometemos al parecer del servicio promotor la no necesidad de incluir dicho apartado por ya estar sancionada dicha conducta a través de los apartado i) y j) del artículo 23.1 de la Ley contra el Dopaje en el Deporte. En cualquier caso, en el apartado m) propuesto no se entiende el inciso final "o cualquier intento de infracción".

---

[4] Artículo 2.9 del CMA: «Complicidad.
Asistir, alentar, ayudar, incitar, colaborar, conspirar, encubrir o cualquier otro tipo de complicidad intencional en relación con una infracción de las normas antidopaje o cualquier Intento de infracción de las normas antidopaje o infracción del Artículo 10.12.1 por otra Persona.»

[5] Artículo 2.10 del CMA: Asociación prohibida.
La asociación de un *Deportista* u otra *Persona* sujeta a la autoridad de una *Organización Antidopaje,* en calidad de profesional u otra calidad relacionada con el deporte, con cualquier *Persona de Apoyo al Deportista* que:
2.10.1 Si está sujeto a la autoridad de una *Organización Antidopaje*, esté cumpliendo un periodo de *Suspensión;*
2.10.2 Si no está sujeto a la autoridad de una *Organización Antidopaje*, y cuando la *Suspensión* no ha sido abordada en un proceso de gestión de resultados contemplado en el *Código,* haya sido condenado o hallado culpable en un procedimiento penal, disciplinario o profesional por haber incurrido en conductas constitutivas de una infracción de las normas antidopaje si se hubieran aplicado a dicha *Persona* normas ajustadas al *Código.* El estatus de descalificación de dicha *Persona* se mantendrá en vigor durante un periodo de seis años desde la adopción de la decisión penal, profesional o disciplinaria o mientras se encuentre vigente la sanción penal, disciplinaria o profesional;
2.10.3 Esté actuando como encubridor o intermediario de una *Persona* descrita en el Artículo 2.10.1 o 2.10.2. Para que se aplique la presente disposición es necesario que el *Deportista* u otra *Persona* haya sido notificado previamente por escrito por una *Organización Antidopaje* con jurisdicción sobre el *Deportista* o dicha otra *Persona*, o por la *AMA*, del estatus de descalificación de la *Persona de Apoyo al Deportista* y de la *Consecuencia* potencial de la asociación prohibida, y que el *Deportista* u otra *Persona* pueda evitar razonablemente la asociación. La *Organización Antidopaje* también hará todo lo razonablemente posible para comunicar a la *Persona de Apoyo al Deportista* que constituye el objeto de la notificación remitida al *Deportista* u otra *Persona* que, la *Persona de Apoyo al Deportista* puede, en el plazo de 15 días, presentarse ante la *Organización Antidopaje* para explicar que los criterios descritos en los Artículos 2.10.1 y 2.10.2 no le son aplicables. (Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 17, el presente Artículo se aplica incluso cuando la conducta de descalificación de la *Persona de Apoyo al Deportista* se produjo antes de la fecha de entrada en vigor prevista en el Artículo 25).
Corresponderá al *Deportista* u otra *Persona* demostrar que cualquier asociación con la *Persona de Apoyo al Deportista* descrita en el Artículo 2.10.1 o 2.10.2 carece de carácter profesional o no está relacionada con el deporte.
Las *Organizaciones Antidopaje* que tengan conocimiento de *Personal de Apoyo a los Deportistas* que cumpla los criterios descritos en el Artículo 2.10.1, 2.10.2 o 2.10.3 deberán remitir dicha información a la *AMA*.
[Comentario al Artículo 2.10: Los Deportistas y otras Personas no deben trabajar con entrenadores, médicos u otro Personal de Apoyo a los Deportistas que se encuentren suspendidos con motivo de una infracción de las normas antidopaje o que hayan sido condenados penalmente o sometidos a medidas disciplinarias profesionales en relación con el dopaje.
Algunos ejemplos de los tipos de asociación que se encuentran prohibidos son los siguientes: la obtención de asesoramiento en relación con la formación, estrategias, técnicas, nutrición o aspectos médicos; la obtención de terapia, tratamiento o recetas; el suministro de cualquier producto orgánico para su análisis; o la concesión de permiso a la Persona de Apoyo al Deportista para que actúe como agente o representante. No es necesario que la asociación prohibida involucre algún tipo de compensación.]

En relación al apartado n) cabe señalar que no se entiende a quién se refiere la notificación que se menciona.

Por último, en el apartado n) debería sustituirse "notificado" por "notificada".

ARTÍCULO 24:

Se modifica el régimen sancionatorio y se introducen las siguientes modificaciones:

En este artículo se tipifican las sanciones aplicables y, a continuación, se establecen una serie de reglas de graduación de la responsabilidad del deportista en base a la intencionalidad demostrada en su conducta.

Mediante este artículo se intenta adaptar el régimen sancionador de la Ley vasca al CMA. Sin embargo, no debería haberse hecho una introducción sin más del texto del CMA dentro del artículo 24, sino haberse realizado las modificaciones necesarias para una adecuada adaptación al régimen sancionador previsto en nuestra Ley. Es decir, se ha trasladado el texto del CMA (artículos 10.2[6], 10.3[7], 10.4[8], 10.5[9] y 10.6[10] del CMA) al Anteproyecto, pero no se han revisado los períodos de suspensión ya previstos en nuestra Ley, por lo que de la lectura del nuevo apartado 5 en conjunción con los apartados 1 a 3 del artículo 24, se deducen una suerte de contradicciones en la aplicación del apartado 5 a los tipos infractores previstos en la Ley vasca. Por ejemplo, en el artículo 5 se dice que cuando tenga lugar una primera infracción muy grave que suponga el uso de una sustancia no específica podrá ser sancionada dicha infracción con un período de suspensión de sólo dos años si el deportista acredita que la infracción no fue intencionada. Por tanto, si nos encontramos con una de las infracciones de las letras h) e i) del artículo 23, la suspensión aplicable sería inferior al límite previsto en el apartado segundo de ese mismo artículo (de 4 a 6 años). Asimismo, si se detecta la existencia de una sustancia no específica y nos encontramos ante infracciones muy graves de las letras a), b), c), d), e), f), g), j) y l) del apartado primero del artículo 23, la presencia de dicha sustancia no específica agrava la consecuencia sancionadora, imponiendo el período máximo de suspensión previsto en el artículo 24.1 (período posible de suspensión de dos a cuatro años). Sin embargo, la presencia de una sustancia no específica en los supuestos previstos en las letras h) e i) del artículo 23.1 atempera la responsabilidad sancionando con el período más laxo (el período posible es de cuatro a seis años).

---

[6] Suspensiones por presencia, uso o intento de uso, o posesión de una sustancia prohibida o de un método prohibido.
[7] Suspensión por otras infracciones de las normas antidopaje.
[8] Eliminación del período de suspensión en ausencia de culpa o de negligencia.
[9] Reducción del período de suspensión en base a la ausencia de culpa o de negligencia significativas.
[10] Eliminación, reducción o suspensión del período de suspensión u otras consecuencias por motivos distintos a la culpabilidad.

En similares términos, si estamos ante la presencia de una sustancia calificada como específica y ante una conducta intencionada, ocurre lo mismo, en el primero de los casos (apartados a, b, c, d, e, f, g, j y l del art.23.1), se sanciona con el período más alto de suspensión, sin embargo, se aplica el período mínimo de sanción si se trata de las infracciones tipificadas en las letras h) e i) del artículo 23.1, aunque dicha conducta, al ser intencionada, parezca en principio más grave y susceptible de sanción hasta con seis años.

De todo esto se deduce, que la adaptación del texto legal al CMA debería realizarse no mediante la introducción literal de ciertos apartados del Código en el texto de nuestra Ley, sino realizando una adecuada adaptación de los contenidos del CMA a nuestra norma y ello para evitar contradicciones.

De este modo, se detectan también contradicciones entre el nuevo apartado 8 y el apartado 1 del artículo 24 y entre los apartados 9 y 2 del artículo 24.

Por tanto, se recomienda a la Dirección promotora que revise los apartados 1 a 3 del artículo 24.

Por último, en relación a este artículo, en su apartado 5.b) debería sustituirse el término "involucre" por otro más adecuado. Asimismo, el apartado c) resulta muy confuso.

ARTÍCULO 24 BIS:

Se añade un nuevo artículo para regular sanciones por infracciones múltiples:

> «Artículo 24 bis.- Sanciones por infracciones múltiples.
> 1.- En el supuesto de una segunda infracción de las normas antidopaje el periodo de suspensión será:
> a) Seis meses.
> b) La mitad del periodo de suspensión impuesto en la primera infracción antidopaje sin tener en cuenta ninguna reducción.
> c) El doble del periodo de suspensión que habría de aplicarse a la segunda infracción como si fuera una primera infracción, sin tener en cuenta ninguna reducción.
> El periodo de suspensión que se aplicará será el más extenso de los tres periodos citados.
> 2.- La existencia de una tercera infracción de las normas antidopaje siempre dará lugar a la suspensión a perpetuidad, salvo que la tercera infracción suponga una infracción del deber de localización y salvo que la tercera infracción reúna las condiciones de anulación o reducción de sanciones. En estos casos el periodo de suspensión será desde ocho a los hasta la suspensión a perpetuidad.
> 3.- Una infracción de las normas antidopaje en la que el o la deportista haya probado la ausencia de culpa o negligencia no se considerará una infracción anterior.
> 4.- Una infracción de las normas antidopaje sólo se considerará segunda infracción si la correspondiente infracción antidopaje acredita que la persona ha cometido la infracción tras haber recibido notificación de la primera infracción o después de que la organización

antidopaje se haya esforzado razonablemente para presentar esa notificación.
Cuando la organización antidopaje no consiga demostrar lo anterior, las infracciones deben considerarse en su conjunto como una infracción única y primera y la sanción impuesta se basará en la infracción que suponga la sanción más severa.
5.- Si tras la resolución de una primera infracción una organización antidopaje descubre hechos relativos a una infracción de las normas antidopaje cometida antes de la notificación correspondiente de la primera infracción, la organización antidopaje impondrá una sanción adicional basada en la sanción que se le podría haber impuesto si ambas infracciones hubieran sido determinadas al mismo tiempo.
6.- Para que unas infracciones puedan ser calificadas como múltiples será preciso que se hayan producido en un periodo de diez años».

Este artículo supone la inclusión del artículo 10.7 del CMA en la Ley vasca contra el Dopaje en el Deporte.

Ahora bien, debería revisarse la redacción del apartado 2 y debería hacerse un esfuerzo de simplificación y concreción. Asimismo, el último inciso de dicho apartado no es gramaticalmente correcto.

Por último, debemos señalar que debería revisarse la redacción del apartado 4 de este artículo 24 bis ya que resulta ininteligible.

ARTÍCULO 29:

Artículo 29. «Imposición de sanciones pecuniarias
1.- Las sanciones personales de multa, en los casos de deportistas, solo podrán imponerse cuando éstos obtengan ingresos, que estén asociados a la actividad deportiva desarrollada.
2.- Las multas impuestas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco serán ejecutadas, en caso de impago, de forma forzosa según los términos establecidos en la legislación administrativa aplicable.
3.- El producto de las multas recaudado por el procedimiento previsto en el apartado anterior constituye un ingreso de derecho público que se afecta al cumplimiento de los fines de investigación indicados en el artículo 10 y que permitirán generar a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco los créditos necesarios para el desarrollo de dicha actividad, cuya realización material se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en esta Ley.»

En el artículo 29 se añaden dos nuevos apartados:

«4.- Solamente se podrán imponer sanciones económicas en los casos que el periodo máximo de suspensión ya se haya impuesto de otro modo.
5.- Las organizaciones antidopaje podrán contemplar en su propia normativa la recuperación de los gastos provocados por las infracciones antidopaje.»

En relación a este artículo cabe señalar que reproduce el artículo 10.10 del CMA, sin embargo, no se entiende la redacción dada al apartado 4. Como ya se ha indicado con anterioridad, debería evitarse la reproducción literal de la traducción al español del CMA y debería hacerse un esfuerzo por clarificar y adaptar el texto del CMA a la Ley vasca contra el Dopaje en el Deporte.

Si bien en la Memoria se argumenta que no existe incidencia en los presupuestos de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ni en el sector de actividad a la que va dirigida la Ley, de la lectura de este artículo debe extraerse la conclusión contraria. La inclusión de nuevos tipos infractores va a suponer la interposición de las consiguientes sanciones por lo que, evidentemente, ello se va a traducir en ingresos para la Administración Pública.

En este sentido, debemos recordar al servicio promotor que las disposiciones sujetas a control económico-normativo deben ir acompañadas, como documento básico, de una Memoria que contenga, entre otros, los siguientes extremos (artículo 42.1 del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio del control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi):

- Cuantificación de los gastos e ingresos presupuestarios que ocasione su entrada en vigor con distinción de los que sean corrientes y de los que sean de operaciones de capital, e identificación del destino de dichos gastos o ingresos.
- Financiación de los gastos presupuestarios con indicación de los recursos que se vean afectados y fuentes de financiación al margen de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
- Identificación de aquellos aspectos de la disposición que incidan o repercutan en materias propias de la Hacienda General del País Vasco y de régimen presupuestario, así como descripción de los antecedentes y justificación de la necesidad de la disposición.

Por tanto, de la lectura, tanto de la nueva redacción propuesta para el artículo 10.2, como de este artículo 29, debemos concluir que el Anteproyecto tiene incidencia económica directa y, por tanto, debería ser objeto de la consiguiente Memoria económica. Dicho análisis no es susceptible de postergarse —como se indica en la Memoria— al momento del posterior desarrollo reglamentario, sino que debe hacerse previamente al trámite de control económico-normativo que debe realizar la Oficina de Control Económico de esta Administración:

> Artículo 10.3 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de Disposiciones de Carácter General: «En el expediente figurará, igualmente, una memoria económica que exprese la estimación del coste a que dé lugar, con la cuantificación de los gastos e ingresos y su repercusión en los Presupuestos de la Administración pública, las fuentes y modos de financiación, y cuantos otros aspectos se determinen en la normativa que regule el

ejercicio del control económico-normativo en la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. También evaluará el coste que pueda derivarse de su aplicación para otras Administraciones públicas, los particulares y la economía general».

ARTÍCULO 30:

«1.- En los deportes individuales, la comisión de infracciones previstas en el presente Capítulo implicará la retirada de premios o medallas, la anulación de los resultados individuales y la descalificación absoluta de la o el deportista en la prueba o competición en cuestión, en los campeonatos de los que forme parte o a los que esté vinculada la prueba o competición.
2.- Los órganos disciplinarios podrán extender estas medidas a las pruebas, competiciones o campeonatos que se hubieran celebrado con posterioridad, en fechas adyacentes o coincidiendo con la toma de muestras a la o al deportista o con la comisión de la infracción.
3.- En los deportes de equipo, y con independencia de las sanciones que puedan corresponder en virtud de lo dispuesto por el artículo 26 de la presente Ley, los órganos disciplinarios deberán pronunciarse sobre la procedencia de alterar, en su caso, el resultado de los encuentros, pruebas, competiciones o campeonatos.
Para ello ponderarán las circunstancias concurrentes y, en todo caso, la participación decisiva en el resultado del encuentro, prueba o competición de quienes hayan cometido infracciones en materia de dopaje tipificadas en la presente Sección y la implicación de menores de edad en las referidas conductas.
4.- Cuando por la naturaleza de la infracción sea posible, toda sanción que se impusiere llevará consigo el comiso de las sustancias y útiles que hayan producido o sean susceptibles de producir dopaje en el deporte. Las sustancias y útiles que hayan sido definitivamente decomisados por resolución sancionadora serán adjudicados a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco, hasta que, reglamentariamente, se determine el destino final de los mismos, todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de la presente Ley para el decomiso como medida cautelar»

En el artículo 30 se modifica el apartado 2 y se añada un nuevo apartado 5, que quedan redactados de la siguiente forma:

«2.- Además de la anulación automática de los resultados obtenidos en la competición durante la cual se haya producido el resultado adverso, todos los demás resultados obtenidos desde la fecha en la que se recogió la muestra o desde la fecha en que haya tenido lugar otra infracción de las normas antidopaje serán anulados, con todas las consecuencias que se deriven de ello, incluida la retirada de todas las medallas, puntos y premios, salvo por razones de equidad»

«5.- Lo anterior se entiende sin perjuicio de que terceros perjudicados puedan hacer valer sus derechos y ejercer acciones de responsabilidad para la reparación de los daños y perjuicios sufridos».

Esta propuesta supone la traslación al texto legal del artículo 10.8 del CMA. Ahora bien, en el artículo 30.2 se establece una consecuencia sancionatoria

que, sin embargo, se modula o, incluso, se exceptúa "por razones de equidad". Desconocemos qué razones de equidad pudieran dar lugar a la no imposición de la sanción una vez constatada la infracción y sustanciado el consiguiente procedimiento sancionador. Por ello, debemos recomendar la revisión de este precepto, en especial, del inciso "salvo por razones de equidad" y recordar al servicio promotor que en materia de derecho sancionador se ha de ser especialmente garantista y hacerse un esfuerzo en determinar claramente qué hechos contituyen la infracción y cuáles son las sanciones a los mismos, intentando no dejar espacios abiertos a la indefinición jurídica.

ARTÍCULO 31 BIS:

Se añade un nuevo artículo:

> «Artículo 31 bis.- Estatus durante una suspensión de licencia.
> 1.- Durante el periodo de suspensión de licencia ningún deportista u otra persona podrá participar, en calidad alguna, en ninguna competición o actividad organizada por alguna de las entidades signatarias del Código Mundial Antidopaje o de una organización de un miembro signatario. Queda exceptuada de esta prohibición la participación autorizada en programas educativos o de rehabilitación. La prohibición anterior conlleva que la persona suspendida no podrá participar en entrenamientos, exhibiciones y actividades similares ni ocupar cargos o responsabilidades o desarrollar funciones administrativas en organizaciones deportivas o en organizaciones antidopaje.
> 2.- El o la deportista u otra persona a la que se le imponga un periodo de suspensión de más de cuatro años podrá, tras cuatro años de suspensión, participar en eventos deportivos no competitivos o en eventos deportivos locales en una modalidad deportiva que no sea en la que se haya cometido la infracción ni vinculada a la misma. Tal participación sólo será posible si el evento deportivo no supera el ámbito municipal o comarcal y se desarrolla a un nivel en el que **el o la persona** sancionada no pueda clasificarse directa o indirectamente para un campeonato de ámbito territorial superior o siempre que no conlleve un trabajo con deportistas menores.
> 3.- El o la deportista suspendida podrá regresar al entrenamiento con un equipo o al uso de las instalaciones deportivas de un club u otra entidad deportiva durante los dos últimos meses del periodo de suspensión del o de la deportista o el último cuarto del periodo de suspensión impuesto, si ese periodo fuera inferior».

Este artículo es una reproducción del artículo 10.12 del CMA y en él se especifican ciertas consecuencias derivadas de la imposición de la sanción de suspensión de la licencia de un deportista.

En relación a la redacción dada a este artículo surge una duda: el CMA habla de "Estatus durante una suspensión", sin concretar que se deba tratar de una suspensión de licencia federativa, de ahí que el artículo del CMA se refiera a deportistas y a "otras personas":

> "Durante el periodo de Suspensión, **ningún Deportista u otra Persona** podrán participar, en calidad alguna, en ninguna Competición o actividad (…)".

Sin embargo, en el Anteproyecto de Ley se habla de "Estatus durante una suspensión de licencia", para —a continuación— mencionar a "deportistas" (suponemos que en el sentido de quienes cuentan con licencia), así como de "otras personas". En suma, no queda claro si el artículo 31 bis —que lleva por título "Estatus durante una suspensión de licencia— se refiere únicamente al estatus durante una suspensión de licencia o si, al ser una copia del CMA, la intención inicial era regular el estatus de cualquier suspensión impuesta a un deportista tenga o no licencia. Esto debería relacionarse con el ámbito subjetivo de la Ley contra el Dopaje en el Deporte, que incluye tanto a deportistas sujetos a una relación de especial sujeción, como a aquellos que no lo están:

> Artículo 1.5 de la Ley contra el Dopaje en el Deporte: El ámbito subjetivo general de aplicación de esta Ley se extiende a las y los deportistas con licencia federativa, universitaria o escolar vasca que habilite para participar en competiciones deportivas oficiales del País Vasco así como a todos aquellos y aquellas deportistas que compitan en el País Vasco. De igual forma, la Ley también será de aplicación a cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que desarrollen su actividad en el País Vasco, aunque sea temporalmente, así como a aquellos propietarios de animales que participen en actividades deportivas. Dicho ámbito subjetivo se entiende sin perjuicio de la aplicación de disposiciones estatales e internacionales a los citados deportistas con ocasión de su participación en actividades deportivas de ámbito estatal o internacional o por razón de poseer también licencias de dicho ámbito.

Nuevamente se ha de insistir en no reproducir sin más partes del CMA, sino adaptarlos a las especificidades propias de la Ley vasca.

Por último, debería corregirse, en el apartado 2, lo siguiente: "se desarrolla a un nivel en el que **el o la persona sancionada**" y, en su lugar, se debería poner: "se desarrolla a un nivel en el que **la persona sancionada**".

ARTÍCULO 34:

Se modifica el régimen de prescripción de las infracciones y las sanciones.

> Artículo 34. Prescripción de las infracciones y las sanciones
> 1.- Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años y las graves a los dos años. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años y las impuestas por faltas graves a los dos años.
> 2.- Interrumpirá la prescripción de las infracciones la iniciación, con conocimiento de la persona o entidad interesada, del procedimiento disciplinario o sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente estuviera paralizado más de un mes por causa no imputable a la o el presunto responsable. No obstante lo anterior, se

> mantendrá la interrupción de la prescripción en caso de suspensión del procedimiento por alguna de las causas previstas en el artículo 32 de la presente Ley, reanudándose su cómputo cuando haya transcurrido un mes desde que legalmente pueda retomarse el procedimiento.
> 3.- Asimismo, interrumpirá el plazo de prescripción de las sanciones la iniciación de procedimiento conducente a la extinción de la sanción por colaboración, reanudándose cuando, terminado éste sin concesión, haya transcurrido un mes desde su resolución.

De modo que el artículo 34 queda redactado de la siguiente manera:

> «Artículo 34.- Prescripción de las infracciones y las sanciones.
> 1.- No se podrá iniciar ningún proceso por infracción de las normas antidopaje contra **otra** persona sometida a la presente Ley a menos que esa medida se tome dentro de un plazo de diez años desde la fecha en que se haya cometido la infracción.
> 2.- Asimismo, interrumpirá el plazo de prescripción de las sanciones la iniciación del procedimiento conducente a la extinción de la sanción por colaboración, reanudándose cuando, terminado éste sin concesión, haya transcurrido un mes desde su resolución».

El artículo 34 es el intento de trasladar a la Ley contra el Dopaje en el Deporte el artículo 17 del CMA, que tiene el siguiente tenor literal:

> No se podrá iniciar ningún proceso por infracción de las normas antidopaje contra un Deportista o contra otra Persona a menos que ésta haya sido notificada de la Infracción de las Normas Antidopaje de acuerdo con lo establecido en el artículo 7, o se le haya intentado razonablemente notificar dentro de un plazo de diez años desde la fecha en la que se haya cometido la infracción alegada.

El artículo 34 pretende establecer un único plazo de prescripción independientemente del carácter de la infracción (ya sea muy grave, grave o leve).

Debería corregirse la redacción del apartado 1 ya que al haber suprimido el inciso "contra un deportista", el determinante "otra" queda extraño y dificulta la comprensión del artículo 34.1.

Por otra parte, se suprime el plazo de prescripción de las sanciones y, sin embargo, no se establece uno nuevo. En este sentido, debemos señalar que una cosa es el plazo de prescripción de las infracciones y otras distinta el plazo de prescripción de las sanciones. Se debe, por tanto, corregir este apartado. De no establecerse plazo alguno de prescripción en relación a las sanciones, entenderíamos que son de aplicación supletoria los previstos en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

ARTÍCULO 37:

Se añaden cinco nuevos apartados (6 a 10) en el artículo 37, relativo a la competencia en materia de procedimientos disciplinarios:

> Artículo 37. Competencia en materia de procedimientos disciplinarios

1.- La potestad disciplinaria en materia de dopaje corresponde a las federaciones deportivas del País Vasco y a las demás entidades en las que exista una relación de sujeción especial con ocasión de la participación de competiciones deportivas celebradas en el País Vasco.
2.- La instrucción y resolución de los expedientes disciplinarios corresponde, inicialmente, a los órganos disciplinarios de las entidades antes citadas en los términos previstos en sus estatutos y reglamentos.
3.- Los expedientes deberán ser resueltos por los órganos disciplinarios de las federaciones deportivas y demás entidades con las que exista una relación de sujeción especial en un plazo máximo de dos meses, a contar desde la comunicación fehaciente del último resultado obtenido por el laboratorio al órgano disciplinario.
Transcurrido dicho plazo sin que el expediente haya sido resuelto, cualquiera que sea el trámite en el que se encuentre, la competencia será asumida por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que continuará los trámites previstos hasta su finalización y resolución. No obstante lo anterior y en razón de las circunstancias concurrentes en un expediente concreto, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá prorrogar en un mes el período al que se refiere el apartado anterior, siempre que medie petición expresa anterior a la caducidad del plazo.
4.- La instrucción y resolución de los expedientes disciplinarios que, por incumplimiento de las prescripciones de la presente Ley, proceda llevar a cabo y que afecten al personal directivo de las federaciones deportivas y entidades con funciones análogas, corresponderá en única instancia administrativa al Comité Vasco de Justicia Deportiva. El procedimiento se sustanciará conforme a las normas establecidas en el ordenamiento jurídico vigente en materia de deporte del País Vasco, y su normativa de desarrollo.
5.- El procedimiento disciplinario en materia de dopaje, incluida la fase de intervención de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco, deberá concluir en el plazo máximo de seis meses a contar desde la adopción del acuerdo de incoación del procedimiento. El vencimiento del plazo establecido en este apartado, sin que se haya notificado resolución expresa, producirá la caducidad del procedimiento.
6.- La gestión de los resultados de un control antidopaje recaerá, en principio, en la organización antidopaje que haya iniciado o realizado la recogida de muestras. Si no hay recogida de muestras, la gestión recaerá en la organización antidopaje que notifique primero al infractor de la vulneración de las normas antidopaje y que luego persiga diligentemente la infracción.
7.- Si surge un conflicto entre organizaciones antidopaje acerca de cuál de ellas tiene competencia para gestionar los resultados, será la Agencia Mundial Antidopaje quien resuelva el conflicto».
8.- En aquellos casos en que una organización antidopaje que inicia y realiza la recogida de muestras tenga delegada la gestión de los resultados en otra entidad, se responsabilizará de confirmar que las normas de la organización delegataria se ajustan al Código Mundial Antidopaje».
9.- La competencia para la gestión de resultados derivada de la infracción de las obligaciones derivadas de la localización del o de la

deportista recaerá en la organización antidopaje a la que el o la deportista debería haber remitido los datos de localización».
10.- Si el o la deportista se retiran en el transcurso de un procedimiento de gestión de resultados, la organización antidopaje que lleve a cabo el mismo seguirá teniendo competencia para llevarlo a término».

El contenido de los apartados añadidos —relativos a la gestión de los resultados de un control antidopaje y sobre los posibles conflictos surgidos de la actuación de distintas organizaciones antidopaje— no tienen relación directa con el procedimiento disciplinario, que es lo que se desarrolla en el artículo 37, por lo que debería reconsiderarse su incorporación en dicho artículo. Con estos apartados se intenta reproducir al artículo 7.1 del CMA:

> 7.1 Competencia para llevar a cabo la Gestión de Resultados.
> Excepto conforme a lo dispuesto en los siguientes Artículos 7.1.1 y 7.1.2, la gestión de resultados y el procedimiento de celebración de las audiencias se regirán por las normas de procedimiento de la Organización Antidopaje que haya iniciado y realizado la recogida de la Muestra (o, si no hay recogida de Muestras, la organización que notifique primero al Deportista u otra Persona de una infracción a la norma antidopaje y que luego persiga diligentemente la infracción de las normas antidopaje). Sea cual sea la organización que gestione los resultados o celebre las audiencias, los principios contemplados en el presente Artículo y en el Artículo 8 serán respetados y deberán seguirse las normas identificadas en el Artículo 23.2.2, que han de incorporarse al pie de la letra.
> Si surge un conflicto entre Organizaciones Antidopaje acerca de cuál de ellas tiene competencia para gestionar los resultados, será la AMA quien resuelva la cuestión. La decisión de la AMA podrá ser recurrida ante el TAD por cualquiera de las Organizaciones Antidopaje involucradas en el conflicto en el plazo de siete días desde la notificación de la misma. El recurso será estudiado por el TAD de forma expedita y será visto por un árbitro único.

Entendemos que este artículo no se refiere exclusivamente a aquellas entidades con potestad disciplinaria en relación a sus miembros, sino también a las organizaciones antidopaje competentes para el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora.

Debería corregirse la siguiente incorrección gramatical: "que notifique primero al infractor **de** la vulneración". No obstante, recomendamos revisar la frase y mejorar la redacción de la forma siguiente: "Si no hay recogida de muestras, la gestión recaerá en la **primera** organización antidopaje que notifique al infractor la vulneración de las normas antidopaje y que luego persiga diligentemente la infracción".

En otro orden de cosas, cabe señalar que, a la vista de la ley que se modifica y de los procedimientos regulados en la misma, el apartado 5 no se entiende.

En el artículo 37.10 deberá corregirse el verbo en plural ("se retiran") y debería ponerse en singular, ya que el sujeto es singular.

ARTÍCULO 38 BIS Y ARTÍCULO 38 TER:

Finalmente, se añaden dos nuevos artículos relativos a la "Divulgación de sanciones" y a la "Revisión de resoluciones en materia de dopaje":

> «Artículo 38 bis.- Divulgación de sanciones.
> 1.- La identidad de cualquier deportista o persona sancionada por la infracción de alguna norma antidopaje deberá ser divulgada públicamente por la organización antidopaje responsable de la gestión de resultados en el plazo máximo de veinte días desde la firmeza de la sanción.
> 2.- La organización antidopaje deberá divulgar la naturaleza de la infracción, la modalidad deportiva, la normativa antidopaje infringida, el nombre de la persona sancionada, la sustancia o método prohibido empleado en su caso y las sanciones impuestas.
> 3.- La publicación se realizará, como mínimo, en el sitio web de la organización antidopaje y dejándola expuesta durante un mes o la duración de cualquier periodo de suspensión, si éste fuese superior.
> 4.- La comunicación obligatoria prevista en este artículo no se realizará cuando la persona sea un menor».

La posibilidad prevista en el artículo 38 bis ha sido analizada en varias ocasiones por la Agencia Española de Protección de Datos (Informe 455/2010, entre otros), que ha entendido que es factible la publicación en Internet de las sanciones impuestas a los deportistas por la comisión de infracciones en materia de dopaje siempre y cuando dicha publicación sea conforme con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Para ello, la Agencia Española de Protección de Datos, en el informe citado, señalaba una serie de requisitos para la realización de tal difusión:

- Deberían modificarse los estatutos de las distintas federaciones deportivas a fin de incluir en los mismos un artículo en el que se prevea expresamente la publicación en Internet de las sanciones mencionadas.
- El interesado deberá ser siempre informado acerca de la mencionada publicación, en los términos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999.
- La publicación debería llevarse a cabo por el Consejo Superior de Deportes, de conformidad con lo indicado en el apartado VIII de este informe.
- Sólo será posible la publicación de las sanciones que sean firmes en vía administrativa, no pudiendo producirse dicha publicación con anterioridad.
- La publicación únicamente deberá contener los datos relativos al infractor, la especialidad deportiva, el precepto vulnerado, la sanción impuesta y únicamente cuando ello resulte absolutamente imprescindible la sustancia consumida o el método utilizado.

- Deberán establecerse procedimientos que garanticen que la información publicada en Internet no pueda ser captada e indexada a través de motores de búsqueda.
- El plazo máximo durante el que los datos podrán ser objeto de publicación no deberán nunca exceder del tiempo por el que se produzca la suspensión o privación de la licencia federativa.
- En todo caso, resulta contrario a la Ley Orgánica 15/1999 el tratamiento posterior de los datos publicados por cualquier sujeto distinto de la administración pública competente en materia sancionadora.

Por tanto, aplicando tales medidas al artículo propuesto debería concretarse el órgano competente para la publicación de la sanción. De modo que al estar prevista expresamente la posibilidad de publicación en un precepto de rango legal se cumpliría la excepción del artículo 11.2 de la LOPD (cesión amparada por una norma de rango legal). En consecuencia, si se concreta expresamente tal posibilidad, no sería necesaria la inclusión en los estatutos de las federaciones o del resto de entidades deportivas con potestad disciplinaria sobre los y las deportistas, ya que habría una habilitación legal para tal supuesto. En cuanto a los demás requisitos entendemos que son plenamente de aplicación y que resultaría conveniente hacer mención expresa a los mismos en el citado artículo 38 bis.

Además, en cuanto a la redacción del precepto propuesto, debería revisarse la redacción del apartado 3, en concreto la conjunción "y" seguida del gerundio "dejándola expuesta".

El otro precepto que se pretende añadir es el siguiente:

> «Artículo 38 ter.- Revisión de resoluciones en materia de dopaje.
> El ámbito de la revisión en la vía no jurisdiccional de las resoluciones dictadas en materia de dopaje podrá incluir todos los aspectos relevantes para el asunto, sin que se limite a los asuntos debatidos en la instancia inferior».

El artículo 38 ter es irrelevante, ya que dicho precepto es una regla de aplicación general en el ordenamiento jurídico español en virtud del artículo 113.3[11] de la LRJAP-PAC. Además, el artículo 38 ter propuesto no respeta el principio de prohibición de la *reformatio in peius* que sí aparece previsto en el citado artículo de la LRJAP-PAC. Este principio constituye una garantía procesal derivada del derecho de defensa en el proceso penal —también aplicable al procedimiento sancionador— que entendemos importante también en la materia regulada. No obstante, se insiste en que su incorporación no es necesaria por resultar de aplicación el más completo artículo 113.3 de la LRJAP-PAC.

[11] Artículo 113.3 de la LRJAP-PAC: «El órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados. En este último caso se les oirá previamente. No obstante, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial.»

- **DISPOSICIONES TRANSITORIAS.**

El título de este apartado debería corregirse y ponerse "Disposiciones Transitorias", ya que se prevén dos disposiciones, relativa a la irretroactividad de las disposiciones sancionadora no favorables. En concreto se prevé que las infracciones en materia de dopaje cometidas antes de la entrada en vigor de la Ley, así como los procedimientos disciplinarios en materia de represión del dopaje anteriores a la entrada en vigor, se regirán por la normativa anterior. Se añade, además, un inciso que deja abierta a la voluntad del expedientado la posibilidad de decir sobre la aplicación de la nueva norma o de la anterior. Aunque el administrado decidirá lógicamente la aplicación de la norma más favorecedora, entendemos que dicho inciso no se ajusta totalmente al principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables (artículo 9.3 CE); por lo que debería reformularse dicho apartado con la tradicional cláusula de: "salvo que la regulación prevista en la nueva norma sea más favorable para los expedientados" (o similar).

- **DISPOSICIÓN FINAL.**

Por último, el Anteproyecto de Ley incluye una disposición final relativa a la entrada en vigor de la Ley. Esta entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOPV.

III.- TRAMITACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY.

El presente Anteproyecto de Ley ha de adecuarse en cuanto a su tramitación a los preceptos de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General.

Dicha norma prevé que una vez redactado el Anteproyecto y contando con la aprobación del órgano que haya dictado la orden de iniciación, habrán de evacuarse los trámites de negociación, audiencia y consulta que procedan. A tales efectos, señalar que por Resolución de 6 de febrero de 2015, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, publicada en el BOPV de 18 de febrero de 2015, se sometió a trámite de información pública el Anteproyecto de Ley.

Dentro del trámite de audiencia se ha remitido el Anteproyecto a las siguientes entidades: Unión de Federaciones Deportivas Vascas, Asociación de Federaciones Deportivas de Álava, Asociación de Federaciones Deportivas de Bizkaia, Asociación de Federaciones Deportivas de Gipuzkoa, Diputación Foral de Araba, Diputación Foral de Bizkaia y Diputación Foral de Gipuzkoa, Sociedad Vasca de Medicina del Deporte-Ekime, Colegio Oficial de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Colegio Oficial de Médicos (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa), Colegio Oficial de Farmacéuticos (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa), Colegio Oficial de Veterinarios (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa), Dirección de Salud Pública, Agencia Vasca de Protección de Datos, Agencia Estatal Antidopaje y a todos los Departamentos del Gobierno Vasco. Asimismo, y vía email, se ha hecho llegar el Anteproyecto de Ley a

las federaciones deportivas vascas. Todo ello con el fin de dar cumplimiento a los artículos 8 y 9 de la antes citada Ley 8/2003, de 22 de diciembre.

En el procedimiento de elaboración del Anteproyecto, también se han solicitado los informes preceptivos de los siguientes órganos o entidades:

- Informe de Emakunde, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y de la Directriz Segunda del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno el 21 de agosto de 2012 por el que se aprueban las Directrices sobre la realización de la evaluación previa del impacto en función del género y la incorporación de medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres.

En relación a la evaluación sobre el potencial impacto de la propuesta en la situación de mujeres y hombres, se ha de realizar la siguiente observación:

En la memoria explicativa que acompaña al Anteproyecto se dice que se realizará la evaluación del potencial impacto en un momento posterior y que, una vez elaborado el texto articulado, se realizará el correspondiente estudio monográfico. Asimismo, el servicio promotor adelanta que "no resulta previsible un impacto significativo por razón de género y no se concibe que la modificación favorezca situaciones discriminatorias o que pueda afectar sustancialmente de modo diferente al colectivo de hombres y mujeres".

El texto analizado entraría dentro del supuesto previsto en el apartado 2.1.d) de la Directriz primera de las Directrices sobre la realización de la evaluación previa del impacto en función del género y la incorporación de medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres. Según dicho apartado los proyectos de ley que tengan como objeto modificar normas ya vigentes no han de ir acompañados de Informe de Impacto en Función del Género, salvo que la modificación resulte sustancial por lo que respecta a la situación de mujeres y hombres.

Sin embargo, entendemos que la reflexión acerca de si la modificación incide o no en la igualdad entre hombres y mujeres y, en su caso, la decisión de si procede o no la elaboración del consiguiente Informe de Impacto en Función del Género, debería haber sido ya realizada antes de la aprobación previa del texto tramitado. En la Memoria explicativa no debería haberse postergado dicha evaluación, sino que, en caso de ser necesario, debería haberse ya elaborado el Informe de Impacto en Función de Género, el cual puede ser completado o modificado a medida que avance el proceso de elaboración de la norma.

Por tanto, en caso de entenderse que no es necesario por tratarse de una de las excepciones a la obligatoriedad de elaboración del Informe en base al apartado 2.1.d) de la Directriz primera, antes mencionado, deberían haberse explicitado en la Memoria las razones por las que se considera que la modificación que se propone en el Anteproyecto no resulta sustancial por lo que respecta a la situación de mujeres y hombres. En caso contrario, es

decir, si se tratara de una modificación con incidencia en la situación de mujeres y hombres, el momento de elaboración del Informe de Impacto en Función del Género es preferentemente al inicio del procedimiento de preparación de la norma y debería estar finalizado antes de la aprobación previa:

> Directriz primera, apartado 5.– «Procedimiento de elaboración.
> 1) Preferentemente, se deberá dar inicio a la elaboración del Informe de Impacto en Función del Género cuando estén perfilados los aspectos fundamentales de la futura norma y/o acto (el objeto, la finalidad, el ámbito de intervención, los objetivos y medidas principales,...) **y aún no se haya redactado el texto, por lo menos en su totalidad y se deberá de ir complementando o, en su caso, modificando en la medida que avanza el proceso de elaboración de la norma o acto.**
> 2) En el caso de que se trate de una norma jurídica, el Informe de Impacto en Función del Género **se terminará de redactar inmediatamente antes de la «aprobación previa»** prevista en el artículo 7 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General, es decir, antes de que se dé comienzo a las fases de información o audiencia pública y de la emisión de los informes y dictámenes preceptivos.»
>
> Directriz Tercera: «la Memoria Explicativa y la Aprobación de la Norma o Acto Administrativo.
> 1.– En el expediente instruido para la aprobación de la norma o acto administrativo se ha de hacer constar una memoria o explicación detallada de los trámites llevados a cabo y sus resultados con relación al cumplimiento de los artículos 19 a 22 de la Ley 4/2005. Esta memoria explicativa, si bien podrá constituir un documento independiente, se recomienda que, con el fin de evitar una proliferación documental innecesaria, sus contenidos se integren dentro de las memorias generales que, de acuerdo con la normativa vigente, hayan de realizarse con relación a todo el procedimiento de elaboración de la norma o acto.»

- Viceconsejería de Política Lingüística (Decreto 233/2012, de 6 de noviembre, por el que se establece el régimen de inclusión de la perspectiva de normalización del uso del euskera en el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general).

- Comité Vasco de Justicia Deportiva (artículo 3.e del Decreto 310/2005, de 18 de octubre, por el que se regula el Comité Vasco de Justicia Deportiva).

Una vez ultimadas las consultas e informes anteriores, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, se deberá incorporar al expediente una memoria sucinta de todo el procedimiento, así como una emoria económica. A tales efectos, debemos señalar que la memoria económica es un documento fundamental en la justificación del proyecto que se presenta, así lo han reiterado tanto el Consejo de Estado como la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. En este sentido, conviene recordar lo dicho por ésta en su Dictamen 43/1999:

> "Es conveniente señalar aquí la importancia que el Consejo de Estado viene dando a este trámite dentro del procedimiento administrativo de elaboración de reglamentos. Dicho órgano, considera dicho trámite como elemental garantía de la exclusión de la arbitrariedad en el ejercicio del poder normativo y, además, lo ve como cauce para el cumplimiento del artículo 31.2 CE, que ordena que el gasto público realice una asignación equitativa de los recursos públicos y llama a la eficacia y economía en la programación y ejecución de dicho gasto"

En similares términos, corroborando la importancia de la memoria económica, es doctrina del Consejo de Estado la siguiente (Dictamen de 5 de diciembre de 1996, expediente nº 4.078/96):

> "El artículo 31.2 de la Constitución, que establece los principios de economía y eficacia en el gasto público no permite aprobar un Reglamento sin tener constancia suficiente de los medios económicos precisos para garantizar su aplicación práctica; lo contrario sería equivalente a un proceder arbitrario proscrito por el artículo 9.3 de la Constitución, ya que es jurídicamente infundado y por tanto caprichoso aprobar un Reglamento que no se va a poder aplicar en la práctica, al no haber medios económicos suficientes para poner en funcionamiento las disposiciones que contiene la norma".

Si bien ambos dictámenes se refieren al proceso de elaboración de reglamentos son igualmente aplicables al proceso de elaboración de las leyes y ello se desprende del ya citado artículo 10 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, así como de la propia lógica e importancia de aprobar leyes que vayan acompañadas de los documentos y análisis necesarios que acrediten la disponibilidad de medios económicos suficientes para poder aplicarlas. La justificación de la existencia de los recursos económicos necesarios para la aplicación de la Ley es determinante de la eficacia y efectividad de la propia norma.

Una vez completado el expediente con dichas Memorias, se deberán recabar los informes preceptivos y los dictámenes de los siguientes órganos:

- De conformidad a los artículos 26.1 y 27.1 de la Ley 14/1994, de 13 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco, los Anteproyectos de Ley deberán ser objeto de fiscalización mediante emisión del correspondiente informe de control preceptivo. Dicho control se ejercerá en el momento inmediatamente anterior a su consideración por el Consejo de Gobierno.

- En virtud de lo previsto en el artículo 3.1.a) de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, se impone con carácter preceptivo la emisión de dictamen por la misma, dado que así se señala para "los Anteproyectos de ley cualquiera que sea la materia y objeto de los mismos, excepto los siguientes, que sólo se someten a su informe si lo requiere la titular o el titular del departamento competente en materia de hacienda:

– Los que establecen la metodología de distribución de recursos y de determinación de las aportaciones de las diputaciones forales a la financiación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
– Los de aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, concesión de créditos adicionales, variación de las condiciones de los créditos de compromiso y liquidación de los Presupuestos."

Después, el Anteproyecto será aprobado por el órgano competente y se someterá a la toma en consideración del Gobierno Vasco, que decidirá sobre su aprobación final en la misma sesión, o bien establecerá los criterios que hayan de tenerse en cuenta en su redacción final y a las actuaciones que, en su caso, hayan de seguirse en su tramitación ulterior hasta dicha aprobación. Finalmente, una vez aprobado se remitirá al Parlamento para su tramitación.

Este es el informe que se emite y se somete a cualquier otro mejor fundado en derecho.

ASESORÍA JURÍDICA
Dirección de Régimen Jurídico y Servicios

AHOLKULARITZA JURIDIKOAREN TXOSTENA, DOPINAREN AURKAKO LEGEDIA DOPINAREN AURKAKO MUNDU-KODERA EGOKITZEARI BURUZKO LEGE-AURREPROIEKTUARI DAGOKIONA

Txosten hau egin da abenduaren 22ko 8/2003 Legeak, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurarenak, 7.3. artikuluan agintzen duena betetzeko eta aintzat hartuta zer arautzen duen apirilaren 9ko 193/2013 Dekretuak, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzekoak, 12.2.e) artikuluan. Txosten honen helburu edo xedea da lege-aurreproiektuaren funts objektiboa aztertzea, haren edukia legera eta zuzenbidera egokitzen den zaintzea eta Administrazio honetan indarrean dauden araugintza-teknikako irizpideak betetzen dituen ikustea.

I.- AURREKARIAK.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuak 2014ko azaroaren 4an emandako Aginduaren bitartez eman zitzaion hasiera Kiroleko Dopinaren Aurkako Legea aldatzeko Lege Aurreproiektua egiteko prozedurari.

Geroago, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko zerbitzu teknikoek aurreproiektuaren testua egin ondoren, onartu egin zen Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuak 2014ko azaroaren 24an emandako agindu bidez.

Aurrekoekin batera, honako hauek bidali zaizkio Ahdkularitza Juridiko honi azter ditzan: aurreproiektuaren behin betiko bertsioa, bai euskaraz bai gaztelaniaz, eta proposamenaren azalpen-memoria.

UNESCOk, 2005eko urriaren 19an egindako bileran, Kiroleko Dopinaren aurkako Nazioarteko Konbentzioa onartu zuen. Espainiak berretsi egin zuen, eta Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen; horregatik, EK-ren 96.1 artikuluak dioen bezala, "baliozko moduan egindako nazioarteko tratatuak, Espainian ofizialki argitaratutakoan, barne-ordenamenduaren parte izango dira".

Era berean, konbentzioa berrestearen bidez, Dopinaren aurkako Mundu Kodeko printzipioak (Dopinaren aurkako Mundu Agentzia[1]) zaintzeko betebeharra sartu zen Espainiako ordenamendu juridikoan:

> Kiroleko Dopinaren aurkako Nazioarteko Konbentzioaren 4. artikulua:
> «Konbentzioaren eta Kodearen arteko erlazioak.

[1] Dopinaren aurkako Mundu Agentziaren bidea 1999an hasi zen, kirol-mugimenduak eta gobernuek zati berdinetan osatu eta finantzatutako nazioarteko agentzia independente gisa. Jarduera nagusi hauek ditu: ikerketa zientifikoa, hezkuntza, dopinaren aurkako gaitasunak garatzea, eta Dopinaren aurkako Mundu Kodea monitorizatzea; hau da, kirol eta herrialde guztietan dopinaren aurka dauzkaten politikak bateratu nahi dituen dokumentua (www.wada-ama.org).

> 1. Kiroleko dopinaren aurka borrokatzeko jarduerak norberaren nazioan eta nazioartean koordinatzeko, Kodeko printzipioak betetzeko konpromisoa hartzen dute Konbentzioko kide diren estatuek, Konbentzio honetako 5. artikuluan arautzen diren neurrien oinarri gisa. Konbentzio honetan ezer ez da eragozpen estatu kideek Kodeko neurriak osa ditzaketen beste batzuk hartzeko.
> &&&&&&&&&&&&&&&&
> 2. Kodea eta 2. eta 3. eranskinetako bertsio berrienak informazio-izaeraz jasotzen dira, eta ez dira Konbentzio honetako zati. Eranskinek ez dakarte nazioarteko zuzenbideko betebehar loteslerik Konbentzioko kide diren Estatuentzat.
> 3. Konbentzio honetako zati dira eranskinak".»

Orain aztertutako testuarekin, Kiroleko Dopinaren aurkako Legea aldatu nahi da, legean Dopinaren aurkako Mundu Kodeko nazioarteko estandar berriak sartzeko, 2015eko urtarrilaren 1ean jarri baitziren indarrean. Hartara, Kiroleko Dopinaren aurkako Legean jasotako ildoari jarraitzen zaio, ildo horren helburuen artean baitzegoen dopinaren aurka egiteko EAEko araudia 2009ko Dopinaren aurkako Mundu Kodeko printzipio eta arauekin bateratzea.

Dopinaren aurkako Legearen atzean eta, azken batean, orain izapidetutako aurreproiektuan, osasuna babesteko eskubidea dago (EK-ren 43. artikulua):

> "1. Osasuna babesteko eskubidea aitortzen da.
> 2. Botere publikoei dagokie aurreneurrien bidez eta beharrezkoak diren zerbitzu eta prestazioen bidez osasun publikoa antolatu eta babestea. Horretarako, legeak ezarriko ditu guztion eskubideak eta eginbeharrak.
> 3. Botere publikoek osasun-hezkuntza, hezkuntza fisikoa eta kirola sustatuko dituzte. Era berean, aisialdiaz behar bezala baliatzen lagunduko dute."

Konstituzioaren 43. artikulu horrek botere publikoei agintzen die osasun publikoa antolatu eta zaindu behar dutela, prebentzio-neurriak, prestazioak eta zerbitzuak ezarriz. Horrez gainera, kirola sustatzeko agintzen die 43. artikuluak botere publiko guztiei.

Dopinari dagokionez, Estatuak 3/2013 Lege Organikoa, ekainaren 20koa, kirol-jardunean kirolarien osasuna babesteari eta dopinaren aurka borrokatzeari buruzkoa promulgatu zuen, eta lege horrek 7/2006 Lege Organikoa, azaroaren 21ekoa, Kirol arloan osasuna babesteari eta dopinaren kontrako borrokari buruzkoa ordeztu zuen. Bi lege testu horietan lege organikoko erreserbari lotutako gai jakin batzuk arautzen ziren.

Era berean, esan daiteke zenbait eskumen-titulutan oinarrituta eman zuela Estatuak gaiari buruzko legea, baina azpimarra daiteke EK-ren 149.1.16 artikuluan aurreikusitakoa: "Osasunaren oinarriak eta koordinazio orokorra" eta "Farmazia-produktuen gaineko legeria". Hala ere, eskumen-titulu horrek ez dio betorik jartzen legegile-autonomikoak esku hartzeari gai horri dagokionez, Konstituzio Auzitegiak adierazi baitu (KA-ren 35/1982 epaia, ekainaren 14koa) autonomia-erkidegoek "gobernu-jarduna gai honetan daukaten politikaren arabera bideratu" ahal izango dutela, berariaz esleituta dauzkaten eskumenak kontuan hartuta: &&&&&&&&&&&&&&

(2. oinarri juridikoa) "Konstituzioko 149.1 artikuluak zenbait teknika erabiltzen ditu Estatuari modu esklusiboan ematen zaizkion gai-alorrak mugatzeko, baina ez da hau haien tipologia sakon aztertzeko lekua.
Nabarmentzekoa da, hala ere, kasu honetan garrantzizkoa dela, gai-alor bat bere osotasunean erreserbatzen deneko kasua (esaterako, nazioarteko harremanak, defentsa eta indar armatuak, Justizia Administrazioa, ogasun orokorra eta Estatutako zorra, etab.) eta ahalmen zehatzak erreserbatzen direneko kasuak (bai oinarrizko legedia, bai gai-alor batzuei buruzko legedi osoa). &&&&&&&&&&&&&&&& Lehendabiziko kasuan, Estatuaren aldeko erreserbak ez die eragozten autonomia-erkidegoei erreserbatutako gai-alorrarekiko eskumenak bereganatzeko aukera edota beren autogobernua gai-alor horrekiko politika propio baten arabera zuzentzekoa, nahiz eta politika hori erabakitzen parte har dezaketen, autonomia-erkidegoek Senatuan duten ordezkapen espezifikoaren bitartez. Estatuaren aldeko erreserba, berriz, zenbait ahalmen erreserbatzera mugatzen bada eta autonomia-erkidegoek erabaki badezakete beste batzuk bereganatu ala ez, azken horiek, autonomia-erkidegoek, gai-alor horrekiko duten politika propioaren arabera zuzen dezake beren gobernu-ekintza; hala ere, gobernu-ekintza hori aurrera eramatean, berariaz beren esku uzten diren eskumenak soilik balia ditzakete (...)". (…)"

Kirol-jardunean kirolarien osasuna babesteari eta dopinaren aurka borrokatzeari buruzko ekainaren 20ko 3/2013 Lege Organikoan bertan onartu zen dopinaren aurkako borrokaren arloan berezko politika prestatzeko eskumen autonomikoa (8. artikulua):

«1. Autonomia-erkidegoen esku dago, bakoitzaren legeen arabera, dopina kontrolatzeko eta autonomia-esparruko kirol-lizentziadunen edo autonomia-eskumeneko lehiaketetako kirolarien osasuna babesteko politikak garatzea
Nolanahi ere, Espainiak hartutako nazioarteko konpromisoen nahiz Espainian aplikatu beharreko itun eta hitzarmenen esparruan zehaztu behar dira politika horiek.
Estatu-esparruko kirol-lehiaketa ofizialei edo erakunde olinpiko edo paralinpikoek edo nazioarteko kirol-federazioek antolatutako nazioarteko kirol-lehiaketei dagokienez, dopinaren kontrolak materialki egin ahal izango dituzte autonomia-administrazioek, baina, aldez aurretik, Kirolean Osasuna Babesteko Espainiako Agentziari edo nazioarteko erakunde edo federazio arduradunei eskaera eginda (eskaera horren aurretik sinatutako hitzarmenaren bidez bideratu beharko da).
Estatuko lizentzia, kontrola egiten duen autonomia-erkidegoarena ez den autonomia-lizentzia edo nazioarteko lizentzia duten kirolariei lehiaketatik kanpo kontrolak egin ahal izateko, bestalde, autonomia-administrazioek eskaera egin behar diote Kirolean Osasuna Babesteko Espainiako Agentziari edota autonomiako edo nazioarteko erakunde edo federazio arduradunei.
2. Halaber, kirolarien osasuna babesteko politikak formulatu eta gauzatu ahal izango dituzte autonomia-erkidegoek Estatuko Administrazio Orokorrarekin, aurreko artikuluetan adierazitako moduan, hitzartutako lankidetza- eta elkarlan-neurrien esparruan.

Euskal Autonomia Erkidegoak bi eskumen-titulutan oinarrituta egikarituko luke, batik bat, bere ahalmen legegilea:

- Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren 10.36 artikulua, Euskal Autonomia Erkidegoaren esku uzten baitu "Turismo eta kirolak. Aisia eta Atsedena" arloko eskumen esklusiboa, eta &&&&&&&&&&&&&&&&

- Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren 18. artikulua, osasunaren gai-alorreko eskumenei buruzkoa, hau arautzen duen heinean:

  "1. Euskal Herriari dagokio, barne-osasun arloan, Estatuko oinarrizko legeria lege bidez garatu eta betearaztea.
  2. Euskal Herriari dagokio, Gizarte-segurantzaren arloan:
  a) Estatuko oinarrizko legeria lege bidez garatu eta betearaztea, Gizarte Segurantzaren araubide ekonomikoa mamitzen duten arauak izan ezik.
  b) Gizarte Segurantzaren ekonomia-erregimena kudeatzea.
  3. Berebat dagokio Euskal Herriari farmazi produktuez Estatuaren legeak betearaztea.
  4. Xede horiek lortzeko, bere barrutian, Komunitate Autonomoak organizatu eta administratu ahalko ditu goian aipaturikoez zerikusirik duketen zerbitzu guztiak; Osasun eta Seguru Sozialari dagozkienetan instituzio, erakunde eta fundazioei bere babesa emango dielarik, artikulu honetan aurkitzen diren funtzioak eta konpetentziak betetzen diren ala ez jakiteko goren gorengo inspekzioa Estatuaren eskutan egongo delarik.
  5. Osasun eta Seguru Sozial gaietan hartuko dituzten konpetentziak erabiltzean, Euskal Botere Publikoak interesatu guztien parte hartze demokratikora bilduko dira, eta baita langileen sindikatuenetara eta enpresarien asoziazioenetara ere, Legeak zertuko duenaren arabera."

Horrez gainera, araututako gai-alorrekin lotzen dira beste eskumen-titulu batzuk ere; hala nola: Euskal Autonomia Erkidegoko zuzenbide substantibotik eta haren antolamendu propiotik eratortzen diren prozesu-arauak eta administrazio-prozedurak (EAEko Estatutuaren 10.6. artikulua); farmazia-alorreko antolamendua, Espainiako Konstituzioko 149.1.16a artikuluak arautzen duenaren harian, eta higienea, aintzat hartuta Estatutuaren 18. artikuluak arautzen duena (EAEko Estatutuaren 10.15 artikulua); ikerketa zientifikoa eta teknikoa Estatuarekin koordinatuz jardun hori (EAEko Estatutuaren 10.16 artikulua) eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publiko propioa (EAEko Estatutuaren 10.24 artikulua). &&&&&&&&&&&&&

Eskumenen aitorpen hori gure lurralde-esparruan ulertu behar da Lurralde Historikoen Legeak egiten duen eskumen-banaketaren baitan (27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Autonomia Erkidegoko Erakunde Erkideen eta Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen arteko harremanei buruzkoa); izan ere, lege horrek foru-erakundeei ematen baitie erakunde komunek emandako arauak garatu eta betetzeko eskumena, gai-alor honetan: "Kirolaren Sustapena. Eskolako kiroleko eta guztiontzako kiroleko programak". &&&&&&&&&&&&&&&& Bestalde, arau horrek erabiltzen duen teknika da Erakunde Komunen esku uztea Euskal Autonomia Erkidegoari dagozkion funtzio guztiak, baldin eta EAEko Estatutuan, Lurralde

Historikoen Legean edo gerora emandako legeren batean ez bazaizkie onartzen lurralde historikoetako foru-organoei (6. artikulua).

Eskumenen banaketako mapa horri erreparatuz eman zen 14/1998 Legea, ekainaren 11koa, Euskadiko Kirolarena (aurrerantzean, 14/1998 Legea edo Euskadiko Kirolaren Legea), eta bere VII. tituluko V. kapitulua eta beste artikulu batzuk baliatu zituen dopinaren gai-alorra arautzeko:

- Printzipio-zuzentzaile den aldetik, hau arautu zuen 2.3.v) artikuluak: "ideial olinpikoak aitortu eta babestea eta neurriak hartzea kiroletik dopina desagerrarazteko, bai eta osasunaren eta pertsonen duintasunaren aurkakoak diren bestelako jardunbideak ere".

- 4.2. artikulua: "Berariaz, Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde komunei dagokie eskumen hauek erabiltzea:
  (…)
  q) Dopatzea aurrezaintzea, kontrolatzea eta zigortzea."

- ⇨ 25.1.e) artikulua: "1. Euskal federazioak eta lurralde-federazioak izaera administratiboko funtzio hauek beteko dituzte:
  (…)
  e) Dopatzea aurrezaintzea, kontrolatzea eta zigortzea."

EAEko Kirolaren Legean jasotako lege-aurreikuspena nahikoa ez denez dopinaren prebentzioa, kontrola eta zehapena arautzeko, hala nola kirolarien osasuna babesteko, beharrezkotzat jo zen berariazko lege-arau bat ematea, EAEko araudia gai-alor honetan indarrean dagoen nazioarteko eta estatuko araudira egokitzeko, eta horren ondorioz jarri zen indarrean 2012. urtean 12/2012 Legea, ekainaren 21ekoa, Euskadiko Kiroleko Dopinaren aurkakoa, zeina, hain zuzen ere, orain aldatu nahi baita, nazioartean izandako azken aldaketetara egokitzeko.

II.- LEGE-LERRUNA ETA ERREGELAMENDU BIDEZKO GARAPENA.

Lege-aurreproiektu baten figuran zertzen da eman nahi den araupena. Aztertu berri ditugun eskumen-tituluak aintzat hartuta, eta, bereziki, Euskal Autonomia Erkidegoak kirolaren gai-alorrean duen eskumen esklusiboa, ondorioztatu beharrekoa da gure autonomia-erkidegoak arautze-ahalmena duela gai-alor horretan, hau da, gai-alor hori arautzeko eskumena duela.

Aurreproiektuak aplikagarria den zehapen-araubideari eragiten dionez, ezinbestekoa da lege-mailako arau baten pean egotea gai-alor hau. Eta Espainiako Konstituzioko 25.1 artikuluak berak arautzen du hori horrela izan behar duela ("Ezin dakioke inori egite edo ez-egiteen ondorioz kondena edo zehapenik ezar, baldin eta, une horretan delitu, falta edo arau-hauste administratiboak ez badira, aldi horretan indarrean dagoen legeriaren arabera"). Horrez gainera, Konstituzio Auzitegiaren doktrinak behin baino gehiagotan adierazi du "indarreko legeria" terminoaren esanahia, Espainiako

Konstituzioko 25.1 artikuluan, "zehapenaren gai-alorreko Legezko erreserba" (besteak beste, 26/2005 sententzia, otsailaren 14koa; 113/2002 sententzia, maiatzaren 9koa; 25/2002 sententzia, otsailaren 11koa; eta 60/2000 sententzia, martxoaren 2koa).

Ildo horretatik, gai-alor hori arautzeko, eta, gainera, lege-lerruneko arau baten bidez arautzeko premia adierazi zuen Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak (Administrazioarekiko auzien Sala) 488/2009 eta 586/2009 epaietan; izan ere, epai horiek adierazten dute 14/1998 Legeak ez zuela behar adinako gaikuntza-titulurik ezartzen Administrazioak zehapen-ahalmena balia zezan dopinaren gai-alorrean. EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak adierazi zuen zehapenaren gai-alorrean zehazpen-ahalmena zuten bakarrak federazioak zirela, baina ez Administrazioa: "Euskal Autonomia Erkidegoak kirolaren gai-alorrean duen eskumen esklusiboak ez du barnean hartzen EAEko Administrazio Orokorrak kirol-diziplinaren alorrean zehapenak ezartzeko eskumena izatea, eta ezin da, ondorioz, kirolari federatuentzat berezitua izango den administrazio-zehapenaren alor baten izatea aldarrikatu, oro har administratu guztiak mendean hartzen dituen administrazio-zehapenak aplikatu ahal izateko haiei". Hala ere, legezko gaikuntza falta hori Kiroleko Dopinaren aurkako Legea indarrean jarrita gainditu zen, eta azken testu hori da orain aldatzea proposatzen dena.

Horrez gainera, proposatutako araubideak, eskubide eta askatasunen esparruan, ez du soilik osasunaren babeserako eskubidea ukitzen, arauak nabarmen ukitzen baititu, halaber, ohorerako eskubidea, intimitaterako eskubidea eta norberaren irudirako eskubidea (Espainiako Konstituzioko 18. artikulua). Ukitze hori dopinaren aurkako proben izaera bereziaren ondorio litzateke, hala nola aurreproiektuan, dopinaren aurkako arau-hausteak Interneten jendaurreko egiteko aukerari dagokionez, jasotako arau-aurreikuspenaren ondorio. Horrenbestez, araututako eskubideen eta askatasunen izaera dela eta, nahitaezkoa da araua lege-mailakoa izatea. Lege-erreserba Espainiako Konstituzioko 53. artikulutik eratortzen da:

> "1. Titulu honetako bigarren kapituluan aitortutako eskubide eta askatasunek botere publiko guztiak lotzen dituzte. Legez soilik arautu daiteke, betiere funtsezko edukia errespetatuz, eskubide eta askatasun horiek nola erabili; 161.1.a) artikuluak dioenaren arabera babestuko dira, betiere, eskubide eta askatasunok.
> (...)
> 3 Hirugarren kapituluko printzipioak aitortuz, errespetatuz eta babestuz zertuko dira legegintza positiboa, praktika judiziala eta botere publikoen jarduera. Printzipiook garatzen dituzten legeek xedatzen dutenarekin bat etorriz baino ezin alegatuko da halakorik jurisdikzio arruntaren aurrean."

Horrenbestez, aurreproiektu honek arautzen dituen gai-alorren izaerari erreparatuta eta egin berri ditugun oharpenak kontuan hartuta, ondorioztatu behar da aukeratutako arau-lerruna egokia dela gai-alor horiek arautzeko.

III.- LEGE AURREPROIEKTUAREN EDUKIA

Lege-aurreproiektuak azalpen-zatia, artikulu bakarra, bi xedapen iragankor eta azken xedapen bat ditu.

3.1.- AZALPEN-ZATIA.

Araua egiteko arrazoiak azaltzen dira lege-aurreproiektuaren zio-azalpenean, eta adierazten da zer helburu bete nahi diren, zer oinarri juridikok gaitzen duten araua egiteko ekimena, araupenaren printzipio eta ildo orokorrak, eta indarreko araubidean izango duen eragina. Horrenbestez, behar bezala adierazten dira Gobernu Kontseiluak 1993ko martxoaren 23an hartu zuen erabakiak, Legeak, Dekretuak Aginduak eta Ebazpenak egiteko irizpideak onartzekoak, eskatzen dituen edukiak (arau hori 1993ko apirilaren 19ko EHAAn argitaratu zen, Lehendakaritza, Araubide Juridiko eta Garapen Autonomikoko sailburuak 1993ko apirilaren 6an emandako Agindua betez).

Proposatutako aldaketen edukia aztertzen hasi aurretik, adierazi behar dugu aurreikusten den arauak funtsezko helburu hauek lortu nahi dituela (aurreproiektuko justifikazio-memoriak eta zio-azalpenak zehazten dituzte helburuok):

- 2015eko urtarrilaren 1etik indarrean dagoen Dopinaren aurkako Mundu Kodean izandako aldaketen ondoriozko errekerimenduak EAEko Legean sartu nahi ditu, gure ordenamenduaren eremu juridikoan egon behar dutelako, Kiroleko Dopinaren aurkako Nazioarteko Konbentzioak aginduta.
- Asmoa da aitortzea Dopinaren aurkako Euskal Agentzia dela Kiroleko Dopinaren aurkako Legearen 10. artikuluan EAEko Administrazio Publikoari esleitutako eginkizunak garatzeko ardura duen organo espezializatua.
- Azkenik, halaber, Euskadiko Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legearen arloan Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Bitariko Lankidetza Batzordearen Akordioaren edukia jaso nahi du Kiroleko Dopinaren aurkako Legean (BOE, 99. zk.a, 2013ko apirilaren 25ekoa).

Zioen azalpenean, gaztelaniaz, sintaxi-akats hauek zuzendu beharko lirateke:

- Lehen lerrokadan, preposizio hau sobera dago: "por los organismos internacionales más avanzados en la lucha **de** contra el dopaje en el deporte".

- Hirugarren lerrokadan, "que" izenordain erlatiboa falta da: "la IV Conferencia Mundial Antidopaje **en la participaron**".

4.2.- LEGE AURREPROIEKTUAK KIROLEKO DOPINAREN AURKAKO LEGEAN ALDATUTAKO ARTIKULUAK.

10. ARTIKULUA:

Kiroleko Dopinaren aurkako Legearen 10. artikuluko 2. idatzi-zatiaren edukia hau zen:

> «Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak beharrezkoak diren administrazio-egiturak sortuko ditu, aurreko idatzi-zatian xedatutakoa betetzeko.
> Aurreko paragrafoko f) letrako ikuskaritza burutu behar duten langileak aginte publikotzat joko dira lan horretan ari direla; eta beren zereginak betetzen dihardutenean jakiten dutena isilpean gorde beharko dute derrigor, baita lan hori utzi eta gero ere. Haien aktak egiazkotzat hartuko dira.»

Orain testu honek ordez dezan nahi da:

> «Dopinaren aurkako Euskal Agentzia —kirolaren alorrean Eusko Jaurlaritzan eskumena duen sailari atxikia— aurreko paragrafoan Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Publikoari esleitzen zaizkion funtzioak betetzeko organo espezializatua izango da eta, beraz, Euskadiko dopinaren aurkako erakundea bilakatuko da.»

Kiroleko Dopinaren aurkako Legearen 10.2 artikuluak EAEk administrazio-egitura bat izateko aukera aurreikusten zuen, dopinaren aurkako kontrolaren esparruan ikuskaritza-eginkizunak betetzeko. Aukera hori orduan indarrean zegoen azaroaren 21eko 7/2006 Lege Organikoaren 4.6 artikuluan aurreikusita zegoen, autonomia-erkidegoek dopinaren aurkako agentziak izateko aukera jasotzen baitzuen, eta geroago ekainaren 20ko 3/2013 Lege Organikoaren 7.5 artikulura aldatu zen.

Orain, proposatutako aldaketaren bidez, Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia sortzen da, kirol-arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailari atxikitako administrazio-organoa izan dadin.

Alde horretatik, esan daiteke ezen, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 11. artikuluak aurreikusten duen bezala, honako hauek zehaztu beharko direla edozein administrazio-organo eratzeko:

- nola kokatuko den dagokion herri-administrazioan, eta zeinen mendean egongo den;
- zein egiteko eta eskumen izango dituen, eta
- abian jartzeko eta jarduteko beharko dituen diru-izendapenak.

Era berean, 11. artikulu horretako 3. idatzi-zatiak hau dio: "Ezin izango da organo berririk sortu, lehendik dagoenen bat bikoiztea dakarrenean, baldin eta, aldi berean, lehendik daudenei eskumena kendu edo behar bezala murrizten ez bazaie".

Gaur egun, ikuskaritza-eginkizunak eta Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen nahiz Euskadiko Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legearen esparruan Eusko Jaurlaritzari dagozkion zehapen-espedienteen izapidetzea Gazteria eta Kirolak Zuzendaritzari esleituta daude, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren egitura organikoa

eta funtzionala ezartzen dituen apirilaren 9ko 193/2013 Dekretuaren 28.1.q) artikulua betez.

Hala ere, esan behar dugu kontraesana dagoela Lege Aurreproiektuan adierazitakoaren eta justifikazio-memorian azaldutakoaren artean. Aurreproiektuan argi eta garbi esaten da Dopinaren aurkako Euskal Agentzia kirol-arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailari atxikitako organo bat izango dela. Hala ere, memorian esaten da ez dela egitura berririk sortuko, eta aditzera ematen da Kiroleko Dopinaren aurkako Legean jasotako eginkizunak Gazteria eta Kirolak Zuzendaritzak bere gain hartu zituela. Hala ere, sailaren egitura organiko eta funtzionala zehazten duen dekretua irakurrita, ondorioztatzen da Kiroleko Dopinaren aurkako Legearen 10.[2] artikuluko eginkizun batzuk baino ez zaizkiola esleitu Gazteria eta Kirolak Zuzendaritzari.

---

[2] Kiroleko Dopinaren aurkako Legearen 10.1. artikulua: «Hauek dira dopinaren aurka Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak izango dituen eskumenak:
&&&&&&&&&&&&&&&
a) Dopatzeari buruzko legeria betetzen dela zaintzea.
b) Dopinaren arloan egindako eskaera, kontsulta, salaketa eta erreklamazioei erantzutea.
c) Dopinaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokienez, pertsonei informazioa ematea.
d) Eskumena duten organismoei, haien antolaketa, araudia edo jarduera dopinaren arloko legeriara egokitzeko eskatzea, eta, hala badagokio, deuseztapena edo aldaketa agintzea, baldin eta legeria horretara egokitzen ez badira.
e) Zehatzeko ahala erabiltzea eta, era berean, dagozkion kautela-neurriak hartzea.
f) Kirola ikuskatzeko funtzioak betetzea, eta eginkizun hori betetzeko behar duen informazio guztia biltzea. Horretarako, edozein argibide eskatu ahalko die kirolariei eta haien inguruneko pertsonei, bai eta agiriak eta datuak erakusteko edo bidaltzeko ere, eta dokumentazio hori gordeta dagoen tokian bertan aztertu ahal izango du, eta, halaber, taldeak eta lokalak ikuskatu ahal izango ditu, betiere indarreko legediak ezarritako eran.
g) Dopin-kontrolen urteko programa bat egitea eta, hala badagokio, programa hori gauzatzea, finantzatzea eta zaintzea. Programa horren barruan, lehiaketan bertan eta lehiaketatik kanpo Agentziak berak eskatuta egindako kontrolak sartuko dira. Nolanahi ere, horiek gorabehera, Euskal Autonomia Erkidegoko beste erakunde batzuek Euskadin beste kontrol batzuk egin ahal izango dituzte.
h) Dopinaren aurka modu eraginkorrean borroka egiteko beharrezko duen laguntza eta informazio guztia eskatzea dagokien organoei.
i) Urtero-urtero txosten bat egitea eta Eusko Legebiltzarrera bidaltzea.
j) Dopinik gabeko kirolaren aldeko zabalkunde, prestakuntza eta sentsibilizazio jarduerak egitea; debekatuta dauden substantzien eta metodoen erabilerari buruzko informazioa eta horien kontrol-modalitateei buruzkoa jakinaraztea; dopinaren arrazoiei eta ondorioei buruzko txostenak eta azterketak egitea; prebentzio-ekintzak bultzatzea eta sustatzea. Eginkizun horiek betetzean, genero-ikuspegia integratu beharko du, dopinari eta dopinak gizon eta emakume kirolariengan dituen ondorio zehatzei buruzko ikerketa sustatzeko eta horren berri emateko.
k) Dopin-kontrolak zein lehiaketa eta probatan egin daitezkeen zehaztea.
l) Kontrola egiten zaien kirolarien errugabetasun-presuntzioa babestea.
m) Euskadiko kirol-federazioei eta lurraldeetakoei diziplina-espedienteak irekitzeko eskatzea, eta, hala badagokio, dagozkion errekurtsoak jartzea federazio horien diziplina-ebazpenen aurka.
n) Diziplina-espedienteak izapidetu eta ebaztea, baldin eta kirol-federazioek ez badituzte espediente horiek epearen barruan ebatzi.
ñ) Dopin-kontrolak egiteko kirolariak aurkitzeko moduan egoteari dagokionez, behar diren xedapen eta formularioak onartzea.
o) Eusko Jaurlaritzak izapidetutako arau-egitasmoei —dopinaren aurkako borrokari eragiten dietenei— buruzko nahitaezko txostena ematea, baita beste erakunde batzuen arau-ekimenei buruzko txostena ematea ere, erakunde horiek eskatzen diotenean.
&&&&&&&&&&&&&&
p) Parte hartzea dopinaren aurkako borrokarekin zuzenean loturiko bileretan, foroetan eta erakundeetan, estatu barrukoetan zein nazioartekoetan.

Horrenbestez, zerbitzu sustatzaileari gogorarazi behar diogu ez direla gauza bera administrazio-organo bat eta administrazio-organo bati, oraingo honetan Gazteria eta Kiroletako zuzendariari, esleitutako eginkizunen multzoa. Hartara, egungo aurreikuspena, zeina Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen apirilaren 9ko 193/2013 Dekretuan jasota batago, ez litzateke nahikoa izango Kiroleko Dopinaren aurkako Legearen 10. artikulurako proposatzen den behin betiko idazkeran jasotako lege-aurreikuspena betetzeko, proposatutako idazkeran argi eta garbi aipatzen delako Kiroleko Dopinaren aurkako Legearen 10.1 artikuluan aurreikusitako eginkizun guztiak betetzeko ardura duen administrazio-organo bat.

Horren ondorioz, aurreko oharra aztertzeko esaten dogu zerbitzu sustatzaileari, eta, era berean, gogorarazten dugu ezen, azkenean erabakitzen bada Kiroleko Dopinaren aurkako Legearen 10.1 artikuluko eginkizunak bere gain hartzeko organo espezializatu bat sortzea, aurreikuspen horrek ondoriozko garapena izan beharko lukeela memoria ekonomiko egokian.

Barne-egiturak sortzea edo aldatzea litzatekeenez gero, uste dugu txostena eskatu beharko litzaiokeela Funtzio Publikoko Zuzendaritzari (Herri Administrazio eta Justizia Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzeko apirilaren 9ko 188/2013 Dekretuaren 16.c artikulua); izan ere, honako eginkizun hau esleituta dauka: «Saileko eta sailen arteko jarduna eta proiektuak landu, koordinatu eta ebaluatzea barne-egituraketaren eta langileen antolaketaren arloan, bat datozen Lanpostuen Zerrenden bidez. Ondoriozko lanpostuak baloratzea, Jaurlaritzak ezarritako giza baliabideen politikako jarraibideekin bat». Era beren, txostena eskatu beharko litzaioke Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzari, lehen aipatutako apirilaren 9ko 188/2013 Dekretuaren 18.c) artikulua oinarri hartuta, honako eginkizun hau esleitzen baitio: «Erakunde

---

q) Dopinaren aurkako beste administrazio batzuekin eta kirol-erakundeekin lankidetzan aritzea, erabilera terapeutikoko baimenei buruzko informazioari eta dokumentazioari dagokienean, bai eta, orokorrean, beste edozein eremutan ere, kiroleko dopinaren aurka eraginkortasunez borrokatzeko beharrezkoa denean.
r) Segurtasun indar eta kidegoekin behar diren lankidetza-harremanak izatea, kiroleko dopinaren aurka borrokatzeko.
s) Dopinaren arloan, ikerketa zientifiko eta teknikoa bultzatzea, baita garapena eta berrikuntza ere, proiektu zehatzak bultzatuz, bai zuzenean edo bai unibertsitateekin lankidetzan, ikerketako erakunde publikoekin lankidetzan eta ikerketa, garapena edo berrikuntza bultzatzen duten beste erakunde batzuekin lankidetzan.
t) Administrazioak berak antolatutako dopin-kontroletan edo, dagozkion hitzarmenen bidez, beste erakunde batzuek egindakoetan, laginak jaso eta garraiatzea.
u) Dopin-kontroletan laginak hartzeko langileen prestakuntza bultzatzea, gerora, zeregin horretarako gaitzeko langile horiek. Era berean, aintzat hartuko da genero-ikuspegia, laginak hartzeko taldean kirolariaren sexu bereko pertsona bat izan dadin, legeetan jasotzen denez.
v) Erabilera terapeutikoko baimenak ematea edo ukatzea, erabilera terapeutikoko baimenen euskal batzordearen (COVAUT) bidez.
Aipaturiko administrazioaren eskumenekoak izanik, dopinaren aurkako borrokaren arloetakoak diren gainontzeko eginkizunak, baldin eta berariaz beste organo edo erakunde batzuei esleituta ez badaude, baita beste lege eta araudi batzuen bidez esleitutako eginkizunak ere.
x) Euskal Autonomia Erkidegoko Mendetasunen Planean sartzea kiroleko dopinaren aurkako borrokari buruzko kapitulu bat.»

instituzionalen barne-egituraketaren, antolaketaren eta sorreraren arloko sailaren jarduerak, eta erakunde horiek ezartzen dituzten xedapen orokorrak aztertu eta ebaluatzea; eta, halaber, administrazioko sail eta erakundeei aholkularitza eta laguntza teknikoa ematea antolaketaren eta prozeduren arloan.»

12. ARTIKULUA:

HAUXE DIO 12.9 ARTIKULUAK:

> «Kontrola egin ahal izango zaie estatuaren lizentzia edo nazioarteko lizentzia duten kirolariei, Euskal Autonomia Erkidegoan egindako lehiaketa edo kirol-jardueretan parte hartzen badute edo, nahiz eta aldi baterako izan, bertan bizi badira. Legearen arabera eskumena duen erakundeak izapidetuko ditu kontrol horien ondorioz ireki litezkeen zehapen- edo diziplina-espediente administratiboak. Era berean, lehiaketatik kanpora kontrolak egin ahal izango dizkiete Euskal Autonomia Erkidegoan entrenatzen ari direnean, eskumena duen nazioarteko erakundeak edo federazioak eskatuta.
> Dena dela, Euskal Autonomia Erkidegoan egindako dopin-kontroletako analisien emaitzak dagozkion kirol-erakundeetara —eskumena izan dezaketenetara— bidaliko dira.»

idatzi-zati hori honako testu honekin aldatzea proposatzen da:

> «Kontrola egin ahal izango zaie Euskal Autonomia Erkidegoan egindako kirol-lehiaketa edo -jardueretan parte hartzen duten kirolariei, salbu eta lehiaketa edo jarduera horiek estatu mailako lehiaketa ofizialak eta nazioarteko kirol-federazioek edo dagokion erakunde olinpiko edo paraolinpikoak antolaturiko nazioarteko kirol-lehiaketak badira.
>
> Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioak kasu batean bakarrik egin ahal izango dizkie kontrolak, lehiaketatik kanpo, estatu mailako lizentzia, Euskadiz kanpoko beste erkidegoren bateko lizentzia edo nazioarteko lizentzia duten kirolariei: Kirolean Osasuna Babesteko Espainiako Agentziaren eskariz edo erkidegoetako edo nazioarteko erakunde edo federazioen eskariz, eta aldez aurretik beraiekin hitzarmen bat sinatuta.»

idatzi-zati horretarako proposatutako idazkera berri horrek jaso egiten du Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Bitariko Lankidetza Batzordearen Akordioan Euskadiko Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legeaz den bezainbatean eman zitzaion interpretazioa.

> «A) Euskal Autonomia Erkidegoaren 12/2012 Legeko 129 artikuluaren interpretazioa hitzartu dute parte biek, ondoren zehazten den legez:
> – «Euskal Autonomia Erkidegoan egindako lehiaketa edo kirol-jardueretan parte hartzen badute» espresioa honela interpretatu behar da: Legeko 1.4 artikuluarekin bat etorriz, haiek erkidegoko mailako lehiaketak dira, eta, betiere, kanpo geratzen direla honako hauek: Estatu mailako kirol-lehiaketa ofizialak, eta, halaber,

nazioarteko kirol-lehiaketak, nazioarteko kirol-federazioek edo erakunde olinpiko edo paraolinpikoek antolatutakoak direnak.
– Lizentzia estatala, Euskal Autonomia Erkidegokoaz beste lizentzia autonomiko edo nazioarteko lizentzia duten kirolariei dagokienez, lehiaketaz kanpoko kontrolak bakarrik egin ahal izango ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak; betiere eskabiderik bada eta ondokoen batekin aldez aurretiko hitzarmenik bada: Kirolean Osasuna Babesteko Agentzia Espainiarra; edo nazioarteko edo autonomietako erakunde edo federazio arduradunak.»

Proiektuan zehar, gaztelaniaz, bi generoak erabiltzea aukeratu da, hizkuntza ondo baliatzeko generoaren ikuspuntutik; horregatik, 12.9 artikuluko lehen lerrokadan hau jaso beharko litzateke: "aquellos y aquellas deportistas".

Bigarren lerrokadan letra larriz idatzi beharko litzateke "País Vasco".

13. ARTIKULUA:

13. artikuluan, hiru idatzi-zati berri gehitzen dira, 11.a, 12.a eta 13.a; horrenbestez, behin betiko idazkera hau izan beharko luke:

13. artikulua. «Kontrolen bermeak eta legezko ondorioak.
1.- Laginak hartzeko mediku batek egingo ditu, osasun-langileek lagunduta, aurreko artikuluan aipatutako kontrolak, betiere Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak zeregin horretarako gaitutako langileen ardurapean.
2.- Dopinaren aurkako nazioarteko araudiarekin eta, batez ere, Dopinaren aurkako Mundu Kodearekin eta hori garatzeko arauekin bat etorriz, lehiaketatik kanpoko dopin-kontrolak eta osasun-kontrolak ezin izango dira erregelamendu bidez ezarritako ordutegi-tarte jakin batean egin, eta tarte horretan sartuko dira betiere gaueko atsedenerako erabiltzen ohi diren orduak. Ordu horietan ezin izango da dopin-kontrolik egin Euskal Autonomia Erkidegoan, eta berdin dio kontrol hori agintari administratiboak, kirol-federazioak edo estatuko edo nazioarteko erakundeak agindutakoa izan.
3.- Era berean, kirolari berari ezin izango zaio dopin-kontrol bat baino gehiago eginarazi proba batean. Ez da kontrol beretzat hartuko kirolariei eskatutako lagin-motak desberdinak badira. Erregelamenduz arautuko da eskubide horren noraino-koa.
4.- Gaueko atsedenaren barruan sartzen den ordutegi-tartean edo aurreko paragrafoan adierazitakoaren babesean dopin-kontrolak egiteari uko egiteak ez du inolako erantzukizunik eragingo.
5.- Euskal Autonomia Erkidegoan egindako dopin-kontrolak ordutegi-muga horiek errespetatuz egingo direla zainduko du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak, eta berdin dio kontrol horiek nork agintzen dituen.
6.- Kontrola egingo zaiela jakinarazten zaienean esango zaie kirolariei, eta, hala badagokio, lagina hartu baino lehen, kontrol hori dela-eta zein eskubide eta betebehar dituzten, eta prozeduraren funtsezko izapideen eta horien ondorio nagusien berri ere emango zaie, bai eta lege honek datuen tratamenduari eta datuak emateari buruz zer xedatzen duen. Horrez gain, jakinaraziko zaie, datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, datuak ezerezteko edo datuen aurka egiteko eskubideak erabiltzeko aukera dutela. Azken horiek datu pertsonalen babeserako indarrean dagoen legerian ezarrita daude.

7.- Dituzten eskubideen artean kontrola ez egiteko eskubidea dago, artikulu honetan xedatutakoaren eta lege honen 23.1c artikuluan ezarritakoaren kalterik gabe.
8.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak informazio-eredu normalizatu bat ezarriko du euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez, kontrolak jakinarazteko, dopin-kontroletan laginak hartzeko eta hartutako laginak dagokion laborategira bidaltzeko.
9.- Dopin arloko diziplina- edo zehapen-prozeduren ondorioetarako, bidezko arrazoirik gabe dopin-kontrolak egiteari uko egitea edo dopinaren aurkako erakundeek egindako informazio-eskaerei ez erantzutea, behar bezala dokumentatu ondoren, beharadinako froga izango da kirolariaren jokabidea zehatzeko. Kontrola ez egiteko bidezko arrazoitzat hartuko da kontrola egitera bertaratu ezin izatea egiaztatutako lesio baten ondorioz edo kontrola egiteak kirolariaren osasuna arriskuan jartzen duela egiaztatzen denean.
Ezintasun hori zuzenbidearen arabera ezarritako edozein bitartekoren bidez egiaztatu eta ziurtatu beharko du laginak hartzeko taldearen arduradunak.
10.- Aurreko paragrafoan adierazitako ezintasuna egiaztatzeko agiriari Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen arloan indarrean dagoen araudian aurreikusitako egiazkotasun-presuntzioa aitortuko zaio.
11.- Emaitzak kudeatzeaz arduratzen den dopinaren aurkako erakundeak B lagina analizatzea erabaki dezake, bere irizpideetan oinarrituta, nahiz eta kirolariak ez eskatu lagin horren analisirik.
12.- Dopinaren aurkako arauak hautsi direla frogatzeko, nahikoa izango da:
a) Kirolariak B lagina analizatzeari uko egiten dionean —eta, beraz, analisi hori egiten ez denean—, A laginean debekaturiko substantzia bat edo haren metabolitoak edo markatzaileak agertzea.
b) Kirolariaren B lagina analizatu, eta berresten baldin bada A laginean agertutako substantzia debekatua edo haren metabolitoak edo markatzaileak agertzen direla.
c) Kirolariaren B lagina bi flaskotan banatzen denean eta bigarren flaskoko analisiak berresten baldin badu lehen flaskoan agertutako substantzia debekatua edo haren metaboltoak edo markatzaileak agertzen direla.
13.- Dopinaren aurkako erakundearen betebeharra izango da dopinaren aurkako araudia urratu dela frogatzea. Eginkizun horretan, baliozkotzat joko dira Dopinaren aurkako Mundu Agentziak onartutako metodo analitikoak edo erabakitzeko mugak, baldin eta kanpo-berrikusketa batek aztertzen baditu eta komunitate zientifikoaren irizpean jartzen badira.»

12. idatzi-zatian, Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 2.1.2 artikulua kopiatzen da, proba-sistema taxutzeari eta dopinaren aurkako proben baliozkotasunaz zenbait presuntzio ezartzeari buruzko artikulua. Presuntzio horiek berak sartu ziren Kirol-jardunean kirolarien osasuna babesteari eta dopinaren aurka borrokatzeari buruzko ekainaren 20ko 3/2013 Lege Organikoaren 39.5.a) artikuluan. Era berean, 11. idatzi-zatian Dopinaren aurkako Mundu Kodean lehen aipatutako 2.1.2 artikulua, 12. idatzi-zatian ere jasoa, interpretatzeko moduari buruz egindako iruzkina jasotzen da.

Azkenik, eta ildo beretik, 13. idatzi-zatiak Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 3.1 artikulua jasotzen du, dopinaren aurkako arauen urraketen froga-zamaz den bezainbatean.

13. idatzi-zatiko bigarren tartekiak Dopinaren aurkako Mundu Agentziak onartutako metodo analitikoen edo erabakitzeko mugen balio zientifikoa aitortzen du, baldin eta kanpo-berrikusketa batek aztertzen baditu eta komunitate zientifikoaren irizpean jartzen badira.

16. ARTIKULUA:

16. artikuluko 3. idatzi-zatia aldatu egiten da. Artikulu hori hitzez hitz hau zen:

> 1.- Lege honen ondorioetarako, dopin-kontroltzat hartuko dira dopina eragiteko moduko debekatutako substantziarik dagoen egiaztatzeko edo arauz kanpoko metodorik erabili den egiaztatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak gaitutako erakunde eta pertsonek egindako jarduerak. Prozedura estandarren bidez hautematen dira halakoak, eta, horretarako, lagin bat ateratzen da. Dopin-kontroltzat hartuko dira, era berean, dopatzearen aurkako araudia bete den egiaztatzeko, eskumena duten dopinaren aurkako organoek egindako jardueraguztiak.
> 2.- Dena dela, dopin-kontrolen esparruan sartzen dira honako hauek: kontrolak berme guztiekin egiteko behar den plangintza, kontrolak zein kirolariri eta nola egingo zaizkion aukeratzea, laginak hartu eta erabiltzea, baita laborategiko analisiak eta lortutako emaitzak kudeatu eta gordetzea ere.
> 3.- Aurreko paragrafoan adierazitako laginak aire, gernu, odol edo beste edozein fluidotatik hartutakoak edo lagin txikiak izango dira, erregelamendu bidez zehaztutako moduan. Bertan adierazi ko da nola baliozkotzen diren, ondorio hauetarako, analisien prozedurak.
> 4.- Lege honen ondorioetarako, osasun-kontrol kontzeptuak jarduera-multzo hau hartzen du bere baitan: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak, kirol-federazioek eta gainerako kirol-erakundeek, kirol-jarduerak beren kirolarien osasunari eragin diezazkiokeen kontrako ondorioak hobetzeko, kontrolatzeko eta prebenitzeko, egokitzat hartzen dituzten jarduerak, bai eta dopinaren eta osasunaren alorreko legetik eratorritako betebeharrak kirolariek bete ditzaten kontrolatzeko jarduerak ere. Osasun-kontroletako analisien emaitzek ez dute diziplina- edo administrazio-zehapenik ekarriko. Hala ere, kontrol horien ondoriz, kirol-erakunde horietan ezarritako kirol eta lan arloko neurriak ezarri ahal izango zaizkie kirolariei, eta dopin-kontrolen plangintza egiteko balio ahal izango dute.

Honako idazkera hau proposatzen da 3. idatzi-zatirako, eta kirolariari emaitza analitikoak jakinarazi baino lehen laginen analisi gehiago egiteko aukerari buruzko azken tartekia gehitzen zaio.

> «3.- Aurreko paragrafoan adierazitako laginak aire, gernu, odol edo beste edozein fluidotatik hartutakoak edo lagin txikiak izango dira, erregelamendu bidez zehaztutako moduan. Bertan adierazi ko da nola baliozkotzen diren, ondorio hauetarako, analisien prozedurak. Emaitzak kudeatzeaz arduratzen den dopinaren aurkako erakundeak kirolariari A eta B laginen analisien emaitzak jakinarazi baino lehen, lagin horien analisi osagarriak egin ahal izango dira.»

Aurreikuspen hau Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 65 idatzi-zatian aurreikusitako aukeraren erreprodukzioa da.

18. ARTIKULUA:

> 18. artikulua. «Kontrolak egiteko eskumena.
> 1.- Orokorrean, eta lege honetan adierazitako beste erakunde batzuen eskumenen kalterik gabe, Euskadiko kirol-federazioei eta lurraldeetakoei dagokie behar diren jarduerak egitea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak zehaztutako lehiaketa federatuetako kontrolak egiteko.
> 2.- Behar besteko baliabiderik ez dagoenean edo federazioaren beraren egiturak hala justifikatzen duenean, eginkizun hori Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak beteko du
> 3.- Kirolariei lege honen aplikazio-eremuan egindako dopin-kontroletan, laginen analisiak Dopinaren aurkako Mundu Agentziaren nazioarteko egiaztapena duten laborategietan egin beharko dira.
> 4.- Dopinaren aurkako Mundu Kodean ezarritako irizpideekin bat etorriz, kirol-lehiaketa bakoitzean erakunde bakarra arduratuko da dopin-kontrolaz.
> 5.- Nazioarteko lehiaketetan parte hartzeko asmoz Euskal Autonomia Erkidegoan dauden kirolariei lehiaketatik kanpoko kontrolak egiteko, lehentasuna izango dute nazioarteko kirol-erakundeek.
> 6.- Estatu mailako lehiaketa ofizialetan parte hartzeko asmoz Euskal Autonomia Erkidegoan dauden kirolariei lehiaketatik kanpoko kontrolak egiteko, lehentasuna izango dute estatu mailako erakundeek.»

18. artikuluan, 3. idatzi-zatia aldatu da, eta honela idatzita utzi:

> «3.- Kirolariei lege honen aplikazio-eremuan egindako dopin-kontroletan, laginen analisiak Dopinaren aurkako Mundu Agentziaren nazioarteko egiaztapena duten laborategietan edo Agentziaren onarpena dutenetan egin beharko dira.»

Zehazki, "edo Agentziaren onarpena dutenetan" tartekia gehitu da, eta, horrenbestez, Dopinaren aurkako Mundu Kodeko terminologia erabili:

> Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 6.1 artikulua:
> 6.1 Laborategi egiaztatuen eta onartuen erabilpena.
> 2.1 artikuluaren ondorioetarako, laginak Dopinaren aurkako Mundu Agentziak egiaztatutako edo, bestela, onartutako laborategiek baino ez dituzte aztertuko.
> Dopinaren aurkako Mundu Agentziak egiaztatutako edo onartutako laborategien artean laginak aztertu behar dituena aukeratzea emaitzen kudeaketaren ardura duen dopinaren aurkako erakundearen kontu esklusiboa izango da.

"Onartutako laborategiak" terminoa hobeto ulertzeko, zehatz daiteke ezen, Dopinaren aurkako Mundu Kodeak berak 6.1 artikuluan dioen bezala, kostuengatik eta sarbide geografikoagatik, Dopinaren aurkako Mundu Agentziak egiaztatu gabeko laborategi espezifikoak onar ditzakeela agentziak berak analisi jakin batzuk egiteko; adibidez, odol-analisiak, epe jakin batean bidali behar badira odola hartzen den lekutik laborategiraino. Laborategi hori onartu baino lehen, Dopinaren aurkako Mundu Agentziak

ziurtatu beharko du berak eskatzen dituen goi-mailako analisi- eta zaintza-estandarrak betetzen dituela laborategiak. Hartara, Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 2.1[3] artikuluan aurreikusitako urraketak soil-soilik zehaztu ahal izango dira Dopinaren aurkako Mundu Agentziak egiaztatutako laborategi batek edo agentzia horrek berak berariaz onartutako laborategi batek egindako laginen azterketaren bidez; beste artikulu batzuen urraketak, berriz, beste laborategi batzuen emaitza analitikoak erabiliz zehaztu ahal izango dira, betiere emaitzak fidagarriak badira.

Hala ere, badirudi Kiroleko Dopinaren aurkako Legean zorrotzago jokatu nahi izan dela dopinaren aurkako analisiak egiten dituzten laborategiei eskatzen zaien kualifikazioari dagokionez, eta ez da egiten Dopinaren aurkako Mundu Kodeak arau-haustea nolakoa den kontuan hartuta egiten duen bereizketa, eta, betiere, eskatzen da laginen analisiak Dopinaren aurkako Mundu Agentziaren nazioarteko egiaztapena duten edo agentzia horrek berak onartuta dauden laborategiek egiteko. Zorroztasun handiago hori kontu nagusiki teknikoa da, eta, horri dagokionez, ez zatekeen sobera egongo azalpen tekniko bat aurreproiektuari gehitutako justifikazio-memorian.

Nolanahi ere, gogoan hartu beharko litzateke Kirol-jardunean kirolarien osasuna babesteari eta dopinaren aurka borrokatzeari buruzko ekainaren 20ko 3/2013 Lege Organikoaren 20.2 artikuluan aurreikusitakoa, eta, horregatik, ekimenaren sustatzailea den zuzendaritzaren iritzi teknikoaren esku uzten dugu estatu-homologazioa duten laborategiek egindako analisien balioa onartzeko aukera.

> Ekainaren 20ko 3/2013 Lege Organikoaren 20.2 artikulua: Lehiaketa barruan edo kanpoan kirolariei egindako dopin-kontroletan, kirolean debekaturik dauden gaiak eta metodoak hautemateko analisiak Dopinaren Aurkako Mundu Agentziaren nazioarteko egiaztapena duten laborategietan edo Estatuak homologatuetan egin beharko dira.

19. ARTIKULUA:

> 19. artikulua. Kirolean debekatuta dauden substantzia eta metodoen zerrendaren publizitatea.
> 1.- Nazioarteko erakundeek onartutako xedapenen esparruan, Eusko Jaurlaritzak kirolean debekatuta dauden substantzien eta metodoen zerrenda Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko eskatuko du. Gainera, zerrendan aldaketak egiten diren guztietan, berriro argitaratuko da zerrenda.
> 2.- Eusko Jaurlaritzak debekatuta dauden substantzien eta metodoen zerrendari buruz informatzeko eta kontsultak egiteko beste modu batzuk ezarriko ditu. Horretarako, erakundeen eta kirolarekin zerikusia duten organoen orri digitaletan erantsiko du zerrenda, eta, horrezaz gain, zerrendaren berri emateko, hedatzeko eta eskura izateko bestelako moduak eta bitartekoak ere ezarriko ditu.

1. idatzi-zatiaren ordez, honako testu hau jartzen da:

---

[3] 2.1 Kirolari baten *laginean substantzia debekatu* bat edo berorren *metabolitoak* edo *markatzaileak* egotea.

> «1.- Nazioarteko erakundeek onartutako xedapenen esparruan, Eusko Jaurlaritzak kirolean debekatuta dauden substantzien eta metodoen zerrenda Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko eskatuko du, Estatuaren Administrazio Orokorrak Estatuko Aldizkari Ofizialean agintzen duen argitaratzea eragotzi gabe. Gainera, zerrendan aldaketak egiten diren guztietan, berriro argitaratuko da zerrenda.»

Aldaketa hori Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Bitariko Lankidetza Batzordean Euskadiko Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legeaz den bezainbatean hartutako erabakiaren ondorioz sartzen da. Batzorde horretan 19.1 artikuluaren interpretazio jakin bat proposatu zen, eta artikulua interpretazio horretara egokitu da:

> «B) Euskal Autonomia Erkidegoaren 12/2012 Legeko 19.1 artikuluaren interpretazioa hitzartu dute parte biek, ondoren zehazten den legez:
> "Estatuko Aldizkari Ofizialean", CSDak argitarazten duen zerrendaren publizitate gehigarritzat ulertu behar da honako eskumenen honetakoa: kiroletako metodo eta substantzia debekatuen zerrenda ofiziala argitara dadila agintzeko, Eusko Jaurlaritzak duena. Aldizkari horretako aipatu argitarapena honela egiten da: nazioarteko konpromiso eta obligazioen markoaren barruan, eta Osasuna Babesteko eta Kiroleko Dopinaren Aurkako azaroaren 21eko 7/2006 Lege Organikoko 12.1 artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriaz.»

Nolanahi ere, komeniko litzateke erabakia ez aldatzea bere horretan EAEko Administrazio Orokorraren egitura funtzional eta organikora, baizik eta egokitzea. Hau da, proposatutako izapidea (EHAAn argitaratzea Estatuko Administrazio Orokorrak kirolerako agindutako substantzia eta metodo debekatuen zerrenda) gai-arloa dela eta eskumena duen sailburuaren Agindu bidez egin liteke, ez baita beharrezkoa, zerrenda hori EHAAn argitaratzeko, Gobernu Kontseiluak horretarako erabakia hartzea.

21. ARTIKULUA:

Aldatu nahi den artikuluak hau dio:

> 21. artikulua. Administrazio-zehapenen araubidearen aplikazio-eremua.
> 1.- Lege honetan dopinari buruz jasotzen den arau-hausteen eta zehapenen araubidea aplikatuko zaie, bidezko den heinean, Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan gertatzen diren egiteei edo ez-egiteei, edozein kirol-lehiaketatan gertatzen direla ere, dela kirol-lehiaketa autonomia-erkidegoaren eremukoa, dela estatuaren eremukoa edo nazioartekoa, nazioarteko kirol-federazioek edo nazioarteko erakunde olinpikoek edo paraolinpikoek antolatua. Ez da beharko lotura bereziko harremanik egon dadin, eta egiteak edo ez-egiteak lehiaz kanpoko kirol-jardueretan ere gauza daitezke.
> 2.- Aurreko paragrafoan xedatutakoa lege honen 32. artikuluan xedatutakoaren kalterik gabe ulertzen da.

21. artikuluaren 1. idatzi-zatiak idazkera hau izango du:

> «1. Lege honetan dopinari buruz jasotzen den arau-hausteen eta zehapenen araubidea aplikatuko zaie, bidezko den heinean, Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan gertatzen diren egiteei edo ez-egiteei, salbu eta nazioarteko kirol-federazioek edo nazioarteko erakunde olinpikoek edo paraolinpikoek antolaturiko estatu edo nazioarte mailako kirol-lehiaketa ofizialetan gertatzen direnei. Ez da beharko lotura bereziko harremanik egon dadin, eta egiteak edo ez-egiteak lehiaz kanpoko kirol-jardueretan ere gauza daitezke.»

Artikulu honen idazkera, halaber, Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Bitariko Lankidetza Batzordean Euskadiko Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legeaz den bezainbatean hartutako lehen aipatu erabakiaren ondorio da:

> «C) Zehapen-araubide administratiboaren aplikazio-eremua dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko 12/2012 Legeko 21.1 artikuluaren interpretazioa hitzartu dute bi parteek. Eta interpretazio horren arabera, zehapen-araubide administratibotik kanpo geratzen dira honako hauek: Estatu mailako kirol-lehiaketa ofizialetan jazotako ekintza eta omisioak, eta bai nazioarteko kirol-lehiaketetan, zehazki, nazioarteko kirol-federazioek edo erakunde olinpiko edo paraolinpikoek antolatutakoetan jazotakoak.»

Hala ere, proposatutako idatzi-zatiko azken tarteko hobeto idatzi beharko litzateke. "Ez da beharko lotura bereziko harremanik egon dadin, eta egiteak edo ez-egiteak lehiaz kanpoko kirol-jardueretan ere gauza daitezke". Idazkera hobetzeko, artikuluan ordena aldatzea proposatzen dugu, eta amaiera hasierara eramatea: "1. Lege honetan dopinari buruz jasotzen den arau-hausteen eta zehapenen araubidea aplikatuko zaie, bidezko den heinean, EAEko lurralde-eremuan edozein kirol-jardueratan, lehiazkoak izan zein ez, gertatzen diren egiteei edo ez-egiteei, lotura bereziko harremanik egotea beharrezkoa izan gabe. Hala ere, salbuetsita daude estatuko edo nazioarteko kirol-lehiaketa ofizialetan gertatzen direnak, nazioarteko kirol-federazioek edo nazioarteko erakunde olinpikoek edo paraolinpikoek antolatuta badaude.

Hartara, artikuluaren idazkera hobetu egiten da, eta, era berean, gaztelaniaz, gerundioaren ("quedando excluidas") erabilera —ohikoa, baina ez horregatik zuzena— ere saihesten da.

22 BIS ARTIKULUA:

Artikulu berri bat gehitzen da; hitzez hitz:

> «22 bis artikulua.- Behin-behineko etendura.
> 1.- Baldin eta debekaturiko metodo batekin edo substantzia espezifiko bat ez den debekaturiko substantzia batekin loturiko aurkako emaitza analitikorik jasotzen bada, behin-behineko etendura ezarriko da berehala, behin egiaztatuz gero ez dela erabilera terapeutikoko baimenik eman eta ez dela emango, edota ez dela gertatu kontrol eta ikerketetarako nazioarteko estandarren itxurazko

desbideratzerik edo laborategietarako nazioarteko estandarren desbideratzerik.
2.- Ezingo da behin-behineko etendurarik ezarri, horren aurretik — edo ondoren, urgentziaz— kirolariari entzunaldiaren izapidea izateko aukerarik ematen ez bazaio.»

Artikulu hori X. tituluaren barruan kokatzen da, eta behin-behineko etendura gertatzeko aukera jasotzen du, emaitza analitikoa aurkakoa bada, eta betiere egiaztatzen bada ez dela eman eta ez dela emango erabilera terapeutikoko baimenik, edo ez dela desbideratzerik izan kontroletarako edo laborategietarako estandarretan. Era berean, prozeduran, behin-behineko etenduraren aurretik, entzunaldi-izapidea ezartzen da, edo, urgentzia izanez gero, etenduraren beraren ondoren. Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 7.9.1 artikuluko "nahitaezko behin-behineko etendura" delakoaren translazioa da; izan ere, etendura hori metodo debekatu edo substantzia espezifiko bat ez bezalako substantzia debekatu batengatik aurkako emaitza analitikoa gertatzen den kasuetarako aurreikusita dago.

Hala ere, zehapen-araubideari dagokionez, bereziki bermatzailea izan behar da, eta, horregatik, honako gomendio hauek egin behar ditugu artikulu horretaz:

- Euskadiko Kiroleko Dopinaren aurkako Legearen espariu subjektiboaren zabaltasuna dela eta, ahalegina egin beharko litzateke zehazteko zer elementuri eragiten dion "behin-behineko etendurak". Kontuan hartzen badugu legearen hausle izan daitezkeen guztiak ez daudela lotuta lotura bereziko harremanei, behin-behineko etendura soil-soilik lizentziaren etendurari buruzkoa den zehaztu beharko litzateke.
- Kontuan hartuta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 134.3 artikuluak esaten duela ezin dela inola ere zehapenik ezarri, horretarako behar den prozedura izapidetu ez bada, eta lege bereko 136. artikuluak xedatzen duela erabaki arrazoitu bidez behin-behineko neurriak har daitezkeela azken ebazpenaren eragin kortasuna ziurtatzeko, zehatzeko prozeduren arauetan horrelakorik ezartzen bada, ulertzen dugu behin-behineko neurri bat hartzeak salbuespenezko eta behar bezala arrazoitutako zerbait izan beharko lukeela, eta arrazoitzeko betebehar hori berariaz jaso beharko litzatekeela 22 bis artikuluan.
- EAEko araudian dauden prozeduren dualtasuna dela eta, zehaztu beharko litzateke behin-behineko etenduraren aukera horrek bi prozedura-motei eragiten dien; hau da, diziplina-prozedurei ere eragiten dien.
- Era berean, behin-behineko neurriaren gehieneko iraupena zehaztu beharko litzateke, kirolariek prozedurak ebaztean atzeratzearen ondorioz kalte konponezinik izan ez dezaten.
- Azkenik, gaztelaniaz, akats ortografiko hau zuzendu beharko litzateke: "una vez que **sea producido** la confirmación".

Hitz batean, Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 7.9.1 artikulua EAEko Legearen alderdi espezifikoetara egokituta idazteko gomendatzen dugu.

23. ARTIKULUA:

23. artikuluaren 1. idatzi-zatian, oso larri diren beste bi arau-hauste tipifikatzen dira: alde batetik "Dopinaren aurkako arauak urratzearekin edo urratzen saiatzearekin lotutako arau-hauste bat dela eta, hartan laguntzea, bultzatzea, esku ematea, akuilatzea, kolaboratzea, konspiratzea, estaltzea edo bestelako konplizitate mota" (m idatzi-zatia), eta, bestetik, "Kirolari batek edo dopinaren aurkako erakunde baten agintearen mendeko pertsona batek lotura profesionala edo kirol-mailako lotura izatea dopinaren alorreko arau-hauste batengatik zehapen penala, diziplinazko zehapena edo administrazio-zehapena jaso duen beraren inguruko pertsona batekin, betiere horren berri idatziz jakinarazi badu dagokion dopinaren aurkako erakundeak, Dopinaren aurkako Mundu Kodeak agintzen duen eran.» (n idatzi-zatia).

Bi agindu berri horiek Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 2.9[4] artikulua (konplizitatea) eta 2.10[5] artikulua (elkartze debekatua) jasotzearen ondorio dira.

---

[4] Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 2.9 artikulua: «Konplizitatea.
Beste pertsona batek dopinaren aurkako arauak urratzearekin edo urratzen saiatzearekin edo 10.12.1 artikulua urratzearekin lotutako arau-hauste bat dela eta, hartan laguntzea, bultzatzea, esku ematea, akuilatzea, kolaboratzea, konspiratzea, estaltzea edo bestelako nahitako konplizitate mota.»

[5] Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 2.10 artikulua: Elkartze debekatua.
Kirolari batek edo *Dopinaren aurkako erakunde* baten agintepeko *pertsona* batek, profesional moduan edo kirolarekin zerikusia duen beste zerbait izanda, *kirolariari laguntzeko* edozein *pertsonarekin* elkartzea:
2.10.1 *Dopinaren aurkako erakunde* baten aginpideari lotuta badago, *etendura*-aldi bat betetzen ari denean;
2.10.2 *Dopinaren aurkako erakunde* baten aginpideari lotuta ez badago, eta *Etendurari* ez bazaio heldu *Kodean* jasotako emaitzen kudeaketa-prozesu batean, kondenatu edo errudun jo dutenean zigor-, diziplina- edo lanbide-prozedura batean dopinaren aurkako arauak haustea diren jokabideak izategatik, *pertsona* horri *kodearen* araberako arauak aplikatuz gero. *Pertsona* horren deskalifikazio-estatusa indarrean egongo da sei urtez zigor-, lanbide- edo diziplina-erabakia hartzen denetik, edo zigor-, diziplina- edo lanbide-zehapena indarrean dagoen bitartean.
2.10.3 Pertsona hori 2.10.1 edo 2.10.2 artikuluan deskribatutako *pertsona* baten estaltzaile edo bitartekari gisa jokatzen ari bada. Xedapen hau aplikatzeko, beharrezkoa da *kirolariak* edo beste *pertsona* batek aurretik *kirolariaren* edo beste *pertsona* horren gaineko jurisdikzioa duen *dopinaren aurkako erakunde* baten edo *Dopinaren aurkako Mundu Agentziaren* idatzizko jakinarazpena jaso izana *kirolariari laguntzeko pertsonaren* deskalifikazio-egoerari buruz, eta elkartze debekatuak izan dezakeen *ondorioari* buruz, eta *kirolariak* edo beste *pertsonak* zentzuz saihetsi ahal izatea elkartze hori. *Dopinaren aurkako erakundeak* ere zentzuz egin daitekeen guztia egingo du, zertarako eta *kirolariari* edo beste *pertsonari* igorritako jakinarazpenaren xede den *kirolariari laguntzeko pertsonari* jakinarazteko *kirolariari laguntzeko pertsona dopinaren aurkako erakundean* azal daitekeela 15 eguneko epean, 2.10.1 eta 2.10.2 artikuluetan deskribatutako irizpideak bere kasuan ez direla aplikagarriak adierazteko. (17. artikuluan xedatua baztertu gabe, *kirolariari laguntzeko pertsonaren* jokabide deskalifikatzailea 25. artikuluan indarrean jartzeko adierazitako egunaren aurretik gertatuta ere aplikatzen da artikulu hau).
Kirolariari edo beste *pertsonari* egokituko zaio frogatzea 2.10.1 edo 2.10.2 artikuluan deskribatutako *kirolariari laguntzeko pertsonarekiko* edozein elkartze ez dela profesionala, edo ez duela zerikusirik kirolarekin.
2.10.1, 2.10.2 edo 2.10.3 artikuluan deskribatutako irizpideak betetzen dituzten *kirolariei laguntzeko pertsonen* berri duten *dopinaren aurkako erakundeek Dopinaren aurkako Mundu Agentziari* helarazi beharko diote informazio hori.
[2.10 artikuluari buruzko iruzkina: Kirolariek eta beste pertsonek ez dute lan egin behar entrenatzaileekin, medikuekin edo kirolariei laguntzeko beste pertsonekin, baldin eta

m) idatzi-zatiari dagokionez, zerbitzu sustatzailearen esku uzten dugu esatea zer iruditzen zaion aipatu idatzi-zati hori jasotzeko beharrik eza, jokaera hori zehatuta dagoelako Kiroleko Dopinaren aurkako Legearen 23.1 artikuluko i) eta j) idatzi-zatien bidez. Nolanahi ere, gaztelaniaz, proposatutako m) idatzi-zatian, ez da ulertzen azken tartekia: "o cualquier intento de infracción".

n) idatzi-zatiari dagokionez, esan daiteke ez dela ulertzen nori buruzkoa den aipatzen den jakinarazpena.

Azkenik, n) idatzi-zatian, gaztelaniaz, "notificada" jarri beharko litzateke "notificado" dagoen lekuan.

24. ARTIKULUA:

Araubide zehatzailea aldatu eta honako aldaketa hauek egiten dira:

Artikulu honetan, aplika daitezkeen zehapenak tipifikatzen dira, eta, ondoren, kirolariaren erantzukizuna mailakatzeko arau batzuk jasotzen dira, izan duen jokaeran erakutsitako nahitasuna oinarri hartuta.

Artikuluaren bidez, Euskadiko Legearen zehapen-araubidea Dopinaren aurkako Mundu Kodera egokitzen ahalegintzen da. Hala ere, ez zen bere horretan sartu behar Dopinaren aurkako Mundu Kodearen testua 24. artikuluaren barruan; aitzitik, behar ziren aldaketak egin behar ziren, gure legea aurreikusitako zehapen-araubidera behar bezala egokitzeko. Hau da, Dopinaren aurkako Mundu Kodearen testua (10.2[6], 10.3[7], 10.4[8], 10.5[9] eta 10.6[10] artikuluak) aurreproiektura eraman da, baina ez dira berraztertu gure legean aurreikusita zeuden zigorraldiak, eta, horregatik, 5. idatzi-zati berria irakurrita 24. artikuluko 1.-3. idatzi-zatiekin batera, nolabaiteko kontraesanak ondorioztatzen dira 5. idatzi-zatia Euskadiko Legean aurreikusitako urraketa-motei aplikatzean. Adibidez, 5. artikuluan esaten da espezifikoa ez den substantzia bat erabiltzea den oso arau-hauste larri bat lehenengoz gertatzen denean, arau-hauste hori bi urtekoa baino izango ez den zigorraldi batez zehatu ahal izango dela, kirolariak egiaztatzen badu arau-haustea ez zela nahitakoa izan. Hortaz, 23. artikuluko h) eta i) letretako arau-hausteetako baten kasuan, zigor aplikagarria artikulu horretako bertako bigarren idatzi-zatian aurreikusitako muga baino

---

zigortuta badaude dopinaren aurkako arauak urratzeagatik, edo zigor-kondena izan badute, edo diziplina-neurri profesionalak ezarri bazaizkie dopinari lotuta.
Hona hemen debekatuta dauden elkartze-motetako batzuk: aholkularitza lortzea prestakuntzaz, estrategiez, teknikez, nutrizioaz edo kontu medikuez; terapia, tratamendua edo errezetak lortzea; edozein produktu organiko ematea analisia egiteko; edo baimena ematea kirolariari laguntzeko pertsonari, agente edo ordezkari gisa aritzeko. Ez da beharrezkoa debekatutako elkartzeak inolako konpentsaziorik izatea.]

[6] Zigorrak substantzia debekatu bat edo metodo debekatu bat egoteagatik, erabiltzeagatik edo erabiltzen saiatzeagatik, edo edukitzeagatik.

[7] Zigorra dopinaren aurkako arauen beste urraketa batzuengatik.

[8] Zigorraldia kentzea errurik edo zabarkeriarik ez izateagatik.

[9] Zigorraldia murriztea erru edo zabarkeria aipagarririk ez izateagatik.

[10] Zigorraldia edo erruduntasuna ez bezalako beste arrazoi batzuen ondorioak kentzea, murriztea edo etetea.

txikiagoa litzateke (4-6 urte). Era berean, espezifikoa ez den substantzia bat dagoela hautematen bada, eta 23. artikuluko lehen idatzi-zatiko a), b), c), d), e), f), g), j) eta l) letren oso arau-hauste larriak baditugu, espezifikoa ez den substantzia horren presentziak zehapen-ondorioa larritzen du, eta 24.1 artikuluan aurreikusitako zigorraldi handiena ezartzen da (bi urtetik lau urtera arteko zigorraldi posiblea). Hala ere, 23.1 artikuluko h) eta i) letretan aurreikusitako kasuetan espezifikoa ez den substantzia bat egoteak leundu egiten du erantzukizuna, eta aldi laxoenarekin zigortzen da(litekeen aldia lau eta sei urte bitartekoa da).

Ildo beretik, espezifikotzat jotako substantzia bat eta nahitako jokabide bat baditugu, gauza bera gertatzen da; lehen kasuan (23.1 artikuluko a, b, c, d, e, f, g, j eta l idatzi-zatiak), zigorraldi handienarekin zehatzen da, baina zehapen-aldi txikiena aplikatzen da 23.1 artikuluko h) eta i) letretan tipifikatutako arau-hausteak badira, nahiz eta jokaera horrek, nahitakoa izanda, hasiera batean larriagoa dela eman, eta sei urtera arteko zigorra jarri ahal izan.

Horren guztiaren ondorioa da ezen lege-testua Dopinaren aurkako Mundu Kodera egokitzean, ez liratekeela hitzez hitz sartu behar Kodeko idatzi-zati jakin batzuk gure legearen testuan; aitzitik, behar bezala egokitu beharko lirateke Dopinaren aurkako Mundu Kodearen edukiak gure araura, eta hori kontraesanak oro saihesteko.

Hartara, halaber, kontraesanak aurkitzen dira 24. artikuluko 8. idatzi-zati berriaren eta 1. idatzi-zatiaren artean, hala nola 24. artikuluko 9. eta 2. idatzi-zatien artean.

Hortaz, 24. artikuluko 1.-3. idatzi-zatiak berraztertzeko gomendatzen zaio zuzendaritza sustatzaileari.

Azkenik, artikulu honi dagokionez, gaztelaniaz, termino egokiago bat jarri beharko litzateke "involucre" terminoaren ordez 5.b) idatzi-zatian. Era berean, c) idatzi-zatia oso nahasia da.

24 BIS ARTIKULUA:

Beste artikulu bat gehitzen da, arau-hauste anizkoitzengatiko zehapenak arautzeko:

> «24 bis artikulua.- Arau-hauste anizkoitzengatiko zehapenak.
> 1.- Bigarrenez urratzen badira dopinaren aurkako arauak, hauek izango dira etendura-epeak:
> a) Sei hilabete.
> b) Dopinaren aurkako lehenengo arau-haustean ezarritako etendura-epearen erdia.
> c) Bigarren arau-hausteari lehenengoa izango balitz aplikatu beharko litzaiokeen etendura-epea halako bi, inongo murrizketarik kontuan hartu gabe.
> Benetan aplikatuko den etendura-epea hiru horietatik luzeena izango da.
> 2.- Hirugarrenez urratzen badira dopinaren aurkako arauak, etendura betiko izango da, bi kasutan izan ezik: hirugarren arau-

hauste horrek badakar aurkitzeko moduan egotearen betebeharra urratzea edo hirugarren arau-hauste horrek zehapenak baliogabetzeko edo murrizteko baldintzak betetzen baditu. Kasu horietan, etendura-epea zortzi urtekoa izango da, gutxienez, eta betiko etendura gehienez.
3.- Dopinaren aurkako arau-haustearen kasu batean kirolariak frogatzen badu ez duela errurik edo zabarkeriarik izan, kontaketari dagokionez ez da aurreko arau-haustetzat joko.
4.- Dopinaren aurkako arau-hauste bat bigarren arau-haustetzat joko da bakarrik egiaztatzen bada arau-hausleak bigarrena egin orduko lehendabizikoaren berri jadanik jasoa zuela edo dopinaren aurkako erakundea behar bezala saiatu bada jakinarazpen hori egiten.
Dopinaren aurkako erakundeak hori frogatzen ez badu, arau-hausteak arau-hauste bakar bat —lehendabizikoa— balira bezala joko da, eta hari ezarri beharreko zehapenak zehapenik larriena dakarren arau-haustea izango du oinarri.
5.- Lehenengo arau-haustea ebatzi ondoren dopinaren aurkako erakunde batek aurkitzen baditu lehenengo arau-hauste hori jakinarazi baino lehenago egindako dopinaren aurkako arauen urraketa batekin loturiko gertakariak, zehapen gehigarri bat jarriko du, arau-hauste biak batera gertatu izan balira jarriko zitzaiokeena, alegia.
6.- Arau-hausteak anizkoitzat jotzeko, nahitaezkoa izango da hamar urteko epean gertatzea.»

Artikulu horrek berekin dakar Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 10.7 artikulua Euskadiko Kiroleko Dopinaren aurkako Legean sartzea.

Hala ere, berraztertu beharko litzateke 2. idatzi-zatiaren idazkera, eta sinplifikatzen eta zehazten ahalegindu. Era berean, idatzi-zati horretako azken tartekia ez da zuzena gramatikaren ikuspuntutik.

Horregatik, esan behar dugu 24 bis artikulu horretako 4. idatzi-zatiaren idazkera berraztertu beharko litzatekeela, ulertezina baita.

29. ARTIKULUA.

29. artikulua. «Isunak ezartzea.
1.- Pertsonari zehapen gisa ezartzen zaizkion isunak, kirolarien kasuan, diru-sarrerak izaten dituztenean baino ezingo dira ezarri, betiere diru-sarrera horiek kirol-jarduerarekin zerikusia badute.
2- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak ezarritako isunak ordaindu ezean, nahitaez ordainaraziko dira, aplikatzekoa den administrazio-legerian ezarritako moduan.
3.- Aurreko paragrafoan aurreikusitako prozeduraren bidez bildutako isunen emaitza zuzenbide publikoko diru-sarrera izango da, eta 10. artikuluan adierazitako ikerketa-helburuetarako balatuko da. Hala, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak jarduera horretarako behar diren kredituak sortu ahal izango ditu, eta kreditu horiek lege honetan ezarritakoari jarraituz gauzatuko dira.»

29. artikuluan beste bi idatzi-zati berri gehitzen dira:

«4.- Zehapen ekonomikoak gehieneko etendura-epea beste modu batez ezarri den kasuetan bakarrik jarri ahal izango dira.»

> 5.- Dopinaren aurkako erakundeek dopinaren aurkakoarau-hausteek eragindako gastuen errekuperazioa jaso ahal izango dute beren araudi propioan.»

Artikulu horri dagokionez, esan daiteke Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 10.10 artikulua jasotzen duela; hala ere, ez da ulertzen 4. idatzi-zatiari emandako idazkera. Lehenago esan bezala, saihestu beharko litzateke hitzez hitz jasotzea Dopinaren aurkako Mundu Kodearen itzulpena, eta ahalegina egin beharko litzateke Dopinaren aurkako Mundu Kodearen testua argitzeko eta Euskadiko Kiroleko Dopinaren aurkako Legera egokitzeko.

Memorian argudiatzen da ez dagoela eraginik Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren aurrekontuetan, ez eta legearen xede den jarduera-sektorean ere, baina artikulu hori irakurrita kontrako ondorioa atera behar da. Arau-hauste mota berriak jasotzearen ondorioz, dagozkien zehapenak jarriko dira, eta, jakina, horiek diru-sarrerak ekarriko dituzte Administrazio Publikoarentzat.

Alde horretatik, gogorarazi behar diogu zerbitzu sustatzaileari ekonomia- eta araudi-kontrolari lotutako xedapenek gehituta izan behar dutela, oinarrizko dokumentu gisa, besteak beste honako hauek jasoko dituen memoria bat (Euskal Autonomia Elkarteko Administrazio Publikoaren barneko ekonomiaren kontrola eta kontabilitatea garatzen dituen urriaren 31ko 464/1995 Dekretuaren 42.1 artikulua):

- Hori indarrean jartzeak ekarri ditzan aurrekontu-gastu eta diru-sarreren kuantifikazioa, ohikoak direnak eta kapital-eragiketetatik datozenak berezitu egin beharko direla eta gastu edo diru-sarrera horien destinoa identifikatu egin beharko dela.
- Aurrekontu gastuen finantzaketa, eraginpean dauden baliabideak eta Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorrez aparte ematen diren finantzaketa-iturriak aipatuz.
- Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiak berezko dituen gaietan eta aurrekontu-araubidean eragina duen xedapeneko aldeak identifikatzea, xedapenaren aurrekariak deskribatzea eta horren beharrak justifikatzea.

Horrenbestez, 10.2 artikulurako proposatutako idazkera berria eta 29. artikulu hau irakurrita, ondorioztatu behar dugu aurreproiektuak eragin ekonomiko zuzena duela, eta, beraz, eta memoria ekonomiko egokiaren xede izan beharko lukeela. Azterketa hori ezin atzera daiteke —memorian esaten den bezala— geroagoko erregelamenduzko garapenaren unera arte, eta Administrazio honetako Kontrol Ekonomikoko Bulegoak egin beharreko ekonomia- eta araudi-kontrola baino lehen egin behar da.

> Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurarena den abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 10.3 artikulua: «Era berean, espedienteak memoria ekonomiko bat edukiko du, eta, hor, egiteko a den arauaren kostuaren zenbatespena azalduko da: gastu eta diru-sarrerak zenbatuta agertuko dira, eta, orobat, herri-administrazioaren aurrekontuetan izango duen eragina, finantzaketa-iturri eta -erak nahiz Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren ekonomia- eta araudi-kontrolaren gaineko arauek zehaztutako beste alderdi batzuk.

Egitekoa den arau horren aplikazioak beste administrazio publiko batzuei, banakoei eta oro har ekonomiari ekarriko dion kostua ere neurtuko du».

30. ARTIKULUA:

«1.- Banakako kirol-jardueretan, atal honetan aurrikusitako arau-hausteak eginez gero, kirolariari kendu egingo zaizkio dena delako kirol-lehiaketako sariak edo dominak, baliogabetu egingo zaizkio emaitzak eta erabateko deskalifikazioa ezarriko zaio dena delako lehiaketa edo proba horretan, edo dena delako lehiaketa edo proba hori sartuta dagoen txapelketetan.
2.- Diziplina-organoek aurreko edo ondoko egunetan egindako proba, lehiaketa edo txapelketei, handik geroago egindakoei edo kirolariaren laginak hartu diren egunean edo arau-haustea egin den egunean egin direnei ere aplikatu ahal izango dizkiete neurri horiek.
3.- Talde-kiroletan, lege honetako 26. artikuluan xedatutakoaren ondorioz dagozkiokeen zehapenak gorabehera, diziplina-organoek adierazi beharko dute ea beren iritziz egokia ote den partiden, proben, lehiaketen edo txapelketen emaitza aldatzea.
Horretarako, egoeraren inguruabarrak haztatuko dituzte, eta orobat, dopina dela-eta atal honetan tipifikatutako arau-hausteak egin dituztenek partidaren, probaren edo lehiaketaren emaitzan izandako parte hartzea erabakiorra izan ote den, eta zer parte hartze izan duten adingabeek jokabide horietan.
4.- Arau-haustearen izaera dela-eta posible denean, ezarritako zehapenekin batera, kirolean dopina eragin duten edo eragin dezaketen gai eta tresna guztiak konfiskatu egingo dira. Zehapena ezartzeko ebazpena dela-eta behin betiko konfiskatu diren gaiak eta tresnak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoari esleituko zaizkio harik eta, erregelamendu bidez, haien behin betiko norakoa ezartzen den arte. Nolanahi ere, hori guztia lege honetako 40. artikuluan kautelazko neurri gisa ezartzekoa den konfiskazioari buruz xedatutakoaren kalterik gabe izango da.»

30. artikuluan, 2. idatzi-zatia aldatu egiten da, eta beste 5. idatzi-zati bat gehitzen da; honela idatzita gelditzen dira:

«2.- Analisiaren emaitza aurkakoa gertatu den lehiaketako kirol-emaitzak automatikoki baliogabetzeaz gainera, baliogabetu egingo dira halaber lagina jaso den egunetik edo dopinaren aurkako beste arau-hauste bat egiten denetik harako gainerako kirol-emaitza guztiak, horrek dakartzan ondorio guztiekin —baita dominak, puntuak eta sariak kentzea ere—, ekitate-arrazoiengatik salbu.»

«5.- Aurretik esandakoak ez zu ezertan eragozten hirugarren kaltedunek beren eskubideak baliatzea eta erantzukizun-akzioak egikaritzea, izandako kalte-galerak konpontzeari begira.»

Proposamen honek Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 10.8 artikulua lege-testura aldatzea dakar. Hala ere, 30.2 artikuluan ondorio zehatzaile bat ezartzen da, baina modulatu egiten da, edo, are gehiago, salbuetsi "ekitate-arrazoiengatik". Ez dakigu zer ekitate-arrazoik eragin dezaketen zehapena ez ezartzea behin arau-haustea egiaztatu eta zehapen-prozedura egokia bideratu ondoren. Horregatik, agindu hau berraztertzeko gomendatu behar dugu, bereziki "ekitate-arrazoiengatik salbu" zatia, eta zerbitzu

sustatzaileari gogorarazi behar diogu zehapen-zuzenbidean jokaera bereziki bermatzailea izan behar dela, eta ahalegindu behar dela argi eta garbi zehazten zer egitate diren arau-haustea, eta zein haien zehapenak, zehaztugabetasun juridikoari tarte irekirik ez uzten ahaleginduta.

31 BIS ARTIKULUA:

Beste artikulu bat eransten da:

> «31 bis artikulua.- Lizentzia eteten den bitarteko estatusa.
> 1.- Lizentzia etenda duen bitartean, ez kirolariak ez beste inork ezingo du parte hartu, inola ere, Dopinaren aurkako Mundu Kodea sinatu duten entitateek edo sinatzaile horietako baten erakunde batek antolatutako ezein lehiaketa edo jardueratan. Debeku horretatik kanpo gelditzen da heziketa-programetan edo errehabilitazio-programetan parte hartzea.
> Debeku horren ondorioz, lizentzia etenda duen pertsonak ezingo du parte hartu entrenamenduetan, erakustaldietan edo antzeko jardueretan, ezta karguak bete edo erantzukizunak izan edo funtzio administratiboak burutu kirol-erakundeetan edo dopinaren aurkako erakundeetan.
> 2.- Lau urtetik gorako etendura-epea ezartzen zaion kirolariak edo pertsonak eskubidea izango du, lau urte igaro eta gero, lehiaz kanpoko kirol-ekitaldietan edo tokiko kirol-ekitaldietan parte hartzeko, baldin eta kirol-modalitate hori arau-haustea egin zuena ez beste bat bada edo harekin erlaziorik ez badu. Parte-hartze hori udal- edo eskualde-mailakoa izango da, ez hortik gorakoa, eta ezin dio zehapena jaso duen **pertsonari** aukerarik eman zuzenean edo zeharka lurralde-esparru handiago bateko txapelketa baterako sailkatzeko; ezin dio aukerarik eman, halaber, kirdari adingabeekin lanean jarduteko.
> 3.- Etendura ezarri zaion kirolariak etendura-epearen azken bi hiletan eskubidea izango du talde batekin berriz ere entrenatzeko edo klub edo kirol-erakunde baten instalazioak erabiltzeko; etendura-epea bi hiletik beherakoa bada, eskubide hori epearen azken laurdenean baliatu ahal izango du.

Artikulu honetan Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 10.12 artikulua jasotzen da, eta bertan kirolari baten lizentzia etetea dakarren zehapena ezartzearen ondorio jakin batzuk zehazten dira.

Artikulu honi emandako idazkerari dagokionez, zalantza bat sortzen da: Dopinaren aurkako Mundu Kodeak "eteten den bitarteko estatusa" aipatzen du, baina ez du zehazten federazio-lizentzia baten etena izan behar duen ala ez; horregatik, Dopinaren aurkako Mundu Kodea kirolariez eta "beste pertsona" batzuez ari da:

> "Etenaldian zehar, **ezein kirolarik edo beste pertsonak** ezingo du inola ere parte hartu ezein lehiaketa edo jardueratan (...)".

Hala ere, Lege Aurreproiektuan "Lizentzia eteten den bitarteko estatusa" aipatzen da, eta, geroago, "kirolariak" aipatzen dira (uste dugu lizentzia dutenez ari dela), hala nola "beste pertsona" batzuk. Hitz batean, ez dago argi 31 bis artikuluan —"Lizentzia eteten den bitarteko estatusa" du izenburu— lizentzia etenda dagoen bitarteko estatusa soilik aipatzen den,

edo, bestela, Dopinaren aurkako Mundu Kodearen kopia izanda, hasierako asmoa ote zen kirolari bati ezarritako edozein zigorren estatusa arautzea. Hori Kiroleko Dopinaren aurkako Legearen esparru subjektiboarekin erlazionatu beharko litzateke, barruan hartzen baititu bai lotura bereziko harreman bati lotutako kirolariak, baina loturarik ez dutenak:

> Kiroleko Dopinaren aurkako Legearen 1.5. artikulua: Legearen aplikazio-eremu subjektibo orokorrak euskal federazio-lizentzia duten kirolari guztiak hartzen ditu bere baitan, unibertsitatekoa zein eskolakoa izan, hau da, Euskal Autonomia Erkidegoan antolatzen diren kirol-lehiaketa ofizialetan parte hartzeko baimena ematen duen federazio-lizentzia dutenak, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoan lehiatzen diren kirolari guztiak ere. Era berean, kirola Euskadin egiten duten pertsona fisiko eta juridiko guztiei ere ezarriko zaie legea, nahiz eta kirol-jarduera hori aldi batez baino ez egin, eta baita kirol-jardueretan parte hartzen duten animalien jabeei ere. Aplikazio-eremu subjektiboa esandakoa izanik ere, kirolari horiek estatuko edo nazioarteko kirol-jardueretan parte hartzen dutenean edo eremu horretako lizentziak ere izateagatik, estatuko eta nazioarteko xedapenak bete beharko dituzte.

Berriz ere esan behar da ez direla beren horretan aldatu behar Dopinaren aurkako Mundu Kodearen zatiak, eta EAEko legearen ezaugarrietara egokitu behar direla.

Azkenik, honako hau zuzendu beharko litzateke 2. idatzi-zatian, gaztelaniaz: "se desarrolla a un nivel en el que **el o la persona sancionada**"; horren ordez, hau jarri beharko litzateke: "se desarrolla a un nivel en el que **la persona sancionada**".

34. ARTIKULUA:

Arau-hausteen eta zehapenen preskribatze-araubidea aldatu egiten da:

> 34. artikulua. Arau-hausteak eta zehapenak preskribatzea.
> 1.- Arau-hauste oso larriak hiru urteren buruan preskribatuko dira, eta larriak bi urteren buruan. Falta oso larriengatik ezarritako zehapenak hiru urteren buruan preskribatuko dira, eta falta larriengatik ezarritakoak bi urteren buruan.
> 2.- Baldin eta, pertsona edo erakunde interesdunaren jakinaren gainean, diziplina- edo zehapen-prozedurari ekiten bazaio, eten egingo da arau-hausteen preskripzioa; nolanahi ere, espedientea, ustezko erantzuleari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik, hilabete baino luzaroago geldirik egoten bada, preskripzio-epea zenbatzen jarraituko da. Aurreko hori gorabehera, preskripzioaren etendurak bere horretan jarraituko du, lege honen 32. artikuluan aurreikusitako kausaren batengatik eten bada; nolanahi ere, preskripzio-epea zenbatzen jarraituko da, legez prozedurari berrekin ahal zaionetik hilabete igaro denean.
> 3.- Era berean, lagundu izanagatik zehapenaren azkentzea eragiten duen prozedura hasten bada, zehapenen preskripzio-epea eten egingo da; nolanahi ere, epea zenbatzen jarraituko da prozedura azkentzerik gabe amaitu eta ebatzi denetik hilabete igaro denean.

Hala, 34. artikulua honela idatzita geratu da:

«34. artikulua.- Arau-hausteak eta zehapenak preskribatzea.
1.- Ezin da dopinaren aurkako arauak hausteagatik prozesurik hasi lege honen mendean dagoen **beste** pertsona baten aurka, prozesua ez bada hasten arau-haustea egiten den egunetik hamar urte igaro baino lehen.
2.- Era berean, laguntzeagatik zehapenaren azkentzea eragiten duen prozedura hasten bada, zehapenen preskripzio-epea eten egingo da; nolanahi ere, epea zenbatzen jarraituko da prozedura azkentzerik gabe amaitu eta ebatzi denetik hilabetea igaro denean.»

34. artikuluan, Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 17. artikulua Kiroleko Dopinaren aurkako Legera aldatzen saiatzen da; artikulu horrek hau dio hitzez hitz:

Ezingo da prozesurik hasi dopinaren aurkako arauak urratzeagatik kirolari edo beste pertsona baten aurka, baldin eta azken horri ez bazaio jakinarazi dopinaren aurkako arauen urraketa 7. artikuluan xedatuaren arabera, edo zentzuzko moduan ahalegindu bada hari jakinarazten aipatutako urraketa egin eta hurrengo hamar urteko epearen barruan.

34. artikuluak preskripzio-epe bakarra ezarri nahi du, arau-haustea edonolakoa izanda ere (oso astuna, astuna edo arina).

Zuzendu egin beharko litzateke 1. idatzi-zatiaren idazkera; izan ere, "kirolari baten aurka" zatia kendu denez, "beste" hori arraroa da, eta 34.1 artikulua ulertzea zailtzen du.

Bestalde, zehapenak preskribatzeko epea kentzen da, baina ez da beste eperik ezartzen. Alde horretatik, esan behar dugu gauza bat dela arau-hausteak preskribatzeko epea, eta beste bat zehapenak preskribatzeko epea. Hortaz, zuzendu egin behar da idatzi-zati hori. Zehapenei dagokienez preskripzio-eperik ezarri ezean, ulertuko genuke ordezko aplikazioa izango luketela Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen zigortzeko ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legean jasotakoek.

37. ARTIKULUA:

Bost idatzi-zati berri (6.etik 10.era bitartekoak) gehitzen dira diziplina-prozeduren alorreko eskumenari buruzko artikuluan, 37.ean.

37. artikulua. Diziplina-prozeduren alorreko eskumena.
1.- Dopinaren alorreko diziplinazko ahala Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-federazioei dagokie, bai eta, erkidego horretan egiten diren kirol-lehiaketetan izaten den parte-hartzea dela-eta lotura bereziko harremana duten gainerako erakundeei ere.
2.- Diziplina-espedienteak izapidetzea eta ebaztea, hasiera batean, arestian aipatutako erakundeetako diziplina-organoei dagokie, haien estatutu eta erregelamenduetan aurreikusitako baldintzetan.
3.- Espedienteak, betiere, bi hileko gehienezko epean ebatzi beharko dituzte kirol-federazioetako diziplina-organoek eta lotura bereziko harremana duten gainerako erakundeek. Laborategiak diziplina-organoari lortutako azken emaitzari buruz ematen dion jakinarazpen fede-emailetik kontatuko da epe hori.

Dena dela, epe hori espedientea ebatzi gabe igarotzen bada, espediente hori edozein izapidetan egonda ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak hartuko du bere gain eskumena, eta hark jarraituko ditu aurreikusitako izapideak, espedientea amaitu eta ebatzi arte. Aurrekoa gorabehera eta espediente jakin batean agertzen diren inguruabarrak direla eta, aurreko paragrafoan aipatzen den epea luzatu ahal izango du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak, baldin eta epea iraungi aurretik inork berariaz eskatzen badu.

4.- Lege honetako aginduak ez betetzea dela-eta egin beharreko diziplina-espedienteak izapidetzea eta ebaztea, baldin eta kirol-federazioetako eta antzeko eginkizunak dituzten erakundeetako zuzendari-karguei eragiten badiete, berriz, Kirol Justiziako Euskal Batzordearen ardura izango da administrazio-auzialdi bakarrean. Prozedura hori bideratuko da kirol-arloan Euskadin indarrean dagoen ordenamendu juridikoan ezarritako arauen arabera eta garapeneko araudiaren arabera.

5.- Dopinaren alorreko diziplina-prozedura, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren esku-hartze fasea barne dela, gehienez ere sei hileko epean amaitu beharko da, prozedurari hasiera emateko erabakia hartzen denetik kontatzen hasita. Paragrafo honetan ezarritako epemuga igaro eta ebazpen adierazirik jakinarazi ez bada, prozedura iraungita geratuko da.

6.- Dopin-kontrolen emaitzak kudeatzeko ardura, hasiera batean, laginak biltzeko lana hasi edo burutu duen dopinaren aurkako erakundearena izango da. Laginik biltzen ez bada, kudeaketa horren ardura izango da arau-hausleari dopinaren aurkako arauak urratu dituela lehendabizikoz jakinarazten dion eta gero arau-haustea arduraz pertsegituko duen dopinaren aurkako erakundearena.

7.- Dopinaren aurkako erakundeen artean gatazkarik sortzen bada, emaitzak kudeatzeko ardura nork duen, Dopinaren aurkako Mundu Agentziak ebatziko du arazoa.»

8.- Laginak biltzeko lana hasi eta burutzen duen dopinaren aurkako erakunde batek beste entitate baten esku uzten badu emaitzak kudeatzeko lana, egiaztatu beharko du eskuordetza jaso duen entitate horren arauak bat datozela Dopinaren aurkako Mundu Kodearekin.»

9.- Kirolariak lokalizatzeko betebeharrak urratzetik eratortzen diren emaitzak kudeatzeko eskumena kirolariak lokalizazio-datuak bidali behar zituen dopinaren aurkako erakundearena izango da.»

10.- Emaitzak kudeatzeko prozedura batean kirolariak atzera egiten badu, prozedura daraman dopinaren aurkako erakundeak eskumena izango du prozedura bururaino eramateko.»

Gehitutako idatzi-zatien edukiak —dopinaren aurkako kontrolen emaitzen kudeaketari eta dopinaren aurkako erakundeen jarduera tik sor daitezkeen gatazkei buruzkoa— ez du lotura zuzenik diziplina-prozedurarekin; izan ere, azken hori 37. artikuluan garatzen da, eta, horregatik, berriz aztertu beharko litzateke artikulu horretan jasotzea. Idatzi-zati hauen bidez, Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 7.1 artikulua jasotzen ahalegintzen da:

7.1 Emaitzak kudeatzeko eskumena.

Hurrengo 7.1.1 eta 7.1.2 artikuluetan xedatuaren arabera izan ezik, emaitzen kudeaketan eta entzunaldiak egiteko prozeduran lagina jasotzeari ekin eta jasotze hori gauzatu duen dopinaren aurkako

erakundearen arauak aplikatuko dira (edo laginik jaso ez bada, dopinaren aurkako arauaren urraketa kirolariari edo beste pertsona bati lehenengoz jakinarazi dion eta gero dopinaren aurkako arauen urraketa arduraz pertsegitzen duen erakundearenak). Emaitzak kudeatzen dituen edo entzunaldiak egiten dituen erakundea edozein izanda ere, artikulu honetan eta 8. artikuluan jasotako printzipioak bete egingo dira, eta kontuan hartuko dira 23.2.2 artikuluan identifikatutako arauak, hitzez hitz jaso behar baitira.
Dopinaren aurkako erakundeen artean gatazkarik sortzen bada, emaitzak kudeatzeko ardura nork duen, Dopinaren aurkako Mundu Agentziak ebatziko du arazoa. Dopinaren aurkako Mundu Agentziaren erabakiaren aurkako errekurtsoa jarri ahal izango du gatazkan nahasitako dopinaren aurkako edozein erakundek Kiroleko Administrazio Auzitegian, erabakia jakinarazi eta zazpi eguneko epean. Kiroleko Administrazio Auzitegiak trabarik gabe aztertuko du errekurtsoa, eta arbitro bakar batek entzungo du.

Gure ustez, artikulu hau ez da bakarrik beren kideez den bezainbatean diziplina-ahalmena duten erakundeei buruzkoa, bai eta zehatzeko administrazio-ahalmena erabiltzeko eskumena duten dopinaren aurkako erakundeei buruzkoa ere.

Gaztelaniaz, akats gramatikal hau zuzendu beharko litzateke: "que notifique primero al infractor **de** la vulneración". Hala ere, esaldia berriz aztertzeko eta idazkera honela hobetzeko gomendatzen dugu: "Laginik biltzen ez bada, kudeaketa horren ardura izango da arau-hausleari dopinaren aurkako arauak urratu dituela **lehendabizikoz** jakinarazten dion eta gero arau-haustea arduraz pertsegitzen duen dopinaren aurkako erakundearena.»

Bestalde, esan daiteke ezen, aldatzen den legea eta legean araututako prozedurak ikusita, ez dela ulertzen 5. idatzi-zatia.

37.10 artikuluan, gaztelaniaz, aditza zuzendu egin beharko da ("se retiran"), pluralean baitago, eta singularrean jarri, subjektua singularra delako.

38 BIS ETA 38 TER ARTIKULUAK:

Azkenik, bi artikulu berri gehitzen dira: "Zehapenak zabaltzea" eta "Dopinaren alorreko ebazpenak berrikustea":

«38 bis artikulua.- Zehapenak zabaltzea.
1.- Dopinaren aurkako araurik urratzearen ondorioz kirolari batek edo beste pertsonaren batek zehapenik jasotzen badu, arau-hauslearen identitatearen jendaurreko zabalkundea egin beharko du emaitzak kudeatzeko lanaren ardura duen dopinaren aurkako erakundeak, hogei eguneko epean zehapena irmoa den egunetik zenbatuta.
2.- Dopinaren aurkako erakundeak arau-haustea nolakoa den jakinarazi behar du, zer kirol-modalitatetan gertatu den, dopinaren aurkako zer araudi urratu den, zein den zehapena jaso duen pertsonaren izena, zer substantzia edo metodo debekatu erabili den eta zer zehapen jarri diren.
3.- Horren guztiaren berri emango da, gutxienez, dopinaren aurkako erakundearen webgunean, eta hilabete batez egongo da ikusgai;

etendura-epea hilabetetik gorakoa bada, epe horretan egongo da ikusgai.
4.- Arau-hauslea adingabea denean ez da egingo artikulu honetan azaldutako zabalkundea.»

38 bis artikuluan jasotako aukera zenbaitetan aztertu du Datuak Babesteko Espainiako Agentziak (455/2010 Txostena, besteak beste), eta ondorioztatu du egingarria dela dopinaren arloan egindako urraketengatik kirolariei jarritako zigorrak Interneten argitaratzea, betiere ere argitaratze hori Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren araberakoa bada. Horretarako, Datuak Babesteko Espainiako Agentziak, aipatu txosten horretan, zabalkunde horretarako baldintza batzuk aipatzen zituen:

- Kirol-federazioen estatutuak aldatu beharko lirateke, aipatu zehapenak Interneten argitaratzea berariaz jasoko duen artikulu bat haietan sartzeko.
- Interesdunari beti jakinarazi beharko zaio aipatu argitaratze hori, 15/1999 Lege Organikoaren 5. artikuluan adierazitako moduan.
- Kirol Kontseilu Gorenak gauzatu beharko luke argitaratze hori, txosten honetako VIII. atalean adierazitakoaren arabera.
- Administrazio-bidean irmoak diren zehapenak soilik argitaratu ahal izango dira, eta argitaratze hori ezingo da lehenago egin.
- Argitaratutakoak arau-hausleari buruzko datuak, kirol-espezialitatea, urratutako agindua, ezarritako zehapena eta, soil-soilik guztiz ezinbestekoa bada, kontsumitutako substantzia edo erabilitako metodoa baino ez ditu jasoko.
- Prozedurak ezarri beharko dira bermatzeko Interneten argitaratutako informazioa ezin dela atzitu edo indexatu bilaketa-tresnen bidez.
- Datuak argitaratu ahal izateko gehieneko epea ezingo da inoiz izan federazio-lizentzia etenda edo kenduta egongo den denbora baino handiagoa.
- Nolanahi ere, 15/1999 Lege Organikoaren aurkakoa da zehapen-arloan eskumena duen administrazio publikoa ez den edozeinek argitaratutako datuen geroagoko tratamendua.

Hortaz, neurri horiek proposatutako artikuluari aplikatuta, zehapena argitaratzeko organo eskuduna zehaztu beharko litzateke. Hartara, lege-mailako agindu batean argitaratzeko aukera berariaz aurreikusita, Datuak Babesteko Lege Organikoaren 11.2 artikuluko salbuespena bete egingo litzateke (lege mailako arau batek babestutako lagapena). Ondorioz, aukera hori berariaz zehazten bada, ez litzateke sartu behar izango federazioen edo kirolarien gainean diziplina-ahalmena duten gainerako kirol-erakundeen estatutuetan, kasu horretarako legezko gaikuntza legokeelako. Gainerako baldintzei dagokienez, gure ustez guztiz aplikagarriak dira, eta komeniko litzateke haiek berariaz aipatzea 38 bis artikulu horretan.

Gainera, proposatutako aginduaren idazkerari dagokionez, berriz aztertu beharko litzateke 3. idatzi-zatiaren idazkera; zehazki, gaztelaniaz, "y" juntagailua, atzetik "dejándola expuesta" gerundioa duela.

Gehitu nahi den beste manua honako hau da:

> «38 ter artikulua.- Dopinaren alorreko ebazpenak berrikustea.
> Dopinaren alorrean ematen diren ebazpenak jurisdikziotik kanpoko bidean berrikusteko eremuak auzian garrantzia duten alderdi guztiak hartuko ditu barnean; alegia, beheragoko instantzian eztabaidatu diren auzietara mugatu gabe.»

38 ter artikulua garrantzi gutxikoa da, manu hori aplikazio orokorreko araua delako Espainiako ordenamendu juridikoan, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 113.3[11] artikuluari jarraikiz. Gainera, proposatutako 38 ter artikuluak ez du betetzen *reformatio in peius* debekatzeko printzipioa, zeina aurreikusita agertzen baita Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen aipatu artikuluan. Printzipio hori zigor-prozesuko defentsa-eskubidearen ondoriozko prozesu-berme bat da —zehapen-prozeduran ere aplikagarria—, eta, gure ustez, araututako gai-alor honetan ere garrantzitsua da. Hala ere, berriz esan behar da ez dela beharrezkoa jasotzea, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 113.3 artikulu osoagoa aplikagarria izateagatik.

- **XEDAPEN IRAGANKORRAK.**

idatzi-zatiaren izena zuzendu beharko litzateke, eta "Xedapen iragankorrak" jarri, bi xedapen aurreikusten direlako, aldekoak ez diren xedapen zehatzaileen atzeraeraginik ezari buruz. Zehazki, aurreikusten da aurreko araudia Legea indarrean jarri aurretik dopinaren alorrean egindako arau-hausteei aplikatuko zaiela, hala nola indarrean jartze hori baino lehen dopinaren errepresioaren alorrean hasitako diziplina-prozedurei. Gainera, erantsitako tarteki batean irekita uzten zaio espedientepean dagoenari, hala nahi badu, arau berriaren edo aurrekoaren aplikazioaz iritzia emateko aukera. Jakina, administratuak aldekoen duen arauaaplikatzeko esango du, baina, gure ustez, tarteki hori ez dator guztiz bat aldekoak ez diren zehapen-xedapenen atzeraeraginik ezaren printzipioarekin (EK-ren 9.3 artikulua); horregatik, idatzi-zati hori bestela adierazi beharko litzateke, ohiko klausula hau erabiliz: "arau berrian xedatua espedientepean daudenentzat aldekoagoa izan ezean" (edo antzeko zerbait).

- **AZKEN XEDAPENA.**

Azkenik, Lege-aurreproiektuak Legea indarrean jartzeari buruzko azken xedapen bat jasotzen du: Legea Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

III- LEGE-AURREPROIEKTUA IZAPIDETZEA.

---

[11] Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 113.3 artikulua: «Errekurtsoa ebatziko duen organoak prozedurako arazo guztiak argituko ditu, bai formazkoak bai edukizkoak, interesdunek alegatutakoak izan ala ez. Interesdunek alegatu ez dituzten arazoen gainean ebazpena eman baino lehen, interesdunen iritzia jasoko da. Nolanahi ere, errekurtso-egileak eskatutakoaren harikoa izango da ebazpena. Ebazpenak ezin du inola ere interesdunaren aurreko egoera okerragotu.»

Lege-aurreproiektua tramitatzeko prozedura Xedapen Orokorrak egiteko Prozeduraren abenduaren 22ko 8/2003 Legeak ezarritakoa izango da.

Arau horrek esaten du, aurreproiektua idatzi eta abiatze-agindua eman duen organoaren oniritzia eskuratu ondoren, egin beharrekoak izango direla negoziazioko, entzunaldiko eta kontsultako tramiteak. Ondorio horietarako, esan behar da 2015eko otsailaren 18ko EHAAn argitaratu zen Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuaren 2015eko otsailaren 6ko Ebazpen bidez, lege-aurreproiektuaren jendaurreko informazio-izapidea egin zela.

Entzunaldiaren barruan, erakunde hauei igorri zaie aurreproiektua: Euskal Kirol Federazioen Batasunari, Arabako Kirol Federazioen Elkarteari, Bizkaiko Kirol Federazioen Elkarteari, Gipuzkoako Kirol Federazioen Elkarteari, Arabako Foru Aldundiari, Bizkaiko Foru Aldundiari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari, Euskadiko Kirol Medikuntza Elkarte-Ekimeri, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietan Lizentziatutakoen Elkarte Ofizialari, Medikuen Elkargo Ofizialari (Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa), Farmazialarien Elkargo Ofizialari (Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa), Albaitarien Elkargo Ofizialari (Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa), Osasun Publikoko Zuzendaritzari, Datuen Babeserako Euskal Agentziari, Dopinaren Aurkako Estatuko Agentziari eta Eusko Jaurlaritzako sail guztiei. Era berean, eta posta elektronikoa erabiliz, Lege-aurreproiektua EAEko kirol-federazioei helarazi zaie. Hori guztia egin da abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 8. eta 9. artikuluak betetzeko.

Aurreproiektua egiteko prozeduran, organo edo erakunde hauen nahitaezko txostenak ere eskatu dira:

- Emakunderen txostena, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 21. artikuluaren arabera, bai eta Gobernu Kontseiluak 2012ko abuztuaren 21ean hartutako Erabakiaren bigarren irizpidearen arabera ere (erabakia genero-eraginaren aurreko ebaluazioa gauzatzeari buruzko jarraibideak onartzekoa eta gizonen eta emakumeen arteko desberdintasunak ekidin eta berdintasuna sustatzeko neurriak hartzeari buruzkoa izan zen).

Proposamenak emakumeen eta gizonen egoeran izan dezakeen eraginari buruzko ebaluazioari dagokionez, honako ohartarazpen hau egin behar da:

Aurreproiektuari gehitutako azalpen-memorian esaten da geroagoko une batean egingo dela litekeen eraginaren ebaluazioa eta, testu artikulatua egin ondoren, azterketa monografiko egokia gauzatuko dela. Era berean, zerbitzu sustatzailek honako hau aurreratzen du: "Ez da aurreikusteko modukoa eragin aipagarririk izatea generoagatik, eta ez da pentsatzen aldaketak egoera diskriminatzaileak bultzatuko dituenik, edo funtsezko eragin desberdina izan dezakeenik gizonen eta emakumeen kolektiboan".

Generoaren araberako eraginaren aurretiko ebaluazioa egiteari eta gizonen eta emakumeen arteko desberdintasunak ekidin eta berdintasuna sustatzeko neurriak gehitzeari buruzko jarraibideetako lehenengoaren 2.1.d) idatzi-zatian aurreikusitako kasuaren barruan sartuko litzateke aztertutako testua. idatzi-zati horren arabera, indarrean dauden arauak

aldatzea xede duten lege-proiektuek ez dute generoaren araberako eragin-txostenik izan behar, aldaketa funtsezkoa izan ezean emakumeen eta gizonen egoeraz den bezainbatean.

Hala ere, uste dugu aldaketak gizonen eta emakumeen arteko berdintasunean eragina duen ala ez, eta, hala egoktuz gero, generoaren araberako eragin-txosten egokia egin behar den ala ez, aztertuta egon beharko zukeela izapidetutako testua aurretiaz onartu baino lehen. Azalpen-memorian ez zatekeen atzeratu behar ebaluazio hori, baizik eta, beharrezkoa izatera, egina egon beharko zuketen generoaren araberako eragin-txostena, hori osatu edo aldatu egin baitaiteke araua egiteko prozesuan aurrera egin ahala.

Hortaz, ulertuz gero ez dela beharrezkoa txostena egiteko beharraren salbuespenetako bat izateagatik lehen aipatu lehendabiziko jarraibidearen 2.1.d) idatzi-zatian oinarrituta, memorian zehaztu beharko zen zergatik pentsatzen den aurreproiektuan proposatutako aldaketa ez dela funtsezkoa emakumeen eta gizonen egoerari dagokionez. Osterantzean, hau da, emakumeen eta gizonen egoerari eragiten dion aldaketa bat balitz, generoaren araberako eragin-txostena egiteko unea, lehentasunez, araua prestatzeko prozeduraren hasierakoa da, eta aurretiazko onarpena baino lehen amaituta egon beharko luke:

> Lehenengo jarraibidea, 5. idatzi-zatia.– «Egiteko prozedura.
> 1) Lehentasunez, etorkizuneko arauaren eta/edo egintzaren (gaia, zertarakoa, esku-hartzeko esparrua, helburu eta neurri nagusiak) zehaztuta daudenean eta testua oraindik idatzi gabe dagoenean (osorik behintzat) hasi beharko da generoaren araberako eraginari buruzko txostena egiten, eta araua edo egintza egiteko prozesuan aurrera egin ahala osatu edo, hala egokituz gero, aldatuz joan beharko da testua. **&&&&&&&&&&&&&&&&**
> 2) Arau juridikoen kasuan, generoaren araberako eraginari buruzko txostena 8/2003 Lege, abenduaren 22ko, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurari buruzkoan, hartako 7. artikuluan aurrekusitako **«aurretiazko onarpena» baino lehentxeago amaituko da idazten**; hau da, informaziorako edo jendaurreko faseei hasiera eman eta nahitaezkoak diren txostenak eta irizpenak egin aurretik.»
>
> Hirugarren jarraibidea: «Azalpen Memoria eta Administrazio Arauaren edo Egintzaren Onarpena.
> 1.– Administrazio-araua edo -egintza onartzeko egindako espedientean, 4/2005 Legeko 19. artikulutik 22ra bitarteko artikuluek ezarritakoa betetzeari dagokionez, egindako izapideen memoria edo azalpen zehatza eta horien emaitzak jaso beharko dira. Azalpen-memoria, aparteko dokumentua izan badaiteke ere, dokumentu gehiegi egon ez dadin, gomendatzen da araua edo egintza egiteko prozeduraren barruan, indarrean dagoen araudiaren arabera, egingo diren memoria orokorretan sartzea.»

- Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza (233/2012 Dekretua, azaroaren 6koa, xedapen orokorrak egiteko prozeduran euskara-erabileraren normalizazioaren ikuspegia txertatzeko araubidea ezartzen duena).

- Kirol Justiziako Euskal Batzordea (Kirol Justiziako Euskal Batzordea sortu eta arautzen duen urriaren 18ko 310/2005 Dekretuaren 3.e artikulua).

Aurreko kontsultak eta txostenak gauzatu ondoren, abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 10. artikuluak arautzen duena betetzeko, prozedura osoaren memoria labur bat eta memoria ekonomiko bat jaso beharko dira espedientean. Horretarako, esan behar dugu ezen, aurkezten den proiektuaren justifikazio-lanaren barruan, memoria ekonomikoa funtsezko agiria dela. Hala berretsi izan dute Estatuko Kontseiluak eta Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak. Alde horretatik, komeni da gogoraraztea zer esan zuen azken horrek 43/1999 Irizpenean:

> "Komeni da hemen adieraztea zer-nolako garrantzi handia eman dion Estatu kontseiluak izapide horri, erregelamenduak egiteko administrazio-prozeduraren baitan Estatuko organo horrek esan du izapide hori funtsezkoa dela arau-ahalmena arbitrariotasunik gabe beteko dela bermatzeko, eta, horrez gain, adierazi du Espainiako Konstituzioko 31.2 artikulua betetzeko bideetako bat dela, azken horrek agintzen baitu gastu publikoak ekitatezko modu batean banatu behar dituela baliabide publikoak, eta gastu horiek programatu eta betetzeko moduak eraginkorrak eta ekonomikoak izan behar dutela".

Aurreko horren antzera, memoria ekonomikoaren garrantzia berretsita, Estatu Kontseiluaren doktrina da honako hau (Irizpena, 1996ko abenduaren 5ekoa, 4.078/96 espedientea):

> "Konstituzioaren 31.2. artikuluak arautzen du gastu publikoak ekonomiaren eta efikaziaren printzipioak bete behar dituela, eta, ondorioz, ez du aukerarik ematen erregelamendu bat onartzeko, baldin eta ez badira behar bezala finkatzen hura beteko dela bermatzeko bitarteko ekonomikoak; halakorik egiten ez bada, Espainiako Konstituzioaren 9.3 artikuluak debekatzen duen jarduera arbitrario bat egingo litzateke, funts juridikorik gabea, eta, ondorioz, kapritxozkoa bailitzateke erregelamendu bat onartzea, baldin eta ezingo bada egiaz aplikatu, nahikoa bitarteko ekonomikorik ez dagoelako arauko xedapenak betetzeko".

Bi irizpen horiek erregelamenduak egiteko prozesuari buruzkoak dira, baina berdin-berdin aplika daitezke legeak egiteko prozesuari. Izan ere, hori arautzen du abenduaren 22ko 8/2003 Legeko 10. artikuluak, eta hori ondorioztatzen da legeen onarpeneko logikari eta garrantziari erreparatuta, beharrezkoa baita haiek aplikatzeko beharrezkoak diren bitarteko ekonomikoak jarri direla egiaztatuko duten agiriak eta azterketak eranstea legeak onartzeko prozesuan. Legea betetzeko behar diren baliabide ekonomikoak jarri direla justifikatzea funtsezkoa da araua bera efikaza eta efektiboa izan dadin.

Espedientea memoria horiekin osatzen denean, organo hauen derrigorrezko txostenak eta irizpenak jaso behar dira:

- Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legearen 26.1 eta 27.1. artikuluek arautzen dutena betetzeko, derrigorrezko kontrol-txostenen bidez fiskalizatu behar dira lege-aurreproiektuak.

Jaurlaritzako Kontseiluak haiek aztertu baino lehenago bete behar da kontrol hori.

- Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko azaroaren 24ko 9/2004 Legearen 3.1.a) artikuluak arautzen duena aintzat hartuta, ezinbestekoa da batzorde horren irizpena jasotzea, arau horrek hau esaten baitu berariaz: "... lege-aurreproiektuak, horien edukia eta helburua direnak direla ere. Badira batzuk, hala ere, ogasuneko eskumena duen saileko titularrak eskatuz gero baino ez dutenak beharko batzordearen txostena; alegia:

  – Baliabideen banaketarako eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontuak finantzatzeko foru-aldundien ekarpenak zehazteko metodologia ezartzen dutenak.
  – Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontuak onartzeari, kreditu gehigarriak emateari, konpromiso-kredituen baldintzak aldatzeari eta Aurrekontuak likidatzeari buruzkoak.

Ondoren, aurreproiektua organo eskudunak onartuko du, eta Eusko Jaurlaritzari helaraziko zaio, azter dezan, eta bilera berean behin betiko onartzea ala ez onartzea erabaki dezan, edo, bestela, zehatz dezan zer irizpide hartu behar diren kontuan behin-betiko idazkeran, eta, hala egokituz gero, zer jarduketa egin behar diren aipatu onarpena gertatu arteko izapidetzean. Azkenik, onartu ondoren, Legebiltzarrera bidaliko da, bidera dezan.

Txosten hau idatzi da, eta zuzenbidean hobeto oinarritutako beste baten mende jarri.

AHOLKULARITZA JURIDIKOA
Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen Zuzendaritza

VIII

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LA EMPRESA
EMPRESAREN INGURUKO ERAGIN TXOSTENA

PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.
KIROLEKO DOPINAREN AURKAKOA LEGEA ALDATZEN DUENA LEGE PROIEKTUA

FIRMADO DIGITALMENTE POR:

Firmante: **AMAIA HERRAN FERNANDEZ**
Fecha de la firma: **05/06/2015 13:24:14**
Validación de la firma: **Correcta**

Firmante: **JOSE ANTONIO CAYERO BILBAO**
Fecha de la firma: **10/06/2015 14:13:06**
Validación de la firma: **Correcta**

INFORME DE IMPACTO EN LA EMPRESA RELATIVO AL ANTEPROYECTO DE LEY SOBRE ADECUACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ANTIDOPAJE AL CÓDIGO MUNCIAL ANTIDOPAJE.

Es objeto de este Informe el Anteproyecto de Ley sobre adecuación de la legislación antidopaje al Código Mundial Antidopaje, el cual se emite en virtud de las atribuciones que el artículo 12.1, e) del Decreto 193/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, atribuye a la Asesoría Jurídica de dicho Departamento, en relación con los artículos 7 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de carácter General y 6 de la Ley 16/2012, de 28 de junio, de Apoyo a las Personas Emprendedoras y a la Pequeña Empresa del País Vasco.

Dispone el artículo 6 de la Ley 16/2012 anteriormente citada, relativo al informe de impacto de empresa, que con carácter previo a cualquier nueva regulación o norma promovida por la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Gobierno Vasco, a través de sus servicios jurídicos, realizará un informe de evaluación del impacto en la constitución, puesta en marcha y funcionamiento de las empresas, cuya emisión será preceptiva en el procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general, y deberá remitirse, en todo caso, al Parlamento con los proyectos de ley.

A estos efectos, conviene traer a colación el artículo 1 de la propia Ley que al fijar el objeto de la misma señala que

> «1.– La presente Ley tiene por objeto la promoción y el fomento de la actividad emprendedora en el ámbito de competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, dentro del marco de la libertad de empresa y de establecimiento y el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que, por razones imperiosas de interés general, pueda establecer la normativa vigente.
>
> 2.– Para el cumplimiento de este objetivo, la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco evitará todas aquellas regulaciones que impongan innecesarios costes burocráticos a las personas emprendedoras, así como legislaciones complejas que supongan barreras que desincentiven la actividad económica.»

Por su parte, el artículo 2 define qué se entiende por actividad emprendedora y por personas emprendedoras que, en términos de su Exposición de Motivos, constituyen el foco principal de la Ley y los actores clave para el desarrollo económico y social de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

> «1.– A los efectos de la presente ley, se entiende por actividad emprendedora el proceso mediante el cual una persona física, una nueva empresa o una empresa ya existente en el mercado inicia una nueva actividad productiva.
>
> 2.– Son personas emprendedoras, a los efectos de esta ley, aquellas personas físicas que, dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco, están realizando los trámites previos para poder desarrollar una actividad económica, con independencia de su forma jurídica, o bien ejerzan alguna actividad como autónomos o autónomas, cooperativistas, socios o socias de microempresas, pequeñas y medianas empresas, sociedades laborales o a través de cualquiera otra fórmula mercantil, y tengan su domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
>
> Asimismo, son emprendedoras a los efectos de esta ley aquellas personas que mantienen y desarrollan un compromiso ético permanente en su actuación, reflejado, entre otros aspectos, en la vinculación al territorio y en el compromiso de mantenimiento de la actividad.
>
> 3.– En lo que se refiere a las microempresas, se considerarán tales las así definidas en la Recomendación 2003/361/CE.»

Según la citada Recomendación, «En la categoría de las PYME, se define a una microempresa como una empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros».

Pues bien, el Anteproyecto de Ley analizado no tiene incidencia alguna en la constitución, puesta en marcha y funcionamiento de las empresas, ya que su objeto es modificar la Ley 12/20102, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte (en adelante, Ley contra el Dopaje), para adaptarla a los nuevos estándares internacionales del Código Mundial Antidopaje que entraron en vigor el pasado 1 de enero de 2015. En concreto, el Anteproyecto de Ley analizado trata de satisfacer los siguientes objetivos fundamentales:

- Trata de incorporar a la Ley vasca los requerimientos derivados de los cambios habidos en el Código Mundial Antidopaje, vigente desde el 1 de enero de 2015, que por mandato de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte deben formar parte del haber jurídico de nuestro Ordenamiento.

- Se pretende reconocer a la Agencia Vasca Antidopaje como el órgano especializado encargado de desarrollar las funciones atribuidas en el artículo 10 de la Ley contra el Dopaje en el Deporte a la Administración Pública del País Vasco.

- Asimismo, pretende también incorporarse a la Ley contra el Dopaje en el Deporte el contenido del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley del País Vasco 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte (BOE nº 99, de 25 de abril de 2013).

El bien jurídico protegido que subyace tanto en la Ley contra el Dopaje como en el ahora Anteproyecto de Ley para su modificación, es el derecho a la protección de la salud (artículo 43 de la CE):

"1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio."

Por tanto, en la Ley contra el Dopaje se diseña todo un sistema y se articulan mecanismos de diversa índole dirigidos a proteger la salud de quienes participan en las actividades deportivas que constituyen el ámbito objetivo de la Ley contra el Dopaje. Asimismo, el Anteproyecto de Ley ahora tramitado se limita a introducir algunas modificaciones en aquella para la consecución de los objetivos antes mencionados. En definitiva, analizadas las modificaciones previstas en el Anteproyecto de Ley sobre adecuación de la legislación antidopaje al Código Mundial Antidopaje, cabe concluir que no tiene incidencia alguna en la constitución, puesta en marcha y funcionamiento de las empresas.

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de junio de 2015.

Asesoría Jurídica

ENPRESAREN GAINEKO ERAGIN-TXOSTENA, DOPINAREN AURKAKO LEGEDIA DOPINAREN AURKAKO MUNDU KODERA EGOKITZEARI BURUZKO LEGE-AURREPROIEKTUARI DAGOKIONA.

Txosten honen xedea dopinaren aurkako legedia Dopinaren aurkako Mundu Kodera egokitzeari buruzko Lege Aurreproiektua da, eta Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen apirilaren 9ko 193/2013 Dekretuaren 12.1 e) artikuluak sail horretako Aholkularitza Juridikoari, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 7. artikuluaz eta Euskadiko ekintzaileei eta enpresa txikiari laguntzeko ekainaren 28ko 16/2012 Legearen 6. artikuluaz den bezainbatean, esleitutako eskumenak betez ematen da.

Lehen aipatu 16/2012 Legearen 6. artikuluak, zeina enpresaren gaineko eragin-txostenari buruzkoa baita, esaten du ezen Eusko Jaurlaritzak, Euskal Autonomia Erkidegoak sustatutako edozein arauketa edo arau berriren aurretik, eta bere zerbitzu juridikoak erabiliz, enpresen eraketa, abiarazte eta funtzionamenduan izandako eraginaren ebaluazio-txostena egingo duela; hori egitea nahitaezkoa izango da xedapen orokorrak egiteko prozeduran, eta betiere Legebiltzarrera igorri beharko da lege-proiektuekin.

Ondorio horietarako, komeni da hizpidera ekartzea lege beraren 1. artikulua, legearen xedea zehaztean hau baitio:

> «1.– Lege honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenen eremuan ekintzailetza-jarduera bultzatzea eta sustatzea, enpresa- eta kokatze-askatasunaren eta zerbitzu-jardueretara eta jarduera horiek gauzatzera askatasunez iristeko esparruaren barruan, eta indarrean dauden arauek, interes orokorreko arrazoi bazterrezinengatik, ezartzen dituzten betebeharrak betetzea eragotzi gabe.
>
> 2.– Helburu hori bete dadin, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak saihestu egingo ditu ekintzaileei behargabeko kostu burokratikoak eragingo dizkieten arauketa guztiak, bai eta jarduera ekonomikoaren sustagarri izan ordez hartarako oztopo diren legeria konplexuak ere.»

Bestalde, 2. artikuluak esaten du zer den ekintzailetza-jarduera, eta zein diren ekintzaileak, zeinak baitira, zioen azalpenaren arabera, legearen oinarri nagusia eta Euskal Autonomia Erkidegoko garapen ekonomiko eta sozialerako eragile nagusiak.

> «1.– Lege honen ondorioetarako, ekintzailetza-jarduera da prozesu bat zeinaren bidez pertsona fisiko batek, enpresa berri batek edo merkatuan lehendik dagoen enpresa batek produkzio-jarduera berri bat hasten baitu.
>
> 2.– Lege honen ondorioetarako, ekintzaileak dira Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan jarduera ekonomiko bat garatu ahal izateko aurretiazko tramiteak egiten ari diren pertsona fisikoak, forma juridikoa edozein izanda ere, edo jardueraren bat betetzen dutenak autonomo gisa, kooperatibista gisa edo mikroenpresetako nahiz enpresa txiki eta ertainetako edo lan-sozietateetako bazkide gisa edo bestelako merkataritza-formula baten bidez, beren helbide fiskala Euskal Autonomia Erkidegoan dutela.

Halaber, lege honen ondorioetarako, ekintzaileak dira euren jardunean etengabeko konpromiso etikoa mantentzen eta garatzen duten pertsonak, besteak beste, lurraldearekiko atxikimenduan eta jarduera mantentzeko konpromisoan islatzen dena.

3.– Mikroenpresei dagokienez, halakotzat joko dira 2003/361/EE Gomendioan definitutakoak.»

Aipatu gomendioaren arabera, «Enpresa txiki eta ertainen kategorian, mikroenpresak 10 langile baino gutxiago dituztenak dira, eta beren urteko negozio-bolumena edo urteko balantze orokorra ez da 2 milioi eurotik gorakoa».

Bada, aztertutako lege-aurreproiektuak ez du inolako eraginik enpresen eraketa, abiarazte eta funtzionamenduan, bere xedea kiroleko dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legea aldatzea baita (aurrerantzean Dopinaren aurkako Legea), 2015eko urtarrilaren 1ean indarrean jarri ziren Dopinaren aurkako Mundu Kodeko nazioarteko estandar berrietara egokitzeko. Zehazki, aztertutako lege-aurreproiektuak funtsezko helburu hauek bete nahi ditu:

- 2015eko urtarrilaren 1etik indarrean dagoen Dopinaren aurkako Mundu Kodean izandako aldaketen ondoriozko errekerimenduak EAEko Legean sartu nahi ditu, gure ordenamenduaren eremu juridikoan egon behar dutelako, Kiroleko Dopinaren aurkako Nazioarteko Konbentzioak aginduta.

- Asmoa da aitortzea Dopinaren aurkako Euskal Agentzia dela Kiroleko Dopinaren aurkako Legearen 10. artikuluan EAEko Administrazio Publikoari esleitutako eginkizunak garatzeko ardura duen organo espezializatua.

- Era berean, Kiroleko Dopinaren aurkako Legean Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Bitariko Lankidetza Batzordearen Akordioaren edukia sartu nahi da, Euskadiko Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legeaz den bezainbatean (2013ko apirilaren 25eko BOE, 99. zk.).

Dopinaren aurkako Legearen azpian nahiz hura aldatzeko oraingo lege-aurreproiektuaren azpian dagoen babestutako ondasun juridikoa osasuna babesteko eskubidea (EK-ren 43. artikulua) da:

"1. Osasuna babesteko eskubidea aitortzen da.

2. Botere publikoei dagokie aurreneurrien bidez eta beharrezkoak diren zerbitzu eta prestazioen bidez osasun publikoa antolatu eta babestea. Horretarako, legeak ezarriko ditu guztion eskubideak eta eginbeharrak.

3. Botere publikoek osasun-hezkuntza, hezkuntza fisikoa eta kirola sustatuko dituzte. Era berean, aisialdiaz behar bezala baliatzen lagunduko dute."

Hortaz, Dopinaren aurkako Legean sistema oso bat diseinatzen da, eta askotariko mekanismoak antolatzen dira, Dopinaren aurkako Legearen xede-esparrua diren kirol-jardueretan parte hartzen dutenen osasuna babesteko. Era berean, orain izapidetutako lege-aurreproiektuak hartan lehen aipatutako helburuak lortzeko aldaketa batzuk sartu besterik ez du egiten. Hitz batean, dopinaren aurkako legedia Dopinaren aurkako Mundu Kodera egokitzeko Lege-aurreproiektuan aurreikusitako aldaketak aztertuta, ondoriozta daiteke ez duela inolako eraginik enpresen eraketa, abiarazte eta funtzionamenduan.

Gasteiz, 2015eko ekainaren 5a.

IX

INFORME DEL IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO / GENEROAREN ARABERAKO ERAGINAREN TXOSTENA

PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.
KIROLEKO DOPINAREN AURKAKOA LEGEA ALDATZEN DUENA LEGE PROIEKTUA

FIRMADO DIGITALMENTE POR:

Firmante: **JON REDONDO LERTXUNDI**
Fecha de la firma: **09/12/2015 11:41:12**
Validación de la firma: **Correcta**

INFORME JUSTIFICATIVO DE LA AUSENCIA DE RELEVANCIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL GÉNERO · DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE NORMA O PROPUESTA DE ACTO ADMINISTRATIVO

1. – Indicar la denominación del proyecto de norma o propuesta de acto administrativo:

Ley sobre adecuación de la legislación antidopaje al Código Mundial Antidopaje

2. – Indicar el Departamento y la Dirección que lo promueve:

Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura/ Dirección de Juventud y Deportes.

3. – Señalar, en su caso, otras normas, planes, etc. relacionados con el proyecto o propuesta:

Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el Deporte

4. – Exponer los objetivos generales del proyecto de norma o propuesta de acto administrativo:

El Parlamento Vasco aprobó la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte, que se basó en los principios comúnmente aceptados por los organismos internacionales más avanzados en la lucha de contra el dopaje en el deporte.
Sin embargo, en la IV Conferencia Mundial Antidopaje que se celebró en Johannesburgo, Sudáfrica, los días 12 a 15 de noviembre de 2013, con asistencia de una representación del propio Gobierno Vasco, se aprobó un nuevo Código Mundial Antidopaje que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2015. Por ello, el anteproyecto que se pretende elaborar responde a la obligación de adecuar la vigente Ley 12/2012, de 21 de junio, al citado nuevo Código Mundial.

La iniciativa normativa viene a garantizar el principio de seguridad jurídica en la medida que se desea crear en el ya complejo ámbito jurídico de la lucha contra el dopaje un entorno de certidumbre y evitar colisiones con el marco jurídico internacional, que demanda una armonización. Tras la aprobación, por la UNESCO, en su sesión de 19 de octubre de 2005, de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, que fue

ratificada por España y publicada en el Boletín Oficial del Estado, dicha Convención Internacional forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno, conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución. Aunque el texto del Código Mundial Antidopaje no forma parte integrante de la Convención, ésta establece expresamente, con miras a coordinar en el plano nacional e internacional las actividades de lucha contra el dopaje en el deporte, la obligación de las legislaciones nacionales de respetar los principios del Código.

Asimismo, debe señalarse que otro de los objetivos de la iniciativa normativa es aprovechar la modificación de la Ley 12/2012 para reconocer expresamente a la Agencia Vasca Antidopaje como encargada de desarrollar las funciones atribuidas en el artículo 10 de la Ley 12/2012 a la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, encarnando la representación de la organización antidopaje en el País Vasco. La Agencia Vasca Antidopaje ya figura expresamente reconocida en el Decreto 193/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional de este Departamento, como un servicio de la Dirección de Juventud y Deportes.

Por último, el texto incorpora el contenido del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley del País Vasco 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte.

JUSTIFICACIÓN DE LA AUSENCIA DE RELEVANCIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL GÉNERO

5. – Indicar los motivos por los que se considera que el proyecto de norma carece de relevancia desde el punto de vista del género:

Fundamento: *Directriz 1º.2.1.d) "Los que tengan como objeto modificar otras normas ya vigentes, a menos que la modificación resulte sustancial por lo que respecta a la situación de mujeres y hombres.*

Las modificaciones consisten en:

- *En la tipificación de las infracciones en materia de dopaje, el nuevo Código mantiene las infracciones del vigente Código de 2009, pero se añaden nuevas conductas penadas.*
- *Se incluye la posibilidad de que las muestras biológicas sean analizadas por laboratorios que no cuenten con la acreditación de la Agencia Mundial Antidopaje, pero sí con su aprobación.*

- *Se modifican las sanciones incrementándose de forma sustancial los periodos de suspensión.*

- *El nuevo Código Mundial Antidopaje establece un nuevo periodo de prescripción de 10 años.*
- *Asimismo, se ha aprovechado la modificación de la Ley 12/2012 para reconocer a la Agencia Vasca Antidopaje, servicio que fue adscrito al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva, como servicio especializado encargado de desarrollar las funciones atribuidas en el artículo 10 de la Ley a la Administración Pública del País Vasco.*
- *Por último, el texto incorpora el contenido del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley del País Vasco 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte.*

Dichas modificaciones no tienen incidencia alguna desde el punto de vista de Género.

Fdo. Jon Redondo Lertxundi
Director de Juventud y Deportes.

II. ERANSKINA

GENEROAREN IKUSPEGITIK GARRANTZIRIK EZ DUELA ARRAZOITZEKO TXOSTENA ARAU-PROIEKTUAREN EDO ADMINISTRAZIO-EGINTZAREN PROPOSAMENAREN DESKRIBAPEN OROKORRA

1.- Aipatu administrazio-egintzaren proposamenaren edo arau-proiektuaren izena:

Dopinaren aurkako legedia Dopinaren aurkako Mundu Kodera egokitzeari buruzko legea

2.- Aipatu zer sailek eta zer zuzendaritzak sustatzen duen:

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila / Gazteria eta Kirol Zuzendaritza.

3. Aipatu, hala balegokio, proiektuarekin edo proposamenarekin zerikusia duten beste arau, plan eta abar batzuk:

12/2012 Legea, ekainaren 21ekoa, Kiroleko Dopinaren aurkakoa

4.- Azaldu administrazio-egintzaren proposamenaren edo arau-proiektuaren helburu orokorrak:

Eusko Legebiltzarrak Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legea onartu zuen 2012. urtean, eta, horretarako, kiroleko dopinaren aurkako borrokan estatuan eta nazioartean aurreratuen dauden erakundeek onartutako printzipioak erabili ziren.
Baina 2013ko azaroaren 12tik 15era Dopinaren aurkako IV. Mundu Konferentzia egin zen Johannesburgen, Hegoafrikan, eta Eusko Jaurlaritzaren ordezkariak ere izan ziren han. Konferentzia hartan, Dopinaren aurkako Mundu Kode berria onartu zen, eta 2015eko urtarrilaren 1ean sartu zen indarrean. Horregatik, egin nahi den aurreproiektuak indarrean dagoen ekainaren 21eko 12/2012 Legea aipatutako Dopinaren aurkako Mundu Kode berrira egokitzeko betebeharrari erantzuten dio.

Arau-ekimenaren helburua da segurtasun-juridikoaren printzipioa bermatzea, dopinaren aurkako borrokan berez oso konplexua den eremu juridikoan ziurtasun-ingurune bat sortu nahi baita, eta talka ez egitea nazioarteko eremu juridikoarekin —harmonizatzea eskatzen du—. UNESCOk, 2005eko urriaren 19an izandako bileran, Kiroleko Dopinaren Aurkako Nazioarteko Konbentzioa onartu zuen.

Eta Espainiak berretsi eta Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zuen, eta nazioarteko konbentzio hori gure ordenamendu juridikoaren atal da, Konstituzioaren 96. artikuluan xedatutakoaren arabera. Nahiz eta Dopinaren aurkako Mundu Kodea ez izan

Konbentzioaren zati bat, konbentzioak espresuki adierazten du estatuetako legediak behartuta daudela kodeko printzipioak errespetatzera, kiroleko dopinaren aurkako borrokarako ekimenak estatuan eta nazioartean koordinatzeari begira.

Halaber, aipatu behar da arau-ekimenaren beste helburuetako bat 12/2012 Legearen aldaketa baliatzea dela Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia berariaz aitortzeko 12/2012 Legeak 10. artikuluan Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrari esleitzen dizkion eginkizunak betetzeko, EAEko dopinaren aurkako borrokaren antolakuntzaren ordezkari izan dadin. Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 193/2013 Dekretuan espresuki aitortuta dago, Gazteria eta Kirol Zuzendaritzaren zerbitzu moduan.

Azkenik, Euskadiko Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legearen arloan Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Bitariko Lankidetza Batzordearen Akordioaren edukia erantsi da testuan.

GENEROAREN IKUSPEGITIK GARRANTZIRIK EZ IZATEAREN JUSTIFIKAZIOA

5.- Adierazi zergatik uste den arau-proiektuak generoaren ikuspegitik ez duela garrantzirik:

Oinarria: *1. jarraibidea 2.1.d) "Indarrean dauden arauak aldatzea xede dutenak, aldaketa funtsezkoa ez bada emakumeen eta gizonen egoerari dagokionez.*

Hauek dira aldaketak:

- *Dopinaren alorreko arau-hausteen tipifikazioan, indarrean dagoen 2009ko Kodeko arau-hausteak atxikitzen ditu Kode berriak, baina, horietaz gainera, jokabide berri batzuk ere zigortzen ditu.*
- *Atea irekitzen zaio lagin biologikoen analisiak egiteko aukerari Dopinaren aurkako Mundu Agentziaren nazioarteko egiaztapena ez duten laborategietan, baldin eta agentzia horren onarpena badute.*
- *Zehapenak aldatu egiten dira, halako moldez non etendura-epeak nabarmen luzatu diren.*

- *Dopinaren aurkako Mundu Kode berriak 10 urteko preskripzio-epea ezartzen du.*
- *Bide batez, 12/2012 Legearen aldaketa baliatu dugu Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia —zeina Eusko Jaurlaritzan kirol arloan eskumena duen sailari atxiki baitzitzaion— Legearen 10. artikuluan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoari esleitzen zaizkion funtzioak gauzatzeko zerbitzu espezializatu gisa aitortzeko.*
- *Azkenik, Euskadiko Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legearen arloan Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Bitariko Lankidetza Batzordearen Akordioaren edukia erantsi da testuan.*

Aldaketa horiek ez dute inolako eraginik generoaren ikuspegitik.

X

INFORME DE EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER / EMAKUNDEAREN TXOSTENA

PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.
KIROLEKO DOPINAREN AURKAKOA LEGEA ALDATZEN DUENA LEGE PROIEKTUA

EMAKUNDE
EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

Erakunde Autonomiaduna EUSKO JAURLARITZA — Organismo Autónomo GOBIERNO VASCO

INFORME RELATIVO AL PROYECTO DE ANTEPROYECO DE LEY SOBRE ADECUACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ANTIDOPAJE AL CÓDIGO MUNDIAL ANTIDOPAJE

Se emite el presente informe de conformidad con lo previsto en el apartado 2.1.a) de la primera de las Directrices sobre la evaluación previa del impacto en función del género y la incorporación de medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres, aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de agosto de 2012.

El objeto del informe es verificar si el proyecto de Ley por el que se adecua la vigente Ley 12/2012, de 21 de junio, de lucha contra el dopaje, al nuevo Código Mundial Antidopaje, carece de relevancia desde el punto de vista del género, de modo que pueda considerarse exento de la realización del Informe de impacto en función del género.

A tal fin, el órgano promotor de la norma ha emitido en los términos previstos en el anexo II a las Directrices, un Informe donde justifica que el proyecto de Ley en cuestión carece de relevancia desde el punto de vista del género. El informe sostiene que la norma tiene como objeto modificar otra norma ya vigente y, que le es de aplicación la excepción prevista en el apartado 2.1.d) de la Directriz Primera.

Efectivamente, las adecuaciones reguladas en el presente Anteproyecto de Ley, como incrementar los periodos de suspensión de las sanciones, establecer un nuevo periodo de prescripción en materia de antidopaje, reconocer a la Agencia Vasca

Antidopaje, como servicio especializado encargado de desarrollar las funciones atribuidas y adscritas al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva en la Ley 12/2012, entre otras, son modificaciones que no resultan sustanciales por lo que respecta a la situación de mujeres y hombres.

Por lo tanto, de conformidad con lo establecido por las Directrices, el Proyecto de Ley estaría exento de acompañarse del Informe de Impacto en Función del Género. De hecho, en los casos como el que nos ocupa, en el que es de aplicación la causa de exclusión prevista en el apartado 2.1.d) de la Directriz Primera, el órgano promotor de la norma puede, dejando constancia de tal circunstancia en el expediente, continuar adelante con la tramitación, sin necesidad de solicitar informe a Emakunde.

Por último, nos gustaría poner en valor la inclusión que se hizo en la Ley 12/2012, de 21 de junio, de lucha contra el dopaje, de las recomendaciones realizadas por Emakunde, además del esfuerzo realizado en el texto del proyecto de Ley para hacer un uso no sexista del lenguaje.

Vitoria-Gasteiz, 22 de diciembre de 2015

FIRMADO DIGITALMENTE POR:

Firmante: **MIREN IZASKUN FERNANDEZ OTEGI**
Fecha de la firma: **23/12/2015 13:33:51**

Validación de la firma: **Correcta**

Firmante: **ANA MARGARITA ACHURRA RODRIGUEZ**
Fecha de la firma: **23/12/2015 12:16:30**

Validación de la firma: **Correcta**

Firmante: **ANA JESUSA ALBERDI ZUBIA**
Fecha de la firma: **28/12/2015 8:30:31**

Validación de la firma: **Correcta**

DOPINAREN AURKAKO LEGEDIA DOPINAREN AURKAKO MUNDU KODE BERRIARI EGOKITZEKO LEGE AURREPROIEKTUARI BURUZKO TXOSTENA

Txosten hau generoaren araberako eragina aurretiaz ebaluatzeko eta emakumeen eta gizonen arteko ezberdintasunak ezabatu eta gizonen eta emakumeen berdintasuna bultzatzeko neurriak hartzeko jarraibideetatik lehenengoaren 2.1.a) atalean ezarritakoari jarraituz egin da (jarraibideak Gobernu Kontseiluaren abuztuaren 21eko Erabaki bidez onartu ziren).

Txostenaren helburua da aztertzea ea Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legea Dopinaren aurkako Mundu Kode berrira egokitzeko lege-proiektuak generoaren ikuspegitik garrantzirik baduen ala ez, erabakitzeko generoaren araberako eraginari buruzko txostena egitetik salbuetsi daitekeen.

Horretarako, araua sustatzen duen organoak, jarraibideen II. eranskinean ezarritako moduan, txosten bat igorri du, eta hartan adierazten da lege-proiektu horrek ez duela garrantzirik generoaren ikuspegitik. Txostenak dio arauaren helburua indarrean dagoen beste arau bat aldatzea dela, eta lehenengo jarraibideko 2.1.d) atalean adierazitako salbuespena aplika dakiokeela.

Eta, izan ere, lege-aurreproiektu horretan araututako egokitzapenak (esate baterako, zigorren etendura-epea luzatzea, dopinaren aurkako arloan preskripzio-epe berri bat ezartzea, eta Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia gaitzea, 12/2012 Legeak Eusko Jaurlaritzako kirol-gaietan eskumena duen sailari ematen eta esleitzen dizkion

eginkizunak egiteko zerbitzu espezializatu moduan) ez dira funtsezkoak emakumeen eta gizonen egoerari dagokionez.

Beraz, eta jarraibideek ezarritakoarekin bat, lege-proiektua salbuetsita legoke generoaren araberako eraginaren txostena eransteko betebeharraz. Eta, izan ere, aztergai dugun kasuetan, lehenengo jarraibideko 2.1.d) atalean adierazitako salbuespena aplika daitekeen kasuetan, araua sustatzen duen organoak izapidearekin aurrera jarrai dezake, Emakunderi txostenik eskatu gabe, espedientean horrela jokatu dela adierazita.

Azkenik, azpimarratu behar da Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legean Emakundek emandako gomendioak sartu zirela, eta, horrez gain, lege-proiektuan ahalegin handia egin dela hizkuntza ez sexista erabiltzeko.

Vitoria-Gasteiz, 2015eko abenduaren 22a

XI

INFORME DE LA DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS/HERRI ADMINISTRAZIOETAN HIZKUNTZA NORMALITZATZEKO ZUZENDARITZAREN TXOSTENA.

PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.
KIROLEKO DOPINAREN AURKAKOA LEGEA ALDATZEN DUENA LEGE PROIEKTUA

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA
Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza
Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
Viceconsejería de Política Lingüística
Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas

FIRMADO DIGITALMENTE POR:

Firmante: **ANGEL LOBERA REVILLA**
Fecha de la firma: **18/02/2015 10:59:04**
Validación de la firma: **Correcta**

Josu Agirre Goitia
Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen zuzendaria
Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila

Jaun hori,

Dopinaren aurkako legedia Dopinaren aurkako Mundu Kodera egokitzeari buruzko Lege Aurreproiektuaren berri jaso genuen Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritzan iragan otsailaren 5ean, euskaraz eta gaztelaniaz, Tramitagune tresna informatikoaren bitartez, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen Zuzendaritza horretatik bidalita, derrigorrezko txostena emateko eskatuz.

Eskaera horri erantzunez, xedapen orokorrak egiteko prozeduran euskararen erabileraren normalizazioaren ikuspegia txertatzeko araubidea ezartzen duen azaroaren 6ko 233/2012 Dekretua, eta Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 193/2013 Dekretuaren 22.l) artikulua oinarri hartuta, txosten hau ematen dut:

a) Hizkuntza arloko araudiaren betetze maila.

Dopinaren aurkako legedia Dopinaren aurkako Mundu Kodera egokitzeari buruzko Lege Aurreproiektua aztertu ondoren, egungo hizkuntza araudia urratzen ez duela adierazten dut.

Bestalde, kontuan harturik Lege Aurreproiektuaren euskarazko eta gaztelaniazko bertsioak daudela, bete da Eusko Jaurlaritzak 2013ko maiatzaren 14an hartutako Erabakian jasotakoa, lege, legegintzako dekretu, dekretu edo agindu izango diren xedapen orokorrak bi hizkuntzetan idazteko neurriak onartu zituena.

b) Euskararen erabileraren normalizazioaren gaineko eragina.

Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutua onartu zuen abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoak 10.36 artikuluan xedatzen duenez, autonomia erkidegoak bakarreko eskumena du kirol arloan.

Eskumen horren babesean onartu zen ekainaren 11ko 14/1998 Legea, Euskadiko Kirolarena. Bere 4.2.q) artikuluaren arabera, autonomia erkidegoko erakunde komunei dagokie dopatzea aurrezaintzea, kontrolatzea eta zigortzea.

Orobat, gerora ekainaren 21eko 12/2012 Legea, Kiroleko Dopinaren aurkakoa, onartu zen.

2013. urtean Dopinaren aurkako IV. Mundu Konferentzia egin zen Hegoafrikan, eta Dopinaren aurkako Kode berria onartu zen. Kode honetara egokitzeko xedez, orain izapidetzen ari den Lege Aurreproiektuaren bidez hainbat aldaketa egingo dira ekainaren 21eko 12/2012 Legean.

Lege Aurreproiektuak artikulu bakarra du, 27 atal bilduz barruan, xedapen iragankorra eta azken xedapena. Aldaketak eragingo ditu ekainaren 21eko 12/2012 Legean, hizkuntzen erabileraren ikuspegitik ondoriorik gabekoak izanik.

Bestalde, moldatuko den ekainaren 21eko 12/2012 Legean badago hizkuntza aipamenik, 13. artikuluaren (Kontrolen bermeak eta legezko ondorioak) zortzigarren paragrafoaren arabera Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak informazio eredu normalizatu bat ezarriko baitu euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez, kontrolak jakinarazteko, dopin kontroletan laginak hartzeko eta hartutako laginak dagokion laborategira bidaltzeko.

Ekainaren 21eko 12/2012 Legearen I. kapituluan xedapen orokorrak jasotzen dira (1-11 artikuluak), II. kapituluan dopin-kontrolak arautzen dira (12-19 artikuluak), III. kapituluan dopinari buruzko diziplinaren eta administrazio-zehapenaren araubidea (20-40 artikuluak), IV. kapituluan prebentzio-neurriak (41-45 artikuluak), V. kapituluan dopinari buruzko datuen araubidea (46-48), eta VI. Kapituluan nazioarteko kirol-federazioak eta nazioarteko eremuan kirol-jarduera arautzen duten gainerako erakundeak (49-52). Azkenik zortzi xedapen gehigarri, bi xedapen iragankor, xedapen indargabetzailea eta bost azken xedapen daude.

Halere, Lege Aurreproiektuak euskararen erabilera normalizatzeari begira eragin hobea izan dezan, proposamen hauek egiten ditugu:

b.1- Aintzat hartu behar dugu ekainaren 21eko 12/2012 Legean jasotakoaren ondorioz pertsona fisikoek eta pertsona juridikoetako ordezkariek harremanak izango dituztela herri administrazioekin, 10.2 artikulu berridatziaren arabera kirol arloan eskumena duen Jaurlaritzako sailari atxikitako Dopinaren aurkako Euskal Agentziarekin, eta Euskadiko kirol federazioekin. Euskararen erabilera arautzen duen azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legeak dio herritarrek euskara eta gaztelania erabil dezaketela, ahoz nahiz idatziz, herri administrazioekiko harremanetan, arreta hizkuntza berean jasotzeko eskubidea barne (5.2.a eta 6.1 artikuluak). Halaber, Euskadiko Kirol Federazioei buruzko urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretuak xedatzen du federazio horiek euskara eta gaztelania erabili behar dituztela (25.1, 65.3, 67.2, 69.3, 165., 166., 167 artikuluak).

Beraz, Lege Aurreproiektuaren bitartez ekainaren 21eko 12/2012 Legean xedapen berria txertatzeko proposatzen dugu, eduki honekin:

-Lege honen ondorioz herri administrazioarekin, Dopinaren aurkako Euskal Agentziarekin eta Euskadiko kirol federazioekin dituzten harremanetan, pertsona fisikoek eta pertsona juridikoetako ordezkariek euskara eta gaztelania, ahoz nahiz idatziz, erabiltzeko eta arreta hizkuntza berean jasotzeko duten eskubidea bermatuko da.

b.2- Zentzu berean, ekainaren 21eko 12/2012 Legearen 8. artikuluan kirolarien eskubide batzuk zerrendatzen dira, eta egokia izango litzateke jasotzea, dopin kontroletan informazioa euskaraz eta gaztelaniaz jasotzeko eskubidea dutela, eta bietako nahi dutena erabili ahal izango dutela.

Beraz, Lege Aurreproiektuaren bitartez ekainaren 21eko 12/2012 Legearen 8. artikuluan idatz zati berria txertatzeko proposatzen dugu, eduki honekin:

-Dopin kontroletan, informazioa euskaraz eta gaztelaniaz jasotzeko, eta nahi duten hizkuntza ofiziala erabiltzeko eskubidea.

b.3- Ekainaren 21eko 12/2012 Legearen 11.1 artikuluan Aholku Batzordea arautzen da, erakunde publiko ezberdinen eta arlo pribatuko ordezkariek osatuta. Batzorde horren osaera anitza ikusita, eta Euskararen erabilera arautzen duen azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legea aintzat hartuta, partaideek nahi duten hizkuntza ofiziala erabiltzeko eskubidea bermatu beharko litzateke.

Beraz, Lege Aurreproiektuaren bitartez ekainaren 21eko 12/2012 Legearen 11.1 artikuluan idatz zati berria txertatzeko proposatzen dugu, eduki hauekin:

-Aholku Batzordeko kideek batzarretan euskara eta gaztelania erabili ahal izango dute, eta biak erabiliko dira deialdietan, gai-zerrendetan, aktetan eta beste idazkietan.

b.4- Ekainaren 21eko 12/2012 Legearen 42. artikuluan kiroleko dopinari buruzko informazio-sistema arautzen da. Bertan adierazten da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak ezarriko duela, kirol agintari, profesional, kirolari eta herritarrei oro har informazioa eskaintzeko xedez. Azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 8. artikulua aintzat hartuta, informazio-sistema horrek euskaraz eta gaztelaniaz eman beharko du informazioa.

Beraz, Lege Aurreproiektuaren bitartez ekainaren 21eko 12/2012 Legearen 42. artikulua osatzeko proposatzen dugu, informazioa euskaraz eta gaztelaniaz eskainiko dela bermatzeko.

Adeitasunez,

Gasteizen, 2015eko otsailaren 11n.

Ángel Lobera Revilla
Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko zuzendaria

Josu Agirre Goitia
Director de Régimen Jurídico y Servicios.
Viceconsejería de Administración y Servicios
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura

Estimado señor:

La Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas recibió el pasado 5 de febrero, a través de la aplicación informática Tramitagune y enviado desde esa Dirección de Régimen Jurídico y Servicios del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, el Anteproyecto de Ley sobre adecuación de la legislación antidopaje al Código Mundial Antidopaje, en euskera y castellano, con el requerimiento de elaboración del informe preceptivo.

En respuesta a dicha petición, y en base a lo establecido en el Decreto 233/2012, de 6 de noviembre, por el que se establece el régimen de inclusión de la perspectiva de normalización del uso del euskera en el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, y en el artículo 22.l) del Decreto 193/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, emito el siguiente informe:

a) Adecuación a la normativa vigente en materia lingüística.

Una vez analizado el Anteproyecto de Ley sobre adecuación de la legislación antidopaje al Código Mundial Antidopaje, declaro que no infringe la normativa vigente en materia lingüística.

Por otro lado, teniendo en cuenta que el Anteproyecto de Ley dispone de versiones en castellano y en euskera, damos por cumplido lo dispuesto en el Acuerdo adoptado por el Gobierno Vasco el 14 de mayo de 2013, mediante el que se aprobaron diversas medidas para la redacción en ambas lenguas oficiales de las disposiciones generales destinadas a convertirse en leyes, decretos de ley, decretos u órdenes.

b) Impacto sobre la normalización del uso del euskera.

La Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía del País Vasco, dispone que la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva en materia de deportes.

Al amparo de dicha competencia, se aprobó la Ley 14/1998, de 11 de junio, de deporte del País Vasco. De acuerdo con el artículo 4.2.q) de la Ley, corresponde a las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma la regulación de la prevención, control y represión del dopaje.

Más tarde, fue aprobada la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte.

En 2013, se celebró en Sudáfrica la IV Conferencia Mundial Antidopaje, donde se aprobó un nuevo Código Antidopaje. A través del anteproyecto de ley que ahora se está

tramitando, se modificarán algunos aspectos de la Ley 12/2012, de 21 de junio, para poder adaptarla al código mencionado.

El Anteproyecto de Ley contiene un único artículo –que a su vez se divide en 27 apartados–, una disposición transitoria y una disposición final. Las modificaciones que se vayan a producir en la Ley 12/2012, de 21 de junio, no tendrán efecto alguno desde el punto de vista del uso lingüístico.

Por otro lado, la Ley 12/2012, de 21 de junio, objeto de modificación contiene referencias al uso de las lenguas, ya que el artículo 13, apartado octavo, señala que la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco establecerá un modelo normalizado de información en euskera, castellano e inglés para la notificación de los controles, para la recogida de las muestras en la realización de los controles de dopaje y para la remisión de las muestras recogidas al correspondiente laboratorio.

El Capítulo I de la Ley 12/2012, de 21 de junio, recoge las disposiciones generales (artículos 1-11), el Capítulo II regula los controles de dopaje (artículos 12-19), el Capítulo III el régimen disciplinario y administrativo sancionador del dopaje (artículos 20-40), el Capítulo IV las medidas de prevención (artículos 41-45), el Capítulo V el régimen de los datos relativos al dopaje (artículos 46-48), y el Capítulo VI las federaciones deportivas internacionales y demás entidades que rigen, en el ámbito internacional, la actividad deportiva (artículos 49-52). Por último, el Anteproyecto contiene ocho disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una derogatoria y cinco disposiciones finales.

Con todo, con el fin de que la nueva norma influya positivamente en la normalización del uso del euskera, formulamos las siguientes propuestas:

b.1- Hay tener en cuenta que a raíz de lo dispuesto en la Ley 12/2012, de 21 de junio, representantes de personas físicas y jurídicas estarán obligados a mantener relaciones con las administraciones públicas, así como con la Agencia Vasca Antidopaje adscrita al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva –según la nueva redacción del artículo 10.2– y con las federaciones deportivas de Euskadi. En este sentido, la Ley Básica 10/1982, de 24 de noviembre, de normalización del uso del euskera establece que la ciudadanía puede utilizar tanto el euskera como el castellano, tanto oralmente como por escrito, en sus relaciones con las administraciones públicas, con derecho a ser atendidos en su idioma de elección (artículos 5.2 y 6.1). Por otro lado, el Decreto 16/2006, de 31 de enero, de las Federaciones Deportivas del País Vasco, establece que dichas federaciones deberán utilizar el euskera y el castellano, las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (artículos 25.1, 65.3, 67.2, 69.3, 165, 166 y 167).

Por lo tanto, proponemos que a traves del anteproyecto de ley se incluya una nueva disposición en el texto de la Ley 12/2012, de 21 de junio, con el siguiente contenido:

> -En las relaciones que, como consecuencia de esta ley, los representantes de personas físicas y jurídicas mantengan con las administraciones públicas, con la Agencia Vasca Antidopaje y con las federaciones deportivas de Euskadi, se

garantizará su derecho a utilizar el euskera o el castellano tanto oralmente como por escrito y a ser atendidos en la lengua de su elección.

b.2- De igual modo, en el artículo 8 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, se recogen diversos derechos que asisten a los y las deportistas, y sería conveniente incluir el derecho a recibir en los controles antidopaje información en euskera y castellano, así como la facultad de utilizar cualquiera de dichos idiomas.

Por lo tanto, proponemos que a traves del anteproyecto de ley se añada un nuevo apartado al artículo 8 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, con el siguiente contenido:

-Derecho a recibir información en euskera y castellano en los controles antidopaje, y a utilizar cualquiera de dichos idiomas oficiales.

b.3- El articulo 11 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, regula el Consejo Consultivo, que está formado por representantes de diversas entidades públicas y representantes del sector privado. Teniendo en cuenta la composición plural del Consejo, y en cumplimiento de la Ley Básica 10/1982 de 24 de noviembre de normalización del uso del euskera, debería garantizarse la libre elección de sus integrantes para usar la lengua oficial que estimen conveniente.

Por lo tanto, proponemos que a través del anteproyecto de ley se añada un nuevo apartado al artículo 11.1 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, con el siguiente contenido:

-Los miembros del Consejo Consultivo podrán utilizar el euskera o el castellano en sus reuniones. Las convocatorias, el orden del día, las actas y demás escritos deberán redactarse en ambos idiomas.

b.4- El artículo 42 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, regula el sistema de información sobre el dopaje en el deporte. En dicho artículo se establece que la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco establecerá un sistema de información acerca del dopaje en el ámbito del deporte dirigido a autoridades deportivas, profesionales, deportistas y ciudadanía en general. A la vista del artículo 8 de la Ley Básica 10/1982 de 24 de noviembre de normalización del uso del euskera, el sistema deberá ofrecer la información en euskera y en castellano.

Por lo tanto, proponemos que a través del anteproyecto de ley se complete la redacción del artículo 42 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, de manera que se garantice que el sistema ofrecerá la información en euskera y en castellano.

Atentamente,

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de febrero de 2015.

Ángel Lobera Revilla
Director de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas

XII

INFORME DE LA AGENCIA VASCA DE PROTECCIÓN DE DATOS
DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOAREN TXOSTENA

PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.
KIROLEKO DOPINAREN AURKAKOA LEGEA ALDATZEN DUENA LEGE PROIEKTUA

Datuak Babesteko
Euskal Bulegoa
Agencia Vasca de
Protección de Datos

IL15-001

INFORME QUE FORMULA LA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS EN RELACION CON EL BORRADOR DE ANTEPROYECTO DE LEY SOBRE ADECUACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ANTIDOPAJE AL CÓDIGO MUNDIAL ANTIDOPAJE.

ANTECEDENTES

Se somete a informe de la Agencia Vasca de Protección de Datos el Anteproyecto de Ley citado en el encabezamiento.

El presente dictamen se formula en virtud de lo previsto en el artículo quinto 3 b) de la Resolución de 28 de noviembre de 2005, del Director de la Agencia Vasca de Protección de Datos por la que se desarrolla la estructura orgánica de la Agencia Vasca de Protección de Datos, en cuya virtud corresponde a la Unidad de Asesoría Jurídica e Inspección de la misma:

> *"Informar todos aquellos proyectos de disposiciones sobre los que, en relación con la protección de datos personales, le sea solicitado informe".*

CONSIDERACIONES

I

Constituye el objeto de la norma proyectada la adecuación de la Ley Vasca 12/2012, de 21 de junio, de lucha contra el dopaje en el Deporte, al nuevo Código Mundial Antidopaje.

La exposición de motivos de la disposición legal proyectada, señala también como objeto de esta Ley reconocer a la Agencia Vasca Antidopaje como el órgano especializado encargado de desarrollar las funciones atribuidas en el artículo 10 de la Ley a la Administración Pública Vasca, actuando como la organización antidopaje del País Vasco. Además, esta norma legal persigue incorporar a la Ley Vasca 12/2012, el contenido del acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con esa Ley.

La Ley proyectada cuenta con un artículo único, de modificación de la Ley 12/2012, de 21 de junio, una disposición transitoria y una final.

II

Este informe realizará el análisis del borrador de anteproyecto de ley desde la estricta perspectiva que es propia a esta Agencia, esto es, su ajuste o no a la normativa de protección de datos de carácter personal, sin incidir en cuestiones de legalidad ordinaria ajenas a esta materia.

La regulación de derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal se contiene, básicamente, en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal (LOPD, en adelante) y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba su reglamento de desarrollo. Esta regulación se completa en el ámbito de la CAPV con la Ley 2/2004 de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, y su normativa de desarrollo.

Procederemos, en consecuencia, a analizar la adecuación del anteproyecto a los principios y garantías del derecho fundamental a la autodeterminación informativa, si bien, con carácter previo, realizaremos unas consideraciones generales sobre la configuración constitucional de este derecho y hablaremos por su relevancia en esta ley, de los datos de salud y del régimen jurídico aplicable al tratamiento de estos datos.

III

Configuración constitucional del derecho fundamental a la autodeterminación informativa

La Constitución de 1978 consagra en su Título I una serie de derechos fundamentales, a los que dota de eficacia jurídica y establece distintos niveles de garantía, a través de instituciones e instrumentos de diferente naturaleza y de diferente alcance. Entre esos derechos, no existe en la CE una referencia expresa al derecho a la protección de datos de carácter personal, pero si contempla el artículo 18.4 que dispone que *"la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos"*.

De ese precepto constitucional deriva el derecho a la protección de datos de carácter personal o derecho a la autodeterminación informativa, que la jurisprudencia constitucional (por todas, la STC 292/2000, de 30 de noviembre), ha consagrado como derecho fundamental y autónomo y que alguna doctrina ha denominado nuevo derecho fundamental del siglo XXI.

Este derecho fundamental a la protección de los datos personales es un concepto cuyo ámbito es más amplio que el derecho a la intimidad. Así lo ha declarado el Tribunal Constitucional en su STC 292/2000:

> *"La protección de datos no se reduce sólo a los datos íntimos de la persona, sino cualquier tipo de datos de carácter personal, sean íntimos o no, cuyo conocimiento o empleo por terceros puede afectar a sus derechos sean o no fundamentales, porque su objeto no es sólo la intimidad individual, que para ello está la protección que el art. 18.1 CE otorga, sino los datos de carácter personal Por consiguiente, también alcanza a aquellos datos personales públicos, que por el hecho de serlo, de ser accesibles al conocimiento de cualquiera, no escapan al poder de disposición del afectado porque así lo garantiza su derecho a la protección de datos. ...Los datos amparados son todos aquellos que identifiquen o permitan la identificación de la persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya una amenaza para el individuo" (FJ 6ª)".*

Debe insistirse en que este derecho no se limita a servir de instrumento de garantía de otros derechos frente al uso torticero de la informática sino que es un derecho

fundamental que goza de sustantividad propia y de autonomía con respecto a todos los demás. Confiere a cada persona el pleno dominio sobre el flujo de informaciones que le conciernen, a protegerse frente a potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad proveniente de un uso ilegítimo del tratamiento automatizado de datos y a reaccionar ante ese tipo de actuaciones. Así, el Tribunal Constitucional viene afirmando *que "se trata, por tanto, de un instituto de garantía de otros derechos, fundamentalmente el honor y la intimidad, pero también de un instituto que es, en sí mismo, un derecho o libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos"* (SSTC 254/1993, FJ 6° y 11/1998, FJ 4° y la más reciente STC 290/2000, FJ 7°).

En consecuencia, este derecho no se confunde con el derecho a la intimidad ya que el nuevo derecho de autodeterminación informativa no queda, así, limitado como aquél a la posibilidad legal de rechazar los ataques e injerencias perpetradas por extraños (sentido negativo) en la vida íntima de las personas, sino que adquiere ahora una nueva dimensión (sentido positivo) consistente en el reconocimiento de la libertad de la persona para poder controlar el acceso, tratamiento y circulación de sus datos personales (habeas data), sean estos íntimos o no.

Así lo ha declarado el TC, en el FD 6ª de la STC 292/2000, al señalar que:

> *"..., el derecho fundamental a la protección de datos persigue garantizar a esa persona un poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y derecho del afectado. .... El derecho a la protección de datos garantiza a los individuos un poder de disposición sobre esos datos. Esta garantía impone a los poderes públicos la prohibición de que se conviertan en fuentes de esa información sin las debidas garantías; y también el deber de prevenir los riesgos que puedan derivarse del acceso o divulgación indebidas de dicha información. Pero ese poder de disposición sobre los propios datos personales nada vale si el afectado desconoce qué datos son los que se poseen por terceros, quiénes los poseen, y con qué fin.*
>
> *De ahí la singularidad del derecho a la protección de datos, pues, por un lado, su objeto es más amplio que el del derecho a la intimidad, ya que el derecho fundamental a la protección de datos extiende su garantía no sólo a la intimidad en su dimensión constitucionalmente protegida por el art. 18.1 CE, sino a lo que en ocasiones este Tribunal ha definido en términos más amplios como esfera de los bienes de la personalidad que pertenecen al ámbito de la vida privada, inextricablemente unidos al respeto de la dignidad personal (STC 170/1987, de 30 de octubre , F. 4), como el derecho al honor, citado expresamente en el art. 18.4 CE, e igualmente, en expresión bien amplia del propio art. 18.4 CE, al pleno ejercicio de los derechos de la persona. El derecho fundamental a la protección de datos amplía la garantía constitucional a aquellos de esos datos que sean relevantes para o tengan incidencia en el ejercicio de cualesquiera derechos de la persona, sean o no derechos constitucionales y sean o no relativos al honor, la ideología, la intimidad personal y familiar a cualquier otro bien constitucionalmente amparado".*

Siguiendo con la configuración que de tal derecho fundamental realiza la misma Sentencia, debe recordarse como la misma declara la existencia de "una segunda peculiaridad" consistente en la atribución a su titular de

> *"... un haz de facultades consistente en diversos poderes jurídicos cuyo ejercicio impone a terceros deberes jurídicos, que no se contienen en el derecho fundamental*

a la intimidad, y que sirven a la capital función que desempeña este derecho fundamental: garantizar a la persona un poder de control sobre sus datos personales, lo que sólo es posible y efectivo imponiendo a terceros los mencionados deberes de hacer. A saber: el derecho a que se requiera el previo consentimiento para la recogida y uso de los datos personales, el derecho a saber y ser informado sobre el destino y uso de esos datos y el derecho a acceder, rectificar y cancelar dichos datos. En definitiva, el poder de disposición sobre los datos personales (STC 254/1993, F. 7)".

El TC, en esta misma STC 290/2000, ha definido el contenido de este derecho fundamental del siguiente modo:

"consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporciona a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el estado o un particular Y ese derecho a consentir el conocimiento y el tratamiento, informático o no, de los datos personales, requiere como complementos indispensables, por un lado, la facultad de saber en todo momento quién dispone de esos datos personales y a qué uso los está sometiendo, y, por otro lado, el poder oponerse a esa posesión y usos. (...)" (FJ 7º)".

Desde una perspectiva diferente, es necesario también tener en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional respecto a las características que debe reunir la Ley (ordinaria) que incide en un derecho fundamental, porque como expresa el Tribunal Constitucional la Ley puede vulnerar el derecho fundamental por haber regulado (o afectado) el haz de facultades que componen el contenido del derecho fundamental prescindiendo de las precisiones y garantías mínimas exigibles a una Ley sometida al insoslayable respeto al contenido esencial del derecho fundamental cuyo ejercicio regula.

Así, la STC 292/2000 de 30 de noviembre, ya citada establece que

"... Los derechos fundamentales pueden ceder, desde luego, ante bienes, e incluso intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que experimenten sea necesario para lograr el fin legítimo previsto, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental restringido (SSTC 57/1994, de 28 de febrero, F. 6; STC 18/1999 de 27 de febrero, F. 2)... De otro lado, aun teniendo un fundamento constitucional y resultando proporcionadas las limitaciones del derecho fundamental establecidas por una Ley (STC 178/1985), éstas pueden vulnerar la Constitución si adolecen de falta de certeza y previsibilidad en los propios límites que imponen y su modo de aplicación...conculcará también esa Ley limitativa si regula los límites de forma tal que hagan impracticable el derecho fundamental afectado o ineficaz la garantía que la Constitución le otorga".

De la misma manera, el Tribunal Constitucional se encarga de establecer las características que debe reunir la Ley que proceda a establecer dichos límites.

Así, la Sentencia 70/2009, de acuerdo con la cual

> *"Según jurisprudencia constitucional consolidada, la ley deberá concretar las restricciones, alejándose de criterios de delimitación imprecisos o extensivos, pues vulnera el derecho fundamental a la intimidad personal el establecimiento de límites de forma tal que hagan impracticable el derecho fundamental afectado o ineficaz la garantía que la Constitución le otorga (STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 11). Como señalábamos en la STC 49/1999, en relación justamente con la protección del derecho fundamental a la intimidad, la injerencia en la misma exige de un modo "inexcusable" una previsión legal que "ha de expresar todos y cada uno de los presupuestos y condiciones de la intervención" (FJ 4); ha de poseer lo que en otras ocasiones hemos denominado cierta "calidad de ley" (SSTC 49/1999, de 5 de abril, FJ 5; 169/2001, de 16 de julio, FJ 6; 184/2003, de 23 de octubre, FJ 2)".*

Quiere decirse con lo que antecede que el consentimiento es el principio general de protección de datos, que puede ser excepcionado cuando así lo prevea una norma con rango formal de ley que cumpla los requisitos que la jurisprudencia constitucional exige para hacer válida la excepción al consentimiento del interesado. Por ello, siendo evidente que, por una parte, el derecho fundamental a la protección de datos no es ilimitado, y, por otra, que la Constitución ha querido que la Ley "y sólo la Ley", pueda fijar los límites al derecho fundamental, no lo es menos que no resulta suficiente con que los límites se contengan en una norma con rango de Ley, sino que es necesario el cumplimiento de otras exigencias respecto al contenido de la Ley que establezca dichos límites porque también conculcará el derecho fundamental la Ley que limita el derecho fundamental de tal forma que lo haga impracticable, o ineficaz la garantía que la Constitución le otorga.

IV
Datos de Salud

Datos de salud y protección de datos de carácter personal

El concepto *"datos de salud"*, *"datos relativos a la salud"* o, últimamente, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD *"datos de carácter personal relacionados con la salud"* viene definido (artículo 5.1 g) del Real Decreto 1720/2007) como *"las informaciones concernientes a la salud pasada, presente y futura, física o mental, de un individuo"*.

Se establece así un concepto amplio de los mencionados datos siguiendo lo señalado en la Memoria Explicativa del Convenio 108 del Consejo de Europa de 28 de enero de 1981 y las recomendaciones adoptadas por el Comité de Ministros de la citada institución así como la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades.

En este sentido, el Considerando 45 del Convenio define los datos de salud como *"las informaciones concernientes a la salud pasada, presente y futura, física o mental de un individuo"*.

De la misma manera, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 6 de noviembre de 2003, establece que:

> *"Es preciso dar una interpretación amplia de la expresión datos de salud, empleada por el artículo 8 apartado 1 de la Directiva 95/46/CE de modo que comprende la*

información relativa a todos los aspectos tanto físicos como psíquicos de la salud de una persona".

Dicha interpretación amplia del concepto es ofrecida también por la Recomendación R (97) 5 de 13 de febrero de 1997, del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre protección de datos médicos, a cuyo tenor se entiende por tales no solo *"todos los datos personales relativos a la salud de un individuo"*, sino también *"a los datos que tengan una clara y estrecha relación con la salud y los datos genéticos".*

Resulta muy clarificador al respecto el Documento de Trabajo sobre el tratamiento de datos personales relativos a la salud en los historiales médicos electrónicos (Documento EP131) elaborado por el Grupo del artículo 29, de acuerdo con el cual

> *"Esta definición (*la de dato relativo a la salud) *también se aplica a los datos personales cuando tienen una relación clara y estrecha con la descripción del estado de salud de una persona... especialmente si están incluidos en un expediente médico. También habrá que considerarse sensibles otros datos, por ejemplo los datos administrativos (número de seguridad social, fecha de ingreso en un hospital, etc....) contenidos en la documentación médica relativa al tratamiento de un paciente; si no fueran pertinentes en el contexto del tratamiento del paciente, no se habrían incluido, ni deberían haberse incluido en un expediente médico".*

De la misma manera se establece en tal documento que

> *"Las disposiciones jurídicas que introducen un sistema de HME debe establecer por norma general el consentimiento previo del paciente para la introducción de datos en un HME o el acceso a tales datos (especialmente por lo que respecta al tratamiento de datos susceptibles de utilizarse de forma perjudicial, como por ejemplo datos psiquiátricos, datos sobre abortos, etc.), y prever la posibilidad de denegación por lo que respecta a datos menos íntimos".*

Para concluir que

> *"Todos los datos contenidos en documentos médicos, en historiales médicos electrónicos y en sistemas de HME son datos personales sensibles. Por tanto no sólo están sujetos a todas las normas generales sobre protección de datos personales de la Directiva, sino también a las normas sobre protección de datos especiales que rigen el tratamiento de la información sensible, contenidas en el artículo 8 de la Directiva".*

Que los datos de salud se encuentran dentro del ámbito protegido por la intimidad personal es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional (últimamente las Sentencias 70/2009 de 23 de marzo y 159/2009 de 26 de junio.)

Dichos datos son también objeto de protección desde la perspectiva del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

Así la Sentencia del Tribunal Constitucional 202/1999, de 8 de noviembre, de acuerdo con la cual

> *"Dicho esto, y teniendo en todo momento presente que la concreta cuestión suscitada en el presente recurso de amparo se refiere a la conformidad con el art. 18 CE del tratamiento y conservación en el preciso soporte informático de los datos atinentes a la salud del trabajador, a que se acaba de hacer referencia, debemos señalar que la realización de dichas actividades prescindiendo del consentimiento expreso del afectado ha de calificarse como una medida inadecuada y*

desproporcionada que conculca por ello el derecho a la intimidad y a la libertad informática del titular de la información.

..., lo verdaderamente relevante es que la medida adoptada por la empresa, sometida a los cánones establecidos para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, no reviste la consideración de solución idónea, necesaria y proporcionada para la consecución del fin , en este caso, el control del absentismo laboral [SSTC 66/1995), fundamento jurídico 5°; 207/1996, fundamento jurídico 4° E) y 69/1999), fundamento jurídico 4°], pues no se trata de medida de suyo ponderada y equilibrada, ya que de ella no se derivan más beneficios o ventajas para el interés general o para el interés empresarial que perjuicios sobre el invocado derecho a la intimidad.

Al respecto, interesa recordar que, en desarrollo de lo previsto en el art. 18.4 CE, en la LORTAD se enuncian, entre otros principios generales de la protección de datos, la congruencia y racionalidad de su utilización, «en cuya virtud ha de mediar una nítida conexión entre la información personal que se recaba y trata informáticamente y el legítimo objetivo para el que se solicita y, en consecuencia, prohíbe tajantemente el uso de los datos para finalidades distintas de las que motivaron su recogida (aps. 1 y 2 del art. 4)» (STC 94/1998, fundamento jurídico 4°), así como su exactitud y puesta al día (art. 4.3). Esta regulación es sustancialmente coincidente con lo dispuesto en los arts. 5 y 7 del Convenio del Consejo de Europa de 28 de enero de 1981, para la protección de personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, ratificado por España mediante Instrumento de 27 de enero de 1984, y en los arts. 6 y ss. de la Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre de 1995), sobre protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Pues bien, en este caso debemos afirmar que el expresado tratamiento informático - con vistas a su conservación- de los datos referidos a la salud de los trabajadores de que tenga conocimiento la empresa quiebra la aludida exigencia de nítida conexión entre la información personal que se recaba y el legítimo objetivo para el que fue solicitada.

Consiguientemente, debemos concluir que el tratamiento y conservación del diagnóstico médico en la mencionada base de datos sin mediar consentimiento expreso del afectado incumple la garantía que para la protección de los derechos fundamentales se contiene en el art. 53 CE".

En el mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 17 de julio de 2008 establece al respecto que

"La protección de datos personales, en concreto de los datos médicos, es de esencial importancia en el disfrute de un individuo del derecho al respeto de su vida privada y familiar, tal y como garantiza el artículo 8 del Convenio. Respetar la confidencialidad de los datos médicos es un principio vital en los sistemas legales de los Estados Contratantes del Convenio. Es crucial, no solo respetar el sentido de la privacidad de un paciente, sino también, preservar su confidencialidad en la profesión médica y en los servicios de salud en general... La legislación interna debe proporcionar las garantías adecuadas para prevenir cualquier tipo de comunicación o revelación sobre los datos personales de salud, ya que se incumplirían las garantías del artículo 8 del Convenio".

También el Tribunal Constitucional ha señalado que tal derecho fundamental no es ilimitado

> *"... y aunque la Constitución no le imponga expresamente límites específicos, ni remita a los Poderes Públicos para su determinación como ha hecho con otros derechos fundamentales, no cabe duda de que han de encontrarlos en los restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, pues así lo exige el principio de unidad de la Constitución (SSTC 11/1981, de 8 de abril, F. 7;, F. 6; y respecto del art. 18, la STC 110/1984, F. 5). Esos límites o bien pueden ser restricciones directas del derecho fundamental mismo, a las que antes se ha aludido, o bien pueden ser restricciones al modo, tiempo o lugar de ejercicio del derecho fundamental. En el primer caso, regular esos límites es una forma de desarrollo del derecho fundamental. En el segundo, los límites que se fijan lo son a la forma concreta en la que cabe ejercer el haz de facultades que compone el contenido del derecho fundamental en cuestión, constituyendo una manera de regular su ejercicio, lo que puede hacer el legislador ordinario a tenor de lo dispuesto en el art. 53.1 CE. La primera constatación que debe hacerse, que no por evidente es menos capital, es que* ***la Constitución ha querido que la Ley, y sólo la Ley, pueda fijar los límites a un derecho fundamental.*** *Los derechos fundamentales pueden ceder, desde luego, ante bienes, e incluso intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que experimenten sea necesario para lograr el fin legítimo previsto, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental restringido" STC 292/200".*

Y ha señalado también la manera en que se puede llevar a cabo dichas limitación

> *"De igual modo, respecto al derecho a la protección de datos personales cabe estimar que* ***la legitimidad constitucional de la restricción de este derecho no puede estar basada, por sí sola, en la actividad de la Administración Pública****. Ni es suficiente que la Ley apodere a ésta para que precise en cada caso sus límites, limitándose a indicar que deberá hacer tal precisión cuando concurra algún derecho o bien constitucionalmente protegido.* ***Es el legislador quien debe determinar cuándo concurre ese bien o derecho que justifica la restricción del derecho a la protección de datos personales y en qué circunstancias puede limitarse y, además, es él quien debe hacerlo mediante reglas precisas que hagan previsible al interesado la imposición de tal limitación y sus consecuencias.*** *Pues en otro caso el legislador habría trasladado a la Administración el desempeño de una función que sólo a él compete en materia de derechos fundamentales en virtud de la reserva de Ley del art. 53.1 CE, esto es, establecer claramente el límite y su regulación.".*

Régimen jurídico de la protección de los datos de salud

El Convenio nº 108 del Consejo de Europa de 28 de enero de 1981 establece en su artículo 6 que

> *"Los datos de carácter personal que revelen el origen racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, así como el tratamiento de los datos de carácter personal relativos a la salud o a la vida sexual, no podrán tratarse automáticamente a menos que el derecho interno prevea garantías apropiadas".*

Debe ser igualmente objeto de cita el Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la

medicina, hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997 y ratificado mediante Instrumento de 23 de julio de 1999 (BOE nº 251 de 20 de octubre de 1999) que constituye el primer instrumento internacional que trata el derecho a la información, el consentimiento informado y la intimidad de la información relativa a la salud de las personas estableciéndose un marco común para la protección de los derechos humanos y la dignidad en el campo de la biología y la medicina, configurándose en su artículo 5 como regla general para una intervención en el ámbito de la sanidad el consentimiento informado de la persona afectada.

El artículo 8.1 de la Directiva 95/46 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre, relativa a la protección de las personas físicas en lo referente al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en cuanto su considerando 33 reconoce que tal tipo de datos relativos a la salud constituyen *"datos que por su naturaleza puedan atentar contra las libertades fundamentales o la intimidad"* establece que

> *"Los Estados miembros prohibirán el tratamiento de datos personales que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, así como el tratamiento de los datos relativos a la salud o a la sexualidad".*

La especial protección conferida a los datos de salud por las normas internacionales y comunitarias tienen reflejo en la LOPD que establece un régimen jurídico específico contenido básicamente en el apartado 3 del artículo 7, artículo dedicado a los *"datos especialmente protegidos"* merecedores del más alto nivel de protección por afectar a los aspectos más íntimos de la personalidad, situándose en un plano en el que confluyen dos derechos fundamentales: el de intimidad y de protección de datos de carácter personal.

De acuerdo con tal apartado.

> *"Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente".*

Dada la incidencia especial de los datos de salud, como datos sensibles, en la esfera íntima del afectado, la LOPD ha establecido una regulación específica y más rigurosa que la establecida con carácter general tanto en lo referente a los supuestos en que será posible el tratamiento de los datos como en lo que atañe a las medidas que habrán de adoptarse para garantizar la seguridad en el tratamiento de los datos, así como el cumplimiento de deberes de confidencialidad y sigilo que deben regir en el mencionado tratamiento, de tal manera que la necesidad de obtener el consentimiento expreso de los titulares de tales datos constituye la regla general para el tratamiento de los mismos.

No obstante, el mismo artículo 7.3 contempla la posibilidad de que dicho tratamiento pueda llevarse a cabo en los supuestos en los que una ley así lo disponga debiendo quedar dicha habilitación fundada en la existencia de razones de interés general.

Conviene profundizar en el significado de la expresión *"...solo...cuando...así lo disponga una ley".*

En tal sentido debiera comenzarse otra vez por la Directiva 95/46/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

De acuerdo con el apartado 4 del artículo 8 de la misma,

> *"Siempre que dispongan las garantías adecuadas los Estados miembros podrán por motivos de interés público importantes establecer otras excepciones además de las previstas en el apartado 2 bien mediante su legislación estatal, bien por decisión de la autoridad de control".*

El Considerando 34 de la Exposición de Motivos de la Directiva 95/46/CE contiene la explicación de dicho precepto. De acuerdo con tal considerando *"se deberá autorizar a los Estados miembros, cuando esté justificado por razones de interés público importante a hacer excepciones a la prohibición de tratar categorías sensibles de datos en sectores como la salud pública y la protección social, particularmente en lo relativo a la garantía de la calidad y la rentabilidad, así como los procedimientos utilizados para resolver las reclamaciones de prestaciones y de servicios en el régimen del seguro de enfermedad, la investigación científica y las estadísticas públicas; que a ellos corresponde no obstante prever las garantías apropiadas y específicas a los fines de proteger los derechos fundamentales y la vida privada de las personas".*

Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre protección de datos del artículo 29, en el documento de trabajo sobre el tratamiento de datos personales relativos a la salud en los historiales médicos electrónicos, ha interpretado también el artículo 8.4 de la Directiva y ha entendido que

> *"En cada caso, el conjunto de tratamientos de datos objeto de excepción deberá presentar un interés público importante para el Estado miembro y dicho tratamiento deberá ser necesario a la luz de tal interés público importante. Este tipo de medidas deben ser proporcionadas es decir no deben existir otras medidas que supongan menos excepciones.*
>
> *Además para que una interferencia con el derecho a la vida privada y familiar sea legítima, deberá ser conforme con el artículo 8 del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y deberá entenderse a la luz de la jurisprudencia de Estrasburgo: debe hacerse de conformidad con la ley y ser necesaria en una sociedad democrática a efectos de un interés público. La jurisprudencia de Estrasburgo ha afirmado en varias ocasiones que la ley que establezca la excepción debe indicar el alcance del poder discrecional conferido a las autoridades competentes y la forma de su ejercicio con la suficiente claridad teniendo en cuenta el objetivo legítimo de la medida en cuestión, a fin de proporcionar al individuo una protección adecuada contra la arbitrariedad".*

El apartado 3 del artículo 8 de dicha Directiva proyecta la anterior previsión a los datos de salud estableciendo que

> *"El apartado 1 no se aplicará cuando el tratamiento de datos resulte necesario para la prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos sea realizado por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional sea en virtud de la legislación nacional, o de las normas establecidas por las autoridades nacionales competentes, o por otra persona sujeta asimismo a una obligación equivalente de secreto".*

El punto 7, apartado primero de la Recomendación R (97) de 13 de febrero de 1997, del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados Miembros sobre Protección de Datos Médicos trata precisamente de la comunicación de este tipo de datos, estableciendo como regla general en cuanto a su comunicación que *"Los datos médicos no se comunicarán salvo en las condiciones establecidas en este capítulo y en el Capítulo 12".*

El apartado tercero de dicho punto, en lo que ahora más puede interesar, contempla dos supuestos en los que es posible la comunicación de dichos datos sin el consentimiento de su titular:

> *"a) cuando la comunicación esté prevista por una Ley y constituya una medida necesaria en una sociedad democrática por:*
>
> *i. razones de salud pública; o*
>
> *ii. la prevención de un peligro real o la represión de un delito específico; o*
>
> *iii. otro interés público importante; o*
>
> *iv. la protección de los derechos y libertades de otros*
>
> *b) cuando la comunicación sea permitida por una Ley con fines de:*
>
> *i. protección del sujeto de los datos o de un pariente en línea genética*
>
> *ii. salvaguarda de intereses vitales del afectado o de una tercera persona; o*
>
> *iii. el cumplimiento de obligaciones contractuales específicas; o*
>
> *iv. el establecimiento, ejercicio o defensa de una reclamación legal".*

El documento WP131 al que se ha hecho referencia más arriba, señala igualmente que

> *"Esta excepción cubre solamente el tratamiento de datos personales para el propósito específico de proporcionar servicios relativos a la salud de carácter preventivo, de diagnóstico, terapéutico o de convalecencia y a efectos de la gestión de estos servicios sanitarios como por ejemplo facturación, contabilidad o estadísticas.*
>
> *No se cubre el tratamiento posterior que no sea necesario para la prestación directa de tales servicios, como la investigación médica, el reembolso de gastos por un seguro de enfermedad, o la interposición de demandas pecuniarias. También queda fuera del alcance de la aplicación del apartado 3 del artículo 8 otros tratamientos en áreas como la salud pública y la protección social, particularmente en lo relativo a la garantía de la calidad y la rentabilidad, así como los procedimientos utilizados para resolver las reclamaciones de prestaciones y de servicios en el régimen de seguro de enfermedad, dado que éstos se mencionan en el considerando 34 de la Directiva como ejemplos para invocar el apartado 4 del artículo 8".*

Dichas previsiones comunitarias son también objeto de transposición por la LOPD.

Así, el artículo 7.6 de dicha Ley Orgánica, de acuerdo con el cual

> *"No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal a que se refieren los apartados 2 y 3 de este artículo cuando dicho tratamiento resulte necesario para la prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios siempre que dicho tratamiento de datos se realice*

por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta asimismo a una obligación equivalente de secreto.

También podrán ser objeto de tratamiento los datos a que se refiere el párrafo anterior cuando el tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del afectado o de otra persona, en el supuesto de que el afectado está física o jurídicamente incapacitado para dar su consentimiento".

Tal precepto ha sido objeto de interpretación por la jurisprudencia y así la Audiencia Nacional, en Sentencia de 31 de mayo de 2002 ha indicado que la excepción prevista en el artículo 7.6 habrá de ser interpretada restrictivamente, considerando que será preciso atender en cada caso concreto a que el tratamiento se dirija efectivamente a la prevención y el diagnóstico. En este sentido, un tratamiento para un fin distinto (en el caso analizado, el control del absentismo laboral) en que estas finalidades puedan ser consideradas "secundarias" no se encontraría amparado por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999.

Más recientemente confirma dicha estricta interpretación la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2009 que casa una anterior de la Audiencia Nacional de 24 de mayo de 2007, y de acuerdo con la cual

"En cuanto a la historia clínica, es cierto que los arts. 14 y siguientes de la Ley de Autonomía del Paciente favorecen "la máxima integración posible de la documentación clínica de cada paciente" a fin de lograr una adecuada asistencia sanitaria. Tal vez ello justifique hablar, como hace la sentencia impugnada, de un principio de unidad de la historia clínica. Dicho esto, es preciso inmediatamente señalar que esa integración de la historia clínica, tendente a evitar la dispersión de la información sanitaria sobre cada paciente, tiene como beneficiario al propio paciente. El inciso inicial del art. 16 de la Ley de Autonomía del Paciente es paladinamente claro a este respecto: "La historia clínica es un instrumento destinado fundamentalmente a garantizar una asistencia adecuada al paciente." Las historias clínicas no deben tener carácter unitario, como pretende la sentencia impugnada, para facilitar su misión a las mutuas de prevención de riesgos laborales, ni menos aún a los empresarios. Ciertamente, permiten prestar una asistencia sanitaria mejor; pero esta mejora no se justifica por el ahorro de esfuerzo para terceros (personal sanitario, Administración, empresarios, etc.), sino por el bienestar del paciente. Este punto es de crucial importancia, porque la información sobre la salud de las personas forma parte del objeto protegido por el derecho fundamental a la intimidad, tal como ha aclarado, entre otras, la sentencia del Tribunal Constitucional 196/2004. De aquí que toda excepción a la confidencialidad que pesa sobre dicha información sólo pueda justificarse por el beneficio que reporte al propio paciente o, en su caso, por ineludibles y superiores exigencias de interés general debidamente ponderadas, que de ningún modo pueden consistir en un funcionamiento más ágil de las mutuas de prevención de riesgos laborales. Tan es así que el art. 18 de la Ley de Autonomía del Paciente sólo confiere el derecho de acceso a la historia clínica al paciente, no a terceros; y el sucesivo art. 19 de ese mismo texto legal obliga a establecer "un mecanismo de custodia activa y diligente de las historias clínicas.
En resumen, en esta materia rige incuestionablemente la máxima confidencialidad posible, sin que haya elemento alguno en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o en la Ley de Autonomía del Paciente que permitan afirmar que la comunicación de datos no consentida llevada a cabo por Fremap estaba autorizada por una ley".

Por otra parte, en el marco de la asistencia sanitaria añade el artículo 8 que "*sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 11 respecto de la cesión, las instituciones y los centros sanitarios públicos y privados y los profesionales correspondientes podrán proceder al tratamiento de los datos de carácter personal relativos a la salud de las personas que a ellos acudan o hayan de ser tratados en los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación estatal o autonómica sobre sanidad*".

En este mismo sentido, recuerda el artículo 10.5 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 que "*no será necesario el consentimiento del interesado para la comunicación de datos personales sobre la salud, incluso a través de medios electrónicos, entre organismos, centros y servicios del Sistema Nacional de Salud cuando se realice para la atención sanitaria de las personas, conforme a lo dispuesto en el Capítulo V de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud*".

Por último, el artículo 11.2 f) de la Ley Orgánica establece la licitud de la cesión de determinados datos relacionados con la salud si la misma es "*necesaria para solucionar una urgencia que requiera acceder a un fichero o para realizar los estudios epidemiológicos en los términos establecidos en la legislación sobre sanidad estatal o autonómica*".

De cuanto se lleva dicho, cabe concluir a juicio de esta Agencia que el artículo 7.3 de la LOPD establece un régimen específico para los datos de salud, de modo que su tratamiento o comunicación podrá llevarse a cabo sin consentimiento del afectado sólo en caso de que una Ley así lo prevea, debiendo quedar esta habilitación fundada en la existencia de razones de interés general.

De manera más rotunda, como hace el reciente Informe de la Agencia Española de Protección de Datos 219/2008 puede decirse que "*la aplicación del artículo 7.3 de la Ley Orgánica de Protección de Datos implica, por mor del principio de especialidad, la imposible aplicación a los datos referidos en el mismo de cualquiera de las causas legitimadoras del tratamiento previstas en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica, quedando limitados los supuestos habilitantes del tratamiento y cesión de estos datos a los establecidos en norma especial o a aquéllos en los que la norma general se refiere expresamente a tales datos*".

En consecuencia, la Ley Orgánica 15/1999 viene a establecer una lista tasada de casos en que será posible el tratamiento de los datos relacionados con la salud, quedando el mismo limitado a los supuestos en que:

- El interesado haya prestado su consentimiento expreso para ello.
- Una norma con rango de Ley así lo prevea, por razones de interés público.
- El tratamiento sea necesario para la prevención o para el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, con las restricciones previstas en el artículo 7.6 de la Ley Orgánica, que deberá además ser objeto de una interpretación restrictiva, en los términos ya señalados.
- El tratamiento sea necesario para atender una urgencia vital.

- El tratamiento se lleve a cabo en el ámbito de la asistencia sanitaria respecto de los pacientes que acudan a los centros sanitarios, en los términos previstos en la legislación sectorial que resulte de aplicación.
- La comunicación de los datos sea precisa para solucionar una urgencia o para realizar los estudios epidemiológicos en los términos previstos en la legislación sectorial.

Esta normativa debe ser completada con la legislación sanitaria implicada. Por tanto, en materia de protección de los datos sanitarios, deberemos prestar la máxima atención a la LOPD y su Reglamento de desarrollo, y a la normativa sanitaria que constituyen el marco normativo básico sobre el tratamiento de los datos de salud, y que complementa las reglas contenidas en la Ley Orgánica 15/1999.

V

Entrando en el análisis del texto sometido a informe, este anteproyecto de ley persigue, tal y como se explicita en el título de la norma, la adecuación de la legislación antidopaje al Código Mundial Antidopaje, para lo que modifica un número importante de preceptos de la Ley Vasca 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte.

Esa Ley contra el Dopaje en el deporte fue informada por esta Agencia en el procedimiento de elaboración de la misma. En dicho informe de legalidad (IL10-010) se realizaron extensas consideraciones sobre la afectación de la ley al derecho fundamental de las personas a su privacidad e intimidad, y sobre los principios y garantías que deben respetarse en el tratamiento de datos personales derivados de las previsiones que la ley contiene. Nos estamos refiriendo al principio de calidad de los datos (art. 4 LOPD); al derecho de información en su recogida (art. 5 LOPD); al consentimiento del afectado (art. 6 LOPD); al tratamiento de los datos especialmente protegidos (art. 7 LOPD); a los datos relativos a la salud (art.8LPD); al deber de secreto (art. 10 LOPD); a la comunicación o cesión de datos (art. 11 LOPD) y al acceso a los datos por cuenta de terceros (art. 12 LOPD).

Sobre estos principios regulados en la LOPD, y desarrollados en el RD 1720/2007, de 21 de diciembre, incidimos en nuestro informe anterior, al que nos remitimos, en aras de evitar inútiles reiteraciones. Ello no obstante, vista la modificación legislativa proyectada, deberemos insistir en este informe en una serie de cuestiones relevantes para la protección del derecho fundamental, especialmente vinculadas con algunos de los principios de la LOPD.

En primer lugar, resulta obligado reiterar una cuestión que a juicio de esta Agencia **no está suficientemente resuelta en la ley, o al menos, no de manera clara,** como es la **delimitación del ámbito subjetivo de aplicación del régimen de control y sanción contra el dopaje**. Del articulado de la ley, en especial de su artículo 1, apartados 5 y 6; artículo 12, apartados 1 y 9 (que ahora se modifica); artículo 21.1 (que también se modifica), y Disposición Adicional Sexta, parece que sería posible aplicar el régimen de control del dopaje a deportistas federados, a quienes participen en competiciones deportivas no federadas (deportistas con licencia escolar; con licencia universitaria o mediante inscripción); y a quienes practiquen actividades deportivas de carácter no competitivo.

Esta cuestión, como ya se apuntó en el Informe IL10-010, es de capital importancia para valorar la compatibilidad de esta ley con los derechos fundamentales de las personas a su privacidad (art. 18.4 CE) y a su intimidad (art. 18.1CE), dado que a juicio de esta Agencia, **una ley que**, al menos hipotéticamente, **permita controles de dopaje a todas las personas (niños y adultos) que practiquen deporte en Euskadi, no superaría el necesario juicio de proporcionalidad** entre la finalidad del control (garantizar el juego limpio y la prevención de la salud de quienes practican algún deporte), y el respeto de los derechos y libertades fundamentales de estas personas.

En este sentido, debe recordarse que el principio de calidad de los datos (art.4.1 LOPD), exige que únicamente se recojan y traten los datos personales que sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan recabado (principio de proporcionalidad). Este principio exige también (art.4.2), que los datos objeto de tratamiento no puedan usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que hubieran sido recogidos (principio de finalidad), y obliga a cancelar los datos cuando dejen de ser necesarios o pertinentes para lograr la finalidad pretendida con su recogida (artículo 4.5). Además, el principio de calidad prohíbe la recogida de datos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos (art. 4.7 LOPD).

Debemos detenernos ahora en el **nuevo artículo 38 bis**, que el anteproyecto que informamos pretende añadir a la Ley 12/2012, de 21 de junio.

> *"Artículo 38 bis.- **Divulgación de sanciones.***
>
> *1.- La identidad de cualquier deportista o persona sancionada por la infracción de alguna norma antidopaje deberá ser divulgada públicamente por la organización antidopaje responsable de la gestión de resultados en el plazo máximo de veinte días desde la firmeza de la sanción.*
>
> *2.- La organización antidopaje deberá divulgar la naturaleza de la infracción, la modalidad deportiva, la normativa antidopaje infringida, el nombre de la persona sancionada, la sustancia o método prohibido empleado en su caso y las sanciones impuestas.*
>
> *3.- La publicación se realizará como mínimo, en el sitio web de la organización antidopaje y dejándola expuesta durante un mes o la duración de cualquier periodo de suspensión, si éste fuese superior.*
>
> *4.- La comunicación obligatoria prevista en este artículo no se realizara cuando la persona sea un menor".*

Este precepto legal contempla la divulgación en internet de las sanciones impuestas en materia de dopaje, y lo hace de manera similar al Código Mundial Antidopaje.

Este Código, es una norma que carece de carácter vinculante directo para los Estados, al ser emanada por la Agencia Mundial Antidopaje, Fundación de Derecho Privado sometida al Derecho Suizo.

Sin embargo, la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte de la UNESCO, una vez ratificada por los Estados, sí goza de carácter obligatorio y alcance universal, como instrumento jurídico internacional que busca la eliminación del dopaje en el deporte, promoviendo su prevención y la lucha contra el mismo. En virtud del artículo 4.1 de la Convención de la UNESCO, aprobado en París el 18 de noviembre de 2005, y ratificado

por el Estado Español en 2006, los Estados Parte se comprometen a respetar los principios del Código Mundial Antidopaje como base de las medidas internas a adoptar en la lucha contra el dopaje, que podrán comprender medidas legislativas, reglamentos, políticas o disposiciones administrativas.

La última versión del Código Mundial Antidopaje ha entrado en vigor recientemente el 1 de enero de 2015, e introduce nuevas infracciones y nuevas sanciones. Además, al mismo tiempo que prevé mayores sanciones por conductas intencionales de dopaje, permite también la aplicación de criterios de flexibilidad para la sanción de conductas en las que concurran circunstancias específicas.

Entre los principios que proclama este Código figuran el de la confidencialidad y comunicación (art. 14 del Código). Este artículo 14 del Código Mundial Antidopaje se refiere a los principios de coordinación de los resultados antidopaje, transparencia pública y responsabilidad y respeto por el derecho a la intimidad de todos los deportistas y demás personas que pueden ser sancionadas.

Dispone el art. 14.1.5 del Código Mundial Antidopaje que las organizaciones a las que esté destinada la información referida a la infracción de las normas antidopaje no podrán revelarla más allá de las personas que deban conocerla hasta que la organización antidopaje responsable de la gestión de resultados haga una divulgación pública o se niegue a hacerla, según lo dispuesto en el art. 14.3.

Ese artículo 14.3 regula la divulgación pública de la identidad de cualquier persona acusada por una organización antidopaje de la comisión de una infracción de alguna norma antidopaje, con un alcance, como decimos, similar al que contempla el proyecto sometido a dictamen.

La divulgación de sanciones en internet es desde la perspectiva de la LOPD, una cesión o comunicación de datos, definida en su artículo 3i) como "*toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado".* Esa divulgación será conforme con la LOPD, sólo si se realiza" *para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado"* (artículo 11.1 LOPD).

Sin embargo, este mismo precepto legal, excepciona del consentimiento, entre otros supuestos, cuando la cesión esté amparada en una norma con rango formal de ley (artículo 11.2 a) LOPD).

También resulta relevante destacar que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, dispone en su artículo 15, que el acceso a información pública que contenga datos especialmente protegidos del art. 7.3 de la LOPD (entre ellos, los datos de salud), o datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conlleven la amonestación pública al infractor, sólo podrá autorizarse con el consentimiento expreso del afectado o si está amparado por una norma con rango de ley. Este límite resulta también aplicable a la publicidad activa a la que están obligadas las Administraciones Públicas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 5.3 de esa Ley 19/2013.

Siendo ello así, y dado que la divulgación pretendida se contempla en un anteproyecto de norma con rango formal de ley, **la publicación en internet de las sanciones en materia antidopaje se encontraría amparada por el artículo 11.2a) de la LOPD**.

Sin embargo, no obviarse que **las medidas** tendentes a lucha contra el dopaje, también las **legislativas, deben respetar los principios básicos, garantías y las limitaciones que la propia LOPD establece para el tratamiento de determinados datos** (datos de salud, datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas).

En este sentido, resulta de sumo interés traer a colación el **criterio del Grupo del artículo 29 de la Directiva 95/46/CE**, en su segundo dictamen 4/2009, sobre la Norma Internacional para la protección de la intimidad y los datos personales de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), y sobre otros aspectos relacionados con la intimidad en el contexto de la lucha contra el dopaje en el deporte por parte del AMA y de las organizaciones naciones antidopaje, adoptado el 6 de abril de 2009, cuando señala que "*esta publicación de los datos personales y, más aún, de datos sobre las infracciones constituye una interferencia con el derecho al respeto a la intimidad y a la protección de los datos personales. Para que esta interferencia sea válida, tiene que ser necesaria para lograr un propósito legítimo específico, lo que implica, entre otros, que tienen que haber un vínculo razonable de proporcionalidad entre las consecuencias de la medida para la persona implicada y este propósito legítimo, y que no debe existir ningún otro medio de alcanzar el mismo propósito que suponga una menor intrusión*".

En este caso, la adecuación del nuevo artículo 38 bis al principio de calidad de los datos del artículo 4 de la LOPD, plantea una serie de cuestiones que resulta obligado apuntar.

Dispone el artículo 38-bis que la identidad de cualquier persona sancionada por la norma antidopaje deberá ser divulgada públicamente en el plazo de 20 días desde la firmeza de la sanción, salvo cuando se trate de un menor. Señala además, que deberá ser objeto de publicación la naturaleza de la infracción, la modalidad deportiva, la normativa antidopaje infringida, el nombre de la persona, la sustancia o método prohibido empleado en su caso, y las sanciones impuestas.

En relación con estas previsiones contenidas en este nuevo artículo 38 bis, ha de tenerse presente que **el Anteproyecto** de Ley remitido modifica el régimen sancionador en materia de dopaje, regulado en el Capítulo III de la Ley 12/2012, para adecuarlo al Código Mundial Antidopaje, y **prevé sanciones que van desde la amonestación hasta la suspensión a perpetuidad de la licencia.**

Uno de los supuestos en que procede la amonestación es cuando el deportista teniendo justificación médica suficiente para disponer de una autorización de uso terapéutico, no la haya solicitado, o haya caducado la vigencia de la anteriormente obtenida y el control arroje un resultado analítico adverso (artículo 24. 4 de la Ley 12/2012, según redacción del anteproyecto).

En este sentido, **no se alcanza a comprender que interés público se persigue con la difusión pública de esa sanción y de la sustancia empleada por ese deportista, cuando existe justificación médica para que se le autorice su uso terapéutico.**

Por ello, y a falta de mayor justificación, **esta Agencia considera que la divulgación de esta información no superaría el juicio de proporcionalidad (artículo 4.1 LOPD),** que exigiría, en todo caso, que la difusión de esa información resulte imprescindible para el cumplimiento de la finalidad que se persigue con la misma.

Resulta obligado insistir en que **los límites al derecho fundamental no sólo deben estar fijados en ley, sino que además es necesario que obedezcan a una**

justificación objetiva y razonada, y someterse a la estricta observancia del principio de proporcionalidad en su triple perspectiva de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto

Por otra parte, y por lo que se refiere al plazo durante el que los datos podrán ser objeto de publicación, dispone el anteproyecto que será de un mes o la duración de cualquier período de suspensión si este fuese mayor.

Si la responsabilidad se extingue, entre otras causas, por cumplimiento de la sanción, que impide que las normas puedan prever efecto adicional de ningún tipo para las y los deportistas que hayan cumplido su sanción (artículo 33.a) de la Ley 12/2012), entiende esta Agencia que **las sanciones ya cumplidas no pueden ser objeto de publicación. Además el principio de calidad de los datos impediría que el plazo de publicación excediese del tiempo de suspensión de la licencia que se haya impuesto al sancionado.**

En otro orden de cosas, ha de tenerse en cuenta que a tenor del artículo 7.5 LOPD "*los datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas sólo podrán ser incluidos en ficheros de las administraciones públicas competentes en los supuestos previstos en las respectivas normas reguladoras*".

Ello implica que **la publicidad de las sanciones debe llevarse a efecto exclusivamente por la administración competente para la imposición de las mismas,** y en ningún caso, por una entidad ajena a la propia Administración. En este caso, la ley proyectada, modifica el artículo 10.2 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, para reforzar el papel de la Agencia Vasca Antidopaje, como órgano especializado encargado de desarrollar las funciones atribuidas por esa Ley a la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, entre ellas, la potestad sancionadora (artículo 10.1 e), asumiendo la condición de organización antidopaje.

En consecuencia, el organismo encargado de la publicación de las sanciones será la Agencia Vasca Antidopaje, que es la única que podrá incluir en sus ficheros los datos referidos a la comisión de esas infracciones.

Dispone también **el anteproyecto** de ley **que la publicación se realizará, "como mínimo", en el sitio web de la organización antidopaje.** De este modo, la ley contiene una especie de habilitación en blanco para que esa organización decida cuantas vías de divulgación de las sanciones estime oportunas. A juicio de esta Agencia, **debe ser la propia Ley la que,** si se estima necesario, **determine cualquier otro medio para hacer pública una información tan sensible.**

En todo caso, **se deberá advertir en la página web** de la Agencia Vasca Antidopaje, **que internet no es una fuente accesible al público, y que la información publicada no podrá ser tratada posteriormente para fines distintos.**

Sería también **aconsejable que la organización antidopaje adoptase las medidas oportunas para evitar la indexación de los datos publicados por los buscadores de internet,** al objeto de que la afectación al derecho fundamental sea la mínima posible.

En otro orden de cosas, y vinculado con el derecho de información en la recogida de los datos (artículo 5 LOPD), sería necesario que **en la notificación a los interesados de las resoluciones sancionadoras por dopaje, se les informe debidamente,** y con todas las

garantías exigidas por el artículo 5 de la LOPD, **que la sanción y el resto de datos** personales que contempla el artículo 38 bis, **una vez que la misma adquiera firmeza, va a ser difundida en internet y por cuanto tiempo.**

Finalmente, y en relación con el principio de seguridad de los datos, regulado en el artículo 9 de la LOPD, y en el Título VIII de su reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, **resulta obligado que todos los laboratorios** que analicen las muestras biológicas **cumplan con las medidas de seguridad necesarias** para evitar cualquier pérdida o extravío de las mismas. En todo caso, quienes realicen tratamientos de datos por cuenta de tercero, deberán adoptar las mismas medidas de seguridad que las impuestas al responsable del fichero, tal y como se desprende de lo previsto en los artículos 9 y 12.2 de la LOPD.

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de marzo de 2015

Iñaki Pariente de Prada
Director de la Agencia Vasca de Protección de Datos

Datuak Babesteko
Euskal Bulegoa
Agencia Vasca de
Protección de Datos

IL15-001

DOPINAREN AURKAKO LEGEDIA DOPINAREN AURKAKO MUNDUKO KODERA EGOKITZEKO LEGE AURREPROIEKTUAREN ZIRRIBORROAREN GAINEAN DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOAK EGINDAKO TXOSTENA.

AURREKARIAK

Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren irizpena eskatu da goiburuan adierazitako lege aurreproiekturako.

Irizpen hau emateko, Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren egitura organikoa garatzeko Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren zuzendariaren 2005eko azaroaren 28ko Ebazpenaren bosgarren artikuluko 3 b) puntuan esleitutako eskumenez baliatu gara. Horren arabera, Bulegoaren Lege Aholkularitza eta Ikuskaritza Atalari dagokio irizpena ematea:

> *"Txostena eskatu den datu pertsonalak babestearekin zerikusia duten xedapen-egitasmo guztien berri ematea".*

KONTUAN HARTZEKOAK

I

Proiektatutako arauaren xedea da Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legea egokitzea Dopinaren Aurkako Munduko Kodera.

Horrez gain, proiektatutako legearen zioen adierazpenak dio Legearen xedea dela Dopinaren Euskal Agentzia izendatzea Legearen 10. artikuluan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoari esleitzen zaizkion funtzioak gauzatzeko organo espezializatu, hau da, Agentzia izatea Euskadiko dopinaren aurkako erakundea. Eta legearen beste helburu bat da Euskadiko Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legean jasotzea Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Bitariko Lankidetza Batzordearen Akordioaren edukia.

Proiektatutako legeak artikulu bakarra du, 12/2012 Legea aldatzen duena; eta xedapen iragankor bat eta azken xedapen bat.

II

Txosten honek lege-aurreproiektuaren zirriborroa aztertuko du, baina Agentziari dagokion ikuspuntutik, hau da, aztertuko du ea ondo ezkontzen den datu pertsonalak babesteari buruzko araudiarekin, eta ez da sartuko datu babesarekin zer ikusirik ez duten bestelako legezkotasun kontuetan.

Datu pertsonalak babesteari buruzko oinarrizko eskubidearen gaineko araudia honako arauetan dago nagusiki: Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Legean (aurrerantzean DBLO) eta 15/1999 Legea garatzen duen Erregelamendua onartzen duen abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuan. EAEn beste arau bat ere badugu, horrez gain: Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legea, eta legea garatzen duen araudia.

Beraz, orain egingo duguna da aztertu ea legearen aurreproiektua ondo ezkontzen den datu pertsonalak babesteari buruzko oinarrizko eskubidearen printzipioekin eta bermeekin. Edozelan ere, beste ezeren aurretik, eskubide honen izaera konstituzionala azalduko dugu eta osasunari buruzko datuez ere arituko gara, garrantzi handia dutelako legean; eta osasun datuei ezarri beharreko lege erregimenaz ere arituko gara.

III

Informazio-autodeterminaziorako oinarrizko eskubidearen konfigurazio konstituzionala

1978ko Konstituzioak oinarrizko hainbat eskubide aitortzen ditu I. Tituluan, eraginkortasun juridikoa ematen die eta horietako bakoitzarentzat bermeak ere ezartzen ditu, izaera eta helmen desberdinetako hainbat erakunde eta tresnaren bidez. Konstituzioko oinarrizko eskubideen artean ez da ageri berariaz datu pertsonalak babesteko eskubidea; baina, 18.4 artikuluak honako hau xedatzen du: "*Legeak informatikaren erabilera mugatuko du, herritarren ohorea, eta norberaren nahiz senitartekoen bizitza pribatua, eta horien guztien eskubideen egikaritza osoa bermatzeko*".

Konstituzioaren agindu hori da datu pertsonalak babesteko eskubidearen edo autodeterminazio informatiborako eskubidearen jatorria, eta jurisprudentzia konstituzionalak (guztiaren ordez: azaroaren 30eko 292/2000 KAE) oinarrizko eskubide eta eskubide autonomo izaera aitortu dizkio. Gainera, doktrina batzuk XXI. mendeko oinarrizko eskubide berria dela ere esan dute.

Datu pertsonalak babesteari buruzko oinarrizko eskubidearen kontzeptuaren esparrua zabalagoa da intimitaterako eskubidearen kontzeptuak harrapatzen duena baino. Konstituzio Auzitegiak ere horixe adierazi zuen 292/2000 KAEn.

> "D*atu babeserako oinarrizko eskubidea ez da bakar-bakarrik pertsonaren datu intimoetara mugatzen, edozein motatako datu pertsonalak hartzen baititu, intimoak izan ala ez, kontuan izanik, hirugarrenek horien berri izanez gero edo horiek erabiliz gero, datuen jabearen eskubideei kalte egin diezaieketela, eskubide horiek oinarrizko eskubideak izan ala ez, bere helburua ez delako bakar-bakarrik norbanakoaren intimitatea, norbanakoen intimitatea babesteko Konstituzioaren 18.1 artikulua baitago, baizik eta datu pertsonalen babesa. Ondorioz, datu pertsonal publikoak ere harrapatzen ditu; izan ere, edonork eskuratzeko modukoak badira ere, ukituak baino ez du haietaz baliatzeko ahalmena, ukituak datu babeserako duen eskubideak horrela izan dadin bermatzen duelako. Horregatik (…), pertsona identifikatzen duten edo identifikagarri egiten duten datu guztiak daude babestuta, hau da, pertsonaren arraza, profil ideologikoa, sexuala, ekonomikoa edo beste edozein profil osatzeko balio duten datuak edo egoera jakin batzuetan norbanakoentzat kaltegarriak izan daitezkeen bestelako helburuetarako erabilgarriak izan daitezkeen datuak (6. O. J.)".*

Berretsi behar da datuen babeserako eskubidea ez dela informatikaren erabilera okerragatik beste eskubide batzuk bermatzeko tresna hutsa. Aitzitik, datuen babeserako eskubideak berezko izatea du eta erabat autonomoa da beste eskubideekiko. Pertsona orori aitortzen dio berari buruzko informazio fluxuaren gaineko erabateko kontrola izatea, datuen tratamendu automatizatu desegokiek pertsonaren duintasunari eta askatasunei ekar diezazkiekeen balizko erasoetatik babesteko eskubidea, eta horrelako gertakarien aurrean erreakzionatzeko eskubidea. Hain zuzen ere, Konstituzio Auzitegiak honakoa esan du besteak beste: *"intimitate eta ohore eskubideak bermatzeaz gain, herritarrek gainontzeko eskubideez ere erabat gozatu daitezen bermatzen duen estatutu izaera duela, eta aldi berean oinarrizko eskubide bat edo askatasun bat ere badela, hau da, tratamendu mekanizatuek pertsonen askatasunaren edo duintasunaren aurka egin ditzaketen erasoen aurrean pertsonok dugun askatasunerako eskubidea ere badela"* (254/1993 KAE, 6. O. J. eta 11/1998 KAE, 4. O. J.; eta oraintsu 290/2000 KAE, 7. O. J.).

Beraz, eskubide hau ez da nahastu behar intimitaterako eskubidearekin, autodeterminazio informatiborako eskubide berriak ez dituelako besteak dituen mugak, adibidez, legeak lagunduta egin behar izatea aurre arrotzek (zentzu negatiboan) pertsonen bizitza intimoan egin ditzaketen esku hartzeei eta erasoei; aitzitik, orain eskubideak beste dimentsio bat bereganatzen du, berria (zentzu positiboa), eta da pertsona guztiei aitortzen zaiela bakoitzak bere datu pertsonalak (habeas data) atzitzeko, tratatzeko eta mugiarazteko agintea eta askatasuna, datuak intimoak izan ala ez.

Hona Konstituzio Auzitegiak adierazitakoa 292/2000 epaian (6. O. J.):

> *"... datu babeserako eskubideak esan nahi duela pertsonei aitortzen zaiela euren datuen gaineko boterea izatea eta datu horiek nola erabili eta zertarako erabili erabakitzeko ere bai, datuen trafiko bidegaberik eta ukituaren duintasunerako kaltegarririk egon ez dadin. ... Datuak babesteko eskubideak bermatu egiten du norbanakoek datu horiek erabiltzeko boterea izatea". Berme horrek, alde batetik, debekatu egiten die botere publikoei datu horien iturri izatea, baldin eta horretarako nahikoa berme ez badute, eta bestetik, derrigortu egiten ditu arriskuei aurrea hartzera, gerta daitekeelako informazio hori behar ez bezala erabiltzeagatik informazioa bidegabe atzitzea edo zabaltzea. Baina norbera norbere datu pertsonalez baliatu ahal izateko boterea edukitzea alferrik da, ukituak ez baldin badaki zeintzuk datu dauzkaten hirugarrenek, nork dauzkan eta zertarako.*
>
> *Horrexegatik da hain berezia datuak babesteko eskubidea; batetik, intimitaterako eskubideak baino xede-objektu zabalagoa duelako; eta, bestetik, Konstituzioaren 18.1 artikuluaren babes eremuan dagoen intimitaterako eskubideaz gain, Konstituzio Auzitegiak modu zabalagoan definitu duen bizitza pribatuaren eremukoak diren nortasunaren ondasunen esparruko beste eskubide batzuk ere, duintasun pertsonalaren errespetuari hertsiki lotutakoak, estaltzen dituelako bere bermeak (urriaren 30eko 170/1987 KAE , 4. oinarri juridikoa), adibidez, ohorerako eskubidea. Eskubide hori Konstituzioaren 18.4 artikuluan dago jasota; eta artikulu hori ahalik eta modurik zabalean interpretatuz gero, pertsonaren eskubide guztiak baliatzeko eskubidea ere bada. Datu babeserako oinarrizko eskubidearen konstituzio bermea zabaldu egiten da eta pertsonen edozein eskubide baliatzeko orduan garrantzia duten edo eragina duten datuak ere hartzen ditu bere baitan, eskubideak konstituzionalak izan ala ez edo ohoreari, ideologiari, norberaren nahiz senitartekoen intimitateari edo konstituzioak babestutako beste edozein ondasun izan".*

Epai horrek berak datu babeserako oinarrizko eskubidea nola eratzen duen ikusita, gogora ekarri behar dugu esaten duela eskubideak baduela "beste berezitasun bat" eta zera dela:

> *".... hainbat botere juridikoz osatutako halako ahal multzo bat; eta ahal multzo horretaz baliatzeak intimitaterako oinarrizko eskubideak ez dituen hainbat betebehar juridiko agintzen dizkie hirugarrenei, oinarrizko eskubide horrek duen aparteko eginkizunerako baliagarri direnak: eskubide horri esker, norbanakoak bere datu pertsonalak kontrolatzeko boterea izatea bermatzen da, eta hori eraginkortasunez egiteko modu bakarra hirugarrenei betebehar hori jartzea da. Hau da, titularrari aitortzen dizkio bere datuak bildu eta erabili ahal izateko adostasuna adierazteko eskubidea, eta datu horien destinoa zein den eta zertarako erabiliko diren jakiteko eta informazioa jasotzeko eskubidea, eta datuok atzitu, zuzendu eta ezerezteko eskubidea. Azken finean, pertsonek datu pertsonalen gaineko boterea izatea (254/1993 KAE, 7. oinarri juridikoa)".*

290/2000 KAEn oinarrizko eskubide honen edukia ere zehaztu du Konstituzio Auzitegiak, hau da, datuak babesteko eskubideak...

> *"... datuen gaineko boterea edukitzea dakar, eta datu horien gainean erabakiak hartzeko gaitasuna, eta gaitasun horrek ahalmena ematen dio pertsonari honakoak erabakitzeko: ea datu horietatik zeintzuk eman nahi dizkion hirugarren bati, dela Estatua dela partikular bat, eta ea hirugarren horrek datu horietatik zeintzuk bildu ditzakeen; horrez gain, ahalmena ematen dio jakiteko ea datu pertsonal horiek nork dauzkan eta zertarako, eta bere datu pertsonalak inork edukitzearen edo inork erabiltzearen aurka agertzeko ahalmena ere ematen dio. Norberaren datu pertsonalak kontrolatzeko eta horien gaineko erabakiak hartzeko boterea datu babeserako oinarrizko zuzenbidearen edukiaren zati bat da eta botere hori honako gaitasun hauek gauzatzen dute juridikoki: datu pertsonalak biltzeko, eskuratzeko eta atzitzeko adostasuna adierazteko gaitasunak, geroago datu horiekin egiten diren biltegiratzeen eta tratamenduen gaineko adostasuna adierazteko gaitasunak eta hirugarren batek, dela Estatuak dela partikular batek, datu horiekin egin dezakeen edo ditzakeen erabileraren edo erabileren gaineko adostasuna adierazteko gaitasunak. Beraz, ukituak berari buruzko datuak bildu eta erabiltzeko adostasuna emateko eta datu horien berri izateko eskubideak ditu, eta badirudi eskubide horiek datu babeserako oinarrizko eskubidearen berezko osagaiak direla. (…)" (7. oinarri juridikoa).*

Baina, beste ikuspegi batetik ere aztertu behar da auzia. Esate baterako, doktrina konstituzionalak dio zein ezaugarri izan behar dituen oinarrizko eskubide batean eragina duen legeak (lege arruntak); izan ere, Konstituzio Auzitegiak baitio legeak oinarrizko eskubidea urra dezakeela, baldin eta oinarrizko eskubideen edukia osatzen duen ahal multzoa arautzean (edo ukitzean) kontuan ez badu hartzen legeak izan behar dituen gutxieneko zehaztasunak edo bermeak, lege horrek arautzen duen oinarrizko eskubideari zor zaion errespetuari dagokionez.

Hona, horrekin lotuta azaroaren 30eko 292/2000 KAEk dioena:

> *"(...) Oinarrizko eskubideek amore eman behar dute konstituzioaren arabera garrantzi handiko ondasunak edo interesak badaude tartean, baldin eta eskubideari egiten zaion murrizketa beharrezkoa bada aurreikusitako helburua erdiesteko, proportzionala bada, eta murrizten den oinarrizko eskubidearen funtsezko edukia errespetatu behar du behintzat (otsailaren 28ko 57/1994 KAE , 6. oinarria; otsailaren 22ko 18/1999, 2. oinarria). Era berean, lege batek oinarrizko eskubide bati ezarritako mugak Konstituzioan oinarrituta badaude ere eta proportzionalak badira ere,(178/1985 KAE), gerta daiteke Konstituzioa bera urratzea mugak behar bezain*

zehatzak ez badira eta aplikatzeko baino lausoagoak badira... Horretaz gain, dena delako lege horrek Konstituzioa urratuko du, baldin eta eskubidea baliatzea ezinezkoa egiteko moduan finkatzen baditu mugak edo Konstituzioaren bermea baliogabetzeko moduan".

Konstituzio Auzitegiak berak esaten du zein diren mugak ezarri behar dituen legeak bete behar dituen ezaugarriak.

Hona, horren haritik 70/2009 Epaiak dioena:

"Berretsitako doktrina konstituzionalaren arabera, legeak zehaztu beharko ditu murrizketak, eta murrizketa-irizpide lausoak eta zehaztu gabeak alde batera utzi beharko ditu; izan ere, intimitate pertsonalerako eskubidea urratzen baita legeak eskubidea baliatzea ezinezkoa egiteko moduan finkatzen baditu mugak edo Konstituzioaren bermea baliogabetzeko moduan (azaroaren 30eko 292/2000 KAE, 11. oinarri juridikoa). Intimitaterako oinarrizko eskubidea babesteari buruz 49/1999 KAEn esaten genuenez, eskubide horretan ***esku hartu ahal izateko****, "nahitaezkoa"* ***da esku hartzea egiteko kasuei buruzko eta esku hartzeko baldintzei buruzko "lege-aurreikuspenak egotea (4. oinarri juridikoa); eta, horrez gain, nolabaiteko "lege izaera" ere eduki behar du*** *(apirilaren 5eko 49/1999 KAE, 5. oinarri juridikoa; uztailaren 16ko 169/2001 KAE, 6. oinarri juridikoa; eta urriaren 28ko 184/2003, 2. oinarri juridikoa)".*

Horrekin guztiarekin adierazi nahi dena da datu babesaren arloan printzipio nagusietako bat den adostasunak salbuespenak izan ditzakeela lege izaera duen arau batek halakorik xedatzen badu, eta lege horrek betetzen baditu doktrina konstituzionalak agintzen dituen betekizunak interesdunaren adostasunaren beharra jada beharrezkoa ez izateko. Hori dela eta, argi dago, alde batetik, datuak babesteko eskubidea ez dela erabateko edo mugarik gabeko eskubidea; eta, bestetik, Konstituzioak nahi izan duela lege bidez, eta lege bidez baino ez, jartzea mugak oinarrizko eskubide horri; eta, ez hori bakarrik: lege bidez murriztu ahal izateaz gain, konstituzioak dio murrizketak ezartzen dituen legearen edukiak beste baldintza batzuk ere bete behar dituela; izan ere, gerta baitaiteke oinarrizko eskubidea bera murrizteaz gain, legeak ezinezkoa egitea eskubideaz baliatzeko aukera edo bertan behera uztea Konstituzioak aitortzen dion bermea.

IV
Osasunari buruzko datuak

Osasunari buruzko datuak eta datu pertsonalak babestea

"*Osasun datuak*" edo "*osasunari buruzkoa datuak*" edo, azken aldian DBLO garatzen duen abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuaren ondotik zabaldu den terminoa erabiliz, "*osasunarekin zerikusia duten datu pertsonalak*" zer diren dioen definizioa 1720/2007 Dekretuaren 5.1 g) artikuluan dago jasota: "*norbanakoaren osasun fisikoari edo buru osasunari buruzko garai bateko, oraingo eta etorkizuneko informazioa*".

Ikusten denez, osasun datuei buruz eratu zen kontzeptua zabal samarra da. Eta hala da 1981eko urtarrilaren 28ko Europako Kontseiluaren 108 Hitzarmenaren Azalpen Txostenean jasotakoa, Europako Kontseiluaren Ministroen Batzordeak onartutako gomendioak eta Europako Erkidegoetako Justizia Auzitegiaren jurisprudentzia kontuan hartuta eratu zelako.

Eta Hitzarmenaren 45. gogoeta juridikoak osasun datuei buruzko honako definizioa ematen du: "*norbanakoaren osasun fisikoari edo buru osasunari buruzko garai bateko, oraingo eta etorkizuneko informazioa*".

Europako Batasuneko Justizia Auzitegiaren 2003ko azaroaren 6ko Epaiak ere honakoa dio:

> *"Komeni da 95/46/CE Zuzentarauaren 8. artikuluko 1. atalak erabiltzen duen osasun datuak kontzeptuaren gainean egiten den interpretazioa zabala izatea, eta pertsonen osasunaren alderdi fisikoaz gain, alderdi psikikoa ere biltzea bere baitan".*

Europako Kontseiluko Ministroen Batzordeak ere kontzeptuaren gaineko interpretazio zabala egin zuen estatu kideei egindako 1997ko otsailaren 13ko R(97)5 Gomendioan. Hona hemen: "*pertsonaren osasunari buruzko datu pertsonal guztiez gain, osasunarekin eta datu genetikoekin zerikusi zuzena eta argia duten datuak ere osasun datutzat joko dira*".

Oso argigarria da mediku historial elektronikoetako (EP131 Dokumentua) osasunari buruzko datu pertsonalen tratamenduari buruzko Datuak Babesteari buruzko 29. artikuluko Lan Taldearen Laneko Dokumentua. Hona han ezarritakoa:

> "*Definizio hau (osasun datua zer den dioen definizioa) datu pertsonalei ere ezarri behar zaie, baldin eta datu horiek zerikusi zuzena eta argia badute pertsonen osasun egoeraren deskribapenekin… batik bat mediku espedienteetan jasota badaude. Beste datu batzuk ere datu sentsibletzat jo beharko dira, adibidez, dena delako pazientearen tratamenduari buruzko dokumentazio medikuaren baitako datu administratiboak (gizarte segurantzaren zenbakia, ospitaleratze-data, eta abar); batez ere, kontuan hartzen bada, pazientearen tratamenduaren testuinguruan ezinbestekoak ez balira, datu horiek ez zirela mediku espediente batean jasota egongo eta ez zirelako inondik inora han jaso beharko*".

Horretaz gain, dokumentuak zera dio:

> *"HME sistemei buruzko lege xedapenek arau orokor moduan ezarri beharko dute pazientearen adostasuna nahitaezkoa dela datuak HME sisteman sartu ahal izateko edo datu horietara sartu ahal izateko (batez ere, datuak behar ez bezala erabiltzeko arriskua dagoenean, adibidez, datu psikiatrikoak badira, abortuei buruzkoak eta abar), eta ukatzeko aukera egotea ere aurreikusi beharko dute, hain intimoak ez diren datuak direnean".*

Bukatzeko, zera dio:

> *"Dokumentu medikuetan, historial mediku elektronikoetan eta HME sistemetan dauden datu guztiak dira datu pertsonal sentsibleak. Beraz, Zuzentarauak dauzkan datu pertsonalak babesteari buruzko arau guztiak bete behar izateaz gain, Zuzentarauko 8. artikuluan informazioa sentsiblearen tratamendua arautzeko jasotako datu-babesari buruzko arauak ere bete beharko dira".*

Konstituzio Auzitegiaren doktrinak ere behin eta berriz berretsi du osasun datuak intimitate pertsonalaren babes eremuan daudela (azken epaiak: martxoaren 23ko 70/2009 eta ekainaren 26ko 159/2009).

Datu pertsonalak babesteko oinarrizko eskubideak ere babesten ditu osasun datuak.

Hona Konstituzio Auzitegiaren azaroaren 8ko 202/1999 Epaiak dioena:

> *"Esanak esan, eta kontuan izanda babes-errekurtso honek argitu nahi duen auzia dela ea Konstituzioaren 18. artikuluarekin bat datorren aipatu berri dugun langilearen osasun datuak tratatzea eta euskarri informatiko batean gordetzea, esan beharrean gaude ukituaren berariazko adostasunik gabe hori egitea ez dela neurri proportzionala eta egokia, eta, beraz, informazioaren titularraren intimitaterako eskubidea eta informatika askatasuna urratzen dituela.*
>
> *..., auzi honetan garrantzia duen alderdia enpresak hartutako neurria bera da; izan ere, oinarrizko eskubide bat murrizten duen neurri batek proportzionaltasunaren printzipioa betetzen duen ala ez egiaztatzeko erabili ohi diren kanonak neurriari ezarri eta gero, esan daitekeelako neurria ezin dela egokitzat, beharrezkotzat eta proportzionaltzat jo, lortu nahi den helbururako; hau da, laneko absentismoa kontrolatzeko [66/1995 KAE, 5. oinarri juridikoa; 207/1996 KAE, 4. E) oinarri juridikoa eta 69/1999 KAE, 4. oinarri juridikoa]. Hain zuzen ere, neurria ez delako izatez orekatua, ez baitakar onurarik edo abantailarik interes orokorrerako edo enpresa interesetarako; eta kaltea dakarkiolako, ordea, intimitate eskubideari.*
>
> *Horrekin lotuta, gogora ekarri behar dugu Konstituzioaren 18.4 artikulua garatzen duen datuak babesteko lege organikoak (LORTAD) datu pertsonalak babesteko ezarri zituen printzipio orokorren artean daudela, batetik, datuak kongruentziaz eta arrazionaltasunaz erabili beharra, "hau da, biltzen den eta informatikoki tratatzen den informazio pertsonalaren eta informazio eskaeraren oinarrian dagoen legezko helburuaren artean lotura garbi bat egon behar dela, eta, ondorioz, zorrotz debekatzen du datu bilketaren oinarrian zegoen helburua ez den beste baterako erabiltzea (4. artikuluko 1. eta 2. idatz-zatia)" (94/1998 KAE, 4. oinarri juridikoa); eta, bestetik, datu zehatzak eta eguneratuak izan beharra (4.3 artikulua). Erregulazio hori ia bat dator Datu pertsonalen tratamendu automatizatuaren aurrean pertsonak babesteari buruzko Europako Kontseiluaren 1981eko urtarrilaren 28ko Hitzarmenaren 5. eta 7. artikuluekin. Espainiak 1984ko urtarrilaren 27ko Tresnaren bidez eta Pertsona fisikoen datu pertsonalak tratatzeari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko 1995eko urriaren 24ko 95/46/CE Zuzentarauaren 6. eta hurrengo artikuluen bidez berretsi zuen. Beraz, kasu honetan berretsi behar dugu enpresak langileen osasun datuen berri izan eta datuen tratamendu informatikoak egiteak -datuak gordetzeko asmoz- urratu egiten duela biltzen den informazio pertsonalaren eta informazio horren bilketaren oinarrian zegoen helburuaren arteko lotura garbia egon behar dela dioen printzipioa.*
>
> *Beraz, guk ateratzen dugun ondorioa da datu base horretan diagnostiko medikuak tratatu eta gordetzea ukituaren berariazko adostasunik gabe, Konstituzioaren 53. artikuluko oinarrizko eskubideak babesteko bermea urratzen duela".*

Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren 2008ko uztailaren 17ko Epaiak ere gauza bera dio:

> *"Datu pertsonalen babesa, eta bereziki datu medikuena, guztiz garrantzitsua da norbanakoek euren bizitza pribatuaz eta familia bizitzaz gozatu dezaten, Hitzarmenaren 8. artikuluak bermatzen duenez. Hitzarmenaren Estatu Kontratugileetako sistema legalen printzipio behinena da datu medikuen konfidentzialtasuna zaintzea. Medikuntzaren lanbidearen arloan eta osasun zerbitzuetan gai erabakitzailea da pazienteen pribatutasunaren zentzua errespetatzea... Barneko legeek berme nahikoa eskaini behar dute osasun datuen*

edozelako komunikazio edo datu erakusterik gerta ez dadin, bestela, urratu egiten direlako Hitzarmenaren 8. artikuluko bermeak".

Konstituzio Auzitegiak ere oinarrizko eskubidea ez dela mugagabea dela esan du:

"… eta nahiz eta Konstituzioak muga zehatzik ez ezarri, eta nahiz eta botere publikoei ez agindu mugok jartzeko, beste oinarrizko eskubideekin egin duen bezala, argi dago gainontzeko oinarrizko eskubideetan eta Konstituzioak babestutako beste ondasun juridikoetan bilatu behar direla mugak, hala agintzen duelako Konstituzioaren batasun printzipioak (apirilaren 8ko 11/1981 KAE, 7,oinarria;, 6. oinarria, eta, 18. artikuluari dagokionez, 110/1984 KAE, 5. oinarria). Mugak bi eratakoak izan daitezke: edo oinarrizko eskubideari zuzenean jarritako murrizketak —lehen aipatu ditugunak— edo oinarrizko eskubidea erabiltzeko moduari, denbora-epeari edo tokiari jarritako murrizketak. Lehengo eran mugak jartzea, oinarrizko eskubidea garatzeko modu bat da. Bigarren eran mugak jarriz gero, dena delako oinarrizko eskubidearen edukia eratzen duten ahalez baliatzeko modu zehatzari jartzen zaizkio mugak. Hori egitea eskubidea nola baliatu arautzea da azken finean, eta legelari arruntak egin dezake hori, Konstituzioaren 53.1 artikuluak xedatutakoaren arabera. Egin beharreko lehenengo konstatazioa da, begien bistakoa izan arren garrantzi handikoa ere badelako, ***Konstituzioak nahi izan duela lege bidez, eta lege bidez baino ez, jarri ahal izatea mugak oinarrizko eskubide bati.*** *Oinarrizko eskubideek amore eman behar dute konstituzioaren arabera garrantzi handiko ondasunak edo interesak badaude tartean, baldin eta eskubideari egiten zaion murrizketa beharrezkoa bada aurreikusitako helburua erdiesteko, proportzionala bada, eta murrizten den oinarrizko eskubidearen funtsezko edukia errespetatu behar du behintzat (292/200 KAE)".*

Era berean, murrizketak nola egin ere adierazi du:

"Datuak babesteko oinarrizko eskubideari buruz ere esan behar dugu ulertu behar dela ***eskubideari egiten zaion murrizketa ezin dela egon administrazio publikoaren jardunean oinarrituta besterik gabe.*** *Eta ez da nahikoa legeak administrazioari ahalak ematea kasuan-kasuan berak mugak jar ditzan, eta legearen zeregin bakarra izatea zehaztapen bat edo beste egitea konstituzioak babestutako ondasun edo eskubideren bat dagoenean tartean.* ***Legegileak erabaki behar du noiz dagoen tartean datu pertsonalak babesteko eskubidea murriztea ekar dezakeen halako ondasun edo eskubide bat; eta legegileak esan behar du zein egoeratan murriztu daitekeen, eta legegileak berak murriztu behar du eskubidea, arau zehatzen bidez, eta interesdunari murrizketa eta murrizketaren ondorioak aurreikusi.*** *Legegileak hori egin ezean, administrazioari eskuordetuko lioke legegileari baino ez dagokion (Konstituzioaren 53.1 artikulua) oinarrizko eskubideen arloko eginkizun bat: mugak argi ezartzea eta arautzea".*

Osasun datuak babesteko lege erregimena

Europako Kontseiluaren 1981eko urtarrilaren 28ko 108 zenbakiko Hitzarmenak honakoa dio 6. artikuluan:

"Arraza, iritzi politikoak, erlijio sinesmenak edo filosofikoak, sindikatu afiliazioa agerian uzten duten datu pertsonalak eta osasunari edo bizitza sexualari buruzko datu pertsonalen tratamendua ezin izango dira modu automatikoan tratatu, barruko zuzenbideak ez baditu berme egokiak aurreikusten".

Bestalde, merezi du aipatzea 1997ko apirilaren 4an Oviedon egin zen "Biologiaren eta medikuntzaren aplikazioei dagokienez, giza eskubideak eta giza duintasuna babesteko

Hitzarmena" (1999ko uztailaren 23ko Tresnaren bidez berretsia; 1999ko urriaren 20ko 251 zk.ko BOE). Esan behar da pertsonen osasunari buruzko informaziorako, adostasun informaturako eta intimitaterako eskubidea aztertzen duen nazioarteko lehenengo tresna dela, eta biologiaren eta medikuntzaren arloan giza eskubideak eta giza duintasuna babesteko esparru komun bat ezarri zuela horretarako. Hitzarmenaren 5. artikuluak xedatzen duen arau orokorrak dio ukitutako pertsonaren adostasun informatua beharko dela osasunaren esparruan esku hartzeak egiteko.

Datu pertsonalen tratamenduaren arloan pertsona fisikoak babesteari buruzko eta datu horien zirkulazio libreari buruzko Europako Legebiltzarraren eta Kontseiluaren 1995eko urriaren 24ko 95/46 Zuzentarauaren 8.1 artikuluak —33. kontuan hartzekoen atalak osasun datuak "*oinarrizko askatasunak edo intimitatea urra dezaketen datuak*" direla dioela kontuan izanik—, honakoa xedatzen du:

> *"Estatu kideek debekatu egingo dute arraza, iritzi politikoak, erlijio sinesmenak edo iritzi filosofikoak eta sindikatu afiliazioa agerian uzten dituzten datu pertsonalen eta osasunari edo bizitza sexualari buruzko datu pertsonalen tratamenduak".*

Nazioarteko eta Batasuneko arauek osasun datuei ematen dieten babes berezia DBLOn islatu da; izan ere, berariazko lege erregimena finkatzen baitu 7. artikuluko 3. idatz-zatiak, "*Bereziki babestutako datuak*" izenburuarekin, datu horiek babesik handiena merezi dutelako, nortasunaren alderdirik intimoenei buruzkoak direlako eta oinarrizko eskubide biren bilgunea direlako: intimitaterako eskubidea eta datu pertsonalak babesteko eskubidea.

Idatz-zati horrek honakoa dio:

> *"Arrazari, osasunari eta sexu-bizitzari buruzko datu pertsonalak bildu, tratatu eta laga daitezke, interes orokorreko arrazoiak direla bide, legeren batek halaxe xedatzen duenean edo ukituak esanbidez onartzen duenean hori".*

Kontuan hartzen bada osasun datuak, datu sentsibleak izanik, eragin handia dutela ukituaren esparrurik intimoenean, DBLOk izaera orokorrarekin ezarri duena baino erregulazio berezituagoa eta zorrotzagoa ezarri du osasun datuen tratamenduari buruz —zein kasutan egin daitezkeen— eta datuen tratamenduetan segurtasuna bermatzeko hartu beharreko neurriei buruz; bai eta osasun datuen tratamenduetan betebeharreko konfidentzialtasun eta zuhurtzia betebeharrari buruz ere; eta, ondorioz, nahitaez bete beharreko araua izango da datuen titularren berariazko adostasuna eskuratzea, datu horiek tratatzeko.

Edozelan ere, legez xedatutako kasuetan, 7.3 artikuluak osasun datuen tratamendua burutzeko aukera aurreikusten du. Lege gaikuntzaren oinarrian, baina, interes orokorreko arrazoiak egon beharko dira nahitaez.

Komeni da "*legez xedatutako kasuetan*" adierazpenak zer esan nahi duen argitzea.

Horretarako, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1995eko urriaren 24ko 95/46/CE Zuzentaraua aipatuko dugu. Zuzentarau hau datu pertsonalen tratamenduaren arloan pertsona fisikoak babesteari buruzkoa eta datu horien zirkulazio libreari buruzkoa da.

Zuzentarauaren 8. artikuluko 4. idatz-zatiak honakoa xedatzen du:

> *"Berme egokiak baldin badituzte, Estatu kideek, garrantzi handia duten interes publikoko arrazoiak tarteko, 2. idatz-zatian aurreikusitako salbuespenez gain, beste batzuk ere ezarri ahal izango dituzte, estatu mailako legeen bidez edo kontroleko agintaritzen bidez".*

95/46/CE Zuzentarauaren 34. gogoeta juridikoan dago agindu horren azalpena. Hona dioena: *"Estatu kideei baimena eman beharko zaie, garrantzi handiko interes publikoko arrazoiak daudenean tartean, datu sentsibleen kategoriak tratatzeko debekuen salbuespenak egiteko osasun publikoaren eta babes sozialaren arloan, batez ere, kalitatearen eta errentagarritasunaren bermeen kasuan, eta gaixotasun aseguruaren erregimenean prestazio eta zerbitzuen erreklamazioak ebazteko erabilitako prozeduren arloan eta ikerketa zientifikoaren arloan eta estatistika publikoen arloan era bai. Horretaz gain, estatuen ardura da pertsonen bizitza pribatua eta oinarrizko eskubideak babesteko berme egokiak eta berariazkoak aurreikustea"*.

Bestalde, Datuak Babesteari buruzko 29. artikuluko Lan Taldeak ere Zuzentarauaren 8.4 artikuluaren interpretazioa egin du mediku historial klinikoetako osasunari buruzko datu pertsonalen tratamenduari buruzko agirian. Hona hemen ulertu duena:

> *"Kasu bakoitzean, salbuespenezko datu tratamenduen multzoak garrantzi handiko interes publikoa izan beharko du Estatuarentzat, eta ezinbestekoa izan beharko du garrantzi handiko interes publikorako. Mota horretako neurriak proportzionatuak izan beharko dute; horrek esan nahi du ezin dela egon salbuespen gutxiago dakarren beste neurririk.*
>
> *Gainera, bizitza pribaturako eta familia bizitzarako eskubidean esku-hartzeko, nahitaez bete beharko da Giza Eskubideei buruzko Europako Hitzarmena, eta, horretaz gain, Estrasburgoko jurisprudentzia hartu beharko da aintzat: legea betez egin beharko da eta gizarte demokratikoan ezinbestekoa izan beharko da interes publikoaren ondorioetarako. Estrasburgoko jurisprudentziak behin baino gehiagotan adierazi du salbuespena ezartzen duen legeak garbi adierazi behar duela zein den eskumendun agintaritzei aitortzen dien eskumeneko boterearen helmena eta nola baliatu eskumenaz, neurriaren helburu legitimoa kontuan hartuta, eta norbanakoari ere arbitrariotasunaren aurkako babes egokia emanez".*

Zuzentarauaren 8. artikuluko 3. idatz-zatiak osasun datuei buruzko aurreko ikuspegi hori jasotzen du eta zera xedatzen du:

> *"1. idatz-zatia ez da ezarriko datu tratamendua beharrezkoa bada prebentziorako, mediku diagnostikorako edo mediku tratamendurako, asistentzia prestaziorako edo osasun zerbitzuen kudeaketarako; eta tratamendua lanbide-sekretuari lotuta dagoen pertsonal sanitarioak —legedi nazionalak edo agintaritza nazional eskumendunek ezarritako arauen aginduz izan— edo sekretu betebehar baliokidea duen beste pertsona batek egiten badu".*

Europako Kontseiluko Ministroen Batzordeak estatu kideei egin zien 1997ko otsailaren 13ko R(97) Gomendioaren 7. puntuko lehenengo atalak ere —datu pertsonalak babesteari buruzkoa da— mota honetako datuen komunikazioa arautzen du eta arau orokor bat ezartzen du horrelako datuen komunikazioari buruz, eta zera da, "*Mediku datuak ezingo dira komunikatuko, kapitulu honetan eta 12. kapituluan ezarritako baldintzak bete ezean"*.

Puntu horretako hirugarren atalak ere jasotzen ditu guretzat interesgarriak izan daitezkeen bi kasu, non datu komunikazioa egin daitekeen titularraren adostasunik gabe. Hona hemen:

> *"a) Komunikazioa lege batean aurreikusita badago eta ezinbesteko neurria bada gizarte demokratikoan, honako arrazoiengatik:*
>
> *i. osasun publikoko arrazoiak; edo*
>
> *ii. benetako arrisku bati aurrea hartzea edo delitu jakin bat zapaltzea edo*
>
> *iii. garrantzi handiko beste interes publiko bat, edo*
>
> *iv. besteen eskubideak eta askatasunak babestea*
>
> *b) legeren batek komunikazioa baimentzen badu helburu hauetarako:*
>
> *i. datuen subjektua edo lerro genetiko bereko senide bat babestea*
>
> *ii. ukituaren edo hirugarren pertsona baten interes bitalak babestea edo*
>
> *iii. berariazko kontratu betebeharrak betetzea edo*
>
> *iv. legezko erreklamazio bat ezartzea, horretaz baliatzea edo defendatzea".*

Lehen aipatu dugun WP131 dokumentuak ere honakoa dio:

> *"Salbuespen horrek prebentzio izaerako, izaera terapeutikoko eta susperraldi izaerako osasun zerbitzuak emateko berariazko asmoa duten datu pertsonalentzat bakarrik balio du, eta osasun zerbitzu horien kudeaketarako, adibidez, fakturazioa, kontabilitatea edo estatistikak.*
>
> *Ez ditu estaltzen zerbitzu horiek zuzenean emateko beharrezkoak ez diren geroko tratamenduak, esate baterako, ikerketa medikua, gastu itzulketak gaixotasun aseguruak izateagatik edo diru-salaketak aurkeztea. Osasun publikoaren eta babes sozialaren esparruko hainbat tratamendu ere 8. artikuluko 3. idatz-zatiaren helmenetik kanpo daude, batez ere, kalitatearen eta errentagarritasunaren bermeari buruzkoak, eta gaixotasun-aseguruaren erregimenean prestazio eta zerbitzu eskaeren erreklamazioak ebazteko prozedurak ere bai; izan ere, Zuzentarauaren 34. kontuan hartzekoen edo gogoeten atalean 8. artikuluaren 4. idatz-zatia alegatzeko adibide moduan aipatzen baitira".*

DBLOk ere jaso ditu Batasuneko aurreikuspen horiek.

Hona DBLOren 7.6 artikuluak xedatzen duena:

> *"Aurreko idatz-zatietan xedatutakoa gorabehera, artikulu honen 2 eta 3. idatz-zatiek aipatu izaera pertsonaleko datuak tratatzeko modukoak izan daitezke, datu horiek tratatzea beharrezkoa denean prebentziorako edo medikuaren diagnostikoarentzat, osasun-laguntza emateko edo tratamendu medikoentzat edo osasun-zerbitzuak kudeatzeko, baldin eta datu horiek tratatzen baditu lanbide-isiltasuna duen osasun-arloko profesional batek, edo lanbide-isiltasunaren pareko betebeharra duen beste pertsonaren batek.*
>
> *Aurreko paragrafoak aipatzen dituen datuak tratatzeko modukoak izango dira, berebat, tratamendua beharrezkoa denean ukituaren edo beste pertsona baten berebiziko interesa babesteko, ukituak bere adostasuna emateko gaitasunik ez duenean arrazoi fisiko zein juridikoen ondorioz".*

Audientzia Nazionalak 2002ko maiatzaren 31ko epaian artikulu hori interpretatu zuen, eta adierazi zuen 7.6 artikuluan aurreikusitako salbuespena **era murriztuan interpretatu behar dela,** eta esan zuen kasu bakoitzean aztertu beharko dela ea tratamendua benetan den prebentziorako eta diagnostikorako. Beraz, beste helbururen bat duen tratamendu baterako bada (aztertzen ari garen kasuan adibidez laneko absentismoa da helburua) eta "bigarren mailakotzat" jo badaiteke, orduan ez da 15/1999 Lege Organikoak ezarritakoaren babespean egongo.

Berriki Auzitegi Gorenaren 2009ko urriaren 20ko epaiak berretsi egin du Audientzia Nazionalaren interpretazio murriztailea, Audientzia Nazionalaren 2007ko maiatzaren 24ko epaiarekin bat etorrita.

> *"Historia klinikoari dagokionez, Pazientearen Autonomiari buruzko Legeak dio "paziente bakoitzaren dokumentazio klinikoa ahalik eta osoena izan" behar dela, behar bezalako osasun asistentzia eman ahal izateko. Horregatik, zilegi izan daiteke, inpugnatutako epaiak ere esaten duenez, historia klinikoaren batasunaren printzipioaz hitz egitea. Baina, argi utzita historia klinikoa bateratzeko kontuaren asmo bakarra paziente bakoitzaren gaineko informazioa ez sakabanatzea dela, eta horren onuradun bakarra pazientea bera dela. Pazientearen Autonomiari buruzko Legearen 16. artikuluaren lehenengo idatz-zatiak argi uzten du hori: "Historia klinikoa, batik bat, gaixoak osasun-laguntza ona izango duela bermatzeko bitarteko bat da. Historia klinikoek ez dute izaera unitarioa izango laneko arriskuen prebentzioko mutuei, errekurritutako epaiak nahi zuen bezala, lana errazteko, eta are gutxiago enpresariei. Egia da osasun asistentzia hobea ematea ahalbideratzen duela, baina hobekuntza ez da hirugarrenak ahalegin gutxiago egiteko (pertsonal sanitarioa, administrazioa, enpresariak eta abar), pazientea hobeto egoteko baizik. Garrantzi handiko alderdia da hau, pertsonen osasunari buruzko informazioa intimitaterako oinarrizko eskubidearen babespean dago erabat, Konstituzio Auzitegiaren 196/2004 Epaiak, beste batzuen artean, argitu duenez. Beraz, informazio horrekiko bete behar den konfidentzialtasunak salbuespenak izatekotan, pazienteari ekarriko dizkion onurengatik izango dira, edo behar bezala balioztatutako interes orokorreko eskakizun gorenengatik, baina ez dira izango laneko arriskuak prebenitzeko mutuak errazago lan egiteko. Pazientearen Autonomiari buruzko Legearen 18. artikuluak ere pazienteari berari baino ez dio aitortzen historia klinikoa atzitzeko eskubidea, eta ez hirugarrenei; eta 19. artikuluak "historia klinikoak modu aktiboan eta arduratsuan zaintzeko mekanismo bat ezarri beharko" dela dio.*
> *Labur esanda, gai honek ahalik eta konfidentzialtasunik handiena eskatzen du, eta Laneko Arriskuak Prebenitzeko Legean eta Pazientearen Autonomiari buruzko Legean ez dago elementurik adierazten duenik FREMAPek baimenik gabe egindako datu komunikazioa legezkoa denik".*

Bestalde, DBLOren 8. artikuluak zera dio osasun asistentziaren esparruari dagokionez: "*Lagapenaren inguruan 11. artikuluak xedatutakoa gorabehera, erakunde eta osasun-zentro publiko zein pribatuek eta kasuan kasuko profesionalek eurengana jotzen duten pertsonen edo eurek tratatu behar dituzten pertsonen osasunari buruzko izaera pertsonaleko datuak trata ditzakete, estatuko edo kasuan kasuko autonomia-erkidegoko osasunari buruzko legerian xedatutakoaren arabera".*

15/1999 Lege Organikoa garatzen duen Erregelamenduaren 10.5 artikuluak ere honakoa dio: "*ez da beharrezkoa izango interesatuak baimena ematea, osasunarekin zerikusia duten datu pertsonalak komunikatzeko Osasunaren Sistema Nazionala osatzen duten erakunde, zentro eta zerbitzuen artean, eta hori baita baliabide elektronikoen bidez ere,*

betiere datu horiek pertsonei osasun arloko arreta eskaintzeko ematen badira; hori guztia Osasunaren Sistema Nazionalaren kohesio eta kalitateari buruzko maiatzaren 28ko 16/2003 Legearen V. kapituluan xedatutakoaz bat egin beharko da".

Azkenik, Lege Organikoaren 11.2 f) artikuluak ere dio zilegi dela osasunarekin lotutako zenbait datu lagatzea "*Osasunari buruzko izaera pertsonaleko datuak lagatzea beharrezkoa denean, fitxategira jotzea eskatzen duen larrialdiari aurre egiteko edo ikerketa epidemiologikoak egiteko, estatuko zein autonomia-erkidegoetako osasunari buruzko legerian ezarritakoaren arabera".*

Esandako guztia ikusirik, Bulegoak ateratzen duen ondorioa da DBLOren 7.3 artikuluak araubide berezia ezartzen duela osasuneko datuentzat. Beraz, interesdunaren adostasunik gabe osasuneko datuak tratatu edo komunikatzeko, lege baten baimena beharko da, eta baimen horren oinarrian interes orokorreko arrazoiak egon beharko dira.

Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren 219/2008 Txostenak argiago dio "*Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Lege Organikoaren 7.3 artikulua ezartzeak esan nahi duela, espezialitate printzipioari helduta, ezinezkoa dela Lege Organikoaren 11.2 artikuluak aurreikusten dituen tratamenduak legezkotzat jotzeko arrazoiak aplikatzea bertan aipatutako datuei; ondorioz, kasu jakin batzuetan baino ezin izango dira datu horien tratamendua eta lagapena gaitu: arau berezi batek halakorik jasotzen duenean ala lege orokorrak horrelako datuak berariaz aipatzen dituenean*".

Ondorioz, 15/1999 Lege Organikoak osasun datuak noiz tratatu daitezkeen zorrotz adierazita dauka zerrenda batean. Hona hemen noiz tratatu daitezkeen osasun datuak:

- Interesdunak berariaz adierazten badu hori egiteko adostasuna.
- Lege izaera duen arau batek hori egin daitekeela esaten badu.
- Tratamendua ezinbestekoa bada prebentziorako edo mediko diagnostikorako, osasun asistentzia emateko edo osasun zerbitzuak kudeatzeko; baina, 15/1999 Lege Organikoaren 7.6 artikuluak ezarritako murrizketekin: Gainera, lehen esan bezala, artikuluaren interpretazioa ere murriztailea izan beharko da.
- Tratamendua nahitaezkoa bada ukituaren hil ala biziko larrialdi egoera bati aurre egiteko.
- Tratamendua osasun arretaren esparruan eta osasun zentroetara joaten diren pazienteei dagokienez egiten bada, eta ezargarria den lege sektorialak dioena betez egiten bada.
- Datuak komunikatzea nahitaezkoa bada larrialdi bati aurre egiteko edo azterketa epidemiologikoak egiteko, arloko araudian xedatutakoaren arabera.

Araudi hori tartean dagoen osasunaren arloko gainontzeko legediarekin osatu beharko da. Beraz, osasunari buruzko datuen esparruari dagokionez, batez ere honako hauek izan behar ditugu kontuan: Datuak Babesteko Lege Organikoa eta DBLO garatzen duen Erregelamendua, eta osasun datuak tratatzeko oinarrizko arau-esparrua eratzen duen osasun arloko araudia, araudi horrek osatu egiten baititu15/1999 Lege Organikoak emandako arauak.

V

Segidan aztertuko dugu legearen aurreproiektuaren testua, eta esan behar da aurreproiektatutako legearen helburua dela, izenburuak dioenarekin bat, dopinaren aurkako legedia Dopinaren Aurkako Munduko Kodera egokitzea, eta horretarako, Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legearen hainbat artikulu aldatzen ditu.

Bere garaian Agentziak 12/2012 Legearen gaineko txostena egin zuen, legea izapidetzen ari zen bitartean. Legezkotasun txosten hartan (IL10-010) sakon aztertu genuen, batetik, legeak nolako eragina zuen pertsonen pribatutasunerako eta intimitaterako oinarrizko eskubidean, eta, bestetik, datu pertsonalen tratamenduetan legeak agindutako aurreikuspenen ondoriozko datu pertsonalen tratamenduetan ziurtatu beharreko printzipioak eta bermeak. Honako printzipioez ari gara: datuen kalitatearen printzipioa (DBLOren 4. artikulua); informazio bilketako informaziorako eskubidea (DBLOren 5. artikulua); ukituaren adostasuna (DBLOren 6. artikulua); bereziki babestutako datuen tratamendua (DBLOren 7. artikulua); osasun datuak (DBLOren 8. artikulua); sekretu gorde beharra (DBLOren 10. artikulua); datu komunikazioa edo datu lagatzea (DBLOren 11. artikulua) eta hirugarren konturako datu atzipena (DBLOren 12. artikulua).

Aurreko gure txostenean zorrotz aztertu genituen DBLOk arautzen dituen eta abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuak garatzen dituen printzipio horiek; eta, beraz, txosten horretara jotzen dugu, gauza bera bi aldiz ez esateko. Hala ere, ikusirik proiektatutako lege aldaketa nolakoa den, txosten honen bidez hainbat alderdi azpimarratu nahi ditugu, datuak babes oinarrizko eskubiderako garrantzi handia dutelako, bereziki lotura estua dutelako DBLOko printzipio batzuekin.

Lehenengo eta behin, arreta jarri nahi dugu puntu batean, eta da Agentziak uste duela **legeak ez dituela behar bezain ondo edo argi ebatzi dopinaren aurkako kontrol eta zehapen erregimena ezarpen eremu subjektiboaren mugak.** Legearen artikuluak ikusita, batez ere 1. artikuluko 5. eta i. idatz-zatiak, 12. artikuluko 1. eta 9. idatz-zatiak (hau orain aldatu egingo da), 21.1 artikulua (hau ere aldatu egingo da) eta seigarren xedapen gehigarria ikusita, badirudi dopina kontrolatzeko erregimena ezarri ahal zaiela honako hauei: kirolari federatuei, federatu gabeko kirol-lehiaketetan parte hartzen dutenei (eskola-lizentzia, unibertsitate-lizentzia, edo lizentziaren baliokidea den inskripzioa dutenak) eta lehiaz kanpoko kirol-jardueretan aritzen direnei.

Eta kontu hori oso garrantzitsua da, IL10-010 Txostenean esan genuenez, argitzeko ea lege hau ondo ezkontzen den pertsonen pribatutasunerako (Konstituzioaren 18.4 artikulua) eta intimitaterako (Konstituzioaren 18.1 artikulua) eskubidearekin, Agentziak uste duelako Euskadin kirola egiten duten pertsona guztiei (haur eta heldu) ustez dopin kontrolak egiteko agintzen duen lege batek ez duela betetzen proportzionaltasunaren irizpidea honakoen artean: legearen kontrol helburua (joko garbia bermatzea eta kirola egiten dutenen osasun prebentzioa) eta kirola egiten dutenen oinarrizko eskubide eta askatasunekiko errespetua.

Horrekin lotuta, gogora ekarri behar dugu datuen kalitatearen printzipioak (DBLOren 4.1 artikulua) dioela bakar-bakarrik jaso eta tratatu daitezkeela datu egokiak, bereizleak eta neurrikoak, datu bilketaren eremuarekiko eta datu bilketaren helburu zehatz, esplizitu eta legitimoekiko (proportzionaltasunaren irizpidea). Era berean, proportzionaltasunaren printzipioak dio (4.2 artikulua) tratatu beharreko datu pertsonalak ezin izango dira erabili datuak biltzeko helburuekin bateragarriak ez diren xedeetarako (helburu printzipioa), eta

datuak ezereztu egin beharko direla, ez badira beharrezkoak eta bereizleak hasierako helbururako (4.5 artikulua). Gainera, kalitatearen printzipioak debekatu egiten du datuak biltzea iruzurrezko, gezurrezko edo legez kontrako bitartekoez (DBLOren 4.7 artikulua).

Segidan aztertu behar dugu lege aurreproiektuak ekainaren 21eko 12/2012 Legeari gehitu nahi dion 38 bis artikulu berria.

> *"38 bis artikulua.- Zehapenak zabaltzea.*
>
> *1.- Dopinaren aurkako araurik urratzearen ondorioz kirolari batek edo beste pertsonaren batek zehapenik jasotzen badu, arau-hauslearen identitatearen jendaurreko zabalkundea egin beharko du emaitzak kudeatzeko lanaren ardura duen dopinaren aurkako erakundeak, hogei eguneko epean zehapena irmoa den egunetik zenbatuta.*
>
> *2.- Dopinaren aurkako erakundeak arau-haustea nolakoa den jakinarazi behar du, zer kirol-modalitatetan gertatu den, dopinaren aurkako zer araudi urratu den, zein den zehapena jaso duen pertsonaren izena, zer substantzia edo metodo debekatu erabili den eta zer zehapen jarri diren.*
>
> *3.- Horren guztiaren berri emango da, gutxienez, dopinaren aurkako erakundearen webgunean, eta hilabete batez egongo da ikusgai; etendura-epea hilabetetik gorakoa bada, epe horretan egongo da ikusgai.*
>
> *4.- Arau-hauslea adingabea denean ez da egingo artikulu honetan ataldutako zabalkundea".*

Artikulu horrek dio dopinaren arloan ezarritako zehapenak Interneten bidez jakinarazi daitezkeela, eta Dopinaren Aurkako Munduko Kodeak ere antzeko zerbait dio.

Dopinaren Aurkako Munduko Kodea ez da zuzenean loteslea Estatuentzat, Dopinaren Aurkako Munduko Agentziak egin duelako, eta Suitzako zuzenbidearen menpeko zuzenbide pribatuko fundazio bat delako.

Baina, Unescoren Kiroleko Dopinaren Aurkako Nazioarteko Konbentzioa, ordea, estatu kide guztiek berretsi dutenez, nahitaez betebeharrekoa da eta helmen unibertsala du; nazioarteko tresna juridikoa delako eta kiroletik dopina desagerraraztea nahi duelako, prebentzioa eta dopinaren aurkako borroka sustatuz. 2005eko azaroaren 18an Parisen onartu zuten eta Espainiako Estatuak 2006an berretsi zuen Unescoren 32. Konbentzioaren 4.1 artikuluaren ondorioz, kide diren estatuek Dopinaren Aurkako Munduko Kodearen printzipioak errespetatzeko konpromisoa hartzen dute beren gain, eta horiek erabiltzeko dopinaren aurka estatu bakoitzak barruan hartu beharreko neurrien oinarri moduan. Neurriak lege mailakoak, erregelamenduak, politikak edo administrazio xedapenak izan daitezke.

Dopinaren Aurkako Munduko Kodearen azken bertsioa 2015eko urtarrilaren 1ean sartu zen indarrean, eta hainbat arau-hauste eta zehapen berri dauzka. Bertsio berriak zehapen gogorragoak ezartzen ditu nazioarteko dopin kasuetarako, baina hainbat malgutasun irizpide ere jaso ditu inguruabar bereziak tartean daudenean gertatzen diren kasuetarako.

Dopinaren Aurkako Munduko Kodeak aldarrikatzen dituen printzipioetako bat da konfidentzialtasunaren eta komunikazioaren printzipioa (Kodearen 14. artikulua). Dopinaren Aurkako Munduko Kodearen 14. artikulua honako printzipioei buruzkoa da: dopinaren aurkako emaitzen koordinazioa, gardentasun publikoa eta erantzukizuna eta

kirolari guztien eta zehapena jaso dezaketen gainontzeko pertsona guztien intimitaterako eskubidearen babesa.

Dopinaren Aurkako Munduko Kodearen 15. artikuluak xedatzen du dopinaren aurkako arau-hausteei buruzko informazioa jasotzen duten erakundeek ezin izango dute informazioa zabaldu, eta jakin behar duten pertsonek baino ez dutela jasoko, harik eta emaitzen kudeaketaren ardura duen dopinaren aurkako erakundeak modu publikoak zabaltzen duen arte edo ez zabaltzea erabaki arte (14.3 artikulua).

Artikuluaren 14.3 artikuluak arautzen du nola egin behar den publiko dopinaren aurkako erakunde batek, dopinaren aurkako edozein arau-hauste egiteagatik salatutako pertsonen identitatea; eta zabalkundearen helmena lege-aurreproiektuan jasotakoaren antzekoa da.

DBLOren ikuspegitik begiratuta, zehapenak Internet bidez zabaltzea, datuak komunikatzea edo datuak lagatzea da. Hala dago jasota 3 i) artikuluko definizioan: "interesduna ez den beste pertsona bati datuak erakustea". Beraz, datuen zabalkundea ondo ezkonduko da DBLOren baldintzekin "*ezinbestekoa izango da lagatzailearen eta lagapen-hartzailearen eginkizun legitimoekin lotuta dauden helburuetarako izatea, hau da, bakar-bakarrik horretarako izatea, eta interesdunaren aldez aurreko adostasuna beharko da*" (DBLOren 11.1 artikulua).

Edozelan ere, artikulu horretan bertan adostasun beharrak salbuespenak dituela dio, adibidez, lege batek agintzen badu (DBLOren 11.2a artikulua).

Horretaz gain, azpimarratu behar dugun beste kontu bat da Gardentasunari, Informazioa Eskuratzeari eta Gobernu Onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 15. artikuluak dioena: DBLOren 7.3 artikuluak bereziki babestutako datuak baditu (osasun datuak barne), edo arau-hausleari ohartarazpen publikorik ez dakarkioten arau-hauste penal edo administratiboei buruzko datuak baditu, informazio hori eskuratzeko nahitaezkoa izango da eragiten zaionaren berariazko baimena edukitzea edo lege-mailako arauren baten babesa izatea. Gainera, 19/2013 Legearen 5.3 artikuluak dioenez, administrazio publikoek burutu beharreko publikotasun aktiboari ere muga horixe bera ezarri behar zaio.

Beraz, horren arabera, eta kontuan hartua proiektatutako arauak lege izaera duela, esan behar dugu dopinaren aurkako zehapenen zabalkundea Interneten bidez egitea bat datorrela DBLOren 11.2.a) artikuluak xedatutakoarekin.

Baina, ezin da ahaztu dopinaren kontrako neurriek, legeak barne, DBLOrekin bat etorri behar dutela, eta DBLOren oinarrizko printzipioak eta bermeak betetzeaz gain, datu bereziak tratatzeko ezartzen dituen mugak ere bete beharko direla: osasun datuak, arau-hauste penal edo administratiboei buruzko datuak.

Horrekin lotuta, interes handia du eta gogora ekarri behar dugu **95/46/CE Zuzentarauaren 29. Artikuluko Lan Taldeak** Dopinaren Aurkako Munduko Agentziaren datu pertsonalak eta intimitatea babesteari buruzko eta Dopinaren Aurkako Munduko Agentziak kirolean dopinaren aurka egiten duen borrokaren testuinguruan intimitatearekin lotutako beste alderdi batzuei buruzko 2009ko apirilaren 6ko 4/2009 Irizpenean **eman zuen irizpidea**: *"datu pertsonalak argitaratzea, eta, are gehiago, zehapenei buruzko datuak argitaratzea ez da ondo ezkontzen intimitatea eta datu pertsonalak babesteko eskubidearekin. Baina, esku hartzea baliokoa izateko, esku hartzeak berariazko legezko helburu bat izan beharko du; eta horrek esan nahi du, batetik, ukitutako pertsonari neurri horrek ekarriko dizkion ondorioen eta legezko helburuaren artean proportzionaltasun irizpide egokia egon behar*

dela; eta, bestetik, ez da egon behar helburu bera lortzeko esku hartze txikiagoko beste modurik".

Kasu honetan 38 bis artikulu berria ondo egokitzea nahi badugu DBLOren 4. artikuluko kalitatearen printzipiora, hainbat puntu aztertu behar ditugu.

Batetik, 38 bis artikuluak dio arau-hauslearen identitatearen jendaurreko zabalkundea egin beharko dela, hogei eguneko epean zehapena irmoa den egunetik zenbatuta; baina, adingabea bada ez dela egingo ere badio. Horrez gain, honakoak ere argitaratu beharko direla dio: arau-haustea nolakoa den, zer kirol-modalitatetan gertatu den, dopinaren aurkako zer araudi urratu den, zein den zehapena jaso duen pertsonaren izena, zer substantzia edo metodo debekatu erabili den eta zer zehapen jarri diren.

38 bis artikulu berrian jasotako aurreikuspen horiek ikusita, kontuan izan behar dugu orain aztertzen ari garen lege aurreproiektuak aldatu egiten duela 12/2010 Legearen III. Kapituluan araututako dopinari buruzko zehapen erregimena, eta era askotako zehapenak ere ezartzen dituela: ohartarazpenak, kirol lizentzia betiko kentzea eta abar.

Adibidez, ohartarazpenak ezarriko dira kirolariak, erabilera terapeutikoko baimena edukitzeko behar bezalako mediku-justifikazioa izanik, ez badu baimena eskatu, edo aurretik zuen baimenaren indarraldia iraungi bada, eta kontrolean analisiaren emaitza aurkakoa bada (12/2012 Legearen 24.4 artikulua, lege aurreproiektuan jasota dagoenaren arabera).

Hori horrela izanik, ez da ulertzekoa ze interes publiko duen zehapena eta kirolariak erabilitako substantzia argitaratuta, erabilera terapeutikorako mediku baimena badago. Horregatik, beste arrazoibiderik ez badago, alde batetik esan behar dugu informazio guzti hau zabaltzea ez dela proportzionala (DBLOren 4.1 artikulua), proportzionala izateko, informazioa argitaratzea nahitaezkoa izan beharko litzakeelako, berez zabalkundea edo argitalpenak lortu nahi duen helburua lortzeko.

Beste alde batetik, lege aurreproiektuak dio informazioa hilabetez egongo dela ikusgai; eta etendura-epea hilabetetik gorakoa bada, epe horretan egongo dela ikusgai.

Erantzukizuna azkentzen bada, zehapena bete delako, lege hau garatzeko arauak eta kirol-federazio eta kirol erakundeek eman ahal dituztenek ezingo dute izan inolako ondorio gehigarririk zehapena ezarria eta betea duten kirolarientzat (12/2912 Legearen 33.a) artikulua); beraz, beteta dauden zehapenak ez dira argitaratu behar. Gainera, datuen kalitatearen printzipioaren arabera, argitalpen epea ezin da izan zehapena jaso duenari ezarri zaion lizentzia-etenaldiaren epea baino luzeagoa.

Gogoan izan behar dugu DBLOren 7.5 artikuluan jasotako aurreikuspena. Honakoa xedatzen du: "*Arau-hauste penal eta administratiboen inguruko izaera pertsonaleko datuak Administrazio Publiko eskudunen fitxategietan bakarrik jaso daitezke, kasuan kasuko arauetan ezarritako kasuetan*".

Horrek esan nahi du zehapena ezartzeko eskumena duen administrazioak baino ezin dituela argitaratu zehapenok, eta ez beste inork. Kasu honetan, proiektatutako legeak aldatu egiten du ekainaren 21eko 12/2012 Legea, Dopinaren Aurkako Euskal Agentziaren zeregina indartzeko**,** berak izango duelako dopinaren aurka Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren eskumenak garatzeko ardura duen erakundea, besteak beste,

Zehatzeko ahala erabiltzeko ahala (10.1 e) artikulua), dopinaren aurkako erakunde izaera bereganatuz.

Ondorioz, Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak izango du zehapenak argitaratzeko ardura, eta Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak bakarrik jaso ahal izango ditu bertako fitxategietan arau-hausteei buruzko datuak.

Horrez gain, lege-aurreproiektuak dio gutxienez dopinaren aurkako erakundearen web-gunean argitaratuko direla datuak. Badirudi, horrek ematen duela nolabaiteko askatasuna erakunde horrek erabakitzeko zer beste bide erabiliko dituen egokien iruditzen zaizkion zehapenak argitaratzeko. Agentziaren ustez legeak esan behar du, beharrezkotzat jotzen badu, non gehiago argitaratu behar den informazioa, informazio sentsiblea delako.

Edozelan ere, Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak argi azaldu beharko du web-orria ez dela jendearen eskurako iturria, eta bertan argitaratutako informazioa ezin izango dela bestelako helburuetarako erabili.

Era berean, uste dugu komenigarria dela Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak neurriak hartzea Interneteko bilatzaileek ez dezaten indexatu bertan argitaratutako informazioa, oinarrizko eskubidea ahalik eta gutxien kaltetzeko.

Aipatu behar dugu datu bilketaren uneko informaziorako eskubideari ere erreparatu behar diogula (DBLOren 5. artikulua), eta esan behar dugu dopinari buruzko zehapen-ebazpenen jakinarazpenetan interesdunei ondo azaldu behar zaiela, hau da, DBLOren 5. artikuluko berme guztiekin, zehapena eta bertan ageri diren gainontzeko datuak (38 bis artikuluak dio zeintzuk) Internet bidez zabalduko direla zehapena irmoa den egunetik aurrera, eta zenbat denbora egongo den Interneten ere bai.

Azkenik, datuen segurtasunaz hitz egin behar dugu (DBLOren 9. artikulua). Eta DBLO garatzen duen Erregelamendua onartzen duen abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuaren VIII. Tituluak horren inguruan dioena ikusita, lagin biologikoak aztertzen dituzten laborategiek nahitaez izan beharko dituzte laginak ez galtzeko segurtasun neurri aproposak.

Eta hirugarrenen konturako tratamenduak egiten dituztenek ere segurtasun neurriak hartu beharko dituzte, eta fitxategiaren arduradunari ezarritako berberak izan beharko dira, hala ondorioztatzen baita DBLOren 9. eta 12.2 artikuluak ikusita.

Vitoria-Gasteiz, 2015eko martxoaren 11

Iñaki Pariente de Prada
Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren zuzendaria

XIII

CERTIFICADO DE ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO VASCO DEL DEPORTE / KIROLAREN EUSKAL KONTSEILUAREN BATZORDE IRAUNKORRAREN ZIURTAGIRIA

PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.
KIROLEKO DOPINAREN AURKAKOA LEGEA ALDATZEN DUENA LEGE PROIEKTUA

ELISABET ALTUBE BENGOA, SECRETARIA DEL CONSEJO VASCO DEL DEPORTE,

CERTIFICA QUE:

En la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Vasco del Deporte, celebrada en Vitoria-Gasteiz el día 29 de octubre de 2014, se adoptó por unanimidad, entre otros, el siguiente acuerdo:

3.- Informe relativo Anteproyecto de Ley sobre adecuación de la legislación antidopaje al Código Mundial Antidopaje.

Se informa de que el objeto de esta Ley es la adaptación de la Ley 12/2013 de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte, a las modificaciones introducidas por el nuevo Código Mundial Antidopaje que ha entrará en vigor en enero de 2015.

Las modificaciones más relevantes del nuevo código son las siguientes:

- En la tipificación de las infracciones en materia de dopaje, el nuevo Código mantiene las infracciones del vigente Código de 2009, pero se añaden nuevas conductas penadas.

- Se incluye la posibilidad de que las muestras biológicas sean analizadas por laboratorios que no cuenten con la acreditación de la Agencia Mundial Antidopaje, pero sí con su aprobación.

- Se modifican las sanciones incrementándose de forma sustancial los periodos de suspensión.

- El nuevo Código Mundial Antidopaje establece un nuevo periodo de prescripción de 10 años.

Asimismo, se ha aprovechado la modificación para reconocer a la Agencia Vasca Antidopaje, como el órgano especializado encargado de desarrollar las funciones atribuidas a la Administración Pública del País Vasco, actuando como organización antidopaje del País Vasco.

Por último, el texto incorpora el contenido del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley 12/2012 contra el Dopaje en el Deporte, del País Vasco.

Se hace una reflexión sobre la necesidad de agilizar los procedimientos en esta materia y se constata la escasa conciencia social sobre esta materia.

Se informa favorablemente.

Y para que así y conste y surta los efectos oportunos donde proceda emito la presente certificación en Vitoria-Gasteiz, a 14 de noviembre de 2014

ELISABET ALTUBE BENGOA

SECRETARIA DEL CONSEJO VASCO DEL DEPORTE

ELISABET ALTUBE BENGOAK, KIROLAREN EUSKAL KONTSEILU KO IDAZKARIAK,

ZIURTATZEN DU:

Kirolaren Euskal Kontseiluaren Batzorde Iraunkorrak, Gasteizen 2014ko urriaren 29an egindako bilkuran, besteak beste, erabaki hau hartu zuen aho batez:

3.- Dopinaren aurkako legedia Dopinaren aurkako Mundu Kodera egokitzeko lege-aurreproiektuari buruzko txostena.

Jakinarazi da lege horren xedea dela ekainaren 21eko 12/2012 Legea, kiroleko dopinaren aurkakoa, 2015eko urtarrilean indarrean sartuko den Dopinaren aurkako Mundu Kodeak sartutako aldaketetara egokitzea.

Hauexek dira kode berri horrek dakartzan aldaketa garrantzitsuenak:

- Dopinaren alorreko arau-hausteen tipifikazioan, indarrean dagoen 2009ko kodeko arau-hausteak atxikitzen ditu kode berriak, baina, horietaz gainera, jokabide berri batzuk ere zigortzen ditu.
- Atea irekitzen zaio lagin biologikoen analisiak egiteko aukerari Dopinaren aurkako Mundu Agentziaren nazioarteko egiaztapena ez duten laborategietan, baldin eta Agentziaren onarpena badute.
- Zehapenak aldatu egiten dira, halako moldez non etendura-epeak nabarmen luzatu diren.
- Dopinaren aurkako Mundu Kode berriak 10 urteko preskripzio-epea ezartzen du.

Horrez gain, aldaketa baliatu da Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia aitortzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoari esleitzen zaizkion funtzioak gauzatzeko organo espezializatu gisa.

Azkenik, Euskadiko kiroleko dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legearen arloan Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Bitariko Lankidetza Batzordearen Akordioaren edukia erantsi da testuan.

Arlo horretako prozedurak arintzeko beharraz hausnartu da, eta agerian gertu da arlo horrekiko kontzientzia sozial handirik ez dagoela.

Aldeko irizpena eman zaio.

Eta, horrela jasota gera dadin eta dagozkion ondorioak izan ditzan, ziurtagiri hau ematen dut, Gasteizen, 2014ko azaroaren 14an.

ELISABET ALTUBE BENGOA

KIROLAREN EUSKAL KONTSEILUKO IDAZKARIA

XIV

DICTAMEN DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL VASCO
EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOETARAKO BATZORDEAREN IRIZPENA

PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.
KIROLEKO DOPINAREN AURKAKOA LEGEA ALDATZEN DUENA LEGE PROIEKTUA

DICTAMEN 14/15

sobre el Anteproyecto de Ley sobre adecuación de la legislación antidopaje al Código Mundial Antidopaje

Bilbao, 25 de septiembre de 2015

I.- INTRODUCCIÓN

El día 27 de julio de 2015 tuvo entrada en el Consejo Económico y Social Vasco escrito del Departamento de Administración Pública y Justicia, solicitando informe sobre el "*Anteproyecto de Ley sobre adecuación de la legislación antidopaje al Código Mundial Antidopaje*", según lo establecido en el artículo 3.1 de la Ley 8/2012, de 17 de mayo, del Consejo Económico y Social Vasco.

La iniciativa legislativa que se nos consulta tiene como objetivo fundamental adecuar la vigente Ley 12/2012, de 21 de junio, de lucha contra el dopaje, al nuevo Código Mundial Antidopaje. Asimismo, se procede a adaptar esta Ley al contenido del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley del País Vasco 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte y a reconocer a la Agencia Vasca Antidopaje como la organización antidopaje del País Vasco.

De manera inmediata fue enviada copia del documento a todos los miembros del Pleno del Consejo a fin de que remitieran sus propuestas y opiniones y dar traslado de las mismas a la Comisión de Trabajo pertinente, según lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento del Consejo Económico y Social Vasco.

El día 21 de setiembre de 2015 se reúne la Comisión de Desarrollo Social y a partir de los acuerdos adoptados, se formula el presente Proyecto de Dictamen para su elevación al Pleno del Consejo de 25 de septiembre donde se aprueba por unanimidad.

II.- CONTENIDO

El "*Anteproyecto de Ley sobre adecuación de la legislación antidopaje al Código Mundial Antidopaje*" consta de exposición de motivos, un artículo único que modifica diversas disposiciones de la Ley 12/2012, 2 disposiciones transitorias y una final.

En la exposición de motivos se explica que en noviembre de 2013, se desarrolló en Johannesburgo, Sudáfrica, la IV Conferencia Mundial Antidopaje en la que participaron representantes de las organizaciones deportivas y de estados y donde se aprobó el nuevo Código Mundial Antidopaje, que ha entrado en vigor el pasado 1 de enero de 2015. Como modificaciones más relevantes del nuevo Código se pueden destacar las siguientes:

- En la tipificación de las infracciones en materia de dopaje, el nuevo Código mantiene las infracciones del vigente Código de 2009, pero se añaden nuevas conductas penadas.
- Se incluye la posibilidad de que las muestras biológicas sean analizadas por laboratorios que no cuenten con la acreditación de la Agencia Mundial Antidopaje, pero sí con su aprobación.
- Se modifican las sanciones incrementándose de forma sustancial los periodos de suspensión.
- El nuevo Código Mundial Antidopaje establece un nuevo periodo de prescripción de 10 años.

Por ello, el País Vasco se encuentra en la obligación de adecuar la vigente Ley 12/2012, de 21 de junio, de lucha contra el dopaje, al citado Código.

Asimismo, se ha aprovechado esta modificación de la Ley 12/2012 para reconocer a la Agencia Vasca Antidopaje, órgano que fue adscrito al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva, como el órgano especializado encargado de desarrollar las funciones atribuidas en el artículo 10 de la Ley a la Administración Pública del País Vasco, actuando como la organización antidopaje del País Vasco.

Por último, el texto incorpora el contenido del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley del País Vasco 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte.

El artículo único del anteproyecto de ley modifica los siguientes artículos de la Ley 12/2012:

1. Art. 10. Competencias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco
2. Art. 12. Deportistas con obligación de someterse a control de dopaje
3. Art. 13. De las garantías en los controles y de los efectos legales de los mismos
4. Art. 16. Controles de dopaje y controles de salud
5. Art. 18. Competencia para la realización de los controles
6. Art. 19. Publicidad de la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte
7. Art. 21. Ámbito de aplicación del régimen administrativo sancionador
8. Nuevo art. 22.bis. Suspensión provisional
9. Art. 23. Tipificación de infracciones
10. Art. 24. Sanciones a deportistas
11. Nuevo art. 24.bis. Sanciones por infracciones múltiples
12. Art. 29. Imposición de sanciones pecuniarias
13. Art. 30. Consecuencias accesorias de la infracción y alteración de resultados
14. Nuevo art. 31.bis. Estatus durante una suspensión de licencia
15. Art. 34. Prescripción de las infracciones y las sanciones
16. Art. 36. Competencia en materia sancionadora de carácter administrativo
17. Art. 37. Competencia en materia de procedimientos disciplinarios
18. Nuevo art. 38.bis. Divulgación de sanciones
19. Nuevo art. 38.ter. Revisión de resoluciones en materia de dopaje

III.- CONSIDERACIONES GENERALES

El Parlamento Vasco aprobó la primera ley autonómica específica contra el dopaje en el deporte en 2012 (Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte), desarrollando con ella las disposiciones en materia de dopaje de la Ley 14/1998, de 11 de junio, de Deporte del País Vasco, y dotando a nuestra Comunidad de un marco jurídico para la lucha contra el empleo de sustancias prohibidas en el deporte, en consonancia con el Código Mundial Antidopaje y la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte. Esta Ley contribuye a la protección de lo intrínsecamente valioso del deporte,

que es "*la búsqueda de la excelencia humana a través del perfeccionamiento de los talentos naturales de cada persona*"[1], esencia contra la que el dopaje atenta directamente.

Ya nos pronunciamos en este sentido en nuestro Dictamen 10/2011 sobre el anteproyecto de la citada Ley de Lucha contra el Dopaje, en el que destacamos que el deporte constituye una actividad social de interés público que contribuye a la formación y al desarrollo integral de las personas, a la mejora de su calidad de vida y al bienestar individual y social, y que el dopaje simboliza la antinomia de sus valores y fundamentos, por lo que debe ser combatido.

En esta ocasión, se presenta a nuestra consideración el Anteproyecto de Ley para la adecuación de la Ley 12/2012 al nuevo Código Mundial Antidopaje, además de adaptarse a un reciente Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en la materia y reconocerse la Agencia Vasca Antidopaje como la organización antidopaje del País Vasco.

El nuevo Código Mundial Antidopaje entró en vigor el pasado 1 de enero de 2015, introduciendo novedades importantes en la tipificación de las infracciones en materia de dopaje, así como en los periodos de suspensión y de prescripción. En este sentido, queremos señalar la oportunidad del anteproyecto de ley dada la necesidad de adaptación normativa, y que, puesto que las principales modificaciones del Código han sido incluidas en el texto que se nos propone, lo valoramos positivamente.

Además, queremos destacar lo acertado de las observaciones que la Asesoría Jurídica del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura ha emitido en su informe sobre el borrador de esta norma, a las que nos sumamos, y que deberían ser tomadas en consideración.

Por otra parte, compartiendo el espíritu de la Ley, queremos recordar que la lucha contra el dopaje en el deporte se debe concebir de forma integral, reconociendo la importancia de las medidas de prevención. La normativa, además de regular la práctica del dopaje, debe contemplar de forma especial la investigación, sensibilización, formación e información de las entidades profesionales y personas deportistas sobre los efectos que las diferentes sustancias y métodos utilizados para mejorar el rendimiento deportivo pueden tener sobre la salud.

Por último, resaltamos que en la redacción del anteproyecto se ha hecho un uso no sexista del lenguaje teniendo en cuenta la perspectiva de género, y que este ejemplo de buena práctica y de cumplimiento de la Ley de Igualdad 4/2005 debería estar presente siempre en la elaboración de las normas de la Comunidad Autónoma Vasca.

IV.- CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

Exposición de motivos

Sugerimos completar el párrafo tercero de la exposición de motivos como se indica:

"En este marco de armonización, durante los días 12 a 15 de noviembre de 2013, se desarrolló en Johannesburgo, Sudáfrica, la IV Conferencia Mundial Antidopaje en la que participaron representantes de las organizaciones deportivas y de estados y donde se aprobó el nuevo Código Mundial Antidopaje, tercera versión del mismo, que ha entrado en vigor el pasado 1 de enero de 2015".

Justificación: El primer Código Mundial Antidopaje fue aprobado en 2004, el segundo en 2009 y la actual es su tercera versión. Nos parece razonable incorporar este dato a la exposición de motivos.

Art. 21. Ámbito de aplicación del régimen administrativo sancionador

En su nueva redacción, el artículo 21.1 queda redactado de la siguiente forma:

[1] Código Mundial Antidopaje 2015.

"1. El régimen de infracciones y sanciones por dopaje contenido en esta Ley será aplicable, en lo que resulte procedente, a las acciones u omisiones que tengan lugar en cualesquiera actividades deportivas, de carácter competitivo o no competitivo, que se desarrollen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sin que sea necesaria la existencia de relaciones de especial sujeción. No obstante, quedan excluidas las acciones u omisiones que se produzcan con ocasión de competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal o internacional organizadas por las federaciones deportivas internacionales o por las organizaciones olímpicas o paralímpicas internacionales".

Si bien el concepto de "relaciones de especial sujeción" se mantiene en la redacción de ambos textos (el anterior y el de la propuesta de modificación), sugerimos su eliminación.

Se trata de una expresión que plantea numerosos problemas porque no tiene una acepción unívoca, y ni la doctrina ni los Tribunales se ponen de acuerdo a la hora de definir qué tipo de personas se hallan en relaciones de este tipo. Además, no parece que añada nada: no creemos que el contenido de la frase varíe si se suprime la citada expresión.

Art. 22.bis. Suspensión provisional

Recomendamos completar la redacción del párrafo tercero de este artículo como se indica:

"3. El tiempo de suspensión provisional no podrá exceder de seis meses salvo en el caso de paralización o dilación del procedimiento por causa imputable a la persona suspendida. En todo caso, el periodo de Suspensión Provisional del Deportista se deducirá del de la sanción que se le imponga o sea aceptada."

Justificación: En consonancia con el artículo 7.9.2 del Código Mundial Antidopaje, que dice textualmente que "*el periodo de Suspensión Provisional del Deportista se deducirá del de la sanción que se le imponga o sea aceptada definitivamente según el Artículo 10.11.3 o 10.11.4*".

De no computarse esta circunstancia, puede ocurrir que al final la persona deportista sea sancionada doblemente, pues a la suspensión cautelar se suma otra posible suspensión definitiva. Por analogía, piénsese en los supuestos de prisión preventiva que son descontados de la pena final.

Art. 23. Tipificación de infracciones

Se sugiere completar la redacción del nuevo apartado 1.m) como sigue:

"m) La acción de asistir, alentar, ayudar, incitar, colaborar, conspirar, encubrir o cualquier otro tipo de complicidad intencional en relación con una infracción de las normas antidopaje o cualquier intento de infracción"

Justificación: La redacción propuesta es más amplia, concreta y precisa, al añadirse el elemento de intencionalidad que el texto propuesto no contempla. Se recoge el tenor literal del artículo 2.9 del Código Mundial Antidopaje rubricado "Complicidad", que dice textualmente "*asistir, alentar, ayudar, incitar, colaborar, conspirar, encubrir o cualquier otro tipo de complicidad intencional en relación con una infracción de las normas antidopaje o cualquier Intento de infracción de las normas antidopaje o infracción del Artículo 10.12.1 por otra persona*".

El artículo 10.2.3 del Código Mundial Antidopaje establece que *"conforme se establece en los artículos 10.2 y 10.3, el término intencional se emplea para los deportistas que engañan*". Por ello, nos parece adecuado incorporarlo a la nueva Ley, máxime cuando la intencionalidad supone mayores sanciones.

V.- CONCLUSIONES

El CES Vasco considera adecuada la tramitación del "Anteproyecto de Ley sobre adecuación de la legislación antidopaje al Código Mundial Antidopaje", con las consideraciones que este órgano consultivo ha efectuado.

En Bilbao, a 25 de septiembre de 2015

Vº Bº El Presidente
Francisco José Huidobro Burgos

La Secretaria General
Emilia Málaga Pérez

CES EGAB
Consejo Económico y Social Vasco
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea

14/15 IRIZPENA

Dopinaren aurkako legeria Dopinaren Aurkako Munduko Kodeari egokitzeari buruzko Legearen Aurreproiektuari buruzkoa.

Bilbo, 2015eko irailak 25

I.- SARRERA

2015eko uztailaren 27an Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordean Herri Administrazioa eta Justizia Sailaren idazkia sartu zen; idazki horren bidez "*Dopinaren aurkako legeria Dopinaren Aurkako Munduko Kodeari egokitzeari buruzko Legearen Aurreproiektuari*" buruzko txostena eskatu zuen, hau da, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeari buruzko maiatzaren 17ko 8/2012 Legeko 3.1. artikuluan ezarri dena betez.

Kontsultatu zaigun legegintzako ekimenaren helburu nagusia indarrean dagoen dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legea Dopinaren Aurkako Munduko Kodeari egokitzea da. Halaber, Lege hau Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Bitariko Lankidetza Batzordearen Erabakiaren edukiari egokitzen zaio kirolean dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legeari dagokionez eta, aldi berean, Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia aintzatesten da Euskal Autonomia Erkidegoan dopinaren aurka borrokatzen duen antolakuntza moduan.

Batzordeko Osoko Bilkurako kideei berehala igorri zitzaien agiriaren kopia horri buruzko euren proposamenak eta iritziak igortzearen eta ostean bidezko Lan Batzordean aurkeztearen ondoreetarako, hau da, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen Funtzionamenduari buruzko Araudian ezarri denarekin bat.

2015eko irailaren 21ean Gizartearen Garapeneko Batzordea bildu zen eta hartu ziren erabakietatik abiatuta Irizpen Proiektu hau formulatu zen irailaren 25eko Batzordearen Osoko Bilkurari aurkezteko, eta bertan aho batez onetsi da.

II.- EDUKIA

"*Dopinaren aurkako legeria Dopinaren Aurkako Munduko Kodeari egokitzeari buruzko Legearen Aurreproiektuak*" zioen azalpena, 12/2012 Legeko xedapen batzuk aldatzen dituen artikulu bakarra, 2 xedapen iragankor eta amaietako xedapen bat ditu.

Zioen azalpenean azaltzen da 2013ko azaroan Dopinaren Aurkako Munduko IV. Konferentzia egin zela Johannesburgon, Hegoafrikan. Konferentzia horretan kirol antolakuntzetako eta estatuetako eskuordek hartu zuten parte eta Dopinaren Aurkako Munduko Kode berria onetsi zen. Kode hori 2015eko urtarrilaren 1ean jarri zen indarrean. Kode berriak ezarri dituen aldaketa nagusienen artean ondoko hauek aipa daitezke:

- Dopinaren arloko arau-hausteen tipifikazioan Kode berriak indarrean dagoen 2009. urteko arau-hausteak mantendu dira, baina zigortu egiten diren jarrera eta jokaera berriak gehitzen dira.
- Aukera moduan ezarri da lagin biologikoak Dopinaren Aurkako Munduko Agentziaren egiaztapenik ez duten, baina bai onespena, laborategietan azter daitezkeela.
- Zehapenak aldatu dira, baina nabarmen gehitzen dira etendura aldiak.
- Dopinaren Aurkako Munduko Kode berriak 10 urteko preskripzio-epe berria ezarri du.

Horregatik, Euskal Autonomia Erkidegoak derrigorrez aldatu behar du dopinaren aurkako indarreko ekainaren 21eko 12/2012 Legea Kode horretan ezarri denari egokituz.

Halaber 12/2012 Lege honen aldarazpena aprobetxatu da Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia aintzatesteko. Agentzia hau kirolaren arloan eskumenak dituen Eusko Jaurlaritzako bidezko organoari atxiki zitzaion Legearen 10. artikuluan euskal administrazio publikoari agintzen zaizkion funtzioak garatzearen ardura duen organo espezializatu moduan, eta Euskal Autonomia Erkidegoan dopinaren aurkako antolakuntza moduan jardungo du.

Azkenik, testuak Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Bitariko Lankidetza Batzordearen Erabakiaren edukia inkorporatzen du kiroleko dopinaren aurkako ekainaren 21eko Euskal Autonomia Erkidegoko 12/2012 Legeari dagokionez.

Aurreproiektuko artikulu bakarrak 12/2012 Legeko ondoko artikulu hauek aldatzen ditu:

1. 10. artikulua. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren eskumenak.
2. 12 artikulua. Dopin-kontrolak egiteko betebeharra duten kirolariak.
3. 13 artikulua. Kontrolen bermeak eta legezko ondorioak.
4. 16 artikulua. Dopin-kontrolak eta osasun-kontrolak.
5. 18 artikulua. Kontrolak egiteko eskumena.
6. 19 artikulua. Kirolean debekatuta dauden substantzia eta metodoen zerrendaren publizitatea.
7. 21 artikulua. Administrazio-zehapenen araubidearen aplikazio-eremua.
8. 22.bis artikulu berria. Behin-behineko etendura.
9. 23 artikulua. Arau-hausteen tipifikazioa.
10. 24 artikulua. Zehapenak kirolariei.
11. 24.bis artikulu berria. Zehapenak arau-hauste asko egiteagatik.
12. 29 artikulua. Isunak ezartzea.
13. 30 artikulua. Arau-haustearen ondorio gehigarriak eta emaitzak aldaraztea
14. 31.bis artikulu berria. Estatusa lizentzia eten den bitartean.
15. 34 artikulua. Arau-hausteak eta zehapenak preskribatzea.
16. 36 artikulua. Administrazio-zehapenen arloko eskumena.
17. 37 artikulua. Diziplina-prozeduren alorreko eskumena.
18. 38.bis artikulu berria. Zehapenen zabalkuntza.
19. 38.ter artikulu berria. Dopinaren alorreko ebazpenen berrikuspena.

III.- GOGOETA OROKORRAK

Eusko Legebiltzarrak kirolaren aurkako dopinari buruzko berariazko lehen legea onetsi zuen 2012. urtean (12/2012 Legea, ekainaren 21ekoa, kiroleko dopinaren aurkakoa), eta horrekin Euskal Autonomia Erkidegoko ekainaren 11ko 14/1998 Legeko dopinaren arloko xedapenak garatu ziren eta gure Erkidegoari kirolean debekatuta dauden substantzien aurka borrokatzeko marko juridikoa zuzkitu zitzaion, hau da, Dopinaren Aurkako Munduko Kodearekin eta Kiroleko Dopinaren Aurkako Nazioarteko Konbentzioarekin bat. Lege horrek kirolean berariaz baliotsua dena babesten laguntzen du,

hots, "pertsona bakoitzaren berezko talentuen hobekuntzaren bidez gizakiaren bikaintasuna bilatzea"[1], eta dopinak zuzenean egiten du esentzia horren aurka.

Izan ere ildo bereko irizpena eman genuen aipatu den dopinaren aurkako Legearen aurreproiektuari buruzko gure 10/2011 Irizpenean; orduan azpimarratu genuen kirola interes publikoko gizarte-jarduera dela eta horren bidez pertsonak prestatu eta garatzeaz gain, bizi-kalitatea hobetu eta banakako nahiz gizartearen ongizatea bultzatzen dela eta dopinak balore eta oinarri horien antinomia sinbolizatzen duela eta, ondorioz, borrokatu egin behar dela.

Kasu honetan Legearen aurreproiektuari buruzko iritzia eskatu zaigu 12/2012 Legea Dopinaren Aurkako Munduko Kode berriari egokitzearen ondoreetarako; hori ez ezik, xedea Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Bitariko Lankidetza Batzordearen arloari buruzko oraintsuko Erabakiari egokitzea eta Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia Euskal Autonomia Erkidegoan dopinaren aurkako antolakuntza moduan aintzatestea da.

Dopinaren Aurkako Munduko Kode berria joan den 2015eko urtarrilaren 1ean jarri zen indarrean eta berrikuntza garrantzitsuak ezarri zituen dopinaren arloko zehapenen tipifikazioan, eta baita etendura aldietan eta preskripzioan ere. Ildo honetatik adierazi nahi dugu lege aurreproiektua une egokian etorri dela beharrezkoa delako arauen egokitzapena egitea eta, kontuan hartuta Kodearen aldarazpen nagusiak proposatu zaigun testuaren barruan sartu direla, era positiboan baloratu dugu.

Halaber, azpimarratu nahi dugu Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Aholkularitza Juridikoak arauaren zirriborroari dagokionez jaulki duen txotenean egin dituen iruzkinak egokiak direla oso eta bat egiten dugula horiekin, eta uste dugu aintzat hartu beharko liratekeela.

Beste alde batetik, Legearen izpirituarekin bat eginda, gogorarazi nahi dugu kiroleko dopinaren aurkako borroka era integralean ulertu behar dela, prebentziozko neurrien garrantzia aintzatetsiz. Arautegiak, dopinaren praktika erregulatu ez ezik, berariaz zaindu eta garatu behar du ikerketa, sentiberatzea, prestakuntza eta erakunde profesional eta pertsona kirolariei kirol etekina hobetzeko erabiltzen diren substantzia eta metodo guztiek osasunean izan ditzaketen eraginei buruzko informazioa.

Azkenik, argi utzi nahi dugu aurreproiektuaren idazkuntzan lengoaiaren erabilera ez sexista egin dela generoaren ikuspegia aintzat hartuta, eta berdintasunari buruzko 4/2005 Lege honen praktika onen eta betetzearen eredu hau beti erabili beharko litzateke Euskal Autonomia Erkidegoko arauak egiterakoan.

IV.- GOGOETA BEREZIAK

Zioen azalpena

Zioen azalpeneko hirugarren paragrafoa adierazten den era honetan proposatzea:

"Harmonizazio-marko honetan 2013ko azaroaren 12tik 15era Johannesburgon, Hegoafrikan, Dopinaren Aurkako Munduko IV. Konferentzia egin zen. Konferentzia horretan kirol antolakuntza eta estatuetako eskuordeek parte hartu zuten eta bertan Dopinaren Aurkako Munduko Kodea onetsi zen, bere hirugarren bertsioa dena eta 2015eko urtarrilaren 1ean jarri zena indarrean".

Bidezkoketa: lehen Dopinaren Aurkako Munduko Kodea 2004. urtean onetsi zen, bigarrena 2009an eta gaur egungoa hirugarren bertsioa da. Uste dugu zentzuzkoa dela datu hori zizoen azalpenean ematea.

21. artikulua.- Administrazio-zehapen araubidearen aplikazio-eremua.

[1] Dopinaren Aurkako Munduko Kodea, 2015.

Idazkuntza berrian, 21.1. artikuluaren idazkuntza berria hau da:

"1. Lege honetan dopinari buruz jasotzen den arau-hausteen eta zehapenen araubidea aplikatuko zaie, bidezko den heinean, Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan gertatzen diren egiteei edo ez-egiteei, edozein kirol-lehiaketatan edo lehiaketak ez direnetan gertatzen direla ere. Ez da beharko lotura bereziko harremanik egon dadin. Dena dela, salbuetsita daude estatuaren eremuko edo nazioarteko kirol-lehiaketen ondorioz gertatuko diren egiteak eta ez-egiteak, hots, nazioarteko kirol-federazioek edo nazioarteko erakunde olinpikoek edo olinpiada berezietakoek antolatua*".*

Nahiz eta "lotura bereziko harremana" bi testuetan mantendu (aurrekoan eta aldaketaren proposamenean), hori kentzea iradokitzen dugu.

Adierazpen horrek arazo asko sortzen ditu ez duelako esanahi bakarra eta ez doktrina eta ezta epaitegiak ere ez dira ados jartzen zeintzuk diren mota horretako harremanetan dauden pertsonak. Halaber, dirudienez ez du ezer gehitzen: uste dugu esaldiaren esanahia ez dela aldatzen adierazpen hori kentzen bada.

22.bis artikulua. Behin-behineko etendura.

Artikulu honen hirugarren paragrafoaren idazkuntza era honetan osotzea gomendatzen dugu:

"3. Behin-behineko etenduraren iraupena gehienez sei hilekoa izango da, salbu eta etendura jaso duen pertsonari egozteko moduko prozeduraren gelditzea edo luzapena gertatzen bada. Hau guztia gorabehera, kirolariaren behin-behineko etenduraren aldia ezarriko zaionetik edo onetsiko denetik kenduko da."

Bidezkoketa: Dopinaren Aurkako Munduko Kodeko 7.9.2. artikuluak ezarri duenarekin bat dator. Atal horrek hitzez hitz honela dio: "*kirolariaren behin-behineko etenduraren aldia 10.11.3 edo 10.11.4 artikuluaren arabera behin betiko ezarriko zaionetik edo onetsiko denetik kenduko da*".

Inguruabar hori zenbatesten ez bada gerta daiteke amaieran pertsona kirolariak zigor bikoitza jasotzea, gerta daitekeelako kautelazko etendurari behin betiko beste etendura bat gehitzea. Analogiaz, amaierako zigorretik kentzen diren kartzela prebentziozko espetxealdiak hartu behar dira kontuan.

23. artikulua.- Arau-hausteen tipifikazioa.

1.m) atal berriaren idazkuntza era honetan osotzea iradokitzen da:

"m) Dopinaren aurkako arau-hausteei edo arau-hausteak egiteko era guztietako ahaleginei lotuta dauden laguntzeko, sustatzeko, bultzatzeko, eragiteko, konspiratzeko, estaltzeko edo intentzioz egiten diren bestelako era guztietako ekintzak."

Bidezkoketa: proposatu den idazkuntza zabalagoa eta zehatzagoa da proposatutako testuan agertzen ez den intentzionalitatearen elementua gehituta. Dopinaren Aurkako Munduko Kodeko 2.9. artikulua jaso da hitzez hitz, "Konplizitatea", errubrika duena eta hitzez hitz honela esaten duena "*dopinaren aurkako arau-hausteei edo arau-hausteak egiteko era guztietako ahaleginei lotuta dauden laguntzeko, sustatzeko, bultzatzeko, eragiteko, konspiratzeko, estaltzeko edo intentzioz egiten diren bestelako era guztietako konplizitateak edo beste edozein pertsonak 10.12.1. artikulua urratzea*".

Dopinaren Aurkako Munduko Kodeko 10.2.3. artikuluak ezarri du "*10.2 eta 10.3. artikuluetan ezarri denarekin bat intentzionalitatea terminoa iruzurra egiten duten kirolarientzat erabiltzen da*". Horregatik, uste dugu egokia dela Lege berrira inkorporatzea, areago kontuan hartuta intentzionalitateak zehapen handiagoak eragiten dituela.

V.- ONDORIOAK

Euskadiko EGABren ustez "Dopinaren aurkako legeria Dopinaren Aurkako Munduko Kodeari egokitzeari buruzko Legearen Aurreproiektuaren" tramitazioa egokia da aholku organo honek egin dituen iruzkinekin.

Bilbon, 2015eko irailaren 25ean.

O.E. Presidentea
Francisco José Huidobro Burgos

Idazkari Nagusia
Emilia Málaga Pérez

XV

INFORME DE CONTROL ECONÓMICO-NORMATIVO / KONTROL LEGE-EKONOMIKOKO BULEGOAREN TXOSTENA.

PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.
KIROLEKO DOPINAREN AURKAKOA LEGEA ALDATZEN DUENA LEGE PROIEKTUA

FIRMADO DIGITALMENTE POR:

Firmante: **JULIA SIRES BENGOA**
Fecha de la firma: **16/11/2015 12:03:43**
Validación de la firma: **Correcta**

ANTEPROYECTO DE LEY SOBRE ADECUACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ANTIDOPAJE AL CÓDIGO MUNDIAL ANTIDOPAJE.
Ref. TRAMITAGUNE DNCG_LEY-42158/2014:06

De conformidad con lo previsto en el artículo 41.2 del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio del control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Se Verifica

La ausencia de incidencia presupuestaria directa, para esta Administración, derivada del anteproyecto referenciado en el encabezamiento.

Esta verificación no supone pronunciamiento alguno respecto de la adecuación del proyecto a la normativa sustantiva distinta de la de carácter subvencional, presupuestario y hacendístico.

DOPINAREN AURKAKO LEGEDIA DOPINAREN AURKAKO MUNDU KODERA EGOKITZEARI BURUZKO LEGE-AURREPROIEKTUA.
Erref. TRAMITAGUNE DNCG_LEY-42158/2014:06

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren barneko ekonomiaren kontrola eta kontabilitatea garatzen dituen urriaren 31ko 464/1995 Dekretuaren 41.2 artikuluaren arabera.

Egiaztatzen da

Goian aipatutako aurreproiektuak Administrazio honetako aurrekontuetan ez duela eragin zuzenik.

Egiaztapen honek ez du esan nahi proiektua bat datorrenik diru-laguntzei, aurrekontuei eta ogasunari buruz ez diren arau sustantiboekin.

XVI

DICTAMEN DE LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI / EUSKADIKO AHOLKU BATZORDE JURIDIKOAREN IRIZPENA

PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.
KIROLEKO DOPINAREN AURKAKOA LEGEA ALDATZEN DUENA LEGE PROIEKTUA

AHOLKU BATZORDE JURIDIKOA
COMISIÓN JURÍDICA ASESORA
EUSKADI

SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

El Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, en la sesión del día 21 de enero de 2016, con la asistencia de los miembros que al margen se expresan, ha examinado su **consulta**, registrada con el nº C 192/2015, relativa al **anteproyecto de Ley de modificación de la Ley contra el dopaje en el deporte** (**Ref.: DNCG_LEY_42158/2014_06**).

Tras su deliberación, ha emitido por unanimidad el siguiente dictamen. Expresa el parecer de la Comisión, el vocal Sr. Calonge Crespo.

PRESIDENTE:
D. Sabino Torre Díez.

VICEPRESIDENTE:
D. Xabier Unanue Ortega.

VOCALES:
Dª Mª Teresa Astigarraga Goenaga.
D. Luis Mª Eskubi Juaristi.
D. Iñaki Beitia Ruiz de Arbulo.
D. Gorka Erlantz Zorrozua Aierbe.
D. Imanol Zubizarreta Arteche.
D. Ion Gurutz Echave Aranzabal.
D. Iñaki Calonge Crespo.

SECRETARIO:
D. Jesús Mª Alonso Quilchano.

DICTAMEN Nº 5/2016

ANTECEDENTES

1. Por Orden de 1 de diciembre de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura (con registro de entrada del mismo día), se somete a consulta de la Comisión el anteproyecto de ley señalado en el encabezamiento.

2. Además de la orden de remisión de la Consejera y del texto del anteproyecto, el expediente consta de:

   a) Orden de 3 de noviembre de 2014 de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se da inicio al procedimiento de elaboración del anteproyecto de Ley de modificación de la Ley contra el dopaje en el deporte.

b) Memoria del anteproyecto, de fecha 21 de noviembre de 2014, elaborada por la Dirección de Juventud y Deporte del Departamento.

c) Orden de 24 de noviembre de 2014 de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, de aprobación previa del anteproyecto de Ley de modificación de la Ley contra el dopaje en el deporte, en la que se incluye el texto de la norma en bilingüe.

d) Certificación del acta del Consejo Vasco del Deporte celebrado el 29 de octubre de 2014.

e) Oficios de 6 de febrero de 2015, de la Dirección de Régimen Jurídico y Servicios, remitiendo copia del anteproyecto de Ley a las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa; Agencia Vasca de Protección de Datos; colegios oficiales de médicos, farmacéuticos y veterinarios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y Colegio Oficial de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y Deporte; Asociación de Federaciones Deportivas de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa; Unión de Federaciones Deportivas Vascas; y a EKIME (Sociedad Vasca de Medicina del Deporte).

f) Resolución de 6 de febrero de 2015, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deporte del Departamento, sometiendo a información pública el anteproyecto, y publicación en el Boletín Oficial del País Vasco el día 18 de febrero siguiente.

g) Informe de la Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas, de fecha 11 de febrero de 2015.

h) Informe de la Agencia Vasca de Protección de Datos de 9 de marzo de 2015.

i) Informe jurídico del departamento, de 28 de julio de 2015, elaborado por la Dirección Régimen Jurídico y Servicios.

j) Oficio de 13 de marzo de 2015, de la Dirección de Régimen Jurídico y Servicios, remitiendo copia del anteproyecto a la Agencia española de protección de la salud.

k) Informe de impacto en la empresa, de fecha 5 de junio de 2015, elaborado por la asesoría jurídica de la Dirección de Régimen Jurídico y Servicios.

l) Memoria de valoración de las alegaciones recibidas realizada el 15 de julio de 2015.

m) Dictamen 14/15, de 25 de septiembre de 2015, del Consejo Económico y Social Vasco.

n) Memoria de valoración de las alegaciones recibidas realizada el 14 de noviembre de 2015.

o) Informe de la Oficina de Control Económico (OCE) de fecha 16 de noviembre de 2015.

p) Informe justificativo de la ausencia de relevancia desde el punto de vista de género.

q) Informe de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, de 22 de diciembre de 2015

CONSIDERACIONES

I INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN

3. Este dictamen se emite de conformidad con el artículo 3.1. a) de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, que incluye como ámbito de la función consultiva de la Comisión los "anteproyectos de ley", cualquiera que sea la materia y objeto de los mismos, siempre que no se encuentren incursos en las excepciones que contempla, lo que no es el caso.

II DESCRIPCIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY

4. El texto sometido a dictamen consta de una exposición de motivos y un artículo único que contiene las 28 modificaciones a la vigente Ley 12/2012, de 21 de junio contra el dopaje en el deporte (LCD), dos disposiciones transitorias y una disposición final.

5. La parte expositiva describe que los motivos que impulsan la nueva normativa que se centran en: i) adecuar la LCD al nuevo Código Mundial Antidopaje (CMA), que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2015; ii) reconocer a la Agencia vasca antidopaje como servicio especializado encargado de desarrollar las funciones atribuidas a la Administración pública del País Vasco; y, finalmente, iii) incorporar el contenido del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en relación con la LCD de fecha 13 de marzo de 2013 (en adelante Acuerdo de la Comisión Bilateral).

6. Se destaca que los cambios más significativos, derivados del nuevo CMA, se centran en añadir nuevas conductas penadas, incluir la posibilidad de que las muestras biológicas sean analizadas por los laboratorios que no cuentan con la acreditación de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) pero sí con su aprobación, además de modificar las sanciones, incrementándose de forma sustancial los periodos de suspensión y, finalmente, se establece un nuevo periodo de prescripción de 10 años.

7. El contenido de los diferentes apartados del artículo único es el siguiente:

8. El apartado primero da una nueva redacción al apartado 2 del artículo 10 de la LCD creando la Agencia Vasca Antidopaje (AVA), confiriéndole el desarrollo de las funciones que en la materia legalmente correspondena la Administración pública de la CAPV.

9. El apartado 2 modifica el artículo 12.9, recogiendola interpretación dada al mismo en el Acuerdo de la Comisión Bilateral. En el mismo, se excluye de los controles a las actividades deportivas oficiales de ámbito estatal y las competiciones deportivas internacionales organizadas por las federaciones deportivas internacionales o el organismo olímpico o paralímpico correspondiente. Además, se prevé que los controles fuera de competición a deportistas con licencia estatal o autonómica, distinta de la vasca, se realizaran previa solicitud y convenio con la Agencia Española Antidopaje o con los responsables de las diferentesagencias.

10. Los apartados tercero, cuarto y quinto incluyen lamodificación del artículo 13 al que se le añaden tres nuevos apartados, el 11, el 12 y el 13, adaptando la configuración del sistema de prueba y las presunciones sobre la validez de las pruebas antidopajes al CMA, así como el reconocimiento de la validez científica de los métodos analíticos o límites de decisión aprobados por la AMA que hayansido objeto de revisión externa y consulta a la comunidad científica. Todo ello siguiendo lo expresado en los artículos 2.1.1 y 3.2.1 del CMA

11. El apartado sexto modifica el apartado 3 del artículo 16 de la LCD, relativo a la posibilidad de realizar análisis adicionales sobrelas muestras antes de la comunicación de los resultados analíticos al deportista, de acuerdo con la previsto en el artículo 6.5 del CMA.

12. El apartado séptimo modifica el artículo 18.3 de laLCD, posibilitando que los análisis de las tomas de muestra puedan llevarse a cabo también en los laboratorios aprobados por la AMA, en consonancia con lo establecido en elartículo 6.1 del CMA.

13. El apartado octavo modifica el artículo 19.1 de laLCD, adaptando el texto a lo acordado en la Comisión Bilateral, matizando que la publicación de la lista en el BOPV será adicional a la realizada en el BOE.

14. La modificación del artículo 21.1 de la LCD, recogida en el apartado noveno, también es consecuencia del citado Acuerdo de la Comisión Bilateral, excluyendo del régimen administrativo sancionador las acciones u omisiones que se produzcan en competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal o internacional.

15. El apartado décimo crea un nuevo artículo 22 bis, trasladando la llamada "suspensión provisional obligatoria" del artículo 7.9.1 del CMA, prevista para los casos en que se

produzca un resultado analítico adverso por un método prohibido o una sustancia prohibida distinta de una sustancia específica.

16. En el apartado undécimo y duodécimo se recogen dos nuevos supuestos de infracciones graves, derivado de lo tipificado en los artículos 2.9 y 2.10 del CMA, relativas a la complicidad y a la asociación prohibida, modificando el artículo 23.1 de la LCD.

17. El apartado decimotercero reforma el artículo 24 de la LCD, adaptando el régimen sancionador a lo previsto en los artículos 10.2, 10.3, 10.4, 10,5 y 10.6 del CMA. En este artículo, además de tipificar las sanciones aplicables, se establecen una serie de reglas de graduación de la responsabilidad del deportista en base a la intencionalidad demostrada en su conducta.

18. Por su parte, el apartado decimocuarto recoge un nuevo artículo 24 bis, que se dedica a contemplar las sanciones por infracciones múltiples, en la línea del artículo 10.7 del CMA.

19. En los apartados decimoquinto y decimosexto se incluyen dos nuevas previsiones en el artículo 29, relacionadas con las sanciones pecuniarias y la recuperación de gastos provocados por las infracciones antidopaje, todo ello en consonancia con el CMA.

20. El apartado decimoséptimo y decimoctavo, en sintonía con el artículo 10.10 del CMA, modifica el artículo 30 de la LCD incluyendo la posible reparación de daños a terceros y la anulación de otros resultados, además de los obtenidos, así como la retirada de medallas, puntos y premios, salvo por razones de equidad, en la competición en los que se haya producido el resultado adverso.

21. El apartado decimonoveno introduce un nuevo artículo 31 bis, reproduciendo el artículo 10.12 del CMA, que especifica el estatus del deportista durante una suspensión.

22. El apartado vigésimo modifica el artículo 34 de la LCD estableciendo un único plazo de prescripción de las infracciones de 10 años, de acuerdo con el artículo 17 del CMA.

23. El apartado vigesimoprimero introduce un nuevo apartado 3 al artículo 36 de la LCD estableciendo la aplicación en materia sancionadora administrativa, en lo no previsto en la misma y siempre que resulten compatibles, de los criterios relativos a la competencia aplicables a los procedimientos disciplinarios en materia de dopaje.

24. De los apartados vigesimosegundo al vigesimosexto se añaden cinco nuevos apartados al artículo 37 de la LCD, relativos a la gestión de los resultados de un control

antidopaje y sobre los posibles conflictos surgidos de la actuación de distintas organizaciones antidopaje, intentando reproducir al artículo 7.1 del CMA.

25. El apartado vigesimoséptimo incluye un nuevo artículo 38 bis, relativo a la divulgación de las sanciones, siguiendo lo expresado en el artículo 14.3 del CMA.

26. Finalmente, el apartado vigesimoctavo añade un artículo 38 ter recogiendo el criterio establecido en el artículo 13.1 del CMA relativo a la inexistencia de limitación en el ámbito de aplicación de la revisión de resoluciones en materia de dopaje y su congruencia con las peticiones formuladas y la imposibilidad de agravación de la situación inicial.

27. En las disposiciones transitorias se prevén que las infracciones en materia de dopaje, cometidas antes de la entrada en vigor de la ley, así como los procedimientos disciplinarios en materia de represión del dopaje, anterior a la entrada en vigor, se regirán por la normativa anterior. Se añade, además, un inciso que deja abierta a la voluntad del expedientado la posibilidad de decidir sobre la aplicación de la nueva norma o de la anterior.

28. Por último, la disposición final dispone la entrada en vigor el día siguiente de su publicación en el BOPV.

III ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN

29. El procedimiento que es preciso seguir en la elaboración del anteproyecto de ley es el establecido en la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general (en adelante, LPEDG).

30. Ello no obstante, esta Comisión ha expuesto ya las diferencias que existen en la valoración que debe hacerse del procedimiento, en atención a la peculiar naturaleza del producto al que conduce la tramitación, pues no es lo mismo que sea un reglamento o una iniciativa legislativa. Es en sede parlamentaria donde se desenvuelve con plenitud el procedimiento legislativo y, salvo supuestos específicos en los que la Constitución (CE), el Estatuto de Autonomía (EAPV) o, en algunos casos, las leyes orgánicas imponen condiciones a su adopción, la única exigencia que han de cumplir es que se acompañen de los antecedentes necesarios para que el Parlamento pueda pronunciarse sobre ellos y, en su caso, del correspondiente anejo de financiación (artículo 57 de la Ley de Gobierno y 133 del Reglamento de la Cámara).

31. Como también ya hemos dicho de forma reiterada, la LPEDG ha querido orientar la actividad del Gobierno a fin de que procure seguir en la redacción de los anteproyectos

de ley la misma metodología que emplea para elaborar las disposiciones generales. De ese modo, señala la exposición de motivos de la LPEDG, se contribuye muy positivamente a facilitar la labor del titular de la potestad legislativa, pues se le presentan para su discusión y decisión unos proyectos mejor fundados y articulados, con una técnica jurídica más depurada y apropiada para alcanzar los objetivos que se propone.

32. Esto es, la LPEDG no es parámetro para enjuiciar la validez de la norma, sino que establece un cauce que permite allegar todos los elementos relevantes que atañen a la iniciativa, sus condicionantes jurídicos y económicos, su incidencia en la realidad donde se proyecta y en sus destinatarios más directos, etc. y verificar en qué medida existe una adecuación entre la iniciativa y los objetivos que se pretenden conseguir y si éstos podrán ser alcanzados con su puesta en vigor.

33. Por ello, abordaremos el examen del expediente a fin de contrastar si el procedimiento seguido para obtener el texto que se somete a dictamen es conforme con lo dispuesto en la LPEDG.

34. Se ha dictado la orden de iniciación, prevista en el artículo 5 LPEDG, con el contenido dispuesto por el legislador, siendo el anteproyecto de ley objeto de aprobación previa en los términos del artículo 7.1 LPEDG.

35. Obra en el expediente una memoria justificativa en la que, tras realizar un somero análisis sobre el panorama normativo vasco e internacional en el dopaje, se expone el objetivo de la regulación propuesta centrada en los tres objetivos manifestados anteriormente. La memoria también analiza los sectores afectados por la normativa, los presupuestos jurídicos habilitantes, así como las líneas generales y la incidencia económica del anteproyecto de ley. En un último apartado se efectúa el análisis de impacto de género.

36. En la misma también se analiza la incidencia económica, afirmando que el anteproyecto no conlleva necesariamente un incremento de personal o de medios materiales y, por tanto, no supone un incremento significativo de gastos o una disminución de ingreso públicos. Se argumenta que, aunque se reconozca expresamente la AVA no nos encontramos ante la creación de una nueva organización puesto que la misma ya funciona como un servicio y cuenta con determinados recursos humanos y materiales para desempeñar su labor, tras su creación mediante el Decreto de estructura orgánica y funcional.

37. El órgano promotor de la iniciativa ha realizado el informe justificativo de la ausencia de relevancia del anteproyecto desde el punto de vista de género, cuya elaboración

exige el artículo 19 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres (LIMH), habiéndose argumentado que al anteproyecto le es aplicable la excepción prevista en el apartado 2.1.d) de la directriz primera de las aprobadas por el Consejo de Gobierno, en sesión de 13 de febrero de 2007, al ser una modificación sin incidencia alguna desde el punto de vista de género.

38. El informe jurídico cumple las exigencias del artículo 7.3 LPEDG y abarca, en sucesivos epígrafes, los antecedentes, competencia y un exhaustivo análisis del contenido del anteproyecto, efectuando una serie de consideraciones al respecto para la mejora y adecuación del texto. Finalmente realiza un análisis de los trámites necesarios para la tramitación del anteproyecto.

39. Conforme al artículo 8.1 de la LPEDG el texto fue sometido al trámite de información pública. Asimismo, se ha practicado el trámite de audiencia, referido en el artículo 8.3, trasladándose el texto de manera particular a las entidades y asociaciones que anteriormente han sido citadas, que no han efectuado consideración alguna.

40. Igualmente, se ha consultado a las administraciones con competencias en el ámbito de la iniciativa —diputaciones forales—, que no han realizado alegaciones al mismo.

41. El anteproyecto de ley ha sido remitido a todos los departamentos que integran la Administración General de la Comunidad Autónoma, sin que se hayan recibido alegaciones por su parte.

42. La Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas ha informado desde la doble perspectiva del cumplimiento de la normativa lingüística y de su incidencia en la normalización del uso del euskera.

43. Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer ha elaborado el informe recogido en el artículo 21 LIMH, habiendo considerado adecuado la aplicación de la exención de emisión del informe de impacto en función de género de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 2.1 d) de la directriz primera.

44. De igual forma, la Agencia Vasca de Protección de Datos (AVPD) ha informado el anteproyecto, a la vista de las previsiones que en materia de tratamiento de datos de carácter personal contiene el texto, incluyéndose entre sus funciones, artículo 17.1.a) de la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública y de creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, la de velar por el cumplimiento de la legislación de protección de datos en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma.

45. En su informe, la AVPD aborda la configuración constitucional del derecho, además del tratamiento que reciben los datos de salud en el marco de la protección de los datos de carácter personal. Sobre el contenido concreto del anteproyecto, parte de sus consideraciones se dirigen a la divulgación de sanciones vía internet, que estima se encontraría amparada por el artículo 11.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD), dado que la divulgación se contempla en una norma con rango formal de Ley.

46. Le resulta particularmente cuestionable el interés público que se persigue con la difusión pública de la sanción de amonestación y de la sustancia empleada por un deportista, cuando existe justificación médica. A su juicio, la divulgación de esta información no superaría el test de proporcionalidad del artículo 4.1 LOPD. Asimismo, la AVPD recomienda que la AVA advierta en su página web que Internet no es una fuente accesible al público y que, en consecuencia, la información publicada no puede ser tratada posteriormente para fines distintos. También recomienda que la organización antidopaje adopte las medidas oportunas para evitar la indexación de los datos publicados por los buscadores de Internet. Finalmente entiende que el texto contiene una especie de habilitación en blanco para que la organización antidopaje decida cuantas vías de divulgación considere oportunas.

47. Sobre el particular, el departamento proponente, tras recordar que el texto sigue los dictados del CMA, que en el ámbito de la difusión no hace diferenciación entre diferentes tipos de infracciones y sanciones, ha matizado el mismo adaptándolo a los dictados de la LOPD, tanto en el tema de publicación de los datos sobre el método o sustancia empleadas como sobre sus plazos. El resto de asuntos formulados por la AVPD son simples recordatorios de las diversas obligaciones legales a la hora de aplicar la ley o simples recomendaciones, que manifiestan compartir.

48. Consta el informe del Consejo Económico y Social Vasco (CES) emitido en virtud del artículo 3.1.a) de la Ley 8/2012 de 17 de marzo, reguladora del mismo, que realiza una valoración positiva del texto. El CES realiza determinadas consideraciones sobre las relaciones de sujeción especial, sobre la duración del periodo de suspensión y sobre la traslación del artículo 2.9 del CMA relativo a la complicidad.

49. A pesar de que uno de los objetivos del texto es el "reconocimiento de la AVA", no se ha realizado consulta a la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración por entenderla innecesaria tratándose de un servicio existente.

50. Por motivos similares no se ha considerado pertinente realizar consulta alguna a la Dirección de Función Pública, al estimar que no se prevé la creación de nuevos puestos de trabajo.

51. Cabe reseñar que el expediente no aporta dato alguno sobre la estructura actual de la AVA, ni de sus medios económicos, ni materiales. Más allá de la propia mención a la misma, el expediente no permite tomar consciencia de su dimensión, diseño y protocolos de actuación. Se carece de reflexión alguna sobre su papel en la lucha contra el dopaje y los fines perseguidos por la misma. No existe consideración alguna sobre si su configuración es la respuesta más adecuada para cumplir los fines previstos. No figura análisis alguno en relación con la problemática en torno a la lucha antidopaje y su importancia en nuestra Comunidad. Todo ello, a nuestro juicio hubiera contribuido a un mejor entendimiento de la misión,objetivos y realidad de la misma.

52. Se ha realizado el informe de impacto en la empresa, tal y como exige el artículo 6 de la Ley 16/ 2012, de 28 de junio, de apoyo a las personas emprendedoras y a la pequeña empresa del País Vasco. En el mismo se destaca la ausencia de incidencia en el ámbito de cargas administrativas referidas a las empresas, al no guardar el texto relación alguna con la constitución, puesta en marcha y funcionamiento de las mismas.

53. El anteproyecto ha sido informado por el Consejo Vasco del Deporte que manifestó su opinión favorable sobre el texto. Asimismo, expresó la necesidad de agilizar los procedimientos en esta materia y la escasa conciencia social existente en la materia.

54. También han emitido informe la OCE, que se ha limitado a constatar la ausencia de incidencia presupuestaria directa derivada del anteproyecto para la Administración de la CAPV.

55. Finalmente, podemos entender que se ha dado formal cumplimiento al trámite que contempla el artículo 10.2 LPEDG. Así, se ha elaborado un documento que, tras un breve resumen de los antecedentes de la tramitación, recoge las observaciones realizadas, dando cumplida respuesta y fundamentación a todas y cada una de ellas.

56. En definitiva, aunque hubiera sido deseable contar con la opinión y valoración de las direcciones expertas en organización y recursos humanos, debemos considerar, que se ha dado cumplimiento al procedimiento de elaboración previsto en la LPEDG.

IV TÍTULO COMPETENCIAL Y MARCO NORMATIVO

57. Desde el punto de vista de la distribución competencial entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco, el anteproyecto estudiado comparte título habilitante con la norma legal que modifica, esto es, la LCD, que ya fue objeto de nuestro Dictamen 231/2011.

58. El anteproyecto supone una modificación parcial delo establecido en la LCD, la cual vino a sustituir la regulación en la materia de dopaje en el deporte contenida inicialmente en la Ley 14/1998, de 11 de junio, deldeporte del País Vasco (LDPV).

59. En nuestro anterior dictamen, dada la entidad de la reforma, se realizó un análisis detallado y en profundidad sobre el ámbito competencial y normativo. En este caso, sin embargo, la reforma se circunscribe a aspectos muy concretos por lo que nos limitaremos a realizar a una somera exposición delpanorama, centrándonos en otros aspectos en los que incide la reforma.

60. En todo caso, cabe destacar que la importancia que en la sociedad moderna ha adquirido la actividad deportiva en general y el deporte profesional en particular ha propiciado que se haya desarrollado en su entorno la práctica del dopaje. La cual ha sido combatida desde tres puntos de vista que constituyen los pilares principales que justifican el régimen antidopaje, a saber: i) la protección de la salud del deportista, ii) la garantía de igualdad de oportunidades entre competidores y iii) la preservación de los valores deportivos.

61. En esta materia, nos encontramos en un ámbito propicio para que se produzca el entrecruzamiento de títulos competenciales y la concurrencia de la actuación de las diversas administraciones públicas —estatal, autonómica y local— en las diferentes facetas sobre las que se proyecta la actividad deportiva (salud, educación, cultura, investigación, educación física, profesiones reguladas o legislación mercantil, por ejemplo) (STC 194/1998, de 1 de octubre).

62. Sin ánimo de hacer un análisis exhaustivo, simplemente recordaremos, por cuanto la norma incide fundamentalmente en el ámbito materialde la protección de la salud de los ciudadanos, las determinaciones del artículo 43CE, que proclaman en su apartado 1 el derecho a la protección de la salud y en su apartado 3 señala que los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte, y asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio, principios cuyo reconocimiento, respeto y protección, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53.3 CE, deben informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Y, precisamente, su desarrollo por ley es lo que hace posible que puedan ser invocados ante los tribunales.

63. También cabe recordar que el artículo 10.36 del EAPV atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de deporte, en la cual se incardinan de pleno tanto la referida LDPV como la LCD.

64. En este ámbito nos encontramos ante una materia en la que no concurre ninguna otra competencia que, por corresponder al Estado, la module con carácter general, más allá del límite derivado de la concurrencia con otros títulos competenciales estatales, o de las conexiones con el principio de territorialidad en el ejercicio de las competencias (STC 13/1988, de 4 de febrero).

65. Ahora bien, no podemos desconocer que existe una ordenación del dopaje a nivel estatal contenida en la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva (en adelante LOD), ley que invoca de forma genérica —al margen de la fuente competencial que esgrime para determinadas previsiones— la competencia del "Estado para dictar aquellos preceptos relativos a su propia organización y los que se refieren a los intereses que afectan al deporte estatal federado en su conjunto", y lo dispuesto en el artículo 149.1.16 ª de la Constitución (disposición final primera LOD).

66. En lo que se refiere a la competencia estatal reconocida por el artículo 149.1.16 ª CE, "Bases y coordinación general de la sanidad", esta debe cohonestarse con la del artículo 18 EAPV, que atribuye a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior.

67. En materia sanitaria, según la STC 98/2004, de 25 de mayo, "ni la fijación de las bases ni la coordinación general a la que también se refiere la regla 16 del art. 149.1 CE (que persigue la integración de la diversidad de las partes o subsistemas en el conjunto o sistema, evitando contradicciones, y reduciendo disfunciones según SSTC 32/1983, de 28 de abril, F. 2; 42/1983, de 20 de mayo, F. 3; 80/1985, de 4 de julio, F. 2), deben llegar a tal grado de desarrollo que dejen vacías de contenido las correspondientes competencias que las Comunidades Autónomas hayan asumido en la materia (STC 32/1983, de 28 de abril, F. 2)".

68. Conforme a ese esquema, cabría decir, desde la perspectiva deportiva, que la Comunidad Autónoma ostenta competencias para la ordenación del deporte vasco y puede desplegar dicha competencia, como ocurre en el anteproyecto, estableciendo un regulación dirigida a combatir el dopaje; mientras que desde la perspectiva sanitaria, a partir de las bases establecidas por el Estado, que han de consistir en un común denominador normativo dirigido a asegurar de manera unitaria y en condiciones de igualdad los intereses generales, la Comunidad Autónoma puede, en defensa de su propio interés, "introducir las peculiaridades que estime convenientes y oportunas, dentro del marco competencial que en la materia le asigne su Estatuto" (SSTC 32/1981; 1/1982; 32/1983; 48 y 49/1988; 69/1988; y otras más recientes como SSTC 149/1991; 141/1993; 109/2003; etc.).

69. Señalar asimismo que determinados preceptos de la LOD tienen naturaleza orgánica (disposición final segunda). Con ocasión de nuestro meritado dictamen ya tuvimos ocasión de reflexionar ampliamente sobre la materia. Solo cabe añadir que, en la medida en que aquellos afectan de manera muy tangencial a los aspectos a reformar, no se observa la existencia de límite alguno para el legislador autonómico, derivado de tal calificación, para normar sobre la "materia" del dopaje en el deporte en el ámbito de la Comunidad Autónoma. (SSTC 127/1994, 61/1997).

70. Recordar asimismo que inicialmente, respecto de los artículos 12.9, 19.1 y 21.1 de la LCD, surgieron discrepancias competenciales entre el Estado y la CAPV que llevaron a aquel a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra los mismos. Si bien, finalmente, dichas diferencias fueron solventadas por Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma de fecha 13 de marzo de 2013 (BOE nº 99, de 25 de abril de 2013). Los citados artículos son objeto de adecuación en los términos del acuerdo.

71. Tampoco podemos olvidar la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte de 2005, "Convenio de la Unesco", ratificada por España y que, en virtud de su artículo 4.1 y 5, dispone que los estados parte se comprometen a respetar los principios del CMA como base, adoptando las medidas apropiadas para cumplir con sus obligaciones, que podrán comprender medidas legislativas, reglamentos, políticas o disposiciones administrativas u otras medidas que puedan complementar al CMA.

72. En esta materia, el legislador autonómico está incorporando a su normativa las previsiones contenidas en el CMA derivadas del Convenio de la Unesco. Al respecto, tal y como ha reconocido reiteradamente el Tribunal Constitucional no existe razón alguna para objetar que una Comunidad Autónoma pueda, en el ámbito de su competencia, ejecutar el derecho internacional. Así, la ejecución de los convenios y tratados internacionales, en lo que afecten a las materias atribuidas a la competencia de las comunidades autónomas, no supone, como resulta evidente, atribución de una competencia nueva, distinta de las que en virtud de otros preceptos ya ostenta la respectiva comunidad autónoma (STC 252/1988).

73. Por ello, la ejecución del derecho comunitario o internacional corresponde a quien materialmente ostente la competencia, según las reglas de derecho interno, puesto que "no existe una competencia específica para la ejecución del Derecho comunitario" (SSTC 236/1991 y 79/1992). En todo caso el ejercicio de las competencias propias se deben articular de modo tal que "sin invadir el ámbito competencial ajeno, no obstaculicen el desempeño de las funciones que la Constitución y los Estatutos les atribuye ni echen cargas innecesarias sobre los administrados" (SSTC 252/1988 y 79/1992).

74. Respecto a las competencias de los órganos forales de los territorios históricos, el artículo 7.b).6 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de relaciones entre las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y los órganos forales de sus territorios históricos (LTH), les confiere el desarrollo y ejecución de las normas autonómicas en materia de fomento del deporte, programas de deporte escolar y deporte para todos, aspectos sobre los que el anteproyecto no incide.

75. De forma consecuente con lo dispuesto en el artículo 6 LTH, la LDPV atribuye a las instituciones comunes la competencia en materia de "regulación de la prevención, control y represión del dopaje" [artículo 4.2.q) LDPV], previsión cuya vigencia no fue afectada por la LCD, ni por la aprobación del presente anteproyecto.

76. Tampoco el anteproyecto afecta, en manera alguna, a las competencias municipales que, según establece la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local, en su artículo 25. 2.l), se circunscriben a la materia de "actividades o instalaciones culturales y deportivas".

77. En suma, ningún problema vemos al contenido del anteproyecto en tanto que resulta ejercicio legítimo de las competencias de la Comunidad Autónoma.

78. Desde la perspectiva organizativa, también se encuentra concernido el título competencial contenido en el artículo 10.2 EAPV, que atribuye a la Comunidad Autónoma la organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno. Como indicó la STC 50/1999 (FJ 3), la competencia relativa a la libre organización de la propia Administración autonómica es algo inherente a la autonomía, que en tanto que competencia exclusiva tiene como único contenido "la potestad para crear, modificar y suprimir los órganos, unidades administrativas o entidades que configuran las respectivas Administraciones autonómicas o dependende ellas".

79. Por su parte, al abordar los procedimientos disciplinarios se cuenta con el soporte de la competencia sobre normas procesales y de procedimientos administrativos que se deriven de las especialidades del derecho sustantivo y de la organización propia del País Vasco (artículo 10.6 EAPV).

V EXAMEN DEL CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO

A) Observaciones generales:

80. Como ya hemos manifestado anteriormente, el anteproyecto supone una modificación parcial de lo establecido en la LCD, se trata de una reforma que básicamente responde a la obligación de adecuar la vigente LCD al citado nuevo código mundial, aprobado en

la IV Conferencia Mundial Antidopaje que se celebró en Johannesburgo, Sudáfrica, los días 12 a 15 de noviembre de 2013, y que entró en vigor el 1 de enero de 2015.

81. Tal y como se manifiesta en la memoria, la iniciativa normativa viene a garantizar el principio de seguridad jurídica, en la medida que se desea crear en el ya complejo ámbito jurídico de la lucha contra el dopaje un entorno de certidumbre y evitar colisiones con el marco jurídico internacional, que demanda una armonización.

82. Para la lucha contra el dopaje se creó la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), como una fundación de derecho privado, sometida al derecho suizo. La AMA aprobó el CMA, que son normas que no tienen carácter vinculante para los estados, por lo que fue necesario crear un instrumento de derecho público internacional al que los estados pudieran vincularse.

83. Esto se logró mediante la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, aprobada por la UNESCO, en su sesión de 18 de noviembre de 2005. La misma fue ratificada por España y publicada en el Boletín Oficial del Estado, pasando a formar parte del ordenamiento jurídico interno, conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución. Aunque el texto del CMA no forma parte integrante de la Convención, esta establece expresamente, con miras a coordinar en el plano nacional e internacional las actividades de lucha contra el dopaje en el deporte, la obligación de las legislaciones nacionales de respetar los principios del código.

84. En la tipificación de las infracciones en materia de dopaje, el nuevo código mantiene las infracciones del vigente código de 2009, pero se añaden nuevas conductas penadas. Se incluye la posibilidad de que las muestras biológicas sean analizadas por laboratorios que no cuenten con la acreditación de la AMA, pero sí con su aprobación. Se modifican las sanciones, incrementándose de forma sustancial los periodos de suspensión. Igualmente, en consonancia con el CMA, se establece un nuevo periodo de prescripción de 10 años.

85. Asimismo, debe señalarse que otro de los objetivos de la iniciativa normativa es aprovechar la modificación de la LCD para reconocer expresamente a la AVA como el órgano especializado encargado de desarrollar las funciones atribuidas en el artículo 10 de la LCD a la Administración General de la CAPV, encarnando la representación de la organización antidopaje en el País Vasco. La AVA ya figura expresamente reconocida en el Decreto 193/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional de departamento, como un servicio de la Dirección de Juventud y Deportes.

86. Por último, el texto incorpora el contenido del Acuerdo de la Comisión Bilateral en relación con la LCD.

87. El texto analizado, en la medida en que se limita a trascribir lo anteriormente reseñado, no presenta discrepancia alguna que le impida una integración adecuada en el ordenamiento vigente en la materia. Únicamente queremos reseñar aquellos aspectos que, a nuestro juicio, se deberían completar o sobre los que se debería reflexionar a los efectos de una mejor regulación en la materia.

B) La Agencia Vasca Antidopaje:

88. Una de las novedades más significativas consiste en, tal y como se expresa en la exposición de motivos, el "reconocimiento" de la AVA, como el servicio especializado encargado de desarrollar las funciones atribuidas en el artículo 10 de la LCD a la Administración pública de la CAPV.

89. Inicialmente, con ocasión de la tramitación del anteproyecto que dio lugar a la LCD, la AVA fue configurada como un organismo de derecho público, al que se le dotaba de personalidad jurídica propia e independiente de la Administración General de la CAPV.

90. Dicha concepción fue objeto de diferentes apreciaciones que dieron como resultado que en el texto definitivo de la LCD no se contemplara la AVA de manera alguna. En su lugar, la fórmula escogida fue la de encomendar a la Administración pública de la CAPV el desarrollo de las funciones en la materia a través de la configuración de las estructuras administrativas necesarias a tal fin.

91. Este mandato fue concretado posteriormente mediante el ya citado Decreto 193/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura. En el mismo se determinó que se ubicará en la Dirección de Juventud y Deportes el servicio administrativo Agencia Vasca Antidopaje.

92. No siendo lo anterior suficiente, el anteproyecto pretende dar un mayor grado de visibilidad a la agencia, encomendándole directamente en el texto legal el desarrollo de las funciones en la materia.

93. Con la modificación proyectada no se pretende la creación de ningún órgano de la Administración Institucional, puesto que la norma no contiene los elementos necesarios que debería contener para tal fin. Sin embargo, no se realiza manifestación alguna sobre la naturaleza de la AVA, lo cual obliga al interprete jurídico a un ejercicio deductivo.

94. Es evidente que el reconocimiento/creación proyectado constituye una manifestación de la potestad genérica de autoorganización que el EAPV confiere a la Comunidad

Autónoma para la creación, modificación y supresión de órganos, unidades administrativas o entidades que constituyen la Administración autonómica.

95. También es cierto que esta potestad debe de ordenarse a través de unos criterios y reglas que permitan configurar de una manera ordenada la estructura administrativa, estableciendo los requisitos e instrumentos necesarios y determinando la posición de cada estructura en el sistema administrativo.

96. A día de hoy, nuestro ordenamiento autonómico carece de una norma propia de organización, con rango de ley, que otorgue pautas en dicho sentido. Ahora bien, eso no quiere decir que no existan criterios al respecto para la generación de las diferentes estructuras. Prueba de ello lo constituye el proyecto de Ley del sector público vasco, informado por esta Comisión, que, con la intención de cubrir dicha carencia, pretende plasmar legalmente los criterios a seguir en la organización administrativa del entramado institucional vasco.

97. Dicho proyecto pone de manifiesto los esquemas y criterios organizativos manejados en la actualidad por la Administración de la CAPV que, con pequeños matices, siguen el esquema clásico de la teoría organizativa administrativa reflejado tanto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LRJPAC), como en la próximamente vigente, que sustituye a la anterior, Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público (LRJSP).

98. Así, en la teoría organizativa clásica, cuando hablamos de las diferentes estructuras que se pueden configurar dentro de la Administración General y sus organismos autónomos se suele diferenciar entre órganos y unidades administrativas. Las unidades administrativas son los elementos básicos de la organización, que pueden ser más o menos complejas, se crean a través de las relaciones de puestos de trabajo y se integran en un determinado órgano. Existen, por otra parte, los órganos administrativos que son unidades administrativas a las que se les atribuyen funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo. Estas pueden ser de diferente grado según el nivel que ocupen en la escala organizativa, no estando sujetas al principio de reserva de ley y correspondiendo a cada Administración establecer las normas que rigen su creación

99. Parece evidente que, en nuestro caso, dada la eficacia de los actos de la AVA ante terceros, estaríamos ante un órgano administrativo. En este sentido, para la creación/reconocimiento de los mismos se deberían cumplir los requisitos que con carácter básico se recogen en el artículo 11 (apartados 2 y 3) de la LRJPAC, que son idénticos a los recogidos en el proyecto de Ley del sector público vasco e idénticos a

los contenidos en el artículo 5 de la próximamente vigente LRJSP, siendo los siguientes:

- Determinación de su forma de integración en la respectiva Administración y su dependencia jerárquica.

- Delimitación de sus funciones y competencias.

- Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.

100. En el anteproyecto se ha optado por una fórmula escueta que no satisface de manera completa los requisitos mínimos citados, ni otros que, derivados de los anteriores, se antojan imprescindibles para dotar a la AVA de una mínima seguridad jurídica.

101. Esta materia no está reservada en bloque a la ley por la Constitución, por lo que suele regularse directamente por cada Administración pública. Ahora bien, que no requiera una formulación legal no quiere decir que, si se opta por ella, se pueda eludir cumplir los requisitos mínimos exigidos a tal fin.

102. En la formulación escogida, aunque se suponga, no se atisba la naturaleza jurídica del órgano que se pretende crear. Tampoco entendemos suficientemente satisfechos los requisitos relativos a su forma de integración y su dependencia jerárquica, aspectos que se deberían aclarar para conocer su modo de actuación.

103. En todo caso, se deberían concretar, de manera general, algunos aspectos relacionados con sus potestades, funciones, organización y procedimientos de actuación que, dado la entidad del órgano, deberían ser desarrollados mediante la colaboración reglamentaria.

104. Finalmente, tal y como hemos manifestado anteriormente, en el expediente no figura apartado relativo a la dotación de créditos para su funcionamiento, aspecto que debería ser completado en el expediente.

C) Otras observaciones al articulado:

105. Ya hemos expresado que los **artículos 12.9, 19.1 y 21.1** responden a la traslación del Acuerdo de la Comisión Bilateral en relación con la LCD.

106. Respecto al resto de las reformas, que pretenden adaptar los dictados del CMA a la LCD, no presentan cuestiones especialmente relevantes, siendo nuestros comentarios destinados a la mejora jurídica de lo proyectado.

107. En el **artículo 18** se ha modificado el apartado 3, siguiendo el artículo 6.1 de CMA, para posibilitar que las muestras puedan ser analizadas también por laboratorios aprobados por la AMA. Este tipo de laboratorios no cuentan con la acreditación de aquella, pero se hace necesaria su colaboración por una razón de costes y de acceso geográfico. Para ello, la AMA se asegura de que el laboratorio satisface los altos estándares de análisis y de custodia requeridos por ella.

108. Cabe reseñar que el CMA solo obliga a que las muestras sean analizadas por ambos tipos de laboratorios en el caso de que se trate de sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un deportista, permitiendo, para el resto de casos, que puedan utilizarse otro tipo de laboratorios siempre que los resultados sean fiables.

109. Asimismo, convendría que se reflexionase sobre la inclusión de la posibilidad prevista en el artículo 20.2 de la LOD, que permite reconocer también la validez de los análisis practicados por los laboratorios que ya cuentan con homologación estatal. En todo caso, reseñar que la elección del laboratorio dependerá de la organización antidopaje responsable de la gestión de los resultados.

110. El **artículo 22 bis** introduce la suspensión automática de la licencia después de un resultado analítico adverso por un método prohibido o una sustancia prohibida distinta de una sustancia específica. Sobre esta cuestión debemos advertir que el CMA establece que esta suspensión se impondrá tras llevar a cabo los procesos de revisión y notificación previstos en sus artículos 7.2, 7.3 y 7.5. Al respecto, el anteproyecto únicamente contempla los procesos relativos a la revisión, obviando las determinaciones relativas a la notificación al término de la revisión de los resultados analíticos adversos y la revisión de los resultados atípicos en el pasaporte y de los resultados adversos en el pasaporte.

111. Por otra parte, tampoco se menciona en el texto la posibilidad de levantar la suspensión en los casos en los que se demuestre al tribunal de expertos que en la infracción está probablemente involucrado un producto contaminado.

112. En este ámbito, la reforma no ha contemplado la suspensión provisional optativa, basada en un resultado analítico adverso por sustancias específicas, productos contaminados u otras infracciones de las normas antidopaje. Al respecto, no se encuentra fundamentación en el expediente que nos ayude a comprender tal opción.

113. En el **apartado 1 del artículo 23** se tipifican dos nuevas infracciones muy graves, relativas a la complicidad y a la asociación prohibida, siguiendo lo estipulado en los artículos 2.9 y 2.10 del CMA. Cabe añadir que, en el caso de la asociación prohibida, el

artículo únicamente parece recoger los supuestos en los que la persona de apoyo al deportista no está a sujeta a la autoridad de una organización antidopaje, no apreciándose la inclusión de la referencia en el caso de sujeción y que esté cumpliendo el periodo de suspensión. Asimismo, no se observa la tipificación de la asociación con la persona que está actuando como encubridor o intermediario de las personas descritas.

114. La nueva redacción dada al **artículo 24** pretende introducir el régimen sancionador previsto en el CMA, junto con los criterios que permiten la graduación de los periodos de suspensión. Ahora bien, junto con lo anterior, el texto mantiene la tipificación de las sanciones recogidas en los tres primeros apartados del texto vigente. Esto provoca que la mayoría de las infracciones se contemplen por duplicado, lo que no contribuye a la claridad ni a la seguridad jurídica del texto.

115. Así, inicialmente, se recogen la infracción junto con otras que responden a similar gravedad estableciéndose una horquilla de suspensión y, en su caso, de multa. Por otra parte, las modificaciones introducidas siguen un patrón distinto identificando la conducta concreta para imponer una sanción fija que luego puede ser rebajada en un periodo concreto en función de determinadas circunstancias atenuantes.

116. Se da la particularidad de que algunas sanciones pueden llegar a ser inferiores a las marcadas con carácter general en las horquillas de los tres primeros apartados (por ejemplo, la señalada en el apartado 8º en relación con el 1º). Por ello, convendría revisar la redacción dada a los tres primeros apartados, en relación con el resto, a los efectos de dotar de coherencia y seguridad jurídica a la materia. O, incluso, podrá valorarse su supresión, integrando en el lugar adecuado aquellos aspectos no recogidos en los apartados siguientes.

117. Por otra parte, cabría reflexionar sobre la oportunidad de integrar los criterios de aplicación de los periodos de suspensión dentro del artículo 28, dedicado también a los criterios para la imposición de sanciones. De esta forma se evitaría la pérdida de sistematicidad que provocará dificultades a la hora de imponer los criterios en la materia.

118. El **artículo 24 bis** incluye las previsiones del CMA relativas a las sanciones por infracciones múltiples. En el mismo se echa en falta la referencia a la posibilidad de que el periodo de suspensión pueda ser objeto de reducción adicional en los casos contemplados en el artículo 10.6 del CMA.

119. Por su parte, el 2º párrafo quedaría más completo si se indicase que el periodo de suspensión será desde ocho años hasta la suspensión de por vida.

120. Asimismo la expresión empleada en el párrafo 4 relativa a que la organización antidopaje se haya "esforzado razonablemente para presentar la notificación", aun proviniendo del CMA, incorpora a nuestro ordenamiento conceptos jurídicos indeterminados que deberían ser descartados. En este supuesto sería más adecuado referenciar que la organización antidopaje debería acreditar el intento de la práctica de la notificación, en los términos previstos en la normativa establecida al respecto.

121. El **artículo 30** supone la traslación al texto legal del artículo 108 del CMA, relativo a la anulación de resultados en competiciones posteriores a la recogida de muestras o a la comisión de una infracción de las normas antidopaje. Ahora bien, en el mismo no se incluye, tal y como se realiza en el CMA, el periodo límite de dicha medida "hasta el inicio de cualquier suspensión provisional o periodo de suspensión".

122. Las previsiones del **artículo 38 bis** ya han sido objeto de un riguroso escrutinio por parte de la AVPD sin que proceda insistir sobre las consideraciones que efectúa y, que como anteriormente hemos expuesto, la práctica totalidad de las mismas ya han sido objeto de acogimiento en el texto.

123. Únicamente advertir que en el mismo no se ha incluido la salvedad, en relación a la publicación de resultados de menores, recogida en el artículo 14.3.6 del CMA, que apunta a que cuando el deportista u otra persona que haya sido hallado culpable sea menor no será necesaria la comunicación pública obligatoria y que la comunicación pública, en el caso de que afecte a un menor, será proporcional a los hechos y circunstancias de caso.

D) Observaciones de técnica normativa:

124. En la materia de técnica normativa la Comisión recuerda que el anteproyecto se debe ajustar a las Directrices para la elaboración de proyectos de ley, decretos, órdenes y resoluciones, aprobadas por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de marzo de 1993, aplicables en virtud de la disposición adicional tercera de la LPEDG.

125. Siguiendo lo expresado en las mismas, se formulan las siguientes observaciones a fin de lograr un producto normativo técnicamente más acabado.

126. El título de la norma modificativa deberá explicitar su carácter de tal. Así las normas que tengan por objeto la modificación o derogación de otras anteriores deberán indicar sumariamente en su título, además de la materia regulada, el objeto o finalidad de la misma, modificación o derogación,

127. El anteproyecto informado consiste en una norma de modificación de diferentes artículos que, según las directrices referidas, deben abordarse no de forma agrupada, en un artículo único, sino cada modificación en un artículo independiente, que serán numerados ordinalmente.

128. Por otra parte, el título del artículo modificativo deberá citar el número y el título del artículo a modificar, si lo tuviere, y de la norma modificada. En este sentido, los apartados existentes podrían constituirse en artículos en la mayoría de los casos.

129. Las salvedades serían las correspondientes a las modificaciones de los artículos 13, 23, 30 y 37, para las que se emplea más de un apartado, que deberían ser agrupadas en un artículo.

130. En la composición de las disposiciones transitorias es preferible la denominación correlativa de disposición transitoria primera, disposición transitoria segunda, frente a la titulación genérica de la parte como disposiciones transitorias y luego su enumeración como 1 y 2.

131. Asimismo, aunque no se incluye en el texto, convendría reemplazan la mención que se realiza en el artículo 36.2 a la derogada Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, sustituyéndola por la vigente. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

132. Finalmente, en el artículo 38 bis 4. convendría sustituir la palabra "comunicación" por "divulgación", para evitar equívocos con otra figura jurídica diferente

CONCLUSIÓN

La Comisión dictamina que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo del presente dictamen, puede elevarse al Consejo de Gobierno para su aprobación el anteproyecto de ley de referencia.

Lo que certificamos en Vitoria-Gasteiz, a 22 de enero de 2016 para su conocimiento y consideración, recordándole la obligación prevista en el artículo 30.2 de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de comunicar a esta Comisión la disposición o resolución que finalmente se adopte, en la forma y plazo que se establecen en el artículo 34 del Reglamento de Organización y Funcionamiento (aprobado por Decreto 167/2006, de 12 de septiembre).

Vº Bº:

Jesús María Alonso Quilchano,

Secretario

Sabino Torre Díez,

Presidente

FIRMADO DIGITALMENTE POR:

Firmante: **AHOLKU BATZORDE JURIDIKOA-COMISION JURIDICA ASESORA**
Fecha de la firma: **22/01/2016 11:42:32**
Validación de la firma: **Correcta**

AHOLKU BATZORDE JURIDIKOA
COMISIÓN JURÍDICA ASESORA
EUSKADI

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURAKO SAILBURUA

Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak, 2016ko urtarrilaren 21ean egindako osoko bilkuran, ertzean adierazitako kideak bertaratu direla, zure **kontsulta** aztertu du (erregistro-zenbakia: 192/2015), **Kiroleko Dopinaren aurkako Legea aldatzeko legearen aurreproiektuari buruzkoa (Erref.: DNCG_LEY_42158/2014_06**).

Hausnartu, eta aho batez eman du irizpen hau. Batzordearen iritzia Calonge Crespo batzordekideak adierazi du.

BATZORDEBURUA:
Sabino Torre Díez jauna.

PRESIDENTEORDEA:
Xabier Unanue Ortega jauna

KIDEAK:
Maria Teresa Astigarraga Goenaga andrea.
Luis Mª Eskubi Juaristi jauna.
Iñaki Beitia Ruiz de Arbulo jauna.
Gorka Erlantz Zorrozua Aierbe jauna.
Imanol Zubizarreta Arteche jauna.
Ion Gurutz Echave Aranzabal jauna.
Iñaki Calonge Crespo jauna.

IDAZKARIA:
Jesús Mª Alonso Quilchano jauna.

5/2016 ZENBAKIDUN IRIZPENA

AURREKARIAK

1. Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuak, 2015eko abenduaren 1ean emandako Aginduaren bidez (egun bereko sarrera-erregistroa du), goian aipatutako lege-aurreproiektuari buruzko kontsulta egin zion Batzordeari.

2. Sailburuaren igortze-aginduaz eta aurreproiektuaren testuaz gain, honako hauek ditu espedienteak:

   a) Agindua, 2014ko azaroaren 3koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuarena, Kiroleko Dopinaren aurkako Legea aldatzeko lege-aurreproiektua prestatzeko prozedurari hasiera ematen diona.

b) Aurreproiektuaren memoria, 2014ko azaroaren 21ekoa, saileko Gazteria eta Kirol Zuzendaritzak prestatutakoa.

c) Agindua, 2014ko azaroaren 24koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuarena, Kiroleko Dopinaren aurkako Legea aldatzeko lege-aurreproiektua aurrez onartzekoa. Agindu horretan, arauzko testu debiduna dago.

d) Euskadiko Kirol Batzordeak 2014ko urriaren 29an egindako bileraren aktari dagokion ziurtagiria.

e) Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen Zuzendaritzaren ofizioak, 2015eko otsailaren 6koak. Haien bidez, lege-aurreproiektuaren kopia bana bidali zitzaien Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru-aldundiei; Datuak Babesteko Euskal Bulegoari; Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako medikuen elkargo ofizialei eta Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Lizentziadunen Elkargo Ofizialari; Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Kirol Federazioen Elkarteari; Euskal Kirol Federazioen Batasunari; eta EKIME elkarteari (Euskadiko Kirol Medikuntza Elkartea).

f) Ebazpena, 2015eko otsailaren 6koa, Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuordearena, aurreproiektua jendaurrean jartzekoa (2015eko otsailaren 18an argitaratu zen Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian).

g) Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritzaren txostena, 2015eko otsailaren 11koa.

h) Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren txostena, 2015eko martxoaren 9koa.

i) Sailaren txosten juridikoa, 2015eko uztailaren 28koa, Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen Zuzendaritzak egindakoa.

j) Ofizioa, 2015eko martxoaren 13koa, Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen Zuzendaritzarena. Horren bidez, aurreproiektuaren kopia bat bidali zitzaion Osasunaren Babeserako Espainiako Agentziari.

k) Enpresen gaineko eraginari buruzko txostena, 2015eko ekainaren 5ekoa, Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen Zuzendaritzaren aholkularitza juridikoak egindakoa.

l) Jasotako alegazioak baloratzeko txostena, 2015eko uztailaren 15ekoa.

m) 14/15 Irizpena, 2015eko irailaren 25ekoa, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearena.

n) Jasotako alegazioak baloratzeko txostena, 2015eko azaroaren 14koa.

o) Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren txostena, 2015eko azaroaren 16koa.

p) Generoaren ikuspegitik garrantzirik ez izatea justifikatzen duen txostena.

q) Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen txostena, 2015eko abenduaren 22koa.

GOGOETAK

I BATZORDEAREN ESKU-HARTZEA

3. Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko azaroaren 24ko 9/2004 Legeak 3.1. a) artikuluan xedatutakoa betez eman da irizpen hau. Idatz-zati horretan jasotakoaren arabera, Batzordearen kontsulta-eginkizunaren baitan dira "lege-aurreproiektuak", edozein dela haien gaia edo xedea; baldin eta atal horretan bertan zehazten diren salbuespenak betetzen ez badira. Kasu honetan, ez gaude era horretako salbuespen baten aurrean.

II LEGE-AURREPROIEKTUAREN DESKRIBAPENA

4. Irizpenaren xede den testuak zioen azalpena eta artikulu bakarra, bi xedapen iragankor eta azken xedapen bat ditu. Artikuluan indarrean den Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legean egingo diren 28 aldaketak barneratzen dira.

5. Azalpenari dagokion zatian, araudi berria arrazoitzeko zioak deskribatzen dira, hots: i) Kiroleko Dopinaren aurkako Legea 2015eko urtarrilaren 1ean indarrean sartu zen Dopinaren aurkako Mundu Kode berrira egokitzea; ii) Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia Euskadiko administrazio publikoari esleitutako eginkizunak betetzeaz arduratzen den zerbitzu espezializatu modura aitortzea; eta, azkenik, iii) Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Bitariko Lankidetza Batzordeak (aurrerantzean Bitariko Lankidetza Batzordea) Kiroleko Dopinaren aurkako Legeari buruz 2013ko martxoaren 13an lortutako akordioaren edukia barneratzea.

6. Azpimarratzen da aldaketa adierazgarrienak, Dopinaren aurkako Mundu Kode berriaren ondoriozkoak, hauek direla: beste jokabide batzuk zehatzea; lagin biologikoak Dopinaren aurkako Mundu Agentziaren egiaztapena ez baina onarpena baduten laborategietan aztertzeko aukera; zehapenak aldatu eta etendura-epeak nabarmen luzatzea; eta 10 urteko preskripzio-epea ezartzea.

7. Hau da artikulu bakar horretako atalen edukia:

8. Lehen zenbakian beste modu batean idazten da Kiroleko Dopinaren aurkako Legeko 10. artikuluko 2. zenbakia, eta adierazten da Dopinaren aurkako Euskal Agentzia izango dela arlo horretan EAEko administrazio publikoari legez dagozkion funtzioak beteko dituen organoa.

9. 2. zenbakiak 12. artikuluko 9. zenbakia aldatzen du, eta Bitariko Batzordearen Akordioan haren inguruan emandako interpretazioa jasotzen. Hartan, kontroletatik kanpo uzten dira estatuko kirol-jarduera ofizialak eta nazioarteko kirol federazioek edo dagokion erakunde olinpiko edo paralinpikoak antolatutako nazioarteko kirol-lehiaketak. Gainera, ezartzen da Euskadikoa ez den estatuko edo erkidegoko lizentzia duten kirolariei lehiaketatik kanpo kontrolak egiteko, Dopinaren Aurkako Estatuko Agentziak edo beste agentzien arduradunek eskatu beharko dutela, eta haiekin hitzarmen bat sinatuta egingo direla.

10. Hirugarren, laugarren eta bosgarren zenbakiak 13. artikulua aldatzekoak dira. Artikulu horri hiru zenbaki erantsi zaizkio: 11., 12. eta 13 zenbakiak. Horrela, proba-sistemaren eta dopinaren aurkako proben baliozkotasunari buruzko presuntzioaren konfigurazioa Dopinaren aurkako Mundu Kodeari egokitzen zaio. Halaber, Dopinaren aurkako Mundu Agentziak onartutako metodo analitikoak edo erabakitzeko mugak baliozkotzat jotzen dira, baldin eta kanpo-berrikusketa izan eta komunitate zientifikoari kontsultatu bazaio. Hori guztiori, Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 2.1.1 eta 3.2.1 artikuluetan adierazitakoari jarraiki.

11. Seigarren zenbakiak Kiroleko Dopinaren aurkako Legearen 16. artikuluko 3. zenbakia aldatzen du, kirolariari analisien emaitza jakinarazi aurretik laginari buruzko analisi osagarriak egiteko aukerari buruzkoa, Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 6.5. artikuluan xedatutakoarekin bat.

12. Zazpigarren zenbakiak Kiroleko Dopinaren aurkako Legearen 18. artikuluko 3. zenbakia aldatzen du, eta ezartzen du laginen analisiak DMA agentziak onartutako laborategietan ere egin ahal izango direla, Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 6.1. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

13. Zortzigarren zenbakiak Kiroleko Dopinaren aurkako Legearen 19. artikuluko 1. zenbakia aldatzen du, eta testua Bitariko Batzordean adostutakora egokitzen, ñabardura batekin: EHAAn argitaratuko den zerrenda BOE aldizkarian argitaratuaren osagarri izango dela.

14. Bederatzigarren zenbakian Kiroleko Dopinaren aurkako Legearen 21.1. artikulua aldatzen da, eta hori ere Bitariko Batzordearen Akordioaren ondorio da, eta

administrazioaren zehazpen-araubidetik kanpo uzten ditu estatuko edo nazioarteko kirol-lehiaketa ofizialetan gertatzen diren ekintzak edo ez-betetzeak.

15. Hamargarren zenbakiak artikulu berri bat sortzen du, 22 bis artikulua, "derrigorrezko behin-behineko etendura" izenekoa, eta Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 7.91 artikulukoa ekartzen du legera. Debekatutako metodo batekin edo substantzia espezifiko bat ez den debekaturiko substantzia batekin aurkako analisi-emaitza bat lortzen denean ezarriko da.

16. Hamaikagarren eta hamabigarren zenbakietan arau-hauste larrien bi adibide berri jasotzen dira, Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 2.9 eta 2.10 artikuluetan tipifikatutakotik eratorritakoak: konplizitatea eta debekatutako asoziazioa. Bi horiek Kiroleko Dopinaren aurkako Legearen 23.1. artikuluaaldatzen dute.

17. Hamahirugarren zenbakiak Kiroleko Dopinaren aurkako Legearen 24. artikulua aldatzen du, eta zehapen-araubidea Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 10.2, 10.3, 10.4, 10,5 eta 10.6 artikuluetan ezarritakora egokitzen. Artikulu horretan, aplikagarri diren zehapenak tipifikatzeaz gain, kirolariak duen erantzukizun-mailari dagozkion zenbait arau ezartzen dira, bere jokabidean erakutsitako nahitasuna kontuan hartuz.

18. Bestalde, hamalaugarren zenbakian, artikulu berri bat jasotzen da, 24 bis artikulua, zehapen anizkoitzen ondoriozko zigorrak biltzen dituena, Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 10.7 artikuluaren ildotik.

19. Hamabosgarren eta hamaseigarren zenbakietan, 29. artikuluan bi puntu berri txertatzen dira, diruzko zigorrei eta dopinaren aurkako arau-hausteen ondorioz sortutako gastuak berreskuratzeari buruzkoak, eta hori guztiori Dopinaren aurkako Mundu Kodearekin bat.

20. Hamazazpigarren eta hemezortzigarren zenbakietan, Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 10.10 artikuluaren ildotik, Kiroleko Dopinaren aurkako Legearen 30. artikulua aldatzen da, eta ezartzen da litekeena dela hirugarrenei eragindako kalteak ordaindu behar izatea, eta kontrako emaitza hauteman den lehiaketan lortutako emaitzez gain, beste batzuetan lortutako dominak, puntuak eta sariak kentzeko aukera ere badagoela, ekitate-arrazoiak tartean ez badira.

21. Hemeretzigarren zenbakian, beste artikulu bat eransten da, 31 bis artikulu berria, Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 10.12 artikulua legera ekartzeko. Hartan, etendura batean kirolariak duen estatusa zehazten da.

22. Hogeigarren zenbakiak Kiroleko Dopinaren aurkako Legearen 34. artikulua aldatzen du, arau-hausteei dagokionez 10 urteko preskripzio-epe bakarra finkatuz, Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 17. artikuluarekin bat.

23. Hogeita batgarren atalak Kiroleko Dopinaren aurkako Legearen 36. artikuluan beste zenbaki bat eransten du, 3. zenbakia, eta hartan ezartzen du administrazioaren zehazpen-arloan, hartan aurreikusten ez denerako eta bateragarri badira, dopinari dagozkion diziplina-prozeduretan aplika daitezkeen eskumenari buruzko irizpideak aplikatuko direla.

24. Hogeita bigarrenetik hogeita seigarrenera bitarteko zenbakietan bost atal eransten zaizkio Kiroleko Dopinaren aurkako Legearen 37. artikuluari. Dopinaren aurkako kontrol bateko emaitzen kudeaketari eta dopinaren aurkako erakundeen esku-hartzearen ondorioz sortutako balizko gatazkei buruzkoak dira, eta Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 7.1. artikulua legera ekartzeko helburua dute.

25. Hogeita zazpigarren zenbakian, beste artikulu bat eransten da, 38 bis artikulua, zigorren hedapenari buruzkoa, Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 14.3. artikuluan adierazitakoari jarraiki.

26. Azkenik, hogeita zortzigarren zenbakiak 38 ter artikulua gaineratzen du, Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 13.1 artikuluan ezarritako irizpidea jasotzeko, hots, dopinaren alorrean ebazpenak berrikustearen eremuan ez dela mugarik egongo, egindako eskaerekin bat etorriko dela eta ezin izango dela hasierako egoera okertu.

27. Xedapen iragankorretan ezartzen da dopinaren alorrean arau-hausteak, legea indarrean sartu aurretik egindakoak, eta dopina zigortzeko diziplina-prozedurak, indarren sartu aurretikoak, aurreko araudiaren arabera arautuko direla. Horrez gain, zehaztapen bat gaineratzen da, espedientepean dagoen pertsonaren eskuetan uzten duena arau berria edo aurrekoa aplikatzeari buruzko erabakia.

28. Azkenik, azken xedapenak dio EHAAn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko dela indarrean.

III EGITEA ETA IZAPIDETZEA

29. Lege-aurreproiektua egiteko baliatu behar den prozedura abenduaren 22ko 8/2003 Legeak ezarritakoa da (Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurari buruzko Legea, aurrerantzean XOEPL).

30. Hori gorabehera, batzorde honek aditzera emana du zer desberdintasun dauden prozeduraz egin beharreko balorazioan, kontuan hartuta izapidetzeak dakarren

produktuaren izaera berezia, ez baita gauza bera erregelamendua edo ekimen legegilea izatea. Legebiltzarrean garatzen da bete-betean legegintza-prozedura, eta, Konstituzioak (EK), Autonomia Estatutuak edo, batzuetan, lege organikoek erabakitzeko baldintzak jartzen dituzten kasu espezifikoetan izan ezik, bete behar duten eskakizun bakarra da behar diren aurrekariak ondoan izatea, Legebiltzarrak haiei buruzko iritzia eman ahal izan dezan, eta, hala behar duenean, finantzaketa-eranskin egokia (Jaurlaritzaren Legearen 57. artikulua eta Ganberaren Erregelamenduaren 133. artikulua).

31. Eta beste hainbatetan ere esan dugunez, xedapen orokorrak egiteko prozeduraren legeak Gobernuaren jarduera bideratu nahi izan du, xedapen orokorrak egitean darabilen metodologia bera erabil dezan lege-aurreproiektuak idaztean. Hartara, XOEPLren zioen adierazpenak dioenez, legegintzako ahala duenaren eginkizuna erraztu egingo da, hobeto funtsatutako proiektuak aurkeztuko baitzaizkio eztabaidatu eta erabakitzeko, helburuak iristeko egokiago eta finago den teknika juridikoz artikuluka banatuak.

32. Hau da, xedapen orokorrak egiteko prozeduraren legea ez da parametroa arauaren balioa epaitzeko, aitzitik, bide bat ematen du ekimenari lotutako elementu garrantzitsu guztiak biltzeko, hala nola baldintzatzaile juridikoak eta ekonomikoak, ukitzen duen errealitatean eta hartzaileengan duen eragina eta abar, bai eta ikusteko ere zer neurritan dauden elkarri egokituta ekimena eta lortu nahi diren helburuak, eta ea horiek lortu ahal izango diren indarrean jartzendenean.

33. Horregatik, espedientea aztertu egingo dugu, irizpenaren xede den testua lortzeko erabilitako prozedura xedapen orokorrak egiteko prozeduraren legean xedatutakoaren araberakoa den ala ez ikusteko.

34. Hasteko agindua eman da, xedapen orokorrak egiteko prozeduraren legearen 5. artikuluan ezarri bezala, legegileak erabakitako edukiarekin, eta lege-aurreproiektua aurrez onartu da xedapen orokorrak egiteko prozeduraren legearen 7.1 artikuluan adierazitako moduan.

35. Espedientean justifikazio-memoria bat jasotzen da. Hartan, dopinaren alorreko Euskadiko eta nazioarteko arauei buruzko azterketa sakona egin ondotik, proposatutako arautzearen helburua azaltzen da, aurrez adierazitako hiru helburuekin lotuta. Memorian, halaber, araudiak eragindako sektoreak, lege-aurreproiektua gaitzen duten oinarri juridikoak eta lege-aurreproiektuaren ildo nagusiak eta eragin ekonomikoa aztertzen dira. Azken atalean, genero-eragina aztertzen da.

36. Eragin ekonomikoa ere aztertzen da, eta adierazten da aurreproiektuak ez duela zertan langile-kopurua edo bitarteko materialena areagotu, eta, horrenbestez, ez dakarrela gastuen igoera adierazgarririk edo diru-sarrera publikoen jaitsierarik. Argudiatzen denez, Dopinaren aurkako Euskal Agentzia berariaz aitortzen den arren, ez da erakunde berri baten sorrera, hark zerbitzu modura funtzionatzen baitu jada eta bere zeregina burutzeko giza baliabide eta baliabide material jakin batzuk baititu, egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen dekretu bidez sortu ostean.

37. Ekimena sustatzen duen organoak aurreproiektuak generoaren ikuspegitik garrantzirik ez izatea justifikatzeko txostena egin du; izan ere, emakume eta gizonen berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 19. artikuluan hura eratzea eskatzen da. Txostenean adierazten denez, aurreproiektuan Gobernu Kontseiluak 2007ko otsailaren 13ko saioan onartutako irizpenetako lehenengoaren 2.1.d) letran ezartzen den salbuespena da aplikatzekoa, izan ere, generoaren ikuspegitik garrantzirik ez duen aldaketa bat da.

38. Txosten juridikoak XOEPLren 7.3. artikuluko eskakizunak betetzen ditu, eta ondoz ondoko hainbat epigrafetan aurreproiektuaren aurrekariak, eskumenak eta edukiaren inguruko azterketa egiten da, eta horri buruzko zerbait ohar egiten, testua hobetu eta egokitze aldera. Azkenik, aurreproiektua izapidetzeko beharrezkoak diren izapideen inguruko azterketa bat egiten da.

39. Xedapen orokorrak egiteko prozeduraren legearen 8.1 artikuluak ezarritakoari jarraituz, testua jendaurrean jartzeko izapidea egin zen. Era berean, entzunaldi-izapidea egin da, 8.3 artikuluan esan bezala, eta testua modu partikularrean helarazi zaie lehen aipatutako erakunde eta elkarteei, eta horiek ez dute ohartarazpenik egin.

40. Halaber, ekimenaren alorrean eskumenak dituzten administrazioei kontsulta egin zaie —foru-aldundiak—, eta ez dute haren inguruko alegaziorik egin.

41. Lege-aurreproiektua Autonomia Erkidegoko administrazio orokorra osatzen duten sail guztietara helarazi da, eta ez da inolako alegaziorik jaso.

42. Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritzak bi ikuspuntutatik eman du irizpena: hizkuntza-araudia betetzearen ikuspuntutik eta euskararen erabileraren normalizazioan daukan eraginaren ikuspuntutik.

43. Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak emakume eta gizonen berdintasunerako legearen 21. artikuluan jasotzen den txostena egin du, eta hartan adierazten denez, egokitzat jotzen da generoaren araberako eraginaren txostena igortzeko salbuespena, lehen irizpenaren 2.1 d) atalean xedatutakoarekin bat etorriz.

44. Orobat, Datuak Babesteko Euskal Bulegoak ere egin du txostena aurreproiektuari buruz, horren testuak datu pertsonalen tratamenduari buruzko xedapenak dituela ikusita; Bulegoak, egin-eginean ere, bere eginkizunen artean baitu datuak babesteko legeak Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenen eremuan bete daitezen zaintzea [Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legearen 17.1.a) artikulua].

45. Datuak Babesteko Euskal Bulegoak bere txostenean eskubidearen konfigurazio konstituzionalari heltzen dio eta, horrez gain, osasun-datuek datu pertsonalen babesaren testuinguruan duten tratamendua aipatzen du. Aurreproiektuaren eduki zehatzaren inguruan, bulegoaren ohartarazpenetako zenbait zigorrak Internet bidez hedatzeari buruzkoak dira. Hori zilegi litzatekeela adierazten da, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 11.2. artikuluaren arabera; izan ere, hedapena lege-izaera formala duen arau batean jasotzen da.

46. Bereziki zalantzagarria iruditzen zaio bulego horrikargu-hartzearen zigorra eta kirolari batek erabilitako substantzia bat publikoki hedatzearekin zer interes publiko lortu nahi den, horretarako medikuaren justifikazioa dagoenean. Haien ustez, informazio horren hedapenak ez luke gainditukо Datu Pertsonalak Babesteari buruzko legearen 4.1. artikuluko proportzionaltasun-testa. Halaber, bulego horrek gomendatzen du Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak bere web-orrian ohartaraztea Internet ez dela jendearentzat eskuragarri den iturria, eta, horrenbestez, argitaratutako informazioa ezin dela gerora beste helburu batzuetarako erabiltzeko tratatu. Eta beste gauza bat ere gomendatzen du: dopinaren aurkako erakundeak dagozkion neurriak har ditzala argitaratutako datuak Interneteko bilatzaileek indexatu ez ditzaten. Azkenik, bulego horrek uste du aurreproiektuak nolabaiteko mugarik gabeko gaikuntza ematen diola dopinaren aurkako erakunde horri, hark erabaki dezan zenbat bidetatik hedatuko duen.

47. Horren inguruan, proposamena egiten duen sailak, testuan Dopinaren aurkako Mundu Kodean adierazten dena errepikatzen dela gogoratu ondoren, adierazten du hartan ez dela hedapenari dagokionez arau-hauste eta zigor-moten arteko bereizketarik egiten; baina zenbait ñabardura egin ditu testua Datu Pertsonalak Babesteari buruzko legean ezarritakoari egokitzeko, hala erabilitako metodo edo substantziari buruzko datuen argitalpenaren inguruan, nola horri dagozkion epeen inguruan. Datuak Babesteko Euskal Bulegoak planteatu dituen gainerako kontuak gogorarazte hutsak dira, legea aplikatzean bete beharreko lege-betebeharrak, eta komenigarriak iruditzen zaizkien gomendio hutsak.

48. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen txostena ere badauka, hura arautzen duen martxoaren 17ko 8/2012 Legearen 3.1.a) artikuluari jarraiki

emandakoa, eta testua egokia iruditzen zaiola adierazten du. Batzorde horrek zenbait ohartarazpen egin ditu lotura bereziko harremanei, etendura-epearen iraupenari eta Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 2.9. artikulua, konplizitateari buruzkoa, legera ekartzeari buruz.

49. Nahiz eta testuaren helburuetako bat "Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia aitortzea" izan, Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzari ez zaio kontsultarik egin, uste baita kontsulta hori egitea ez dela beharrezkoa, jada badagoen zerbitzu bat izaki.

50. Antzeko arrazoiak direla medio, ez da beharrezkotzat jo Funtzio Publikoko Zuzendaritzari kontsulta egitea, ez baita aurreikusten lanpostu berriak sortzerik.

51. Aipagarria da espedientean ez dela Dopinaren Aurkako Euskal Agentziak egun duen egiturari buruzko daturik ematen, ezta haren baliabide ekonomiko eta materialei buruzkorik ere. Hura aipatzetik harago, espedienteak ez du aukerarik ematen gutxi gorabehera jakiteko zer dimentsio, diseinu eta jarduteko protokolo dituen. Agentziak dopinaren aurkako borrokan duen zereginari eta haren helburuei buruzko gogoetarik ere ez da egiten. Halaber, ez da adierazten haren egituraketa ezarritako helburuak betetzeko egokiena den ala ez. Dopinaren aurkako borrokaren problematikari eta gure erkidegoan duen garrantziari buruzko azterketarik ez da jasotzen. Horrek guztiorrek, gure ustez, agentziaren eginkizuna, helburuak eta errealitatea hobeto ulertzeko aukera emango luke.

52. Enpresetan duen eraginari buruzko txostena egin da, Euskadiko Ekintzaileei eta Enpresa Txikiari laguntzeko 2012ko ekainaren 28ko 16/2012 Legeko 6. artikuluan ezartzen den moduan. Hartan, adierazten da ez duela eraginik enpresei dagozkien administrazio-zamaren arloan, testuak ez du baitu inolako zerikusirik haien eraketa, abiarazte eta funtzionamenduarekin.

53. Kirolaren Euskal Kontseiluak aurreproiektuari buruzko txostena egin du, eta aldeko irizpena eman du. Orobat, arlo horretan prozedurakarintzeko premia adierazi zuen eta gaiari buruz dagoen kontzientzia sozial urria azpimarratu.

54. Kontrol Ekonomikoaren Bulegoak ere egin du txostena, eta adierazi du aurreproiektuak ez duela zuzenean eragiten EAEko administrazioaren aurrekontuetan.

55. Azkenik, XOEPLren 10.2. artikuluan jasotzen den izapidea formalki bete dela uler dezakegu. Horrela, bada, dokumentu bat eratu da, izapidearen aurrekarien inguruko laburpen baten ostean, egindako oharrak jasotzen dituena, eta horietako bakoitzari erantzun argudiatua ematen.

56. Finean, antolaketan eta giza baliabideetan adituak diren zuzendaritzen iritzia eta balioespena jasotzea nahiko bagenu ere, XOEPLn aurreikusitako eraketa-prozedura bete egin dela ulertu behar dugu.

IV ESKUMENAK ETA ARAU-ESPARRUA

57. Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko eskumen-banaketaren ikuspegitik, aztergai dugun aurreproiektuak aldatu nahi duen legearen —Kiroleko Dopinaren aurkako Legearen— habilitazio-titulu berberak ditu, eta hari buruzko irizpena emanda daukagu (231/2011 irizpena).

58. Aurreproiektuak Kiroleko Dopinaren aurkako Legean ezarritakoa aldatzen du partzialki. Lege horrek kirol dopinaren alorreko araudia ordezkatzen zuen, hasiera batean, Euskadiko kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legean jasotzen zena.

59. Gure aurreko irizpenean, erreformaren garrantzia kontuan hartuz, eskumenen eta arauen inguruko xehetasunezko azterketa sakona egin zen. Kasu honetan, ordea, aldaketa oso alderdi jakin batzuei buruzkoa da. Horrenbestez, egoeraren inguruko azaleko azalpena egingo dugu soilik, aldaketak eragina duen alderdi horietan erreparatuz.

60. Edozein kasutan, nabarmendu behar da gizarte modernoan kirol-jarduerak, oro har, eta kirol profesionalak, bereziki, lortu duten garrantzia dela medio, horien inguruan dopina sortu dela. Dopinari hiru ikuspegitatik eginzaio aurre, eta, hain zuzen, horiexek dira dopinaren aukako araubidea justifikatzen duten zutabe nagusiak, hots: i) kirolariaren osasuna babestea; ii) lehiakideen arteko aukera-berdintasuna bermatzea; eta iii) kirolaren balioak zaintzea.

61. Arlo horretan, eremu aproposa dago kirol-jarduerak hartzen dituen esparruetan (esate baterako, osasuna, hezkuntza, kultura, ikerketa, heziketa fisikoa, lanbide arautuak edo merkataritza-legeria) herri-administrazioen (estatukoa, erkidegokoa eta tokikoa) eskumenak gurutzatzeko eta haien ekintzak aldiberekoak izateko (Konstituzio Auzitegiaren 194/1998 epaia, urriaren 1ekoa).

62. Azterketa sakona egiteko asmorik gabe, gogorarazi egingo dugu, besterik gabe, arauak bereziki herritarren osasunaren babesaren esparru materialean eragiten duen neurrian, zer dioen Espainiako Konstituzioaren 43.artikuluak: 1. zenbakian herritarrek osasuna babestua izateko duten eskubidea adierazten du, eta 3. zenbakian, agintari publikoek osasun-hezkuntza, hezkuntza fisikoa eta kirola sustatuko dutela, eta aisia behar bezala baliatzen lagunduko dutela. Eta Espainiako Konstituzioaren 53.3 artikuluan xedatutakoaren arabera, printzipio horiek onartu, bete eta babestu egin

behar dira, eta legedia positiboan, jardunbide judizialean eta botere publikoen jardunean horiexek izango dira kontuan. Hain zuzen ere, printzipio horiek legez garatzeak ahalbidetzen du eskubide horiek epaitegien aurrean baliatzea.

63. Halaber, gogora dezagun EAEEren 10.36 artikuluak eskumen osoa ematen diola Euskal Autonomia Erkidegoari kirolaren alorrean, zeinean bete-betean sartzen baitira bai EKL legea bera, bai eta Kiroleko Dopinaren aurkako Legea bera.

64. Arlo horretako gaian ez dago, Estatuari dagokiolako, eskumena oro har modulatzen duen beste eskumenik, salbu eta aldi berean Estatuaren beste eskumen batzuk aplikatzeak dakartzan mugak eta eskumenak gauzatzean lurralde-printzipioak dakartzanak (Konstituzio Auzitegiaren 13/1988 epaia, otsailaren 4koa).

65. Hala ere, ezinbestekoa da gogoratzea badagoela estatu-mailako dopin-antolamendu bat, kirolariaren osasuna babesteko eta kirolean dopatzeari aurre hartzeko ekainaren 20ko 3/2013 Lege Organikoak (aurrerantzean, DOL) jaso duena. Lege horrek, xedapen jakin batzuetarako erabili duen eskumen-iturriaz gain, era generikoan aintzatesten du Estatuaren eskumen bat, hots, "Estatuaren antolamenduari buruzko xedapenak ematekoa, baita Estatuko kirol federatuari bere osoan" eragiten dioten interesen gainekoak ere. Eta ezin da ahaztu, ezta ere, Espainiako Konstituzioaren 149.1.16 artikuluak xedatutakoa (DOLen azken xedapenetan lehenengoa).

66. EKren 149.1.16 artikuluak Estatuari aitortzen dion eskumenari ("Osasunaren oinarriak eta koordinazio orokorra") dagokionez, hori EAEEren 18. artikuluarekin uztartu behar da, Euskal Autonomia Erkidegoari esleitzen baitio, barne-osasun arloan, Estatuko oinarrizko legeria lege bidez garatu eta betearaztea.

67. Osasunaren alorrean, eta maiatzaren 25eko 98/2004 KAEren arabera, " "EKren 149.1 artikuluaren 16. erregelak ere aipatzen dituen oinarriak finkatzeak edota koordinazio orokorra (zati edo azpisistemen dibertsitate edo aniztasuna multzo edo sistemara bildu nahi du, kontraesanak saihestuz eta disfuntzioak gutxituz, honako hauen arabera: 32/1983 KAE, apirilaren 28koa, 2. OJ; 42/1983 KAE, maiatzaren 20koa, 3. OJ; 80/1985 KAE, uztailaren 4koa, 2. OJ) ezin dira garatu autonomia-erkidegoek arau horien arloetan eduki ditzaketen kideko eskumenen edukia husteraino (32/1983 KAE, apirilaren 28koa, 2. OJ)".

68. Eskema hori jarraituz, esan genezake, kirolaren ikuspegitik, Euskal Autonomia Erkidegoak eskumena duela euskal kirola antolatzeko, eta eskumen hori egikaritu dezakeela, aurreproiektuan egin duen bezala, dopinari aurre egiteko erregulazioa ezarrita. Eta osasunaren ikuspegitik, berriz, Estatuak ezarritako oinarriak hartu beharko ditu aintzat, Estatu osoan guztien interesak modu bateratuan eta berdintasun-baldintzen arabera ziurtatzeko xedea baitute oinarriok, baina hortik

abiatuta autonomia-erkidego bakoitzak, bere interesak aldezte aldera, egoki deritzen "berezitasunak sar ditzake bere estatutuak dena delako gai horretan esleitzen dizkion eskumenen esparruaren barruan" (KAEak: 32/1981, 1/1982, 32/1983, 48 eta 49/1988, 69/1988; baita berriagoak ere: 149/1991, 141/1993, 109/2003, eta abar).

69. Adierazi behar da, era berean, DOL legearen zenbait manu organikoak direla (azken xedapenetan bigarrena). Lehen aipatutako irizpenaren kariaz, gaiari buruzko gogoeta sakona egiteko aukera izan genuen. Gauza bat soilik gaineratu behar da: aldatu beharreko alderdietan oso zeharka eragiten dutelarik, ez dela, kalifikazio horretatik eratorrita, erkidegoko legeriari dagokionez mugarik hautematen, Autonomia Erkidegoko kiroleko dopinaren "gaia" arautzeko. (Konstituzio Auzitegiaren 127/1994 eta 61/1997 epaiak).

70. Gogorarazi behar da, orobat, hasiera batean, Kiroleko Dopinaren aurkako Legearen 12.9, 19.1 eta 21.1 artikuluei dagokienez, eskumen arloan gatazkak sortu zirela Estatuaren eta EAEren artean eta, horren ondorioz, Estatuak konstituzio-aurkakotasun errekurtsoa jarri zuela horien aurka. Haatik, bi aldeen arteko ezadostasun horiek Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Aldebiko Lankidetza Batzordearen 2013ko martxoaren 13ko Akordioarekin (99 zenbakidun BOE aldizkaria, 2013ko apirilaren 25ekoa) ebatzi ziren. Artikulu horiek egokitu egin ziren akordio horretan ezarritakoari jarraituz.

71. Halaber, ez dugu ahaztu behar Kirol Dopinaren Aurkako 2005eko Nazioarteko Konbentzioa, "Unescoren Hitzarmena", Espainiak berretsia. Haren 4.1. eta 5. artikuluen arabera, estatu kideek Dopinaren aurkako Mundu Kodearen printzipioak errespetatzeko konpromisoa hartzen dute oinarri modura, eta beren betebeharrak betetzeko egokiak diren neurriak hartuko dituzte. Neurri horietan sar daitezke Dopinaren aurkako Mundu Kodea osa dezaketen legegintzako neurriak, erregelamenduak, administrazio-politikak edo -xedapenak edo beste zenbait neurri.

72. Arlo horretan, erkidegoko legegilea Dopinaren aurkako Mundu Kodean jasotzen diren xedapenak, Unescoren Hitzarmenetik eratortzen direnak, ekartzen ari da bere araudira. Horri dagokionez eta Konstituzio Auzitegiak hainbatetan aitortu duenez, ez dago arrazoirik autonomia-erkidego batek, eskumenei dagokienez, nazioarteko zuzenbidea gauzatzeko aukera eragozteko. Hala, nazioarteko hitzarmen eta tratatuak gauzatzeak, autonomia-erkidegoen eskumenari esleitutako gaiei dagokienez, ez dakar, agerikoa denez, eskumen berri bat esleitzea, dagokion autonomia-erkidegoak beste manu batzuen arabera dagoeneko zuenaz apartekoa (Konstituzio Auzitegiaren 252/1988 Epaia).

73. Hori dela eta, materialki eskumena daukanari dagokio Europar Batasuneko edo nazioarteko zuzenbidea betearaztea, barne-zuzenbideko arauen arabera; izan ere, "ez dago eskumen espezifikorik Europar Batasuneko zuzenbidea betearazteko" (Konstituzio Auzitegiaren 236/1991 eta 79/1992 epaiak). Edozein kasutan, berezko eskumenak betearaztean ez da "bestearen eskumen-esparrua inbaditu behar, ez da eragotzi behar Konstituzioak eta estatutuek esleitzen dizkioten funtzioak bete ditzala eta ez da administratuen gainean alferrikako zamarik ezarri behar" (Konstituzio Auzitegiaren 252/1988 eta 79/1992 epaiak).

74. Lurralde historikoetako foru-organoen eskumenei dagokienez, azaroaren 25eko 27/1983 Legeak, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute-Erakundeen arteko harremanei buruzkoak (LHL), 7.b.6 artikuluan esleitzen die foru-organoei arau autonomikoak garatu eta exekutatzea alor hauetan: kirola sustatzea, eskola-kirolaren programak eta denontzako kirolarenak. Eta aurreproiektuan ez dira alderdi horiek aipatzen.

75. LHLren 6. artikuluak xedatu duenarekin bat, Euskadiko kirolaren legeak erakunde komunei esleitzen die alor hauetako eskumena "dopatzea aurrezaintzea, kontrolatzea eta zigortzea" [Euskadiko kirolaren legearen 4.2.q) artikulua]. Kiroleko Dopinaren aurkako Legeak ez zuen eragin xedapen horren indarraldian, ezta aurreproiektu hau onartzeak ere .

76. Era berean, aurreproiektuak ez du inolaz ere eragiten Toki-araubidearen oinarriak arautzeko apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 25. 2.l) artikuluan ezartzen denez, gai hauei dagozkien udal-eskumenetan "kultura-eta kirol-arloko jarduera eta instalazioak".

77. Laburbilduta, ez diogu inongo arazorik ikusten aurreproiektuaren edukiari, autonomia-erkidegoaren eskumenak bidezko eran egikarituta daudelako.

78. Antolaketaren ikuspegitik, EAEEren 10.2 artikuluak adierazitako eskumena ere tartean da, autonomia-erkidegoari bere autogobernu-erakundeen antolaketa, araubidea eta jarduera esleitzen diona. Konstituzio Auzitegiak 50/1999 epaian (3. OJ) adierazi zuenez, autonomiak berezko du erkidegoko administrazioak bere burua modu askean antolatzeko eskumena, eta eskumen esklusibo den aldetik, eduki bakartzat du "dagozkien erkidego-administrazioak osatzen dituzten, edo horien mendeko diren, organo, administrazio-unitate edo erakundeak sortu, aldarazi eta deuseztatzeko ahala".

79. Bestalde, diziplina-prozedurak jorratzerakoan, prozesuko arauen gaineko eskumenen eta Euskadiko zuzenbide substantiboaren berezitasunetatik eta beronen antolaketatik eratortzen diren administrazio-prozeduren babesa dago (EAEE legearen 10.6. artikulua).

V AURREPROIEKTUAREN EDUKIAREN AZTERKETA

A) Ohar orokorrak:

80. Aurrez adierazi dugun moduan, aurreproiektuak Kiroleko Dopinaren aurkako Legean ezarritakoa partzialki aldatzea dakar. Funtsean, indarreko Kiroleko Dopinaren aurkako Legea aipatutako munduko kode berrira (Johannesburgon, Hegoafrikan, 2013ko azaroaren 12tik 15era egin zen Dopinaren aurkako Munduko IV. Konferentzian onartu zena eta 2015eko urtarrilaren 1ean sartu zena indarrean) egokitzeko betebeharrari erantzuten dion aldaketa bat da.

81. Memorian adierazten denez, arauzko ekimenak segurtasun juridikoaren printzipioa bermatzea dakar, izan ere, berez konplexua den dopinaren aurkako borrokari dagokion eremu juridikoan ziurtasun-ingurune bat sortu nahi da etatalka ez egitea nazioarteko eremu juridikoarekin —harmonizatzea eskatzen du—.

82. Dopinaren aurka borrokatzeko Dopinaren aurkako Mundu Agentzia sortu zen, zuzenbide pribatuko fundazio modura, Suitzako zuzenbidearen baitan. Dopinaren aurkako Munduko Agentziak Dopinaren aurkako Mundu Kodea onartu zuen. Kode horretan, estatuentzat izaera loteslea ez duten zenbait arau eman ziren, eta horregatik, zuzenbide publikoko nazioarteko tresna bat sortu behar izan zen, estatuentzat lotesle izan zitekeena.

83. Hori Kiroleko Dopinaren aurkako Nazioarteko Konbentzioaren bidez lortu zen (UNESCOk onartu zuen 2005eko azaroaren 18ko bilkuran). Espainiak berretsi egin zuen konbentzio hori eta Estatuaren Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, eta barne-ordenamendu juridikoaren atal da, Konstituzioaren 96. artikuluan xedatutakoaren arabera. Nahiz eta Dopinaren aurkako Mundu Kodea ez izan ez izan konbentzioaren zati bat, konbentzioak espresuki adierazten du estatuetako legediak behartuta daudela kodeko printzipioak errespetatzera, kiroleko dopinaren aurkako borrokarako ekimenak estatuan eta nazioartean koordinatzeari begira.

84. Dopinaren alorreko arau-hausteen tipifikazioan, indarrean dagoen 2009ko kodeko arau-hausteak atxikitzen ditu kode berriak, baina, horietaz gainera, jokabide berri batzuk ere zigortzen ditu. Atea irekitzen zaio lagin Dopinaren aurkako Munduko Agentziaren nazioarteko egiaztapena ez duten laborategietan biologikoen analisiak egiteko aukerari, baldin eta agentzia horren onarpena badute. Zehapenak aldatu egiten dira, halako moldez non etendura-epeak nabarmen luzatu diren. Halaber, Dopinaren aurkako Mundu Kodearekin bat etorriz, preskripzio-epe berri bat ezartzen da, 10 urtekoa.

85. Halaber, aipatu behar da arau-ekimenaren beste helburuetako bat 12/2012 Legearen aldaketa baliatzea dela Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia berariaz aitortzeko 12/2012 Legeak 10. artikuluan Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrari esleitzen dizkion eginkizunak betetzeko organo espezializatu gisa, EAEko dopinaren aurkako borrokaren antolakuntzaren ordezkari izan dadin. Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 193/2013 Dekretuak aitortuta zegoen, Gazteria eta Kirol Zuzendaritzaren zerbitzu moduan.

86. Azkenik, testuan Bitariko Batzordeak Kiroleko Dopinaren aurkako Legeari dagokionez hartutako akordioaren edukia eransten da.

87. Aztertutako testuak, aurrez adierazitakoa transkribatzera mugatzen den neurrian, ez du hura gai horretan indarrean den ordenamenduan behar bezala txertatzea eragozten duen ezadostasunik. Gure ustez osatu egin beharko liratekeen alderdiak edo gaia hobeto arautze aldera gogoetagai izan beharko liratekeen alderdiak azpimarratu besterik ez dugu nahi.

B) Dopinaren aurkako Euskal Agentzia:

88. Zioen azalpenean adierazten den moduan, berritasun adierazgarrienetako bat da Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia "aitortzea" EAEko Administrazio publikoaren Kiroleko Dopinaren aurkako Legearen 10. artikuluan esleitzen diren funtzioak betetzeko eginkizuna duen zerbitzu espezializatu modura.

89. Hasiera batean, Kiroleko Dopinaren aurkako Legea ekarri zuen aurreproiektua izapidetzean, Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia zuzenbide publikoko organismo modura eratu zen, eta berezko izaera juridikoa aitortzen zitzaion, EAEko administrazio orokorretik apartekoa.

90. Konfigurazio horri buruzko zenbait iritzi zeudenez, Kiroleko Dopinaren aurkako Legearen behin betiko testuan Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia ez zen aipatzen. Horren ordez beste formula baten alde egin zen, hau da, EAEko Administrazio publikoari esleitu zitzaion gaiari zegozkion funtzioak betetzea, horretarako beharrezkoak diren administrazio-egiturak eratuz.

91. Agindu hori, gerora, arestian aipatu dugun Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzeko apirilaren 9ko 193/2013 Dekretuz gauzatu zen. Dekretuan zehazten zenez, Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia administrazio-zerbitzua Gazteria eta Kirol Zuzendaritzaren barnean kokatzen zen.

92. Aurrekoa aski ez dela iritzita, aurreproiektuaren bidez ikusgaitasun handiagoa eman nahi zaio agentziari. Horrela, legezko testuan gaiari dagozkion funtzioen betetzea esleitzen zaio zuzenean.

93. Proiektatutako aldaketa horren helburua ez da administrazio instituzionalaren organo berririk sortzea, izan ere, arauak ez ditu horretarako beharko lituzkeen elementuak. Haatik, ez da Dopinaren Aurkako Euskal Agentziaren izaerari buruzko aipamenik egiten, eta horrek interprete juridikoa dedukzioz jokatzera behartzen du.

94. Argi dago proiektatutako aitorpen/sorrera hori EAEEk autonomia-erkidegoari bere burua modu askean antolatzeko ematen dion ahal orokorraren adierazpena dela, erkidego-administrazioa osatzen duten organo, administrazio-unitate edo erakundeak sortu, aldarazi eta deuseztatzeko ahalarena.

95. Halaber, egia da ahal hori irizpide eta arau batzuekin antolatu behar dela, administrazio-egitura modu antolatuan konfiguratu ahal izan dadin, beharrezkoak diren betekizun eta tresnak ezarriz eta egitura bakoitzak administrazio-sisteman duen posizioa zehaztuz.

96. Gaur egun, gure erkidegoko antolamenduak ez du lege izaera duen antolaketa-arau berezkorik, horri dagokionez jarraibiderik emango duenik. Dena den, horrek ez du esan nahi egiturak sortzeko horrekin lotutako irizpiderik ez dagoenik. Horren adibide da Euskal sektore publikoaren Legearen proiektua, batzorde honen irizpena jaso zuena. Proiektu horrekin, gabezia hori betetzeko asmoz, legez adierazi nahi dira euskal erakundeen administrazio-antolaketan jarraitu beharreko irizpideak.

97. Proiektu horrek agerian uzten ditu gaur egun EAEko administrazioak erabiltzen dituen antolaketaren arloko eskema eta irizpideak: ñabarduna txiki batzuekin, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legean nahiz, laster indarrean izango den eta aurrekoa ordeztuko duen, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legean islatzen den administrazio-antolaketaren teoriaren eskema klasikoa jarraitzen du.

98. Hala, antolaketaren teoria klasikoan, administrazio orokorraren eta harten organismo autonomoen barnean era daitezkeen egituraz hitz egiten dugunean administrazio-organoak eta administrazio-unitateak bereizi egin ohi dira. Administrazio-unitateak antolaketaren oinarrizko elementuak dira. Horiek konplexutasun-maila ezberdinekoak izan daitezke, lanpostu-zerrenden bidez sortzen dira, eta organo jakin baten barnean txertatzen dira. Beste alde batetik, administrazio-organoak daude, hots, hirugarrenen aurrean ondorio juridikoak dituzten funtzioak esleitzen zaizkien administrazio-

unitateak, edo ezinbestez esku hartu behar dutenak. Horiek maila ezberdinekoak izan daitezke antolaketa-eskalan duten mailaren arabera, eta ez daude lege-erreserba printzipioaren baitan. Hala administrazio bakoitzak dagokio horien sorrera arautzeko arauak ezartzea.

99. Gure kasuan, Dopinaren Aurkako Euskal Agentziaren esku-hartzeek hirugarrenen aurrean duten eraginkortasuna kontuan hartuz, argi dago administrazio-organo bat dela. Ildo horretatik, horiek sortu/aitortu ahal izateko, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 11. artikuluan (2. eta 3. zenbakiak) jasotzen diren oinarrizko betekizunak bete beharko lirateke, Euskal sektore publikoaren Legearen proiektuan jasotzen diren betekizunen berdinak nahiz laster indarrean izango den Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko Legearen 5. artikuluan barneratzen direnenen berdinak direnak, hots:

- Nola kokatuko den dagokion administrazioan, eta zeinen mendean egongo den.

- Zein egiteko eta eskumen izango dituen.

- Abian jartzeko eta jarduteko beharko dituen diru-izendapenak.

100. Aurreproiektuan formula labur baten alde egin da, aipatutako gutxieneko betekizunak osorik betetzen ez dituena, ezta, aurrekoetatik eratorrita, Dopinaren Aurkako Euskal Agentziari gutxieneko segurtasun juridikoa emateko ezinbestekotzat jotzen diren beste batzuk ere.

101. Gai hori ez da Konstituzioz legearen baitan geratzen osorik. Hori dela eta, administrazio publiko bakoitzak arautu ohi du zuzenean. Haatik, legezko formulazio bat behar ez izateak ez du esan nahi, haren alde egitekotan, horretarako eskatzen diren gutxieneko betekizunak bete behar ez direnik.

102. Hautatutako formulazioan, ez da sortu asmo den organoaren izaera juridikoaren arrastorik ikusten, halakotzat jotzen bada ere. Era berean, gure ustez, ez dira osorik betetzen hura txertatzeko moduari (nola kokatuko den dagokion administrazioan) eta mendekotasunari (noren mende egongo den) buruzko betekizunak ere. Alderdi horiek argitu egin beharko lirateke, nola jardungo duen jakiteko.

103. Edozein kasutan, oro har zehaztu beharko lirateke haren ahal, funtzio, antolaketa eta jarduteko moduarekin lotutako zenbait alderdi. Eta organoaren izaera kontuan hartuta, erregelamenduz garatu beharko lirateke.

104. Azkenik, arestian aipatu dugun moduan, espedientean ez da agertzen haren funtzionamendurako kredituen zuzkidurari buruzko atalik. Alderdi hori osatu egin beharko litzateke espedientean.

C) Artikuluen gaineko beste zenbait ohar:

105. Jada esan dugu **12.9, 19.1 eta 21.1 artikuluak** Bitariko Batzordeak Kiroleko Dopinaren aurkako Legeaz hartutako akordioaren translazioa direla.

106. Gainerako erreformei dagokienez —Dopinaren aurkako Mundu Kodean ezarritakoak Kiroleko Dopinaren aurkako Legera egokitzeko asmoadutenak— ez da alderdi bereziki garrantzitsurik hautematen, eta gure iruzkinak proiektatutakoa juridikoki hobetzekoak dira.

107. **18. artikuluan** 3. zenbakia aldatu da, Dopinaren aurkako Mundu Kodeko 6.1. artikuluari jarraituz, laginak Dopinaren aurkako Munduko Agentziak onartutako laborategietan ere aztertzeko aukera izan dadin. Halako laborategiek ez dute haren ziurtagiria, baina haien lankidetza beharrezkoa da kostuarekin eta irisgarritasun geografikoarekin lotutako arrazoiak direla medio. Horretarako, Dopinaren aurkako Munduko Agentziak ziurtatzen du laborategian analisiari eta zaintzari dagokienez eskatzen dituen estandar zorrotzak betetzen direla.

108. Aipagarria da kasu batean soilik eskatzen duela Dopinaren aurkako Mundu Kodeak laginak bi laborategi motetan aztertzea: debekatutako substantzia bat bada edo kirolariaren laginean haren metabolitoak edo zantzuak agertzen badira. Gainerako kasuetan, beste laborategi mota batzuk erabiltzea onartzen du, betiere, emaitzak fidagarriak badira.

109. Halaber, DOLren 20.2. artikuluan adierazten den aukera txertatzeari buruzko gogoeta egitea komeniko litzateke. Horren arabera, estatuko homologazioa duten laborategietan egindako analisiak ere baliozkotzat har daitezke. Edozein kasutan, aipatu behar da emaitzen kudeaketaz arduratuko den dopinaren aurkako erakundeak hautatuko duela laborategia.

110. **22 bis** artikuluan analisi-emaitza kontrako baten, debekatutako metodo baten edo substantzia espezifiko bat ez den debekatutako metodo baten ondotik lizentzia automatikoki eteteko erabakia txertatzen da. Gai horren harira, ohartarazi behar dugu, Dopinaren aurkako Mundu Kodeak ezartzen duenez, etete hori haren 7.2, 7.3 eta 7.5 artikuluetan ezartzen diren berrikuspen- eta jakinarazpen-prozesuak bete ostean ezarriko direla. Horri dagokionez, aurreproiektuan berrikuspenari dagozkion prozesuak jasotzen dira soilik, eta ez dira jasotzen kontrako analisi-emaitzen,

pasaportean izandako ezohiko emaitzen eta pasaportean hautemandako kontrako emaitzen berrikuspenaren amaierako jakinarazpenari buruzkoak.

111. Bestalde, testuan ez da jasotzen etete hori bertan behera uzteko aukera adituen epaimahaiari frogatzen bazaio arau-haustean, ziurrenik, kutsatutako produktu dagoela tartean.

112. Horrela, erreforman ez da hautazko behin-behineko etetea jartzeko aukera jasotzen, substantzia espezifikoen edo kutsatutako produktuen ondorio diren kontrako analisi-emaitzetan edo dopinaren aurkako arauen gaineko bestelako arau-hauste mota batzuetan oinarrituta. Horri dagokionez, espedientean ez da agertzen zergatik egin den hautu hori.

113. **23. artikuluaren 1. zenbakian,** beste bi arau-hauste oso larri tipifikatzen dira, konplizitateari eta debekatutako asoziazioari buruzkoak, Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 2.9 eta 2.10 artikuluetan ezarritakoari jarraituz. Debekatutako asoziazioari dagokionez, aipagarria da artikuluan egoera mota jakin bat soilik jasotzen dela, hain zuzen, kirolariari laguntzen dion pertsona dopinaren aurkako erakunde baten baitan ez izatearena. Horrela, ez da aipatzen lotura duen pertsonaren kasua, hura etendura-epea betetzen ari denerako. Halaber, ez da jasotzen deskribatutako pertsonen estaltzaile edo bitartekari modura jarduten duen pertsonarekiko lotura izatearen tipifikazioa ere.

114. **24. artikulua** berridaztean, Dopinaren aurkako Mundu Kodean aurreikusitako zigor-araubidea sartu nahi da, etendura-epeak mailakatzeko aukera ematen duten irizpideekin batera. Haatik, aurrekoarekin batera, indarreko testuko lehen hiru ataletan jasotako zigorren tipifikazioa bere horretan uzten da testuan. Horren ondorioz, arau-hauste gehienak bitan jasotzen dira, eta horrek ez dio onik egiten testuaren argitasunari, ezta haren segurtasun juridikoari ere.

115. Hala, hasiera batean, arau-haustea antzeko larritasun-maila duten beste batzuekin batera jasotzen da, eta etenduraren tarte bat eta, hala badagokio, isunaren tarte ezartzen da. Bestalde, sartutako aldaketek bestelako eredu bati jarraitzen dute: jokabide zehatza identifikatu egiten da, zehapen irmo bat ezartzeko, eta gerora, zehapena epe batean murrizteko aukera ematen du, inguruabar aringarri jakin batzuen arabera.

116. Aipagarria da zigor batzuk oro har lehen hiru ataletako tarteetan orokorki adierazitakoak baino apalagoak izan daitezkeela (esate baterako, 8. zenbakian adierazitakoa, 1. zenbakian adierazitakoarekin alderatuz). Hori dela eta, lehen hiru atalei emandako idazketa gainbegiratzea komeniko litzateke, gaiari koherentzia eta

segurtasun juridikoa emate aldera. Edo, are gehiago, horiek ezabatzeko aukera azter daiteke, eta dagokion lekuan txertatzea hurrengo ataletan jasotzen ez diren alderdiak.

117. Beste alde batetik, aztertu egin beharko litzateke ea egokia den 28. artikuluaren barnean etendura-epeak aplikatzeko irizpideak sartzea; hots, zigorrak ezartzeko irizpideei buruzkoan etendura-epeak aplikatzeko irizpideak ere sartzea. Horrela eginez gero, sistematikotasuna galtzea eragotziko litzateke, eta ez litzateke zailtasunik sortuko gaiaren inguruko irizpideak ezartzeko.

118. **24 bis** artikuluan, arau-hauste anizkoitzengatiko zehapeneiburuz Dopinaren aurkako Mundu Kodeak xedatutakoa jasotzen da. Hartan, faltan botatzen da Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 10.6. artikuluan jasotzen diren kasuetan etendura-epeari murrizketa gehigarria onartzeko aukeraren inguruko aipua.

119. Bestalde, 2. zenbakia osoago geratuko litzateke etendura-epea zortzi urte eta biziarteko etendura arte luza daitekeela adieraziko balitz.

120. Halaber, 4. zenbakian erabiltzen den espresioak, hau da, dopinaren aurkako erakundeak "jakinarazpena aurkezteko zentzuzko ahalegina", egin duela adieraztekoak, Dopinaren aurkako Mundu Kodetik eratorria den arren, kontzeptu juridiko zehaztugabeak sartzen ditu gure ordenamenduan, eta horiek baztertu egin beharko lirateke. Kasu horretan, egokiagoa litzateke adieraztea dopinaren aurkako erakundeak jakinarazpena egitearen saiakera egiaztatu egin beharko lukeela, horri buruz ezarritako araudian adierazitako moduan.

121. **30. artikuluak** Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 10.8. artikulua legezko testura ekartzen du. Artikulu hori laginak jaso osteko lehiaketetako emaitzak baliogabetzeari edo dopinaren aurkako arauak hausteari buruzkoa da. Haatik, artikulu horretan ez da jasotzean, Dopinaren aurkako Mundu Kodearen artikuluan jasotzen den arren, neurri horri dagokion gehienezko epea, hau da, "behin-behineko edozein etendura edo etendura-epea hasi arte".

122. **38 bis** artikuluan aurretik ere zorroztasunez aztertu ditu DBEBk. Horrenbestez, ez dago hark egindako oharrak errepikatzeko premiarik. Gainera, arestian aipatu dugun moduan, gehienak testuan jaso dira.

123. Soilik ohartarazi behar da hartan ez dela jaso adin txikikoen emaitzak argitaratzeari dagokion salbuespena, Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 14.3.6. artikuluan jasotzen dena. Haren arabera, erruduntzat jotako kirolaria edo beste edozein pertsona adin txikikoa bada ez da beharrezkoa izango nahitaezko jakinarazpen publikoa, eta adin txikiko bat tartean denean, jakinarazpen publiko hori proportzionala izango da kasuaren jazoera eta inguruabarrak aintzat hartuz.

D) Araugintza-teknikari buruzko oharrak:

124. Araugintza-teknika dela eta, Batzordeak gogorarazten du aurreproiektuak egokitu egin behar duela, oro har, lege-proiektuak, dekretuak, aginduak eta ebazpenak egiteko 1993ko martxoaren 23ko Gobernu Kontseiluaren Erabakiaren bidez onetsitako gidalerroetara, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurari buruzko Legearen hirugarren xedapen gehigarriaren arabera aplikagarriak direnetara.

125. Horietan adierazitakoari jarraituz, hurrengo ohartarazpenak egin dira, teknikoki osoagoa den arauzko produktu bat lortze aldera.

126. Aldaketa-arauaren izenburuak argi utzi beharko du arau bat aldatzekoa dela. Horrela, aurreko arauak aldatu edo baliogabetzeko helburua duten arauen izenburuan, arautzen den gaia ez ezik, arau horren helburu edo xedea adierazi beharko da argi eta garbi, hots, aldatzeko edo baliogabetzeko arau batden.

127. Txostena egiteko igorri diguten aurreproiektua hainbat artikulu aldatzeko arau bat da, eta aipatutako gidalerroei jarraituz, ez dira artikulu bakarrean multzokatuta jorratu behar; aitzitik, aldaketa bakoitza aparteko artikulu batean jorratu behar da, eta artikulu horiek modu ordinalean zenbakitu.

128. Bestalde, aldaketa sartzen duen artikuluaren izenburuak aipatu egingo ditu aldatu nahi den artikuluaren zenbakia eta titulua, halakorik badu, baita aldatutako arauarena ere. Horri dagokionez, aurreproiektuan adierazitako zenbakiak, gehienetan, artikulu bilaka daitezke.

129. Salbuespenak 13, 23, 30 eta 37. artikuluen aldaketetan emango lirateke; izan ere, horietan zenbaki bat baino gehiago erabiltzen da, eta artikulu bakarrean multzokatu beharko lirateke.

130. Xedapen iragankorretan hobe da erabiltzea, adibidez, lehen xedapen iragankorra eta bigarren xedapen iragankorra, era korrelatiboan, atalari xedapen iragankorrak izenburu orokorra eman, eta gero lehenengoa, bigarrena eta abar jarri baino.

131. Halaber, testuan jasotzen ez den arren, 36.2 a artikuluan indargabeturik dagoen herritarren segurtasuna babesteari buruzko otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoari egiten zaion aipamena aldatu eta indarrean dagoena jasotzea komeniko litzateke: 4/2015 Lege Organikoa, martxoaren 30ekoa, herritarren segurtasuna babestekoa

132. Azkenik, 38 bis 4. artikuluan "komunikazio" hitza kendu eta, haren ordez, "hedapena" ipintzea komeniko litzateke, bestelako irudi juridiko batekin nahas ez dadin.

ONDORIOA

Batzordearen irizpena da, txosten honen mamian egindako oharpenak kontuan hartu ostean, aurreproiektua Jaurlaritzaren Kontseilura bidal daitekeela, onetsia izan dadin.

Eta hala ziurtatzen dugu, Gasteizen, 2016ko urtarrilaren 22an, jakin eta kontuan har dadin. Era berean, azaroaren 24ko 9/2004 Legearen 30.2. artikuluak xedatzen duen betebeharra gogorarazi nahi dugu: azkenean onartzen den xedapen edo ebazpena Batzordeari jakinarazi behar zaio, irailaren 12ko 167/2006 Dekretuz onartutako Antolamendu eta Funtzionamenduaren Erregelamenduaren 34. artikuluak xedatzen duen moduan eta epean.

OE:

Jesús María Alonso Quilchano,	Sabino Torre Díez.
Idazkaria	**Batzordeburua**

XVII

ORDEN DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO /

PROZEDURA HASTEKO AGINDUA

PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.
KIROLEKO DOPINAREN AURKAKOA LEGEA ALDATZEN DUENA LEGE PROIEKTUA

FIRMADO DIGITALMENTE POR:

Firmante: **CRISTINA URIARTE TOLEDO**
Fecha de la firma: **04/11/2014 9:20:07**
Validación de la firma: **Correcta**

ORDEN de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se da inicio al procedimiento de elaboración del anteproyecto de Ley de modificación de la Ley contra el Dopaje en el Deporte.

La Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General, regula el procedimiento de elaboración de las normas, estableciendo en su artículo 4.1 que estos procedimientos se iniciarán por Orden del Consejero o Consejera titular del Departamento competente por razón de la materia sobre la que versen. En este supuesto es competente la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 20/2012, de 15 de diciembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, cuyo artículo 10 atribuye al Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura las funciones y áreas de actuación en materia de deportes; y en el Decreto 193/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, según el cual, corresponde a la Dirección de Juventud y Deportes, "*analizar las necesidades y proponer las medidas normativas que corresponden a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en materia de deporte….*".

Asimismo, el citado Decreto 193/2013 en su artículo 4.1 dispone que *"Corresponderá a la Consejera o Consejero de Educación, Política Lingüística y Cultura el ejercicio de las competencias establecidas en los artículos 26 y 28 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre la Ley de Gobierno, y cuantas otras le atribuya la legislación vigente…"* Entre estas competencias se encuentra el de proponer para su aprobación por el Gobierno, proyectos de Ley en materias propias de su competencia.

Asimismo, el artículo 5 de la citada Ley 8/2003, establece el contenido de la Orden de inicio:

1.- Objeto y finalidad de la regulación

La Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte, se basó en los principios comúnmente aceptados por los organismos internacionales más avanzados en la lucha contra el dopaje en el deporte. La estructura piramidal del deporte de competición y la interrelación de las competiciones deportivas en sus distintos ámbitos y niveles territoriales exigía un marco jurídico común en la lucha contra el dopaje en el deporte. Por dicha razón, en el año 2003, la Agencia Mundial Antidopaje elaboró el Código Mundial Antidopaje y los estándares internacionales que lo complementan. Tales textos constituyeron un conjunto de reglas y directrices de obligado cumplimiento para el movimiento deportivo internacional y de necesaria referencia para las instituciones públicas implicadas en la lucha contra el dopaje. Ello condujo a la aprobación, por la UNESCO, en su sesión de 19 de octubre de 2005, de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte. Dicha convención fue ratificada por España en el año 2007 y, en consecuencia, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno, conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución. Aunque el Código Mundial Antidopaje no forma parte integrante de la Convención, ésta establece que, con miras a coordinar en el plano nacional e internacional, las actividades de lucha contra el dopaje en el deporte, los signatarios de la Convención están obligados a respetar los principios del Código.

En este marco de armonización, la IV Conferencia Mundial Antidopaje aprobó el nuevo Código Antidopaje que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2015.

Por ello, el País Vasco se encuentra en la obligación de adecuar a la mayor brevedad la vigente Ley 12/2012, de 21 de junio, de lucha contra el dopaje, al nuevo Código Mundial Antidopaje.

Como modificaciones más relevantes del nuevo Código se pueden destacar las siguientes:

- En la tipificación de las infracciones en materia de dopaje, el nuevo Código mantiene las infracciones del vigente Código de 2009, pero se añaden nuevas conductas penadas.
- Se incluye la posibilidad de que las muestras biológicas sean analizadas por laboratorios que no cuenten con la acreditación de la Agencia Mundial Antidopaje, pero sí con su aprobación.
- Se modifican las sanciones incrementándose de forma sustancial los periodos de suspensión.
- El nuevo Código Mundial Antidopaje establece un nuevo periodo de prescripción de 10 años.

Asimismo, se ha aprovechado la modificación de la Ley 12/2012 para reconocer a la Agencia Vasca Antidopaje, servicio administrativo que fue adscrito por el Decreto 193/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del

Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva, como el servicio especializado en desarrollar las funciones atribuidas en el artículo 10 de la Ley 12/2012 a la Administración Pública del País Vasco, actuando como la organización antidopaje del País Vasco.

Por último, el texto incorpora el contenido del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte.

2.- Estimación sobre la viabilidad jurídica y material

El marco legal de la competencia que se ejercita deriva de lo dispuesto en el artículo 10.36 del Estatuto de Autonomía, que confiere a la Comunidad Autónoma del País Vasco la competencia exclusiva en materia de deporte. En ejercicio de dicho título competencial, el Parlamento Vasco aprobó la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, que en su artículo 4 establece la competencia de las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de dopaje, en concreto, la regulación de la prevención, control y represión del dopaje.

En este contexto, se aprobó la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte, regulando dicha materia en el ejercicio de la plena competencia de esta Comunidad. Competencia que, evidentemente, incluye no solo la elaboración del texto normativo sino también la posible modificación del mismo.

3.- Repercusión en el ordenamiento jurídico

La Ley cuya regulación se pretende supondrá la modificación de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte.

4. Incidencia en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Procede señalar que la modificación de la Ley contra el Dopaje en el Deporte no implica gravamen presupuestario alguno.

La modificación no supone la creación, directa o indirecta, de nuevas estructuras u órganos. Tampoco conlleva la dotación de mayores recursos humanos y materiales.

RESUELVO

Primero.- Acordar el inicio del procedimiento de elaboración del anteproyecto de Ley de modificación de la Ley contra el Dopaje en el Deporte.

Segundo.- El expediente de elaboración de la disposición, que se inicia mediante esta Orden, deberá ser completado con los siguientes trámites e informes:

1.- Elaboración del anteproyecto.

2.- Aprobación previa del anteproyecto por este Órgano.

3.- Informe jurídico del Departamento, según lo previsto en el artículo 7.3 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general.

4.- Audiencia e información pública prevista en el artículo 8 de la Ley 8/2003 mencionada, a los efectos de que puedan realizar sus aportaciones diversas entidades (Unión de Federaciones, Asociaciones de Federaciones Deportivas de los Territorios Históricos, Federaciones Vascas y Territoriales, Colegios Oficiales, Agencia Estatal Antidopaje, etc…).

Además se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco un anuncio por el que se dará trámite de audiencia por plazo de 20 días hábiles.

5.- Participación y consulta a otras Administraciones prevista en el artículo 9 de la Ley 8/2003 mencionada, a los efectos de que puedan realizar sus aportaciones las tres Diputaciones Forales (Araba, Vizcaya y Gipuzkoa), así como a otros Departamentos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

6.- Memoria del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Ley 8/2003.

7.- Memoria económica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.3 de la Ley 8/2003.

8.- Informe del Consejo Vasco del Deporte, según lo establecido en el artículo 4 b) del Decreto 220/2000, de 7 de noviembre, por el que se regula el citado órgano.

9.- Informe del Comité Vasco contra la Violencia en el Deporte, conforme a lo estipulado en el artículo 3 e) del Decreto 94/2004, de 25 de mayo, por el que se regula el citado Comité.

10.- Informe de evaluación previa del impacto en función del género e Informe del Instituto Vasco de la Mujer/Emakumearen Euskal Erakundea, de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, artículo 3 d) de la Ley 2/1988, de 5 de febrero, sobre creación del citado Instituto y con las Directrices sobre la realización de la evaluación previa del impacto en función del género y la incorporación de medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres, aprobadas por el Acuerdo de Consejo de

Gobierno, en su sesión celebrada el día 21 de agosto de 2012, publicado mediante la Resolución 40/2012, de 21 de agosto, de la Directora de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento.

11.- Informe de la Dirección de Normalización Lingüística, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 3 del Decreto 233/2012, de 6 de noviembre, por el que se establece el régimen de inclusión de la perspectiva de normalización del uso del euskera en el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general.

12.- Informe de la Dirección de Función Pública, de acuerdo con lo previsto en los artículos 6.1, a) de la Ley de 6 de julio, de la Función Pública Vasca y 16, a) del Decreto 188/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Administración Pública y Justicia.

13.- Informe de la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración, de conformidad con el artículo 18, c) del Decreto 188/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Administración Pública y Justicia.

14.- Informe de control económico-normativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 25.1 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

15.- Informe de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.1 c) de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

16.- No se aprecia la necesidad de ningún trámite ante la Unión Europea.

Tercero.- Se incorporará al expediente la presente Orden de inicio, toda la documentación correspondiente, en su caso, a los estudios y consultas evacuados, y una memoria sucinta de todo el procedimiento, con el contenido que señala el artículo 10.2 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, y a los efectos de su aprobación final, en los términos que señala el artículo 12 de la referida Ley.

En Vitoria-Gasteiz,

La Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura
CRISTINA URIARTE TOLEDO

AGINDUA.... Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuarena, kiroleko dopinaren aurkako legea aldatzeko lege-aurreproiektua egiteko prozedurari hasiera ematekoa

8/2003 Legeak, abenduaren 22koak, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurarenak arauak prestatzeko prozedura antolatzen du, eta, horretarako, 4.1. artikuluaren bidez agintzen du prozedurek jorratzen duten dena delako gaian eskumena daukan sailaren titularra den sailburuaren aginduz abiarazi behar direla prozedurok. Kasu honetan, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuak du eskumena, hala ezartzen baitu Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 193/2013 Dekretuak. Hartan ezartzen denez, sail horren baitako Gazteria eta Kirol Zuzendaritzari dagokio "*Kirol... politiken arloko beharrizanak aztertzea, eta arauzko neurriak proposatzea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari*".

Orobat, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 193/2013 Dekretuak, 4.1 artikuluan, hau ezartzen du: *"Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 26. eta 28. artikuluek ezarritako eskumenez baliatzea Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuari dagokio; eta, halaber, ... indarreango legeriak esleitzen dizkion eskumenez baliatzea…"* Eskumen horien artean bere eskumeneko gaietan gobernuari lege-proiektuak proposatzea dago, hark onar ditzan.

Eta 8/2003 Legearen 5. artikuluak, hasiera onartzeko aginduak zer eduki izan behar dituen ezartzen du:

1. Arautzearen xedea eta helburua.

Kiroleko dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legea kiroleko dopinaren aurkako borrokan nazioartean aurreratuen dauden erakundeek onartutako printzipioetan oinarritu zen. Lehiaketa-kirolaren egitura piramidala denez, eta kirol-lehiaketek elkarren artean lotura dutenez lurralde-eremuetan eta -mailetan, esparru juridiko komuna behar da kiroleko dopinaren aurkako borrokan aritzeko. Hori dela eta, 2003. urtean, Dopinaren aurkako Mundu Agentziak Dopinaren aurkako Mundu Kodea idatzi zuen, eta kode horren osagarri diren nazioarteko estandarrak ere zehaztu zituen. Testu horiek nazioarteko kirol-mugimenduak nahitaez bete beharreko arau eta jarraibideen multzoa dira, eta horrekin batera, baita beharrezko erreferentzia ere dopinaren aurkako borrokan esku hartzen ari diren erakunde publikoentzat ere. Ekimen horien ondorioz, UNESCOk, 2005eko urriaren 19an izandako bileran, Kiroleko Dopinaren Aurkako Nazioarteko Konbentzioa onartu zuen. Espainiak ere berretsi zuen konbentzio hori 2007. urtean, eta gure ordenamendu juridikoaren zati bat da, Konstituzioaren 96. artikuluan xedatutakoaren arabera. Nahiz eta Dopinaren aurkako Mundu Kodea ez izan konbentzioaren zati bat, konbentzioak ezartzen du sinatzaileak

behartuta daudela kodeko printzipioak errespetatzera, kiroleko dopinaren aurkako borrokarako ekimenak estatuan eta nazioartean koordinatzeari begira.
Bateratze-giro horretan, Dopinaren aurkako IV. Mundu Konferentziak 2015eko urtarrilaren 1ean indarrean sartuko den Dopinaren aurkako Kode berria onartu zen.

Horiek direla eta, Euskadik nahitaez egokitu beharra dauka, lehenbailehen, orain indarrean dagoen Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legea Dopinaren aurkako Mundu Kode berrira.

Hauexek dira kode berri horrek dakartzan aldaketa esanguratsuenak:

- Dopinaren alorreko arau-hausteen tipifikazioan, indarrean dagoen 2009ko Kodeko arau-hausteak atxikitzen ditu kode berriak, baina, horietaz gainera, jokabide berri batzuk ere zigortzen ditu.
- Atea irekitzen zaio lagin biologikoen analisiak egiteko aukerari Dopinaren aurkako Mundu Agentziaren nazioarteko egiaztapena ez duten laborategietan, baldin eta Agentziaren onarpena badute.
- Zehapenak aldatu egiten dira, halako moldez non etendura-epeak nabarmen luzatu diren.
- Dopinaren aurkako Mundu Kode berriak 10 urteko preskripzio-epea ezartzen du.

Bide batez, 12/2012 Legearen aldaketa baliatu da Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia —zeina Eusko Jaurlaritzan kirol arloan eskumena duen sailari atxiki baitzitzaion— Legearen 10. artikuluan Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoari esleitzen zaizkion funtzioak gauzatzeko organo espezializatu gisa aitortzeko; alegia, Euskadiko dopinaren aurkako erakundea izan dadin.

Azkenik, Euskadiko Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legearen arloan Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Bitariko Lankidetza Batzordearen Akordioaren edukia erantsi da testuan.

2.- Bideragarritasun juridikoaren eta materialaren azterketa.

Gauzatzen den eskumenaren lege-esparrua Autonomia Estatutuko 10.36 artikulua da, kirolaren arloko eskumen esklusiboa ematen baitio Euskal Autonomia Erkidegoari. Eskumen hori baliatuz, Eusko Legebiltzarrak 14/1998 Legea onartu zuen, ekainaren 11koa, Euskadiko kirolarena. Lege horrek, 4. artikuluan, Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde komunek kirol-arloan dituzten eskumenak ezartzen ditu, eta, zehazki, dopatzea aurrezaintzeko, kontrolatzeko eta zigortzeko arauak ezartzekoa.

Testuinguru horretan, Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legea onartu zen, eta arlo horretako araubidea ezarri zuen, erkidego honen eskumen osoa baliatuz. Eskumenaren barruan, jakina, araua egin ez ezik hura aldatzeko aukera ere badago.

3.- Antolamendu juridikoan izango duen eragina.

Arautu nahi den legeak kiroleko dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legea aldatzea dakar.

4.- Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuetan duen eragina.

Adierazi behar da Kiroleko Dopinaren aurkako Legea aldatzeak ez dakarrela aurrekontu-zamarik.
Aldaketak ez dakar, zuzenean edo zeharka, egitura edo organo berririk sortzerik. Eta ez ditu giza baliabide edo baliabide material gehiago eskatzen.

EBAZTEN DUT

Lehenengoa.- Kiroleko Dopinaren aurkako Legea aldatzeko aurreproiektua egiteko prozedurari hasiera ematea.

Bigarrena.- Xedapen hori egiteko espedientea, agindu honen bidez abiarazten dena, izapide eta txosten hauekin osatu beharko da:

1.- Aurreproiektua egitea.

2.- Organo honek aurreproiektua onartzea.

3.- Sailaren txosten juridikoa, abenduaren 22ko 8/2003 Legeak, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurarenak, 7.3. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

4.- Aipatutako 8/2003 Legeak 8. artikuluan ezarritako entzunaldia eta jendaurrean jartzea, zenbait erakundek beren ekarpena egin dezaten (federazioen elkarteak, lurralde historikoetako kirol-federazioen elkarteak, euskal federazioak eta lurralde-federazioak, elkargo ofizialak, Osasun Publikoko Zuzendaritza, Dopinaren aurkako Estatuko Agentzia…)

Horrez gain, iragarki bat argitaratuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian. Iragarki horren bidez, 20 egun balioduneko entzunaldiari hasiera emango zaio.

5.- Beste administrazioei kontsulta egitea eta haien parte-hartzea, aipatutako 8/2003 Legearen 9. artikuluan ezarri bezala. Horren helburua da hiru foru-aldundiek (Araba, Bizkaia eta Gipuzkoakoak) beren ekarpenak egin ahal izatea.

7.- Prozeduraren memoria, 8/2003 Legearen 10.2. artikuluan xedatutakoaren arabera.

7.- Memoria ekonomikoa, 8/2003 Legearen 10.3. artikuluan xedatutakoaren arabera.

8.- Kirolaren Euskal Kontseiluaren txostena, azaroaren 7ko 220/2000 Dekretuaren 4 b) artikuluak ezarritakoari jarraituz (dekretuak kontseilu hori arautzen du).

9.- Kiroleko Indarkeriaren Aurkako Batzordearen txostena, maiatzaren 25eko 94/2004 Dekretuaren 3 e) artikuluak ezarritakoari jarraituz (dekretuak batzorde hori arautzen du).

10.- Emakunde/Emakumearen Euskal Erakundearen txostena, halaxe ezarri baita Emakume eta Gizonen Arteko Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 21. artikuluan eta aipatutako erakundea sortzeari buruzko otsailaren 5eko 2/1988 Legearen 3. d) artikuluan.

11.- Hizkuntza Normalizaziorako Zuzendaritzaren txostena, azaroaren 6ko 233/2012 Dekretuak, xedapen orokorrak egiteko prozeduran euskara-erabileraren normalizazioaren ikuspegia txertatzeko araubidea ezartzen duenak, ezarritakoarekin bat.

12.- Ekonomia- eta arau-kontrolerako txostena, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomi Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legearen 25.1 artikuluan xedatutakoarekin bat.

13.- Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren txostena, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko azaroaren 24ko 9/2004 Legearen 3.1.a) artikuluan xedatutakoa betez.

14.- Ez da beharrezkotzat jotzen Europar Batasunean inolako izapiderik egiterik.

Hirugarrena.- Hasteko agindu hau espedienteari erantsiko zaio, bai eta kontu honen inguruko agiri guztiak, emandako azterlan eta kontsulta guztiak, eta prozedura osoaren berri ematen duen memoria labur bat ere (abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 10.2 artikuluak adierazitako edukia bildu behar du); hori guztia beharrezkoa da behin betiko onartzeko, lege horren 12. artikuluak ezarritako moduan.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburua
CRISTINA URIARTE TOLEDO

XVIII

ORDEN DE APROBACIÓN PREVIA DEL PROYECTO / PROIEKTUA AURRETIK ONARTZEKO AGINDUA

PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.
KIROLEKO DOPINAREN AURKAKOA LEGEA ALDATZEN DUENA LEGE PROIEKTUA

FIRMADO DIGITALMENTE POR:

Firmante: **CRISTINA URIARTE TOLEDO**
Fecha de la firma: **24/11/2014 16:10:48**
Validación de la firma: **Correcta**

ORDEN de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se aprueba el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley contra el dopaje en el deporte

La Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General dispone, en su capítulo II, que el procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general se iniciará por Orden del Consejero o Consejera titular del Departamento competente por razón de la materia sobre la que versen.

Conforme a lo establecido en el artículo 7.1 de dicha Ley "una vez redactados los proyectos de disposiciones de carácter general, deberán contar con la aprobación previa por el órgano que haya dictado la orden de inicio, antes de evacuar los trámites de negociación, audiencia y consulta que procedan".

Mediante Orden de 3 de noviembre de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, se ordenó el inicio del procedimiento de elaboración del Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley contra el dopaje en el deporte.

Una vez redactado el texto del Anteproyecto, de acuerdo con la finalidad establecida en la citada Orden de inicio, procede su aprobación previa y anterior a los trámites de audiencia y consulta pertinentes.

Por cuanto antecede,

RESUELVO

Primero.- Aprobar el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley contra el dopaje en el deporte.

Segundo.- Continuar los trámites de instrucción del procedimiento de elaboración de la citada disposición.

En Vitoria-Gasteiz,

La Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura
CRISTINA URIARTE TOLEDO

AGINDUA.... Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuarena, kiroleko dopinaren aurkako legea aldatzeko lege-aurreproiektua onartzekoa

8/2003 Legeak, abenduaren 22koak, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurarenak, II. kapituluan xedatzen duenez, xedapen orokorrak egiteko prozedura jorratzen duten dena delako gaian eskumena daukan sailaren titularra den sailburuaren aginduz abiarazi behar da.

Lege horren 7.1 artikuluan esaten denez, "xedapen-proiektu orokorrak idatzi ondoren, prozedura hasteko agindua eman duen organoak aldez aurretik onartu beharko ditu, dagozkion negoziazio, entzunaldi eta kontsulta izapideak egin aurretik"..

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren 2014ko ..... Aginduaren bidez, hasiera eman zitzaion kiroleko dopinaren aurkako legea aldatzeko lege-aurreproiektua egiteko prozedurari.

Aurreproiektuaren testua idatzirik, eta entzunaldia eta kontsulta-izapideak hasi aurretik, hasiera emateko aginduak duen helburuaz bat, aldez aurretik onartu behar da.

Horregatik guztiagatik, honako hau

EBAZTEN DUT

Lehenengoa.- Kiroleko dopinaren aurkako legea aldatzeko lege-aurreproiektua onartzea.

Bigarrena.- Xedapen hori egiteko prozedura bideratzeko izapideekin jarraitzea.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburua

CRISTINA URIARTE TOLEDO